CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2000

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

SALA PRIMERA (CIVIL)

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS
PRESIDENTE

LDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES R. **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

LDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

LDA. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

DR. ARTURO HOYOS **LDO. ADÁN ARNULFO ARJONA L.**

LDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

LDA. MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
PRESIDENTA

LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK **LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS**

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SOBRE DAÑO MORAL

Por: Eligio A. Salas
Magistrado

En materia de reparación de daños a terceros en relación con la responsabilidad civil, asunto sobre el cual versará esta charla, en Panamá hemos sido herederos y continuadores, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, de las concepciones del individualismo filosófico y del liberalismo económico de los que fuera portador inicial el Código Napoleónico. En términos generales, el tema, como sucede en la mayor parte del panorama jurídico hispanoamericano, se recogió de manera similar en los códigos civiles desde las primera décadas del siglo XIX.

Por supuesto, lo anterior no significa que el tratamiento del problema y sus soluciones, con el paso del tiempo, hayan permanecido inalterables; es precisamente de esos cambios y de esa evolución de lo que trataremos esta noche al abordar el tema *Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre Daño Moral*.

Con el propósito de encontrar una explicación doctrinal al reconocimiento del daño moral en la esfera de la responsabilidad civil, se ha sostenido que las normas del Código Civil en donde se alude a la obligación de indemnizar daños y perjuicios, incluyendo mediante mención expresa al daño emergente y al lucro cesante -en nuestro Código Civil el artículo 991-, no excluyen la indemnización del daño no patrimonial u otros modos de reparación no dineraria del daño. Este, el daño, en términos simples y sencillos, ha de entenderse como cualquier lesión de un interés, sea de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Así, el daño moral o no patrimonial sería el que recae en una serie de bienes jurídicos de *"utilitas inestimabile"*, para usar la expresión latina, y se referiría a cualquier tipo de daño que puedan llegar a sufrir semejantes bienes. Según otros, cuando se trata de daño moral, simplemente estaríamos hablando de un daño que no tiene consecuencias patrimoniales.

Los bienes susceptibles de una reparación de orden moral, por razón del daño que se les ocasione, suelen estar tipificados o, al menos, hay coincidencia a la hora de identificarlos: el honor, la intimidad, la imagen y todos aquellos vinculados a los derechos personalísimos. No obstante, en otros lares la jurisprudencia ha reconocido la indemnización del daño moral en situaciones bastantes singulares. En España, por ejemplo, se ha considerado dentro de esa categoría la frustrada esperanza de fundar una familia por parte de la mujer cuyo matrimonio se declaró nulo por reserva mental del marido. También la omisión por parte de la compañía telefónica del nombre de un abonado en la guía de teléfonos, tratándose de un abogado, o el error en el nombre de un abonado que le hace aparecer en la guía de teléfonos con un sentido sensiblemente alterado: "Ramera" por "Ranera". Como daño moral han sido aceptados por el Tribunal Supremo de España, los daños que disminuyen la capacidad de obtener riqueza, la pérdida de la capacidad de trabajo y hasta la necesidad de trasladar las vacaciones a un período menos adecuado bajo el dictamen de que se ha perjudicado al demandante "con pérdida de solaz". Así mismo, pareciera que el reconocimiento de una indemnización por daño moral en favor de los familiares cercanos al fallecido, cuando el resultado del daño haya sido la muerte, es un asunto que hoy no se discute.

Claro que una concepción que pretenda identificar exclusivamente el daño no patrimonial a través del bien jurídico afectado pudiese tropezar con la dificultad de imposibilitar la individualización exacta de cuáles son esos bienes, pues, como se comprenderá, no es nada fácil abarcarlos a todos sin el

riesgo de que en la enumeración muchos sean los que se queden por fuera. Otro riesgo que se correría es el de incluir, en la categoría de bien jurídico susceptible de reparación vía daño moral, lo que en el fondo puede ser sólo una afección particular vinculada a la lesión de otros bienes. La curiosa pérdida del solaz vacacional de la cual hemos hablado arriba no es otra cosa, en nuestra opinión, que una consecuencia negativa del cumplimiento de un contrato, en este caso, el de viaje o transporte, y podría serlo de cualquier otro, por lo que es muy discutible que el mencionado se pueda aceptar como un bien jurídico protegible y elevado en sí mismo a la categoría de derecho vulnerado que merece una indemnización bajo el amparo de la noción de daño moral.

En el derecho alemán, el daño no patrimonial sólo es indemnizable cuando así se encuentre dispuesto por una norma específica. En el derecho inglés se admite la indemnización por "*non pecuniary loss*". Dentro de ese rango cae el denominado "*disconfort*", causado por el incumplimiento de un contrato de transporte que obliga al viajero a permanecer en lugar distinto al contratado, o en una estación distinta en donde no existe hotel; o en una habitación de hotel menos confortable que la contratada; o en un hotel de inferior calidad al convenido; también, por ejemplo, la servidumbre de paso que el vendedor no puso en conocimiento del comprador y que este tendría que soportar luego de celebrada la compraventa. En el derecho norteamericano existe la figura de los llamados *exemplary o punitive damages*, donde el daño sufrido se considera agravado por circunstancias tales como la violencia, la opresión, la malicia, el fraude o la conducta malvada con que ha actuado la parte demandada. Su propósito es reconocerle al demandante una compensación por la angustia, la laceración de los sentimientos, la pena, la degradación u otros agravios recibidos a raíz del incumplimiento de una obligación, reconocimiento que se hace por añadidura al de los daños materiales causados, o sea, los llamados *actual o compensatory damages*.

Un sector de la doctrina sostiene que la indemnización por daño moral, producto del incumplimiento de una obligación contractual, partiría de la aceptación del principio doctrinal que entiende que la prestación o indemnización no tiene necesariamente fundamento en el incumplimiento del contrato, si no en el daño derivado de ese incumplimiento. El deudor, en materia de indemnización por razón del daño moral ocasionado, respondería siempre que el daño le sea imputable. La indemnización correspondiente no sería un efecto de ninguna obligación preexistente; lo sería de la nueva obligación que surge del daño injustamente causado. La indemnización por daño moral, no sería en ese caso "*el objeto de la obligación incumplida*" y más bien constituiría la consecuencia del incumplimiento del deudor.

Por otro lado tenemos este enfoque. Dentro de la órbita de la responsabilidad contractual, el deudor de buena fe sólo sería responsable de los daños y perjuicios previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean, además, consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento, tal como lo establece el artículo 992 del Código Civil. Hasta aquí se trata tan solo del daño emergente y del lucro cesante claramente previstos por el artículo 991 del Código como la indemnización derivada del incumplimiento de las obligaciones contractuales. Pero, es el propio artículo 992 el que agrega que, en caso de dolo, el deudor responderá además de todos los daños que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Así mismo, el artículo 988 del Código señala que la responsabilidad que proceda de negligencia es igualmente exigible en el cumplimiento de toda clase de obligaciones; y, previamente, el artículo 987 deja sentado que la responsabilidad procedente del dolo -negligencia agravada- también será exigible en todas las obligaciones. Tanto en el caso de la negligencia como en el de dolo, la ley no distingue si se trata de obligaciones contractuales o extracontractuales. Sería por esa vía, la del incumplimiento del contrato, sumado al ingrediente de la negligencia y el dolo, que se añadiría o agregaría el derecho a alcanzar una indemnización del daño que va más allá del emergente y del lucro cesante y que puede ser exigido cuando se está en presencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales.

En cualquier caso, se sostiene que no cabría deducir del artículo 991 del Código Civil una prohibición de indemnizar el daño no patrimonial. De acuerdo con un sector de la doctrina, sería en el artículo siguiente, el 992, de donde

se podría extraer algún tipo de interpretación restrictiva acerca de la indemnizabilidad del daño moral. Esta norma jugaría un papel limitativo en materia de esta clase de daños. La norma es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 992. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento.
>
> En caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación."

Habría que entender que, conforme a la mejor interpretación, no sería indemnizable el daño no patrimonial que no fuese consecuencia inmediata del incumplimiento del contrato y, salvo que el deudor hubiese incurrido en dolo, esa indemnización dependerá de que el deudor haya previsto el daño o haya podido preverlo. En otras palabras, los defensores de esta postura consideran que la indemnización del daño moral, en el caso de un deudor de buena fe, sólo tendría lugar siempre y cuando:

1) El daño haya sobrevenido como consecuencia inmediata del incumplimiento del deudor y,

2) El daño sea de los que han sido previstos o se hayan podido prever en el tiempo de constituirse la obligación.

Otra conclusión que es dable desprender de lo establecido en el artículo 992 del Código Civil sería que las mencionadas condiciones no son exigibles en caso de que haya mediado dolo del deudor, pues bajo esas circunstancias el deudor respondería de todos los daños que se deriven de la falta de cumplimiento del contrato, sin que se haga necesario, en ese caso, la exigencia de los dos requisitos mencionados.

Ahora bien, no es un asunto fácil determinar todo el tiempo qué ha de entenderse por "daño previsible" y por "consecuencia necesaria" a los que se refiere la disposición, pero esa es materia que no nos corresponde abordar en esta oportunidad.

Las tendencias conceptuales prevalecientes determinaron el imperio del libre albedrío y de la autonomía de la voluntad y, dentro de esa orientación, los daños causados a terceros sólo serían reparables en la medida en que se hubiese violado el deber general de no dañar o se hubiese incumplido la obligación contractual voluntariamente convenida, por lo que el vértice del problema se fijó en el dañador y en su conducta antijurídica reprochable, tanto en el orden contractual como en el extracontractual.

Sin dudas, desde un comienzo, la idea central en torno a la responsabilidad civil y la indemnización se orientó a la defensa del patrimonio. Más adelante, con el afianzamiento del sistema capitalista y el avance de la tecnología, con el aporte de importantes acontecimientos históricos y sociales experimentados por la humanidad, nuevas categorías de derechos se han ido paulatinamente integrando en los ordenamientos jurídicos. La categorización de los derechos sociales, de los derechos personalísimos e, incluso, de aquellos ubicados entre los que actualmente se denominan derechos o garantías de tercera generación y también derechos difusos, han ampliado el panorama de lo abarcado por todo lo que sería indemnizable en razón del daño extrapatrimonial o extraeconómico. Así, tenemos que en la actualidad se habla, y hasta han sido incorporados en algunas legislaciones en condición de daños indemnizables, además del tradicionalmente aceptado daño moral, entre otras categorías, el daño psíquico, el daño biológico, el daño estético, el daño a la religiosidad, etc.

También hay quienes distinguen entre el daño moral y el daño espiritual, considerando a este último como un tipo distinto de daño, a partir de las diferencias existentes dentro del conocimiento sensible (la parte afectiva) y el conocimiento intelectual del ser humano, elementos que servirían para otorgarle un carácter autónomo al daño
espiritual, según los defensores de esta teoría.

En el caso nuestro, por razones ante todo prácticas que tienen que ver con la definición que se le da en nuestra legislación al daño moral, preferimos ubicarnos entre quienes estiman que esta clase de agravio comprende todo aquel que no sea patrimonial. En otras palabras, el que no esté comprendido ni tenga por objeto un interés estrictamente económico, en atención a la relación con el bien que se tutela. Por supuesto, lo anterior es sin menoscabo de que habrá supuestos en que la lesión ocasionada a un derecho extrapatrimonial, por ejemplo, la salud, la vida o el honor, también puede dar lugar a que se provoque un daño patrimonial, el cual podría verse reflejado en situaciones tales como la capacidad para trabajar, los gastos de curación o convalecencia, etc. Desde ese punto de vista, participamos del criterio de que ambos intereses, el patrimonial y el extrapatrimonial, pueden coexistir como presupuestos de un mismo derecho. Por eso, las lesiones que sufra la víctima de un accidente pueden dar lugar a la indemnización o resarcimiento del daño patrimonial provocado por las lesiones, pero también, por qué no, al resarcimiento del daño extrapatrimonial o moral que la integridad corporal afectada pudiese haber sufrido. Digamos, por ejemplo, el daño estético.

Un aspecto que pareciera tener más que nada un interés académico, pero de suyo muy importante para desentrañar la naturaleza de la obligación de resarcir el daño moral, es el que surge de la discusión entre quienes ven en el daño moral un ataque, una lesión o menoscabo a los intereses no patrimoniales del damnificado, y la postura de quienes consideran que no debe confundirse daño con actividad dañosa. Para estos últimos, así como el daño patrimonial se aprecia en el resultado económico (daño emergente y lucro cesante), el daño moral debe ser apreciado también por sus resultados, traducidos, en este caso, en las consecuencias anímicas o espirituales -no materiales- del hecho. De manera que, al igual que en el caso del daño patrimonial, lo indemnizable proviene o es resultado de la lesión ocasionada a un interés que ha provocado un perjuicio consecuente en las esferas espirituales o morales de la víctima. En cambio para los primeros, los denominados bienes extrapatrimoniales, tales como los atributos de la personalidad, constituyen fines en sí mismos, al punto de que se confunden con la propia personalidad. Sostienen que, en efecto, un hombre podrá ser más rico que otro, poseer mayor o menor fortuna que otro, pero no es dable concebir a un hombre con mayor derecho a su integridad personal que otro; o sea, con más intimidad, con más honor, con más vida, con más imagen que su prójimo. Conforme a ese criterio el derecho no puede separar el ataque o agravio del daño. Eduardo Sansoni, autor argentino que ha estudiado en extenso la materia, nos ilustra: *"Cuando se habla de daños patrimoniales se trata de saber si la actividad dañosa ha provocado, ha sido causa de un detrimento atribuible al autor: para ello mensura, mide, constata, de qué medios económicos ha sido privado, o ha dejado de obtener el damnificado y en función de ello se liquida el perjuicio. Cuando se trata de un daño moral se resarce el ataque mismo a un atributo de la persona, de un derecho subjetivo que, a diferencia de los derechos patrimoniales, no tiene por objeto bienes susceptibles de ser cuantificados en `más o en `menos "*. Ese autor agrega: *"El daño moral no se mide solo, ni fundamentalmente, por las repercusiones que contiene, sino por el menosprecio que la actividad dañosa en sí misma denota a la persona (física o jurídica), y se estima en razón de la entidad del interés no patrimonial lesionado"*. En resumen, y en todo de acuerdo con el autor en cita, *"cualquier ataque a la persona le infiere a ella un daño por el ataque mismo, ya que el agravio no se predica en razón de la frustración de los medios, sino por el menoscabo a la persona que, es como tal, un fin en si misma."*

Otro aspecto que le ha merecido atención a la doctrina es el atinente al carácter o naturaleza de la reparación que se imponga como resultado del reconocimiento del daño moral. Para Demogue, Ripert y Sabatier la reparación del daño moral constituye una pena y, por tanto, tiene un carácter sancionatorio. Es, ni más ni menos, una sanción al ofensor. En el fondo, la tesis de que los derechos intangibles lesionados no son resarcibles, en razón de su propia naturaleza, impera en esta postura. Se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo resarcir en derecho los sufrimientos de una madre cuyo hijo ha muerto?. También se ha llegado a sostener que ese tipo de resarcimiento pudiese bordear los

umbrales de la inmoralidad; de allí que sólo se puede admitir la reparación económica del daño moral si se explica como una pena privada o sanción que se le aplica al ofensor.

Frente a esa concepción se erige la considerada como la mayoritaria en la doctrina: la reparación pecuniaria del daño no patrimonial es resarcitoria, no punitoria. La dificultad que ofrece demostrar el dolor, las aflicciones, el desprestigio o la indignidad provocada, no significa ni quiere decir que tales padecimientos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, sin que ello implique que tal reparación equivalga a una compensación propiamente dicha.

A estas alturas del debate, la disputa doctrinal entre la reparación de orden resarcible y la de orden sancionatorio o punitivo se pretende resolver mediante la irrupción de la llamada responsabilidad objetiva que busca fundamentar la responsabilidad en el riesgo creado u en otro factor objetivo, como podría ser la obligación legal de garantía, etc., y no, como tradicionalmente ha sido enfocado, en razón de la culpa o el dolo del agente del daño (el obrar doloso o culposo de quien provoca un daño injusto). El daño injusto, en el caso de la responsabilidad objetiva, no se le atribuye al dolo o a la culpa, sino que se reconoce a partir de otros factores objetivos, basándose en el criterio de que la ausencia de culpa del responsable no puede ser, ella misma, obstáculo para que la víctima de un acto ilícito obtenga reparación por el perjuicio sufrido. En nuestra opinión ese no es -que quede claro- el sistema imperante en nuestra legislación civil, la cual se erige básicamente sobre la conducta culposa, negligente o dolosa del agente, asunto clave para determinar si el acto ilícito que da lugar al daño es susceptible de reparación. Lo que no significa, tampoco, que un asomo de la llamada responsabilidad objetiva no esté presente en nuestra legislación a través de lo que nos dicen los artículos 1645 y siguientes del Código Civil; normas que, sin embargo, no logran desterrar por completo los factores subjetivos representados por la culpa o el dolo que continúan haciendo acto de presencia en los supuestos contemplados en esas disposiciones, en cuanto a la determinación de la responsabilidad que le quepa a una persona. Eso es lo que se desprende, por ejemplo, del inciso final del artículo 1645, y citamos: "La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas de derecho privado en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño"; mandato presente y aplicable en los otros supuestos de *"responsabilidad objetiva"* recogidos en el Código en los artículos 1647, 1648, 1649, 1650, 1651 y 1652. Sirva para reafirmarnos en lo que sostenemos, y como simple muestra, la redacción del artículo 1652A: "El fabricante de producto que el público consume responde por los daños y perjuicios ocasionados por su producto, siempre que haya mediado dolo, culpa o negligencia".

Los comentarios anteriores parecen suficientes para estimar que el sistema de la responsabilidad civil en Panamá sigue edificado fundamentalmente sobre las bases de la responsabilidad subjetiva.

Otro problema relacionado con el daño moral tiene que ver con el referido a la medida de su reparación, o sea, el quántum indemnizatorio. Ante las dificultades que este problema ofrece, las legislaciones, como ocurre en nuestro medio, han debido apoyarse en nociones en sí mismas imprecisas, signadas hasta cierto grado por la generalización: la gravedad de la falta, la situación económica del autor del ilícito y la de la víctima, el derecho lesionado, "así como las demás circunstancias del caso", como viene estipulado en el artículo 1644-A del Código Civil.

Dicho lo anterior -que a lo mejor pudo haber sido más breve, pero que nos pareció necesario para una cabal comprensión del tema estudiado- entraremos a considerar la jurisprudencia de la Corte, específicamente la de la Sala Primera d e esa Corporación, sobre daño moral; asunto que,
como es de suponer, abordaremos en conexión con lo establecido por la legislación positiva.

En Panamá, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18 de 31 de julio de 1992, el Código Civil no hacía -nunca lo hizo en verdad- mención expresa al daño moral o a la obligación de repararlo; realidad en la que no difería de otras legislaciones como la española. El concepto se establece y desarrolla con la adición al Código del artículo 1644-A, norma en donde, con meritorio

esfuerzo, el legislador recogió los aspectos fundamentales de ese tipo de responsabilidad. El artículo, además de la definición de daño moral, incluye la obligación de repararlo, e indica que esa reparación se hará en dinero, con independencia de la indemnización que se pueda o no tener como consecuencia del daño material que se haya sufrido, ya sea en el orden contractual o en el extracontractual.

En nuestra opinión, el artículo 1644-A es una excelente síntesis de los principales aspectos envueltos en el tema del daño moral. El mismo, sin agotar por supuesto todo su contenido, se ha convertido en un instrumento eficaz en la tarea de elaborar una doctrina jurisprudencial al respecto.

Veamos de inmediato por qué lo aseguramos.

En épocas tan tempranas como 1918, acerca del daño moral sostuvo la Corte, de manera categórica, que: *"Ni la legislación vigente hasta el 30 de septiembre de 1917, ni la que ahora rige, autoriza el cómputo del daño moral en la estimación de perjuicios, ni tampoco existe jurisprudencia que establezca semejante doctrina en los tribunales colombianos ni en los de España, de donde se derivan los Códigos Civil y Penal que están vigentes en la actualidad".*

Esa postura era equivocada o al menos opuesta a la sostenida por la doctrina y los tribunales españoles, país en cuya legislación está el origen de la nuestra y en donde, a partir de una interpretación amplia y flexible de las disposiciones del Código Civil encargadas de regular el daño emergente, el lucro cesante y la conducta dolosa o culpable en el cumplimiento de las obligaciones, se llegó a la conclusión de que no había razón para dejar de reconocer el daño moral y su correspondiente indemnización.

Con posterioridad, la jurisprudencia varió el criterio y empezó a reconocer el daño moral, pero con mucha cautela. Sin desconocerlo en términos absolutos, la Corte, vía la exigencia de su prueba en forma rigurosa, o sea, como si su comprobación estuviese sujeta a todo lo exigido en los casos de daño material, puso reparos y rechazó, con mucha frecuencia, los reclamos formulados en ese sentido. En dictamen de 17 de noviembre de 1969, en un proceso en que se demandaba la reparación por el daño moral ocasionado al prestigio y reputación personal del demandante, quien había sido denunciado por hurto sin que se pudiese acreditar esa conducta delictiva, la Corte hizo gala de ese rigor y sentenció que para la reparación del daño moral reclamado *"era indispensable demostrar esa disminución de la fama profesional del demandante, prueba que, como se ha indicado no se trajo al proceso".*

Con antelación, en fallo de 1962 la Corte, aún aceptando que entre los daños morales existen algunos donde la mera demostración del ilícito es suficiente para imponerle al responsable la obligación de indemnizar, arribó a la conclusión de que: *"Existen, empero, daños morales donde la prueba se hace necesaria, pues se debe demostrar la existencia de ciertos factores para que se configure la existencia del daño que debe ser indemnizado. En el presente caso falta esa comprobación".*

En esos fallos, es notoria la resistencia en cuanto a conceder alguna indemnización en concepto de reparación, y además, la forma en que se evita entrar en las definiciones necesarias para aclarar, al menos doctrinalmente, qué se entendía o qué debía entenderse por daño moral en nuestro medio. También es obvio el grado de abstracción en que se planteaba aquello relacionado con su prueba.

Esa falta de definición, atribuible en buena medida a las carencias de la legislación, viose reflejada en sentencias de fecha muy reciente, como aquella dictada en 1993 por el Primer Tribunal Superior de Justicia, cuando se pronunció en los siguientes términos: *"Ahora bien, sabido es que no hay parámetro para cuantificar el daño moral, por la especial naturaleza de los mismos. Sin embargo, nuestra más alta corporación de justicia ha establecido una determinada suma para estos casos, fijándola en B/3,000.00, bajo las siguientes consideraciones:*

`Este punto de vista equitativo, sin entrar en el análisis actuarial ni en las operaciones matemáticas correspondientes, lo resuelve la Sala mediante el

enunciado practicado de que el quántum de daño moral siempre ha sido fijado -jurisprudencialmente- en la suma de tres mil balboas (B/3,000.00) y no hay razones para variarlo ahora ..."

Es la puerta abierta por la Ley 18 de 1992 con su adición del artículo 1644-A del Código Civil lo que ha permitido a la jurisprudencia introducirse con pasos más seguros en el ámbito del daño moral y su reconocimiento. En los últimos cinco años la Sala Primera de la Corte ha reconocido la indemnización por daños morales ocasionados a los demandantes en una docena de casos, cifra importante si se compara con el historial reflejado por nuestra jurisprudencia en esta materia. Los casos en donde se ha proferido condena por daños morales durante este período pertenecen, principalmente, a los tramitados por la jurisdicción civil ordinaria, pero también la Corte ha reconocido el daño moral en juicios tramitados en la jurisdicción especial marítima.

En la sentencia dictada el 26 de enero de 1998 la Sala Primera incursionó en el análisis del problema dejando dicho lo que citaremos en extenso, con el perdón de ustedes, pues lo consideramos de importancia: *"Se suele decir que el daño moral puede ser identificado como aquel que resulta de la violación de uno o varios de los derechos inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho. La violación de cualquiera de esos derechos inherentes a la personalidad -el honor, la reputación, la fama, el decoro, la dignidad, la vida, la intimidad, etc.- produciría repercusiones perniciosas en el ámbito moral del afectado, pudiendo también tener consecuencias indirectas sobre el patrimonio, dado el valor económico y productivo que no pocas veces tiene el bien que se procura tutelar: la personalidad.*

Dos elementos se involucran siempre que se producen ataques que afectan el honor de una persona: el sentimiento que cada individuo tiene de su propia dignidad, o sea el honor en sentido estricto, o si se quiere, el sentimiento íntimo de vergüenza que todos somos capaces de sufrir cuando se nos ofende; pero, cuenta también el representado por el aprecio y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor personal. Ambas cosas se deterioran y sufren cuando se produce un ataque contra la honra; por un lado, en lo que atañe a la intimidad y, por el otro, en lo que repercute sobre la imagen que en el seno de la sociedad proyecta el individuo."

En el aspecto de la prueba el fallo indica: *"... por encima de lo que hayan dicho los peritos empleados en el esfuerzo de demostrar que se produjo un daño moral en perjuicio de la parte demandante, es mucho más importante dejar sentado el criterio de que, cuando el agravio moral consiste en la violación de cualquiera de los derechos de la personalidad de un sujeto, la mera demostración de la existencia de dicha transgresión constituirá, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral ocasionado. La prueba del daño moral surge o aflora, inmediatamente, de los hechos que constituyen la actividad ofensora, pues el daño moral se presume por la sola realización del hecho dañoso. Por ej. el cónyuge no necesita probar que ha sufrido dolor por la muerte de su esposa, ni el padre por la muerte de su hijo, cuando el deceso ha sobrevenido con motivo de un ilícito cometido por tercero.*

Cuando el legislador le otorga protección a los derechos inherentes a la personalidad y tutela esos bienes extrapatrimoniales, lo hace partiendo del dolor o sufrimiento moral producido normalmente por la lesión de los bienes personalísimos que sufre el afectado. Por lo cual, para tener derecho a una indemnización por la ofensa representada en una difamación, basta y sobra que la ofensa y la falsedad recaigan sobre la honra del ofendido, ya que ello es suficiente para arrojar sobre él, descrédito, odiosidad o desprecio."

En cuanto a la reparación del daño se indica: *"..... En la reparación del daño moral se conjugan o sintetizan la naturaleza resarcitoria que para la víctima tiene la reparación, con la naturaleza sancionatoria que con respecto del ofensor le impone a éste el deber de reparar las consecuencias del acto ilícito del cual es responsable. También es cierto que la reparación del agravio o daño moral debe guardar relación con la magnitud del perjuicio, el dolor o la afección que haya causado, sin dejar de tomar en consideración el factor subjetivo que pudo haberle servido de inspiración al infractor cuando cometió el ilícito. Son esos los factores recogidos por el artículo 1644A del Código Civil cuando señala:*

`El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso .

Encontrar una adecuada proporción o equivalencia entre la reparación y el daño tratándose de la afectación de bienes extrapatrimoniales ofrece, como es natural, serias dificultades y exige del juzgador poner en juego sus facultades discrecionales de la manera más seria y prudente posible. Para, comenzar se debe considerar la gravedad objetiva de la ofensa y la extensión palpable del agravio. En ese sentido no puede pasar inadvertido que en el presente caso la difamación alcanzó niveles nacionales de divulgación, hasta el punto de que no es extraño ni exagerado pensar que las acusaciones hechas contra el demandante continúan siendo hoy consideradas por muchas personas como ciertas y verdaderas."

Se sigue discurriendo: *"También es procedente tener en cuenta que el autor del hecho ilícito es un comerciante u hombre de negocios, en capacidad de responder por una reparación que no tiene porqué ser meramente simbólica.*

Como el daño moral ha afectado a la víctima en su decoro, en su honor y en su reputación, es procedente lo peticionado por la parte actora para que se ordene, con cargo al responsable, la publicación de un estracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, en un periódico diario de la localidad que tenga difusión a nivel nacional.

Por último, no se pueden dejar de apreciar las circunstancias y los propósitos que a todas luces rodearon e inspiraron la actuación del responsable de la ofensa". De allí que no se podía pasar inadvertida *"..... ... la intención de persecusión que animó al autor de esta acusación falsa, pretendiendo aprovecharse del clima político prevaleciente en aquel momento, a fin de causarle un mayor perjuicio a la persona contra la cual profiriera sus acusaciones."*

Para fijar la indemnización se consideró que:

"Aún cuando la Sala no comparte la opinión de los peritos que señalaron la indemnización que se merece el [demandante] fijándola en la suma de 250 mil balboas, en virtud de que no es admisible que la reparación se convierta en fuente de un enriquecimiento sin causa, si considera de justicia que se le reconozca al demandante el pago de una indemnización que, inspirándose en los principios de la equidad, sea suficiente para darle satisfacción al ofendido. Desde ese punto de vista se estima que una indemnización adecuada en ese caso puede ser fijada en la suma de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/50,000.00)."

El tema del monto de la reparación también fue objeto de análisis en la sentencia de 4 de junio de 1997. Veamos: *".... Siempre ha sido una tarea de difícil cumplimiento para los tribunales la determinación y la estimación pecuniaria de los perjuicios de esta naturaleza. En la práctica, determinar en cada caso si ha habido o no un daño moral constituirá una cuestión de hecho. También el monto de la reparación de los daños de esa índole no dejará de ser una simple satisfacción que se reconoce, valorando en forma aproximada o relativa los sufrimientos, los dolores y los quebrantos que la víctima ha llegado a padecer. Se trata, pues, de un asunto que deberá ser resuelto por el juez utilizando la mayor discreción y la prudencia. Lo que sí parece ser imperativo es que en esta materia el juez nunca debe proceder arbitraria y desproporcionadamente, ya sea fijando sin motivación suficiente cantidades elevadas o ínfimas. En este caso la Sala considera que el Juez Marítimo no se apartó en ningún momento de la conducta que es recomendable observar al fijar el monto de los daños morales que se causaron a la víctima."*

En sentencia de 15 de junio de 1998, donde la parte demandada resultó condenada a pagar B/58,700.00 en concepto de daños morales, la Sala se guió, para fijar esa suma, en el concepto y el dictamen rendido por los peritos que intervinieron en el caso.

En fallo de 21 de agosto de 1998 se condenó a una agencia de seguridad a pagar indemnización de B/50,000.00 por los daños morales ocasionados a los descendientes de una víctima del homicidio cometido por uno de los empleados de la agencia.

El 9 de octubre de 1998 la Sala reconoció en concepto de daños morales la suma de B/20,000.00 en favor de un trabajador víctima de un accidente de trabajo provocado por la culpa y negligencia del empleador. En esa oportunidad la Corte

externó lo que sigue: *"Sabido es que, cuando de la reparación del daño moral se trata, el juzgador queda facultado para establecerlo tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de la víctima y del responsable, así como las demás circunstancias que rodean el caso (art.1644-A Cód. Civil). Queda librada, en una medida considerable, a la prudente discreción del juzgador la determinación de las cantidades indemnizables por daño moral. El juez deberá ponderar, dentro del marco que se establece en la norma citada, cuál es la suma equitativa a fijar, cuidando que no se produzca un enriquecimiento injusto y tratando de compensar el dolor y el sufrimiento padecido por la víctima."*

En pronunciamiento del 21 de octubre de 1998 la Sala abordó el tema de la prueba del daño moral, aclarando que su comprobación ha de entenderse sujeta a las reglas de la sana crítica y al principio de que incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le sean favorables.

En sentencia de 2 de julio de 1999 la Sala eliminó la condena en concepto de daño moral impuesta por el Tribunal Superior, en consideración a que no hubo prueba que acreditase que la conducta de la parte demandada hubiese sido de aquellas que infieren un daño de esa naturaleza. Se reproduce lo pertinente: *"....La existencia del daño no puede probarse con base en meras especulaciones, como las que sustentan los informes rendidos tanto por el perito del tribunal, como por los peritos de la parte demandante; que además, constituyen el único medio probatorio aportado al proceso con este propósito."* En este caso la controversia giraba en torno a una publicación efectuada en los diarios sobre un producto comercial que a juicio del demandante había ocasionado daños morales a la competencia.

También en la sentencia de 20 de enero de 1998 se denegó el reconocimiento de esa clase de daños. Se sostuvo que: *" Conviene tener presente que la parte actora demandó el pago de una indemnización de B/250,000.00 balboas en concepto de daño moral que dice haber sufrido a consecuencia de la campaña difamatoria, calumniosa, injuriosa y humillante programada en su contra por los demandados. Cuando se examinan las cuatro fotocopias correspondientes a publicaciones hechas en el Diario La Prensa y que corren de fojas 6 a 9 del expediente, es posible percatarse que de su contenido no logra desprenderse que se haya producido la denunciada campaña contra JOSE ANTONIO MONCADA. Esas publicaciones, si bien dan cuenta de un pleito instaurado por MONCADA contra el señor WILFI JIMENEZ y evidencian una postura a favor de este último, no configuran, a juicio de la Sala, la existencia de una campaña difamatoria, calumniosa, injuriosa o humillante contra quien, a lo sumo, según se deduce de lo publicado, no gozaba, para efectos de aquella controversia, de la simpatía del medio informativo.*

No le caben dudas a la Sala que las publicaciones que se acaban de comentar, carecen de fuerza suficiente para probar que se produjo, en verdad, una campaña publicitaria contra JOSE ANTONIO MONCADA y mucho menos para demostrar, a través de ellas, que se le haya provocado el perjuicio que le dé derecho a una indemnización destinada a reparar el daño moral que se demanda."

En cambio, en sentencia de 9 de abril de 1999 se condenó a un medio de comunicación televisivo al pago de una indemnización de B/75,000.00, por considerarse que le ocasionó daños morales a un médico al cual se le formuló, en un reportaje ampliamente divulgado, el cargo de haberle atrofiado a un paciente un brazo, debido al mal ejercicio de la profesión médica, hecho que se demostró era falso: *".... La Sala no desconoce que la discreción del juzgador al momento de efectuar la tasación de los perjuicios ha de estar basada en criterios razonables y debe cumplirse con arreglo a los elementos que expresamente en el artículo 1644A del Código Civil se establecen. Pues bien, no ha ofrecido el recurrente los argumentos de peso con capacidad de llevar al ánimo de la Sala la convicción de que el Tribunal Superior haya contradicho, a la hora de fijar el monto de la indemnización, lo que la norma en comento exige como sustento de la determinación que se adopte: el derecho lesionado (en este caso la reputación profesional del demandante), el grado de responsabilidad y la situación económica de los responsables, así como las demás circunstancias que rodearon al evento que*

sirvió de origen al presente caso. De allí que se impone la necesidad de arribar a la conclusión de que no existen méritos suficientes para que la causal invocada prospere."

La Sala, en fallo de 31 de julio de 2000, decidió reducir la indemnización tasada por el Tribunal Superior de B/100,000.00, a B/50,000.00, en un caso de práctica negligente de la medicina, atendiendo para ello a que, de acuerdo con las constancias procesales, quedó demostrado que la víctima se logró recuperar sustancialmente del trauma causado y que la reacción inicial que experimentó el paciente al ser atendido, frente a la cual los facultativos actuaron negligentemente, constituyó un hecho impredecible. Aquí, como se aprecia, empleó la Sala la discrecionalidad otorgada por el artículo 1644-A para fijar la cuantía de la indemnización, y que le permite determinarla tomando en cuenta "las demás circunstancias del caso".

Finalmente, en sentencia de 2 de marzo de 2000, la Corte condenó a la dueña de un supermercado a pagarle indemnización por daño moral a una de sus empleadas a quien se le humilló acusándosele falsamente de falta de probidad. En este caso, frente al cuestionamiento del recurrente indicando que el juzgador había fijado el quántum del daño moral sin atenerse a pruebas documentales, periciales o testimoniales idóneas, la Sala consideró correcta la decisión del Tribunal Superior que, en uso de la facultad discrecional conferida por el artículo 1644-A, se basó en la gravedad de la ofensa, configurada en haber hecho comparecer a la agraviada ante un Juez Nocturno de Policía encontrándose en estado de gestación, sumado a la condición de humilde trabajadora y a la situación económica del ofensor.

Sin pretender haber agotado el tema, esperamos que lo expuesto sea provechoso para más avanzados y profundos estudios en esta materia.

ÍNDICE

PONENCIA i

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ARELLANO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO VOS MARCIACQ CONTRA EL JUEZ CUARTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. (APELACIÓN) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE BAHÍA LAS MINAS CORP. (ANTES EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S. A.), CONTRA EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 5

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LINDO & MADURO, S. A. CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 6

SE ADMITE EL DESISTIMIENTO EN EL AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICDA. MARÍA FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 8

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. JOSE PIO CASTILLERO, EN REPRESENTACION DE LUIS FERNANDO LOPEZ, CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION S/N DE 12 DE MAYO DE 2000, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 9

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO EL LICENCIADO JOSE MIGUEL NAVARRETE, EN REPRESENTACION DE ALTA CORDILLERA S. A., CONTRA EL AUTO PJ-14 NO. 95-2000 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 14. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ENDARA, SOLÍS, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ELÍAS APARICIO, CONTRA LA ORDEN DE HACER VERBAL EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA REITERADA MEDIANTE ESCRITO DE 2 DE MAYO DE 2000. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 11

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LAS LICENCIADAS KARIM CÉSPEDES BERGUIDO Y MARÍA SOLEDAD PORCELL MANCILLA, EN REPRESENTACIÓN DE YAPELO, S. A., CONTRA EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE

DE DOS MIL (2000). 31

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. IVAN TEJEIRA, EN REPRESENTACION DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE LA VICTORIA R. L., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N°9 JD/A.T.T.T. DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: HIPOLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 33

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE SOFER, ALTAFULLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD NOVEDADES ANTONIO, S. A. CONTRA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL (2000), PROFERIDA POR EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 34

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTIN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACION DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 36

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO SILVIO GUERRA MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE MATILDE ROSALES DE ARDINES, ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA DECISIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2,000, EXPEDIDA POR LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 40

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA MORENO, BERNAL, FIGUEROA & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE CASA DE LA CARNE NO. 5, S. A. CONTRA EL AUTO NO. 1-83-22-00. PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 1 DENTRO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO INCOADO POR PEDRO CASTILLO CONTRA CASA DE LA CARNE NO. 5, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 41

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELIDA MORENO CAMARGO, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 42

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. DARIO E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BALDOMIR KRISAJ KREGAR Y EDITH CALVERA, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 44

RECURSO DE HABEAS CORPUS 48

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAMON NORIEGA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, PRIMERO (1o.) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 48

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ALBERTO BONILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 48

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLAS PEREIRA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO

ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 51

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ALBERTO VARGAS RAMÍREZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSE CASTRILLON HENAO CONTRA EL JUEZ DECIMO QUINTO DE CIRCUITO DE LO PENAL DE PANAMA (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). . . 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL SANTOS BARRIA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ERNESTO LAM BUSTAMANTE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 57

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ADÁN MONTENEGRO ACOSTA Y YOBANY ADALBERTO MONTENEGRO SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 57

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO LEDEZMA PINILLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. (ARTURO HOYOS). PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTIAGO CHUN TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NÉSTOR JAVIER RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YURI VARGAS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DEIRA MAGALLON CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MELVIN RICHARD MALONEY CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 68

HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE ABDIEL ALBERTO PILE Y ENEIDA DE PILE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). . . . 71

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO TULIO MOSQUERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 73

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERT GEORGE VALMON CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 77

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS BENAVIDES Y GUSTAVO RAMIREZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 79

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 80

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO CERRUD CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 83

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CATALINO PINEDA MARTINEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HIPOLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIONEL NELSON CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 85

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BRENDA GUERRA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 87

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO RENATO RUSSO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 89

HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN CONTRA EL DIRECTOR GENENERAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 93

SE ORDENA EL CESE DE PROCEDIMIENTO EN LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL LUCERO URRUTIA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 97

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR YESSENIA CARRASQUILLA DE CASTRO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 98

HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO PRESENTADO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ZALDIVAR S., A FAVOR DE FELIPE DANIELS, ISTEMEÑO ÁVILA, EDILBERTO BALLESTEROS, FELIPE BARRIOS, MANUEL CHANIS WALTER, MARCOS HUGUES, JAIME LUNA, JUAN MITRE, DANIEL ORTEGA, GERARDO RENTERÍA SÁNCHEZ, CLINTON RODRÍGUEZ, SANTOS DOMINGO SOSA, ADÁN VÁSQUEZ Y CARLOS VILLARREAL CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 98

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ SALVADOR QUIJADA CONTRA LA DIRECTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 100

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEOPOLD THOKEY Y ROMBI ATHANASE, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 102

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ACOSTA HERRERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 103

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE EDGAR BUSTAMANTE RIASCO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, LCDO. ROSENDO MIRANDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NEMESIO FAJARDO ANGULO EN FAVOR DE CARLOS ARIEL GARCÍA FORERO Y CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 108

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A FAVOR DE LOS SEÑORES VALENCIA UBALDO S., DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA Y OTROS CONTRA LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 109

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR LA FIRMA CHUNG, RAMOS & RIVERA A FAVOR DE ARIEL ALEXIS ALVARADO AGUILA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 110

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR LA FIRMA SITTON & ASOCIADOS A FAVOR DE GILBERTO BOUTIN ICAZA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 111

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO CASTRO PINZON CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 111

HABEAS CORPUS PRESENTADO POR IVAN SAMANIEGO A FAVOR DE JULIO CESAR POLANCO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 113

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 115

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ ÁVILA CONTRA EL ARTÍCULO 1066 DE CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 115

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO A. SALTARIN, EN REPRESENTACION DE GREGORIO M. ARJONA, CONTRA LA RESOLUCION NO.6272-94 DE 29 DE JUNIO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCION DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 117

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LCDO. RAUL GARCIA CONTRA LA

RESOLUCION DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA WATSON & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA THE GERMAN CONSULTING GROUP, S. A. CONTRA LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 73 DE 9 DE ABRIL DE 1997. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 121

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICDOS. HECTOR SPENCER, TILE Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE RONALD MELVIN SWEETIN CONTRA LOS ACTOS Y RESOLUCIONES EXPRESADOS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 126

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE HOTELES (APATEL), CONTRA EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO EJECUTIVO NO.73 DE 8 DE ABRIL DE 1995, SEGÚN LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 197 A DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 129

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. ANIBAL HERRERA, EN REPRESENTACION DE GERVACIO PEÑA, CONTRA LA RESOLUCION N° DM 2/99 DE 7 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 135

TRIBUNAL DE INSTANCIA 139

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA DILIGENCIA DE TRANSITO ENTRE ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO (VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA) Y NICOLE STUMP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 139

QUEJA PRESENTADA POR ELIAS SAMUEL SOLIS DOMINGUEZ CONTRA EL LCDO. DULIO ARROCHA, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 140

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO CASTRO PINZON CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. (MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 141

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 143

APELACIÓN 144

APELACION AL RESTO DE LA SALA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENRIQUE CAJIGAS CONTRA EL AUTO DE 16 DE OCTUBRE DE 2,000 DICTADA POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR (SALA UNITARIA) EN EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR NEDELCA GISELA ARAUZ ORTIZ, HORACIO FRANCISCO ARAUZ ORTIZ, ELSSIE EMY ORTIZ GUEVARA VDA. DE ARAUZ Y FRANCICO ARAUZ ORTIZ CONTRA LA SENTENCIA DEL 2 DE MARAZO DE 2,000 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA EN EL PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD DEL MENOR JOHAN ALBERTO VALDERRAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 144

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO 146

TRANSDIESEL TANKER CORP. APELA CONTRA LA SENTENCIA No.5 DE 17 DE MARZO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A OCEAN P&I SERVICES LTD., y OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 146

APELACION INTERPUESTA POR LUIS E. ACUÑA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE AL YATE ISLAND GIRL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 152

ZURIC INSURANCE CO. (ASIA) LTD. APELA CONTRA LA RESOLCUIÓN DEL 1 DE JUNIO DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO QUE LE SIGUE A MITSUI O.S.K. LINES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 154

UNITED ARAB SHIPPING CO. APELA CONTRA LA SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL LE SIGUE A UNITED ARAB SHIPPING CO. Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 155

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 163

FRANKLIN CIGARRUISTA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO DE FILIACION QUE LE SIGUE HEILEEN MAITE SOLIS PINILLA, A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS LUIS ALBERTO Y ALBERTO LUIS SOLIS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 163

JOSE MARIA LOPEZ Y JUDY ESTHER SERRANO DE LOPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN QUE LE SIGUE A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL EDIFICO P.H. GLAMOUR TOWER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 164

MARIA LUISA BRAVO ZÚÑIGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA DE LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO Y LOS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 166

JUANINO MOJICA HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE LEONIDAS CAMPOS NAVARRO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 170

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ, JESÚS VILLAMIL, ERNESTO COLLINS CAJAR Y JUAN STEWART RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A LA PIQUERA DE TAXI CALIDONIA, S. A., BAUDILIO ZAMBRANO, ISRAEL BATISTA Y EDGARDO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 171

ROBERTO MOCK SAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE INDIRA TALVERA LE SIGUE A IRINEO ASPRILLA AVILA Y ROBERTO MOCK SAM MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 173

EMMA PORCELL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A JAVIER TEJEIRA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 174

PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE

SIGUE ALBA ESTER CEBALLOS ROMERO, A FAVOR DEL MENOR HENRY ANTONIO CEBALLOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 177

HORACIO MARQUEZ NUÑEZ RECURRE EN CASACION EN LA EXCEPCION DE PAGO PARCIAL QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (PANAMA), S. A. CONTRA HORACIO MARQUEZ NUÑEZ, ERICK OMAR VILLARREAL Y MAGDALENA VILLARREAL DE MARQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 181

HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO Y JOSÉ ALVARADO PINEDA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO LE SIGUE A JOSÉ ALVARADO PINEDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 186

BANCO MERCANTIL DEL ISTMO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE JORGE CAMELO VILLALBA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000. 188

EDWIN GARFIELD SONHOUSE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DAVID BENNETT NATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 189

INVERSIONES XENIA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO QUE LE SIGUE ORITELA FASANO SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 195

HI FASHION TEXTILES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DHL PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 200

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. CONTRA CONTAINER TERMINAL, S. A., UNION TECH ENGINEERING CONSULTANS CO. y BEN H.B. FENG. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 205

MANUEL ANTONIO CABALLERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE A JOSÉ ALBERTO VILLARREAL Y MIRNA QUINTERO RICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 205

INVERSIONES Y PROYECTO MARBELLA, S. A. CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. Y COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE GUILA LALO DE COHEN Y DAYANA ANA COHEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 206

RAFAEL ALCEDO CAMAÑO EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES MARIANETH DEL MILAGRO Y LIZETH DEL CARMEN ALCEDO AGUILAR RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUEN A JOSÉ RICAUTER APONTE PINEDA, ASSA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., AGROGANADERA SAN ANTONIO, S.A Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 216

GAMALIEL PINTO MARTINEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR BOLIVAR PINTO CORREA, ROBERTO ANTONIO PINTO M. MAIRA ROSA PINTO DE CASTILLO Y DELIA MARIA PINTO DE MACIAS EN SU CONDICIÓN DE HEREDEROS DECLARADOS DENTRO DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE AURORA MARTINEZ CORREA DE PINTO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 218

CONFLICTO DE COMPETENCIA 221

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA Y EL JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE OCU EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTIA INCOADO POR MARIANO QUINTERO ARROYO CONTRA TEOFILO MORENO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 221

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, RAMO CIVIL Y EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON, RAMO CIVIL, EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTIA INCOADO POR ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. CONTRA ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 223

IMPEDIMENTO 226

HISPAN, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A SANDINAVIAN MOTORS, S. A. Y GRUPO SILABA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 226

RECURSO DE HECHO 227

JUAN GARCIA ALCEDO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2,000 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADA CON LA RESOLUCION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1999, QUE ORDENA LA CANCELACION DE LOS ASIENTOS 6440 DEL TOMO 249 Y 7904 DEL TOMO 244. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 227

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 229

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 230

AUTO DE PROCEDER APELADO A FAVOR DE MANUEL CARRILLO BRUX, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GLADYS YINETH REYNA TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 230

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO PERIGAULT, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 231

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 234

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JORGE HUMBERTO FIGUEROA MENDOZA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, UNO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 234

EN SALA UNITARIA SE ORDENA LA CORRECCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN EL PROCESO SEGUIDO A SERGIO A. ORTEGA ESCOBAR SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 235

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FAVOR DE FRANCISCO LIGUAS GONZALEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS

MIL (2000). 237

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FAVOR DE LUIS ANTONIO VERGARA, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 237

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ CRUZ Y OSCAR HERNÁNDEZ MONTERO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 238

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELVIS RICARDO HART MC FARLANE Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 240

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANASTASIO ROSARIO SAMANIEGO, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 242

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ENRIQUE GONZÁLEZ MURILLO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 243

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE GILDA CAMARGO, SANCIONADA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ALQUILER Y DISTRIBUCIÓN DE REPRODUCCIONES ILÍCITAS DE VIDEOGRAMAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 244

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARCOS ANTONIO HILTON BREWSTER, CONDENADO POR DELITO DE ROBO AGRAVADO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 247

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE ADOLFO ELIECER VELARDE RODRIGUEZ EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 248

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE CARMEN ALICIA CANDELO SALCEDO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 251

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE DALILA VARGAS Y OTROS EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 253

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARIS AUGUSTO AVILA SANCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (EXTORSION). MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 255

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ARCADIO BENITEZ RODRÍGUEZ, ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, POR DELITO DE VENTA DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 256

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE GAUDIANO CHAMBONETT POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 257

IMPEDIMENTO 258

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO GABRIEL FERNÁNDEZ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR EL SINDICADO RODOLFO HÉCTOR RICHARD CHAMBER. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 258

RECURSO DE REVISIÓN 259

REVISIÓN SOLICITADA POR EL LIC. VALENTIN JAÉN A FAVOR DE ALBRICK COLBERT PRINCE RODRIGUEZ, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 259

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL MURGAS MONTE, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE JUSTO SÁNCHEZ SANJUR. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 260

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR ALFREDO ISOROKU SUGAR, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE DIEGO LOBON BALTAN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 261

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A OMAR RODRIGUEZ PITTY, SANCIONADO POR DELITO DE ESTAFA Y DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN FONDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 264

SENTENCIA APELADA 265

SENTENCIA APELADA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A BENJAMIN PALACIOS MOSQUERA POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE YADIRA MOSQUERA HURTADO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 265

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL CONTRA LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 2000 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALJADIS ABDUEL HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN PERJUICIO DE MANUEL ALEXANDER PITTI. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 269

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELMER ANTONIO JIMENEZ LEZCANO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 272

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A VLADIMIR ALEJANDRO HAZERA LÓPEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 276

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. MIGUEL QUIRÓS A., EN REPRESENTACIÓN DE SATURNINO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ Y SIXTA MARIELA CONCEPCIÓN DE ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°D.N.060-98 DEL 14 DE JULIO DE 1998, PROFERIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO GRIMALDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-10655 DE 18 DE JULIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 282

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO NELSON EN REPRESENTACIÓN DE ADOLFO MANUEL PITTI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°27 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 283

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ E. HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE MARCELINA MURILLO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N. 393-99 DE 11 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 285

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO PIMENTEL GONZÁLEZ PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE 278-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE DARIÉN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 286

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE ITZEL GONZÁLEZ PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE 280-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE DARIÉN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LIDIA SALAS CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-1072 DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 288

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS EUGENIO CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE IVETH ANAYANSI SANCHEZ DE CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2000 EMITIDA POR LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE ARRAIJÁN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 289

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEON, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DE DIOS PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTA N° 117 DSR DE 4 DE FEBRERO DE 1998, SUSCRITA POR EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS DEL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 290

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA BALIÑO QUIEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 02-98 DE R.C. DE 14 DE MAYO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 2 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 294

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA LORENA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓ DE ULTRAMAR COMERCIAL CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO N°1 DEL RESUELTO N°1516 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1997, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 297

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANA CRISTINA DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CELESTINO SERRANO CASTILLO, NIVIA ROSA CASTILLO (NOMBRE USUAL) O NIVIA ROSA MIRANDA CASTILLO (NOMBRE LEGAL) Y BLAS DOMINGO CASTILLO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N.4-1177 DE 14 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA TRELLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, CONSISTENTE EN EL NO PAGO DEL PRECIO ACORDADO EN EL CONTRATO N°027-97-ALD DE 17 DE FEBRERO DE 1998 Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 302

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CELLULAR VISION PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 553 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 303

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DM-1069-2000, DE 29 DE MAYO DE 2,000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 312

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS SÁNCHEZ Q. EN REPRESENTACIÓN DE EDWIN O. GRAELL R., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°145-00 DE 14 DE ABRIL DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 314

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG, EN REPRESENTACIÓN DE SAÚL QUIROZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 222, DE 1 DE ABRIL DE 2000, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 315

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE NELSON MARÍN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRS/DE NO. 292-00, DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 317

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 274-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 318

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEMETRIO ZARATE, EN REPRESENTACIÓN DE XIOMARA B. BEYTIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 27 DE 5 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO EN REPRESENTACIÓN DE CESAR SALDIVAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 293-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 320

EL LICENCIADO ERIC PRADO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESPINOSA, INTERPUSO DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 290 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO, EN NOMBRE Y REPESENTACIÓN DE MARIBEL ALVEY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-10658, DE 18 DE JULIO DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE PIO CASTILLERO, EN REPRESENTACIÓN DE CARMINA GALLARDO SANCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO 199 DE 27 DE JUNIO DE 2000, EMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 323

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE ABDIEL MAT CALDERÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO GERENCIAL N°006 DE 3 DE MARZO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE DE SERVICIOS GENERALES DE LA CAJA DE AHORROS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 324

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES BERGES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°06-99-D DE 12 DE FEBRERO DE 1999, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 325

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MARQUEZ & PRECIADO, EN REPRESENTACIÓN DE IMPREVISTOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ADMR-PM-037-2000, DE 31 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 326

DEMANDA CONENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR E LICENCIADO CARLOS ESPINOZA MITRE, EN REPRESENTACIÓN DE FRANKLIN SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 151, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 19999, DICTADO POR EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 327

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEXIS ARIEL ADAMES GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ULPIANO VERGARA DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 30, DE 22 DE JUNIO DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA DEL MINISTERIO DE SALUD, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 328

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSE FUNG, EN REPRESENTACION DE FRANCISCO CORREA MELAIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 329

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ M. LEZCANO EN REPRESENTACIÓN DE OLMEDO CARRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 005-98 DE 8 DE JULIO DE 1998,

DICTADA POR LA ADMINISTRADORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 331

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MAYRA ESTHER LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO ENRIQUE CARABALLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2342-97 DNP DE 30 DE MAYO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 333

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY EN REPRESENTACIÓN DE GRISELDA DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°26-98 R. DE C. DE 19 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N°3, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 337

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. NIVIA A. ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DE IDALDO A. ATENCIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL RESUELTO N°454 DE 15 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 340

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ARISTIDES FIGUEROA EN REPRESENTACIÓN DE RICAUTE TORRERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°84 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 345

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DE QUIBA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 07-98 DE R.C. DE 9 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 1 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS (2,000). 347

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FLORENCIO BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 143 DE 23 DE MARZO DE 1999, DICTADO POR EL ALCALDE ENCARGADO DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 351

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OCTAVIO OCHOA, EN REPRESENTACIÓN DE OFELINA DEL CARMEN OCHOA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 171 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 353

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA KATHIA LEE, EN REPRESENTACIÓN DE AGRIPINO TORO LOZANO, PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DEL NACIMIENTO DE JOSE GREGORIO TORO QUINTERO, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 354

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL COLLADO, EN REPRESENTACIÓN DE ARGELIA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 1073/00, DE 23 DE MAYO DE 2000, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 355

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 357

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALISON GARCÍA VELIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°64 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 357

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ONELIO GONZÁLEZ TEJEIRA Y JOSÉ LUIS GALLOWAY LOGAN PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 79 DE 10 DE AGOSTO DE 1999, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARRAIJÁN Y LA COMPAÑÍA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 361

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA J.A. HERRERA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO LEE PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-2000 R.C DE 16 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 2. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 362

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LEOPOLDO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMÍN A. JURADO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 26 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN CARLOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 363

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA CHEN, ESTRADA Y WONG, EN REPRESENTACIÓN DE LIZETH ALFARO ESQUINA PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 93 DE 7 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, HOY AUTORIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 364

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DELFIN CASTRELLON, EN REPRESENTACIÓN DE EULOGIA CEDEÑO BRAVO, PARA QUE SE DECLARE NUL, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D.N. 7-1908 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 365

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS 366

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

INTERPUESTA POR EL LCDO. BENITO A. MOJICA EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VALDÉS, JAIME TREJOS, MAURICIO JOSEPH, MARIO FINDLAY, JUAN MARTÍNEZ Y LUIS COBA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN GENERAL DEL DÍA N°164 DE 29 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A MARIO FINDLAY, MAURICIO JOSEPH, EL DECRETO PERSONAL N°2 DEL 23 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A JUAN MARTÍNEZ, EL DECRETO DE PERSONAL N°249 DE 3 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A JAIME TREJOS. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 367

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENITO A. MOJICA A. EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN CISNEROS PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 195 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 369

IMPEDIMENTO 370

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA FIRMA LACAYO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIO ELOY FISCHER VALERO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 370

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA CONOCER DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE PORTS ENGINEERING AND CONSULTANTS CORP. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 371

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUSTINIANO CÁRDENAS B., EN REPRESENTACIÓN DE SERGIO AUGUSTO GONZÁLEZ HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N 1501 DE 30 DE MAYO DE 2000, DICTADO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 372

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MURGAS Y MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A., DE PUY FAGIA, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE: JORGE LUI DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A. AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 373

JURISDICCIÓN COACTIVA 374

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOZA, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO MCCOY, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 374

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO OLDEMAR O. GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILA BEITÍA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REGIÓN DE CHIRIQUÍ LE SIGUE A HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 376

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ELÍAS SOLANO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS LE SIGUE AL BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 381

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ERNESTO GOTTI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 385

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA JOVANÉ BIEBERACH & VALDÉS ROCA, EN REPRESENTACIÓN DE MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR Y JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 386

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 390

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA AIDIL CASTILLO GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE TOMAS EMILIO DE SEDAS, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: TOMAS EMILIO DE SEDAS -VS- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACION. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 390

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE FABIÁN GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE FACUNDO APARICIO Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FACUNDO APARICIO Y OTROS, -VS- CERVECERIA NACIONAL, S. A.; DISTRITBUIDORA COMERCIAL, S. A.; REFRESCOS NACIONALES, S. A.; TRANSPORTE PASADENA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 392

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO MARTÍNEZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 19 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DROGUERIA EL JAVILLO -VS- ROBERTO MARTINEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 395

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA M. EN REPRESENTACIÓN DE YOXANA RIVERA DE GRACIA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: YOXANA RIVERA DE GRACIA VS PLANET KIDS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 397

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS BONILLA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AUTOVÍAS, S. A., CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DORA ISABEL CEDEÑO VS. AUTOVÍAS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000). 401

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS JONES R. EN

REPRESENTACIÓN DE GRAN HOTEL SOLOY, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE ALEXIS BETHANCOURT -VS- GRAN HOTEL SOLOY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 405

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PEDRO A. CEDEÑO EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABELINO CERRUD CORTEZ, JULIO CESAR CHAVEZ MORALES Y ERICK RAMOS ROMERO VS- CHIRIQUI LAND COMPANY y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 406

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR RODRIGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDGAR RODRIGUEZ -VS- INTEL, S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 407

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ESTEBAN GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE UIL ALFREDO GORDON, CONTRA LA SENTENCIA SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: UIL ALFREDO GORDON -VS- NAVPAN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000). 409

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 411

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 412

MARITZA URRIOLA TAYLOR, MEDIANTE APODERADO LEGAL, LA FIRMA FORENSE ROSAS Y ROSAS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, DICTADA POR LA CORTE DISTRITAL DE FAMILIA DEL CONDADO DE HARRIS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCYULO MATRIMONIAL QUE LA MANTIENE UNIDA AL SEÑOR ROBERT LAWRENCE THAYER. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 412

EXHORTO 413

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, VENEZUELA, DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD DE VENTA INCOADO POR LOS SEÑORES CRISTINA SUÁREZ ÁLVAREZ Y JUAN CARLOS SABAL SUÁREZ CONTRA LOS SEÑORES FREDDY SABAL JARA, BEATRIZ DE ROUZ Y LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Z.P.K., C.A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 413

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, ADSCRITOS A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A AGENOR PRIETO, SANTOS PRIETO Y RAFAEL ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 414

LAUDO ARBITRAL 415

EL SEÑOR GUILLERMO ELIAS QUIJANO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA SUCASA S. A. SOLICITA LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DICTADO

DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR INMOBILIARIA SUCASA S. A. CONTRA CRYOGAS DE CENTROAMERICA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 416

TRIBUNAL DE INSTANCIA 419

EMILIA DE CASIS INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA EL LCDO. JAIME SMITH. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 419

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL WILSON MATIAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R., SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. CONTRA EL LICENCIADO MANUEL GONZÁLEZ C., POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000). 422

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

NOVIEMBRE 2000

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ARELLANO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RICARDO VOS MARCIACQ CONTRA EL JUEZ CUARTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. (APELACIÓN) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta máxima Corporación de Justicia la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por RICARDO VOS MARCIACQ contra la orden de hacer contenida en el Auto No.681 de 10 de marzo de 1999, proferido por el Juez Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que resuelve y reconsidera la resolución No.114 de 20 de enero de 1999, en los siguientes términos:

> **`Dada la edad del querellado, se procede a reemplazar la pena de prisión decretada en virtud de la desobediencia continua e injustificada de RICARDO VOS MARCIACQ de devolver a FRANCISCO VOS MARCIACQ la mitad de las acciones de la sociedad anónima VOSMAR, S. A. descritas en la parte resolutiva del Auto N°3270 de 10 de noviembre de 1998, por la pena de días-multa en razón de B/.250.00(doscientos cincuenta balboas con 00/100) el primer día, los que serán compulsivos y progresivos, mientras persista su renuncia a acatar la orden de este Tribunal ya descrita. Estos serán progresivamente aumentados en B/.50.00 (cincuenta balboas con 00/100) diarios de mientras persista en su renuncia a acatar la orden proferida por este Tribunal y reiterada por este Tribunal.**
>
> **Por lo antes expuesto, quien suscribe, JUEZ CUARTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE Y RECONSIDERA en los términos antes descritos.**
>
> **Se ordena remitir copia autenticada de esta resolución a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. ..." (f. 2).**

Mediante resolución de 13 de septiembre de 2000, contra la cual se propone el presente recurso de apelación, el Primer Tribunal Superior de Justicia resolvió denegar la acción de amparo previamente mencionada, con base en las siguientes consideraciones:

En primer lugar, en el fallo apelado se hace un recuento de los hechos en que se fundamenta la acción de amparo, expresando lo siguiente:

> **"...**
>
> **1. Que mediante resolución N°642 de 11 de marzo de 1997, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró rehabilitado al señor Francisco Javier Ignacio Vos Marciaq y levanta la Interdicción decretada;**
>
> **2. Que mediante Auto de fecha 8 de mayo de 1998, el Tribunal Superior de Familia confirmó el Auto No. 642 antes mencionado, resolución que fue debidamente notificada a las partes el 13 de mayo de 1998.**
>
> **3. Que el 6 de julio de 1998, el Juzgado expidió una resolución que decreta la devolución inmediata por parte de Ricardo Vos Marciaq de los bienes que pertenecen a Francisco Javier Vos Marciaq, tal resolución le fue notificada a las partes mediante edicto No 712, el**

día 21 de julio de 1998, cuando debió notificarse personalmente y no mediante edicto;

4. Que al no habérsele notificado al amparista el auto de fecha 6 de julio de 1998, en la forma que establece la Ley, con la sola solicitud del actor, el Juez acusado expidió el Auto No.2546 de fecha 28 de agosto de 1998, que declara al amparista Ricardo Vos Marciaq culpable de desacato.

5. Que contra el Auto que declara el desacato, el amparista oportunamente formuló reconsideración, recurso que no fue atendido, toda vez, que el Juez profirió el Auto No.3270, de fecha 10 de noviembre de 1998, por el cual negó la reconsideración solicitada y mantuvo la decisión de declarar culpable de desacato a Ricardo Vos Marciaq;

6. Que como consecuencia del Auto No. 3270 de 10 de noviembre de 1998, el juez acusado profirió el Auto No. 114 de 20 de enero de 1999, mediante el cual sanciona a Ricardo Vos Marciaq a cumplir la pena de un (1) mes de prisión por su renuencia a cumplir la orden del Tribunal; y no obstante, haber modificado la orden que originó el desacato y determinaba los bienes que el amparista debía devolver;

7. Que contra el Auto No.114 de 20 de enero de 1999, el amparista formuló reconsideración, y el Juez acusado en resolución No.681 de 10 de mayo de 1999, modificó la sanción; sin embargo, mantiene la orden de desacato fundado en un supuesto cumplimiento de la devolución de los bienes;

8. Que la resolución acusada infringe el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que mantiene la orden de desacato; no obstante, haber reconsiderado y modificado la obligación de entregar determinados bienes al actor, cuyo incumplimiento dio origen a la medida de desacato, como también, no haberle dado traslado de la querella. Además, afirma el amparista que al reconsiderar la resolución sobre los bienes que debía entregar, el juzgador debió requerirlo previamente de la devolución;

9. El amparista demanda que el desacato debe ser tramitado conforme al procedimiento de un incidente, y del que debe dársele traslado al querellado, a efecto que pueda defenderse u oponerse a la querella, sin dejarlo en estado de indefensión, con lo que se ha violado el debido proceso.
... (Fs. 47 a 49)

Indica el Tribunal que el funcionario demandado hizo llegar los antecedentes que guardan relación con su actuación, de los que emerge: el Incidente de Rehabilitación de Interdicto propuesto por FRANCISCO JAVIER VOS MARCIAQ; la resolución de 6 de julio de 1998, del Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, que ordenó la devolución inmediata por parte de RICARDO VOS MARCIAQ de los bienes pertenecientes a FRANCISCO VOS MARCIAQ (fs.157-158). Además, observa el Tribunal que la notificación por edicto de esta resolución se realizó conforme al procedimiento de ley, como está previsto en el artículo 989 del Código Judicial (modificado mediante Ley 31 de 28 de mayo de 1998). Y, en cuanto a la resolución en la que se le impone al amparista una sanción por no cumplir con la obligación de entregar los bienes pertenecientes a FRANCISCO VOS MARCIAQ, se evidencia que el juzgador cumplió con el procedimiento establecido en los artículos 1957, 1960 y 1961 del Código Judicial como consta en las resoluciones de fojas 4-5, 40, 47, 50 y 111-112 de los antecedentes de la querella por desacato.

En base a lo expuesto se concluye que el juez acusado, con su actuación,

no ha violado el debido proceso.

Por su parte, la censura sustentó su recurso de apelación mediante escrito que corre de fojas 51 a 53, donde alega lo siguiente:

Se observa que en la parte resolutiva de la sentencia recurrida se incurre en el error de expresar que la acción de amparo fue interpuesta por FRANCISCO VOS MARCIACQ, cuando es sabido que la misma fue promovida por su representado RICARDO VOS MARCIACQ.

No obstante, manifiesta el impugnante que su disconformidad con el aludido fallo se debe a las siguientes razones:

Aclara que el amparo fue interpuesto contra la ORDEN DE DAR contenida en el Auto No.681 de 10 de marzo de 1999 dictado por el funcionario demandado, que fue posteriormente confirmada mediante resolución de 25 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Familia.

Se sostiene que el Auto demandado violó el artículo 32 de la Constitución "al mantener una orden de DESACATO a pesar de reconsiderar y modificar la obligación cuyo incumplimiento fue la causa de dicha medida; así como a pesar de no habérsele dado traslado a nuestro representado de la respectiva solicitud de desacato". Así, "conforme a los trámites legales todo DESACATO es producto del incumplimiento de una orden debidamente notificada al obligado", por lo que en este caso se desatendieron los artículos 1956, ordinal 8 y 1960, párrafo segundo, del Código Judicial. (Subrayado del apelante, fs.51 y 52).

El amparista-apelante concluye reiterando la parte esencial de los fundamentos de su amparo, al señalar que la querella por desacato requiere un trámite incidental con la debida notificación y traslado al querellado a efectos de que pueda defenderse u oponerse a la querella, de lo contrario se está violando el debido proceso.

En atención a lo expuesto, la Corte procede a revisar el expediente contentivo de la Querella por desacato que presento el apoderado judicial de FRANCISCO VOS MARCIACQ. En el respectivo escrito (fs.1-2) vemos que se solicita al juzgador que le imponga una sanción a RICARDO VOS MARCIACQ por haberse negado a cumplir la orden judicial contenida en la resolución de 6 de junio de 1998 que le ordenaba la devolución inmediata de todos los bienes pertenecientes al rehabilitado FRANCISCO VOS MARCIACQ. Como prueba de ello presenta la boleta de 30 de julio de 1998 suscrita por el juez, donde le ordena la entrega de dichos bienes que mantenía en su condición de curador; boleta que leyó y se negó a firmar, como lo consignó en la misma el Cabo de la Policía No.11459, A. CYRUS.

En virtud de esta querella por desacato, el Juzgado Cuarto de Circuito se pronunció, mediante auto de 28 de agosto de 1998, declarando culpable de desacato a RICARDO VOS MARCIACQ e imponiéndole pena corporal de arresto, en base a lo dispuesto por los artículos 1956 (ordinal 8) y 1957 del Código Judicial.

Contra este auto el afectado presentó recurso de reconsideración que fue resuelto mediante resolución de 10 de noviembre de 1998 (fs. 20 a 22), la que a su vez fue apelada, siendo posteriormente negada la apelación con fundamento en el artículo 1115 del Código Judicial (fs.32).

Así, el querellante presenta escrito reiterando su denuncia por el desacato que mantiene el curador (amparista), respecto al cumplimiento de la orden de entrega e insiste en que se ordene su aprehensión física. La contraparte se opone a esta solicitud (escrito fojas 36-37) y el juzgado dicta auto de 20 de enero de 1999, donde lo sanciona con un mes de prisión "por su renuencia a acatar la orden del Tribunal que en forma reiterada lo ha conminado a entregar a FRANCISCO VOS MARCIACQ los bienes descritos en el Auto No.3270 de 10 de noviembre de 1998" (fs.40).

En relación a este último Auto, de 20 de enero de 1999, el apoderado de RICARDO JAVIER VOS MARCIACQ presenta un escrito donde manifiesta que se notifica de dicha resolución y que, a la vez, contra el mismo sustenta recurso de reconsideración (fs.42 a 46).

Finalmente, el Juez Cuarto de Circuito se pronuncia en cuanto al referido recurso de reconsideración en el Auto de 10 de marzo de 1999, el cual es objeto del presente amparo de garantías y es visible de fojas 47 a 50.

Esta Corporación ha podido apreciar que este último auto fue debidamente notificado al amparista-querellado y contra el mismo su apoderado presentó, en tiempo, recurso de apelación. De manera que no procede el cargo relativo a la violación del debido proceso, por la supuesta indebida notificación al obligado de la citada resolución.

Igualmente, resulta infundada la acusación que se hace al juzgador de no haber seguido el procedimiento que establece la ley para la tramitación de la querella por desacato, puesto que, conforme a las constancias de autos, en todo momento ha cumplido con lo dispuesto por los artículos 1957, 1960, 1961 y concordantes del Código Judicial. Además, no se le ha impedido al amparista ejercer su derecho de defensa, ya que ha recurrido contra las distintas resoluciones que lo sancionan por su renuencia a acatar la orden judicial que le fue impuesta de devolver los bienes de su hermano (FRANCISCO VOS MARCIACQ) que estaban bajo su custodia en su condición de curador mientras duró la interdicción que pesaba sobre el primero.

Finalmente, como observó el apelante, en la parte resolutiva del fallo impugnado en amparo, se incurrió en el error de expresar que la acción fue interpuesta por FRANCISCO VOS MARCIAQ cuando el que la promovió fue RICARDO VOS MARCIAQ. Por tanto la Corte procede a reformar la resolución en ese sentido.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la parte resolutiva de la resolución de 13 de septiembre de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que quedará así: DENIEGA la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por RICARDO VOS MARCIACQ contra la orden contenida en el Auto No.681 de 10 de marzo de 1999, dictado por el Juez Cuarto de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PRESENTADO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE BAHÍA LAS MINAS CORP. (ANTES EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S. A.), CONTRA EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Arias, Fábrega & Fábrega, actuando en nombre y representación de BAHÍA LAS MINAS CORP. (antes EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS, S.

A.), ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Amparo de Garantías Constitucionales, contra el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Encontrándose en lectura el proyecto de resolución respecto a la admisibilidad del amparo promovido, la parte actora presentó desistimiento de dicha acción ante la Secretaría General, mediante escrito fechado 18 de octubre de 2000, por lo que el Pleno procede a determinar la viavilidad de esta última actuación.

A juicio de esta Superioridad el desistimiento presentado por el recurrente es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 1073 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.
> El desistimiento una vez presentado al Juez, es irrevocable.
> ..."

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Arias, Fábrega y Fábrega en representación de BAHÍA LAS MINAS CORP. (antes EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BAHÍA LAS MINAS , S. A.) y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LINDO & MADURO, S. A. CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, EN APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense CASTRO & CASTRO contra la resolución calendada 27 de septiembre de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

La resolución impugnada no admitió el amparo de garantías constitucionales propuesto por el recurrente contra la orden de hacer contenida en el numeral II del Auto No. 789 de 17 de abril de 1998 desarrollada por la resolución de 31 de julio de 2000,emitida por la licenciada MIRIAM CHENG DE AGUILAR, Jueza Segunda de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

ANTECEDENTES:

Los hechos que originaron la interposición de esta acción constitucional guardan relación con el proceso ordinario promovido por NEFTALI TRIBALDOS, representante legal de la agencia SILDOBORT contra la empresa LINDO & MADURO, ante el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En la etapa probatoria el demandante adujo y le fue admitido por la Juez Segunda, MIRIAM DE AGUILAR la practica de un peritaje a los libros de contabilidad del demandado para determinar las sumas dejadas de pagar en concepto de comisión por ventas y cobros por LINDO & MADURO a NEFTALI TRIBALDOS R..

Por su parte el demandado indica, que la realización de ese audito vulnera el artículo 89 del Código de Comercio, que protege la correspondencia y libros del comerciante, así como los artículos 29 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

DECISIÓN DEL AD-QUO

Luego de revisar la actuación, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2000 no admitió el amparo interpuesto por la firma forense CASTRO & CASTRO, por considerar que se incumplió con lo dispuesto en el artículo 2606, numeral 2 del Código Judicial.

El Ad-Quo se expresó en los siguientes términos:

> "El artículo 2606 del Código Judicial permite la interposición de demandas de amparo de garantías constitucionales contra resoluciones judiciales; pero en su numeral 2) (sic) señala que: "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate" (Subrayó el Tribunal).
>
> Las resoluciones impugnadas, como resoluciones judiciales que son, son susceptibles de ser impugnadas por los recursos ordinarios de impugnación contemplados en el artículo 1107 del Código Judicial; hecho éste que no se menciona ni se prueba en el expediente que contiene la demanda de amparo que se examina.
>
> Lo anterior hace que la mencionada demanda resulte manifiestamente improcedente y por ende no debe ser admitida."

FUNDAMENTO DEL APELANTE

En su escueto escrito de sustentación visible a foja 33 del cuadernillo, el recurrente CASTRO & CASTRO apela la resolución de 27 de septiembre de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no admite el amparo de garantías constitucionales propuesto contra la Jueza Segunda de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, licenciada MIRIAM CHENG DE AGUILAR.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Constata el Pleno que el amparo no fue admitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia por considerar que, el amparista no agotó los medios ordinarios de impugnación contenidos en el artículo 1107 del Código Judicial para este tipo de resoluciones judiciales.

Al revisar el Auto No. 789 de 17 de abril de 1998 este Tribunal Colegiado observa, que la practica de la prueba pericial impugnada fue dispuesta el 14 de mayo de 1998, sin embargo, no fue evacuada. Posteriormente mediante providencia de 31 de julio de 2000 se ordenó su realización para el 24 de agosto de 2000 (folio 14), la cual fue pospuesta para el 30 de agosto de 2000 a las 8:00 a. m. fecha en que finalmente se realizó.

A fojas 24-25 se acredita el peritaje realizado por la auditora MARIA LASSO, disponiendo el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que el informe sería entregado el día 4 de septiembre de 2000, no obstante, a foja 27 reposa copia debidamente autenticada de la petición formulada por la auditora LASSO en la que solicita una prórroga hasta el 14 de

septiembre, para la entrega del informe, sin embargo, a foja 9 el Pleno constata que el recurrente presentó el amparo de garantías constitucionales el día 18 de septiembre de 2000.

Lo anterior significa, que la orden de hacer impugnada se ejecutó y produjo sus efectos, de allí que el Pleno no puede enervar sus consecuencias, pues no existe peligro actual, grave e inminente, toda vez que la orden de hacer contenida en el auto de 17 de abril de 1998 fue ejecutada el 30 de agosto de 2000, sin que, el amparista hiciera uso de los términos legales para impugnar la referida resolución judicial.

En tal sentido el Pleno reitera una vez más, que el amparo procede únicamente cuando se han agotado los recursos ordinarios que concede la ley para enervar los efectos del acto jurisdiccional, por cuanto que, ante ordenes arbitrarias proferidas por el juez de la causa, el ordenamiento positivo contiene los mecanismos legales para limitar sus consecuencias.

Este criterio se encuentra contenido en el artículo 2606 numeral 2 del Código Judicial, así como en la jurisprudencia de la Corte, que ha sido constante al expresar que el amparo sólo procede cuando se han agotado los medios y tramites que permite la ley para su impugnación, ello conlleva no sólo el anuncio y sustentación del recurso ordinario, sino el pronunciamiento del juzgador.

Continuando con este pensamiento, el Pleno puntualiza que el cumplimiento de este requisito va de la mano con el principio de DEFINITIVIDAD, de allí que el amparista debió impugnar el auto de pruebas conforme lo dispuesto en el artículo 1107 en concordancia con los artículos 1114 y 1116 del Código Judicial.

Si bien llama la atención de este Tribunal que el auto emitido por la Jueza Segunda de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá no especificó de manera clara y precisa el libro, asiento y periodo contable que sería auscultado por la auditora LASSO, y que por el contrario se ordenó ampliamente un peritaje para determinar las sumas dejadas de pagar por LINDO & MADURO en concepto de comisión por venta y cobros a NEFTALI TRIBALDOS, es indudable que, el amparista no hizo uso de los medios ordinarios de impugnación para obtener la revocatoria o modificación del acto antes de pretender acudir a la esfera constitucional, aunado al hecho que dicho acto cumplió sus efectos el 30 de agosto de 2000,razón por la cual debe confirmarse la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia de 27 de septiembre de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ADMITE EL DESISTIMIENTO EN EL AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LICDA. MARÍA FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MARIA FABREGA, actuando en nombre y representación de CONSTRUCTORA URBANA, S. A. ha presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra el Director General de Trabajo por la emisión de la orden de hacer contenida en la Nota No. 1238-DGT-00 DE 17 de octubre de 2000.

Habiéndose elaborado el proyecto, en momentos en que iba a ser circulado para su lectura por el resto de los integrantes del Pleno, la amparista, presenta escrito de desistimiento, de fecha 24 de octubre de 2000.

Conforme lo establecido en el artículo 1073 del Código Judicial "...toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente", razón por la cual debe acogerse el desistimiento presentado por la licenciada MARIA FABREGA.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesto por la licenciada MARIA FABREGA en nombre y representación de CONSTRUCTORA URBANA, S. A.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
SECRETARIO GENERAL

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICDO. JOSE PIO CASTILLERO, EN REPRESENTACION DE LUIS FERNANDO LOPEZ, CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION S/N DE 12 DE MAYO DE 2000, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licdo. JOSE PIO CASTILLERO, en representación de LUIS FERNANDO LOPEZ, contra la Resolución S/N de 12 de mayo de 2000, expedida por el Ministerio de Educación.

Según consta a fojas 1-2 del expediente, el acto impugnado consiste en la Resolución expedida por la Directora General de Educación, mediante la cual se suspende al profesor LUIS FERNANDO LOPEZ del cargo que ocupaba como Director Regional de Educación de Kuna Yala, así como del pago de su salario, mientras se surte una investigación disciplinaria, por supuestas faltas incurridas por el docente, en perjuicio de una estudiante menor de edad.

La Corte procede a examinar el libelo presentado, en vías de determinar si cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión, y en este punto se percata que la iniciativa procesal bajo análisis no puede ser admitida, por las siguientes razones:

Destacamos en principio, la existencia de defectos formales en el libelo de demanda, como lo es el hecho de que la acción esté dirigida contra la señora Ministra de Educación, pese a que el acto impugnado proviene de la Directora General de Educación (cfr. foja 2). En este sentido se observa, que el acto acusado fue confirmado en segunda instancia por la máxima autoridad del Ministerio de Educación, pero la medida administrativa de suspensión del cargo y salarios del profesor LOPEZ, se origina en el acto dictado por ADELA ABAD, quien funge como DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION.

Existe sin embargo, otra razón fundamental que hace inadmisible esta acción de tutela constitucional subjetiva, y que dice relación con la naturaleza del acto demandado.

En efecto, la resolución recurrida mediante Amparo, es un acto eminentemente administrativo, impugnable ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte ha insistido en estos casos, en la operancia del principio de preferencia de la vía contencioso-administrativa sobre la constitucional, y que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2606 numeral 2° del Código Judicial, el agotamiento de todos los medios de impugnación que la ley ha previsto para enervar actos de carácter administrativo, es presupuesto fundamental para la presentación de Amparos de Garantías Constitucionales.

La Corte sostiene el criterio comentado, reiterando que la acción de amparo no debe ser utilizada como un medio impugnativo ordinario tendiente a debatir cuestiones de carácter legal acerca de las decisiones de los funcionarios administrativos, lo que desvirtúa el propósito de esta acción autónoma y extraordinaria, que es el de tutelar directamente los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución Nacional.

Con fundamento en estas razones, debe negarse curso legal a la acción presentada por el educador LUIS FERNANDO LOPEZ.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado JOSE PIO CASTILLERO en representación de LUIS FERNANDO LOPEZ.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO EL LICENCIADO JOSE MIGUEL NAVARRETE, EN REPRESENTACION DE ALTA CORDILLERA S. A., CONTRA EL AUTO PJ-14 NO. 95-2000 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2000, EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NO. 14. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licdo. JOSE MIGUEL NAVARRETE, en representación de la empresa ALTA CORDILLERA S. A., contra el Auto PJ-14 N° 95-2000 de 22 de septiembre de 2000, expedido por la Junta de Conciliación y

Decisión No. 14.

El acto impugnado consiste en el auto para mejor proveer, dictado por la Junta de Conciliación y Decisión No. 14, dentro de un proceso laboral, a fin de practicar una inspección judicial que permita a dicho Tribunal, despejar dudas relacionadas con el pago de recargos al trabajador Eric Vergara, por parte de la empresa ALTA CORDILLERA S. A.

La Corte procede a examinar el libelo, en vías de determinar si cumple con los presupuestos legales que condicionan su admisión, y en este punto se percata que la iniciativa procesal bajo análisis no puede ser admitida, por las siguientes razones:

De principio se advierte, que la acción se encuentra dirigida a todos los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, y no a la Magistrada Presidenta de esta Corporación Judicial, como tiene previsto el artículo 102 del Código Judicial.

Existe sin embargo, una razón más fundamental que hace inadmisible esta acción de tutela constitucional subjetiva, como se explica de seguido.

Ha quedado establecido, que el auto impugnado dicta una medida de mejor proveer, con el propósito de realizar una diligencia judicial que aclare dudas del tribunal, relacionadas con una controversia laboral que se ventila ante dicha instancia.

No obstante, la Corte ha dejado sentado, a través de jurisprudencia reiterada, que los actos en que se ordene la práctica oficiosa de pruebas para coadyuvar en la decisión que ha de emitir un juzgador, no contienen un mandato imperativo, prohibición o abstención, que vulnere las garantías constitucionales de un supuesto afectado. Por tal razón, no son susceptibles de ser impugnados mediante la acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales. (cfr. sentencias de 25 de abril de 1996; 16 de julio de 1998 y de 4 de junio de 1998, entre otras)

Al profundizar sobre la naturaleza jurídica de los autos para mejor proveer, esta Superioridad ha señalado que constituyen una herramienta auxiliar del juzgador, instituida por el derecho procesal moderno, que le permite practicar aquellas diligencias que considere necesarias, por motivaciones de orden público, para el mejor esclarecimiento de los hechos, antes de resolver un asunto sometido a su conocimiento.

En el sentido apuntado se advierte, que el auto de mejor proveer dictado por la Junta de Conciliación y Decisión en este caso, encuentra fundamento legal en los artículos 740 y 969 del Código de Trabajo, según los cuales el juzgador tiene no sólo la facultad, sino el deber, de practicar pruebas de oficio antes de dictar sentencia, a fin de verificar las afirmaciones de las partes, o aclarar puntos oscuros o dudosos del proceso. Esta decisión, a tenor del artículo 969 ibídem, es irrecurrible, pues tiene el propósito de coadyuvar a la comprobación de la verdad material, principio probatorio que orienta el proceso laboral.

Por las consideraciones que anteceden, lo procedente en este caso, es negarle curso legal a la acción instaurada por la empresa ALTA CORDILLERA S. A.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado JOSE MIGUEL NAVARRETE, en representación de la empresa ALTA CORDILLERA S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS **(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS**

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ENDARA, SOLÍS, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ELÍAS APARICIO, CONTRA LA ORDEN DE HACER VERBAL EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA REITERADA MEDIANTE ESCRITO DE 2 DE MAYO DE 2000. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, en representación de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, han presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer, emitida por el Contralor General de la República, consistente en lo transcrito a continuación:

MENCIÓN EXPRESA DE LA ORDEN IMPUGNADA

La orden impugnada es la dictada por el Sr. CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, según el amparista, de forma verbal, el día 28 de abril de 2000 y reiterada mediante la Nota N°246-00-DC/Del. de fecha 2 de mayo de 2000, dirigida al señor Gerente General del Banco Nacional de Panamá, cuyo texto se transcribe a continuación:

"Señor Gerente:

Tengo a bien reiterarle nuestra solicitud verbal realizada el día 28 de abril de 2000, de suspender los pagos de certificados de garantía emitidos a solicitud del Juzgado Tercero de Circuito en base a fallo en favor de Omar Elías Solano.

Nuestra solicitud verbal, que ahora formalizamos, se fundamenta en un Fallo (Entrada Núm.654-98) emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que "DECLARA QUE NO ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN DRP NÚM.348-98, DE 18 DE AGOSTO DE 1998", ordenando el reintegro al Tesoro Nacional de los fondos depositados en la Cuenta BCCI-PANAMÁ, que se encuentra en el Banco Nacional como Depositario Judicial en el proceso de liquidación del Banco BCCI.

El pago de dichos certificados, además de las implicaciones legales, puede afectar una transacción que la Contraloría está próxima a realizar debidamente autorizada por el Consejo de Gabinete.

El fallo de la Corte Suprema fue remitido al Banco Nacional el mismo día viernes 28 para sustentar nuestra solicitud. Tan pronto obtengamos la copia debidamente autenticada le haremos llegar copia.

Agradeciéndole la atención que preste usted a nuestra solicitud, atentamente,

(FDO.)
ALVIN WEEDEN GAMBOA
Controlar General" (f.76)

RESUMEN DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO

Los amparistas se refieren, en primer lugar, al proceso declarativo formulado ante el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial, en representación de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO contra el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. (Sucursal-Panamá), que se encontraba en estado de liquidación. Que la liquidación judicial forzosa estaba sometida ante el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, siendo el liquidador designado el señor EDGARDO S. LASSO VALDÉS.

Señalan los recurrentes que dentro del proceso se dictaron medidas conservatorias y de protección mediante Autos 3547 y 3636 de 21 de noviembre y 2 de diciembre de 1997, respectivamente, y los mismos fueron comunicados al Banco Nacional de Panamá, como tenedor de los fondos del banco en liquidación, así como también al liquidador y al Juez Cuarto de Circuito Civil, como administrador jurisdiccional de la liquidación (hecho sexto).

Con respecto a la medida cautelar adoptada, el Juzgado Cuarto de Circuito Civil, remitió el Oficio No. 918 de 10 de marzo de 1998, por el cual definió ante el Banco Nacional de Panamá, la situación jurídica de la medida adoptada. De igual forma se hace alusión a la comunicación hecha por el Liquidador del banco al Juzgado Tercero del Circuito Civil, (Nota de 12 de diciembre de 1997), por la cual comunicaba que se acataba la orden, y que los fondos requeridos se encontraban a disposición de dicho tribunal.

En el hecho noveno se establece que el proceso entablado contra el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., en liquidación, concluyó con dos sentencias sometidas a dos instancias y con el recurso de casación, por tanto quedó ejecutoriada, debiéndose ser sometida al trámite de ejecución. Que al no haberse realizado el pago dentro del término legal, su representado, OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, solicitó la ejecución de la sentencia, "previa la liquidación general de capital, costas y gastos más los intereses legales causados desde que el pago se hizo exigible, así como las costas de la ejecución" (f.257), ante el Juzgado Tercero de Circuito Civil, elevando este tribunal a la categoría de embargo la medida cautelar de conservación y protección decretada con anterioridad, sobre los fondos que el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. mantiene en el Banco Nacional de Panamá en depósito por razón del proceso de liquidación. (Hecho Undécimo),

Inclusive, que la referida comunicación se hizo al Gerente del Banco Nacional de Panamá, mediante Oficio 456 de 4 de abril de 2000, y éste, a su vez, solicitó al señor Vice-ministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas que indicara si existía alguna objeción a la orden dada por el señor Juez Tercero de Circuito Civil. En el hecho décimo cuarto, se refieren los recurrentes que sobre el requerimiento formulado por el gerente de la institución bancaria, el señor Viceministro de Finanzas contestó mediante Nota N°102-01-300-DVMF, en los siguientes términos:

> "En atención a su Nota No.2000(03000-01) 74 de fecha 18 de abril de 2000, me permito informarle que el Ministerio de Economía y Finanza no tiene objeciones que alegar frente a la medida cautelar decretada por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, la cual le contiene en el Auto No.2773 de fecha 3 de abril de 2000, toda vez que se trata de una orden judicial que debe ser acatada, pues de lo contrario se incurriría en desacato, tal como se advierte en el numeral 9 del artículo 1956 del Código Judicial.
>
> En consecuencia, y como quiera que sobre los fondos retenidos no existe ninguna causa pendiente en esta institución, ni crédito a favor del Tesoro Nacional, se debe dar cumplimiento a la orden judicial antes mencionada." (f. 258).

Que como consecuencia de ello, el gerente del Banco Nacional expidió el Certificado de Garantía No.44903 de fecha 27 de abril de 2000 por la suma de

B/.1.555.304.39, siendo consignado en el tribunal respectivo, y el juzgador (Juez Tercero de Circuito Civil), tomando en cuenta que había transcurrido el término dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ordenó la entrega de dicho certificado a favor de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, como resulta de la diligencia de devolución No.63 de fecha 27 de abril de 2000 (f.259).

En el siguiente hecho (décimo séptimo), manifiestan los amparistas que el referido certificado de garantía fue presentado para su cobro efectivo ante el Banco Nacional de Panamá, y esta institución bancaria procedió al pago respectivo.

Con respecto a lo anterior, señalan que cuando ya se había hecho efectivo el pago del certificado de garantía, mediante la expedición de cheque de gerencia, el señor CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, comunicó el 28 de abril de 2000, de manera verbal y posteriormente por escrito, el 2 de mayo de 2000, expidiendo la orden de "suspender los pagos de certificados de garantía emitidos a solicitud del Juzgado Tercero de Circuito en base a fallo en favor de Omar Elías Soiano" (f.259), afectando con ello, de acuerdo al criterio de los recurrentes, un acto jurisdiccional del Juez que había ordenado el pago como consecuencia de la ejecución de una sentencia firme y ejecutoriada. Se refieren también que la "orden verbal" fue sustentada en la nota a que ya se ha hecho referencia, en el fallo emitido por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual "DECLARA QUE NO ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN NÚM.348-98 DE 18 DE AGOSTO DE 1998", ordenando el reintegro al Tesoro Nacional de los fondos depositados en la Cuenta BCCI-PANAM que se encuentra en el Banco Nacional como Depósito Judicial en el proceso de liquidación del Banco BCCI" (la subraya es nuestra) (f.259).

En el hecho Décimo Primero indican que la resolución dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, a que se hizo referencia anteriormente, no profirió la orden en los términos que se refiere el Contralor General, porque la misma únicamente ordenó al BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. y a MANUEL ANTONIO NORIEGA al reintegro al Tesoro Nacional de las sumas en que éstos habían incurrido en responsabilidad patrimonial, concediendo para ello el término de diez días y ordenando el envió a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, después de vencido el término, para que se iniciara un juicio por jurisdicción coactiva contra los declarados responsables. Pero, que en la referida jurisdicción coactiva no existe la orden de reintegro en los términos expuestos por el señor Contralor de la República, advirtiendo que la situación jurídica es la señalada por el señor Viceministro de Finanza del Ministerio de Economía y Finanzas, en su nota No.102-01-306-DUMF, de 25 de abril del año 2,000, en el sentido de "que sobre los fondos retenidos no existe causa pendiente en esta institución, ni crédito a favor del Tesoro Nacional" (f.260).

Consideran los recurrentes que el funcionario demandado no tiene competencia para suspender un pago ordenado por un Juez de Circuito, dentro del proceso ordinario sobre el cual ya se hizo referencia.

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

Como garantía fundamental supuestamente infringida, se cita el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que dice:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Expresan los recurrentes que la norma transcrita establece la garantía fundamental que "nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme los trámites legales" (f.261) y que tales garantías fueron desconocidas por el servidor público, el señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, al dictar la orden verbal el 28 de abril de 2000 y que luego reiteró mediante Nota 246-00.DC/Del de fecha 2 de mayo de 2000, dirigida al señor Gerente del Banco Nacional de Panamá.

Además que tal orden al ser acatada por dicho funcionario ha surtido efecto contra el derecho reconocido que tiene el señor OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, mediante sentencia ejecutoriada, definitiva, que hace tránsito a cosa juzgada, vulnerando con ello la garantía fundamental de competencia exigida en la norma constitucional y el de conformidad con los trámites legales, ya que considera que el funcionario demandado no tiene la condición de autoridad competente para ordenar la suspensión de un acto procesal que enerve un auto de ejecución dictado por el Juez del conocimiento. Además, señala que la orden impugnada pretendió hacerse valer en afirmaciones que no se hicieron ni están contenidas en la decisión que profirió la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, estima que la norma ha sido infringida en concepto de violación directa por omisión.

Sometida al reparto de rigor, la presente acción fue admitida por el Magistrado Sustanciador mediante providencia de 11 de agosto de 2000, en virtud de que la misma cumplía con las formalidades legales exigidas en los artículos 2610 y 2611 del Código Judicial (f.270). En consecuencia se requirió del funcionario demandado el informe de conducta respectivo.

INFORME DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

Mediante Nota N°528-00-DC/Del. de fecha 16 de agosto de 2000, el señor Contralor General dio contestación al requerimiento de la siguiente manera:

"Señor Magistrado Sustanciador:

En atención a su Oficio de 11 de agosto de 2000, identificado como Nota SGP-1663-2000, a través del cual solicita que nuestro Despacho le envíe la actuación, o en su defecto, el correspondiente Informe de Conducta, el que será útil dentro de la sustanciación de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma Endara, Solís, Delgado y Guevara, en representación de Omar E. Solano A., contra la solicitud verbal emitida por el suscrito el día 28 de abril de 2000 y reiterada mediante escrito de 2 de mayo de 2000, tenemos a bien expresarle lo siguiente:

En el mes de junio de 1995, la Contraloría General de la República, mediante Resolución No.176-95, ordenó la confección de un informe de Auditoría en torno a las cuentas bancarias de Manuel Antonio Noriega Moreno, existentes tanto en la República de Panamá como en el extranjero. Como consecuencia de lo anterior en febrero de 1998, la Contraloría General logra producir un Informe de Antecedentes identificado como el Núm.12-04-98/NAG-DEAE, documento donde se señala que Manuel A. Noriega y el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd., en lo sucesivo BCCI, Sucursal de Panamá, son partícipes en el desvío de fondos pertenecientes al Erario Público panameño.

Así las cosas y luego de que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) aprehendiera el conocimiento de este expediente, mediante Resolución Núm.93-98, esta corporación de responsabilidad patrimonial ordena la cautelación de los fondos depositados a nombre del BCCI en el Banco Nacional de Panamá (BNP), en su calidad de depositario judicial, como consecuencia de un proceso de liquidación judicial seguido a este Banco ante el Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En agosto de 1998 y mediante la Resolución Núm.348-98 la DRP ordenó el REINTEGRO al Tesoro Nacional de los fondos cautelados al BCCI en el BNP, medida ante la cual los afectados interpusieron sendos Recursos de Reconsideración ante el colegiado administrativo de responsabilidad patrimonial, dictándose así la Resolución Núm.368-98 de 1 de septiembre de ese año y a través de la cual confirma la

decisión inicial, y concediéndo al recurrente diez (10) días para cumplir con la orden dictada.

Al no cumplirse lo ordenado, la DRP procede a solicitarle a la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas a que proceda a hacer efectivo el Reintegro mediante formal Proceso Ejecutivo de Jurisdicción Coactiva, cosa que inmediatamente procede a realizarse.

Ante tal eventualidad, en enero de 1999 Jacobo Elías Palis Jusef, secuestrador de fondos del BCCI, interpuso Incidente de Levantamiento de Secuestro e Incidente de Rescisión de Secuestro, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le seguía el Ministerio de Economía y Finanzas al BCCI-Panamá. Dicho expediente fue remitido a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y mediante Fallo de 26 de febrero de 1999 se rechazan por extemporáneos. Posteriormente y dentro del mismo proceso de cobro coactivo, en marzo del mismo año, el actual demandante interpuso formal incidente para rescindir el DEPOSITO, lo cual está por decidirse en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

En marzo de 1999, la Administración Regional de Ingresos, en calidad de Juzgado Ejecutor, mediante Resolución No.213-983, ordena al BNP que en su calidad de Depositario Judicial, REINTEGRE al TESORO NACIONAL la suma de B/.4,992, 784.32 y, además, le ordena mantener cautelado el remanente de B/.2,510.648.72 a favor de la Dirección General de Ingresos le fue notificada al Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y al Liquidador del BCCI.

Para finales de septiembre de 1999, la Contraloría General de la República y los Liquidadores Judiciales del BCCI Internacional acuerdan los términos y procedimientos para llegar a una transacción que ponga fin a las reclamaciones que Panamá mantiene con el BCCI en Panamá y en el extranjero, procediéndose a tramitar las aprobaciones constitucionales y legales que cada parte requería para perfeccionar dicha transacción. En dicho Acuerdo se reconocía que sobre los fondos cautelados por la DRP en Panamá existían dos reclamaciones por terceros que estaban pendientes de decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, y que en el evento que esa alta corporación ordenase, con fundamento a la ley, el pago a los amparistas la Contraloría tendría garantizado el cobro de las sumas involucradas si así resultase de la decisión impartida.

La Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema mediante Fallo de 11 de febrero de 2000 reconoce a favor de Omar E. Solano A. daños y perjuicios por el orden de B/.1,431,189.59 y en contra del BCCI-Panamá. El día 2 de marzo de 2000, el Liquidador del BCCI, Edgardo Lasso Valdés, solicita al Gerente del Banco Nacional de Panamá que con fundamento en el Fallo mencionado de 11 de febrero de 2000 se expida Certificado de Garantía por la suma de B/.1,431,1899.59 (sic) con cargo a la cuenta del BCCI-Panamá en liquidación.

En marzo 21 del año en curso y mediante Nota 2000(03000-01)61, el Banco Nacional le indica al Liquidador que no puede cumplir dicha solicitud en razón de que no existen suficientes fondos libres, toda vez que de los fondos en dicha cuenta aparece cautelados a favor de la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas la suma de B7.2,510,748.72, tal como fue ordenado por la Administradora Regional de Ingresos en función de Juez Ejecutora, mediante la Resolución 213-983 de 4 de marzo de 1999 y corregida solamente por razones aritméticas, mediante la Resolución Núm.213-2304 de 11 de mayo de 1999.

> El día 26 de abril de 2000, el Consejo de Gabinete, previa opinión favorable del Procurador General de la Nación, autorizó a nuestro Despacho a realizar la Transacción con los Liquidadores Judiciales del BCCI. Coincidencialmente, el día 27 de abril el Banco Nacional, directamente y sin participación del Liquidador, le hace entrega física al Juzgado Tercero de Circuito Civil, donde está radicado el Caso Solano - BCCI/Panamá del Certificado de Garantía por la suma de B/.1,431,189.59, medida del Banco Nacional que inmediatamente observada y cuestionada por esta Contraloría General.
>
> Al día siguiente, es decir, el 28 de abril de 2000, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, bajo la ponencia del Magistrado Adán Arnulfo Arjona determinó que la Resolución Núm.348-98 de 18 de agosto de 1998, dictada por la DRP y donde se ordenaba el Reintegro al Tesoro Nacional de los fondos cautelados al BCCI-Panamá y a Manuel A, Noriega, NO ES ILEGAL, negando las demás declaraciones pedidas. Es en esta fecha cuando verbalmente indicamos al Gerente del Banco Nacional lo inapropiado del pago por el evidente conflicto de jurisdicción al estar los fondos con que se hacían el pago de los cheques objetados sujetos a cautelación por la Contraloría y a secuestro por el Juzgado Cuarto de Circuito dentro de el (sic) proceso civil del amparista.
>
> Adjuntamos documentos sustentadores de lo expresado en este Informe y esperamos haber cumplido con los parámetros del Artículo 2611 del Código Judicial.” (Fs.272-275)

De las pruebas más relevantes aportadas por el funcionario demandado, podemos señalar el Oficio No.252-DRP-C-50 de 5 de marzo de 1998, (f.280), por la cual la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ORDENA al BANCO NACIONAL la cautelación de fondos del BCCI, por la suma de $7,603.606.34, como consecuencia de la resolución dictada por ese despacho, el 4 de marzo de 1998. (f.281) De igual forma, aparecen las comunicaciones referentes a la cautelación antes indicada, al Juzgado Cuarto de Circuito, donde se tramitaba la liquidación del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS), PANAM (BCCI-PANAM), de fecha 9 de marzo de 1998 (f.283); al Liquidador Judicial del BCCI, el día 10 de marzo de 1998 (f.287). A foja 291 aparece la solicitud de la DRP al Banco Nacional, a objeto de que certifique sobre la recepción de oficios de cautelación que hubiere emitido el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Civil. Dando respuesta dicha institución bancaria, mediante Nota 98 (03000-01)25 de 13 de abril de 1998, por la cual certifican que en la "Gerencia de Operaciones ni en ningún libro del Banco Nacional de Panamá, hay registros de cautelación a favor del Juzgado Tercero del Circuito..." (f.1295 y ss.). Aclarada esta situación, la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL dirigió el oficio 543-DRP el 24 de abril de 1998 al Banco Nacional, en que expresan que "queda entendido para este Tribunal que se encuentran a su disposición los fondos depositados en el Banco Nacional a nombre del BCCI, hasta la concurrencia de B/.7,603.606.34..." (f.298).

Se aportó también al informe del funcionario acusado, la opinión vertida por la señora PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, quien consideró, entre otras cosas, que la existencia de un proceso de liquidación y disolución ordenada por una autoridad jurisdiccional, no afecta el valor de la medida cautelar decretada por la DRP "... Lo anterior ocurre sin perjuicio de que las medidas cautelares registradas por el Juez de la Liquidación, sigan las suerte de ese proceso (f.396).

Por ultimo, se aprecia, la resolución dictada por la Administradora Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en funciones de Juez Ejecutora, por la cual se corrige un error aritmético en que incurrió esa Administración al dictar la Resolución N°213-983 de 4 de marzo de 1999, sobre la suma correcta de los fondos cautelados, esto es, SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SEIS BALBOAS CON SETENTA Y CUATRO CENTÉSIMOS ($7,603.606.74).

ALEGATO DE LOS AMPARISTAS

Consideran los amparistas resaltar aspectos jurídicos que sirven de antecedentes a la controversia constitucional. Señalan que OMAR ELÍAS SOLANO es cesionario, como ha sido reconocido en la sentencia ejecutoriada, de los derechos que tenía JERRY LEE HARVEY contra el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI). El crédito parcial cedido tuvo su origen en unos depósitos a plazo fijo que mantenía el cedente en dicha entidad bancaria, dentro del proceso de liquidación y con preferencia a cualquier otro acreedor que no fuera depositante.

En el punto 2 se refiere a que el crédito del Fisco Nacional, surge por razón de un proceso de responsabilidad patrimonial contra el banco en liquidación (BCCI), y, que en esta circunstancia, sólo pueden hacerse efectivo contra el patrimonio del banco, una vez se haya cumplido con el pago de todos los depositantes y que, en segundo término, de acuerdo al criterio del amparista sería la responsabilidad del banco frente a los acreedores.

En cuanto a la resolución N°348-98 dictada en el mes de agosto de 1998, por la DRP, señalan que dicha resolución no ordenó el reintegro de los fondos cautelados al BCCI en el Banco Nacional, ya que la misma se limitó a la orden dirigida a MANUEL ANTONIO NORIEGA y al BCCI que reintegraran al Tesoro Nacional, la suma que se determinó como sustraída, concediéndose en la misma, el término de diez (10) días para esos efectos, disponiendo la remisión del expediente a la Dirección General de Ingresos para que se iniciara el juicio por Jurisdicción Coactiva, haciendo la aclaración que el mismo no se ha producido, "hasta hoy, el auto de embargo, ni la orden de entrega que son trámites debidos y necesario en este tipo de proceso para que surja la obligación de reintegrar al Tesoro Nacional, por vía de ejecución, los fondos que se dicen cautelados".

En cuanto a la afirmación del Contralor de que mediante Resolución N°93-98 la DRP ordenó la cautelación de los fondos que tenía el BCCI en el Banco Nacional de Panamá, estima el recurrente que dicho funcionario no aclaró que la orden fue comunicada mediante el Oficio N°251-DRP-C-50 y que, a su vez, esa entidad bancaria remitió al señor Juez Cuarto de Circuito, mediante Nota 08(03000-01)15 de fecha 10 de marzo de 1998, y que dicha comunicación diera lugar a que el Juez dentro de la liquidación, de esa cautelación, al descartar la existencia de conflicto, expresó: "no observamos ningún conflicto de jurisdicción", señalando que se trataba (la cautela decretada por DRP) de una tercera acción de cautelación, que así fue registrada, como resulta del Oficio N°918 de 10 de marzo de 1998 dirigida por el Juez Cuarto de Circuito Civil al Gerente del Banco Nacional.

Con relación a la Resolución N°213-983 de marzo de 1999, dictada por el Administrador Regional de Ingresos, en calidad de Juzgado Ejecutor, por la cual se ordena al Banco Nacional, como depositario judicial, reintegre al Tesoro Nacional la suma de B/.4,992.784.22, y que fuere notificada formalmente al Juzgado Cuarto de Circuito y al Liquidador del BCCI, consideran los recurrentes que la misma no fue producto de un auto de embargo, que obligatoriamente debe dictarse en todo juicio ejecutivo, para que luego proceda la entrega. Además, que ello no afectaba las cautelaciones previas que el Juez de la liquidación había anotado. El crédito cedido parcialmente a OMAR ELÍAS SOLANO tenía el privilegio de preferencia en relación con otros créditos que no constituían depósitos bancarios, por lo que no podían ser objeto de cautelación como si se tratara del patrimonio del BCCI.

En el punto 4 se hace referencia a la transacción acordada entre la Contraloría de la República y los Liquidadores Judiciales del BCCI en Panamá y en el extranjero, y que en dicho acuerdo se reconocía la existencia de dos reclamaciones sobre los fondos cautelados por la DRP, cuya decisión estaba pendiente en la Corte Suprema de Justicia y, que en el evento de que se ordenase el pago a los amparistas, la Contraloría tendría garantizado el cobro de las sumas involucradas. Resaltan los amparistas que una de las reclamaciones corresponde a SOLANO, y que la misma no recaía sobre fondos cautelados por la

DRP, debido a que la acción iniciada contra el BCCI, como reclamante del depósito bancario de JERRY LEE HARVEY, tenía su propia garantía cautelar, la dictada por el Juez Tercero de Circuito que, en el orden anotado por el Juez de la Liquidación, era una segunda cautelación, siendo que la cautelación a que se refiere el Contralor General "es la calificada como tercera cautelación sobre los fondos del BCCI en el Banco Nacional de Panamá" (pág.5 del escrito).

También argumentan que OMAR ELÍAS SOLANO logró sentencia favorable, definitiva y ejecutoriada, que se constituyó en un mandamiento de pago dentro de un proceso de ejecución y "la cautela que en este proceso se decretó le servía de garantía del resultado perseguido y reconocido" (pág.5 del escrito).

Muestran su disconformidad con lo expuesto por el señor CONTRALOR GENERAL en cuanto a que existen cheques sujetos a cautelación de la Contraloría, ya que ello debió haberse acreditado. De igual forma, señalan que no existen cheques sujetos a secuestro por el Juzgado Cuarto de Circuito dentro del proceso civil del amparista. Aclara que el proceso civil de OMAR ELÍAS SOLANO se surtió ante el Juzgado Tercero de Circuito y el Juzgado Cuarto de Circuito de la misma jurisdicción. Más adelante se refiere a que fue el tribunal de la liquidación que, por esa razón, fijó el orden de las cautelas existentes en su Oficio No. 918 de fecha 10 de marzo de 1998, dirigido al Banco Nacional de Panamá. Consideran que no existe ninguna cautelación sobre el Certificado de Garantía ni sobre los cheques de gerencia que haya sido decretada por la CONTRALORÍA GENERAL. Además, que la medida cautelar a que se refiere el CONTRALOR es aquella que se decretó mediante resolución DRP-N°93-98, de 4 de marzo de 1998 y, que, a su vez, el Banco Nacional remitió mediante su Nota 08(03000-01)15 de 10 de marzo de 1998 al señor JUEZ CUARTO DE CIRCUITO CIVIL, como administrador judicial de la liquidación.

Estima, por tanto, que no existe conflicto de jurisdicción, debido a que la medida cautelar fue decretada por el JUEZ TERCERO DE CIRCUITO CIVIL, en el proceso seguido por OMAR ELÍAS SOLANO contra el BCCI, es anterior porque fue decretada mediante los Autos 3547 de 21 de noviembre de 1997 y ampliado por el Auto 3636 de 2 de diciembre de 1997, comunicados al BANCO con los Oficios 2802 de 21 de noviembre de 1997 y 2867 de 2 de diciembre de 1997, recibidos en el banco en las fechas respectivas.

Indican que la relación cronológica cómo se dieron las circunstancias relativas al orden de las cautelaciones, está contenida en la Nota 2000(03000-01)74 de 18 de abril de 2000 que el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, remitió al Vice-Ministro de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la contestación del último nombrado.

Por último, anotan que la medida cautelar a favor de SOLANO es anterior, además, al informe de Antecedentes N°12-04-98/NAG-DEAE, en que se señala que MANUEL ANTONIO NORIEGA y el BCCI-PANAMA, son partícipes en el envío de fondos pertenecientes al Erario Público, y con el que se inicia el proceso por Responsabilidad Patrimonial.

POSICIÓN DEL PLENO

Como se señaló en la fundamentación de la presente acción, la parte accionante indicó como precepto constitucional violado, el artículo 32, el cual establece la garantía procesal del debido proceso, integrada por tres derechos instrumentales fundamentales, a saber:

A. Derecho a ser juzgado por autoridad competente.
B. Derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causal penal, policiva y disciplinaria; y
C. Derecho a ser juzgado conforme a los ordenamientos y trámites legales.

La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32, es una garantía de los derechos fundamentales que ha sido

mantenida en todas nuestras Cartas Constitucionales, siendo objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno, y ha experimentado un importante avance garantista al serlo de una garantía estrictamente penal, hacia una garantía de debido juzgamiento en todo proceso, el administrativo incluido. Consiste, como lo ha puntualizado el MAGISTRADO ARTURO HOYOS, en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (ARTURO, Hoyos. "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54).

En cuanto a esta materia, valga la pena aportar fallo dictado por esta Corporación de Justicia, en el sentido de que:

> "El contenido del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos a obtener la tutela jurisdiccional, de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, utilizar los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión."
>
> (R.J. Enero, 1999, p.33.)

En el caso en estudio, conviene determinar si los conflictos surgidos sobre las medidas cautelares dictadas, tanto por un Tribunal de la jurisdicción civil, así como también por un tribunal administrativo, esta es, la Dirección de Recuperación Patrimonial, adscrita a la Contraloría General de la República, tendrían prelación, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.

Los hoy amparistas, promovieron, dentro de un proceso ordinario, medidas conservatorias y de protección, en representación de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO y en contra del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., Sucursal Panamá (en liquidación), ante el Juzgado Tercero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y dicho tribunal, previa admisión de la caución, decretó la medida solicitada, mediante Auto No. 3547 de 21 de noviembre de 1997 (f.98); siendo ampliado mediante Auto N°3636 de 2 de diciembre de 1997 (f.99).

En cuanto a la medida cautelar decretada por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, la misma se encuentra en la Resolución DRP-93-98 de 4 de marzo de 1998, cuya parte resolutiva consta de lo siguiente;

> "Primero: ORDENAR la cautelación y consecuente fuera de comercio y a disposición de este Tribunal, de los fondos depositados en el Banco Nacional de Panamá a nombre del Bank Of Credit and Commerce International (Overseas), de Panamá (BCCI-Panamá), cuenta N°231-04, Depósitos a Plazo de Bancos Locales, hasta la concurrencia de siete

millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7.603.606.34).

Segundo: OFICIAR al Banco Nacional de Panamá la decisión adoptada por este Tribunal, mediante la cual se pone fuera del comercio y a órdenes de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, de los dineros depositados en dicha institución bancaria a nombre de Bank Of Credit and Commerce International (Overseas) (BCCI-Panamá), hasta la concurrencia de siete millones seiscientos tres mil seiscientos seis balboas con treinta y cuatro centésimos (B/.7,603.606.34).

Derecho: Artículo 11 del Decreto N° 65 de 23 de marzo de 1990 ..." (fs.281-284).

Es obvio que, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción administrativa, están previstas las medidas cautelares, y en ambas jurisdicciones se cumplieron las fases procesales, como fueran expuestas ampliamente, por un lado, en las argumentaciones en que se fundamentó la acción constitucional; así como también en el informe rendido por el señor Contralor de la República, y sobre las cuales aportaron las pruebas respectivas. Por tanto, es menester establecer las medidas cautelares decretadas en ambas jurisdicciones, en el orden cronológico que aparecen en el expediente contentivo de la acción constitucional. Así tenemos que el Banco Nacional de Panamá, como custodio o garante de los fondos del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD., cuya liquidación se tramita ante el Juzgado Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, recibió el Oficio N°2802 de 21 de noviembre de 1997, contentivo del Auto 3547; así como también el Oficio N°2932 de 9 de diciembre de 1997, que contenía el Auto 3636, ambos referentes a la medida cautelar decretada por el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, obrantes a fojas 100 y 107, respectivamente.

Adicional a ello, constan las comunicaciones realizadas por el Juzgado Tercero de Circuito Civil, sobre dichas medidas, tanto al Juzgado Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial, donde se tramita la liquidación del BANK OF CREDIT & COMMERCE INTERNATIONAL LTD. DE PANAM (BCCI); así como también a la Comisión Bancaria y al Liquidador, señor EDGARDO LASSO VALDÉS (ver fojas de 101 a 106 del expediente).

La resolución parcialmente transcrita, fue remitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General al Gerente del Banco Nacional, Licenciado JOSEF ANTONIO DE LA OSSA, mediante Oficio N°251-DRP-C-50, el 9 de marzo de 1998 (f.280). Así como también, al Juzgado Cuarto de Circuito de Panamá, Ramo Civil, donde se ventila la intervención del banco demandado, mediante Oficio DRP N°254-C-50 (f.285), de fecha 9 de marzo de 1998 y, al Liquidador Judicial del mismo, señor EDGARDO LASSO VALDÉS, por medio de Oficio DRP N°263-C-50, de fecha 10 de marzo de 1998.

Posteriormente, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General, dictó la Resolución DRP N°348-98, de 18 de agosto de 1998, por la cual resuelve ORDENAR a MANUEL ANTONIO NORIEGA y al BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. PANAMA, a reintegrar al Tesoro Nacional la suma de B/.7,603.606.34, "por razón de la lesión evidente ocasionada al patrimonio del Estado, por la sustracción indebida de fondos públicos procedentes de las cuentas del Banco Nacional de Panamá identificados como N°04-69-0303-1 Fondo de Operaciones de las Guardia Nacional de Panamá (Fuerzas de Defensa), N°04-82-0092-3 y N° 04-82-0093-1 del Fondo Especial y del Fondo Rotativo IPAT-BID del Ministerio de la Presidencia, respectivamente; por el pago de los gastos de financiamiento ocasionado por las transferencias realizadas a las cuentas de Manuel Antonio Noriega y por el pago de los préstamos otorgados por el Bank Of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Panamá las Fuerzas de Defensa, cuyos montos no ingresaron a las cuentas de la institución, según consta en el Informe de Antecedentes N°12-04.98/DNAG-DEAE..." (f.56)

La firma forense ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el fallo antes indicado y, mediante fallo de 29 de abril de 2000, la Corte Suprema de Justicia -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, "DECLARA QUE NO ES ILEGAL LA RESOLUCIÓN DRP No.348-98, de 18 DE 18 DE AGOSTO DE 1998, dictada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, y NIEGA las otras declaraciones pedidas". Observa el PLENO que en base a este fallo, es que el funcionario acusado sustentó la ORDEN DE HACER que se impugna mediante esta acción constitucional.

El Pleno observa de forma diáfana, que en el orden cronológico en que se dictaron las medidas cautelares, y que ingresaron a la institución bancaria, contra los fondos del BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS), LTD. DE PANAMA (BCCI-PANAMA), figura en primer lugar, la decretada por el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil. Inclusive, aprecia el PLENO la Sentencia N°.55 de 15 de septiembre de 1998, dictada por el Juez Tercero del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial, por la cual se CONDENA al BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LIMITED (en liquidación) a pagar al licenciado OMAR ELÍAS SOLANO, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS (B/.1,313.652.20), en concepto de capital, más intereses legales tasados en la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE BALBOAS CON OCHENTA Y TRES CENTÉSIMOS (B/.197.047.83), y las costas correspondientes al trabajo en derecho, fijadas en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS CON NOVENTA Y TRES CENTÉSIMOS (B/,181.637.93) (fs,108-171).

En grado de apelación, fue reformado dicho fallo por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 30 de julio de 1999, en cuanto a la eliminación de la condena al pago de intereses que había proferido el Juez de la causa y, en consecuencia, fijó dicho despacho las costas de la primera instancia en la suma de CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.116.637.39), CONFIRMANDOLA en todo lo demás. (fs.172-228). Contra este fallo, la parte demandada, recurrió en casación, ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y este despacho NO CASO la sentencia recurrida, en fallo dictado el 11 de febrero de 2000 (fs.229-251).

La fase de ejecución de la sentencia, fue resuelta por el Juzgador de primera instancia, mediante Auto N°2773 de 3 de abril de 2000, elevando a la categoría de embargo la medida de conservación y protección en general decretada mediante Autos N°3547 de 21 de noviembre de 1997 y 3636 de 2 de diciembre de 1997, sobre los fondos que BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. (en liquidación), mantenga en el BANCO NACIONAL DE PANAMA, en depósito por razón de la liquidación, hasta la concurrencia de la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO BALBOAS CON TREINTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.1,555.304.39), en concepto de capital, costas y gastos e intereses legales a la fecha. Librando el juzgador oficio al señor Juez Cuarto del Circuito de lo Civil (f.14); al Liquidador del Banco (f.12); al Director General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (f.16), y al Banco Nacional de Panamá (f.18).

Estima el PLENO que le asiste razón al amparista, en el sentido de que su representado OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, le ha sido reconocido una cesión de crédito sobre un depósito que mantenía el cedente JERRY LEE HARVEY en el BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (OVERSEAS) LTD. (BCCI-PANAM), ante la jurisdicción civil pertinente que, inclusive, culminó con una sentencia dictada por esta Corporación de Justicia, en favor del demandante.

Por otra parte, la resolución dictada por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, tiene su génesis en un proceso de responsabilidad patrimonial contra un banco en liquidación. Al respecto, valga la pena anotar el criterio de la Procuraduría de la Administración, obrante de fojas 300 a 306, en respuesta a consulta que le formulara el BANCO NACIONAL DE PANAMA, al considerar este último que ha surgido un "conflicto de jurisdicción" al encontrarse el BCCI bajo proceso de Liquidación

Judicial y sobrevenir contra sus fondos una medida cautelar ordenada por la D.R.P.

Advierte el PLENO que la señora Procuradora de la Administración, señala que, de conformidad con el artículo 90 del Decreto de Gabinete 238 de 1970, "no impide que contra los bienes del Banco se puedan practicar secuestros, embargos o retenciones judiciales, como en efecto si lo prohíbe cuando el Banco se encuentre intervenido o en proceso de organización" (f.303).

A continuación se refiere a los dos secuestros ordenados por el Juzgado Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil (Proceso de JACOBO ELÍAS PALAIS JUSEF contra BCCI, por un valor de B/1,537.576.44 y proceso de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO contra BCCI por valor de B/.1,537.576.44), así como también se refiere al proceso patrimonial, por el cual se ordenó la cautelación de la suma de B/.7.603.606.34 contra los fondos del BCCI. Sobre esta última finaliza el criterio de la señora PROCURADORA, de la siguiente manera:

> "Resulta por tanto, insoslayable el hecho de que frente a cualquier otra medida cautelar, sólo la ordenada por la D.R.P., ha sido materializada, desde el momento en que el Banco estatal como depositario de los fondos del BCCI, recibe el Oficio y cumple la orden que en él se imparte. Lo anterior, ocurren sin perjuicio de que las medidas cautelares registradas por el Juez de la Liquidación, sigan la suerte de ese proceso" (f.306).

En el negocio en estudio, el ordenamiento jurídico consagra las medidas cautelares solicitadas, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción administrativa, y sobre las cuales existe un deber de acatar dichas órdenes, en primer lugar, en el juzgado donde se tramita el proceso de liquidación de la demandada, así como también por parte del liquidador judicial de la misma, y el BANCO NACIONAL DE PANAMA, donde se encuentran depositados los fondos del banco intervenido. Pero, al amparo de la ley, dichas cautelaciones deberán ser registradas en el orden cronológico en que las mismas hayan sido ordenadas por las autoridades competentes. En el caso en estudio, el PLENO ha podido determinar que las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, RAMO CIVIL, fueron comunicadas a las instancias pertinentes, antes de que se dictara la orden de cautelación ordenada por la DRP y comunicada al depositario.

No obstante, al haberse analizado la secuencia cronológica de los oficios contentivos de las medidas cautelares, decretadas, tanto en la jurisdicción civil como administrativa, surge una duda en el Pleno de esta Corporación de Justicia por cuanto existe en el expediente la solicitud realizada por la D.R.P. al BANCO NACIONAL DE PANAMA mediante Oficio No.416-DRP-C-50 de 7 de abril de 1998, a objeto que esta entidad bancaria certifique sobre la recepción de oficios de cautelación que hubiere emitido el JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO DE PANAMA, RAMO CIVIL. (F.291).

Por su parte, el BANCO NACIONAL DE PANAMA dio respuesta mediante Nota 98(03000-01)25 de 13 de abril de 1998, en el sentido de que: "en la Gerencia de Operaciones ni en ningún libro del Banco Nacional de Panamá, hay registros de cautelación a favor del Juzgado Tercero..." (Fs.295 y s.s.).

En virtud de esta contestación, la D.R.P. remite un nuevo oficio distinguido con el N°.543-DRP del 24 de abril de 1998, en el sentido de que queda entendido para la D.R.P. que se encuentran a su disposición los fondos depositados en el BANCO NACIONAL a nombre del BCCI, hasta la concurrencia de B/.7,603,606.34.

Es por lo anterior, que el Magistrado Sustanciador, estimó conveniente solicitar al BANCO NACIONAL DE PANAMA, por intermedio de la Secretaría General, informe sobre la recepción de oficios de cautelación emitidos por el JUZGADO TERCERO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL De igual forma, la recepción de los oficios

remitidos por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, indicando fecha y número de los respectivos oficios, así como la contestación de los mismos. En este sentido, se remitió el Oficio N°SGP-1814-2000, de 6 de septiembre de 2000, y recibido en dicha institución bancaria, el 7 de septiembre del año en curso.

En respuesta recibida por esta Corporación de Justicia, el 18 de septiembre de 2000, el BANCO NACIONAL DE PANAMA, remitió la Nota N° 00(03000-01)124, el cual pasamos a transcribir textualmente:

"12 de septiembre de 2000
00(03000-01)124

Licenciada
YANIXA Y. YUEN
Subsecretaria General de la
Corte Suprema de Justicia
Órgano Judicial
Ancón, Rep. de Panamá

Estimada Licda. Yuen:

Debidamente autorizados por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, damos respuesta a la solicitud, que por su intermedio nos solicitó el Magistrado Sustanciador Lic. Rogelio Fábrega Z., en su Oficio SGP-1814-2000 del 6 de septiembre de 2000, en el que se nos solicita le certifiquemos la fecha y número de los oficios remitidos por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Civil, y por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, con su respectiva contestación. A tales propósitos, a continuación certificamos que en el Banco Nacional de Panamá se han recibido los siguientes Oficios:

MEDIDAS CAUTELARES RECIBIDAS EN EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ

Por instrucciones del Sr. Juez Cuarto del primer Circuito Judicial de Panamá, que conoce de la liquidación bancaria del BCCI y que se produce a consecuencia de la comunicación que le hiciera el Banco Nacional de Panamá sobre la medida cautelar decretada por la DRP, mediante el Oficio 251-DRP-C-50 de fecha 5 de marzo de 1998, esta institución bancaria tiene recepcionada contra los fondos que el (sic) mantiene el BCCI en liquidación, las siguientes medidas cautelares, en su orden:

Primera: La decretada por el Juzgado Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso que Omar Elías Solano Aparicio interpuso contra el BCCI, en liquidación.

Segunda: La decretada por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial contra el BCCI, el liquidación, dentro del proceso de responsabilidad patrimonial que le siguió a este Banco.

Tercera: Además por información del Juzgado Cuarto tiene conocimiento de la medida cautelar de Jacobo Elías Palais Jusef.

MEDIDA CAUTELAR POR EL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA:

1° Oficio No.2802 del 21 de noviembre y No.2867 del 2 de diciembre de 1997, por medio del cual se nos adjunta los autos No.3547 y No.3636, mediante los cuales dicho Tribunal dicta medidas cautelar (sic) de conservación y protección en general a petición de Omar Elías Solano Aparicio en contra de Bank of Credit and Commerce

International, (Overseas), Ltd. (En adelante BCCI), recibida el 21 de noviembre de 1997.

2° Oficio No.2932 de 9 de diciembre de 1997, por medio del cual se nos adjunta el Auto No.3547, del 21 de noviembre de 1997 y No.3636 de 2 de diciembre de 1997 por la cual se decreta medida cautelar de conservación y protección en general a petición de Omar Elías Solano Aparicio y en contra del BCCI.

3° Oficio No.918 de 10 de marzo de 1998 recibida en el Banco Nacional el 16 de marzo de 1998, en el cual el Juez Cuarto del Primer Circuito Judicial nos informa que el Juez Tercero del Circuito nos comunica en respuesta a información que le proporcionáramos sobre cautelación de la DRP en Oficio 251-DRP-C50 de 5 de marzo de 1998 que el Juez tercero del Circuito Judicial Ramo Civil, ha cautelado dentro de la cuenta perteneciente al BCCI en liquidación la suma de B/.973,172.28, correspondiente al proceso instaurado por Jacobo Elías Palais Jusef vs BCCI . Indicándonos además en la misma nota que habían efectuado los registros pertinentes con respecto a la nota que a esa fecha enviaba la DRP.

4° Oficio N° 2949 de 18 de septiembre de 1998, por medio de la cual en reiteración nos remiten los Autos N°3547 y N°3636, por medio de los cuales se decreta medida cautelar de conservación y protección en general a petición de Omar E. Solano en contra del BCCI.

5° Oficio N° 454 de 4 de abril de 2000, recibido en el Banco Nacional de Panamá 7 de abril de 2000, mediante la cual el Juzgado Tercero nos comunica que ha elevado a la categoría de embargo la medida de conservación en general que fue decretado mediante Autos N° 3547 de 21 de noviembre de 1997 y N° 3636 de 2 de diciembre de 1997, dentro del proceso ordinario interpuesto Omar Elías Solano en contra del BCCI.

6° Oficio N° 457 del 4 de abril del 2000, donde se nos reiteran (sic) el Oficio a que se refiere el numeral anterior.

RESPUESTAS DEL BNP AL JUZGADO TERCERO

1° Nota No. 97(22200-01) 2101 del 11 de diciembre de 1997, mediante la cual el General Ejecutivo de la Gerencia de Operaciones del Banco, responde que la cuenta actual está a nombre del BCCI en liquidación, por lo que no podemos acatar las instrucciones del Juzgado Tercero. No obstante, examinar numeral 3° de la página anterior.

2° Nota N° 97 (22200-01) 2125 del 17 de diciembre de 1997, del Gerente Ejecutivo de Operaciones, por medio de la cual se contesta el Oficio N°2932, donde se le indica que la cuenta corriente actual está a nombre del Bank of Credit and Commerce International, en liquidación, según instrucciones del Juzgado Cuarto Civil del Primer Circuito Judicial, y que por tal razón sentía informarle que no podría acatar sus instrucciones en el Oficio 2932 antes mencionado. No obstante, examinar numeral 3° de la página anterior.

3° Nota N°99(03000-01)043 del 23 de marzo de 1999, por medio de la cual se da respuesta al Oficio 750 de 16 de marzo de 1999, por medio de la cual el Juzgado Cuarto informa al Gerente General que en el BNP que (sic) el Juez Tercero del Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil ha cautelado dentro de la cuenta perteneciente al BCCI en liquidación con la suma de B/.973,172.28, correspondiente a proceso de Jacobo Elias Palais J: Vs BCCI y B/.1,537,576.44 en el proceso instaurado por Omar Elias Solano Aparicio Vs BCCI y se explicaban la razones por las cuales el Banco había atendido la medida cautelar de la DRP.

4° Nota N° 2000(03000-01)77 de 27 de abril de 2000. Por medio de la cual se le informa al Juzgado tercero que en virtud de respuesta recibida del Viceministro de Finanzas en la que se indica que sobre las sumas retenidas por el Juzgado Tercero no existen ninguna causa pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas ni crédito a favor del Tesoro Nacional, por lo que el Banco debería cumplir con la orden que decretó el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial.

5° Nota N° 2000(03000-01)80 de 27 de abril de 2000, mediante la cual el Gerente General remite al Juzgado Tercero del Circuito el certificado de Garantía n° 44903 fechado 27 de abril de 2000, por la suma de B/.1,555.304.39 para ser consignado en el proceso ordinario que Omar Elías Solano Aparicio Vs BCCI.

MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA DRP

1° Mediante nota número 251-DRP- C-50, fechada 5 de marzo de 1998, recibida en la Gerencia de Operaciones del Banco Nacional de Panamá, el 6 de marzo de 1998, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, comunicó medida cautelar sobre los fondos depositados por el Bank of Credit and Commerce International (Overseas) L.T.D. Panamá (B.C.C.I. Panamá), cuenta número 231-04, hasta la concurrencia de B/.7,603,606.34.

La mencionada nota fue recibida primero, en el Departamento de Administración de Documentos del Banco, el 5 de marzo de 1998 y posteriormente referida el 6 de marzo de 1998 a la Gerencia de Operaciones del Banco.

2° Mediante Oficio N°253-DRP-C-50 del 9 de marzo de 1998, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, complementó el Oficio a que se refiere el Numeral 1, instruyendo al Banco a que la referida cuenta sea mantenida dentro del régimen de generación de intereses acostrumbado.

3° Mediante Oficio N° 416-DRP-C-50, de 7 de abril de 1998, recibido en la Gerencia del Banco el 8 de abril de 1998, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial insistió, con fundamento en el Artículo 526 del Código Judicial, Numeral Cuarto, insiste en que el Banco Nacional debía acatar la orden de cautelación emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

4° Mediante Oficio N° 543-DRP, de 24 de abril de 1998, la

Dirección de responsabilidad Patrimonial, con fundamento nuevamente en el Numeral Cuarto del Artículo 526 del Código Judicial, insistió en la vigencia de su medida cautelar, a partir del día 5 de marzo de 1998, fecha de la recepción en el Banco Nacional de Panamá.

5° Con fecha 23 de septiembre de 1998, recibimos el Oficio N° 1184-D.R.P. C-50, expedido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, en el mismo día, y por medio del cual se ordenó al Banco Nacional de Panamá, poner los fondos cautelados al Bank of Credit and Commerce International (Overseas) L.TD. Panamá B.C.C.I., cuenta número 23194, Depósitos a Plazos de Bancos Locales, a disposición de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, hasta por la suma de B/.7,603.606.34.

6° Mediante Oficio N° 213-985, del 4 de marzo de 1999, la Administradora Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en funciones de Juez Ejecutora, ordenó la entrega, mediante cheque a favor del Tesoro Nacional, de la suma de B/.4,992,784.32, más los intereses causados hasta la fecha, de las sumas que inicialmente había cautelado la D.R.P. y que fueron puestas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante Resoluciones DRP número 348-98, de 18 agosto de 1998 y DRP 93-98, de 4 de marzo de 1998.

7° Oficio N° 213-723 del 14 de mayo de 1999, la Administradora Regional de Ingresos, en adición a la suma a que se refiere el numeral anterior, ordena que por error aritmético, se remite de los fondos cautelados al BCCI, la suma de Cien Mil Balboas (B/.100,000.00) a favor del Tesoro Nacional.

8° Nota 213-JC 2580 por medio de la cual la Administradora Regional de Ingresos ordena que se le entregue mediante cheque certificado a favor del Tesoro Nacional el remanente de B/.2,510,748.72 que se encuentran depositados en la cuenta bancaria de propiedad del BCCI.

9° Nota N° 246-00- DC/DEL de 2 de mayo de 2000 por medio de la cual el Contralor General de la República, solicita suspender el pago del certificado de Garantía emitido a solicitud del Juzgado tercero del Circuito en base a fallo a favor de Omar Elías Solano.

La solicitud del Contralor General de la República se fundamentó en sentencia de la Corte Suprema de Justicia que "Declara que no es ilegal la Resolución DRP Num. 348-98 de 18 de agosto de 1998", por la cual se ordenó el reintegro la Tesoro Nacional de los fondos depositados en la cuenta BCCI-Panamá.

RESPUESTA DEL BNP A LA DRP

1. Nota 98-(14000-01)02, del 9 de marzo de 1998, mediante la cual la Gerente Ejecutiva Jurídica da respuesta al oficio 251 DRC C-50 de 5 de marzo de 1998, en donde le indica que se ha atendido el citado Oficio, pero le sugiere que dicha medida se dirija inmediatamente al Juzgado Cuarto del Circuito Ramo Civil, quien por razón de la liquidación mantienen la administración "plena y

jurisdicción de los fondos de dicho Banco, a través del liquidador judicial designado".

2. Nota 98(03000-01)20 del 19 de marzo de 1998, por medio de la cual Asesoría Legal del Banco le advierte que los fondos del BCCI están a cargo del Lic. Edgardo Lasso Valdés, liquidador designado por el Juzgado Cuarto y se le solicita que cualquiera acción o instrucción en relación a la medida cautelar decretada por la DRP se comunicase directamente al Juzgado Cuarto del Circuito de Panamá, del Primer Circuito Judicial, quien es el que tiene "la administración jurisdiccional de los fondos del BCCI". En la misma nota que se refiere este numeral, le informábamos cobre (sic) la recepción del Oficio N° 918 del 10 de marzo de 1998, suscrito por el Juez Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

3. Nota N°98(03000-01)76 del 28 de septiembre de 1998, por medio de la cual la Gerencia Ejecutiva de Operaciones y Asesoría Legal informan a la DRP que en esa fecha "hemos acatado su orden en el sentido de poner las sumas cauteladas por la DRP a disposición de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, ahora Ministerio de Economía y Finanzas.

4. Nota 99(03000-01)047 del 25 de marzo de 1999, mediante la cual en cumplimiento de la orden impartida por dicha administración mediante nota 213-985 del 4 de marzo de 1999, hacemos entrega de cheque a favor del Tesoro Nacional por la suma de B/.5.088.730.78.

NOTAS RECIBIDAS DEL LIQUIDADOR DEL BCCI

1. Nota del 11 de abril de 2000, por medio de la cual solicita al BNP que emita Certificado de Garantía por la suma de B/.1,533,304.39 a favor del Juzgado Tercero del Circuito para ser consignado en el proceso instaurado por el Omar Elías Solano Aparicio en contra del BCCI. (Todo lo subrayado es nuestro).

Atentamente,

(Fdo.)	(fdo.)
LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ A.	FRANCISCO A. VÁSQUEZ Q.
Gerente Ejecutivo de Operaciones	Asesor Legal de la Gerencia General"

Considera el PLENO que en la nota antes transcrita, se ha aclarado el orden cronológico en que fueron recibidos en la institución bancaria, BANCO NACIONAL DE PANAMA, las ordenes contentivas de medidas cautelares, con los respectivos oficios, tanto los remitidos por el Juzgado Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, así como también por la DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (DRP) y, en consecuencia, la validez jurídica contra los fondos del BCCI queda plenamente aclarada.

Por otra parte, estima el Pleno que existe confusión por parte del señor CONTRALOR DE LA REPÚBLICA, al considerar que el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, puede suspender la orden impartida por un JUEZ DE CIRCUITO CIVIL, como es el caso que nos ocupa. Por el contrario, en ambas jurisdicciones se ha demostrado, que prosperan las medidas cautelares decretadas, y, de acuerdo a los fondos existentes en la entidad bancaria demandada, deberá dársele cumplimiento, tal como las legislaciones respectivas, así lo ordenan.

Además, es importante destacar, que estamos en presencia de ejecución de

una resolución dictada por el Juzgado Tercero del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, RAMO CIVIL, por tanto, la ejecución de la misma, forma parte del debido proceso (artículo 32 de la Constitución Política) la tutela efectiva, ya que en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. La ejecución de las Sentencia es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y es, además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula de Estado social y democrático, que implica, entre otras manifestaciones, la sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no sólo juzgando, sino también ejecutando lo juzgado.

Como es sabido, la medida cautelar innominada o genérica, que motivan estas reflexiones de la Sala, consiste en una cautela con estructuración abierta, que deja librado al juzgador un amplio espectro de manifestaciones concretas de la cautela ("las medidas de protección más apropiadas"), pero no puede ser concebido como un mecanismo procesal alterno frente a los mecanismos de impugnación que pone a disposición de las partes el ordenamiento procesal. De allí a que, con respecto a las consideraciones que hizo el Tribunal Superior, y que se han dejado transcritas, se trata de dos cautelas distintas que no tienen una preferencia, en cuanto a su aplicación, de una sobre la otra, como existe en otros ordenamiento procesales, sí pueden ser propuestas, naturalmente, por el demandante y también por un tercero con un interés legítimo digno de protección que pudiese verse afectado por el remate en sus derechos patrimoniales. Pero la cautela solicitada por el demandado no puede tener, como ya se ha dicho y conviene repetirlo, en un mecanismo alterno que pueda utilizar a su elección el proponente de la medida, la parte demandada, en reemplazo de los medios de impugnación a su alcance en estos procesos ejecutivos" (véase Jorge Fábrega, "Medidas Cautelares" pág. 138, Ediciones Gustavo Ibañez, 1998, Santa Fe de Bogotá, Colombia).

A dicha cautela le son aplicables los principios que gobiernan las demás medidas cautelares, singularmente el orden en que han de ser atendidas (artículo 558, segundo párrafo del Código Judicial).

La finalidad de las medidas cautelares es posibilitar que la sentencia, cuando se dicte, tenga eficacia. Es decir: cuando la sentencia, que es un mandato de ejecución, se encuentre ejecutoriada, sea por no haberse recurrido o por haber sido los recursos resueltos que impedían su ejecución.

La doctrina y la jurisprudencia constitucional española han dedicado extensas consideraciones a la tutela judicial efectiva, destacando que, al menos, está integrada por cuatro derechos, a saber: el derecho de acceso a los tribunales o derecho de acción, el derecho a obtener una sentencia congruente fundada en derecho, es decir, con arreglo a las fuentes de derecho, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales o el derecho al recurso legalmente previsto. Dentro de este cúmulo de derechos, es el derecho a la efectividad de la sentencia donde se ubican, como parte de la tutela judicial efectiva, el derecho a la tutela cautelar, sustentada en los principios fumus boni iuris y periculum in mora. La tutela judicial no se produce cuando medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso no exista, sin que ni la autoridad jurisdiccional o el legislador puedan eliminar dicha tutela cautelar, que, con respecto al sujeto pasivo de la misma, bien puede ser decretada inoída parte, siempre que el ordenamiento jurídico tenga prevista la impugnación del afectado por la medida cautelar de que se trate, que, no obstante, en su dictación ha de respetar el principio de proporcionalidad y razonabilidad para la consecución de la finalidad propuesta. Como ha dicho en Tribunal Constitucional español (sentencia 218 de 1994) "la finalidad constitucionalmente protegida de las medidas cautelares no es otra, como ya se ha dicho, que la de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial relativo precisamente a los derechos e intereses legítimos llevados ante jueces y tribunales en el

proceso principal en el que se resuelva la cuestión de fondo. El artículo 24.1 CE exige que la tutela judicial sea efectiva y para ello debe evitarse que "un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el artículo 24.1 CE) desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el órgano judicial en su momento (STC 238/1992)" (véase Francisco Rubio Llorente, "Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales", Editorial Ariel, 1995, pág. 270).

Se está en presencia de una sentencia ejecutoriada, y cuya ejecución es exclusiva de los Juzgados y Tribunales, y la misma ha de llevarse a cabo, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan, en sus propios términos.

Por las consideraciones antes expuestas, advierte el PLENO que la orden de hacer emitida por el señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en cuanto a la suspensión de pago a favor de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, resulta a todas luces improcedente, debido a que la misma ha sido emanada de un funcionario que no tiene competencia en la jurisdicción civil, reiterando que la misma fue dictada dentro de un proceso cuya sentencia se encuentra ejecutoriada, y en fase de ejecución.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado por la firma forense SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, en representación de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, y, en consecuencia, REVOCA la orden de hacer remitida al BANCO NACIONAL DE PANAMA por el señor CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante Nota No.246-00-DC/Del., de fecha 2 de mayo de 2000.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LAS LICENCIADAS KARIM CÉSPEDES BERGUIDO Y MARÍA SOLEDAD PORCELL MANCILLA, EN REPRESENTACIÓN DE YAPELO, S. A., CONTRA EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Las licenciadas KARIM CÉSPEDES BERGUIDO y MARÍA SOLEDAD PORCELL MANCILLA, actuando en nombre y representación de la sociedad anónima YAPELO, S. A., han interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución calendada primero (1°) de marzo de dos mil (2000), proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario interpuesto por LEONARDO CIPPONERI MARTINICO contra YAPALEO, S. A.

La orden de hacer objeto de amparo, en su parte resolutiva, expresa lo siguiente:

"ADMITE el desistimiento del recurso de apelación promovido por la parte actora contra la Sentencia N°95 de fecha 29 de noviembre de 1996, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN.

La imperativa imposición de costas al recurrente, dispuesta en los artículos 1058 y 1085 del Código Judicial, se fija en la suma de CINCUENTA BALBOAS CON 00/100, (B/.50.00)."

Corresponde en esta etapa procesal verificar si el libelo de demanda cumple con los requisitos exigidos a la ley del artículo 2606 del Código Judicial, así como los señalados en profusa jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

En primer lugar, se advierte que el acto atacado fue proferido el día 1° de marzo de 2000, así como fue notificada dicha resolución a las partes involucradas en el proceso ordinario, los días 10 y 13 de marzo de 2000. Por lo que han transcurrido siete (7) meses, lo cual hace evidente la ausencia de inminencia o gravedad de daño a que hace relación el artículo 2606 del Código Judicial, en su tercer párrafo que establece que la acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse ante toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revista la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando la gravedad e inminencia del daño que representan requiere de su revocación inmediata.

En reiteradas jurisprudencia, esta Superioridad ha señalado que cuando la acción de amparo de derechos fundamentales se interpone después de transcurrido un período prolongado del tiempo que se dictó la orden impugnada, dicha orden pierde su gravedad y sobretodo, su inminencia. (Ver sentencia del Pleno de 21 de diciembre de 1999).

Por otro lado, la recurrente fundamentó en su acción de amparo de garantías constitucionales, que el Primer Tribunal Superior, como tribunal de apelación, dentro del proceso ordinario propuesto por LEONARDO CIPPONERI MARTINICO contra YAPELO, S. A., omitió correrle traslado a la contraparte de la solicitud de desistimiento presentada por el apoderado demandante y, mediante auto calendado 30 de mayo de 1997, este mismo Tribunal Superior eliminó a YEPELO, S. A. en su condición de apelante en el fallo relativo a la solicitud de desistimiento del amparo de garantías constitucionales incoado por Leonardo Cipponeri Martinico, más no lo eliminó en su condición de parte en el proceso, por lo que debió habérsele corrido el traslado de la solicitud de desistimiento de Cipponeri, atendiendo lo normado por el artículo 1080 del Código Judicial que en la parte pertinente dice: "Igualmente se requerirá el consentimiento del demandado si se le hubiere secuestrado bienes o se hubiere efectuado cualquier otra medida cautelar sobre los mismos...".

Respecto a lo anterior, esta Superioridad advierte que no es el citado artículo 1080 del Código Judicial el aplicable, como sostiene la amparista, ya que no se desistió del proceso, ni de la demanda, ni de la pretensión. El demandante desistió de un recurso de apelación, situación regulada por el artículo 1084 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por las licenciadas KARIM CÉSPEDES BERGUIDO y MARÍA SOLEDAD PORCELL MANCILLA, en nombre y representación de YAPELO, S. A.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ARIEL FERNANDO QUIJANO MARTÍNEZ, en representación de ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A., interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada el 13 de septiembre del 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, con sede en Penonomé, Coclé, en que declara improcedente la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Ariel Fernando Quijano Martínez, contra el Juez Primero de Circuito, Ramo Civil, del Circuito Judicial de Coclé.

Al interponer la demanda de amparo de garantías constitucionales, el amparista señaló que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en su calidad de Tribunal Constitucional de Amparo de Garantías Constitucionales, violó el artículo 1089 del Código Judicial en su parte final, y por ende el artículo 32 de la Constitución, ya que si bien el recurso de amparo de garantías constitucionales es un recurso extraordinario, y el mismo según lo establece el artículo 2606 en su numeral 2 sólo puede ser interpuesto "cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate", es precisamente ésta, según continúa expresando el recurrente, la situación que acontece: el auto que decretó la caducidad de la instancia se encuentra en firme y ejecutoriado, pues fue notificado a las partes por edicto y contra él no cabe recurso de apelación.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 13 de septiembre de 2000, declaró improcedente la acción de amparo propuesta contra el Juez Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, fundamentando su decisión así:

> **"...**
> **En Este caso, el proponente alega la violación del artículo 1089 del Código Judicial, en lo referente a que no se da la caducidad de la instancia debido a que sí existía gestión pendiente por parte del Tribunal para impedir que se diese esta figura jurídica.**
>
> **El proponente en realidad lo que intenta es que se entre a conocer del fondo del asunto en lo referente a la existencia o no de la caducidad de la instancia, pero esto pudo o puede ser remediado mediante otra acción o recurso, no el de Amparo de Garantías Constitucionales, tal como lo establece el artículo 1098 A del Código Judicial, a contrario sensu.**
>
> **Es decir, para que proceda la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales debe haberse agotado la vía correspondiente, ya sea la administrativa, aduanera, ordinaria, etc., pues esta acción, como lo dice su denominación, es extraordinaria y solo procede para revisar el cumplimiento de las normas constitucionales dentro de un proceso judicial. No procede mientras exista un recurso disponible cuando no se ha agotado la vía."**

Esta Máxima Corporación de Justicia, una vez analizadas las constancias procesales, se apronta a externar los siguientes comentarios:

Se advierte primeramente, tal como lo expuso el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la resolución objetada, que el recurrente intenta con la presente acción constitucional conocer el fondo del asunto en cuanto a la existencia o no de la caducidad de la instancia.

Respecto a lo anterior, ya la Corte Suprema ha sido enfática al indicar que la finalidad de las acciones de amparo de garantías constitucionales no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional en lo relativo a la evaluación y valoración probatoria, dado que el debate de fondo de aquella materia es ajena a la acción de amparo, por no tener la categoría de cuestión constitucional.

El amparo, como acción independiente, tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del Juzgador al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, siendo el presente caso, valorar y determinar la existencia o no de la caducidad de la instancia.

Por otro lado, la Corte ha sostenido en innumerables fallos, conforme al numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que "sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". El Pleno de esta Corporación ha sido reiterativo al señalar, con fundamento en la norma antes citada, que no cabe el recurso de amparo contra resoluciones que admiten medios ordinarios de impugnación. De modo pues, que sólo es admisible la presente acción de amparo, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. Véase sentencias del Pleno de la Corte de fechas 10 de junio de 1998,11 de mayo de 1999 y 2 de junio de 1999.

Es por lo anterior, que esta superioridad ratifica el fundamento de la resolución objetada por el hecho que el asunto de la existencia o no de la caducidad de la instancia pudo ser remediado mediante otra acción o recurso, y no la presente acción constitucional, conforme lo dispone el artículo 1098-A del Código Judicial, es decir, mediante el recurso de reconsideración, cosa que no se ha acreditado en la acción constitucional por parte del amparista con la finalidad de ilustrar al tribunal de amparo de que se ha agotado con los medios de impugnación, así como se podía recurrir vía casación, ya que se trata de un auto que imposibilita la continuación del proceso y la cuantía es superior a la señalada en el numeral 2 del artículo 1148 del Código Judicial.

Al respecto, es oportuno recordar que, conforme al artículo 50 de la Constitución y, los artículos 2606 y 2607 del Código Judicial, para que un acto pueda ser objeto de amparo debe cumplir con los siguientes presupuestos:

1) Que vulnere garantías fundamentales consagradas en la Constitución;

2) Que revista la forma de una orden de hacer o no hacer;

3) Que requiera una revocación inmediata por la gravedad o inminencia del daño;

4) Que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación del acto que se trate;

5. Que el acto haya sido dictado por un funcionario público con mando y jurisdicción.

El Pleno de la Corte ha podido observar que en este caso se demanda en amparo un auto que declara una caducidad en la instancia, acto que, a juicio del tribunal de amparo, no cumple con el cuarto de los requisitos antes expresado, por lo que consideró que no era necesario entrar en otras consideraciones,

procediendo a declarar improcedente la demanda.

En estas condiciones, el Tribunal Ad-quem concluye que la resolución de primera instancia se ajusta a las exigencias que en materia de amparo prevé el Código Judicial para la viabilidad de estas acciones, y a las sentadas a través de jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema, razón por la cual ha de confirmarse la decisión apelada.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, con sede en Penonomé, Coclé, fechada 13 de septiembre del 2000, en la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Ariel Fernando Quijano Martínez en nombre y representación de ASEGURADORA MUNDIAL DE PANAMÁ, S. A., contra el Juez Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. IVAN TEJEIRA, EN REPRESENTACION DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE LA VICTORIA R. L., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N°9 JD/A.T.T.T. DE 3 DE OCTUBRE DE 2000 DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: HIPOLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Iván Tejeira en nombre y representación de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE LA VICTORIA R. L. ha propuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N°9 JD/A.T.T.T. de 3 de octubre de 2000 dictada por la Junta Directiva de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.

En momentos en que circulaba el proyecto de resolución judicial preparado por el Magistrado Sustanciador que resolvía la acción de amparo de garantías, el proponente de la misma presentó escrito de desistimiento calendado 6 de noviembre de 2000 ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Superioridad considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de amparo de garantías propuesto por el licenciado Iván Tejeira en nombre y representación de la COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE LA VICTORIA R. L.

Notifiquese.

(fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA FORENSE SOFER, ALTAFULLA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD NOVEDADES ANTONIO, S. A. CONTRA LA SENTENCIA DE VEINTIOCHO (28) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL (2000), PROFERIDA POR EL TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Jacobo Sofer, en su condición de representante legal de la sociedad anónima denominada NOVEDADES ANTONIO, S. A., a través de la firma forense SOFER, ALTAFULLA Y ASOCIADOS, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Sentencia de veintiocho (28) de septiembre de dos mil (2000), expedida por el TERCER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

En virtud de la naturaleza de esta acción de tutela de derechos y garantías fundamentales, el Libro IV del Código Judicial, ha establecido un procedimiento propio que obliga a un examen formal para la admisibilidad o rechazo de la acción.

Por lo tanto, para determinar sobre la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 654 del mismo Código y a la concurrencia de los presupuestos de procedencia, según lo establecido en el artículo 2611 del citado Código.

Al examinar la presente acción constitucional, la Corte aprecia que la misma ha sido formulada debidamente y con observancia de las formalidades legales correspondientes; sin embargo, la misma es manifiestamente improcedente, ya que se pretende de manera exclusiva, enervar el juicio apreciativo externado por el Tercer Tribunal Superior, quien al conocer en segunda instancia del Proceso de Nulidad y Cancelación de un Registro Marcario, decidió revocar la Sentencia proferida por el Juzgado Octavo del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y en su lugar, declaró no probada la excepción de prescripción de la acción invocada por la parte demandada; declara nulo y, por lo tanto cancela el Registro No.048914 de 11 de julio de 1989, expedido por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

Para una mejor comprensión se transcribe algunas consideraciones señaladas por la amparista: "1. En el proceso mi mandante aportó suficientes elementos para demostrar la utilización de buena fe de la marca en Panamá desde la época de su registro; 2. Que el demandante SUSSY, INC, no aportó pruebas que demostraban la utilización de la marca STUSSY antes del registro de la marca STUSSY Y DISEÑO; 3. Que no se ha demostrado en el proceso que exista una confusión directa o indirecta entre ambas marcas que cree duda en el consumidor sobre su real origen, ni ha demostrado que el giro normal de las actividades amparadas por la marca STUSSY guarda relación con los productos distinguidos con la marca STUSSY Y DISEÑO, por lo que es imposible establecer algún vínculo entre ambos signos; 4. Que los elementos probatorios acompañados al proceso por la demandante STUSSY, INC., carecen de mérito, porque no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por los artículos 864, 843, 844 y concordantes del Código Judicial,

referentes a los documentos privados provenientes del extranjero, máxime cuando no son revistas o documentos de circulación en la República de Panamá que permitan asociar que el público nacional está familiarizado con la marca STUSSY; o que la misma es notoria en este país; y finalmente, 5. Que no se consideró que en el proceso obran como pruebas documentos privados, válidos al amparo de las disposiciones sobre documentos privados del Código Judicial, que demuestren a primera vista la negación existente en épocas anteriores a la aludida demanda de nulidad y de cancelación, entre mi mandante y la empresa STUSSY, INC para negociar el registro que amparaba los derechos de mi mandante:"

Más adelante, se señala el concepto de la violación aducido por la accionante, cuando dice: "se ha violado directamente, por omisión, el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, porque el Tribunal Ad-quem se ha negado a reconocer que en el presente litigio la Ley aplicable es la Ley 64 de 28 de diciembre de 1934, por la cual se aprueba la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y el Protocolo sobre el Registro de Marcas de Fábrica, firmada en Washington; y no la Ley 41 de 13 de julio de 1995, por la cual se aprueba el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial".

Siendo ello así, el Pleno puede constatar que el punto materia de controversia en este negocio no es la norma constitucional cuya violación se alega, sino el juicio o apreciación externado por el Tercer Tribunal Superior de Justicia en circunstancias y condiciones procesales en que a la Corte, a través de esta acción extraordinaria de amparo de garantías constitucionales, no le es dable contrariar. Al confrontar la norma constitucional que se aduce infringida con la motivación de la amparista, se ha puesto de manifiesto su inconformidad con la interpretación que realizó el Tercer Tribunal Superior.

Sobre el particular el Pleno ha señalado: "que resulta improcedente adentrarnos a valorar las pruebas y elementos incorporados al proceso y que fueron estimados conforme a la justa razón y al conocimiento experimental de las situaciones que rodearon este negocio por parte del juzgador, ya que de actuar así, nos encontraríamos inmersos en valoraciones legales que se alejan del tema de las garantías constitucionales. El amparista pretende que el Tribunal Constitucional se adentre a examinar los motivos que indujeron a la segunda instancia a reformar y adicionar la sentencia, y muestra de ello es, que señala como infringidas las normas legales, lo que dista mucho de la vulneración constitucional del debido proceso, y mas bien resalta el interés del recurrente de que el Pleno revise como una instancia adicional lo resolutivo de la sentencia proferida por el Ad-Quem." (Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de 15 de mayo de 2000).

La Corte Suprema ha sido enfática al indicar que la finalidad de esta acción de naturaleza constitucional no es la de eregirse en tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional; por lo tanto, se estima que la demanda sub examine resulta improcedente y conforme a lo establecido en el artículo 2611 del Código Judicial no debe ser acogido y así procede a declararlo de seguido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense SOFER, ALTAFULLA Y ASOCIADOS, en representación de NOVEDADES ANTONIO, S. A. contra la orden de hacer contenida en la Sentencia de 28 de septiembre de 2000, proferida por el Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LCDO. AGUSTIN SANJUR OTERO, EN REPRESENTACION DE MARIA DE LOURDES BARB, CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, APELACION. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el Licdo. Eduardo Ferguson Martínez, en nombre y representación de la Sra. MARÍA DE LOURDES BARB, contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 20 de junio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que denegó la acción constitucional promovida contra la orden de hacer contenida en el auto N° 5 de 4 de enero de 1999, proferida por el Juez Sexto del Circuito Civil de Panamá.

Esta decisión fue dictada dentro del proceso universal de quiebra promovido por el BANCO BILBAO VIZCAYA PANAMÁ, S. A., contra las sociedades CRÉDITOS AGROPECUARIOS, S. A. (CREAGRO), PANAGRO, S. A. TRANS-AGRO, S. A. Y OTROS, en el que el Juez Sexto de Circuito, luego de declarar el estado de quiebra, ordenó investigar si hubo dolo en la bancarrota de las sociedades señaladas, remitiendo las copias conducentes a la Fiscalía de Circuito en turno, para que entablara "el proceso criminal que corresponde", invocando los artículos 1903 y 1905 del Código Judicial, omitiendo así -según la actora-, trámites procesales -principio del debido proceso- que atentan contra los derechos de los quebrados, entre los que se encuentra la amparista.

La transgresión constitucional aducida por el amparista consiste en que el Juzgador primario pretermitió el procedimiento contenido en el Capítulo X del Título XV -Procesos de Ejecución- del Código Judicial, atinente a la Calificación de la Insolvencia.

Los mencionados artículos 1902-1905 establecen un procedimiento previo a la calificación de la insolvencia, consistente en que el Curador debe promover la calificación de la insolvencia, cumplir los requisitos de dicha solicitud, el traslado en la misma, y la calificación que debe hacer el Juez de la insolvencia, remitiendo copias de lo conducente al Fiscal de Circuito para que haga la investigación pertinente, en caso de que considere que la insolvencia sea fraudulenta.

Señaló la amparista que en el presente caso, la Curadora de la insolvencia no promovió la calificación, no ha presentado el escrito correspondiente, y el Juez tampoco ha declarado si la insolvencia es fortuita o no.

Al decidir el amparo en primer grado, el Primer Tribunal Superior de Justicia manifestó que de la acción propuesta y del informe del Juez acusado, resalta que en el proceso de quiebra, el Juez debe seguir el procedimiento que establecen los artículos 1547, 1556, 1561 y siguientes del Código de Comercio, tal como lo establece el artículo 1818 del Código Judicial.

Que la actuación del funcionario acusado promovió la investigación penal, en base al artículo 1556 en concordancia con el artículo 1562, ambos del Código de Comercio, y no los artículos 1902 a 1905 del Código Judicial, razón por la que el Juez Sexto de Circuito no infringió el principio constitucional del debido proceso, y por ello denegó la acción que ahora nos ocupa, en apelación.

En su recurso de apelación, el Licdo. Eduardo Ferguson Martínez afirmó que:

No es cierto que el a-quo no aplicó los artículos 1902- 1905 del Código Judicial, porque la parte resolutiva del auto N° 5 de 4 de enero de 1999, determinó que el Juzgado se inhibía del conocimiento del proceso respecto a la acción penal, y ordenó la remisión de las copias conducentes a la Fiscalía de Turno, términos éstos idénticos a los contenidos en los artículos 1903 y 1905 del Código Judicial, siendo que el Primer Tribunal Superior consideró que las normas aplicadas fueron los artículos 1547, 1556 y 1561 del Código de Comercio, únicamente.

Que el Tribunal Superior, pese a fundar su sentencia en el Capítulo X del Código Judicial -Calificación de Insolvencia-, ignoró el artículo 1904 contenido en ese mismo Capítulo, que indica que del escrito de petición de calificación de insolvencia del Curador, debe darse traslado al concursado por cinco (5) días, y en caso de que éste impugne, entonces se surtirá el proceso por las reglas del proceso ordinario. El funcionario acusado dio parte al Ministerio Público para la investigación correspondiente, sin cumplir con este trámite de notificación.

Considera el apelante que la aplicación de las normas del Código Judicial referentes a la Calificación de la Insolvencia son de indiscutible aplicación.

Argumenta también que no es aceptable que el Juez haya cumplido el artículo 1547 del Código de Comercio -el Juez debe transcribir, al agente del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, la declaratoria de quiebra junto con los datos conocidos que permitan establecer si hubo quiebra fraudulenta- pretermitiendo el procedimiento establecido en los artículos 1902-1905 del Código Judicial.

Por otra parte, aduce la amparista que dicha omisión procesal hizo que la Fiscalía iniciara las investigaciones pertinentes, llamando a rendir indagatoria a personas que no son parte de la quiebra, según el Juez acusado, existiendo un "desfase" entre lo dispuesto por el Juez de la quiebra y lo hecho por el Fiscal, quien obligó a rendir indagatoria a empleados de las empresas quebradas, incluida la amparista.

Finalmente, sostuvo la Sra. MARÍA DE LOURDES BARB que quedó en estado de indefensión, porque según el artículo 1824 del Código Judicial, después que queda ejecutoriado el auto de formación del concurso de acreedores, el deudor no es parte en el proceso, excepto en el incidente sobre la calificación de la insolvencia; pero que el Juez no notificó personalmente a los fallidos, ni a la amparista, por lo que no pudo recurrir contra el auto impugnado en amparo.

Expuestos los principales elementos del negocio, corresponde al Pleno emitir un juicio sobre el mismo, previas las siguientes consideraciones.

Considera el Pleno que la médula de la controversia consiste en que el Juez Sexto de Circuito se valió de las normas contenidas en el Código de Comercio para darle traslado al Ministerio Público de los elementos conducentes del caso, para iniciar una investigación penal por insolvencia fraudulenta, normas éstas que no exigen que el curador de la quiebra solicite al Juez la calificación de la insolvencia, lo que sí imponen las normas correspondientes del Código Judicial.

Por tratarse de una quiebra de varias sociedades cuya naturaleza es comercial, lo pertinente es aplicar las normas correspondientes del Código de Comercio, y que revisamos a continuación.

En primer lugar, hay que destacar que el Título XV del Código Judicial se titula "QUIEBRA Y CONCURSO DE ACREEDORES", de lo cual se desprende que primero se debe verificar la quiebra de la sociedad o comerciante de que se trate, y luego continúa el procedimiento correspondiente al concurso de acreedores, siempre y cuando éste se origine en la quiebra, según lo norma el numeral 3° del artículo 1811 del Código Judicial, que a la letra dice:

"ARTICULO 1811. Se formará concurso de acreedores a los bienes de un deudor:
1. Por cesión voluntaria que de ellos haga con tal fin;
2. Por haberse librado contra él tres o más ejecuciones siempre que no haya presentado bienes suficientes para el pago total;
3. Por habérsele declarado en quiebra, conforme al Código de Comercio." (Negrilla de la Corte)

Esta norma establece como una de las circunstancias para que se forme el concurso de acreedores, que se declare la quiebra según el Código de Comercio; de ello se desprende que se puede promover autónomamente el proceso de concurso de acreedores, sin que medie una declaración previa de quiebra, en los dos primeros casos de la norma transcrita.

Ahora bien, la quiebra propiamente tal, debe ser declarada conforme al Código de Comercio, como lo señala el artículo 1814 del Código Judicial, que a la letra dice:

"ARTICULO 1814. La declaración formal del estado de quiebra se hará por resolución judicial, en los casos y con las formalidades que previene el Código de Comercio."

De la norma se deduce que todos los trámites correspondientes a la declaración de quiebra, se rigen por lo que establece el Código de Comercio, en los casos y formalidades allí establecidas, recordando que el presente amparo de garantías constitucionales se origina en un proceso universal de quiebra.

Por su parte, el artículo 1547 del Código de Comercio, es del siguiente tenor:

"Artículo 1547. La declaratoria de quiebra será transcrita al representante del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha habido delincuencia.
..."

De lo anterior se deduce que el Juez de Circuito debe dar parte al Ministerio Público de la posible comisión del delito de quiebra fraudulenta, en el mismo auto en que declara la quiebra, suministrando todos los datos que ayuden al funcionario instructor a establecer si se cometió ilícito.

Es oportuno traer a colación lo que señala el artículo 1556 del Código de Comercio, que reza así:

"Artículo 1556. Declarada la quiebra, si hubiere indicios de responsabilidad penal, el Juez mandará a testimoniar lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta.
..."

En complemento al artículo 1547 del Código de Comercio -que señala que en el auto de declaratoria de quiebra el Juez dará traslado al Ministerio Público-, éste artículo 1556 íbidem, dicta que, ya declarado el estado de la quiebra, el Juez de la misma recabará las pruebas que considere conducentes para que, con ellos, se inicie una causa penal contra el quebrado y sus cómplices, de ser necesario.

Tenemos entonces, en síntesis, que la iniciativa del Juzgador, de poner en conocimiento del Funcionario Instructor la posible comisión del delito de quiebra fraudulenta, puede ser realizada en cualquier momento, ya sea en el auto de declaratoria de quiebra, o durante el resto del proceso, sin necesidad de aplicar el procedimiento a que aluden los artículos 1902 a 1905 del Código Judicial que

son de aplicación, repetimos, a los procesos de Concurso de Acreedores, no a los de quiebra como en el caso sub-júdice, como se apreciará en las aclaraciones que examinaremos seguidamente.

En este sentido, la amparista había considerado que quedó en estado de indefensión, por razón de que el artículo 1824 del Código Judicial señala que después que queda ejecutoriado el auto de formación de concurso de acreedores, el deudor no es parte del proceso, excepto en el incidente de calificación de la insolvencia, siendo que el Juez no la notificó personalmente de dicha resolución, por lo que no pudo recurrir en su contra.

No le asiste la razón a la amparista, porque al ser aplicable la normativa sobre el proceso de quiebra contenida en el Código de Comercio, no se aplica la norma invocada por la actora, que precisamente, se refiere al procedimiento sobre concurso de acreedores.

Para complementar lo anterior, reproducimos el texto del artículo 1590 de la Excerta Mercantil, dice que:

> "Artículo 1590. La administración de la quiebra, y demás actos relacionados con la liquidación del activo y pasivo de la misma se ajustarán a las disposiciones del Código Judicial en materia de concurso."

La norma expresa con claridad meridiana que, después de la declaratoria de quiebra, los aspecto específicos de la administración de la misma y los demás actos que con ella se relacionan, así como lo atinente a la liquidación del activo y del pasivo, se ajustarán a la normativa del Código Judicial relativa al concurso de acreedores.

La amparista aduce en su apelación que las normas del Código Judicial -arts. 1902 a 1905- no fueron aplicadas en el presente caso, en toda su extensión, siendo invocadas sólo algunas de ellas por el Juez de la quiebra en la parte resolutiva del auto N° 5 de 4 de enero de 1999.

No coincide el criterio de este Pleno con dicha afirmación, por lo siguiente.

Porque el ya analizado artículo 1556 del Código de Comercio, faculta al Juzgador para dar parte al Ministerio Público en cualquier momento, luego de declarada la quiebra, para participarle de la posible comisión del ilícito.

Además, es obligación de los funcionarios públicos denunciar la comisión de todo ilícito que llegue a su conocimiento, según lo establece el artículo 2026 del Código Judicial, que dice lo siguiente:

> "ARTICULO 2026. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y los denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables."

Aunado a esta obligación, el Código Penal establece sanción para el funcionario que la incumpla, según lo establece el artículo 342, contenido en el Capítulo IV, titulado "ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCION DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS", comprendido a su vez en el Título X del Libro II, denominado "DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA", que dice así:

> "342. El servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la ejecución de un hecho punible que dé lugar a procedimiento de oficio y omita dar cuenta de ello a la autoridad competente, será sancionado con 25 a 100 días-multa."

Las normas expuestas son claras en establecer la obligación del Juez Sexto de Circuito Civil, de dar cuenta al Ministerio Público de la presunta comisión del delito ya manifestado, desde que tenga conocimiento del mismo, lo cual ocurrió -en este caso- cuando se lo solicitó la Sra. MARTA LUCÍA CAÑOLA BETANCUR, en su calidad de curadora de la quiebra de marras, el 27 de noviembre y el 1° de diciembre de 1998, mediante escritos presentados a la Secretaría del Juzgado -fs. 65 y 66.

Por lo tanto, no solo estaba facultado el Juez Sexto de Circuito para poner en conocimiento al Ministerio Público, en cualquier momento, de la existencia del presunto ilícito con fundamento en las disposiciones que regulan el proceso de quiebra, sino que era un deber imperativo, señalado por las normas recién expuestas.

Por lo tanto, no era necesario que se cumpliera el procedimiento establecido para la calificación de la insolvencia, contenido en el Capítulo X del Título XV del Código Judicial relativa a los procesos de Concurso de Acreedores, ya que son aplicables las normas que regulan la quiebra, según el Código de Comercio, por lo que no prospera la pretensión de la amparista al no haberse violentado el debido proceso como erróneamente alega.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 20 de junio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS A. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO SILVIO GUERRA MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE MATILDE ROSALES DE ARDINES, ALCALDESA DEL DISTRITO DE COLÓN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA DECISIÓN DE 28 DE OCTUBRE DE 2,000, EXPEDIDA POR LA FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Silvio Guerra Morales, actuando en representación de Matilde Rosales de Ardines, Alcaldesa del Distrito de Colón, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Decisión de 28 de octubre de 2,000, expedida por la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá, mediante la cual se le imponen las medidas cautelares de detención preventiva y suspensión del cargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 2160 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2148 y subsiguientes del Código Penal.

Encontrándose la presente acción en el Despacho del Sustanciador para comprobar su admisibilidad, el licenciado Aldo Ayala Martínez, en representación de Matilde Rosales de Ardines, presentó escrito desistiendo de la pretensión, ejercitada en el citado amparo.

Como quiera que al tenor del artículo 1073 del Código Judicial "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente del mismo", este Tribunal considera viable el desistimiento presentado por la parte actora.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Aldo Ayala Martínez, en representación de Matilde Rosales de Ardines, Alcaldesa del Distrito de Colón, contra la orden de hacer contenida en la Decisión de 28 de octubre de 2,000, expedida por la Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA MORENO, BERNAL, FIGUEROA & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE CASA DE LA CARNE NO. 5, S. A. CONTRA EL AUTO NO. 1-83-22-00. PROFERIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 1 DENTRO DEL PROCESO LABORAL POR DESPIDO INJUSTIFICADO INCOADO POR PEDRO CASTILLO CONTRA CASA DE LA CARNE NO. 5, S. A. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de amparo de derechos fundamentales presentado por la firma Moreno, Bernal, Figueroa & Asociados en representación de Casa de la Carne No. 5, S. A. y contra el Auto No. 1-83-22-00 proferido por la Junta de Conciliación y Decisión No. 1, que aprueba el arreglo celebrado entre Casa de la Carne No. 5 y Pedro Castillo Rodríguez y ordena el archivo del expediente.

De acuerdo, al recurrente el auto No. 1-83-22-00 de 22 de agosto de 2000 "...RECONOCE UN ARREGLO ENTRE LAS PARTES QUE LESIONA EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO..." (Cfr. f. 32), infringiendo directamente por omisión el artículo 32 de la Constitución Nacional (f. 34).

Corresponde en este momento determinar si la demanda de amparo cumple con los presupuestos formales que establece la ley, particularmente los del artículo 2606, 2610 , 2611, 654 del Código Judicial, así como los establecidos en profusa jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, a objeto de decidir sobre su admisibilidad a lo que se procede.

En primer lugar, se observa que la demanda de amparo se encuentra dirigida a los "...SEÑORES MAGISTRADOS DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PLENO, E.S.D. ..."(Cfr. f. 32) cuando debió dirigirse al Presidente de la Corte Suprema tal como señala el numeral 2 del artículo 102 del Código Judicial.

Por otro lado, conocido es que la acción de amparo de derechos fundamentales ha sido establecida para revocar órdenes de hacer o no hacer que contengan una amenaza o una violación efectiva de derechos subjetivos de naturaleza constitucional. En esta causa no se comprueba la existencia de una orden o acto que contenga un mandato dirigido al afectado, toda vez que lo que

se advierte es la aprobación de un arreglo entre las partes.

La aprobación es un acto de consentimiento, es la declaración de la Junta de Conciliación y Decisión que da fe del acto celebrado entre las partes del litigio y que al haber llegado o concertado un arreglo tal como se aprecia a fojas 25 se celebró el acta de conciliación.

La Junta de Conciliación y Decisión No.1 emitió el acto solamente aprobando un arreglo entre las partes, por lo que la medida no es una orden directa a la empresa, para que haga o no haga algo, es la fe de que el acto se verificó con el consentimiento de las partes.

Por otra parte, una orden de hacer tiene otras connotaciones es un mandato dirigido, para celebrar o realizar algo o de negativa de no hacer tal cosa, que lesione o vulnere los derechos y garantías fundamentales que consagra la Constitución.

De acuerdo al constitucionalista Dr. José Dolores Moscote, en referencia al artículo 189 de la Constitución de 1941 (hoy 50 de la Constitución vigente), que estatuyó la acción de amparo de derechos fundamentales, precisó el alcance del concepto que se examina de la siguiente manera:

> ¿"Qué es una orden de hacer o de no hacer que al tenor del artículo 189 de la constitución, dé derecho al recurso de amparo? Si las palabras se toman en su recto, lógico y natural sentido, no puede ser otra cosa que el mandato emanado de una voluntad arbitraria dirigido a procurar de parte de aquella a quien se impone la ejecución o la no ejecución de un acto del cual resulte disminuído con el goce de algún derecho que la constitución le reconoce y garantiza" (MOSCOTE, José Dolores. Instituciones de Garantía (Título XV de la Constitución), Edit. Imprenta Nacional, Panamá, 1943, p. 53).

Sobre este tema es posible consultar las sentencias del Pleno de 13 de febrero de 1998, 9 de febrero de 1998, 22 de octubre de 1993, 18 de noviembre de 1993.

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por la firma Moreno, Bernal, Figueroa & Asociados en nombre y representación de Casa de la Carne No. 5, S. A. contra el auto No. 1-83-22-00 de 22 de agosto de 2000, proferido por la Junta de Conciliación y Decisión No. 1.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ M.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.)ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA LCDA. ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELIDA MORENO CAMARGO, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, en representación de ELIDA MORENO CAMARGO, interpuso recurso de apelación contra el Auto de 5 de octubre de 2000, proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, con sede en Penonomé, Coclé, en que declara no viable la acción de amparo de garantías constitucionales promovido por la licenciada ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, contra el Juez Segundo de Circuito, Ramo Civil, del Circuito Judicial de Coclé.

Al interponer la demanda de amparo de garantías constitucionales, el amparista señaló que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en su calidad de Tribunal Constitucional de Amparo de Garantías Constitucionales, violó el artículo 18 de la Constitución que establece que "los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley". En este sentido, la recurrente expresa que le llama la atención en el caso sub-júdice, por el hecho de que el Tribunal Superior manifestó que la señora ELIDA MORENO tiene que agotar la vía a través de los recursos ordinarios en el proceso de sucesión, entonces, alega la recurrente, cómo puede recurrir de las decisiones en un proceso en el cual no es parte aún, siendo así, no le queda otra vía que la del amparo de garantías constitucionales para reparar el daño que se le va a causar con las decisiones del Juez Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de 5 de octubre de 2000, declaró no viable la acción de amparo propuesta contra el Juez Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil, fundamentando su decisión así:

> "Lo que importa en este caso, es que, es cierto lo que alega el funcionario acusado, de que existen otros remedios para subsanar el posible daño que se está causando o error en las resoluciones impugnadas, pues las mismas pueden ser atacadas por los recursos ordinarios y siendo el proceso dentro del cual se dictaron estas resoluciones, un juicio de sucesión intestada, este proceso está contemplado Libro II, Parte II, Título III (sic), Capítulo III del Código Judicial, que cual (sic) en su artículo 1566 indica lo siguiente:
>
> "Las resoluciones dictadas en los procesos de que trata este Capítulo, no impiden que los que se crean agraviados en ellos concurran al procedimiento del proceso sumario."

Esta Máxima Corporación de Justicia, una vezanalizadas las constancias procesales, se apronta a externar los siguientes comentarios:

Se advierte primeramente, que la recurrente intenta con la presente acción constitucional se conozca el fondo del asunto en cuanto a la viabilidad de asignarse una pensión alimenticia a la menor ANA BEATRIZ CASTILLO VARGAS de un préstamo que solicitara el causante BASILIO CASTILLO ó BASILIO LÓPEZ CASTILLO (q.e.p.d.), como socio del asentamiento campesino 11 de octubre.

Respecto a lo anterior, ya la Corte Suprema ha sido enfática al indicar que la finalidad de las acciones de amparo de garantías constitucionales no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional en lo relativo a la evaluación y valoración probatoria, salvo que en dicho proceso se haya vulnerado un derecho fundamental de la amparista.

El amparo, como acción independiente, tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual, no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del Juzgador al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, siendo el presente caso, valorar y determinar la asignación o no de una pensión alimenticia a favor de la menor Ana Beatriz Castillo Vargas.

Por otro lado, la Corte ha sostenido en innumerables fallos, conforme al numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, que "sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". El Pleno de esta Corporación ha sido reiterativa al señalar, con fundamento en la norma antes citada, que no cabe el recurso de amparo contra resoluciones que admiten medios ordinarios de impugnación. De modo pues, que sólo es admisible la presente acción de amparo, cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. Véase sentencias del Pleno de la Corte de fechas 10 de junio de 1998,11 de mayo de 1999 y 2 de junio de 1999.

Es por lo anterior, que esta superioridad ratifica el fundamento de la resolución objetada por el hecho que las resoluciones dictadas en los procesos sucesorios, puede ser remediado mediante otra acción o recurso, es decir, que los agraviados en ellos concurran al procedimiento del proceso sumario, y no la presente acción constitucional, conforme lo dispone a texto expreso el artículo 1566 del Código Judicial, cosa que no se ha acreditado en la acción constitucional por parte de la amparista, con la finalidad de ilustrar al tribunal de amparo de que se ha agotado con los medios de impugnación.

Al respecto, es oportuno recordar que, conforme al artículo 50 de la Constitución y, los artículos 2606 y 2607 del Código Judicial, para que un acto pueda ser objeto de amparo debe cumplir con los siguientes presupuestos:

1) Que vulnere garantías fundamentales consagradas en la Constitución;

2) Que revista la forma de una orden de hacer o no hacer;

3) Que requiera una revocación inmediata por la gravedad o inminencia del daño;

4) Que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación del acto que se trate;

5) Que el acto haya sido dictado por un funcionario público con mando y jurisdicción.

El Pleno de la Corte ha podido observar que en este caso se demanda en amparo dos autos, el N°1138 de 7 de agosto de 2000, el cual dispone que el Asentamiento 11 de octubre debe entregar a favor de la menor ANA BEATRIZ CASTILLO VARGAS (quien es representada por su madre HERMELINDA VARGAS RAMOS), la mitad de las cantidades que en calidad de préstamo y como socio recibía mensualmente su difunto padre BASILIO CASTILLO o BASILIO LÓPEZ CASTILLO (una misma persona); y el auto N°1317, el cual mantiene la vigencia del auto citado, N°1138 de 7 de agosto de 2000; acto que, a juicio del tribunal de amparo, no cumple con el cuarto de los requisitos antes expresado, por lo que consideró que no era necesario entrar en otras consideraciones, procediendo a declarar no viable la demanda.

En estas condiciones, el Tribunal Ad-quem concluye que la resolución de primera instancia se ajusta a las exigencias que en materia de amparo prevé el Código Judicial para la viabilidad de estas acciones, y a las sentadas a través de jurisprudencia del Pleno de la Corte Suprema, razón por la cual ha de confirmarse la decisión apelada.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, con sede en Penonomé, Coclé, fechada 5 de octubre de 2000, en la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por la licenciada ROSAURA REYES DE GONZÁLEZ, en nombre y representación de ELIDA MORENO CAMARGO, contra el Juez Segundo de Circuito de Coclé, Ramo Civil.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. DARIO E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BALDOMIR KRISAJ KREGAR Y EDITH CALVERA, CONTRA EL JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado DARIO E. CARRILLO GOMILA, en representación de BALDOMIR KRISAJ KREGAR y EDITH CALVERA, contra la sentencia de 13 de junio de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

ORDEN IMPUGNADA:

El recurrente considera que la orden de hacer impugnada se encuentra contenida en la resolución de 22 de mayo de 1995, emitida por el Juzgado Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en la que se abrió causa criminal contra los señores BALDOMIR KRIZAJ y EDITH CALVERA DE KRIZAJ por la presunta comisión de delitos contra la Fe Pública, contenidos en el Libro II, Título VIII, Capítulo I del Código Penal.

Continúa expresando el amparista, que la orden de hacer vulnera las garantías fundamentales de los señores KRIZAJ y CALVERA, ya que el Juzgado Octavo de Circuito Penal ordenó por quinta vez abrir causa criminal contra sus poderdantes, existiendo cuatro juicios previos en los que se dictó sobreseimiento por los mismos motivos, es decir, por la presunta comisión de delitos Contra la Fe Pública.

DECISIÓN DEL AD-QUO

El Primer Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de 13 de junio de 2000, no admitió la presente acción constitucional por incumplir con las exigencias contenidas en el artículo 2606 del Código Judicial.

Indicó el Ad-Quo, que el auto de enjuiciamiento proferido por el Juzgado Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial en contra de los señores KRIZAJ CALVERA permitía hacer uso del recurso de apelación y aunque se observaban en los sellos de notificación de esa resolución que los poderdantes del amparista anunciaron la apelación "... no hay constancia de que tal recurso se hubiese negado; o por el contrario, que hubiese sido atendido." Por lo que no se cumplió con el agotamiento de los medios y tramites previstos en la ley para la impugnación de esa resolución judicial. (Ver foja 38 del cuadernillo).

Por otra parte, expresó el Primer Tribunal Superior de Justicia que "... se observa que la orden que se impugna fue proferida en el año 1995 y la demanda de amparo fue presentada el 1o. de junio del año en curso, lo que nos aleja de la "gravedad e inminencia del daño" que tal orden representa, según lo exige el

artículo 2606 del Código Judicial".

FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN

El amparista al sustentar su apelación no individualiza la norma constitucional infringida a sus representados, ya que se limita a manifestar "Que la orden de hacer acusada violenta garantías fundamentales de BALDOMIR KRIZAJ KREGAR y EDITH CALVERA DE KRIZAJ", no obstante en la sustentación del amparo ante el Ad-Quo señaló como disposición constitucional infringida el artículo 32, relativa al Debido Proceso. Ver foja 10 del cuadernillo de amparo.

El licenciado CARRILLO solicita se revoque en todas sus partes la resolución de 13 de junio de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales y que, en su defecto, se conceda el mismo.

Indica el apelante, que a los señores KRIZAJ CALVERA le formularon cargos por incluir datos falsos en una escritura pública, no obstante, por esos mismos motivos fueron instruidos cuatro procesos, los cuales concluyeron con sobreseimientos a favor de sus representados, por lo que la orden de hacer, contenida en el auto de llamamiento a juicio lesiona las garantías constitucionales de sus poderdantes.

DECISIÓN DEL PLENO

Luego de analizar el recurso de Apelación, el Pleno de esta Corporación de Justicia constata, que el interés del amparista es obtener la revocatoria del auto de llamamiento a juicio proferido por el Juzgado Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en contra de los señores KRIZAJ CALVERA, toda vez que considera que los hechos que han motivado este proceso penal fueron atendidos en otras causas penales que se resolvieron con sobreseimiento a favor de sus representados.

Ahora bien, las consideraciones de fondo aducidas por el amparista no fueron objeto de atención por parte del Primer Tribunal Superior de Justicia al resolver el amparo, por cuanto que la acción no fue admitida por incumplir dos de los requisitos formales que exige la presentación de una acciónde ésta naturaleza.

En tal sentido la sentencia de 13 de junio de 2000 indicó que el amparista no agotó los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. La orden de hacer contenida en el auto de llamamiento a juicio proferido con el Juzgado Octavo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá contra los señores KRIZAJ CALVERA permitía la interposición del recurso de apelación conforme lo establecido en el artículo 2221 del Código Judicial.

A fojas 37 y 38 del cuadernillo de amparo, el Ad-Quo se expresó en los siguientes términos:

> "Pero es el caso que la orden que se impugna está contenido (sic) en el Auto de 22 de mayo de 1995 proferido por la funcionaria demanda, mediante el cual se "SE ABRE CAUSA CRIMINAL..." EN CONTRA DE BALDOMIR KRIZAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ.
>
> Tal resolución, según lo disponía el artículo 2221 del Código Judicial, admitía el recurso de apelación. Si bien el artículo 2207 B del Código Judicial, tal como fuera adicionado por el artículo 21 de la Ley No.1 de 3 de enero de 1995 establece que "Contra el auto de enjuiciamiento no cabe recurso alguno", el artículo 31 de la misma Ley 1 de 1995 establece que tal ley "empezará a regir seis (6) meses después de su promulgación. Siendo que la promulgación se dio en la Gaceta Oficial No. 22,698 de 6 de enero de 1995, la ley

entraría en vigencia el 6 de julio de 1995.

> Sea entonces que al momento en que se dictara el auto que hoy se impugna en amparo (22 de mayo de 1995), tal resolución admitía el recurso de apelación. Más aún, si se observan los sellos de notificación de tal resolución (fs. 32 vta.) Ambos amparistas anunciaron que apelaban la misma".

Expresado lo anterior, no existe duda que el amparista obvió el cumplimiento del requisito contenido en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, necesario para la revisión del acto jurisdiccional por parte de este Tribunal de Amparo.

La referida norma procedimental establece que: "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". Lo que significa que, si la resolución no admite la presentación de medios de impugnación deja abierta la vía para el amparo, no obstante el auto de proceder se emitió encontrándose en vigencia el artículo 2221 del Código Judicial, que permitía hacer uso del recurso de apelación.

Siendo ello así, conforme al principio de Definitividad, tantas veces indicado en nuestra jurisprudencia "... no es admisible demandar a través del amparo actos o resoluciones que puedan ser impugnados mediante otras vías procesales", (Sentencia de 24 de abril de 2000), por lo que los criterios proferidos por el Ad-Quo se ajustan a derecho.

Continuando con esta línea de pensamiento, debe anotar el Pleno, que el auto de proceder es interlocutorio, no decide el fondo del negocio penal, su objeto es calificar el sumario y ponderar la existencia o no de graves indicios de responsabilidad contra los procesados y declarar si hay lugar o no a seguimiento de causa criminal(artículo 2222 del Código Judicial), razón por la cual, excepcionalmente, este tipo de resoluciones judiciales pueden ser recurridos a través del amparo de garantías constitucionales.

La sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió el Amparo de Garantías Constitucionales por considerar la inexistencia del requisito relativo a la gravedad e inminencia del daño. Veamos:

El tercer párrafo del artículo 2606 del Código Judicial, manifiesta que "Esta acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata."

En consecuencia, un elemento fundamental para la procedencia del amparo es la existencia de un perjuicio actual grave e inminente, que de concretarse lesionare las garantías fundamentales del afectado, por lo que no prospera contra actuaciones pasadas, toda vez que se encuentran ausentes los elementos de inminencia y urgencia, indispensables en el Amparo de Garantías Constitucionales.

En tal sentido, en reiterada jurisprudencia el Pleno ha enfatizado el criterio contenido en el artículo 2606 del Código Judicial y ha señalado que:

> "...la naturaleza del amparo tiene como finalidad la revocatoria de la orden, cuando por la gravedad o inminencia del daño perjudique al afectado y se trate de un perjuicio actual. Así las cosas, se reafirma la improcedencia de esta acción, cuando la acción se ejerce contra una "supuesta orden de hacer" de fecha 30 de enero de 1998 ..., y la acción es interpuesta el 16 de abril de 1998, cuando han transcurrido más de dos meses y medio, lo que desvirtúa también la procedencia del amparo constitucional perseguido". Sentencia de 12

de junio de 1998. Registro Judicial de junio de 1998.

Para el caso que ocupa nuestra atención el auto de proceder fue proferido el 22 de mayo de 1995,(foja 27 del cuadernillo) mientras que la acción de amparo fue interpuesta el 1 de junio de 2000, cinco (5) años después de la emisión del mismo, siendo ello así, el Pleno reitera que se incumple lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 2606 del Código Judicial relativo a la gravedad e inminencia del daño.

En consecuencia, estima el Tribunal de Amparo, que la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia contenida en la sentencia de 13 de junio de 2000 recoge los criterios vertidos por esta Superioridad en materia de Amparo de Garantías Constitucionales por lo que procede confirmar la sentencia de 13 de junio de 2000.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 13 de junio de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) EMETERIO MILLER (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RAMON NORIEGA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, PRIMERO (1o.) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano LUIS ALBERTO ACOSTA ALMENGOR ha presentado acción de habeas corpus a favor de RAMON NORIEGA, quien se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Encontrándose en la fase de circulación del proyecto de sentencia, se recibió, por Secretaría General, escrito de desistimiento del propio beneficiado de la acción constitucional. em los siguientes términos:

> "Yo, RAMON NORIEGA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-767-1461, actualmente detenido en las instalaciones del Centro Carcelario La Joyita, vengo por el presente a DESISTIR del Recurso Extraordinario de Habeas Corpus, oportunamente interpuesto a mi favor por el señor LUIS ALBERTO ACOSTA, con fecha 9 de octubre de 2000". (f.10)

El artículo 1073 del Código Judicial reconoce al demandante el derecho a desistir de su iniciativa procesal, lo que evidentemente se ha dado en este proceso, por tanto, es procedente la suspensión del mismo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus propuesto a favor de RAMON NORIEGA y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ALBERTO BONILLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acción de habeas corpus presentada por el licenciado Manuel Vidal Fuentes M. a favor de Alexis Alberto Bonilla y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Señala el activador judicial que la detención de Bonilla es ilegal ya que su conducta se adecua en el párrafo primero del artículo 260 del Código Penal posesión simple debido a que "...se le encontró en posección (sic) de una cantidad escasa de Droga 0.80 gramos,...para su consumo personal, no existiendo en el dossier penal, ninguna prueba o indicio que desvirtue lo señalado por él de una manera objetiva..."(Cfr. f. 2 cuaderno de habeas corpus).

Agrega que el dinero que poseía Bonilla, proviene de su oficio de electricista el cual "...obtuvo por un trabajo que realizara a un cliente..."(f. 3 cuaderno de habeas corpus).

Finalmente, sostiene que la detención de Bonilla no ocurrió "...en circunstancias en que se disponía a darla en venta o traspaso a alguien en los lugares que, según los informes de inteligencia del DIIP, la vendía..."(Cfr. f. 3 cuaderno de habeas).

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, para explicar que la detención de Bonilla fue decretada mediante providencia de 4 de octubre del 2000, con indicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo a la aplicación de la medida restrictiva de la libertad corporal.

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte Suprema, Pleno a determinar si la medida restrictiva de libertad impuesta a Alexis Alberto Bonilla cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en la Ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Alexis Alberto Bonilla, la medida restrictiva de libertad se fundamenta en la presunta comisión del delito contra la Salud Pública, concretamente tráfico de drogas, que lleva aparejada pena mínima de prisión superior a los dos años de prisión.

Como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible se tiene la incautación de una cajetilla de fósforos que en su interior contenía 10 carrizos de plástico transparentes contentivos de un polvo blanco el cual se presume sea droga (cocaína) y B/.29.85 dólares en efectivo distribuidos en billetes y monedas de variada denominación (Cfr. f. 3 cuaderno de antecedentes).

Sometida la presunta droga a las pruebas de rigor resultaron positivos para la droga conocida como COCAINA con un peso de 0.80 gramos (fs. 20 y 62 antecedentes).

Con relación a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra el imputado se tienen los informes de investigación de la Policía Nacional Zona de Panamá Este, el cual indica que Alexis Alberto Bonilla se dedicaba a la distribución ilícita de estupefacientes, en el Jardín La Gallera de Chepo, calle principal incluyendo los 4 altos, según el cual Bonilla "...es abordado por los compradores...recibe el dinero y luego se va para donde su amiga a buscar mas (sic) mercancía para distribuirla..." (Cfr. f. 7 antecedentes).

Las autoridades de investigación deberían completar todas las diligencias que implican a los sospechosos de tráfico o consumo de drogas, incluyendo las operaciones encubiertas de compra, para que los tribunales tengan a disposición los elementos necesarios para decidir. Igual comportamiento, se debería observar en cuanto se refiere a los sujetos accesorios, como en el caso de la amiga mencionada en la diligencia donde Bonilla busca la droga.

Por otra parte, el Magistrado sustanciador solicitó al Instituto de Medicina Legal la práctica de exámenes de rigor con la finalidad de determinar científicamente la dependencia o no al consumo de droga de Alexis Alberto Bonilla (f. 11 cuaderno de habeas corpus). La mencionada institución remitió informe de evaluación psiquiátrica a Alexis Alberto Bonilla (f. 13 cuaderno de habeas corpus).

Por lo que esta Superioridad, advierte, que pese a que, la droga incautada a Alexis Alberto Bonilla es escasa, la detención encuentra sustento con los informes de inteligencia de la Policía Nacional que señalan al imputado como traficante de droga, el cual tiene como móvil portarla en escasa cantidad, para así traficarla (f. 5-11 cuaderno de antecedentes).

La providencia que ordena la detención preventiva de Alexis Alberto Bonilla fue decretada por autoridad competente y cumple con los requisitos que al efecto establecen la Constitución y la Ley por lo que procede la Corte a declarar su legalidad.

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Alexis Alberto Bonilla y, en consecuencia, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO
MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Con el mayor de los respetos, me permito disentir de la posición de la mayoría de mis colegas Magistrados con respecto a la sentencia que antecede, la cual declara legal la detención preventiva de ALEXIS ALBERTO BONILLA, investigado por Delito Contra la Salud Pública.

Se observa en la resolución que se acredita la comisión del hecho punible con la sustancia incautada, consistente en 10 carrizos de polvo blanco, que dio resultado positivo para la droga conocida como COCAÍNA en la cantidad de 0.80 gramos (Ver foja 62 del cuaderno penal) y además el imputado portaba veintinueve balboas con ochenta y cinco centésimos (B/.29.85).

A este respecto, debo señalar que la droga decomisada es escasa y no excede la dosis posológica que ha establecido el Instituto de Medicina Legal como dosis para consumo personal. En ese sentido, el Pleno de esta Corporación de Justicia, en resolución de 5 de abril de 2000 señaló lo siguiente:

> Además, si bien al señor A.D., se le encontró en su poder la cantidad de nueve (9) carrizos contentivos de cocaína y nueve balboas, también existe un informe de laboratorio visible a foja 15 del cuadernillo, que reveló, que el peso total de la sustancia incautada era 0.81 gramos, lo cual está por debajo de la cantidad posológica del consumo de droga, que oscila entre 1 a 1.5 gramos.
>
> Por tanto, en contraposición con los señalamientos hechos por la autoridad demandada, en la orden de detención fechada 19 de marzo de 2000, este Pleno considera, que las pruebas aportadas en la incipiente investigación, demuestran, que nos encontramos frente a la supuesta comisión de un delito de posesión simple de droga, que tiene una penalidad que oscila entre uno (1) a tres (3) años de prisión, y por tanto no admite detención preventiva.(Lo subrayado es nuestro)

De otro lado, se expresa en el proyecto que "se solicitó al Instituto de Medicina Legal la práctica de exámenes de rigor con la finalidad de determinar científicamente la dependencia o no al consumo de droga de Alexis Alberto Bonilla" y "la mencionada institución remitió informe de evaluación psiquiátrica a Alexis Alberto Bonilla."(Fs.11 y 13 del cuaderno de habeas corpus)

No obstante, se omite hacer mención al resultado de dicha evaluación en la cual se dictaminó que:

> "1.El examinado no padece enfermedad mental.
> 2. Conserva plena capacidad para discernir.
> 3. Padece dependencia al uso de alcohol, cocaína y marihuana.
> 4. La cantidad de droga incautada (10 carrizos de cocaína) son consumibles fácilmente por un adicto a esta droga en pocas horas.
> 5. Sugiero tratamiento de reeducación en Hogares CREA".(F.13) (La negrita es nuestra)

Finalmente, se indica en el proyecto que pese a que la droga incautada a Alexis Alberto Bonilla es escasa, la detención encuentra sustento con los informes de inteligencia de la Policía Nacional que señalan al imputado como traficante de droga, el cual tiene como móvil portarla en escasa cantidad, para así traficarla (F.5-11 cuaderno de antecedentes)

Tras examinar los informes de novedad, vigilancia e investigación que reposan de foja 7 a 18 del cuaderno penal, se advierte que las autoridades de policía recibieron información de "fuente de entero crédito" y llamadas anónimas en las que se describe el modus operandi del señor BONILLA.

Sin embargo, en las diligencias no se detalla cómo BONILLA transporta o vende la sustancia ilícita, solo se indica los lugares que frecuenta y donde presuntamente vende la droga.

En la investigación no se realizó una diligencia u operación de compraventa controlada, a fin de reunir elementos probatorios que pudieran corroborar los informes recibidos de una llamada "fuente de entero crédito" cuya identidad es desconocida o anónima, sino que se procedió a detener a BONILLA encontrándosele en posesión de la droga cocaína y éste manifestó que la sustancia era para consumo personal (Ver fojas 26-36), lo que es una posibilidad, dado el dictamen médico legal citado ut supra.

En virtud de estos elementos y circunstancias, estimo que en el caso en comento la cantidad de droga cocaína incautada, aunada a la condición de toxicodependiente del señor BONILLA y la falta de elementos que evidencien que éste se dedique al traspaso o venta de drogas, ubica el presunto hecho punible en el tipo penal de posesión de droga en su modalidad simple, cuya sanción es inferior a los dos años de prisión, de allí que la medida cautelar personal adoptada contra el señor BONILLA es, en nuestra opinión, contraria a ley.

Fecha ut supra.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLAS PEREIRA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Firma Forense PULICE, STANZIOLA Y ASOCIADOS, presentó el día 13 de octubre de 2000, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Hábeas Corpus a favor de NICOLÁS PEREIRA y contra la FISCALÍA PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, a fin de que se declare ilegal la detención del prenombrado, toda vez que se violentan los principio del debido proceso, de economía procesal y sus garantías legales y constitucionales.

Una vez anotada la entrada de la presente acción constitucional, la Secretaría General de esta Corporación de Justicia procedió al reparto, siendo adjudicada al Despacho del Magistrado José A. Troyano.

Encontrándose en trámite de librar el correspondiente Mandamiento de Hábeas Corpus, se recibe escrito de desistimiento presentado por la Firma PULICE, STANZIOLA Y ASOCIADOS el día 19 de octubre de 2000, en los siguientes términos:

> "Nosotros, PULICE, STANZIOLA Y ASOCIADOS Firma Forense de abogados inscrita a la ficha C-009974 Rollo 2655 Sección de Persona Común del Registro Público, y oficinas profesionales ubicadas en la Avenida Ricardo J. Alfaro, Condominio Aventura, II Piso, Oficina 211 Teléfono 260-2580/2573 lugar donde reciben notificaciones personales por este medio concurrimos a su digno despacho A FIN DE DESISTIR el desistimiento de Hábeas Corpus interpuesto a favor del señor NICOLÁS PEREIRA." (Fs. 8)

Conforme a la solicitud anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1073, primer párrafo del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho para desistir expresa o tácitamente una demanda, un incidente o recurso que haya interpuesto, el Pleno de la Corte considera viable acoger esta decisión y concluir las actuaciones que se derivan de la presente acción de Hábeas Corpus.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Hábeas Corpus presentada por la Firma PULICE, STANZIOLA Y ASOCIADOS a favor de NICOLÁS PEREIRA y; en consecuencia DISPONE el Archivo del Expediente.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS C.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE RICARDO ALBERTO VARGAS RAMÍREZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez promovió el día 21 de septiembre del presente año acción de hábeas corpus a favor de RICARDO ALBERTO VARGAS RAMÍREZ y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Mediante auto dictado el 21 de septiembre de 2000 se libró el mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención.

Estando el proyecto en lectura, el licenciado Edilberto Vargas Ramírez desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito fechado 25 de octubre de 2000, que fue presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Edilberto Vásquez dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSE CASTRILLON HENAO CONTRA EL JUEZ DECIMO QUINTO DE CIRCUITO DE LO PENAL DE PANAMA (APELACION). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado el cuaderno contentivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado ROGELIO CRUZ RIOS, actuando en nombre y representación de JOSE CASTRILLON HENAO, contra la Resolución de 26 de septiembre de 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior.

El Segundo Tribunal Superior, al emitir la resolución apelada, manifestó en su parte resolutiva que se había producido el fenómeno procesal de cosa juzgada constitucional y ordenó el archivo del cuadernillo de tramitación y la incorporación de copia certificada de la decisión jurisdiccional.(f-14-18)

Como fundamento jurídico de su decisión el Segundo Tribunal Superior manifestó lo siguiente:

> "...
> **1. La situación planteada por el demandante fue decidida mediante resolución dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 14 de junio de 1999, visible de fojas 17622 a 17629 en el tomo 31-A.**
>
> **2. En la resolución judicial citada, este Tribunal Superior explica a la parte demandante que no son admisibles las pruebas porque constan en el expediente, tampoco es necesario una audiencia debido a que la detención es consecuencia de un sumario, proceso o actuación y en estos casos el artículo 2590 del Código Judicial en su segundo párrafo prevé que debe prescindirse de la audiencia.**
>
> **3. También en el fallo citado hacemos referencia a la aplicación del artículo 2508-A del Código Judicial, en el sentido de que no ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, es una norma vigente y aplicable, no se trata de una extradición, no fue violada la garantía del debido proceso, el Decreto Ejecutivo respectivo lo informaron al Tribunal de la Instancia.**
>
> **4. Lo anterior significa que en este asunto concurren los presupuestos del instituto procesal de cosa juzgada, debido a lo siguiente:**
>
> **4.1. Identidad jurídica de las partes, porque la controversia es planteada con relación al imputado JOSE CASTRILLON HENAO en cuanto a las formalidades legales exigidas para el debido proceso.**
>
> **4.2. Existe identidad de la cosa u objeto; y**
>
> **4.3. De igual forma está comprobada la identidad de la causa o razón de pedir.**
>
> **5. Siendo ello así, es contrario a las reglas elementales de los procesos volver a decidir sobre un asunto que ha sido motivo de un pronunciamiento debidamente ejecutoriado, cuya materia consiste en lo mismo.**
> ..."

Por su parte, el apoderado judicial al sustentar el recurso de apelación solicita que se revoque la decisión apelada, en virtud de que el Tribunal

Superior al declarar que se había producido el fenómeno jurídico de cosa juzgada constitucional no entró a conocer el fondo de lo pedido; y porque considera que no está impugnando la detención de CASTRILLON HENAO si no el hecho de que el detenido no está en una prisión del distrito donde esta siendo juzgado, o sea fuera de la jurisdicción nacional (Estados Unidos de Norteamérica), por lo que, en su opinión, se infringe el artículo 22 de la Constitución Nacional.

De fojas 1 a 7 del cuadernillo principal contentivo del habeas corpus se observa que el licenciado Cruz Ríos al interponer el recurso de habeas corpus en primera instancia solicitó al Segundo Tribunal Superior que declarara ilegal la entrega simple y condicionada del ciudadano colombiano JOSE CASTRILLON HENAO efectuada por el Organo Ejecutivo a las autoridades norteamericanas y solicitó que, como consecuencia de ello, se obligara al Organo Ejecutivo a trasladar al señor JOSE CASTRILLON HENAO a Panamá.

En primer lugar, el Pleno observa que en tres ocasiones el licenciado Rogelio Cruz Ríos ha interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia recursos de habeas corpus a favor de JOSE CASTRILLON HENAO en los cuales se han proferido las resoluciones de 28 de febrero de 1997, 30 de diciembre de 1997 y 21 de abril de 1999. En las dos primeras acciones se declaró legal su detención y en la última se ordenó el cese del procedimiento.

En este mismo orden, visible a fojas 17622 a 17626 del tomo 31-A del expediente, se observa que, a través de resolución de 14 de junio de 1999, el Segundo Tribunal Superior resolvió similar acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Rogelio Cruz Rios contra la licenciada GEORGINA TUÑÓN, Juez Décimo Quinta de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, declarándose legal la detención. El licenciado Cruz Rios en aquella ocasión fundamentó su recurso en que la entrega del señor CASTRILLON HENAO a las autoridades norteamericanas era ilegal por cuanto no se podía aplicar el artículo 2508-A del Código Judicial.

Al interponer la presente acción de habeas corpus, nuevamente contra la Juez Décimo Quinta de Circuito de lo Penal, el licenciado Cruz Rios solicitó al Segundo Tribunal Superior que declarara ilegal la entrega simple y condicionada del ciudadano colombiano JOSE CASTRILLON HENAO, llevada a cabo por el Organo Ejecutivo a las autoridades norteamericanas.

De todo lo anterior se desprende que tanto en la resolución de 14 de junio de 1999, como en la resolución apelada proferida el 26 de septiembre de 2000, el Segundo sTribunal Superior de Justicia se pronunció sobre lo solicitado por el apoderado judicial desestimando los cargos formulados contra la entrega simple y condicionada del señor CASTRILLON HENAO a la autoridades norteamericanas y declarando legal su detención.

Por otro lado, con relación al cuestionamiento formulado por el apoderado judicial en su recurso de apelación, en el sentido de que el Tribunal debió revisar el fondo del presente negocio y no declarar la "cosa juzgada constitucional", es necesario expresar que esta Corporación ha señalado, en diversas ocasiones, que será viable la revisión del proceso de habeas corpus que ha finalizado con una sentencia declarativa de la legalidad de la detención de un imputado, siempre y cuando se acredite la existencia de nuevos elementos de convicción con eficacia para hacer variar el status procesal del detenido; sin embargo, conforme a las constancias procesales remitidas a este Tribunal, se observa que en el presente caso no se han incorporado nuevos hechos que ameriten un reexamen de la situación del señor JOSE CASTRILLON HENAO.

Por todo lo anterior, el Pleno considera que debe confirmarse la decisión apelada.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 26 de septiembre de 2000 proferida por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GABRIEL SANTOS BARRIA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor GABRIEL SANTOS BARRIA ha interpuesto acción de Habeas Corpus a su favor contra el FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Acogida la demanda, el Magistrado Sustanciador giró el mandamiento de habeas corpus correspondiente y la autoridad acusada remitió el expediente y el informe de conducta mediante Oficio No.FD2T12-3949-00 de 21 de septiembre de 2000.

No obstante, encontrándose la presente acción constitucional en lectura de proyecto, la Secretaría General de la Corte recibió escrito de 26 de octubre de 2000, visible a foja 11 del expediente, mediante el cual el señor GABRIEL SANTOS BARRIA desiste de la acción interpuesta en los siguientes términos:

"...
HONORABLES MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA. E.S.D.

Por medio de la presente Yo, Gabriel A. Santos Barría, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 4-151-767, actuando en mi propio nombre y representación de conformidad con el Artículo 2038 del Código Judicial, con todo respeto acudo ante ustedes para DESISTIR del Recurso de Habeas Corpus que interpuse en contra del Fiscal Segundo de Drogas el pasado mes de septiembre del presente año.

Respetuosamente solicito que esta petición me sea concedida.

Panamá, 26 de octubre del 2000.
...".

Conforme a lo anterior y de acuerdo a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial que le otorga el derecho a toda persona para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus interpuesta por el señor GABRIEL SANTOS BARRIA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO, contra el Director General de la Policía Nacional.

Mediante providencia fechada el 11 de octubre de 2000, legible a foja 77 del presente negocio, se libró el mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado para que, en el término de ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de habeas corpus, el Director General de la Policía Nacional contestó el libramiento mediante Nota AL-4209-00 de 11 de octubre de 2,000, quien manifestó que ni había ordenado la detención del susodicho ni lo tenía bajo su custodia (ver folio 78).

Posteriormente, fue recibido en la Secretaría General el escrito suscrito por el licenciado Edilberto Vásquez Atencio, mediante el cual desistía de la presente acción (fs. 79).

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Plenode la Corte considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Edilberto Vásquez Atencio, dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de JUAN ANTONIO FRANCO PALOMINO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN ERNESTO LAM BUSTAMANTE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de RUBÉN ERNESTO LAM BUSTAMANTE contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director de la Policía Técnica Judicial, licenciado Emilio De León Looke, mediante oficio N° A.L. 0876-2000 rindió informe de conducta en los siguientes términos:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor RUBÉN ERNESTO LAM BUSTAMANTE.
> 2. No tiene razón de ser sobre la base del punto anterior.
> 3. El prenombrado RUBÉN ERNESTO LAM BUSTAMANTE, no se encuentra bajo nuestra custodia ni a ordenes (sic) de nosotros".

Del informe transcrito se desprende que el beneficiario de la presente acción constitucional no se encuentra privado de su libertad, razón por la cual no se justifica proseguir con la tramitación de este habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la acción de habeas corpus presentada por el licenciado Carlos Herrera Morán, y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ADÁN MONTENEGRO ACOSTA Y YOBANY ADALBERTO MONTENEGRO SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los señores ADÁN MONTENEGRO ACOSTA y JOVANY ADALBERTO MONTENEGRO SALDAÑA, detenidos en la Cárcel Pública de Chiriquí, a órdenes de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por la presunta vinculación a delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas, han interpuesto en su propio nombre y representación, acción de hábeas corpus para que se declare ilegal su detención.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada, mediante providencia de 21 de septiembre de 2000, el que fue contestado por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos relacionados con Drogas, mediante Oficio No. FDO-4086-2000, de 28 de septiembre de 2000 y recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el día 3 de octubre de 2000.

En dicho informe, el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas da cuenta de que la detención de los señores ADAN MONTENEGRO y YOVANY MONTENEGRO, fue decretada por la Fiscal Delegada Especializada en Drogas de la Provincia de Chiriquí, mediante resolución de 17 de septiembre de 2000.

Informa también el funcionario demandado que el fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva de los mencionados señores, "tiene su génesis en operación encubierta autorizada por este Despacho con la finalidad de lograr la incautación de gran cantidad de droga (marihuana) en la provincia de Chiriquí y la detención de los miembros de una organización criminal que pretendía negociar dicha droga".

Agrega en dicho informe, que la operación encubierta dio como resultado la aprehensión de varias personas, entre ellas al señor JORGE ENRIQUE CAICEDO OROZCO, quien proporcionó información que llevó a la detención de los señores Adán Montenegro y Yovany Montenegro. Estas personas trasladaron la droga en un camión hasta el lugar donde fue incautada. Finalmente señala que, "Al momento de su detención el señor Adán Montenegro tenía en su poder un pedazo de papel con un número de teléfono celular bajo el nombre "Mariachi", apodo utilizado por uno de los ciudadanos colombianos que hicieran entrega de la droga al agente encubierto actualmente en la provincia de Chiriquí".

Se dispone el Pleno a emitir su decisión, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones:

En primer lugar, se debe tener en consideración que estamos ante la figura del Hábeas Corpus a la que se refiere el artículo 2565 del Código Judicial, que tiene por objeto determinar si la detención decretada en contra de cualquier individuo es fundada y cumple con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes de la República.

Esto es así, y es por ello que en este tipo de acción tiene relevancia lo preceptuado en el artículo 2159 del Código Judicial, que señala los requisitos indispensables para decretar la detención preventiva, y que dice así:

> "Artículo 2159: En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por medio de diligencia, so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción expresará:
>
> 1. El hecho imputado;
> 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible;
> 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena."

En el caso en estudio, la detención preventiva de ADAN MONTENEGRO ACOSTA y YOVANY ADALBERTO MONTENEGRO SALDAÑA fue decretada por la Fiscalía Delegada Especializada en Drogas de Chiriquí, mediante resolución de 17 de septiembre de 2000, que obra de fojas 181 a 183 del expediente principal.

Según consta en el expediente, la investigación tiene sus inicios en una operación encubierta debidamente autorizada, en la cual se logró incautar gran cantidad de droga (marihuana) en la Provincia de Chiriquí y la detención de los miembros de una organización criminal que pretendía negociar dicha droga. Entre ellas, el señor JORGE ENRIQUE CAICEDO OROZCO, quien proporcionó la información que llevó a la detención de los señores ADAN MONTENEGRO y YOVANY MONTENEGRO.

Procede entonces, examinar la diligencia que dispone ordenar la detención preventiva de los señores ADAN MONTEGRO ACOSTA y JOVANY ADALBERTO MONTENEGRO S., a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos exigido por la Ley.

En dicha resolución se indica el hecho imputado a los peticionarios de la presente acción constitucional (delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA).

Las razones de hecho que se esgrimen para haber ordenado la detención preventiva de los señores Adán Montenegro Acosta y Yovany Adalberto Montenegro radican, en "la captura efectuada por unidades de la Sub-Dirección de información e Investigación de esta provincia en colaboración del sumariado JORGE CAICEDO,

la propia declaración del señor ADÁN MONTENGRO, los indicios de mala justificación que pesan sobre YOVANY MONTENEGRO toda vez que niega saber que en los bultos había droga, y los mismos fueron transportados de Panamá a Chiriquí en el vehículo de su tío ADAN CABALLERO (sic) en el cual el viajaba, e iban a bordo los colombianos JORGE CALSEDO (sic) y JOSE AGUDELO los cuales eran los custodios de la droga".

Así pues, en la resolución se señalan los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible y los elementos probatorios que figuran contra cada una de las personas detenidas. Aunado a lo anterior, en la propia declaración del señor Adán Montenegro, al ser cuestionado con respecto a si los señores JORGE ENRIQUE CAICEDO y JOSÉ SENEY AGUDELO le propusieron darle algún dinero en particular al momento de trasladar los bultos que resultaron contener marihuana, contesto: "Ellos me dijeron que me iban a dar como ochocientos balboas si hacían la venta.." Por otro lado, señala que fue engañado para llevar unos bultos y que una vez que llegó a Chiriquí fue se percató que era droga.

Por su parte, Yovany Montenegro, niega tener conocimiento que en dichos bultos había droga, y los mismos fueron transportados de Panamá a Chiriquí en el vehículo de su tio Adán Montenegro, en el cual él viajaba también en compañía de los señores Jorge Caicedo y José Agudelo.

Así tenemos que a juicio del Pleno, la Resolución de 17 de septiembre de 2000, cumple con los requisitos exigidos por la norma transcrita anteriormente, por lo tanto, el Pleno no tiene otra alternativa que considerar la legalidad de la detención decretada contra los peticionarios de esta acción de hábeas corpus.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de los señores ADÁN MONTENEGRO ACOSTA y YOVANY ADALBERTO MONTENEGRO SALDAÑA y en consecuencia, ORDENA que sean filiados nuevamente a órdenes de la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA..

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO LEDEZMA PINILLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FÁBREGA P. (ARTURO HOYOS). PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado NEMESIO FAJARDO ANGULO ha interpuesto acción de hábeas corpus a favor de LUIS ALBERTO LEDEZMA PINILLO y contra el Director de la Policía Nacional.

Acogido el recurso se libró mandamiento de hábeas corpus contra la autoridad demandada, quien remitió su informe de conducta mediante oficio AL-4210-00, de 11 de octubre de 2000, manifestando lo siguiente:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Luis Alberto Ledezma Pinillo, ni por escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.
C. No tengo bajo mi custodia ni a mis órdenes, a la persona que se ha mandado a presentar."
(Fs. 5).

No obstante, encontrándose la presente acción constitucional pendiente de resolver, la Secretaría de la Corte recibió escrito de desistimiento presentado por el Licenciado Nemesio Fajardo Angulo, que en su parte pertinente señala: "...por este medio acudo ante su digno despacho con la finalidad de presentar DESISTIMIENTO a la Acción de Hábeas Corpus que interpusiéramos a favor de nuestro representado" (fs. 6).

Conforme a la solicitud y de acuerdo a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho para desistir expresa o tácitamente un incidente, demanda o recurso que haya propuesto, el Pleno considera viable acoger el presente desistimiento.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el Licenciado NEMESIO FAJARDO A. dentro de la Acción de Hábeas Corpus promovida a favor de LUIS ALBERTO LEDEZMA PINILLO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANTIAGO CHUN TORRES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de habeas corpus presentada por Santiago Chun Torres en su propio nombre, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Por acogida esta iniciativa constitucional se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad requerida la cual contestó mediante Oficio No. 12850 de 25 de octubre del año que decurre (f. 6).

Explica la Fiscalía Auxiliar que ordenó la detención preventiva de Santiago Chun Torres mediante resolución de 7 de septiembre de 2000, por el supuesto delito contra el pudor y la libertad sexual.

Agrega que Santiago Torres no está bajo su custodia "...pues se mantiene a órdenes de la Fiscalía Segunda de Circuito de San Miguelito...mediante Oficio No. 11052 de 7 de septiembre de 2000..." (Cfr. f. 7).

De ese informe se infiere que la Corte carece de competencia originaria para conocer de este asunto. Por acreditada esa circunstancia, y como quiera que en nuestro sistema de justicia la jurisdicción en materia de derechos fundamentales está organizada de manera vertical, procede declinar el conocimiento del negocio ante el superior jerárquico del funcionario que

resultara finalmente acusado.

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA la competencia de esta acción de habeas corpus en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ M.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NÉSTOR JAVIER RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEXTO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de recurso de apelación presentado por el licenciado Fidel Murgas Abrego, contra la resolución de 16 de octubre de 2000 emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se declara legal la detención preventiva que sufre Néstor Javier Rodríguez Herrera, quien se encuentra sindicado por delito contra el patrimonio, cometido en perjuicio de Michael Villamonte Morales.

Por anunciado el recurso dentro del término de ley, procede la Corte a resolver lo que en derecho corresponda, concretamente si la medida cautelar de carácter personal que se impugna cumple con lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con lo normado por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

De manera preliminar, resulta importante advertir que esta Corporación de Justicia ha sostenido reiteradamente que la acción de habeas corpus es un mecanismo que busca determinar, exclusivamente, si la privación de la libertad ambulatoria a la cual se somete a una persona, fue decretada de acuerdo a las formalidades y exigencias que establecen tanto la Constitución como la Ley, sin que sea necesario hacer reparos en materias de fondo, como los de dilucidar la inocencia o culpabilidad del imputado, calificar la conducta delictiva que se le atribuye, o individualizar la sanción penal que eventualmente se le impondría, ya que éstos son parámetros que se deben debatir ante el juzgador de la causa, en su correspondiente momento procesal.

En el caso que nos ocupa, se aprecia que la detención preventiva de Néstor Javier Rodríguez Herrera fue decretada por la Personería Municipal del Distrito de San Félix, mediante diligencia fechada el 15 de julio de 2000, en la fase de investigación sumarial (fs.24-26). En esta diligencia se deja establecido que el hecho punible que se le atribuye al sumariado, es el de robo, cuya pena mínima es superior a los dos años de prisión. De igual manera, se deja constancia de los elementos probatorios que comprueban el ilícito y de los que vinculan al sindicado con el delito que se le imputa, los cuales son: 1) el señalamiento directo que hace el ofendido Michael Villamonte Morales contra Rodríguez Herrera; 2) la experticia médico legal practicada a Villamonte Morales, que deja constancia del golpe que recibió de parte del imputado; 3) el informe suscrito por agentes de la Policía Nacional, que pone de manifiesto que cuando ocurre la

aprehensión del sindicado se le encuentra un arma blanca y la prenda de oro robada; 4) la declaración de Rodrigo Alberto Rodríguez Santo, testigo presencial de los hechos; y 5) la declaración indagatoria del propio Rodríguez Herrera, en la cual acepta la autoría del comportamiento delictivo.

Como se aprecia, la diligencia que ordena la detención preventiva de Rodríguez Herrera cumple con las exigencias establecidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, de modo que resulta procedente la confirmación de la resolución judicial apelada y, por consiguiente, mantener la medida cautelar de carácter personal aplicada.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 16 de octubre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, apelada, y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Juzgado Sexto de Circuito de Chiriquí.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YURI VARGAS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción constitucional de habeas corpus presentada por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila a favor de Yuri Vargas, quien se encuentra privado de su libertad corporal a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia, por estar sindicado en los delitos de homicidio, robo, secuestro y asociación ilícita para delinquir, cometidos en perjuicio de Juan Antonio Barletta y Lorena Anguizola.

La defensa técnica solicita la revocatoria de la medida privativa de la libertad ambulatoria, con el argumento de que "Nuestro representado ha cumplido más de cinco años de prisión y por el delito más grave por el cual el jurado de conciencia lo encontró responsable, es viable la aplicación de una medida cautelar diferente a la privación de la libertad, que hoy día pesa sobre ellos" (f.3 del cuaderno de habeas corpus).

Recibida la presente acción constitucional subjetiva, se dictó mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante Oficio No. 346 O.V. de 27 de septiembre de 2000. En el informe de conducta se expresa que la detención de Yuri Vargas la ordenó el Ministerio Público durante la etapa de instrucción sumarial relacionado en el delito de homicidio cometido en perjuicio de Juan Barletta y Lorena Anguizola. Agrega que el sumario se encuentra pendiente de dictar sentencia, después de que un tribunal de jurados de conciencia encontrara a Yuri Vargas y otros, culpables por los delitos de robo, secuestro y asociación ilícita para delinquir (fs.6-10).

Como cuestión previa, resulta preciso destacar que luego de ser repartido

el presente negocio constitucional, este despacho sustanciador, mediante providencia calendada 29 de septiembre de 2000, decidió devolver el caso a la Secretaría General de la Corte para que le fuera adjudicado al Honorable Magistrado Adán Arnulfo Arjona, toda vez que de las constancias procesales se desprendió que existía actuación previa y de conformidad a lo preceptuado en los artículos 42 y 108 del Código Judicial y a precedentes de esta Corporación de Justicia, la acción debía ser resuelta por ese despacho (fs.11-12 del cuaderno de habeas corpus). Sin embargo, mediante providencia fechada 2 de octubre del año que decurre la Honorable Magistrada Presidenta, Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, dispuso mantener el reparto del expediente en este despacho sustanciador (f.14), por lo que se procede a resolver lo que en derecho corresponda.

En tal empeño, se advierte que el habeas corpus como institución de garantía consagrada en nuestra carta fundamental, es un mecanismo que busca determinar, exclusivamente, si la privación de la libertad a la cual se somete a un individuo, fue realizada de acuerdo a las formalidades y exigencias que establecen tanto la Constitución como la Ley, sin hacer reparos en materias de fondo, es decir, que el tribunal de habeas corpus no puede inmiscuirse, por ejemplo, en las tareas de dilucidar la inocencia o culpabilidad del imputado, ni entrar a calificar la conducta delictiva que se le atribuye, ni individualizar la sanción penal que eventualmente se le impondría, pues éstos son menesteres que le corresponden al juzgador de la causa en su debido momento procesal.

Bajo la anterior premisa, corresponde examinar la situación jurídica del sumariado Yuri Vargas, a los efectos de determinar la legalidad de su privación corporal. El examen del cuaderno penal permite conocer que la encuesta tiene su origen en denuncia criminal presentada por María Esperanza Martínez de Barletta, por el secuestro de su hijo Juan Antonio Barletta Martínez y de su esposa, Lorena Isabel Anguizola Madrid. Posteriormente, en una residencia ubicada al final de la calle que conduce al nuevo Club de Golf, se da el hallazgo de sus cuerpos sin vida y en avanzado estado de putrefacción. De acuerdo a las consideraciones médicos legales consignadas en el protocolo de necropsia, Barletta Martínez murió a consecuencia de "HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN CRANEO Y CARA" (f.679), en tanto que Anguizola Madrid por "HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO EN EL CRANEO" (f.746).

Del hecho de sangre investigado, resultaron inicialmente involucrados Yuri Vargas Castaño, Nelson Alberto Penagos Molina, José del Carmen Saavedra Sánchez y Manuel Antonio Castro Pinzón. La aprehensión de estas personas se verificó el 10 de agosto de 1995, según da cuenta el oficio calendado 11 de agosto de 1995, emitido por el Secretario de la Policía Técnica Judicial visible a foja 6 de los antecedentes y de los demás documentos consultables de fojas 7 a 9 de las sumarias. La Fiscalía Auxiliar de la República, mediante diligencia fechada 15 de agosto de 1995, decreta formalmente la detención preventiva de Yuri Vargas y otros, por la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro y robo (fs.166-173 de las sumarias). Posteriormente, el agente de instrucción, mediante diligencia calendada 24 de agosto de 1995, dispone la detención preventiva de Yuri Vargas y otros, también por el delito de homicidio (fs.440-444 de las sumarias). La privación corporal de Yuri Vargas fue mantenida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 11 de junio de 1997, cuando lo llama a responder criminalmente por los delitos de homicidio, secuestro, robo y asociación ilícita para delinquir (fs.1,784-1,826 de las sumarias), estado en el cual se mantiene hasta la actualidad.

De la reseña descrita se desprende que Yuri Vargas tiene, en el presente, cinco años (5) y un (1) mes de estar detenido por su participación en los delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro y robo, cometidos en perjuicio de Juan Antonio Barletta Martínez y de su esposa, Lorena Isabel Anguizola Madrid.

Según el defensor de Vargas su detención debe ser revocada porque ha cumplido en prisión el mínimo de la pena que le corresponde por el delito más grave por el cual fue encontrado culpable, que es el de robo, descrito en los

artículos 185 y 186 del Código Penal, petición fundamentada en el artículo 2148-A del Código Judicial. Esta disposición legal responde al siguiente tenor:

> "La detención preventiva será revocada por el juez sin más trámites, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las constancias procesales. En estos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial".

Del precepto legal transcrito se infiere que lo que se pretende evitar es que las personas sometidas a una privación corporal, permanezcan en este estado de manera indeterminada, sin que, jurídicamente, se le haya definido su situación procesal en un juicio que le asegure el cumplimiento de todas las garantías y derechos constitucionales y legales. Esta deducción surge de la práctica judicial que se efectúa en algunos negocios penales, a los que se les imprime un trámite procesal que sobrepasa considerablemente el término de la fase de investigación sumarial o del juicio oral y, consecuentemente, origina una situación de letargo jurídico que impide concretar el status del sumariado; de modo que resulta inconcebible que sea él, que goza del principio de presunción de inocencia, quien tenga que padecer, en reclusión, los efectos negativos de la administración de justicia. Es así como se justifica la revocatoria de la medida privativa de la libertad ambulatoria.

En el caso que nos ocupa, esta Superioridad advierte que la situación jurídica de Yuri Vargas tiene matices distintos a lo plasmado anteriormente. La particularidad de su caso radica en el hecho de que su status procesal no se encuentra indefinido, pues ya se ha verificado la etapa del juicio oral que concluyó con la emisión, por parte de un tribunal de jurado de conciencia, de un veredicto de culpabilidad por la comisión de los delitos de robo, secuestro y asociación ilícita para delinquir (fs.f.2,214-2,219). La decisión proferida por el jurado de conciencia se caracteriza por ser obligatoria, definitiva y no sujeta a censura, circunstancia que implica la consecuencia inmediata de la aplicación de la respectiva sanción penal por la autoría de estos tres comportamientos delictivos, de conformidad con las reglas de unidad y pluralidad de hechos punibles, contempladas en la legislación penal.

Siendo esa la realidad, queda descartada una justificación para revocar la privación ambulatoria que sufre Yuri Vargas. Por el contrario, se debe resaltar que el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado de conciencia, permite inferir la existencia de circunstancias de excepcional relevancia, que justifican la permanencia del procesado en el estado de detención que actualmente sufre. Según la doctrina la detención preventiva encuentra su fundamento en la necesidad de defender los intereses generales del conglomerado social, garantizando la seguridad de las personas y bienes, así como el orden público, evitando la posibilidad de que se cometan nuevos hechos punibles o venganza de los familiares de la víctima, facilitando la instrucción del sumario y el descubrimiento de la verdad, impidiendo que el encartado haga desaparecer los rastros de su delito, o impida con sus amenazas y coacciones que los que conocen aquella verdad puedan hacerla contar ante el juez, y además, asegurar la ejecución del fallo condenatorio, evitando la fuga u ocultación del procesado (Cfr. GARCÍA VALDÉZ, Rafael. Derecho Procesal Criminal; Editorial Reus, Madrid, 1944, pág.273). Para el autor Vélez Mariconde la detención preventiva "se justifica como un medio indispensable para la defensa del derecho, esto es, como una medida imprescindible para asegurar el imperio de la ley penal. Es una especie de autodefensa del propio ordenamiento jurídico ante el peligro de que sea burlado" (VÉLEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal; Tomo II, Ediciones Learner, Buenos Aires, 1969, pág.476).

Precisamente el peligro de fuga y el cumplimiento de la sanción penal respectiva, son circunstancias que justifican mantener la detención censurada, ya que los fines de la justicia quedarían desprotegidos, con la puesta en

libertad del condenado.

En virtud de que la situación jurídica de Yuri Vargas se encuentra definida, tras el veredicto condenatorio emitido por el jurado de conciencia, y por razón de la defensa social y para efectos de garantizar los fines de la justicia y la aplicabilidad de la ley penal, la Corte encuentra justificado mantener en estado de detención al procesado Yuri Vargas.

Por las consideraciones que anteceden, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención que sufre Yuri Vargas y DISPONE ponerlo nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DEIRA MAGALLON CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado HUMBERTO MOSQUERA BETHANCOURTH ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de DEIRA MAGALLON contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus la autoridad demandada, mediante oficio No.FD2-T-11-4146-2000 de 9 de octubre de 2000, contestó lo siguiente:

"...
A. La orden de detención de la señora DEIRA MAGALLON, fue decretada mediante providencia fechada siete (7) de septiembre del dos mil (2000), por este Despacho.

B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de la señora DEIRA MAGALLON, se reflejan en que el día 2 de septiembre del año en curso, miembros de la Zona de Policía de San Miguelito, Sub-DIIP en conjunto con el Juez Nocturno de Policía Licdo. Luis Felipe Hurtado, realizaron Diligencia de Allanamiento en la residencia ubicada en el Sector No.18 de Veranillo, casa No.248 de propiedad del señor CRISPINO MURILLO y DEIRA MAGALLON, debido a que se tenía información de que en dicho inmueble se introdujo un ciudadano desconocido portando arma de fuego.

Por lo que se coordina con la autoridad competente a fin de verificar la información, siendo éste el Licenciado Luis Felipe Hurtado Juez Nocturno de Policía de San Miguelito.

Al llegar a la residencia procedieron a identificarse como miembros de la Policía al igual que la autoridad competente. En donde se negaban a atendernos y menos abrir la puerta y la resistencia de éstos a permitir el acceso al inmueble. Por lo que el juez ordenó

utilizar la fuerza para lograr entrar al inmueble, logrado así entrar y controlar a las personas presentes en el inmueble.

En el registro el Sargento Muñoz encontró en una tubería de PVC de 4" aproximadamente un cartucho plástico transparente que en su interior contiene la cantidad de ciento cincuenta fragmentos pequeños de una sustancia sólida que se presume sea droga (piedra). De igual forma el Sargento M. Díaz encontró lo siguiente: B/.52.00 balboas en denominaciones de un balboa, un envoltorio de papel aluminio que se presume sea crack, un envoltorio de papel aluminio conteniendo una sustancia blanca que se presume sea cocaína. El cabo Chavarría encontró residuos de la misma sustancia a un costado del inodoro y se logró recolectar en una bolsita plástica abierta transparente que contiene una sustancias cremosa que se presume sea droga piedra o crack y un colador color naranja pequeño.

Los ciudadanos que se encontraban dentro del inmueble responden a los nombres de Crispino Murillo y Deira Magallón, a quienes se le leyeron sus derechos constitucionales y fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

CRISPINO MURILLO, al ser indagado se acogió al contenido del artículo 22 de la Constitución Nacional.

DEIRA MAGALLON, al rendir declaración indagatoria manifestó que ella se encontraba tomando unos tragos con el primo de su señor en la sala y que éste salió a comprar más bebida ya que se había acabado y en eso llegó la policía y empezaron a registrar y que solo encontraron los B/.52.00 dólares que son del muchacho Crispino. Agrega que el paquete de la droga la encontraron en la casa de al lado, dice no consumir, ni vender droga. También manifestó que su cuarto no ha sido allanado nunca, pero el de al lado sí.

Rinde declaración jurada el sargento Juan Muñoz, quien se afirmó y ratificó del informe e igualmente manifestó que ellos fueron a esa residencia en busca de armas de fuego y al realizar la diligencia en asocio con el Juez Nocturno de Policía y al identificarse y solicitarle a los ocupantes que abrieran estos se negaron, por lo que el Juez ordenó hacer uso de la fuerza para poder abrir dos puertas de hierro que se mantenía en dicho inmueble y que el encontró en una tubería de PVC de aproximadamente 4 pulgadas dentro de esta un cartucho plástico transparente que en su interior contiene fragmentos pequeños de una sustancia que se presume sea droga. También explicó el sargento Muñoz que la residencia es una sola casa, de un lado o mejor dicho de la parte lateral tiene dos puertas que hace la división de dos cuartos pero en el cuarto ocupado por estos ciudadanos fue donde se encontró la droga y el dinero.

A fojas 40 y 41 del sumario se encuentra el historial penal y policivo de Crispino Murillo.

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva se consagra en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
..."

El licenciado MOSQUERA BETHANCOURT por su parte, considera que la detención que sufre su patrocinada es ilegal, en virtud de que la droga incautada no se encontraba en el cuarto de DEIRA MAGALLON y específicamente señaló:

"...
TERCERO: Según el informe declaración del miembro de la policía y diligencia de allanamiento, se hace constar que en el cuarto de mi representada no encontraron ninguna sustancia ilícita, sin embargo,

> existía la sustancia en cuestión en una tubería de P:V:C., la cual se encuentra en la vereda de un lugar de libre acceso al público y otros residentes de la casa, los cuales mantienen cuartos arrendados.
> ..."

El Pleno procede a determinar si la detención de la señora DEIRA MAGALLON RUIZ es legal, previa las siguientes consideraciones.

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que a la señora MAGALLON RUIZ se le imputa Delito contra la Salud Pública relacionado con Drogas. Visible de fojas 25 a 26 de las sumarias consta la resolución de expedida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en la que se decreta orden de detención preventiva contra la sindicada, entre otros.

Consta a foja 2 del expediente la providencia mediante la cual el Juez Nocturno de Policía del Distrito de San Miguelito ordenó realizar diligencia de allanamiento y a foja 5 la diligencia de allanamiento en donde se logra incautar la sustancia ilícita y el dinero en efectivo. Con relación al lugar específico donde estaban las sustancias ilícitas se señaló:

> "... al realizar la requisa dentro del inmueble se encontró en la parte de afuera del servicio 2 envoltorios de color plateado, en la parte derecha de la entrada de la casa dentro de la casa hay una tubería de aguas negras donde estaba un cartucho que contenía en su interior 150 sustancias de color cremoso que se presume sea (piedra-droga), con residuo en un paquetito transparente, la cantidad de B/.52.00 en billetes de uno y una coladera de tamaño chica de color naranja ..."

En el informe elaborado por el sargento Juan Muñóz visible a foja 6 se lee lo siguiente:

> "... el Juez Nocturno ordenó la utilización de la fuerza necesaria para lograr incursionar al inmueble a través de la puerta principal logrando a si entrar y controlar a las personas dentro de ésta, encontrando yo el Sgto 1ro Muñoz en una tubería de PVC de 4" aproximadamente dentro de esta un cartucho plástico transparente que en su interior contiene la cantidad de ciento cincuenta fragmentos pequeños de una sustancia sólida de color crema que se presume sea droga (Piedra o crack).
>
> De igual manera siguiendo la requisa en una de las recamaras del inmueble el sgto.M.Díaz encontró lo siguiente:
>
> 1. La suma de B/.52.00 en efectivo en denominación de 1.00.
>
> 2. Un envoltorio en papel aluminio conteniendo una sustancia sólida de color crema que se presume sea droga (crack)
>
> 3. Un envoltorio en papel aluminio conteniendo una sustancia o polvo de color blanco que se presume sea droga cocaína. Seguidamente el cabo 2do Chavarría a un costado del inodoro se logró recolectar residuos de la misma sustancia en una bolsita plástica abierta transparente que contiene sustancia de color cremosa que se presume sea droga (piedra o crack) y un colador de color naranja pequeño ...".

El Pleno observa a foja 11 del expediente la Diligencia de Prueba de Campo realizada a las sustancias ilícitas incautada las cuales resultaron positivas.

Al rendir declaración indagatoria DEIRA MAGALLON señaló que ella le abrió la puerta a las autoridades, que al registrar la casa no encontraron droga, solo

B/52.00 pertenecientes a su primo CRISPINO MURILLO quien se dedica a la buhonería. Agrega que en la casa que habita hay varios cuartos y que en el suyo no encontraron droga sino en el cuarto de al lado.(f.19)

La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de DEIRA MAGALLON y CRISPINO MURILLO mediante resolución de 7 de septiembre de 2000 por existir elementos de presencia y oportunidad que los vinculan con un Delito contra la Salud Pública Relacionado con Drogas.(25-26)

De fojas 31 a 34 del expediente consta la declaración jurada rendida por el agente Muñóz donde se ratifica del informe elaborado y reitera que el lugar donde se encontró el dinero y las sustancias ilícitas fue el cuarto ocupado por DEIRA MAGALLON, ya que el otro cuarto se encontraba vacío.(f.33)

Estima el Pleno que, aún cuando la investigación se encuentra en sus inicios, el informe del agente policial que participó en el allanamiento debidamente ratificado, y el acta de la diligencia de allanamiento, donde se plasma que en diversos lugares de la vivienda se encontraron sustancias ilícitas y el dinero fraccionado, constituyen indicios suficientes que vinculan a DEIRA MAGALLON con el ilícito investigado.

Por último, aún cuando se desconoce el peso de la droga incautada, de las sumarias se deduce que su cantidad excede con mucho las porciones que se consideran destinadas al consumo, ya que se incautaron ciento cincuenta fragmentos contentivos de droga y tres envoltorios más; y dado que el delito tiene una penalidad mínima mayor de dos años, el Pleno considera que en la detención de la señora MAGALLON RUIZ no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República ni las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y siendo ordenada por autoridad competente, lo procedente es decretar legal la medida cautelar aplicada.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de DEIRA MAGALLON RUIZ y ORDENA que sea puesta nuevamente a órdenes de el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MELVIN RICHARD MALONEY CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licdo. MAURO OCTAVIO PÉREZ CITTADINI, a favor del señor MELVIN RICHARD MALONEY, y contra el Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Droga, Licdo. ROSENDO MIRANDA.

EL ACCIONANTE

El Licdo. PÉREZ CITTADINI manifiesta que el beneficiado con la presente Acción de Hábeas Corpus se encuentra detenido a órdenes del Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Droga, pero al momento de su detención no se le encontró en su poder ni dentro de sus pertenencias sustancia ilícita alguna, y la sustancia que le fue incautada resultó negativa ante la prueba de campo, por lo que solicita se declare la ilegalidad de la orden de detención preventiva decretada contra su poderdante y se ordene su libertad(Fs.1-3).

LA AUTORIDAD DEMANDADA

Librado el mandamiento de Hábeas Corpus, el Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Droga, mediante oficio FD-0-4202-00 de 5 de octubre de 2000, manifestó que sí ordenó la detención preventiva del señor MELVIN RICHARD MALONEY, a través de resolución motivada de fecha 18 de septiembre del año en curso.

Expresa el Fiscal que la medida cautelar adoptada se fundamenta en que el 18 de septiembre, los inspectores de Fiscalización Aduanera de servicio en el Aeropuerto de Tocumen le detectaron al señor MALONEY tres bultos con supuesta droga, los que transportaba adheridos a diferentes partes de su cuerpo, en momentos en que se disponía a abandonar nuestro país.

En cuanto al fundamento de derecho, expresa el Fiscal que se encuentra contemplado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Agrega que el detenido al momento de rendir declaración indagatoria aceptó los cargos que se le imputan y describió como se dieron los hechos.(F.6-7)

Por otra parte, expresa el Fiscal que la sustancia incautada fue sometida a la Diligencia de Prueba de Campo arrojando resultados negativos, para la droga conocida como cocaína. De igual manera, la supuesta sustancia ilícita fue remitida al Laboratorio Especializado en Sustancias Controladas de la Policía Técnica Judicial, dando resultado negativo por drogas ilícitas. Parte de la sustancia fue remitida al Laboratorio de la DEA en los Estados Unidos y están en espera de los resultados del peritaje.(F.7)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Primeramente, se debe señalar que la Acción de Habeas Corpus tiene como objeto el proteger específica y concretamente la libertad corporal o física del individuo frente a las detenciones arbitrarias provenientes de las autoridades.

Así, corresponde a esta Superioridad entrar al análisis de las sumarias, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor MELVIN RICHARD MALONEY se ajusta o no enteramente a las exigencias legales correspondientes.

Consta en la encuesta penal un Informe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Zona Aeroportuaria en el que se señala que el 18 de septiembre del año en curso, el señor MELVIN RICHARD MALONEY, de nacionalidad norteamericana, de 75 años de edad, con pasaporte N° 110692651, se disponía a salir de Panamá con destino a Nueva Jersey, en el vuelo 798 de la línea aérea "Continental".

No obstante, el señor MALONEY fue revisado, encontrándosele adherido a su cuerpo tres bultos o paquetes de plástico de color blanco, que contenían un polvo blanco en su interior que se presumía era droga y al ser sometida a la prueba de campo dio como resultado negativo para la sustancia ilícita conocida como cocaína.(Fs.2 y 6)

Con base en lo anterior, mediante providencia del 18 de septiembre de 2000, el Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Droga profirió la orden de detención preventiva contra el señor MALONEY indicando lo siguiente:

"Se desprende la comisión de un delito Contra la Salud Pública del

> cual se evidencia que existen elementos de flagrancia que vinculan al ciudadano de nacionalidad norteamericana MELVIN MALONEY con su comisión, ligado al hecho de que en los informes confeccionados por el Departamento de Fiscalización Aduanera de la Zona Aeroportuaria, se señala directamente al encartado como la persona que transportaba la supuesta droga adherida a su cuerpo."(F.8)

Por su parte, el señor MALONEY al rendir declaración indagatoria aceptó los cargos que se le imputan señalando que conoció a un sujeto de nombre JOE, en el área de Queen, Estado de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, quien le dijo que si quería venir de vacaciones a Panamá, que debía ir a la agencia a comprar el boleto aéreo de ida y vuelta. JOE le ofreció 10.000.00 US$ por venir a Panamá, recoger unos paquetes y llevarlos de vuelta a Estados Unidos, incluyendo todos los gastos en que incurriera durante el viaje. Le dijo que se hospedara en el Hotel Caesar Park Panama que allí iba a ser contactado.(Fs.31-32)

Manifiesta el imputado que el sábado 16 de septiembre a las 3:00 p. m., un sujeto que dijo ser amigo de JOE fue a su habitación, le mostró los paquetes y le dijo que le colocaría la mercancía en su cuerpo, que no se preocupara que alguien lo estaría esperando en el aeropuerto de Nueva Jersey, le pagarían y él debía entregar los paquetes.(F.32)

A las 6:00 a.m del lunes 18 de septiembre, vino otro sujeto y le acomodó un paquete de la mercancía entre las piernas, otro a lo largo del área del estómago, y otro en la parte inferior de la espalda y se dispuso a ir al Aeropuerto para salir de Panamá, siendo detenido en las instalaciones aeroportuarias(F.33).

A foja 36 de las sumarias se indica que, de la sustancia incautada, consistente en un polvo blanco, se tomaron tres muestras de 3 gramos cada una, una de las cuales fue remitida al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, Departamento de Criminalística, Policía Técnica Judicial. En el peritaje se indicó lo siguiente:

> "CONCLUSIONES: Certificamos que las muestras analizadas resultaron NEGATIVAS POR DROGAS ILÍCITAS".(F.42)

Cabe destacar que el Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Droga, mediante oficio FDO-3943-00 calendado 19 de septiembre de 2000, dirigido al señor JAY BERGMAN, Jefe de la "Drug Enforcement Administration" (DEA) con sede en la Embajada de Los Estados Unidos de América en Panamá, hizo la siguiente solicitud:

> "Por medio del presente oficio le solicitamos nos brinde la colaboración necesaria a fin de que sea sometida a análisis la muestra que le remitimos a fin de determinar la posible presencia de "droga" conforme aparece en el artículo 268 (SIC: léase 256)del Código Penal de la República de Panamá y en la Convención de Viena Sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
> Lo anterior se requiere dentro de sumarias por supuesto delito Contra la Salud Pública relacionado con Drogas que adelanta este Despacho, donde aparece involucrado el ciudadano norteamericano MELVIN MALONEY".(F.37)

Por su parte, el señor BERGMAN, mediante nota calendada 5 de octubre del 2000 indicó lo siguiente:

> "El 22 de septiembre del 2,000, esta oficina envió las muestras por mensajería diplomática al Laboratorio de Pruebas e Investigaciones Especializadas de la DEA, ubicado en Mclean, Virginia. EL 4 de octubre del 2,000, recibí comunicación del laboratorio en donde me informaban que por motivos técnicos, hasta noviembre no podrían

> llevar a cabo las pruebas específicas requeridas. Con el fin de acelerar el proceso, les he pedido que envíen las muestras al laboratorio local más cercano, el 'Mid-Atlantic Laboratory' de la DEA, y yo les estaré informando a su oficina formalmente, tan pronto estén disponibles dichos resultados."(F.43)

Sobre este proceder de nuestros funcionarios de instrucción, debe el Pleno observar que si bien se encuentra amparado en Convenios y Tratados Internacionales, como es el caso de la Convención de Viena Sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y el Tratado de Asistencia Legal Mutua, el oficio no explica el fundamento legal en el cual se apoya, de modo que quede consignada la legalidad de la petición en el marco de las normas que rigen las relaciones entre los Estados en el concierto internacional.

FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA

Luego de analizar las constancias procesales, observa el Pleno de esta Corporación de Justicia que la sucesión de actos preparatorios y de ejecución llevados acabo por el señor MELVIN RICHARD MALONEY eran actos típicos que perfeccionaban el tráfico internacional de drogas en su modalidad de sacar del territorio nacional sustancias ilícitas con destino a otros países, contemplado en el artículo 255 del Código Penal.

En el caso en estudio, se trata de una persona de nacionalidad extranjera que entra al territorio nacional para transportar cierta cantidad de droga con destino a Estados Unidos, completando los actos idóneos para consumar el hecho delictivo, transportando la droga adherida a su cuerpo, pero su actuar se vio frustado al impedirsele la salida del país.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la sustancia incautada, es decir tres paquetes de polvo blanco, tras ser analizadas en el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, dio resultado negativo para la presencia de sustancia de droga ilícita, la cual es definida por nuestra legislación punitiva vigente en los siguientes términos:

> Artículo 256. Para los efectos de la ley penal, droga es toda sustancia que produzca dependencia física o psíquica, como los narcóticos, fármacos, estupefacientes y todos aquellos productos, precursores y sustancias químicas esenciales, que sirven para su elaboración, transformación o preparación, de conformidad con las disposiciones legales en materia de salud, convenios y acuerdos vigentes en la República de Panamá.

Por tanto, aun cuando los actos de preparación y ejecución son idóneos para la comisión del hecho punible, la conducta no encuadra en el tipo penal de delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico internacional de drogas, toda vez que la sustancia incautada no es de aquellas que el legislador ha descrito como droga, por lo que procede declarar la ilegalidad de la medida cautelar personal adoptada contra el señor MELVIN RICHARD MALONEY.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de MELVIN RICHARD MALONEY y, en consecuencia, ORDENA que sea puesto en libertad siempre y cuando no tenga otra causa pendiente que amerite detención preventiva.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE ABDIEL ALBERTO PILE Y ENEIDA DE PILE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán interpuso ante la Secretaría General de esta Corporación judicial, acción de Hábeas corpus a favor de ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA y ENEIDA DE PILE, y contra el Director de la Policía Nacional.

LA ACCION DE HABEAS CORPUS

Se activa la jurisdicción constitucional en base a que el día 22 de septiembre en horas de la noche, fueron aprehendidos los señores PILE por unidades de la Policía Nacional en su residencia, encontrando presuntamente sustancia ilícita (foja 1).

Destaca el letrado Herrera Morán que al presentarse en horas de la mañana a la estación de Policía del Area G, no le permitió el teniente Carlos Delgado sostener entrevista con sus clientes caí pretexto de acatar ordenes superiores. También muestra su inconformidad puesto que a sus clientes les filmó sus rostros una televisora local y las supuestas evidencias en su presencia (foja 2).

AUTORIDAD DEMANDADA

Una vez librado el mandamiento ejecutivo contra dicha autoridad, mediante nota calendada 26 de setiembre de 2000, numerada AL-3095-00, informó que los señores PILE se encontraban a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas, ya que los mismos resultaron aprehendidos mediante una compra controlada.

Dado lo anterior, se dirigió el mandamiento a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, autoridad que ordenó la aprehensión de los ciudadanos, la que a través de oficio N°FD-0-4185-98 fechado 3 de octubre de 2000, indicó que si había decretado la detención de ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA, mediante resolución motivada de 26 de septiembre del presente; respecto a la detención de ENEIDA GARCIA DE PILE negó haber decretado la misma (f. 9).

Los fundamentos de hecho que llevaron a decretar la detención del prenombrado PILE GARCIA fue producto de una compra simulada de drogas, en atención a que las unidades la Policía Nacional lo habían solicitado puesto que se tenían informes que en la residencia de éste ciudadano, ubicada en Santa Librada, Quinta etapa, casa N°C-419 se expendía drogas en sobres y bolsitas de diversos precios. Luego de la compra simulada, se realiza diligencia de allanamiento en la residencia señalada, encontrándose la sustancia ilícita en varios sobrecitos plásticos y en dos bolsas, la que resultó positiva a la prueba de campo así como la suma de setenta y dos dólares en billetes de uno (fs. 9-10).

Como fundamento de derecho de la detención se apego a los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial concordado con la ley N°13 de 27 de julio de 1994.

ANALISIS DE LA CORTE

Examinados la demanda de hábeas corpus y la respuesta al mandamiento girado, corresponde pronunciarnos sobre la legalidad de la detención.

Consta en el sumario de fojas 3 a 8 Informes de vigilancia en el que se destaca que en la residencia C-419 de la Quinta etapa de Santa Librada, se dedica un sujeto apodado "MELLO" a la venta de sustancias sicotrópicas.

Se ven de foja 12 a 14 copia de los billetes utilizados para la compra simulada.

En la foja 15 se verifica la autorización del Fiscal de Drogas para llevar a cabo la compra simulada de la sustancia ilícita.

La resolución del agente instructor que decreta el allanamiento a la residencia donde habita el sujeto dedicado a la venta investigada reposa a foja 15.

A través de nota de 25 de septiembre del año que decurre el Mayor Demóstenes Batista remite a órdenes del Fiscal de Drogas al ciudadano Pile García (foja 42).

Practicada la diligencia de allanamiento se efectuó prueba de campo que resultó positiva respecto a la sustancia incautada (foja 43).

Al rendir declaración indagatoria el sindicado PILE GARCIA aceptó los cargos que se le imputan y señaló que su amigo Leonel Ospino y su madre no tienen nada que ver con su actuar (fs. 51-53).

La señora ENEIDA GARCIA DE PILE rindió declaración indagatoria y negó la comisión del ilícito (foja 57).

Corre de fojas 63 a 68 la resolución de la Fiscalía de Drogas que dispone la detención del sindicado ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA más no la de la señora ENEIDA GARCIA DE PILE.

Hasta este momento procesal, emerge de los elementos estudiados que el hecho punible está acreditado y la vinculación del sindicado ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA está acreditada, igualmente se trata de una penalidad que supera los dos años de prisión.

Por otro lado, es necesario advertirle al letrado Herrera que el instituto de hábeas corpus es un medio para determinar si la detención de un ciudadano es efectuada respetando la Constitución, los derechos humanos y las normas legales. No constituye un canal para denunciar posibles conductas antijurídicas (delitos o faltas) en que incurran los agentes y oficiales de la Policía Nacional en el cumplimiento de sus deberes, ya que la investigación corresponde al Ministerio Público y a la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policiía Nacional.

Toda vez que en el presente negocio se observa por una parte, que no ha sido ordenada la detención de la señora ENEIDA DE PILE y por la otra, que la detención preventiva decretada contra ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA se ajusta a los presupuestos legales, dictaremos una resolución en atención a esto.

Por lo ya expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la solicitud de libertad de ENEIDA DE PILE y DECLARA LEGAL la detención preventiva de ABDIEL ALBERTO PILE GARCIA sindicado por delito Contra la Salud Pública.

Notifiquese y Archivese,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO TULIO MOSQUERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por Nulea Elena Mosquera Zuñiga, a favor de MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, sindicado por el supuesto delito Contra la Salud Pública, contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado Patricio Candanedo, quien mediante oficio No.FD2-T12-4451-00 de 13 de octubre de 2000, rinde su informe indicando:

> A. La orden de detención preventiva del ciudadano MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, fue decretada por este despacho el 26 de septiembre de dos mil (2,000), por su presunta vinculación con un delito Contra la Salud Pública, relacionado con drogas.
>
> B. El fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva del ciudadano MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, tiene su origen el día 21 de septiembre, a raíz de una diligencia de allanamiento practicada por la corregiduría de Santa Ana en la residencia 1329, de la Avenida Ancón, cuarto 28, primer piso, sito (sic) en el cual, de acuerdo al acta de allanamiento se encontraban los ciudadanos MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, Y HERIBERTO ENRIQUE LEDEZMA JACOBS.
> Durante el registro el inmueble, se detectaron, ciento cincuenta y cuatro pedazos de carrizos (154) vacíos; 20 carrizos largos vacíaos, nueve (9) bolsitas plásticas trasparentes vacías; dentro de una media de hombre, una bolsita plástica trasparente con polvo blanco presuntamente droga y un anaquel se encontró un envoltorio de papel chocolate con hierba seca, presunta marihuana. Desde la ventana del inmueble se pudo observar en el techo de otra vivienda una bolsita plástica trasparente con ocho (8) ca- rrizos de plásticos, con un polvo, presunta droga COCAINA.
> Este despacho da inicio a la investigación de los hechos por estar frente a la posible comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas, efectuándose al contenido de las evidencias, la prueba de campo preliminar, la que arrojo (sic) resultados positivos para el reactivo que determina presencia de las droga COCAINA Y MARIHUANA (fs. 14).
> De lo anotado, se observa la comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas, operan en contra del sindicado MOSQUERA MOSQUERA: el informe policial visible a fojas 3 a 6.
> Contamos con la orden y diligencia de allanamiento de la Corregiduría de Santa Ana, en la cual se deja constancia del hallazgo de las sustancias ilícitas.
> Al ser indagado MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, acepta la tenencia de la droga, alegando a su favor que eran para ser consumidas, tanto por él, como por los sujetos que menciona como MAURICIO Y COKI.
> El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva de MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
> C. Actualmente MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA se encuentra detenido

y filiado a nuestras ordenes y es inmediatamente puesto a ordenes de esa alta corporación".

El recurrente en su escrito menciona los motivos en que fundamenta el recurso de habeas corpus presentado de la siguiente manera:

"PRIMERO: Que el mismo fue detenido por alrededor de la Avenida Nacional y se le incautó por los alrededores de una residencia 8 fracciones cocaína, ya que el mismo tiene tendencia a consumir droga y es la primera vez que se encuentra siendo procesado por las autoridades.

SEGUNDO: El mismo mantiene un cupo en el Centro de Rehabilitación Teen Chalenger, ya que el mismo es consumidor de drogas a muy temprana edad y es por esto que le solicitamos que el mismo sea rehabilitado en dicho centro, en base al artículo 263-F del Código Penal, ya que la cantidad es escasa y es tóxico dependiente de la misma.

TERCERO: El joven Mauro Mosquera M., se responsabilizó de los 8 carrizos y el resto de la droga incautada que es propiedad presumiblemente del propietario de la vivienda y de otras terceras personas y por esto que solicitamos que se practique la práctica de prueba en la medida posiológica para efectos de consumo dictado por el médico forense.

Solicitamos a la Honorable Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en Pleno, se declara ilegal la detención preventiva que viene sufriendo MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, y en consecuencia se ordene su inmediata libertad y sea remitido al Centro de Rehabilitación Teen Chalenger".

La presente encuesta penal se inicia con la diligencia de allanamiento visible de fojas 3-5 del sumario, realizada por el Corregidor de Santa Ana, Licenciado Herman Weeks el día 21 de septiembre de 2,000, cuando en compañía del Capitán 6305, RAMÓN CASTELLANOS, y el Agente 20421 JOSÉ DANILO PALMA, se apersonaron a la residencia ubicada en Santa Ana, Casa No.1329, primer piso, cuarto No.28, donde se incautó dentro de una caja de color rojo, la cantidad de ciento cincuenta y cuatro (154) carrizos cortos vacíos, veinte (20) carrizos largos, una (1) bolsita plástica trasparentes, nueve (9) bolsitas plásticas transparentes vacías, dentro de una media de color negro se encontró un envoltorio forrado con cinta adhesiva que en su interior contenía una bolsa plástica trasparente con un polvo blanco que se presumió fuera cocaína y un envoltorio con una yerba seca que se presumió fuera la droga conocida como marihuana.

A fojas 14 del sumario, se aprecia la Diligencia de Prueba de Campo, que arrojó resultados positivos para la determinación de la droga conocida como "Cocaína y Marihuana".

Visible a fojas 15, se encuentra la providencia fechada 25 de septiembre de 2000, donde la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispuso practicar todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho punible y los autores y participes del mismo tal y como lo establecen los artículos 2058, 2059 y 2071 del Código Judicial.

Rinde declaración indagatoria de fojas 20-25, el señor MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, señalando que la droga encontrada en el allanamiento la iban a consumir entre "COKI", "MAURICIO" y él (Mauro Mosquera). Dice que la droga fue encontrada en la mesa porque en ese momento iban a proceder a repartírselas pero MAURICIO, en ese preciso instante antes que llegara la policía le dio ganas de ir al baño. MAURO MOSQUERA señala que conoce a "COKI" desde hace un mes y a "MAURICIO" lo conoció por intermedio de COKI, desde hace unos días; manifiesta que él consume

marihuana y cocaína desde los diecisiete (17) años y que desea someterse a un programa de rehabilitación por la adicción a las drogas.

Posteriormente a fojas 26 del sumario se encuentra la declaración jurada rendida por MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, donde se afirma y ratifica de lo expresado en la declaración indagatoria que rindiera anteriormente.

Rinde declaración indagatoria de fojas 27-32, HERIBERTO ENRIQUE LEDEZMA JACOBS, señalando que el día de marras se encontraba escuchando música en compañía del joven Mauro Mosquera, afuera del cuarto allanado y los policías llegaron y les dijeron que entraran al apartamento procediendo a hacer el registro y encontrando la droga. Manifestó LEDEZMA JACOBS a los agentes policiales, que no era el dueño del apartamento y que desconocía la procedencia de la droga encontrada en dicho allanamiento.

Señala el sindicado HERIBERTO LEDEZMA, que conoció a MAURO MOSQUERA desde hace un mes por intermedio de un joven que le apodan "TAISON", que vive en ese mismo barrio y que la única razón por la cual se encontraba allí era porque conoce a la vecina que vive al lado del cuarto allanado. Dice el indagado que no ha sido detenido anteriormente, ni ha sido investigado por causa penal alguna y que de ser posible desea se le someta a un programa de rehabilitación para la adicción a las drogas.

Posteriormente la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, ordenó la detención preventiva de MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, mediante resolución calendada 26 de septiembre de 2,000, visible a fojas 33-35 del sumario.

La acción de habeas corpus lleva implícito el estudio de las normas constitucionales y legales que regulan lo relativo a la detención preventiva, es decir, los artículos 21, 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, así como los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Primeramente, debemos indicar que la orden de detención preventiva dictada contra el señor MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, que corre de fojas 33-35 del sumario cumple con el requisito de haber sido emitida por la autoridad competente, que en este caso es el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial, y por delito cuya pena es superior a los dos (2) años de prisión.

Todo lo anterior aunado a los señalamientos directos que le formulan los agentes captores, Capitán 6305 RAMÓN F. CASTELLANOS y el agente 20421 JOSÉ DANILO PALMA, contra el sindicado MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, donde a fojas 5 participan en la diligencia de allanamiento.

Cuando se le pregunta al sindicado MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA, sobre el hallazgo de la droga encontrada en el allanamiento realizado en el Corregimiento de Santa Ana, Casa No. 1329, primer piso, cuarto No.28, el mismo señala que esa droga era para consumirla entre las tres personas que se encontraban en el cuarto o sea "COKI, MAURICIO y él (MAURO MOSQUERA).

Esta Corporación de Justicia, estima que en el presente caso se configuran indicios que vinculan al sindicado MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA con el delito que se le imputa, si se toma en cuenta la forma como estaba distribuida la droga, lista para ser distribuida en carrizos plásticos, el Pleno observa, que tenía acceso a ese cuarto el sindicado, ya que según su propia versión dada en declaración indagatoria, señala lo siguiente:

> INTERROGADO: ¿Diga el indagado luego de haber escuchado los cargos que se le imputan, que tiene que decir en relación a los mismos?
> CONTESTO: Señor Fiscal, eso lo híbamos (sic) a partir entre COKI y MAURICIO, dueño de la casa y yo, para consumirnelos (sic) en ese

cuarto, en ese momento.
INTERROGADO: Diga el indagado como (sic) se dieron los hechos al momento de iniciada la diligencia de allanamiento?.
CONTESTO: Señor Fiscal, los tres estabamos (sic) en la puerta de la casa que hibamos (sic) a partir la droga y MAURICIO le dio ganas de ir al baño y cuando el (sic) estaba en el baño llegaron los policías que nos metieron al cuarto y empezaron revolver el cuarto, pero la droga estaba ahí mismo en la mesa, porque la hibamos (sic) a partir.

El Pleno observa que los elementos de presencia y oportunidad que obran contra el sindicado en el presente proceso, son suficientes para llegar a la conclusión de mantener la medida privativa de libertad impuesta en su contra, toda vez que no existen otros elementos en el expediente que demuestren lo aseverado por el prenombrado MOSQUERA MOSQUERA.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de MAURO TULIO MOSQUERA MOSQUERA y dispone que el detenido sea filiado nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERT GEORGE VALMON CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la Acción de Hábeas Corpus presentada por la Licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO a favor de ROBERT GEORGE VALMON MAYNARD, contra el FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

El beneficiario de esta acción se encuentra actualmente privado de su libertad en las instalaciones del Centro Penitenciario "La Joya", por la supuesta comisión del delito Contra la Salud Pública.

La defensora técnica del señor GEORGE VALMON solicita se declare ilegal la detención preventiva decretada en contra del prenombrado y se le aplique una medida cautelar menos severa, en virtud de que el mismo no registra antecedentes penales, que la cantidad de droga es mínima, siendo el delito de posesión simple de droga establecido en el primer párrafo del artículo 260 del Código Judicial.

Acogida la iniciativa constitucional, se libró mandamiento de Hábeas Corpus contra el Fiscal Primero Especializado en delitos Relacionados con Drogas, quien contesta mediante Oficio N° FD1-t17-4039-00 de 4 de octubre de 2000, que es cierto que el Despacho a su cargo ordenó la detención preventiva de ROBERT GEORGE VALMON MAYNARD, mediante resolución debidamente motivada, fechada 17 de mayo de 2000, visible a folio 17-19 del sumario.

Que los fundamentos de hecho que lo llevaron a emitir dicha resolución lo

constituyen los informes novedad y vigilancia de la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial, en los que dejan plasmados que el día 10 de abril del año en curso se recibe una información en el sentido de que en la calle 13, Río Abajo, barraca 2840 reside un sujeto de tez morena, delgado, alto, de cabello lanoso, de 30 a 35 años de edad, el cual apodan ROBERT, y que presuntamente se dedica a la venta de sustancias ilícitas. Por otro lado, también mencionó la fuente que dicho ciudadano no se quedaba con el dinero sino que se lo entregaba a un sujeto que pasaba cada cierto tiempo en bicicleta, quien se ocupaba de recoger rápidamente el dinero que pudiera tener "ROBERT", y luego se marchaba en dirección hacia la pulida. (FS. 4)

Posteriormente se da una segunda información que coincide con la primera y en la que se proporciona una descripción del mismo sujeto ya prefigurado. No obstante, el día 15 de mayo de 2000, las unidades del orden público proceden a realizar una vigilancia al sujeto "ROBERT", pudiéndose constatar la llegada de sujetos con características propias de piedreros, quienes se acercaban al sujeto antes descrito y realizaban intercambios de manos con éste, quien sacaba algo de su bolsillo delantero derecho y se los entregaba. Al notar la presencia policial el ciudadano intenta darse a la fuga siendo interceptado por el vehículo, luego se le efectuó el registro encontrándosele en el bolsillo delantero derecho del pantalón dos (2) bolsitas plásticas transparentes de regular tamaño las cuales contenían, una de ellas polvo blanco que fue presumido como droga (Cocaína) y la otra, treinta (30) fragmentos sólidos de color cremoso que también fue presumido como droga (Piedra). Las unidades policiales aprehendieron a dicho sujeto el cual resultó ser ROBERT GEORGE VALMON MAYNARD de 32 años de edad, residente en la barraca 2840 de calle 13, Río Abajo, cuarto N° 11.

En cuanto a los fundamentos de derecho, el funcionario demandado señaló que los mismos encuentran asidero jurídico en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Al entrar al análisis de la constancias procesales contenidas en el expediente sumarial remitido por el Ministerio Público, se observa que a las sustancias incautadas se le practicó inicialmente la prueba de campo la cual dio resultados positivos para la presencia de las drogas conocidas como Cocaína y Piedra. Posteriormente, este resultado fue confirmado con la muestra analizada por el Laboratorio Técnico Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, determinándose la cantidad de 7.63 gramos para la presencia de Cocaína y de 3.66 gramos para la presencia de Crack, para un peso total de 11.28 gramos.(Fs. 32)

En su declaración indagatoria el imputado niega la comisión del ilícito que se le imputa, argumentando que él se encontraba sentado en un lote baldío, bajo los efectos de la droga cuando en ese momento se apersona un carro de la DIIP y comienza a arrestar a unas jóvenes que se encontraban en la calle, que una agente de la DIIP de le manifestó que se quedara donde estaba, luego empezó a revisar el monte encontrando un plástico y le dijo que eso era de él, porque él estaba cerca. Agrega que cuando a él lo revisaron, no le encontraron nada en su poder, ya que él es consumidor de cocaína y piedra desde hace nueve (9) años.(47-51)

El reconocimiento que de su adicción a la droga hace el imputado es corroborado por el Médico Psiquiatra Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quien mediante certificación visible a folio 39 del sumario, en el punto 3 establece, que el señor VALMON MAYNARD es adicto al uso de cocaína.

No obstante, el Pleno de la Corte considera que la existencia de dicho dictamen no coloca al imputado en el supuesto de la posesión simple de droga, ya que el Instituto de Medicina Legal también ha indicado que la dosis por ingestión en los adictos es de 1 a 1.5 gramos; dosis posológica esta que no coincide con la cantidad de droga incautada, misma que se encontraba distribuida en treinta (30) fragmentos, con un peso total de 11.28 gramos lo cual apunta hacia la venta de sustancias ilícitas.

Por otra parte, consideramos que la forma fraccionada de la droga en la

cantidad antes señalada evidencia que a pesar de la alegación de consumo por parte del imputado, lo que se pretendía era su distribución, por ello carece de todo fundamento creíble que se adquiera la droga en forma fraccionada para consumirla, cuando esto se podría hacer sin entrar a elaborar la misma en porciones. De allí, que las constancias procesales indican una actividad distinta a la pretendida por el imputado.

Por las consideraciones expuestas, esta Superioridad concluye que en el caso que nos ocupa, la orden de detención aplicada al señor VALMON MAYNARD, reúne los requisitos establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial, ya que la misma fue dictada por autoridad competente, en ella se determina el hecho punible, la existencia de los elementos probatorios que lo vinculan a la comisión del mismo, así como que la conducta investigada conlleva pena mínima que sobrepasa los dos (2) años de prisión por lo que es aplicable el artículo 2148 ibídem.

Por tanto, los Magistrados que integran el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ROBERT GEORGE VALMON MAYNARD, y en consecuencia DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad correspondiente.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ

Respetuosamente comunico, no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de esta Corporación de Justicia.

En la apreciación realizada por esta Colegiatura, considero que la conducta del justiciable debe ser considerada como aquella que está tipificada en el artículo 260, Párrafo 1° del Código Penal, y se le debería beneficiar con cualquiera de las otras medidas diferentes a la detención preventiva establecidas en el artículo 2147-B, literales a, b, c, y d, del Código Judicial.

Lo anterior, es en base a que considero que la droga encontrada en posesión del sindicado ROBERTO GEORGE VALMON MAYNARD, con peso de 11.28 gramos, distribuidas en 7.63 gramos de cocaína y 3.66 gramos de "crack" y el efecto de la dosis de la droga conocida comúnmente como "piedra", es de corta duración (aproximadamente media hora), por lo que se deduce que una persona considerada dependiente a la cocaína como el sindicado ROBERTO GEORGE VALMONT MAYNARD, situación que quedó acreditada mediante examen Psiquiátrico a fojas 39, en una situación normal para él, podría consumir una cantidad considerable de cocaína y de "piedras" y cocaína, en un corto espacio de tiempo. Todo esto, aunado al hecho de que no se encontró en poder del sindicado GEORGE VALMONT ningún otro elemento que nos indique que estuviera dedicandose a la venta de sustancias ilícitas; además con el hecho de que el Psiquiatra Forense manifestó que el sindicado se beneficiaría de un Programa de Reeducación en Hogares C.R.E.A.

Podemos agregar, que la investigación preliminar efectuada por los agentes de policía, carece de algunos elementos esenciales para evidenciar sin lugar a duda la supuesta actividad ilícita que se le endilga al sindicado VALMONT y no basta con un simple Informe de Comisión, o de Vigilancia y Seguimiento, suscrito por Agentes del Orden Público, como el suscrito por el Sub Teniente 6877 Edgardo

Vinda.

También queremos advertir que la Policía a sabiendas de que supuestamente un sujeto de tez morena, pasaba cada cierto tiempo en bicicleta y recogía el dinero producto de la supuesta venta ilícita de drogas marchandose en dirección a la Pulida, debió detenerlo y requisarlo para corroborar esta versión, pero no lo hizo por lo que en este momento esa versión es improbable y no se puede tomar como cierta por el hecho de que un Agente de Policía así lo afirme.

Por todo lo anterior, respetuosamente SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
Magistrado
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS BENAVIDES Y GUSTAVO RAMIREZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El día 19 de octubre de 2000 ingresó al conocimiento de esta Corporación de Justicia, la Acción de Hábeas Corpus verbal interpuesta por el Licenciado BORIS BETHANCOURT a favor de los señores CARLOS BENAVIDES PALACIOS y GUSTAVO RAMIREZ IBARTE, y contra el DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, a fin de se declare ilegal la orden de detención preventiva que sufren los prenombrados.

Una vez acogida la presente acción, se libró mandamiento de Hábeas Corpus contra la autoridad demandada, el cual recayó en la persona de la Fiscal Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá, Área de Ancón, Licenciada VIELKA VARGAS DE BYRNE, quien respondió mediante Oficio N° 1697 del 27 de octubre de 2000, que el Despacho a su cargo ordenó la detención preventiva de los beneficiarios del presente Hábeas Corpus, además se encontraban bajo sus órdenes por la supuesta comisión del delito CONTRA LA FE PÚBLICA, exponiendo los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron a tomar esa decisión.

Encontrándose para resolver el recurso de Hábeas Corpus, la Secretaría General de la Corte, recibió escrito de desistimiento acompañado de poder especial, presentado el día 31 de octubre de 2000 por la Licenciada DOLCA VICTORIA ALMENGOR V., en los siguientes términos:

> "Yo, Dolca Victoria Almengor V. abogada en ejercicio, de generales conocidas en el poder que antecede concurro ante su Despacho a fin de desistir del Recurso de Hábeas Corpus presentado a favor de GUSTAVO ADOLFO UBARTE Y CARLOS ENRIQUE BENAVIDES PALACIOS contra el Director de la Policía Técnica Judicial."

Conforme a la solicitud anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1073, primer párrafo del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho para desistir expresa o tácitamente una demanda, un incidente o recurso que haya interpuesto, el Pleno de la Corte considera viable acoger esta decisión y concluir las actuaciones que se derivan de la presente acción de Hábeas Corpus.

Por lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción

de Hábeas Corpus presentado por la Licenciada DOLCA VICTORIA ALMENGOR V. a favor de los señores CARLOS BENAVIDES PALACIOS y GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ UBARTE; en consecuencia ORDENA que los detenidos sean puesto nuevamente a órdenes de la FISCALÍA PRIMERA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, ÁREA DE ANCÓN y DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Manuel Barberena Guerra en representación de LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN ha interpuesto acción de hábeas corpus correctivo a su favor y contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Afirma la parte actora que el objeto del presente recurso es que se ordene el traslado inmediato de RODRÍGUEZ MORÁN del Centro Penitenciario La Joya, a la Cárcel Pública de La Chorrera, porque su traslado viola "la garantía y el derecho del imputado al acceso e inmediación constante con su defensor y con el tribunal en el cual será juzgado, más aún cuando se encuentra detenido en forma preventiva..."

Acogido el presente negocio por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento de hábeas corpus contra el funcionario demandado, quien rindió su informe mediante Oficio N° FD1-T05-3534-2000, fechado 12 de octubre de 2000 en los siguientes términos:

> "1. Sí es cierto que se ordenó la detención del ciudadano LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, la misma fue emitida por en forma escrita y decretada por el Fiscal Primero de Drogas, mediante Resolución de veinticinco (25) de septiembre de 2000.
> El Fundamento de Hecho, se tiene cuando el Director de la Zona de Policía de Panamá Oeste, solicitó mediante escrito a este Despacho, la práctica de una diligencia de compra simulada y consecuente allanamiento, en una casa de color blanco, sin número, ubicada en el Corregimiento de Bejuco, Distrito de Chame, lugar donde según informaciones, residía el ciudadano LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, conocido como "BABILLO" quien supuestamente se dedica a la venta de sustancias ilícitas en compañía de su concubina de nombre "LINETH". Debido a esta información y solicitud de la Policía de Panamá Oeste, esta Fiscalía dispuso autorizar la compra simulada de sustancias ilícitas y posterior diligencia de allanamiento al inmueble arriba señalado. Se utilizó en la compra de tres (3) billetes de un dólar previamente fotocopiados y autenticados por el Secretario de Drogas, lográndose la compra de un sobre plástico contentivo de polvo de color blanco, presumible la droga COCAÍNA. El informante que realizó la compra, señaló que la droga se la había vendido fue (sic) el

> sujeto apodado "BABILLO", de tez clara, quien usaba una gorra, suéter y pantalón negro y que la droga la había sacado del inmueble donde reside.
> De inmediato se procedió a realizar la diligencia de allanamiento, lugar donde se encontraban los ciudadanos LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, LINETH JARAMILLO y otras personas. Luego de esto, a requerimiento del Secretario de Drogas, que realizaba el allanamiento, el ciudadano RODRÍGUEZ MORÁN, hizo entrega de dos (2) bolsas plásticas, que en su interior contenían una cantidad razonable de presunta sustancias ilícitas en forma de polvo blanco, ocho (8) envoltorios con cierta cantidad de hierba seca, presumible MARIHUANA. Además hizo entrega de dinero de diferentes denominaciones, dentro de los que se encontró los billetes de un dólar, utilizados en la compra simulada. También fueron retenidos teléfono celulares y prendas.
>
> En torno al ser cuestionado RODRÍGUEZ MORÁN, aceptó dedicarse a la venta de sustancias ilícitas, pero que sus familiares no tenían conocimiento de que él se dedicara la venta de drogas.
>
> Al realizar la prueba de campo, la misma arrojó resultados positivos a la COCAÍNA y MARIHUANA.
>
> 2- El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
> En la actualidad el señor LUIS RODRÍGUEZ, se encuentra filiado a este Despacho, mediante Oficio FDO-4126-2000, de 2 de octubre, dirigido al Centro Penitenciario La Joya. Y partir de este momento, estará a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia."

Esta Corporación de Justicia ha logrado establecer que las afirmaciones hechas por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas están probadas en la encuesta penal que se le sigue al señor LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN por el delito contra la salud pública, razón por la cual su detención es legal.

La pretensión del demandante es que el Pleno de la Corte, por medio de esta acción constitucional se pronuncie sobre la legalidad de su traslado al Centro Penitenciario La Joya en la ciudad de Panamá, que le impediría ejercer el derecho a defenderse que consagra el artículo 22 de la Constitución Nacional, desarrollado por el artículo 2153 del Código Judicial. Por tanto, se procede al análisis de las normas in comento.

El artículo 22 de la Constitución Nacional consagra un conjunto de garantías y derechos tendentes a asegurar la defensa de quienes se encuentren privados de su libertad corporal entre ellos el derecho que tiene toda persona, desde el momento en que sea detenida, a contar con la asistencia de un abogado en todas la diligencias en que participe.

Esta garantía constitucional que se refiere al derecho de defensa, está reglamentada en el artículo 2153 del Código Judicial cuando señala lo siguiente:

> "Artículo 2153. La detención preventiva a que se refiere el artículo anterior, <u>debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente</u>. En consecuencia, ningún imputado, preventivamente detenido, podrá ser trasladado a cárceles distintas de la sede del Tribunal que conoce de sus casos". (el subrayado es de la Sala)

En el presente caso, el Pleno observa que los hechos investigados y que fundamentan la detención preventiva que sufre el imputado se dieron en el

Corregimiento de Bejuco, Distrito de Chame, Provincia de Panamá, el 21 de septiembre del presente año. Ese día LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, Lineth Jarmaillo y Luis Rodríguez Barsallo fueron trasladados a la Estación de Policía de La Chorrera (SUB DIIP), quedando a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas (fs. 21-23).

Mediante Nota N° 683-2000, fechada 22 de septiembre de 2000, el Subcomisionado, Luis Omar Tan, Director de la Zona de Policía de Panamá Oeste remitió al Fiscal de Turno, a los ciudadanos LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN, Luis Ernesto Rodríguez Barsallo y Lineth Arelis Jaramillo Alemán, además, de las evidencias incautadas (fs. 40-43).

El Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante providencia fechada 22 de septiembre de 2000, aprehendió el conocimiento de este negocio a fin de practicar todas las diligencias tendentes al perfeccionamiento del sumario, entre ellas, recibirle declaración indagatoria al señor RODRÍGUEZ MORÁN y ordenar, consecuentemente, su detención preventiva (fs. 45-48, 56-59).

Ahora bien, el Pleno advierte que el delito se cometió en la Provincia de Panamá y que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas cuya sede también está en la dicha provincia, está instruyendo el sumario que se le sigue a RODRÍGUEZ MORÁN por la comisión de delito de drogas. De ahí que el Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con sede en la Chorrera, le solicitara al funcionario de instrucción que le remitiera con carácter devolutivo el sumario del imputado a fin de resolver la solicitud de fianza de excarcelación presentada a su favor (f. 73 del sumario).

Es importante señalar, que luego de practicadas las diligencias judiciales arriba mencionadas, el señor RODRÍGUEZ MORÁN nombró como su apoderado judicial al licenciado Rigoberto Acevedo, quien tiene su oficina ubicada en la ciudad de Panamá (Tercer Piso del edificio de la Asamblea Legislativa), es decir, en la misma sede de la cárcel en que está internado el imputado y del Tribunal que lleva su causa, razón por la cual yerra el recurrente al afirmar que el imputado está "aislado del juzgado que conoce de su caso y de su defensor" (f. 67-68 del sumario).

Ante esta realidad procesal, el Pleno estima que se está cumpliendo con lo establecido en los artículos 22 de la Constitución Nacional y 2153 del Código Judicial, toda vez el señor RODRÍGUEZ MORÁN puede ser asistido por su abogado, está detenido preventivamente en la cárcel de la provincia donde cometió el delito y no ha sido trasladado a una cárcel distinta a la sede del Tribunal (Fiscalía Primera Especializada en Drogas) que conoce de su causa.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva decretada contra LUIS ERNESTO RODRÍGUEZ MORÁN por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y ORDENA que se le mantenga recluido en el Centro Penitenciario La Joya a órdenes de dicho funcionario.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) HIPÓLITO GILL SUAZO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR RODRIGO CERRUD CONTRA EL

FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FLORENCIO BARBA HART, ha formalizado acción de habeas corpus a favor de RODRIGO LUCERO CERRUD y contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA.

Recibido el negocio por esta Corporación de Justicia, se libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, quien remitió el Oficio N° 13048 de 31 de octubre de 2000, con el siguiente informe:

> "PRIMERO: No es cierto que esta Agencia de instrucción haya ordenado la detención preventiva de RODRIGO LUCERO CERRUD.
>
> SEGUNDO: Como consecuencia de lo expuesto en el punto que precede, no existen motivos ni fundamentos de hecho ni de derecho que aducir.
>
> TERCERO: El señor RODRIGO LUCERO CERRUD no se encuentra bajo nuestra custodia ni a órdenes de este Despacho, ya que mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2000, se dejó sin efecto su aprehensión en relación al expediente que se instruye por el delito tipicado en el Capítulo I, del Título IV, del Libro Segundo del Código Penal (CONTRA EL PATRIMONIO). El Oficio No.12963 de 28 de octubre de 2000 fue girado con el objeto de cumplir con la inmediata libertad de este señor. El expediente original fue enviado a la Policía Técnica Judicial, Agencia de San Miguelito, a través del Oficio No.12964 de 28 de octubre de 2000.
>
> Atentamente,
>
> (FDO. CARLOS AUGUSTO HERRERA
> El Fiscal Auxiliar de la República" (f.7)

Del informe transcrito se colige que esta Corporación de Justicia, deberá ordenar el cese del procedimiento, en virtud de que se dejó sin efecto la orden de aprehensión contra RODRIGO LUCERO CERRUD e inclusive, se ordenó su inmediata libertad, mediante resolución N°12963 de 29 de octubre de 2000 por el funcionario demandado, por tanto, no prospera la acción formulada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE de la presente acción de habeas corpus promovida a favor de RODRIGO LUCERO CERRUD.

Notifiquese y Archivese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CATALINO PINEDA MARTINEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HIPOLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado UBALDO IVAN SAMANIEGO ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor CATALINO PINEDA MARTINEZ, y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Una vez acogido el recurso en mención, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien mediante Oficio No. 13454 de 9 de noviembre de 2000, señaló lo siguiente:

> "a) Sí es cierto. Mediante resolución fechada 31 de OCTUBRE del año 2,000, ordenamos la detención preventiva de CATALINO PINEDA MARTINEZ.
>
> b) El día 25 de este mes y año, la señora EDID ANANYANSI PEREZ CASTILLO denunció ante la Policía Técnica Judicial que dejó estacionado su vehículo marca Chevrolet Cavalier, de color negro, con matrícula No. 201371, frente del Almacén Adams del Dorado, que al regresar no se encontraba. Posteriormente al allanar el taller USA CAR SHOP, ubicado en calle tercera Perejil fue encontrado el referido vehículo, los sujetos CATALINO PINEDA MARTINEZ Y JULIO CESAR POLANCO se encontraban en éste taller, que al tratar de darse a la fuga fueron aprehendidos.
>
> A foja 9 y 10 consta el informe de comisión suscrito por los Detectives JAVIER HENRIQUEZ Y EDGARDO MEDINA, miembros de la Policía Técnica Judicial, con fecha del día 28 de octubre del año en curso, manifiestan que aprehendieron a los señores CATALINO PINEDA MARTINEZ y JULIO CESAR POLANCO, que surge del informe de comisión de los Detectives JAVIER A. HENRIQUEZ Y EDGARDO MEDINA, este Despacho ordenó la detención de los PRENOMBRADOS.
>
> c) Los señores CATALINO PINEDA MARTINEZ Y JULIO CESAR POLANCO no se encuentran ni a órdenes ni bajo nuestra custodia ya que mediante el oficio No. 13038 fue enviado a la Directora del Sistema Penitenciario (Corrección), para que sea filiado, recluido, y a ordenes de la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha del día 31 de octubre del año en curso, imputados por el delito CONTRA EL PATRIMONIO."

Como se desprende del anterior informe, el señor CATALINO PINEDA MARTINEZ se encuentra a órdenes de la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, razón por la cual no le corresponde a este Tribunal el conocimiento del presente recurso de habeas corpus, por lo que procede declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establece el artículo 2602, numeral 2 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus propuesta a favor del señor CATALINO PINEDA MARTINEZ y DECLINA su conocimiento al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para que se le de el trámite que la ley establece.

Notifiquee y Remitase.

(fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LIONEL NELSON CONTRA LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor LIONEL NELSON, en su propio nombre, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor contra la Directora General del Sistema Penitenciario.

El señor LIONEL NELSON, al sustentar su recurso, manifiesta que se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, que padece una enfermedad en su fase terminal por lo que adjuntó las notas visibles a fojas 4 y 5 del expediente en las que se aprecia que padece de B-20 (sida y tuberculosis) y específicamente solicita en su escrito lo siguiente:

> "...
> **Le solicitamos a los Honorables Magistrados de esta alta corporación de justicia tengan a bien considerar el aplazamiento de la ejecución de la pena fundamentado legalmente en el artículo 75 numeral 1 del Código Penal ya que el ciudadano haitiano Lionel Nelson se halla en grave peligro de muerte próxima por razón de enfermedad. Se declare ilegal la detención de Lionel Nelson y se remita lo actuado al Segundo Tribunal Superior de Justicia con el fin de que se defiera la ejecución de la pena, y que el señor Lionel Nelson pueda morir dignamente en el seno de su familia.**
> ..."

Acogido el recurso, se dispuso mandamiento contra la autoridad acusada quien mediante informe de 23 de octubre de 2000 señaló lo siguiente:

> "...
> **A. La suscrita en calidad de Directora General del Sistema Penitenciario, no ha impartido, verbalmente ni por escrito, orden de detención en contra del prenombrado.**
>
> **B. No podemos hacer referencia de los motivos o fundamentos de hecho o de derecho que motivan la detención porque no la hemos ordenado.**
>
> **C. El señor LIONEL NELSON, ciudadano Haitiano, con pasaporte No.96-000342, se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en virtud del cumplimiento de la pena de 10 años de prisión impuesta por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia proferida el día 8 de octubre de 1999.**
>
> **La pena antes mencionada fue puesta en ejecución el 23 de octubre de 1996, según consta en el mandamiento de Ejecución No.1340 de 5 de septiembre de 2000, cumpliendo la totalidad de la misma el día 23 de octubre de 2006.**
> ..."

De lo expuesto anteriormente y luego de analizada la documentación que reposa a foja 3 del expediente. se desprende que el señor LIONEL NELSON fue condenado a la pena de diez (10) años de prisión por el delito de "Tráfico Internacional Ilícito de Drogas" impuesta mediante sentencia de 8 de octubre de 1999 por el Juzgado Quinto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El señor LIONEL NELSON solicita a esta Corporación que declare ilegal su detención y que se aplique lo contenido en el artículo 75 del Código Penal que

establece que "la ejecución de la pena de prisión deberá diferirse: 1. Si la persona que debe cumplirla se halla en peligro de muerte próxima por razón de enfermedad, hasta cuando el riesgo desaparezca ...". Efectivamente, la norma faculta a diferir la pena por causa de enfermedad. Tanto lo indicado en esta norma como lo señalado en el artículo 15 del Decreto No.212 de 13 de septiembre de 1996, que establece que si un interno en ejecución de sentencia se encuentra en la fase terminal de una enfermedad, permiten conceder un depósito hospitalario institucional particular o domiciliario temporal para la recuperación del interno.

La jurisprudencia de este Tribunal ha reiterado que la acción de habeas corpus es una garantía constitucional dirigida a determinar si la detención sufrida por una persona se ajusta o no a la Constitución y a la ley, por lo que no procede si la persona ha sido condenada legalmente por las autoridades correspondientes y se encuentra cumpliendo la pena impuesta, como es el caso del señor LIONEL NELSON.

Lamentablemente la interposición de la acción de habeas corpus no es el mecanismo idóneo para resolver situaciones como la presente en que el accionante se encuentra cumpliendo una pena de prisión debidamente ejecutoriada y solicita que se ordene su libertad por padecer una enfermedad en fase terminal.

Veamos al respecto sentencia de 18 de febrero de 2000 en la que se señaló lo siguiente:

> "...
> Por otra parte, la acción de habeas corpus no es el mecanismo apropiado para resolver éste tipo de peticiones, por cuanto que para ello existen otras vías idóneas. En este caso en particular, le corresponde a la Dirección Nacional de Corrección examinar estas solicitudes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.154 de 9 de julio de 19998, que modifica el artículo 15 del Decreto Ejecutivo No.212 de 13 de septiembre de 1996, que señala:
>
> "Artículo 15: Si un interno en ejecución de sentencia, se encuentra en la fase terminal de una enfermedad o se halla en la presentación de una complicación aguda, por cualquier enfermedad, que ponga en peligro la vida del interno, y las condiciones clínicas del mismo no son aptas para el medio carcelario, certificada por el Instituto de Medicina Legal, se podrá conceder un depósito hospitalario institucional particular o domiciliario temporal, de recuperación del interno.
>
> Este depósito concedido estará sujeto a controles de observación y seguimiento por parte de la Dirección Nacional de Corrección y del Instituto de Medicina Legal. ..."

Entiende el Pleno que sería la Dirección Nacional de Corrección a quien le correspondería resolver la petición formulada por el señor LIONEL NELSON, previa evaluación de las certificaciones expedidas por el Instituto de Medicina Legal en donde conste que el sentenciado se encuentra en la fase terminal de su enfermedad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus interpuesta por LIONEL NELSON a su favor contra la Directora General del Sistema Penitenciario.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO(fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BRENDA GUERRA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de esta Corporación de Justicia, la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado VICTOR JAVIER ALMENGOR TORRES a favor de BRENDA GUERRA, contra la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Además de los hechos en que se fundamenta el recurso de Hábeas Corpus, el accionante señala tres consideraciones que a su juicio expresan la ilegalidad de la orden de detención que sufre su representada, a saber:

PRIMERO: Que la privación de libertad ambulatoria fue ordenada por el funcionario de instrucción sin considerar que no existe indicio alguno o prueba que vincule a la señora GUERRA con el delito investigado.

SEGUNDO: Que no existen dentro del presente sumario indicio o prueba alguna que demuestre que la señora BRENDA GUERRA haya participado del delito investigado.

TERCERO: Que a pesar de que en el expediente consta que la señora GUERRA se encuentra en estado de gravidez, se ordenó la detención de la misma, lo cual es contrario a lo señalado en el artículo 2147-D del Código Judicial.

Finalmente, por los hechos narrados anteriormente, es por lo que el accionante solicita se declare ilegal la orden de detención proferida en contra de su representada.

Acogida la demanda el día 11 de octubre de 2000, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de Hábeas Corpus a favor de la demandante y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, solicitándole el informe de conducta correspondiente y la puesta del detenido a órdenes de este Tribunal.

La autoridad demandada nos remite el informe solicitado, y expone que esa Agencia de Instrucción ordenó la detención preventiva de la señora BRENDA EDITH GUERRA ORTEGA, mediante resolución motivada fechada el 4 de octubre de 2000, que los fundamentos de hecho se encuentran en la diligencia de allanamiento y registro que los agentes de la Policía Nacional le efectúan a la residencia de la encartada, en donde se logra incautar gran cantidad de sustancias ilícitas, la mala justificación de la sindicada al efectuar sus descargos en su declaración indagatoria, la cual manifiesta que no sabía a quien le pertenece la droga que fue hallada en su residencia.

En cuanto los fundamentos de derecho, señala que los mismos encuentran asidero jurídico en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Luego de haber efectuado un análisis del incipiente sumario, corresponde al Pleno de la Corte determinar en primer lugar si la detención preventiva que sufre la accionante cumple con las garantías que consagra la Constitución y la

Ley.

Las constancias procesales revelan que la aprehensión y posterior detención preventiva de BRENDA GUERRA se da luego de la diligencia de allanamiento realizada en su residencia, en la que se logró incautar tres paquetes cuadrados con papel plástico transparente que a su vez mantenía otro plástico negro contentivo de hierba seca que fue presumido como droga.

A la sustancia incautada se le practicó la prueba de campo la cual dio resultados positivos para la presencia de la droga conocida como Marihuana.

Al momento de rendir sus descargos, la sindicada niega la comisión del ilícito que se le imputa, argumentando que desconoce la procedencia de la sustancia incautada en su residencia y añade que tampoco sabía que esa droga estaba dentro de la estufa.(Fs. 15-17)

La Corte solicitó al Laboratorio Técnico Especializado en Delitos Relacionados con Drogas el peritaje practicado a la sustancia incautada, el cual fue remitido certificándose que la muestra analizada resultó positiva para la determinación de MARIHUANA (Cannabis Sativa), en la cantidad de 6,037.50 gramos.

No obstante, lo anterior nos permite concluir que concurren los indicios graves suficientes para vincular a la detenida con el hecho que se le imputa, que a pesar de que la señora BRENDA GUERRA niega la existencia de las sustancias ilícitas, la misma vivía en el domicilio allanado, por lo que consideramos que los indicios de presencia física y oportunidad la vinculan sin lugar a dudas, aunado a que si bien no se le encontró dinero fraccionado, papel especial y otros insumos necesarios para la distribución de la droga, la cantidad incautada es de 6,037.50 gramos lo cual sobrepasa con creses la dosis de consumo establecida por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Esta cantidad incautada demuestra que estamos ante la presunta comisión de un delito Contra la Salud Pública, que por el momento se ubica en la posesión agravada de droga, cuya sanción a imponer es superior a los dos (2) años de prisión.

En este sentido, esta Sala Plena considera que la medida cautelar aplicada a la sindicada fue ordenada mediante diligencia razonada, por autoridad competente y dentro del término de Ley.

Ahora bien, la Corte observa que el apoderado de la sindicada esgrime su defensa básicamente en que su detención es ilegal por el estado de embarazo en que se encuentra la misma y que por ello resulta contrario a lo señalado en el artículo 2147-D del Código Judicial.

Al examinar esta situación en particular, esta Corporación de Justicia se percata que efectivamente a fojas 8 del expediente penal reposa el registro diario de consultas de la señora GUERRA, expedido por el Hospital Santo Tomás, en el que hace constar que la prenombrada está embarazada y refiere amenorrea de 23 1/7 semanas.

La Corte en reiteradas jurisprudencia ha señalado la necesidad de amparar el derecho a la vida, a la salud de la mujer, al no nacido y a la prole, por lo que debe protegerse a la mujer que se encuentra en estas condiciones durante la etapa sumarial, en la que el expediente se encuentra en instrucción por parte del funcionario del Ministerio Público.(Ver fallo del 6 de septiembre de 1999, 9 de septiembre de 1999 y 21 de junio de 2000)

El artículo 2147-D del Código Judicial señala, que no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su propia prole, salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia que permitan el desconocimiento del fuero penal mencionado y el cual disfruta la mujer grávida. Aunado a lo anterior se encuentra el artículo 75, numeral 2 del Código Penal, que establece claramente que se suspenderá la ejecución de la pena, hasta cuando la criatura haya cumplido seis

(6) meses. De conformidad con este último precepto legal, esta Corporación de Justicia ha sido enfática que si tal garantía existe para el procesado y sancionado penalmente, con mayor razón debe extenderse durante la etapa sumarial, cuando todavía impera el principio de presunción de inocencia en favor de la persona investigada (Ver sentencia de 26 de febrero de 1999 y 24 de junio de 1998).

Ahora bien, en el caso que nos ocupa y como señaláramos anteriormente, la instrucción sumarial que se adelanta en la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas revela que el estado de gravidez de la sindicada es un hecho debidamente comprobado, además que no existen mayores elementos que indiquen que la imputada sea de alta peligrosidad, por lo que es viable la sustitución de la medida por el término de ocho (8) meses.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte considera que debe declararse legal la detención preventiva de BRENDA GUERRA, entendiéndose que la sustitución de tal medida por otra distinta no la desvincula del delito que se le imputa, quedando sujeta al resultado del proceso penal que se le sigue sin perjuicio de que sea detenida preventivamente si incumple los deberes inherentes a las medidas cautelares que se le aplican.

Por tanto, los Magistrados que integran EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL la detención preventiva de la señora BRENDA GUERRA y la SUSTITUYEN por el término de ocho (8) meses contados a partir de la resolución judicial, por las medidas cautelares de carácter personal contenidas en los literales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, la obligación de residir dentro de la jurisdicción del Distrito de Panamá y el deber de presentarse cada quince (15) días ante la autoridad correspondiente, y en consecuencia ORDENAN su INMEDIATA LIBERTAD.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) HIPOLITO GILL SUAZO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO RENATO RUSSO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado Jean Joseph Mathieu Zambrano a favor de PEDRO RENATO RUSSO, detenido por no portar documentos personales en regla.

Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, Licenciado Eric Singares, quien mediante oficio No.1181-DNMYN-00 de 17 de octubre de 2000, rinde su informe indicando:

a.) No, es cierto que se haya ordenado la detención del ciudadano PEDRO RENATO RUSSO; el mismo fue remito mediante Nota S/N, del 6 de

agosto de 2,000, por la Policía Nacional área D, posteriormente este despacho ordena su detención mediante orden de detención No.0878-SI-DNMYN, del 7 de agosto de 2,000, por encontrarse ilegal en el territorio nacional.

b) Los motivos de hecho en que se fundamento la detención de dicho ciudadano son los siguientes:

Primero: Que, PEDRO RENATO RUSSO, de nacionalidad peruana, fue remitido mediante Nota S/N, del 6 de agosto de 2,0000, por la Policía Nacional área D.

Segundo: Que, al señor PEDRO RENATO RUSSO, de nacionalidad peruana, se le han concedido varias oportunidades para arreglar su documentación, incluso se dejo (sic) sin efecto una orden de Deportación y nuevamente es remitido a nuestro Despacho por no mantener documentos válidos que acrediten su estadía legal en el país.

Tercero: Que, este Despacho por las razones expuestas, emitió la Resolución No.4323 del 14 de agosto de 2,000, donde se le deporta del territorio nacional por encontrarse ilegal, que por medio de su apoderado legal presenta recurso de Reconsideración fue confirmada mediante Resolución No.4444, del 22 de agosto de 2,000, siendo posteriormente enviado su expediente al Ministerio de Gobierno y Justicia, debido a que su apoderado presento (sic) recurso de apelación.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el decreto Ley No.16 de 30 de Junio de 1960, modificado por le decreto-ley No.13 de 20 de septiembre de 1965, y la ley 6ta. Del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 62, 65 párrafo primero, 85 y 86 que al tenor establece lo siguiente:

Artículo 60: "Los funcionarios de Migración tendrán facultad para aprehender a cualquier extranjero que en su o a su vista pretenda ingresar al territorio de la República violando los preceptos del presente Decreto Ley o que fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales. Dicho extranjero será puesto a órdenes del Director del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 62: "Las autoridades administrativas y judiciales de la República tienen la obligación de solicitar a los extranjeros que por cualquier razón comparezcan ante ellos, la presentación de los documentos que deban portar de conformidad con el presente Decreto Ley, y si no los pudieran presentar, sin justa causa, deberán dar aviso de inmediato al Director de la Dirección de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 65: "Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingresó (sic) o que permanecieran en el mismo después de vencer sus visas de transeúnte, turismo o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser Deportado o para tomar, respecto de ellos cualquier otra medida que sea de lugar. (Primer Párrafo)".

c) El señor PEDRO RENATO RUSSO, de nacionalidad peruana, se encuentra en nuestra instalaciones, bajo nuestras órdenes".

El recurrente Lic. Jean Joseph Mathieu Zambrano, en su escrito menciona los motivos en que fundamenta el recurso de habeas corpus mencionando lo siguiente:

PRIMERO: El señor PEDRO RENATO RUSSO, esta (sic) detenido desde el mes de agosto en las instalaciones de la Dirección de Migración y Naturalización, hasta la fecha.

SEGUNDO: La Dirección de Migración y Naturalización mediante la Resolución No.4323 del 14 de agosto de 2,000, ordena la deportación del territorio nacional del señor PEDRO RENATO RUSSO, violando así diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico.

TERCERO: El señor PEDRO RENATO RUSSO, ha estado unido por mas de 9 años consecutivos en condiciones de singularidad y estabilidad, con la ciudadana panameña SAHILA ISELGIS JULIO BETANCOURT quien posee la cédula de identidad personal No.5-17-1756, y con quien pretendía inscribir el respectivo matrimonio de hecho sujetándose así, a lo que establece el Código de la Familia, en su artículo 53.

CUARTO: El señor RENATO RUSSO y la señora JULIO BETANCOURT, tienen una hija panameña de 6 años de edad de nombre STEPHANY MARIELIS RUSSO, quien se encuentra debidamente inscrita en el Registro Civil, en el Tomo 880 de inscripción de nacimiento de la Provincia de Panamá, en el asiento 1138.

QUINTO: La resolución 4323 atenta contra el artículo 20 de nuestra Constitución Nacional, el cual establece en su párrafo primero "Los panameños y los extranjeros son iguales ante la ley".

SEXTO: Dicha resolución va encaminada a separar a un padre de su hija, quien es menor de edad, se encuentra en edad escolar, y necesita del cariño de sus padres para desarrollarse y satisfacer sus necesidades básicas de vestido, vivienda, educación. Atentando así con lo establecido en nuestro Código de la Familia, en sus artículo: 316, que hace referencia a la patria potestad, y a los derechos que tienen los padres respecto a sus hijos; artículos 319, en su numeral 1." que nos habla de la potestad de los padres de velar por los hijos y tenerlos en su compañía". Artículo 487: que establece "el menor no será separado de su familia"; artículo 569 "Es deber del Estado panameño, por disposición constitucional desarrollar políticas sociales, de prevención, de protección y promoción del bienestar social de los niños; y demás artículos referentes a proteger la relación familiar.

SEPTIMO: La resolución 4323 del 14 de agosto de 2000, es un atentado a lo que establece nuestra Constitución en su Título III, Capítulo 2°, referentes a DERECHO Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES Y la Familia respectivamente, violando sus artículos 52, 53, 54, 58, 59, los cuales establecen las políticas estatales, tendientes a velar por la integración familiar, y la relación entre padres e hijos, mandatos que dicha Resolución pretende lesionar.

OCTAVO: Dicha resolución va encaminada a la desintegración familiar, atentando así contra el núcleo de nuestra sociedad, y desamparando a ciudadanas panameñas.

NOVENO: Llevar al señor Russo a su país de origen después de 9 años, y separado de su familia compuesta por nacionales panameñas, atenta contra los principios jurídicos tutelados en nuestro ordenamiento, los derechos humanos y el derecho internacional, llevando a un ser humano a una situación incierta en un país donde no va a encontrar nada y que abandono (sic) hace varios años en busca del sueño de tener una mujer e hijos por quien vivir, y que nuestro país le

brindó esa oportunidad".

La presente encuesta penal se inicia con la nota de fecha 6 de agosto de 2,000, enviada por el Jefe del Area D, Parque Lefevre y Río Abajo, cuando hace la filiación del señor PEDRO RENATO RUSSO, a ordenes del Director Nacional de Corrección.

Posteriormente mediante Detención No.0878-SI-DNMYN, de 7 de agosto de 2,000, dictada por el Director Nacional de Migración y Naturalización Licenciado Eric Singares visible a fojas 13 del sumario, ordena la detención del señor PEDRO RENATO RUSSO, por encontrase ilegal en el territorio nacional.

De fojas 14-15, se aprecia la resolución No.4323 de 14 de agosto de 2,000, emitida por el Director Nacional de Migración y Naturalización, donde ordena la deportación de PEDRO RENATO RUSSO.

Luego de fojas 16-17, aparece la Resolución No.4444, del 22 de agosto de 2,000, emitida por el Director Nacional de Migración, y CONFIRMA la Resolución No.4323 del 14 de agosto de 2,000, donde se ordenaba la Deportación del territorio nacional de PEDRO RENATO RUSSO.

Ahora bien, esta acción de habeas corpus lleva implícito el estudio de las normas constitucionales y legales que regulan lo relativo a la detención preventiva, es decir, los artículos 21, 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, así como los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Primeramente esta Corporación de Justicia advierte, que la orden de detención preventiva dictada contra el señor PEDRO RENATO RUSSO, visible a fojas 20-23 del sumario, cumple con el requisito de haber sido emitida por la autoridad competente, que en este caso es el Director Nacional de Corrección conforme a los parámetros establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial y mediante resolución escrita. Aunado al hecho de que anteriormente la Corte se pronunció en una situación similar, mediante Habeas Corpus de fecha 8 de marzo de 1996, declarando legal la detención del señor PEDRO RENATO RUSSO por el hecho de no haber acreditado la legalidad de su permanencia como extranjero en el país. En ese momento, se presentaron por parte de la defensa casi las mismas excepciones que a ésta fecha presenta a favor de su representado, señalando que el mismo contrajo matrimonio con una ciudadana panameña (María De Los Angeles Cadiz Hurtado) y que tiene un hijo habido de esa relación, nacido en el territorio nacional; sin embargo, no menos cierto es el hecho de que aún con todas esas prerrogativas pudo solicitar su residencia permanente en el país, y no lo ha hecho.

Hecha estas consideraciones el Pleno señala que el accionante agotó todos los recursos legales administrativos a su alcance, de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley No. 16 de 1960, modificado por Decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6 de 5 de marzo de 1980, específicamente en el artículo 86 que dispone:

> "Las resoluciones del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los negocios de que trata el artículo anterior, que4darán sujetas a los siguientes recursos administrativos:
>
> 1°. El de reconsideración ante el Director del Departamento de Migración.
>
> 2°. El de apelación que se surtirá ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.
>
> Estos recursos podrán interponerse dentro de los tres días hábiles, siguientes a la notificación personal o de la desfijación del edicto, cuando hubiera lugar a ello".

Por otra parte, el Pleno observa que a fojas 16-17, se encuentra la confirmación de la Resolución No.4323 fechada 14 de agosto de 2,000, donde se ordena la Deportación del señor PEDRO RENATO RUSSO NOBLECILLA, la cual se encuentra debidamente fundamentada, por lo que a Juicio de esta Corporación de Justicia, todo se ajusta al procedimiento legal y constitucional, por lo que no existe violación a los derechos humanos del accionante del habeas corpus.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención y deportación de dictada por el Director de Migración y Naturalización contra PEDRO RENATO RUSSO y, por tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN CONTRA EL DIRECTOR GENENERAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor de SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, detenido por no portar documentos personales en regla.

Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, Licenciado Eric Singares, quien mediante oficio No.DNMYN/1154/00 de 9 de octubre de 2000, rinde su informe indicando:

> a.) No, es cierto que se haya ordenado la detención de la ciudadana SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN; la misma fue remitida mediante Nota S/N, del 20 de septiembre de 2,000, por la Zona de Policía Metropolitana área A, posteriormente este despacho ordena su detención mediante orden de detención No.1068-SI-DNMYN, del 20 de septiembre de 2,000, por encontrarse ilegal en el territorio nacional.
> b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son los siguientes:
>
> Primero: Que, SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, de nacionalidad dominicana, fue remitida mediante Nota S/N, del 20 de septiembre de 2,000, por la Policía Metropolitana área A.
>
> Segundo: Que, la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, de nacionalidad dominicana, se le había expedido carnet de citación por 30 días para que arreglara su documentación el 9 de junio de 1999, y es remitida nuevamente por la misma causa a este Despacho.
>
> Tercero: Que, este Despacho por las razones expuestas, emitió la Resolución No.5552 del 28 de septiembre de 2,000, donde se ordena

deportarla del territorio nacional por encontrarse ilegal, que por medio de su apoderado legal la misma presenta recurso de Reconsideración con Apelación en subsidio en contra de la ordene de Deportación, dicha solicitud de Reconsideración esta siendo revisada.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el decreto Ley No.16 de 30 de Junio de 1960, modificado por le (sic) decreto-ley No.13 de 20 de septiembre de 1965, y la ley 6ta. Del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 62, 65 párrafo primero, 85 y 86 que al tenor establece lo siguiente:

Artículo 60: "Los funcionarios de Migración tendrán facultad para aprehender a cualquier extranjero que en su o a su vista pretenda ingresar al territorio de la República violando los preceptos del presente Decreto Ley o que fuere sorprendido en el territorio nacional sin documentos que acrediten su entrada legal residencia o permanencia en el país, de conformidad con los requisitos legales. Dicho extranjero será puesto a órdenes del Director del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 62: "Las autoridades administrativas y judiciales de la República tienen la obligación de solicitar a los extranjeros que por cualquier razón comparezcan ante ellos, la presentación de los documentos que deban portar de conformidad con el presente Decreto Ley, y si no los pudieran presentar, sin justa causa, deberán dar aviso de inmediato al Director de la Dirección de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ponerlos a sus ordenes para los fines consiguientes".

Artículo 65: "Los extranjeros que hubieren llegado al país sin haber llenado los requisitos legales de ingresó (sic) o que permanecieran en el mismo después de vencer sus visas de transeúnte, turismo o visitante temporal, o sus tarjetas de turismo o de tránsito sin residencia autorizada, serán puestos a órdenes del Ministerio de Gobierno y Justicia para ser Deportado o para tomar, respecto de ellos cualquier otra medida que sea de lugar. (Primer Párrafo)".

c) La señora **SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN**, de nacionalidad dominicana, se encuentra en nuestras instalaciones, bajo nuestras órdenes".

La recurrente en su escrito menciona los motivos en que fundamenta el recurso de habeas corpus mencionando lo siguiente:

PRIMERO: Fui objeto de un robo de un collar, al momento de apersonarme a presentar formal denuncia, fui detenida por no portar documentos en esos momentos y me trasladaron posteriormente a migración.

SEGUNDO: Actualmente tengo una hija panameña llamada **KIMBERLY YANETH MARTINEZ LUNA**, mujer, menor de edad, nacida el 31 de marzo de 1999, según tomo 944 de nacimientos de Panamá, con asiento 1893. La cual ejerzo la patria potestad y la guarda y crianza, ya que soy madre y padre a la vez y soy su unico (sic) sustento familiar.

TERCERO: La autoridades de la república están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quieran se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

CUARTO: Los panameños y extranjeros somos iguales ante la ley, pero ésta podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales a EXTRANJEROS, pero no atentando contra los preceptos anteriormente mencionados.

QUINTO: Nadie pueda ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades y no se me entrego (sic) ninguna orden, violando así la Constitución Nacional.

SEXTO: Antes de tomar una medida definitiva o drástico al momento de deportar al país a un extranjero debe concedersele como lo establece el decreto ley de 30/6/60 una medida preventiva y libertad por 30 días y más si se tiene un hijo panameño y casados se le inpondra (sic) una multa solo (sic) de B/25.000.

SEPTIMO: La unidad familiar, la igualdad de derechos y deberes de la conyuges (sic), la igualdad de los hijos y la protección de los menores de edad, constituyen principios fundamentales para aplicación e interpretación de las leyes. Las disposiciones de las leyes de familia son de orden público y de interes (sic) social y se aplicaran (sic) con preferencia a otras leyes.

OCTAVO: En la mañana de hoy viernes 29/9/00, me sentia (sic) mal y solicite (sic) me llevarn (sic) a una clinica (sic) y me llevaron por que (sic) me puse muy mal me examinaron y me madaron a realizarme una prueba de embarazo y no me realizaron en el centro Emiliano Ponce porque Migración supuestamente no tiene dinero para pagra (sic) dicha prueba.

NOVENO: Por lo anteriormente expuesto es que le solicito con todo respeto se declare ILEGAL mi detención y se me deje en Libertad lo mas (sic) pronto posible y se deje sin efecto la Resolución 5552 de fecha del 28/9/00 que establece mi deportación del país.

La presente encuesta penal se inicia con la nota S/N de fecha 20 de septiembre de 2,000, enviada por el Jefe del Area A, San Felipe, Zona de Policía Metropolitana cuando hace la filiación de la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, a ordenes del Director Nacional de Migración.

Posteriormente mediante Detención No.1068-SI-DNMYN, de 20 de septiembre de 2,000, dictada por el Director Nacional de Migración y Naturalización Licenciado Eric Singares visible, ordena la detención de la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, por encontrarse ilegal en el territorio nacional.

De fojas 12-13, se observa la resolución No.5552 de 28 de septiembre de 2,000, emitida por el Director Nacional de Migración y Naturalización, donde ordena la DEPORTACIÓN de SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN.

Se tiene conocimiento de que la señora SANDRA A. LUNA por medio de su apoderado legal presentó Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio contra la Resolución 5552 que ordena su Deportación y dicho recurso se encuentra aún pendiente de resolver.

A fojas 16 de sumario está el Oficio No.1049-P, fechado 19 de octubre de 2,000, firmado por el Licenciado Eugenio Baso Fiscal de Circuito de Bocas del Toro, donde se informa dando respuesta a oficio No.SGP-2127-00 de 19 de octubre de 2,000, que contra la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, se adelanta en ese Tribunal sumarias por la supuesta comisión de delito Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de Daniel Elías Gordon Espinoza.

El Pleno pasará a resolver la acción de habeas corpus, tomando en cuentas

las siguientes consideraciones:

La acción de habeas corpus lleva implícito el estudio de las normas constitucionales y legales que regulan lo relativo a la detención preventiva, es decir, los artículos 21, 22 y 23 de nuestra Constitución Nacional, así como los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Primeramente esta Corporación de Justicia, advierte que la orden de detención preventiva dictada contra la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, visible a foja 7 del sumario, cumple con el requisito de haber sido emitida por la autoridad competente, que en este caso es el Director Nacional de mIGRACIÓN, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial y que fue expedida mediante resolución escrita y fundamentada en derecho.

A pesar de que la Dirección de Migración y Naturalización, le extendió anteriormente a la prenombrada LUNA GUZMAN un carnet de citación por el término de treinta (30) días para que arreglara su documentación, sin embargo trascurrieron los treinta (30) días y la señora SANDRA A. LUNA no estableció la legalidad de su permanencia en el país.

Hecha estas consideraciones, el Pleno, señala que la accionante agotó todos los recursos legales administrativos a su alcance, de conformidad con lo establecido por el Decreto Ley No. 16 de 1960, modificado por Decreto Ley 13 de 20 de septiembre de 1965 y la Ley 6 de 5 de marzo de 1980, específicamente en el artículo 86 que dispone:

> "Las resoluciones del Departamento de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia en los negocios de que trata el artículo anterior, quedarán sujetas a los siguientes recursos administrativos:
>
> 1°. El de reconsideración ante el Director del Departamento de Migración.
>
> 2°. El de apelación que se surtirá ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.
>
> Estos recursos podrán interponerse dentro de los tres días hábiles, siguientes a la notificación personal o de la desfijación del edicto, cuando hubiera lugar a ello".

Por otra parte, el Pleno, observa que la Resolución No.5552 fechada 28 de septiembre de 2,000, donde se ordena la DEPORTACIÓN de la señora SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, fue objetada mediante Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio y que el mismo se encuentra pendiente de resolver, por lo que a Juicio de esta Corporación de Justicia, se debe esperar el resultado de este tramite administrativo; por lo demás, consideramos que el procedimiento legal y constitucional empleado se ajusta a derecho, por lo que no existe violación a los derechos humanos de la recurrente.

Por otra parte, el Pleno, observa que contra SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN, se adelanta una investigación por la supuesta comisión de delito Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de Daniel Elías Gordon Espinoza, en la provincia de Bocal del Toro y por consiguiente, consideramos no es prudente proceder con la deportación de dicha ciudadana ya que quedaría en acefalía la investigación que se adelanta en su contra.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la DETENCIÓN dictada por el Director de Migración y Naturalización contra SANDRA ALEJANDRINA LUNA GUZMAN y, por tanto, DISPONE que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ORDENA EL CESE DE PROCEDIMIENTO EN LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DEL SEÑOR PASCUAL LUCERO URRUTIA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FLORENCIO BARBA HART, interpuso acción de habeas corpus a favor de PASCUAL LUCERO URRUTIA y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio No. 13050 de 31 de octubre de 2000, rindió el siguiente informe:

> "PRIMERO: No es cierto que esta Agencia de Instrucción haya ordenado la detención preventiva de PASCUAL LUCERO URRUTIA.
> ...
>
> TERCERO: El señor PASCUAL LUCERO URRUTIA no se encuentra bajo nuestra custodia ni a órdenes de este Despacho, ya que mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2000 se dejó sin efecto su aprehensión en relación al expediente que se instruye por el delito tipificado en el Capítulo I, del Título IV, del Libro Segundo del Código Penal (CONTRA EL PATRIMONIO)". (f. 6)

Del informe anterior se colige que el señor LUCERO URRUTIA, no se encuentra detenido, por lo que procede ordenar el cese del procedimiento, conforme a lo estipulado en el artículo 2572 del Código Judicial, que señala:

> "El procedimiento de habeas corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal".

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de PASCUAL LUCERO URRUTIA, y por lo tanto DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR YESSENIA CARRASQUILLA DE CASTRO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOAQUIN ROGER PEREZ, en nombre y representación de la señora YESSENIA CARRASQUILLA DE CASTRO, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA.

Encontrándose el proyecto en lectura, el licenciado SATURNINO ABREGO, nuevo apoderado judicial de la señora YESSENIA CARRASQUILLA DE CASTRO, presentó escrito de DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus fechado 7 de noviembre de 2000, que a la letra dice:

"...
SEÑORA PRESIDENTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Yo, SATURNINO ABREGO, con generales mencionadas en el poder que se acompaña, me presento ante los Honorables magistrados, de la manera más respetuosa con el propósito de desitir de la solicitud de Habeas Corpus presentada a favor de YESSENIA CARRASQUILLA ALTAFULLA.
...

En virtud de que el artículo 1073 del Código Judicial otorga el derecho para desistir, expresa o tácitamente, de un incidente, recurso o demanda interpuestos por una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la presente acción.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus interpuesto a favor de YESSENIA CARRASQUILLA DE CASTRO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO PRESENTADO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ZALDIVAR S., A FAVOR DE FELIPE DANIELS, ISTEMEÑO ÁVILA, EDILBERTO BALLESTEROS, FELIPE BARRIOS, MANUEL CHANIS WALTER, MARCOS HUGUES, JAIME LUNA, JUAN MITRE, DANIEL ORTEGA, GERARDO RENTERÍA SÁNCHEZ, CLINTON RODRÍGUEZ, SANTOS DOMINGO SOSA, ADÁN VÁSQUEZ Y CARLOS VILLARREAL CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El día 31 de octubre de 2000 ingresó al conocimiento de esta Corporación de Justicia, la Acción de Hábeas Corpus preventivo interpuesta por el Licenciado FRANCISCO ZALDIVAR S. a favor de los Concejales Municipales del Distrito de Colón

señores FELIPE DANIELS, ISTMEÑO ÁVILA, EDILBERTO BALLESTEROS, FELIPE BARRIOS, MANUEL CHIARI WALTER, MARCOS HUGHES, JAIME LUNA, JUAN MITRE, DANIEL ORTEGA, GERARDO RENTERÍA SÁNCHEZ, CLINTON RODRÍGUEZ, SANTOS DOMINGO SOSA, ADÁN VÁSQUEZ Y CARLOS VILLARREAL, contra la orden de conducción expedida por el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, Licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA, toda vez que a juicio de los accionantes dicha orden resulta ilegal ya que viola la libertad que la Ley les garantiza.

Una vez acogida la presente acción, se libró mandamiento de Hábeas Corpus contra el funcionario demandado, quien respondió mediante Oficio N° 13288 del 6 de noviembre de 2000, que el Despacho a su cargo no ordenó ni por escrito, ni verbalmente la detención preventiva de los beneficiarios del presente Hábeas Corpus, que por no decretarse la detención de los mencionados Concejales Municipales, no existen motivos de hecho, ni de derecho que aducir y que no tiene bajo custodia, ni a sus órdenes a los recurrentes.

Asimismo, el funcionario instructor informó en base al artículo 2589 del Código Judicial, lo siguiente:

> "Resultó de conocimiento público y notorio, que esta investigación se inicia en la Policía Técnica en virtud de nota procedente del Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 25 de septiembre de 2000, y con posterioridad la Procuraduría General de la Nación, mediante nota PGN-SG-206-00, de fecha 2 de octubre de 2000 envía a este Despacho la denuncia del Contralor General de la República, siendo remitida por último a esta agencia de instrucción el día 26 de octubre del presente año. Durante todo este tiempo nadie se interesó por saber lo que ocurría. Al final del plazo de suspensión del cargo de la Alcaldesa, por la Gobernadora, se dieron sendas declaraciones de Concejales sobre que se presentarían voluntariamente a este despacho sin cumplir tal promesa. Mediante Resolución de fecha 26 de octubre de 2000 se dispuso la indagatoria de varios funcionarios, a los que había que hacer comparecer, en ese sentido se giraron los primeros oficios y quedó pendiente la localización y conducción del resto. Ante la incertidumbre e imposibilidad de localizar a las personas el día 28 de octubre de 2000, y a la fecha, de ninguna forma han hecho acto de presencia para agotar la diligencia. Tomando en cuenta todo lo elaborado en esta sustentación; que el problema tiene extensiones internacionales y extranjeros como participantes se dictó impedimentos de salidas de fecha 28 de octubre de 2000."

De informe transcrito se observa que contra los beneficiarios de la presente acción constitucional, la autoridad demandada no ha ordenado ni escrito ni verbal sus detenciones, que no los tiene bajo sus órdenes ni lo han transferido a otra autoridad, que lo que existe es una medida cautelar de impedimentos de salidas de fecha 28 de octubre de 2000.

Sobre el particular, conviene señalar que reiterada Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha admitido el Hábeas Corpus preventivo, por considerar que el espíritu del artículo 32 de la Ley Fundamental no se limita simplemente a proteger los derechos fundamentales de toda persona, a través del recurso de Hábeas Corpus como una acción reparadora, sino que su alcance es más amplio como un mecanismo preventivo, a objeto de evitar detenciones cuando exista una orden en ese sentido que no se haya ejecutado.

Por tanto, en el presente caso, queda claro que no existe orden de detención preventiva contra los recurrentes, por lo que en consecuencia, no procede la acción de Hábeas Corpus preventivo.

No obstante, también es importante indicar que la Secretaría General de la Corte, recibió escrito de desistimiento acompañado de poder especial, presentado el día 8 de noviembre de 2000 por el Licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA

y por los Concejales Municipales señores DANIEL ORTEGA, CARLOS VILLARREAL Y JUAN ELOY MITRE, y cuyos contenidos expresan respectivamente lo siguiente:

> "El suscrito CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, abogado en ejercicio y de generales conocidas en autos, actuando en mi condición de Abogado Defensor de los señores JAIME LUNA, FELIPE BARRIOS Y ADÁN VÁSQUEZ, tal como consta en los poderes que adjuntamos, de generales conocidas en el proceso que se enuncia a margen superior, por este medio acudo ante su Despacho a fin de DESISTIR de la Acción de HÁBEAS CORPUS PREVENTIVO, presentada a favor de nuestros mandantes."
>
> "Nosotros, DANIEL ORTEGA, varón panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 3-77-653; CARLOS VILLARREAL, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal N° 3-79-505 y JUAN ELOY MITRE, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad personal N°4-232-42, todos 1localizables en el Palacio Municipal del Distrito de Colón, acudimos ante usted con el debido respeto y exponemos:
>
> Que ingresamos formal desistimiento al Hábeas Corpus presentado en nuestro favor ante este Honorable Colegiado. Este desistimiento se promueve motivados en que nunca hemos autorizado a ninguna persona para incidir judicialmente por esta vía y además porque hemos sido sorprendidos por una acción inconsulta y obviamente ineficaz."

Conforme a las solicitudes anteriores y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1073, primer párrafo del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho para desistir expresa o tácitamente una demanda, un incidente o recurso que haya interpuesto, el Pleno de la Corte considera viable acoger esta decisión y concluir las actuaciones que se derivan de la presente acción de Hábeas Corpus. Sin embargo, el Pleno desea aclarar que el recurso de Hábeas Corpus, como ocurrió en el presente caso, puede ser interpuesto verbalmente o por escrito por cualquier persona o abogado en beneficio del agraviado, sin necesidad de poder, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2573 del Código Judicial y 23 de la Constitución Política.

La anterior observación la hacemos, en virtud de que en el escrito de desistimiento presentado en sus propios nombres por los señores DANIEL ORTEGA, CARLOS VILLARREAL y JUAN ELOY MITRE, se infiere que los mismos señalan que no habían autorizado a ninguna persona para incidir judicialmente por la vía del Hábeas Corpus y además porque a su juicio se han visto sorprendidos por una acción inconsulta e ineficaz.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO de la Acción de Hábeas Corpus presentada a favor de los Concejales Municipales señores FELIPE DANIELS, ISTMEÑO ÁVILA, EDILBERTO BALLESTEROS, FELIPE BARRIOS, MANUEL CHANIS WALTER, MARCOS HUGHES, JAIME LUNA, JUAN MITRE, DANIEL ORTEGA, GERARDO RENTERÍA SÁNCHEZ, CLINTON RODRÍGUEZ, SANTOS DOMINGO SOSA, ADÁN VÁSQUEZ Y CARLOS VILLARREAL; ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el Licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA a favor de JAIME LUNA, FELIPE BARRIOS Y ADÁN VÁSQUEZ y el de los señores DANIEL ORTEGA, CARLOS VILLARREAL Y JUAN ELOY MITRE presentado en su nombre propio, y en consecuencia se DISPONE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ SALVADOR QUIJADA CONTRA LA DIRECTORA DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Teófilo Ruiz en representación de JOSÉ SALVADOR QUIJADA, interpuso ante el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal, acción de Hábeas Corpus a su favor y contra la Juez Tercera Nocturna de Policía del Distrito de Panamá.

Alega el recurrente en su demanda de hábeas corpus que el señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA fue detenido por agentes de la Policía Nacional por no portar cédula de identidad personal, razón por la cual debió sancionársele con multa de B/.5.00 y no con 60 días de arresto.

Librado el mandamiento de hábeas corpus, la funcionaria demandada, mediante escrito fechado 23 de octubre de 2000, puntualizó lo siguiente:

> "1. El señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA fue remitido a este despacho por encontrarse vagando en las inmediaciones del mercado Público en estado de embriaguez, junto con otros indigentes, además por no portar cédula. Sobre este caso en particular se les indicó a los ciudadanos remitidos a este despacho que estaban sancionados a sesenta días de arresto por vagancia, no portar cédula y embriaguez, los mismos manifestaron no contar con la suma de dinero a pagar. Se procedió a girar boleta de orden de condena a los ocho (8) ciudadanos.
>
> 2. Nuestra actuación está fundamentada en la solicitud que hiciera la Policía Metropolitana Area A de San Felipe, quienes realizan operativos dentro del área del Mercado Público por la gran cantidad de indigentes, drogadictos que permanecen por esos alrededores y son constantes las quejas de los moradores. En cuanto a las razones de derecho nuestra orden se basó en la Ley 108 de 1990, Artículos 1276 y 1284 del Código Administrativo y la Ley 112 de 1974.
>
> 3. Actualmente el señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA está a órdenes de la Cárcel de Tinajita (Dirección de Corrección) desde el día 16 de octubre de 2000.
>
> 4. No existe orden preventiva, sino resolución condenatoria". (f. 6)

Contestado el mandamiento de hábeas corpus, dicho Juzgado de Circuito, mediante Resolución fechada 23 de octubre de 2000, se inhibió de pronunciarse sobre la acción de hábeas corpus interpuesta, toda vez que el detenido está a órdenes de un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional. Por tanto, remitió el expediente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 2602 del Código Judicial (fs. 8-9 del cuadernillo de hábeas corpus).

Acogido el presente recurso de hábeas corpus por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento contra la Directora General del Sistema Penitenciario, quien mediante Nota N° 3126 DGSP-al fechada 27 de octubre de 2000, rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

"A. La suscrita en calidad de Directora General del Sistema

Penitenciario, no ha impartido verbalmente ni por escrito, orden de detención en contra del prenombrado.

B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o de derecho de la detención, porque no la hemos ordenado.

C. El señor JOSE SALVADOR QUIJADA, con cédula de identidad personal N° 8-249-993, se encuentra recluido en el Centro de Detención de Tinajitas, a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en virtud del cumplimiento de la pena de sesenta (60) días de arresto impuesta por la Juez Tercera Nocturna de Policía, del Distrito de Panamá.

Consta en el cuadernillo de hábeas corpus que la Juez Tercera Nocturna de Policía, por medio de la Resolución N° 1037 (f.6) sancionó al señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA, entre otros, a sesenta días de arresto por vagancia, embriaguez y no portar cédula de identidad personal. Sin embargo, contrario a lo señalado por dicha funcionaria y el recurrente de esta acción de hábeas corpus, el señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA sí portaba su cédula de identidad personal al momento de ser detenido por los agentes policiales en el Mercado Público de San Felipe, tal como consta en el informe suscrito por el sub-teniente encargado del Grupo "D" del Área A de San Felipe (Cfr. foja 5 del cuadernillo de hábeas corpus).

No obstante lo anterior, del informe rendido por la Directora General del Sistema Penitenciario y de la mencionada Resolución condenatoria, se desprende que el señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA, está cumpliendo a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pena de arresto de 60 días que le impuso la Juez Tercera Nocturna de Policía del Distrito de Panamá por vagar en las inmediaciones del mercado público supuestamente en estado de embriaguez durante la madrugada del 16 de octubre de 2000.

Ahora bien, la acción de hábeas corpus no es el medio procesal idóneo para resolver la pretensiones del detenido JOSÉ SALVADOR QUIJADA, porque ésta acción tiene como objeto preservar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la Constitución y la Ley señalan.

En el presente negocio la parte actora está cumpliendo pena de arresto en el Centro de Detención de Tinajitas, que le fue impuesta de conformidad con las normas vigentes.

El artículo 1 de la Ley 112 de 1974 establece que la justicia de Policía en los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón será ejercida en especial por los Corregidos y Jueces de Policía Nocturnos. Los Juzgados de Policía Nocturnos funcionan todos los días desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, con el objetivo de que la administración de policía sea continua (artículo 12 de la Ley 112 de 1974). La sanción fue impuesta en cumplimiento de los artículos 1276 y 1284 del Código Administrativo referentes a la moral y las buenas costumbres; y la pena de arresto está autorizada por el artículo 878 del Código Administrativo y no excede los límites señalados en el artículo 898 ibídem.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención del señor JOSÉ SALVADOR QUIJADA en el presente caso y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEOPOLD THOKEY Y ROMBI ATHANASE, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Ana Blaisdell ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema, acción constitucional de habeas corpus a favor de Leopold Thokey y Rombi Athanase, quienes se encuentran detenidos a órdenes del Director de la Policía Nacional.

Al momento de proceder a librar el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, la licenciada Blaisdell presenta manuscrito en el que manifiesta que desiste de la iniciativa constitucional propuesta, ya que "la P.T.J., no ha encontrado mérito para tenerlos detenidos" (f.13).

La Corte advierte que en el cuaderno de habeas corpus no obra ninguna documentación que acredite que, a la licenciada Blaisdell, se le haya otorgado un poder especial para representar judicialmente a Thokey y Athanase; mucho menos hay constancia de que esté facultada para desistir, por lo que debe rechazarse de plano su solicitud.

No obstante, se debe resaltar que en el escrito de desistimiento se pone de manifiesto que las autoridades no encontraron méritos para mantener detenidos a Thokey y Athanase; lo que permite inferir que se encuentran en libertad. Por lo tanto, la presente acción subjetiva carece de objeto y lo que procede es aplicar lo preceptuado en el artículo 2572 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en la presente acción de habeas corpus.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE NICOLÁS ACOSTA HERRERA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA ha presentado por cuarta vez, ante esta Superioridad, acción de hábeas corpus a su favor y contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

El accionante fundamenta en esta ocasión su recurso en el supuesto incumplimiento por parte de nuestro país del Pacto de San José sobre Derechos Humanos, alegando lo siguiente:

"Primero: Que me encuentro detenido desde el 24 de abril de 1998, por lo que cumpliré los treinta (30) meses de detención preventiva el próximo 24 de octubre del presente año, sin que se haya confeccionado la correspondiente Vista Fiscal, y por ende, no he sido llevado a juicio.

Segundo: Que me acogí al contenido del Artículo 28 del Texto Único de la Ley de Drogas (Ley 23 del 30 de Diciembre de 1986, modificada por la Ley 13 de 27 de julio de 1994), y se me prometió, por parte del Fiscal Segundo de Drogas, Lic. Patricio E. Candanedo, una pena recomendada de entre veinte (20) y veinticuatro (24) meses, los cuales han sido pagados en exceso.

Tercero: Que he solicitado en varias ocasiones reemplazo de la detención preventiva, bajo el contenido del artículo 28 del Texto Único de la Ley de Drogas, de los Artículos 2147-K y 2147-N del Código Judicial, que fueron adicionados por la Ley 39 de 28 de agosto de 1999, y bajo la Ley 43 de 1998. Todas las cuales han sido negadas por el Juzgado Décimo del Circuito- Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, acogiendo la opinión del Fiscal Segundo de Drogas de "que no es la etapa procesal idónea para evaluar la cooperación aportada...", lo cual está fuera del contexto, ya que mi principal cooperación es "insoslayable y efectiva", porque hice la entrega de trescientos cincuenta y cuatro (354) kilogramos de cocaína, que no habían sido detectados por los agentes policiales. Lo cual considera como "cooperación efectiva y calificada."

Cuarto: Que al negarse a reemplazar mi detención preventiva, tanto el funcionario de instrucción como el juez de la causa, y no haber realizado la audiencia preliminar ante la falta de la Vista Fiscal correspondiente, ambos funcionarios públicos han incurrido en el incumplimiento del Artículo 7mo numeral 5 del Pacto de San José, el cual dice:
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio".
Contenido que no admite dudas en su texto y que como parte de un Convenio Internacional, del que la República de Panamá es signataria, es de obligatorio cumplimiento. Por lo que quienes, como funcionarios públicos, no lo cumplen incurren en una conducta violatoria y podrían ser penados bajo el Artículo 313 del Código Penal.
Quinto: Que otro de los "argumentos o excusas" utilizados por el Fiscal Segundo de Drogas para oponerse al reemplazo de la detención preventiva es: "que el detenido (yo) no se encuentra en un centro carcelario...", lo cual es sólo semántica, porque me encuentro en una celda de detenidos transitorios, donde no se cumplen los enunciados del Artículo 28 de la Constitución Nacional, donde no se tiene acceso a la luz solar, a los programas de resolicalización y rehabilitación científica, ni la debida protección de mi salud y de mi integridad física, dado el hecho del constante hacinamiento de más de treinta (30) consumidores adictos de drogas, muchas veces con enfermedades contagiosas, en un área de aproximadamente treinta metros cuadrados (30mts2).
Esta situación trae consigo el riesgo de que un "sicario" se haga

pasar por "consumidor de drogas", se haga aprehender y atente contra la integridad de uno de los detenidos "supuestamente" protegidos baja el fuero del Artículo 28 del Texto Único de la Ley de Drogas (sic), como ya se dio un conato en contra del detenido Jacinto Morales.

Conclusión y Solicitud:

No está en disputa la interpretación del Artículo 7mo numeral 5 del Pacto de San José, como tampoco que la República de Panamá, como signataria del mismo, debe cumplir con su ejecución a través de los funcionarios públicos facultados por la ley; tampoco se puede soslayar, amparados en semántica, las condiciones carcelarias violatorias del Artículo 25 del mismo Pacto de San José, que se viven en las cárceles panameñas. Todo esto es triste, lamentable e injusto y todos los panameños tenemos la obligación legal y moral de solucionarlo.

Por todas éstas razones, legales, morales y éticas, así como por el mejor interés de la Justicia, respetuosamente solicito que esta Honorable Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia acceda a mi presente solicitud y ordene al Fiscal Segundo de Drogas que confeccione, en un período no mayor de treinta (30) días, la Vista Fiscal correspondiente y que se fije la fecha de mi audiencia preliminar"

II. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

El señor Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante Nota FD2-T12-4591-00 fechada 6 de junio de 2000 contestó el mandamiento de hábeas corpus respectivo, informando a este Tribunal las razones por las cuales el despacho instructor ordenó la detención preventiva de NICOLÁS ACOSTA HERRERA el 24 de abril de 1998.

El funcionario demandado por medio de un informe pormenorizado informó a este Tribunal de los hechos que vinculan al señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA con la comisión del delito de tráfico de drogas (fs.8-20 del cuadernillo de hábeas corpus).

Los elementos probatorios que reposan en el sumario revelan la existencia de una organización criminal dedicada al trasiego y venta de estupefacientes, así como el movimiento de capitales hacia la Zona Libre de Colón provenientes del comercio ilícito de dichas sustancias.

La empresa criminal es dirigida por el señor ARTURO NAVARRO, y en ella NICOLAS ACOSTA -quien se encuentra confeso del ilícito-, era el encargado de dirigir y transportar las sustancias ilícitas hacia Costa Rica, para posteriormente ser enviadas por Centroamérica hasta Guatemala, México, Estado Unidos y Europa.

Estas circunstancias y otras que reposan en el sumario, previo cumplimiento de las exigencias contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, fundamentaron la detención preventiva del recurrente, misma que ya ha sido examinada por la Corte Suprema de Justicia en tres oportunidades, declarando su legalidad. (v.g. resoluciones de 3 de diciembre de 1999, de 25 de mayo 2000 y 4 de julio de 2000)

La autoridad demandada también se refirió al ejercicio abusivo de acciones por parte del apoderado judicial del señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA cuando en su informe de conducta señaló lo que a continuación se expresa:

"...queremos dejar constancia que, nos preocupa la manera sistemática, como algunos apoderados judiciales y los propios imputados casi desde el inicio del sumario, han concurrido a esa Corporación; al Segundo Tribunal Superior de Justicia y a diversos tribunales jurisdiccionales, con diferentes acciones, recursos,

> incidentes, tercería y quejas, lo que ha impedido que se practiquen una pluralidad de diligencias tendientes al perfeccionamiento de la investigación, toda vez que las constancias sumariales son requeridas para resolver los mismos."

Aunado a lo anterior, dejó constancia en dicho informe, de que el expediente principal y anexos se encuentran por motivo de otra acción de hábeas corpus interpuesta por el señor LEOVIGILDO RODRÍGUEZ, en esta Corporación de Justicia y en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, resolviendo apelaciones de los encartados.

El funcionario demandado cierra su informe con una cita directa de la resolución de 25 de mayo de 2000 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de otra acción de hábeas corpus presentada en favor del señor NICOLAS ACOSTA HERRERA, en la que este Tribunal categóricamente indicó:

> "...el ejercicio abusivo del derecho a formular peticiones, solicitudes y reclamos conduce a la dilación de los procesos".

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

El Pleno de esta Corporación de Justicia, observa que el detenido ACOSTA HERRERA, exige por medio de la interposición de esta acción constitucional, el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José- aprobada por Panamá mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977 (G.O N° 18,468 de 30 de noviembre de 1977).

Esta Convención tiene como propósito consolidar en el continente americano "un régimen de libertad personal y de justicia social fundamentado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".

El Capítulo Segundo del denominado Pacto de San José que se refiere a los Derechos Civiles y Políticos regula el derecho a la libertad personal y establece en el numeral 5 que toda persona privada de su libertad corporal puede recurrir ante el Juez o Tribunal competente a fin de que decida sobre la legalidad o no de su arresto y, además, tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a gozar de libertad condicionada a garantías que aseguren su comparecencia a juicio.

Ahora bien, en lo medular, mediante el escrito de hábeas presentado, el señor NICOLÁS ACOSTA HERRERA solicita a este Tribunal que le ordene al funcionario de instrucción que dicte prontamente la Vista Fiscal y, consecuentemente, se fije la fecha para la celebración de la Audiencia Preliminar.

Sobre el particular, la Corte, una vez más no puede dejar de referirse a lo expresado por la agencia instructora de este caso, en el sentido de que su labor investigativa se ha visto seriamente afectada por la forma sistemática en que el imputado y sus defensores han ocurrido a las instancias judiciales a través de escritos, peticiones y recursos de diversa índole, impidiendo que se practiquen las diligencias necesarias para completar la instrucción sumarial, toda vez que en cada oportunidad en que se presentan tales incidencias, las constancias sumariales son requeridas por los tribunales que han de conocer de los medios impugnativos interpuestos.

La Corte coincide con lo expuesto por el señor Fiscal, toda vez que este Tribunal ha atendido en un corto lapso, cuatro acciones constitucionales de hábeas corpus en favor de NICOLÁS ACOSTA y, al resolver dos de estas iniciativas procesales (Resolución de 25 de mayo y 4 de julio de 2000), se le indicó al proponente que está abusando de su derecho a promover dicho recurso.

La acción de habeas corpus, por la categoría constitucional que ostenta como instrumento de tutela de la libertad individual, debe ser empleada de manera

racional, en vías de que constituya un verdadero mecanismo de protección para los ciudadanos; su utilización abusiva, sin que existan las condiciones que realmente la hacen viable, le restan eficacia e idoneidad procesal, y afectan la vitalidad jurídica del proceso principal.

Ante lo expuesto, este Tribunal le reitera al señor ACOSTA HERRERA que su detención es legal, tal como se desprende del informe de conducta del Fiscal Segundo Especializado en Delitos de Drogas y de su escrito de hábeas corpus en el cual de manera diáfana no objeta la legalidad de su orden de detención preventiva, sino la negativa del funcionario de intrucción de sustituirle la detención preventiva por otras medidas cautelares, así como la demora de dicho funcionario en dictar la Vista Fiscal que permitiría que ser llamado prontamente a juicio. A su vez, se le reitera (Cfr. Resolución de 3 de diciembre de 1999) que es una facultad discrecional del funcionario de instrucción concederle o no la sustitución de la medida cautelar de la detención preventiva (artículo 28 de la Ley 13 de 1994) y se le recomienda al imputado que si su interés es el de ser llamado a juicio prontamente, le permita al señor Fiscal concluir la fase sumarial, absteniéndose de presentar escritos y recursos dilatorios que impiden la práctica de las diligencias tendentes a su conclusión.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dictada por el señor Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas contra NICOLÁS ACOSTA HERRERA mediante diligencia fechada 24 de abril de 1998 y ORDENA que el mismo sea puesto nuevamente a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE EDGAR BUSTAMANTE RIASCO CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, LCDO. ROSENDO MIRANDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor EDGAR BUSTAMANTE ha interpuesto acción de hábeas corpus a su favor y contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Recibido el negocio por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento de hábeas corpus correspondiente y se requirió al funcionario demandado, que informara si había ordenado la detención de EDGAR BUSTAMANTE, los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Rosendo Miranda, contestó el mandamiento de hábeas corpus librado, mediante Oficio No. FD01-T02-4901 de 13 de noviembre de 2000, en el cual informó lo siguiente:

> "Sí es cierto que este despacho de instrucción ordenó la DETENCIÓN PREVENTIVA de EDGARD BUSTAMANTE RIASCO por delito CONTRA LA SALUD

PÚBLICA relacionado con drogas.

Luego de culminada la tramitación de la fase sumaria, el negocio criminal fue remitido al tribunal de la causa, el mismo se encuentra actualmente radicado en el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. El interno BUSTAMANTE RIASCO se encuentra a órdenes de aquel Despacho judicial"(f. 11).

Como el sumario relacionado con el señor EDGAR BUSTAMANTE RIASCO, se remitió al Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá y el detenido está a órdenes de dicha autoridad, tal como consta en el informe anterior, el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para conocer del presente proceso de hábeas corpus y debe declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2 y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de hábeas corpus promovida por EDGAR BUSTAMANTE RIASCO en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NEMESIO FAJARDO ANGULO EN FAVOR DE CARLOS ARIEL GARCÍA FORERO Y CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Nemesio Fajardo Angulo, interpuso acción de habeas corpus a favor de Carlos Ariel García Forero y contra el Director General de la Policía Nacional.

En su escrito de habeas corpus el licenciado Fajardo Angulo expresó lo siguiente:

"QUINTO: Lo que buscan los miembros de la policía es detener a nuestro cliente y realizarle un reconocimiento en las instalaciones de dicha dependencia policial y después remitirlo a la Policía Técnica Judicial, a fin de que la Fiscalía Auxiliar realice diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos y obtener de esta manera la detención del mismo en forma legal, pero utilizando mecanismos ilegales para tal fin y así sindicarlo.

SEXTO: No nos extraña que al recibir el presente recurso la Policía Nacional, utilice el juego de pin pon, es decir señale que la Policía Nacional no ha ordenado detención en contra de nuestro representado, más sin embargo se a (sic) realizado diligencia de allanamiento a la residencia del mismo." (f. 2)

Mediante providencia de 14 de noviembre de 2000 (f. 5) se acogió la presente acción y la Magistrada Sustanciadora libró mandamiento de habeas corpus, el cual fue respondido por el señor Director de la Policía Nacional mediante su Nota D.G.P. N.-0039-00 de 16 de noviembre de 2000 (f. 6), en la que indicó lo siguiente:

> "A. No es cierto que haya ordenado la detención del Señor Carlos Ariel García Forero, ni por escrito ni verbalmente.
> B. Queda explicado en el literal anterior.
> C. No tengo bajo mi custodia ni a mis órdenes a la persona que se mandado (sic) a presentar."

Como el señor Director de la Policía Técnica Judicial ha señalado en su informe que el ciudadano Carlos Ariel García Forero, a favor del cual se ha interpuesto la presente acción de habeas corpus, no está detenido a sus órdenes ni ha ordenado su detención, corresponde declarar el cese del presente proceso de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO dentro de la presente acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Nemesio Fajardo Angulo a favor de CARLOS ARIEL GARCÍA FORERO y contra el Director General de la Policía Nacional.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JACINTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A FAVOR DE LOS SEÑORES VALENCIA UBALDO S., DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA Y OTROS CONTRA LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior, mediante Resolución fechada 18 de octubre de 2000 (fs. 10-12), se inhibió de conocer la demanda de hábeas corpus promovida por el licenciado Jacinto González en representación de los señores JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA y CARLOS QUIZADA SÁNCHEZ, porque el mismo está a órdenes del Director de la Policía Técnica Judicial; y ordenó remitir el negocio ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por razones de competencia.

Acogido el presente negocio por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento de hábeas corpus correspondiente y se le requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención de los señores JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA, y

CARLOS QUIZADA, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de hábeas corpus librado mediante Nota N° 0884 de 31 de octubre de 2000, en la cual informó lo siguiente:

> "a) No es cierto que hemos ordenado la detención de los señores JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA, y CARLOS QUIZADA SÁNCHEZ.
>
> b) No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> c) En nuestros registro tenemos que los señores de nombres JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA, y CARLOS QUIZADA SÁNCHEZ, fueron puestos en libertad el día 14 de octubre del 2000, mediante el oficio No. 12504 de la Fiscalía Auxiliar de la República."(fs. 19-18)

Como el funcionario demandado, informó que los señores JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA, y CARLOS QUIZADA han sido liberados y la autoridad demandada no ha girado orden de detención en su contra, debe ordenarse el cese del procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de hábeas corpus promovido por el licenciado Jacinto González en representación de los señores JAIR VALENCIA, UBALDO SÁNCHEZ, DEMETRIO RODRÍGUEZ, ERASMO CERRUD, VICTORIANO CASTILLO, HÉCTOR FAVIO HERNÁNDEZ, JOSÉ ISAÍAS FONSECA, PATRICIO CAMARENA, JOSÉ GIL, TEÓFILO NAZA, ANDRÉS AVELINO LAGARCHA, DONAL CASTILLO, DIDIO BARRÍA, JOSÉ BARRERA y CARLOS QUIZADA SÁNCHEZ y contra el Director de la Policía Técnica Judicial, y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR LA FIRMA CHUNG, RAMOS & RIVERA A FAVOR DE ARIEL ALEXIS ALVARADO AGUILA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense CHUNG, RAMOS & RIVERA, promovió acción de habeas corpus

a favor de ARIEL ALEXIS ALVARADO AGUILA y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Encontrándose en la fase de sustanciación de la presente acción constitucional, se recibió en la Secretaría General de la Corte Suprema, el siguiente escrito:

> "Nosotros, CHUNG, RAMOS & RIVERA, abogados en ejercicio, con oficinas profesionales en Avenida Perú final, edificio Las Camelias, piso 5, oficina 501, localizable a los teléfonos 269-5389 y 214-7318, lugar donde recibimos notificaciones personales, concurrimos ante este alto tribunal, en nuestra condición de abogados defensores de ARIEL ALEXIS ALVARADO AGUILA, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N°4-742-2135, con residencia en el Valle de Urracá, casa s./n., teléfono 275-1346, Distrito de San Miguelito, Provincia y República de Panamá, a fin de DESISTIR del RECURSO DE HABEAS CORPUS interpuesto a su favor y en contra del FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA DE PANAMA, dado que el expediente extraviado, ya fue recuperado, lo cual deja sin fundamento legal nuestra acción".

El PLENO procede a aceptar el desistimiento formulado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1073, por las razones anotadas por los accionantes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO formulado dentro de la acción de habeas corpus solicitado a favor de ARIEL ALEXIS ALVARADO AGUILA.

Notifiquese y Archivese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR LA FIRMA SITTON & ASOCIADOS A FAVOR DE GILBERTO BOUTIN ICAZA CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema conoce de acción de habeas corpus presentada por la firma SITTON & ASOCIADOS a favor de Gilberto Boutin Icaza contra el Procurador General de la Nación.

Por admitida la iniciativa constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante nota PGN-SG-252-00 de 20 de noviembre de 2000, donde afirma que "...no ordenó la detención de Gilberto Boutin Icaza y que el prenunciado no se encuentra ni bajo la custodia ni bajo las órdenes nuestras...."(Cfr. 38).

Agrega que, el señor Gilberto Boutin Icaza fue investigado por la Fiscalía Segunda de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, y el expediente "...se encuentra actualmente en el Juzgado Primero de Circuito del Primer

Circuito Judicial de Panamá..."(Cfr. f. 38).

De lo anterior se infiere que la Corte Suprema carece de competencia originaria para conocer este asunto, puesto que el beneficiado de esta acción constitucional se encuentra a órdenes del Juzgado Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Por acreditada esa circunstancia, corresponde aplicar el artículo 2602 del Código Judicial, que establece que los Tribunales Superiores de Distrito Judicial conocen, en primer grado, del proceso constitucional de habeas corpus "por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia".

En virtud de lo anterior, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento de este negocio ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR A. PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO CASTRO PINZON CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado RAMIRO FONSECA PALACIOS ha presentado ante el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, acción de Hábeas Corpus en contra del Segundo Tribunal Superior de Justicia y a favor de MANUEL ANTONIO CASTRO PINZÓN, quien se encuentra privado de su libertad ambulatoria corporal, en el Centro Penitenciario "La Joya", a órdenes del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, por la comisión de los delitos Contra El Patrimonio (Robo y Secuestro) y Contra La Seguridad Colectiva (Asociación Ilícita).

Es pertinente señalar que el Licenciado FONSECA PALACIOS promovió una acción de Hábeas Corpus similar el día 16 de agosto de 2000, que fue resuelta por esta Corporación de Justicia mediante fallo de 12 de septiembre de 2000, declarando legal la detención del imputado.

En esta oportunidad, el recurrente fundamenta su acción, principalmente, en que a partir del día 20 de septiembre de 2000, se realizó la audiencia oral ante jurado de conciencia dentro del proceso penal seguido a su representado y otros por los delitos de homicidio, robo, secuestro y asociación ilícita, audiencia ésta que culminó con un veredicto en la cual se declaró a MANUEL ANTONIO CASTRO PINZÓN inocente de los cargos del delito de homicidio en perjuicio de JUAN ANTONIO BARLETTA y LORENA ISABEL ANGUIZOLA MADRID y culpable de los cargos por la comisión de los delitos de robo, secuestro y asociación ilícita.

Que los delitos señalados en el párrafo anterior, son sancionados con pena mínima de cinco (5) años de prisión para el robo, de tres (3) años de prisión para el secuestro y un (1) año de prisión para la asociación ilícita.

Que lo anterior significa que desde que su representado fue detenido ha transcurrido hasta la fecha el término de cinco (5) años de prisión, situación procesal que -a juicio del actor- obliga a este Tribunal Constitucional a través de la vía del recurso de Hábeas Corpus a aplicar el contenido del artículo 2148-A del Código Judicial, toda vez que el señor CASTRO PINZÓN ha cumplido en cautiverio el mínimo que dispone cada uno de los delitos por los que fue llamado a responder en juicio criminal por parte del Segundo Tribunal Superior de Justicia y de los cuales fue encontrado culpable por el Tribunal del Pueblo.

En este sentido, el accionante manifiesta que los cargos de homicidio agravado que fueron analizados por la Corte mediante sentencia de 12 de septiembre de 2000 dentro de este mismo proceso han variado con respecto a su cliente, toda vez que fueron desechados por el jurado de conciencia, por lo que considera que el estado jurídico de CASTRO PINZÓN se ajusta a lo preceptuado en el artículo 2148-A del Código Judicial y en virtud de ello solicita que la detención preventiva que padece su cliente sea revocada y en su defecto se le otorgue la aplicación de alguna de las medidas cautelares que dispone el artículo 2147-B del Código Judicial, previa declaratoria de ilegalidad de su detención preventiva.

Analizada la acción de Hábeas Corpus presentada por el Licenciado FONSECA PALACIOS, el Pleno observa que la misma se fundamenta en que a criterio del accionante el señor CASTRO PINZÓN debe ser favorecido con la aplicación de una de las medidas cautelares contenidas en el artículo 2147-B del Código Judicial, toda vez que su situación jurídica se ajusta a lo establecido en el artículo 2148-A ibídem. Esta norma señala que "la detención preventiva será revocada por el juez sin más trámite, de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se le imputa, de conformidad con las constancias procesales. En estos casos, la detención preventiva será sustituida por otra medida cautelar personal de las señaladas en el artículo 2147-B del Código Judicial."

Por lo antes expuesto, esta Corporación de Justicia considera que en el caso que nos ocupa, el estado jurídico del imputado no se ajusta a lo preceptuado en el artículo 2148-A como apunta el accionante, ya que la norma es clara y no presta confusión, pues, ella hace referencia a la detención preventiva, situación que en la actualidad no goza el señor MANUEL CASTRO PINZÓN, ya que del propio libelo de Hábeas Corpus y de las constancias procesales se desprende que éste reviste la calidad de un reo condenado por Jurado de Conciencia, y que se encuentra en la espera que el Tribunal de la causa fije la pena por los delitos por las cuales se le declaró culpable.

Como vemos, ya existe un veredicto condenatorio y el hecho de que no se haya dictado aún la sentencia penal, no quiere decir esto, que el señor CASTRO PINZÓN sea un detenido preventivamente, pues así ha quedado demostrado en el expediente penal que nos fuera remitido por la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia y lo manifestado por el funcionario demandado, que al contestar su informe visible a folio 8-12 del cuadernillo de Hábeas Corpus advierte que en el presente proceso penal no estamos ante una detención preventiva, sino del período que transcurre de la condena a la fijación de la pena, por ello consideramos que la pretensión del actor resulta contraria a la verdadera finalidad del recurso de Hábeas Corpus.

Por otra parte, podemos señalar que si estuviéramos ante una solicitud de libertad condicional por haber cumplido el imputado más de dos tercios de la pena impuesta, tampoco dicha solicitud debería ser conocida por esta Superioridad, ni mucho menos utilizarse la acción de hábeas corpus para tal fin.

La Corte, en reiteradas jurisprudencia, ha señalado que con el recurso de Hábeas Corpus se busca preservar la libertad de los asociados cuando la misma ha sido coartada violándose los formalismos constitucionales y legales, lo que como ya se ha expresado no ocurre en esta oportunidad, pues ha quedado establecida la verdadera situación jurídica del imputado.

También es importante señalar, que el veredicto de culpabilidad manifestado por el jurado de conciencia hizo que el tiempo que ha cumplido el señor MANUEL CASTRO PINZÓN se haya convertido de detención preventiva en pena cumplida, debiendo recordar que la acción de hábeas corpus se interpone contra detenciones preventivas a excepción del Hábeas Corpus Correctivo, cuya finalidad no es la de lograr propiamente la libertad del sentenciado, razón ésta por la que también consideramos que la presente acción debe ser declarada no viable.

Finalmente, el Pleno concluye que no es factible atender esta solicitud por la vía de una acción constitucional de la naturaleza del Hábeas Corpus.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la presente Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado RAMIRO FONSECA PALACIOS a favor de MANUEL ANTONIO CASTRO PINZÓN.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS PRESENTADO POR IVAN SAMANIEGO A FAVOR DE JULIO CESAR POLANCO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado UBALDO IVAN SAMANIEGO, ha promovido acción de habeas corpus a favor de JULIO CESAR POLANCO, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Admitida la presente acción constitucional, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, en providencia de 7 de noviembre de 2000.

Mediante Oficio N°13455 de fecha 9 de noviembre de 2000, e ingresado a la Secretaria General de la Corte Suprema, el 13 de noviembre del año en curso, el señor FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA, Lcdo. CARLOS AUGUSTO HERRERA R., remitió el siguiente informe:

> "a) Si es cierto. Mediante resolución de fecha 31 de OCTUBRE del año 2,000, ordenamos la detención preventiva de JULIO CESAR POLANCO.
>
> b) El día 25 de este mes y año, la señora EDID ANAYANSI PEREZ CASTILLO denunció ante la Policía Técnica Judicial que dejó estacionado su vehículo marca Chevrolet Cavalier, de color negro, con matrícula No. 201371, frente del Almacén Adams del Dorado, que al regresar no se encontraba. Posteriormente al allanar el taller USA CAR SHOP, ubicado en calle tercera Perejil fue encontrado el referido vehículo, los sujetos CATALINO PINEDA MARTINEZ Y JULIO CESAR POLANCO se encontraban en éste (sic) taller, trataron de darse a la fuga y fueron aprehendido (sic).
>
> A foja 9 y 10 consta el informe de comisión suscrito por los Detectives JAVIER A. HENRIQUEZ Y EDGARDO MEDINA, miembros de la

Policía Técnica Judicial, con fecha del día 28 de octubre del año en curso, manifiestan que aprehendieron a los señores CATALINO PINEDA MARTINEZ Y JULIO CESAR POLANCO, cuando éstos trataron de darse a la fuga del taller USA CAR SHOP.

Los hechos descritos demuestran que se trata de la conducta delictiva contemplada en el Capítulo I, Título IV, Libro II del Código Penal, delito genérico Contra el Patrimonio, cuya pena mínima de prisión supera los dos años. Acreditadas las pruebas y la vinculación de CATALINO PINEDA MARTINEZ y JULIO CESAR POLANCO, surge del informe de comisión de los Detectives JAVIER A. HENRIQUEZ Y EDGARDO MEDINA, este Despacho ordenó la detención preventiva de los PRENOMBRADOS.

c) Los señores CATALINO PINEDA MARTINEZ Y JULIO CESAR POLANCO no se encuetran ni a órdenes ni bajo nuestra custodia ya que mediante oficio No. 13038 fue enviado a la Directora del Sistema Penitenciario (Corrección), para que sea filiado, recluído a ordenes de la Fiscalía Quinta del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha del día 31 de octubre del año en curso, imputados por el delito CONTRA EL PATRIMONIO". (fs.7-8)

En atención al informe transcrito, procede enviar la acción de habeas corpus al Tribunal competente para conocer del mismo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2° del artículo 2602 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en el SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA, la acción de habeas corpus presentada a favor de JULIO CESAR POLANCO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ ÁVILA CONTRA EL ARTÍCULO 1066 DE CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rubén Elías Rodríguez Ávila, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1066 del Código Judicial.

I. La pretensión y su fundamento:

La pretensión que se formula en este proceso constitucional consiste en una petición dirigida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional el artículo 1066 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 1066. La parte condenada en costas no será oída en el proceso una vez ejecutoriada la resolución que las impugna.
No obstante sus actos en el proceso no se anularán si la parte contraria ha gestionado en el proceso sin reclamar por el hecho de que se le haya oído. Si subsiste la morosidad, no será oída a partir del momento en que reclame la parte favorecida."

El demandante considera que el articulo 1066 del Código Judicial infringe el artículo 198 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 198. La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida.
La gestión y la actuación de todo proceso se surtirá en papel simple y no estarán sujetas a impuesto alguno.
Las vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados judiciales no interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos tribunales."

El demandante señala que el artículo 198 de la Constitución Nacional ha sido violado en concepto de violación directa, pues "al vincular el derecho supremo de ser oído en un proceso a cargas económicas específicas, la administración de justicia no es gratuita, o por lo menos deja de ser gratuita y queda condicionada a un pago que ni siquiera es a favor del Estado, ya que el Código Judicial (Art.1063) prohibe la condena en costas a favor del Estado."

II. Postura del Procurador de la Nación.

El Procurador de la Nación emitió concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Rubén Elías Rodríguez Ávila, mediante la Vista N°29 de 20 de septiembre de1999.

Dicho funcionario considera que no procede la declaratoria de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 1066 del Código Judicial, toda vez que el mismo no infringe el artículo 198 de la Constitución Nacional.

En su opinión esto es así, pues "al disponer la norma citada, que no se oirá a la parte condenada en costas, hasta tanto las liquide, no se violenta el principio de gratuidad de la justicia, toda vez que se le permite a las partes en primera instancia, accesar a los tribunales de justicia, con la finalidad de presentar los reclamos que estimen pertinentes."

III. Decisión de la Corte.

Una vez expuestos los argumentos vertidos tanto por el demandante como por el Procurador de la Nación, el Pleno considera que no se ha producido la violación del artículo 198 de la Constitución Nacional, previa las siguientes consideraciones.

El proceso civil se forma entre particulares y se promueve con la finalidad de que los tribunales de justicia resuelvan una disputa privada, de cuyo fallo resultará un vencedor y un vencido, salvo excepciones, debiendo asumir el vencido las costas, es decir, los gastos generados en el proceso.

Conforme con el artículo 1055 del Código Judicial se entiende por costas "los gastos que se hacen por los litigantes en el curso del proceso, para la conveniente y acertada defensa de sus derechos.

De lo anteriormente expuesto se concluye que las costas son una sanción a la parte vencida al no poder probar su pretensión o por haber demostrado algunos de los hechos que iniciaron la controversia. Por lo que una vez impuestas las costas, el vencido deberá pagarlas con el objeto de aminorar los perjuicios económicos que se le causaron a la vencedora dentro del proceso como resultado de su interposición. Además, dicha norma también dispone que los actos del

proceso no se anularán si la parte contraria ha gestionado en el proceso sin reclamo por el hecho de haber sido oído hasta tanto la parte favorecida así lo reclame.

Por lo tanto, la parte condenada en costas no puede ser oída hasta que haya cancelado la misma, pues de lo contrario significaría consentir en un prolongamiento de los perjuicios producidos a la parte beneficiada con el fallo. Esto no quiere decir que la administración de justicia en vez de gratuita sea onerosa y que, en consecuencia, se viole el principio constitucional contenido en el artículo 198 de la Constitución Nacional.

Frente a lo expresado, el Pleno considera que el artículo 1066 del Código Judicial no violenta el principio de gratuidad al señalar que no se oirá a la parte condenada hasta que liquide las costas, pues dicha norma le permite a las partes tener acceso a los tribunales de justicia con el objeto de presentar los reclamos que crean adecuados.

Es necesario señalar, tal como lo señala el Procurador, que como en los procesos civiles intervienen particulares, pueden surgir desventajas económicas entre una de las partes, razón por la cual la ley establece algunos medios que tratan de compensar dichas desventajas y uno de estos medios es la imposición de costas al vencido, lo que garantiza un proceso justo. Esta medida sería ilusoria si no se observan los mecanismos coercitivos necesarios para hacerlas valer como lo es el no seguir siendo escuchado en el proceso hasta tanto no las cancele.

De lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema considera que el artículo 1066 del Código Judicial no viola el artículo 198 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 1066 del Código Judicial.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LCDO. ROGELIO A. SALTARIN, EN REPRESENTACION DE GREGORIO M. ARJONA, CONTRA LA RESOLUCION NO.6272-94 DE 29 DE JUNIO DE 1994, EMITIDA POR LA DIRECCION DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rogelio Saltarín interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, en representación del señor GREGORIO M. ARJONA acción de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 6272-94 de 29 de junio de 1994 y demás actos confirmatorios, dictados por la Dirección General de la Caja de Seguro Social.

Dicha Resolución estableció, con efectos retroactivos, cuenta por cobrar contra el actor por la suma de B/.567.65.

Los hechos de la acción cuentan que el accionante inició sus labores como

funcionario de la Caja de Seguro Social como funcionario permanente, el 18 de abril de 1983, como Auditor en el Departamento de Auditoría Interna de Prestaciones Económicas.

Que del 1° de abril de 1987 al 3 de diciembre de 1991, el Sr. ARJONA se le reclasificó en el cargo de Auditor II en el Departamento de Auditoría, con un salario mensual de B/.550.14.

Que según el artículo 29 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, con sus modificaciones y adiciones, la Caja de Seguro Social reconoció a ARJONA, el derecho de sobresueldo por antigüedad, a partir del 18 de abril de 1991, cuando cumplió 8 años de servicios; con ello, se le adicionó a su salario, la suma de B/.33.00.

Que en enero de 1994, "abruptamente y sin justificación alguna" la Caja de Seguro Social suspendió el goce del derecho adquirido, es decir, del aumento de salario otorgado.

Que luego, mediante la Resolución N° 6272-94 de 29 de junio de 1994 -impugnada en esta acción-, la Caja de Seguro Social estableció con efectos retroactivos, una cuenta por cobrar contra el actor por la suma de B/.567.65, en base a que era en concepto de sobresueldo por antigüedad cobrado de más, ya que no tenía derecho a recibir dicho beneficio.

Que la Resolución impugnada, que se fundó en la cláusula cuarta del Acuerdo Final de Negociación suscrito entre la Caja de Seguro Social y los Funcionarios Administrativos de esa Institución, violó la propiedad privada del Sr. ARJONA, toda vez que afectó su salario directamente; y que, por no ser una Resolución de orden público ni de interés social, no puede tener efectos retroactivos para desconocer los derechos adquiridos legítimamente con anterioridad.

Que ésta, por haber sido dictada con efectos retroactivos viola la propiedad privada del Sr. ARJONA, deviniendo inconstitucional, por desconocer el derecho de aumento salarial que a él le correspondía a partir del 18 de abril de 1991 en concepto de sobresueldo por antigüedad, pese a cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954.

El libelo contiene la transcripción literal del acto acusado, así como las normas infraccionadas por la Resolución atacada por la acción que nos ocupa.

En este sentido, el accionante consideró violado el artículo 43 de la Constitución Nacional -establece que las leyes no tienen efectos retroactivos excepto las de orden público e interés social cuando en ellas así se exprese, así como la retroactividad de la ley en materia criminal- de manera directa por omisión, toda vez que sin tener el carácter de orden público e interés social, la Resolución N° 6272-94 de 29 de junio de 1994 tiene el efecto retroactivo de afectar situaciones jurídicas anteriores a su dictación.

Por su parte, el artículo 44 Constitucional -garantía de la propiedad privada- también fue violado por la Resolución refutada de manera directa por omisión -a juicio del actor-, toda vez que desconoció la garantía de la propiedad privada adquirida por el Sr. ARJONA, al eliminarse "arbitrariamente" su derecho de aumento de salario en concepto de sobresueldo por antigüedad.

También afirmó que era falso lo establecido en la Resolución de marras, en el sentido de que el señor GREGORIO ARJONA no cumplía los requisitos de ley, por cuanto sí cumplía los parámetros contenidos en el artículo 29 de la Ley N° 14 de 1954 -funcionario permanente con más de 4 años continuos de trabajo en la Institución y salario menor de B/.700.00-; que la Resolución N° 6272-94 de 29 de junio de 1994 "introduce un peligroso elementos de incertidumbre e inseguridad jurídica", porque la ciudadanía estaría expuesta al menoscabo de su propiedad privada ya que "con la simple emisión de una resolución, sin sustento jurídico alguno" se podrían desconocer sus derechos adquiridos conforme a la ley.

Encontrándose el negocio en etapa de admisión, la SubSecretaria General de la Corte Suprema incorporó al expediente un Informe Secretarial, en el que informa que el día anterior del envío del expediente al despacho del Magistrado Sustanciador para la admisión de la acción, el Licdo. Saltarín presentó 5 acciones de inconstitucionalidad similares en representación de distintas personas, contra resoluciones emitidas por la Dirección General de la Caja de Seguro Social, también similares.

Las otras cinco acciones se interpusieron a favor de DORA IRIARTE CH., GRACIELA DE VERGARA, KENIA CEDEÑO, CARLOS BETHANCOURT y SILVIA ROSA ALVARADO, contra las Resoluciones N° 6354-94, N° 6320-94, N° 6321-94, N° 6396-94, y N° 6395-94, todas de 29 de junio de 1994; dichas acciones le habían tocado en turno a los Magistrados Graciela Dixon, Fabián Echevers, Rogelio Fábrega, Humberto Collado (q.e.p.d.), José Troyano, en virtud del artículo 108 del Código Judicial.

Los hechos de las seis acciones son similares, variando solo los accionantes y el número de identificación de las Resoluciones, pues fueron dictadas el mismo día.

Mediante Auto de 8 de marzo de 1999, se acumularon las cinco acciones a la primera -a favor del Sr. GREGORIO M. ARJONA- y luego, mediante Resolución de 10 de marzo de 1999, se acumuló la última acción, a las restantes.

Pues bien, la última acción interpuesta por el Licdo. Saltarín a favor de SILVIA ROSA ALVARADO, fue admitida, razón por la que se le corrió en traslado al Procurador General de la Nación, a quien le correspondió en turno, para que emitiera su opinión, la cual vertió a través de la Vista N° 6 de 16 de abril de 1999.

En ella, consideró que la acción de inconstitucionalidad no debe ser usada como una tercera instancia, al pretender el actor que sean revisadas las actuaciones de la autoridad emisora de la resolución refutada para que, con el objeto de que a través de un proceso Constitucional, la Corte dilucide si la decisión de la Caja de Seguro Social se ajusta o no, a derecho.

También señaló el señor Procurador que las resoluciones impugnadas tienen un carácter eminentemente administrativo, por lo que la vía idónea para reclamar sus pretensiones era la vía contencioso-administrativa, a través de una demanda de plena jurisdicción, según se desprende de la jurisprudencia producida por esta Corporación de Justicia.

Luego entonces, mal puede infringirse el artículo 43 Constitucional, ya que los efectos retroactivos de las resoluciones impugnadas surge del otorgamiento de un derecho, sin que según la Caja de Seguro Social, los petentes hubieran reunido los requisitos legales para adquirirlos; pero ello no puede ser impugnado por vía acción de inconstitucionalidad, por lo que el derecho a sobresueldo no fue debidamente concebido.

Conceptuó el Funcionario Opinador que la garantía de la propiedad privada de los afectados, contenida en el artículo 44 de la Carta Política, tampoco fue infringido mediante las resoluciones impugnadas, ya que el fin de las mismas era de recuperar las sumas equívocamente pagadas en concepto de sobresueldo por antigüedad, al no reunir los beneficiarios los requisitos legales para su adquisición, al momento de ser otorgado, razón por la que ese patrimonio no les corresponde legalmente.

Terminó su Vista el Procurador General de la Nación, solicitando se declare no viable, la acción que le fue corrida en traslado.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días contados a partir de la última publicación de los Edictos, para que el demandante y todos los interesados presentaran sus argumentos escritos sobre el caso.

Reingresados los expedientes al despacho Sustanciador, debe decidir la admisibilidad de las cinco primeras acciones, y decidir la quinta en el fondo, por cuanto fue admitida. Las seis acciones son coincidentes en los hechos ya expuestos sobre el primer caso; es decir, que los Sres. DORA IRIARTE CH., GRACIELA DE VERGARA, KENIA CEDEÑO, CARLOS BETHANCOURT y SILVIA ROSA ALVARADO sufrieron las mismas circunstancias que el señor GREGORIO M. ARJONA, ya expuestas inicialmente, razón por lo que no vamos a repetir los hechos de las subsiguientes acciones.

Sin necesidad de introducirnos en el estudio de fondo de las acciones, advierte esta Corporación de Justicia que, pese a que los respectivos libelos cumplen los requisitos formales establecidos en el artículo 2610 del Código Judicial -mención expresa de la orden impugnada, nombre del servidor público que la impartió, los hechos en que la funda, las garantías constitucionales infringidas y concepto de la infracción, así como los requisitos de toda demanda contenidos en el artículo 654 de la excerta en mención-, las acciones adolecen de un defecto crítico que impide su admisión.

Dicha pretermisión consiste en el no agotamiento de los recursos legales disponibles para impugnar la orden atacada.

En efecto, todos los libelos señalan que se interpuso recurso de reconsideración ante el Director General de la Caja de Seguro Social, y el de apelación en subsidio ante la Junta Directiva de dicha Institución, extinguiéndose así, la vía gubernativa.

La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha sido reiterativa en que, en los casos de demandas de constitucionalidad contra órdenes de naturaleza jurisdiccional o administrativa, es menester agotar los medios impugnativos disponibles; en el presente caso, se agotó la vía gubernativa pero estaba disponible la vía contencioso-administrativa, la que podía activarse a través de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, que no fue interpuesta por el actor en ninguno de los casos acumulados.

Por lo tanto, no le queda a esta Colegiatura otra alternativa que no admitir las cinco primeras acciones, y por las mismas razones, declarar no viable la última, que ya había sido admitida.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por el Licdo. Rogelio Saltarín en representación de GREGORIO M. ARJONA, DORA IRIARTE CH., GRACIELA DE VERGARA, KENIA CEDEÑO, y CARLOS BETHANCOURT contra las Resoluciones N° 6272-94, N° 6354-94, N° 6320-94, N° 6321-94 y N° 6396-94, todas del 29 de junio de 1994; y DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Licdo. Saltarín en representación de SILVIA ROSA ALVARADO contra la Resolución N° 6395-94 de 29 de junio de 1994, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LCDO. RAUL GARCIA CONTRA LA RESOLUCION DE 21 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE

NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado RAÚL GARCÍA C., actuando en nombre propio, interpuso ante el Pleno la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad contra la Resolución de 21 de octubre de 1999, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL con sede en Las Tablas, Provincia de los Santos, mediante la cual se REVOCÓ la sentencia emitida el 10 de marzo de 1999 por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía promovido por LASTENIA AMAYA DE PRADO contra la Cooperativa de Transporte Arcadio Villaláz R. L. y en su lugar DECLARÓ que ésta debía indemnizar por daños y perjuicios a la Señora AMAYA PRADO en forma abstracta.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente de esta iniciativa constitucional también solicita se declare inconstitucional el Auto N° 970 del 6 de diciembre de 1999, mediante el cual el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, decreta formal secuestro sobre los bienes de propiedad de la Cooperativa de Transporte Arcadio Villaláz R. L..

En esta etapa procesal, corresponde al Pleno de la Corte pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente demanda, de conformidad con los requisitos legales establecidos en los artículos 2551, 2552, entre otros, del Código Judicial, y la doctrina sentada por esta Corporación de Justicia en sede de admisibilidad de esta clase de iniciativa procesal de naturaleza constitucional.

En primer lugar, al examinar el libelo de la demanda, en el hecho sexto, se observa que el proponente de esta acción anunció recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, pero dicho recurso fue declarado inadmisible por defectos de forma. Como, vemos, este solo defecto hace improcedente la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que al ser rechazado el recurso de casación, no se agotaron los medios ordinarios de impugnación.

Sobre el particular, la Corte mediante fallo de 20 de septiembre de 1995, expresó lo siguiente:

> "Se pone de relieve que el Pleno de la Corte actúa como Organismo de Derecho Público, garante de la Constitución y no como Tribunal de Justicia, por lo que previamente a la proposición de la demanda de inconstitucionalidad deben agotarse todos los medios de impugnación que conceda el ordenamiento jurídico en defensa de los derechos de quienes consideren que han sido afectados por una decisión determinada."

También, es oportuno señalar, el criterio sostenido por el Pleno de la Corte en la sentencia del 18 de enero de 1999, que en materia de amparo de garantías constitucionales, se refirió a este asunto en los siguientes términos:

> "...aún cuando el recurso de casación haya sido interpuesto, si el mismo ha sido declarado inadmisible, se tendrá como no agotados los medios previstos en la ley para su impugnación".

En segundo lugar, el proponente demanda el contenido de dos resoluciones judiciales proferidas por autoridades distintas, es decir la Resolución de 21 de octubre de 1999 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y el Auto N° 970 del 6 de diciembre de 1999 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, situación esta que no es propia en este tipo de demanda, por lo que a juicio de la Corte también resulta improcedente la presente acción.

En reiterada jurisprudencia, se ha dicho, que la declaratoria de inconstitucionalidad se puede pedir respecto a leyes, decretos leyes, decretos

de gabinete, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad, pero no acumulándose todas ellas en un solo libelo de demanda, sino independientemente, especificando el artículo, la frase, la palabra o lo que el demandante considere que convierte a la ley o al acto en inconstitucional. Únicamente así la Corte puede realizar debidamente la confrontación de lo demandado con los preceptos de la Carta Política.

En síntesis, podemos señalar que la acción de inconstitucionalidad es autónoma y da vida a un proceso independiente y nuevo, por tanto no se puede considerar como un medio de impugnación más dentro del proceso, como pretende el proponente de esta demanda.

Por ello, los defectos que se dejan expuestos hacen imposible la admisión de la demanda de inconstitucionalidad entablada.

En mérito de lo anterior, los Magistrados que integran EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITEN la presente demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado RAÚL GARCÍA.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA WATSON & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA THE GERMAN CONSULTING GROUP, S. A. CONTRA LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DEL DECRETO EJECUTIVO NO. 73 DE 9 DE ABRIL DE 1997. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense WATSON Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de la empresa THE GERMAN CONSULTING GROUP, S. A., dentro del proceso sancionador seguido por el Ente Regulador de los servicios públicos a su poderdante ha formulado advertencia de inconstitucionalidad contra los artículos 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997.

Cumplidos los trámites a que se refieren los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial, el Pleno de la Corte pasa a examinar el fondo del presente negocio.

LAS NORMAS ACUSADAS

Se acusan de inconstitucionales los artículos 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N°73 de 98 de abril de 1997, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 66. Se prohibe la prestación, comercialización, mercadeo y uso de los servicios de llamadas revertidas dentro del territorio nacional, independientemente de donde sean facturados estos servicios, con excepción de los servicios que involucran acuerdos entre un concesionario nacional autorizado a prestar servicios de telefonía y un operador extranjero de una red pública internacional

que involucra o permite la intervención de una operadora para completar la llamada."

"Artículo 67. Los servicios de llamadas revertidas a que se refiere el artículo anterior constituyen una clase de servicios de reventa, iniciados en el territorio nacional. Estos servicios se inician mediante una señal de llamada no completada, un número internacional de acceso al servicio con cargo automático al destinatario de la llamada, una llamada completada mediante la cual el que llama transmite un código para iniciar la llamada de regreso, red Internet, o cualquier otro medio para obtener sistemáticamente un tono de discado en el país de destino, mediante el cual se puede originar una llamada de larga distancia internacional que se origina como registrada en el extranjero."

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION

Se estiman como infringidos el primer párrafo del artículo 290 y el artículo 293 de la Constitución Política, los cuales preceptúan lo siguiente:

"Artículo 290. Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público.

"Artículo 293. No habrá monopolios particulares."

El concepto de infracción a estas normas lo detalla así: " Vicio alegado, que se hace innegable, -al analizar en su conjunto-, las excertas de derecho constitucional, antes copiadas: frente a lo expresamente consignado en el texto de los ARTICULOS 66 y 67 del DECRETO EJECUTIVO N°73 de 1997. Mandatos Reglamentarios, que a no dudarlo -en las condiciones en que se encuentran redactados-, infringen EN FORMA DIRECTA (POR COMISION), -lo normado-, en la anteriormente descritas ordenanzas constitucionales." (foja 5).

CONCEPTO VERTIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

A través de la Vista N°2 de 18 de enero de 2000, el Señor Procurador General de la Nación, emitió su opinión respecto a la advertencia, considerando que los artículos 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997, no conculcan los artículos 290 y 293 de la Constitución Política.

En parte de su Vista el Procurador anota:

"En primer lugar, es de vital importancia destacar que las telecomunicaciones tanto convencionales, como telefonía por internet constituyen servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que no se les puede ubicar como actividades netamente mercantiles, independientemente que estos servicios de telefonía sean brindados por el Estado directamente o mediante concesión administrativa.

Por lo tanto, los artículos que se invocan como infringidos, no se aplican al servicio público de telecomunicaciones, independientemente que los mismos los brinde el Estado de manera directa o mediante concesión.

Al enmarcarse las telecomunicaciones dentro de la categoría de servicio público, no le son aplicables las acciones restrictivas del libre comercio y la competencia a que se refiere el artículo 290 constitucional y tampoco el artículo 293 que regula los monopolios privados.

La prestación de servicio público de telecomunicaciones ha sido

explotado como monopolio público, por ser esta actividad reservada al Estado." (foja 22).

ANALISIS DE LA CORTE

La presente advertencia acusa de inconstitucionales los artículos 66 y 67 del Decreto ejecutivo N°73 de 1997, el cual prohibe la prestación, comercialización, mercadeo y uso de los servicios de llamadas revertidas dentro del territorio nacional.

Considera esta Colegiatura que no le asiste la razón al recurrente, pues del texto de los artículos 290 y 293 si bien es cierto que en fallos anteriores, le hemos dado el sentido de que las mismas promueven la libre competencia, en el caso sub-júdice, las normas se dirigen a honrar el compromiso adquirido por el Estado, como lo es la concesión de un servicio público otorgado en un contrato de exclusividad temporal.

No constituye un supuesto de tráfico mercantil, en el que se vislumbre la posibilidad que las empresas manejen la producción, distribución y comercialización del producto en detrimento de los consumidores.

En ese sentido cabe señalar que el servicio relacionado con las telecomunicaciones que actualmente brinda la empresa Cable & Wireless Panama, S. A., es un servicio público que brindaba el Estado a través del desaparecido Instituto Nacional de Telecomunicaciones.

Dicho servicio a partir de la suscripción del contrato de concesión N°134 de 29 de mayo de 1997, entre el Estado panameño y la empresa antes mencionada, le otorga por su cuenta y riesgo la facultad de instalar, prestar, operar y explotar los servicios de telecomunicaciones, hasta el uno (1) de enero del año 2003.

Los servicios de telecomunicaciones constituyen servicios concedidos, los cuales conforme al texto legal antes mencionado son: "Son aquellos servicios de telecomunicaciones que puede prestar el concesionario y que aparecen dentro de la Concesión que para tal efecto emita la autoridad competente."

El Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997, fue expedido por el Organo Ejecutivo, en ejercicio de la potestad reglamentaria que la Constitución Política le atribuye mediante el artículo 179 numeral 14, a fin de regular las telecomunicaciones en la Repúbica.

La excerta legal estudiada anota en su considerando lo siguiente:

"Que la Administración Pública tiene como finalidad inmediata, la de satisfacer las necesidades colectivas mediante el establecimiento de normas que permitan a la comunidad recibir con tarifas bajas la prestación eficiente y el mejoramiento de la calidad del servicio público de telecomunicaciones;

Que, es política del Estado en materia de telecomunicaciones promover que todos los concesionarios presten estos servicios conforme a los principios de tratamiento igual entre usuarios, en circunstancias similares, y de acceso universal asegurando la continuidad, calidad y eficiencia en todo el territorio de la República de Panamá, como también garantizar el desarrollo de la leal competencia entre los concesionarios de los servicios que se otorguen en régimen de competencia;

Que le corresponde al Estado promover la expansión y modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones y el desarrollo de nuevos servicios, tanto en las áreas urbanas como en las rurales;

> Que, de acuerdo a los principios jurídicos y normas establecidas en la Ley N°31 de 8 de febrero de 1996, que rigen la prestación de los servicios de telecomunicaciones, es atribución del Estado regular, ordenar, fiscalizar y reglamentar eficazmente la operación y administración de los servicios de telecomunicaciones."

Lo anterior indica que el servicio público de las telecomunicaciones es una actividad cuyo ejercicio se regula por un estatuto propio, que delimita su explotación al buen servicio que se le debe brindar a la comunidad.

Es cierto que dicho cuerpo legal, prevé que el Estado garantiza el desarrollo de la libre competencia en materia de telecomunicaciones, pero, no debemos pasar por alto que el contrato de concesión que actualmente posee la empresa Cable & Wireless tiene el carácter de exclusividad temporal hasta el uno (1) de enero de 2003, en virtud del convenio suscrito con el Estado, para prestar el servicio de telefonía básica local, nacional, internacional y para operar terminales públicos y semipúblicos, así como el alquilar servicios de circuito dedicados a voz.

La exclusividad temporal la define el Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997 como: "Derecho a la prestación de un determinado servicio con exclusión de cualquier otro concesionario, durante un tiempo determinado y de acuerdo con las condiciones previamente establecidas en un área geográfica definida."

Las normas acusadas de vulnerar la Constitución Política no lesionan la misma, van dirigidas a impedir que personas naturales o jurídicas de una u otra manera traten de prestar, comercializar, mercadear y usar los servicios de llamadas revertidas, salvo los que impliquen acuerdos entre un concesionario nacional autorizado. Dichas llamadas constituyen servicios de reventa; y por mandato del mismo decreto, ni el Ente Regulador de los servicios públicos ni el Consejo de Gabinete podrán autorizar la prestación del mismo a otros concesionarios (Artículo 16 del Decreto N°73 de 9 de abril de 1997).

Compartimos el criterio del jurista Rogelio Fábrega Zarak, citado por el señor Procurador, quien en parte de un trabajo titulado La Tutela constitucional de la competencia apunta lo siguiente:

> "Dentro de este orden de ideas, estimo que los artículos 290 y 293 se aplican de manera exclusiva a actividades mercantiles, y no a los servicios públicos, sean prestados directamente o mediante concesión, salvo disposición legal expresa en contrario por las siguientes razones:
>
> a) El servicio público es, como afirma Escola, "aquella actividad de prestación que es asumida por la administración pública, en forma directa o indirecta, a fin de atender las necesidades de interés público, bajo un régimen especial, preferiblemente de derecho público.
>
> b) La organización de una actividad como un servicio público implica el de traerlo de la actividad privada y ubicarlo en la pública, bajo la responsabilidad inmediata del Estado, mediante la figura que Villar Palasi denominó la publicatio. Esta hace referencia a la decisión del poder público de incorporar a la esfera pública una actividad determinada trayéndola de la actividad privada o creada ex novo que, al propio tiempo que se sujeta a un régimen jurídico especial de derecho público, debe ser prestado con características de generalidad, uniformidad, igualdad, continuidad, y obligatoriedad, y sujeta a una intensa vigilancia y reglamentación por parte del Estado al concesionario o a los usuarios del mismo.
>
> c) La circunstancia de que la prestación del servicio se realice en forma indirecta, es decir, bajo concesión administrativa, no altera

su régimen jurídico-público aplicable en forma directa inmediata a los servicios públicos, según las mas (sic) autorizadas doctrina.

d) Al constituir cometidos o funciones públicas, no son actividades comerciales o industriales comerciales o industriales, y no se encuentran, por tanto, en el supuesto de hecho previsto por el artículo 290 y, en consecuencia, no le alcanza la interdicción sancionada en el mismo, que viene referida a las acciones restrictivas del libre comercio y la competencia "en el comercio y en la industria". y, además, que la segunda disposición constitucional citada, el artículo 293, se refiere a los monopolios privados, que no se aplica a los servicios públicos, los que tradicionalmente han sido explotados en forma monopólica.

e) De acuerdo con el principio "favor libertatis" habría que tener como servicios aquellos que se reputan como tales desde una concepción estricta, o sea, los creados y organizados por Ley para satisfacer necesidades generales en beneficio de los usuarios de los mismos. De lo contrario, caerían por fuera de la ordenación del mercado actividades privados que son fuertemente intervenidas por el interés general que desempeñan, pero que no son técnicamente servicios públicos. Esta distinción es recogida por la doctrina, usualmente definiendolas (sic), quizá con poco rigor técnico, como servicio público impropios. La posibilidad del establecimiento de monopolios oficiales para prestar un servicio público, por lo demás, tiene plena y expresa cobertura constitucional por el artículo 153, numeral 10° de nuestra Constitución, al atribuír (sic) como competencia expresa del Organo Legislativo, entre otros, "establecer monopolios oficiales para atender los servicios públicos", norma que debe interpretarse en concordancia con los artículos 256 y 281 del ordenamiento constitucional, y por el artículo 262." (FABREGA ZARAK, Rogelio.
"La tutela constitucional de la competencia" en Anuario de Derecho N°21, Centro de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Imprenta Universitaria, 1992, Pp. 144-145.)

La prohibición que hacen los artículos 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997, no es de carácter permanente en el tiempo, sino que se encuentran sujetas al período de exclusividad temporal, que establece el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Cable & Wireless.

A partir del año 2003 el Ente Regulador de los servicios públicos podrá otorgar concesiones para que en un régimen de libre competencia todos los concesionarios interesados en brindar el servicio de llamadas revertidas lo hagan.

Toda vez que las normas acusadas de violentar los artículos 290 y 293 no lesionan los mismos, ni ninguna otra norma de nuestro orden constitucional, procede declararlo en ese sentido.

Por lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 66 y 67 del Decreto Ejecutivo N°73 de 9 de abril de 1997, por el cual se reglamenta la Ley N°31 de 8 de febrero de 1996, y la cual se dictan normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá.

Notifiquese,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LOS LICDOS. HECTOR SPENCER, TILE Y ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE RONALD MELVIN SWEETIN CONTRA LOS ACTOS Y RESOLUCIONES EXPRESADOS POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Héctor Spencer y la firma forense Tile y Rosas, en representación del señor Ronald Melvin Sweetin, el día 14 de agosto de 1998 presentaron ante la Secretaría General de esta máxima corporación de justicia, demanda de inconstitucionalidad contra los siguientes actos de la Administración Regional de Ingresos de la provincia de Panamá:

1. Auto N°7 de 11 de abril de 1996;
2. Auto N°8 de 11 de abril de 1996;
3. Resolución de 17 de abril de 1996;
4. Diligencia de 9 de julio de 1996;
5. Resolución de 19 de julio de 1996;
6. Resolución de 5 de diciembre de 1997;
7. Acta Provisional de la Diligencia de Remate de 22 de enero de 1998; y
8. Auto N°1 de 23 de enero de 1998.

Admitida la demanda se dio traslado a la Procuradora de la Administración para que emitiera concepto, y a efecto de que tanto el demandante como todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito sobre el particular, se hizo la publicación respectiva del edicto en un diario de circulación nacional (art. 2454 del Código Judicial), período en el cual el licenciado Ausberto A. Rosas R. presentó alegato respaldando la posición de los actores.

Corresponde entonces, examinar la pretensión en el fondo y a ello pasamos previo estudio de los aspectos sustanciales del presente negocio.

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

En diecisiete (17) hechos el demandante cuestiona el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que se afectó la Finca N°79058 inscrita al tomo 1758, Folio 70 sección de Propiedad de la provincia de Panamá, ubicada en la Isla Contadora, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa; en virtud que se inició el proceso y culminó el mismo, omitiéndose trámites legales lesionando el debido proceso y causándole perjuicios al señor Ronald Melvin Sweetin.

NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

Se acusan de infringidas las siguientes normas de la Constitución Política:

"Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

"Artículo 44. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales."

"Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para

proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

"Artículo 18. Los particulares sólo son responsables ante la autoridad por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas."

CONCEPTO DE INFRACCION DE LAS NORMAS

Anota el accionante que se vulneró el artículo 32 de la Constitución Política en concepto de violación directa por omisión, al no atender el Administrador Regional de Ingresos el procedimiento de juicio ejecutivo por jurisdicción coactiva de acuerdo a lo establecido por el Código Judicial (fs. 110-116).

Se señala la infracción del artículo 44 del Estatuto fundamental en concepto de violación directa por omisión, al incumplir el Estado las normas sobre jurisdicción coactiva dejando sin garantía a la propiedad privada.

Apunta la demanda que se violaron de manera directa por comisión los artículos 17 y 18 de la Constitución como consecuencia de la inobservancia por parte del Administrador Regional de Ingresos del debido proceso.

OPINION DE LA PROCURADURA DE LA ADMINISTRACION

La opinión de la Procuraduría de la Administración, se emitió precluído el término legal para ello, por tanto, no será considerada la misma.

ALEGATO DE SUJETO INTERESADO

Dentro del término fijado con ese propósito, el licenciado Ausberto A. Rosas R. presentó su alegato apoyando la tesis esbozada en la demanda por la parte actora.

ANALISIS DEL PLENO

Antes de decidir, es necesario evaluar cada uno de los actos administrativos demandados como infractores de normas constitucionales a saber:

1. Auto N°7 de 11 de abril de 1996 expedido por la Administración Regional de Ingresos, el cual hace mención a que el señor Ronald Melvin Sweetin, propietario de la finca N°79058 inscrita al tomo 1758, folio 70 de la sección de Propiedad de la provincia de Panamá, ubicada en la isla Contadora, corregimiento de Saboga, distrito de Balboa, adeuda la suma de siete mil sesenta y cinco balboas con cuarenta y dos centésimos (B/.7,065.42) al Fisco de acuerdo al estado de cuenta; en virtud de esto se ordena proceder por la vía ejecutiva contra la finca antes mencionada y se libra mandamiento de pago a favor del Tesoro Nacional (foja 17).

2. Auto N°8 de 11 de abril de 1996 emitido por la Administración Regional de Ingresos, en el cual se decreta embargo a favor del Tesoro Nacional, hasta la concurrencia de siete mil sesenta y cinco balboas con cuarenta y dos centésimos (B/.7,065.42) y demás gastos sobre la finca N°79058 (foja 18).

3. Resolución de 17 de abril de 1996 a través de la cual el Administrador Regional de Ingresos ordena el emplazamiento del señor Ronald Melvin Sweetin (foja 20).

4. Diligencia de 9 de julio de 1996 en la que consta la toma de posesión

del Doctor Pedro Pablo Arosemena, como defensor de ausente del señor Ronald Melvin Sweetin en el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que se le sigue (foja 25).

5. Resolución de 19 de julio de 1996 en la que se dispone llevar a cabo la venta judicial de la finca N°79058 de propiedad de Ronald Melvin Sweetin por no comparecer a efectuar arreglo de pago, a cancelar la obligación y toda vez que ha dejado precluir el término sin hacer uso de los medios de impugnación o medios excepcionales de terminación de los procesos (foja 24).

6. Resolución de 5 de diciembre de 1997 en la que se fija fecha para la diligencia de remate de la finca N°79058 de propiedad de Ronald Melvin Sweetin, dentro del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva por morosidad en el pago de impuesto de inmuebles (foja 43).

7. Acta provisional de diligencia de remate de 22 de enero de 1998, en la cual se adjudica provisionalmente la finca N°79058 al señor Alfonso Arias (foja 51).

8. Auto N°1 de 23 de enero de 1998 en el cual la Administración Regional de Ingresos aprueba el acta del remate celebrado el día 23 de enero de 1998 y adjudica definitivamente a Alfonso Arias la finca N°79058 inscrita al tomo 1758, folio 70 de la sección de Propiedad de la provincia de Panamá, avaluada en la suma de veinticinco mil setecientos setenta y cuatro balboas (B/.25,774.00) (foja 54).

La primera norma que se estima como infringida es el artículo 32 de la Constitución Política que establece el principio del debido proceso legal.

Al confrontar los actos acusados con el texto de la norma constitucional, encontramos que no se infringe la misma ya que la Administración Regional de Ingresos de la provincia de Panamá, en el proceso por cobro coactivo llevó a cabo las diligencias tendientes para dar con el paradero del señor Ronaldo Melvin Sweetin, a falta de su localización personal se efectuó el emplazamiento por edicto en un diario de circulación nacional (foja 22) y no hubo comparecencia alguna por lo que se procedió a designarle un defensor de ausente para que le asistiera.

Se señala infringido el artículo 44 del orden constitucional por supuesta lesión a la propiedad privada, si bien es cierto, la norma salvaguarda el derecho de propiedad, pero no debe olvidar el recurrente que dicho derecho supone el cumplimiento de una serie de obligaciones entre las que se encuentra el pago de impuestos al fisco nacional y a falta del pago se instauro proceso ejecutivo vía jurisdicción coactiva, por lo que no fue violado el artículo 44 de la Constitución Política.

Sostiene el recurrente que se vulneran los artículos 17 y 18 de la Constitución Política, los cuales no pueden invocarse como normas infringidas por ser de carácter programático (Ver Registro Judicial, Noviembre 1999, p. 135).

Atendiendo al principio de la universalidad del orden constitucional hemos confrontado los actos demandados con otras normas de la Constitución y demás normas que integran el bloque de la constitucionalidad y luego de ello, advertimos que las resoluciones acusadas no infringen precepto alguno.

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES el auto N°7 de 11 de abril de 1996, el auto N°8 de 11 de abril de 1996, la resolución de 17 de abril de 1996, la diligencia de 9 de julio de 1996, la resolución de 19 de julio de 1996, resolución de 5 de diciembre de 1997, el acta provisional de la diligencia de remate de 22 de enero de 1998 y el auto N°1 de 23 de enero de 1998 dictados por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá dentro del proceso por cobro coactivo

realizado contra la finca N°79,058 inscrita al Tomo 1758, folio 70 a nombre señor Ronald Melvin Sweetin.

Notifiquese, Comuniquese y Publiquese.

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA FIRMA ROSAS Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE HOTELES (APATEL), CONTRA EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO EJECUTIVO NO.73 DE 8 DE ABRIL DE 1995, SEGÚN LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 197 A DE 6 DE OCTUBRE DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Rosas y Rosas, apoderada judicial de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto Ejecutivo No.197 A de 6 de octubre de 1995, emitido por conducto del entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro, la cual pasamos a transcribir:

"El artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, quedará así:

> "ARTICULO 24: Para efectos de los beneficios a que se refiere la Ley 8 de 1994, sólo se tomará en consideración las nuevas inversiones que se realicen a partir de la vigencia de la Ley.
> En todo caso, las nuevas inversiones realizadas de conformidad con la precitada Ley y las inversiones realizadas con anterioridad, deberán comprobarse debidamente y registrarse en el Registro Nacional de Turismo en forma separada.
> Para establecer los derechos o los beneficios que como incentivos se establecen en la Ley 8 de 1994, el contribuyente deberá contabilizar la inversión realizada con anterioridad a la vigencia de la Ley en forma separada de la inversión realizada después de su vigencia.
> A los efectos de la determinación del incentivo a que tenga derecho el contribuyente, se procederá así:
>
> a. De acuerdo con el monto resultante debidamente comprobado.
> b. En su defecto, establecer dicho monto en base a una proporción de los montos invertidos a partir de la vigencia de la Ley y el monto total de la inversión, cuando la contabilidad del inversionista no le permita mantener una separación de las inversiones.
> Para efectos de determinar el monto del beneficio fiscal relacionado con el impuesto sobre la renta, se utilizará la proporción de la nueva inversión en relación al total invertido, y dicho porcentaje se aplicará a la renta gravable del período fiscal correspondiente".

DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA INFRACCION.

De acuerdo con lo que sostiene la actora, los actos atacados vulneran los

artículos 17, 179, numeral 14; y 278, numeral 2; del Estatuto Fundamental.

El artículo 17 dispone:

> "Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."

Según se afirma, "de acuerdo a esa norma constitucional el Organo Ejecutivo al emitir la norma reglamentaria impugnada con esta demanda, debió respetar las normas constitucionales anteriormente invocadas y las normas de la Ley 8 de 1994. Por tanto, al apartarse de lo establecido en el artículo 179, numeral 14 y 278, numeral 2, de la Carta Política y del artículo 8, literal b numeral 1, de la Ley 8 de 1994, violó en forma directa el artículo 17 de la Carta, pues emitió una norma reglamentaria que desatiende el mandato consignado en esta norma constitucional" (Cfr. foja 14).

Se alega también la vulneración del artículo 179, numeral 14 de la Carta Política, que preceptúa:

> "Artículo 179: Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> 1...
> 14. Reglamentar las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu."

La conculcación de esta norma se hace consistir en el hecho de que, el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto Ejecutivo No. 197 A de 6 de octubre de 1995, se aparta del texto y espíritu contenido en el artículo 8, literal b del numeral 1 de la Ley 8 de 1994.

Afirma la parte actora, que el punto central estriba en que la aludida norma constitucional "otorga al Organo Ejecutivo la llamada potestad reglamentaria, según la cual éste está facultado para emitir reglamentos en desarrollo de las Leyes que lo requieran, pero "sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu". De manera que se trata de una potestad que por mandato expreso de la Constitución debe ser ejercida respetando las normas contenidas en la Ley que se desarrolla, puesto que en caso contrario se ejerce dicha potestad reglamentaria de manera abusiva, lo que a su vez implica infringir la prohibición contenida en el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política".

La Ley 8 de 1994 establece en su artículo 8, literal b del numeral 1, lo siguiente:

> "ARTICULO 8: Con el objeto de incentivar la inversión de nuevas obras y actividades destinadas a ofrecer facilidades turísticas, se les otorga los siguientes incentivos fiscales a las personas naturales o jurídicas que se acojan a lo dispuesto en la presente Ley:
> 1. Servicio de hospedaje público turístico: Para la construcción, equipamiento, rehabilitación y desarrollo eficiente de establecimiento de alojamiento público señalados en el numeral 1 del artículo 6 de esta Ley, cuya inversión mínima sea de TRESCIENTOS MIL BALBOAS (B/.300,000.0) en el área metropolitana y, en el resto de la República, que la inversión mínima sea de CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00) excluyendo el valor del terreno con excepción de los albergues y hostales familiares, cuya inversión mínima será fijada por el Instituto Panameño de Turismo. Las áreas mencionadas gozarán

de los siguientes incentivos:
a...
b. Exoneración del impuesto de inmuebles, por el término de veinte (20) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Esta Exoneración cubrirá todos los bienes inmuebles, propiedad de la empresa, siempre que éstos sean íntegramente utilizados en las actividades turísticas."

Al respecto, la recurrente sostiene que esta norma legal, con un claridad meridiana, establece que la exoneración del impuesto de importación cubrirá todos los bienes propiedad de la empresa, a condición de que los mismos se utilicen íntegramente en las actividades turísticas. No obstante, expresa la parte actora que el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 1995, de acuerdo a la modificación introducida por el artículo 2 del Decreto No. 197 A de 6 de octubre de 1995, limitó tal exoneración del impuesto de importación a las "nuevas inversiones que se realicen a partir de la vigencia de la Ley", excluyendo las anteriores a esa fecha,a pesar de que en conjunto constituyan una unidad inmueble utilizada en forma integral en las actividades turísticas; y además, la "norma reglamentaria exige que las nuevas inversiones deben comprobarse y registrarse en el Registro Nacional de Turismo en forma separada, contabilizando igualmente en forma separada la nueva inversión realizada, para luego aplicar la fórmula que a ese efecto estableció dicha norma reglamentaria" (Cfr. foja 12).

El artículo 278, numeral 2, de la Ley Fundamental, que también se afirma infringido, preceptúa:

"Artículo 278: Para realizar los fines de que trata el artículo anterior, la Ley dispondrá que se tomen las medidas siguientes:
1...
2. Promover la creación de empresas particulares que funcionen de acuerdo con las recomendaciones mencionadas en al aparte anterior, establecer empresas estatales e impulsar la creación de las mixtas, en las cuales participará el estado, y podrá crear las estatales, para atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses públicos."

A juicio de la demandante, la infracción de esta norma ocurre al privarse a las empresas hoteleras de gran parte de los incentivos tributarios, otorgados por vía de la exoneración del impuesto de inmueble, que deben aplicarse a todos los bienes que aquéllas utilizan integralmente en las actividades turísticas, puesto que la norma impugnada produce un efecto contrario al señalado en la norma constitucional. Además, afirma que se trata de una violación directa del numeral 2 del artículo 278 de la Carta Política, porque es evidente que se dejó de aplicar al emitirse la norma reglamentaria que se impugna mediante la presente demanda, por lo que estima que de haberse aplicado esa norma constitucional, no se habría emitido dicha norma reglamentaria.

OPINION DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

De conformidad con el artículo 2554 del Código Judicial, la demanda fue corrida en traslado al Ministerio Público correspondiéndole a la Procuraduría de la Administración opinar, lo que hizo mediante la Vista Fiscal No. 617 de 30 de diciembre de 1999 (Cfr. fojas 19-43).

EL representante coincide, de forma parcial, con la pretensión de la demandante, toda vez que considera que sí han resultado violentados los artículos 17 y 179, numeral 14 de la Constitución Política, toda vez que al analizar el texto del artículo 179, numeral 14, con el artículo 17, ambas de la Constitución Política, arribaron a la conclusión que se ha transgredido el texto del artículo 17 Constitucional, porque el Presidente de la República, junto con el Ministro respectivo, al expedir el Decreto Reglamentario, no se ciñó a las reglas que establece la Carta Política para ejercer la potestad reglamentaria rebasando los límites contenidos en la Ley, al considerar - de forma separada - las

construcciones realizadas antes y después de la vigencia de la Ley.

En ese sentido sostiene, que el texto del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 197 A de 1995, vulnera el derecho de los inversionistas que promueven actividades turísticas, de acceder a la exoneración del impuesto de inmueble, por el término de 20 años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo, de poder incluir todos los bienes inmuebles (de propiedad de la empresa) que se utilicen íntegramente en las actividades turísticas, porque el Decreto reglamentario sí supedita el beneficio fiscal a las nuevas inversiones y a los montos que exige el artículo 8 de la Ley 8 de 1994, por lo que el texto de la norma reglamentaria acusada de inconstitucional rebasa lo establecido en la Ley y, por ende, las autoridades de la República, en este caso, representadas por el Presidente de la República y el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro, dejaron de aplicar el mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

En cuanto al artículo 278, considera que no se ha producido su infracción.

EXAMEN DE LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES

Luego de surtido el traslado, se evacuó el trámite correspondiente a la publicación del edicto respectivo, oportunidad que únicamente aprovechó la actora, reiterando la pretensión consignada en el libelo de demanda. Una vez agotados los trámites procesales, procede la Corte a conocer el fondo de esta causa constitucional.

El Pleno estima que el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto Ejecutivo No. 197 A de 6 de octubre de 1995, no contraría el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Política, por las consideraciones siguientes.

En primer lugar, tenemos que partir de la base que en virtud de la potestad reglamentaria el Presidente de la República y el Ministro del ramo pueden, pues, expedir reglamentos de las leyes.

"El reglamento, sostienen los tratadistas españoles Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández es "toda norma escrita dictada por la Administración"(Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Civitas, 5a. Edición, Madrid, 1989, pág. 195). Otros autores como el tratadista argentino Juan Carlos Cassagne lo definen como "el acto unilateral que emite un órgano de la Administración Pública creador de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula por tanto, situaciones objetivas impersonales" (Derecho Administrativo, Editorial Abeledo-Perrot, Tomo I, 3a. Edición actualizada, Buenos Aires, 1991, pág. 103) (Cfr. Sentencia de la Sala Tercera de 20 de octubre de 1995).

Dentro de este contexto, los reglamentos en nuestro sistema jurídico pueden ser de tres clases, a saber: los de ejecución de las leyes, los constitucionales o autónomos y los de necesidad o de urgencia.

Los reglamentos de ejecución de las leyes, a los que se refiere expresamente el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución, son aquellos dictados por el Presidente de la República y el Ministro respectivo para asegurar o facilitar el cumplimiento o aplicación de las leyes. Esta es la hipótesis tradicional y se trata de una actividad de la Administración Pública subordinada a la ley y con límites propios: no pueden alterar el texto ni el espíritu de la ley que reglamentan. El Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, modificado por el Decreto Ejecutivo 197 A de 6 de octubre de 1995, es un reglamento de ejecución de la Ley 8 de 14 de junio de 1994, en donde ésta tiene como propósito incentivar las actividades turísticas en la República de Panamá.

La potestad reglamentaria de las leyes posee una serie de límites que se derivan tanto del principio constitucional de la "reserva de la Ley" como de la naturaleza de los reglamentos, particularmente los reglamentos de ejecución de

la ley, que están subordinados a ésta.

Así entonces, de conformidad con el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución, el Presidente de la República y el Ministro del ramo pueden reglamentar las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento. En ese sentido, debe existir una necesidad de reglamentación para facilitar la ejecución de la Ley.

La potestad reglamentaria tendrá mayor extensión cuando la ley, por ser de concisa o parca redacción, va a requerir que se detallen con mayor precisión y concreción los elementos pertinentes para su cumplimiento. Como lo ha precisado el tratadista colombiano Jaime Vidal Perdomo "la extensión normativa del reglamento es inversamente proporcional a la extensión de la Ley" (Derecho Administrativo, Novena Edición, Editorial Temis, Bogotá, 1994, pág. 19).

En el foro nacional la potestad reglamentaria de las leyes puede ampliarse a varias materias del campo jurídico privado en las cuales el Organo Ejecutivo tenga fijado algún papel. En el caso in examine tenemos que el entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro tiene asignadas diversas funciones que guardan relación con la promoción de las actividades turísticas en nuestro país.

Dentro de este orden de ideas, los límites de la potestad reglamentaria, en cuanto a su carácter material, hacen relación con la limitación de la potestad discrecional de reglamentar las leyes, que debe ejercerse en interés público y no con abuso o desviación de poder a la materia que puede ser objeto del reglamento, entendiéndose que el mismo "está ordenado inicialmente al propio campo de funciones que la Administración tiene atribuidas en el concierto público" (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, op. cit., pág. 216), refiriéndose además, a la irretroactividad de los reglamentos, en virtud del principio recogido en el artículo 43 de la Carta Fundamental, que si bien se refiere a las leyes, a fortiori es aplicable a los reglamentos, que están subordinados a las leyes.

En ese sentido, tenemos que el precepto constitucional contenido en el artículo 43 dilucida el presente proceso constitucional, el cual es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 43: Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada." (Subraya el Pleno).

Se colige de la norma transcrita que las leyes sólo tendrán efecto retroactivo cuando en ellas así se exprese. Resulta pues, que la Ley 8 de 14 de junio de 1994 en su artículo 44 expresa lo siguiente: "Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación", la cual se efectuó en la Gaceta Oficial No.22.558 de 15 de junio de 1994.

Ante este escenario jurídico, resulta palmario que los derechos o beneficios otorgados a través de la Ley 8 de 1994 no tienen carácter retroactivo, razón por la cual, la norma aquí impugnada tenía que entrar a reglamentarla bajo ese principio. En ese sentido los beneficios derivados de la Ley 8 de 1994, donde, entre otros, se encuentran, "exoneración total por el término de 20 años, del impuesto de importación, contribución, gravamen o derechos de cualquier denominación o clase que recaigan sobre la introducción de materiales, enseres, muebles, equipos, naves y vehículos automotores ...; exoneración del impuesto de inmueble, por el término de 20 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Nacional de Turismo; exoneración a la empresa de todo impuesto o gravamen sobre su capital; exoneración de impuesto de muellaje ..., exención del pago del impuesto sobre la renta causado por los intereses que devenguen los acreedores en operaciones destinadas a inversiones en establecimientos de alojamiento público... etc., eran aplicables, únicamente, a las nuevas

inversiones realizadas después de su vigencia, y para poder reglamentar esta situación es imprescindible registrar de forma separada las inversiones, previa comprobación de las mismas, de tal forma de tener certeza de las efectuadas antes de la vigencia de la ley de las realizadas a posteriori, pues es el único mecanismo posible para que las inversiones realizadas después del 15 de junio de 1994 reciban dicho beneficio. Así mismo, debe contabilizarse la inversión realizada con anterioridad a la vigencia de la Ley de la efectuada después de su vigencia, como mecanismo para determinar el monto del beneficio fiscal relacionado con el impuesto sobre la renta.

El Pleno estima que la norma impugnada no se ha excedido, pues, su reglamentación guarda coherencia con el principio de que las leyes no tienen carácter retroactivo. Consideramos que no se ha apartado de su texto ni de su espíritu.

Muy distinta sería la situación jurídica si se hubiera dispuesto que la Ley 8 de 1994 tenía carácter retroactivo. En ese caso resultaba evidente la transgresión del artículo 179, numeral 14 de la Carta Fundamental, el Decreto Reglamentario no debía entrar a limitar los beneficios de la Ley 8 a las nuevas inversiones de forma exclusiva.

La norma impugnada reglamenta en una perfecta armonía la norma de superior jerarquía, pues no desvirtúa los propósitos y la apropiada interpretación que ésta persigue basada en "otorgar incentivos y beneficios a las personas que se dediquen a actividades turísticas, a implementar los mecanismos necesarios para lograr la conjunción y coordinación de la acción del sector público y del sector privado en el área del turismo, y promover el turismo en Panamá".

La Ley 8 de 1994 en su cuerpo normativo jamás iba a contener un artículo que dispusiera "que los incentivos y beneficios estaban dirigidos sólo a las inversiones realizadas a partir de la promulgación de la ley y no a las anteriores", pues esto estaba implícito, por el carácter irretroactivo de las leyes, dispuesto en su artículo 44. Es aquí precisamente donde entra la reglamentación de dicha Ley, y esto es parte de la potestad reglamentaria detallar con mayor precisión y concreción los elementos necesarios para su cumplimiento, toda vez que las leyes muchas veces son concisas o limitadas en su redacción.

En cuanto a la alegada transgresión del artículo 17 de la Carta Política, el Pleno en reiteradas ocasiones se ha referido a la naturaleza programática de ese precepto, que se limita a establecer los fines para los cuales han sido establecidas las autoridades de la República y que tiene por finalidad "asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir la Constitución y la Ley", lo que impide su violación directa, pues no pueden ser utilizados aisladamente como fundamento de la pretensión constitucional.

No obstante, la Corte al efectuar el análisis del artículo 179, numeral 14, y confrontarlo con el artículo 17, de la Carta Fundamentatal, concluye que, en efecto, éste no ha sido infringido.

En cuanto a la infracción del artículo 278, numeral 2, de la Constitución Política, esta Superioridad estima que la misma no se ha configurado, pues, esta norma expresa, entre otras cosas, que a través de la Ley se debe promover la creación de empresas particulares, estatales y mixtas, en las cuales participará el Estado para atender las necesidades sociales y la seguridad e intereses públicos; si la confrontamos con la norma acusada de inconstitucional, encontramos que ésta no prohíbe la creación de empresas destinadas a la promoción de actividades turísticas, y por tal razón, consideramos que no ha sido transgredido el artículo 278, numeral 2, de la Carta Fundamental.

Por último, la Corte observa que el artículo 8 de la Ley 8 de 1994, reglamentado por el Decreto Ejecutivo No.73 de 1995, aquí impugnado, señala que el objeto de la exoneración prevista en aquélla norma legal es el de "incentivar

la inversión de nuevas obras y actividades destinadas a ofrecer facilidades turísticas" (subraya la Corte). De allí se desprende que la intención clara del legislador fue la de promover nuevas inversiones en el sector turístico por lo que la norma reglamentaria (artículo 24 del Decreto Ejecutivo No. 73) que dispone que los incentivos a que se refiere la Ley 8 se aplicarán a las nuevas inversiones realizadas a partir de la vigencia de la ley, es un lógico y congruente desarrollo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 8 de 1994.

DECISION DE LA CORTE

Dado que ninguno de los cargos alegados por la parte actora han prosperado, ni la norma impugnada viola otros preceptos constitucionales, lo procedente es, pues, no acceder a sus pretensiones.

Como corolario de lo antes expresado, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 24 del Decreto Ejecutivo No.73 de 8 de abril de 1995, según la modificación introducida por el Decreto Ejecutivo No.197 A de 6 de octubre de 1995.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) JORGE FEDERICO LEE
(fdo.) GABRIEL E. FERNÁNDEZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICDO. ANIBAL HERRERA, EN REPRESENTACION DE GERVACIO PEÑA, CONTRA LA RESOLUCION N° DM 2/99 DE 7 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ANIBAL HERRERA actuando en virtud de poder conferido por GERVACIO PEÑA, promovió ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución No. DM- 2/99 de 7 de enero de 1999, emitida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

I. EL ACTO ACUSADO

La resolución impugnada, visible a fojas 376-378 del antecedente de pruebas, resolvió en segunda instancia, un reclamo por diferencia adeudada en concepto de salario mínimo, presentado por el trabajador GERVACIO PEÑA contra la empresa CROSS ROADS AGENCIES S. A., REVOCANDO la resolución de primera instancia que había condenado a la empresa a pagar al trabajador, la suma de treinta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro balboas con diez centésimos. En su lugar, la resolución acusada de inconstitucional, ABSOLVIO a la empresa del pago de suma de dinero alguna, en favor del trabajador GERVACIO PEÑA.

El razonamiento de tal decisión estribó, en que a juicio del Ad-quem, el Decreto No. 3 de 1980 y el Decreto No. 90 de 1995, normas que fijaban un salario mínimo de B/.2.90 por hora para las actividades comerciales canaleras, no le eran aplicables a CROSS ROADS AGENCIES S. A., toda vez que se trataba de una empresa cuyas actividades iban dirigidas a los usuarios del Canal de Panamá, y no a las

empresas públicas o privadas encargadas del uso, mantenimiento, manejo protección o defensa del Canal de Panamá.

En estas condiciones, el trabajador GERVACIO PEÑA no tendría derecho al ajuste solicitado en concepto de diferencia de salario mínimo, por lo que se revocó la decisión de primera instancia proferida por el Director General de Trabajo.

Conceptúa el proponente, que la resolución dictada en alzada, deviene inconstitucional.

II. NORMAS CONSTITUCIONALES QUE SE ADUCEN INFRINGIDAS

Según el accionante, la comentada resolución expedida por el Ministro de Trabajo, es violatoria de los artículos 32 y 61 de la Constitución Política, transgresiones que explica de la siguiente manera:

En cuanto al artículo 32 de la Constitución Nacional, que recoge el principio del debido proceso legal, el postulante sostiene que la resolución que decidió la alzada, violó el principio procesal de congruencia, toda vez que el conocimiento del tribunal ad-quem estaba limitado a los puntos planteados por la empresa apelante, pero la decisión emitida por el Ministro de Trabajo recayó en un aspecto no discutido por la empresa recurrente.

En este contexto se destaca, que CROSS ROADS AGENCIES no había controvertido que se dedicaba a actividades comerciales canaleras, ni que el trabajador GERVACIO PEÑA tuviese derecho a percibir un salario mínimo de B/.2.90 por hora. La apelación se fundaba exclusivamente, en que durante el tiempo que se mantuvo la relación de trabajo, el señor PEÑA había desempeñado indistintamente, actividades comerciales canaleras y otras labores, (relacionadas los Puertos de la República de Panamá), por lo que no debió computarse el salario mínimo para los ocho años en que laboró para la empresa, sino que era necesario realizar un cálculo selectivo para determinar en qué momento (horas, días etc.), debía pagarse el salario mínimo de B/.2.90 por hora. Esa era la pretensión contenida en el escrito de apelación.

Por tanto, en concepto del actor, la sentencia del Tribunal Ad-quem es extrapetita, al haberse extendido más allá de lo que se había sometido a su escrutinio.

Ligado al cargo anterior, el recurrente sostiene que la actuación impugnada es violatoria del artículo 61 del Estatuto Fundamental, que garantiza el salario mínimo a todo trabajador al servicio del Estado o de la empresa privada.

La norma se estima conculcada de forma directa, toda vez que el Decreto Ejecutivo No.3 de 1980, adicionado por el Decreto No. 90 de 1995, ha previsto el pago de un salario mínimo de B/.2.90 por hora, para las empresas que se dedican a la prestación de servicios y venta de bienes a empresas públicas o privadas relacionadas con actividades canaleras. Siendo que la propia empresa demandada aceptó que GERVACIO PEÑA trabajaba en esta actividad comercial (gestionando el trámite para el tránsito de naves por el Canal de Panamá), ello le garantizaba el derecho a percibir el salario mínimo antes enunciado, derecho que le fue desconocido por la resolución del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, en violación a lo dispuesto en el texto constitucional en cita.

III. OPINION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Conforme al trámite establecido para este tipo de procesos, se corrió traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emitiese criterio legal en relación a los planteamientos del impugnante.

En su Vista Fiscal No.22 de 28 de agosto de 2000, visible a fojas 22-41 del legajo, la máxima autoridad del Ministerio Público, luego de presentados los

hechos fundamentales de la acción, solicitó que se acceda a la pretensión del demandante, toda vez que en su concepto, la resolución impugnada incurrió en un error hermeneútico, al momento de dilucidar si al trabajador GERVACIO PEÑA le correspondía o no, percibir el salario mínimo de B/.2.90 por hora.

IV. DECISION DE LA CORTE

Una vez surtidos los trámites correspondientes, la Corte procede a deslindar el asunto constitucional planteado.

1. Examen de la actuación censurada

El origen de la controversia se ubica en un reclamo por diferencia de salario mínimo (artículo 1 numeral 2° de la Ley 53 de 1975), presentado al concluir la relación de trabajo que sostuvo GERVACIO PEÑA con la empresa CROSS ROADS AGENCIES, desde el año 1988 hasta el año 1996, en que el trabajador fue despedido.

En ese momento, el señor PEÑA presentó la reclamación por diferencia de salario mínimo, indicando que la empresa CROSS ROADS AGENCIES no le había cancelado sus prestaciones con base al salario mínimo de B/.2.90 por hora, de acuerdo a lo previsto en los Decretos No. 3 de 1980 y No. 90 de 1995.

Cumplido el proceso laboral, el Director General de Trabajo accedió a lo pedido, condenando a la empresa al pago de la diferencia adeudada en concepto de salario mínimo, y esta decisión fue apelada por la empresa.

En el recurso de alzada se sostuvo, que la empresa se dedicaba a "tareas mixtas", y que además de atender las naves que transitaban por el Canal, también desarrollaban la actividad naviera en todos los puertos del país, de lo cual se desprendía que el trabajador reclamante se dedicó parcialmente a actividades canaleras, y para hacerse acreedor al ajuste de salario mínimo de B/.2.90 por hora, debía determinarse primero, en qué fechas realizó la actividad canalera, para los efectos de tasar la diferencia adeudada.

Se trataba evidentemente, de una excepción (no probada), a lo alegado por el trabajador, quien de acuerdo a la documentación que consta en autos, había sostenido y probado ante la Dirección General de Trabajo, que en los años que había laborado para CROSS ROADS AGENCIES, se dedicó a la gestión de agente naviero de los barcos que hacen tránsito por el Canal de Panamá.

Hemos señalado anteriormente, que el Ministro de Trabajo, apartándose de lo esgrimido y expresamente aceptado por la propia empresa apelante, decidió que ésta no se dedicaba a actividades comerciales canaleras, y por tanto, que el trabajador no tenía derecho a la diferencia adeudada en concepto de salario mínimo.

2. El principio de Congruencia en el proceso laboral.

El argumento central que sustenta esta causa constitucional, es que la sentencia proferida en segunda instancia, viola el principio de congruencia que orienta el debido proceso legal.

Al efecto se alega, que la decisión del Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral fue extrapetita, en relación al objeto de la apelación, pues se concedió algo no pedido por el apelante, en perjuicio del trabajador.

De acuerdo al análisis seguido en este negocio, y los documentos que hacen parte del proceso adelantado ante las instancias administrativas del Ministerio de Trabajo (fs. 360-363), la Corte advierte que efectivamente, la empresa apelante nunca controvirtió, sino que por el contrario, aceptó dedicarse a actividades comerciales canaleras, y que el salario mínimo aplicable a GERVACIO PEÑA era de B/.2.90 por hora.

Al confrontar este hecho, con la sentencia expedida en segunda instancia, parece configurarse la violación al principio procesal de congruencia, a que alude el accionante, por no existir conformidad entre lo pedido por la empresa apelante, y lo decidido por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

No obstante, nos corresponde adelantar ciertos comentarios, en relación a la operatividad del principio de congruencia en los procesos laborales.

En primer término debemos indicar, que si bien es cierto, en materia procesal común (y particularmente en el proceso civil), el principio de congruencia es virtualmente absoluto, dicho principio se encuentra atenuado en el proceso laboral, con tres excepciones importantes, contenidas en los artículos 535 y 931 del Código de Trabajo, reiteradas en el artículo 875 ibídem.

Estas excepciones dicen relación con el otorgamiento al trabajador, por parte del juez, de más de lo pedido en la demanda, o la condena al empleador, por otras prestaciones no solicitadas en el petitum (ultrapetita y extrapetita según artículo 535 del Código de Trabajo). El artículo 931 ibídem, también faculta al Tribunal de Casación para expedir condena o absolución, aunque éstas no hayan sido pedidas en el recurso o la demanda.

Queda visto, que el principio general de congruencia sólo se atenúa en los procesos laborales, para los efectos de conceder al trabajador, salarios y otras prestaciones que le asisten en derecho, pero que no fueron solicitadas.

El artículo 921 del Código de Trabajo atenúa por su parte, el principio de la reformatio in pejus, al permitir, dentro del recurso de apelación, que el juzgador ad-quem adicione una resolución objeto de recurso, aún cuando tal adición pueda afectar adversamente al apelante, siempre y cuando lo que se haya omitido es una declaración que la ley ordena, o cuando no se hayan pronunciado sobre una pretensión o excepción, siempre y cuando la parte interesada, en escrito de lista, solicite motivadamente la adición en referencia.

Sin mayor esfuerzo se colige, que ninguno de estos supuestos es aplicable a la decisión emitida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral en este caso, quien a la inversa de las hipótesis comentadas, despojó al trabajador de las prestaciones otorgadas en primera instancia, con fundamento en hechos no alegados, pedidos, ni controvertidos por el apelante.

Cabe enfatizar en este punto, que no se ha utilizado la acción de inconstitucionalidad como una instancia adicional, para impugnar el criterio jurisdiccional de la autoridad que decidió la causa laboral, sino como una vía procesal autónoma, para evidenciar que el Ministro de Trabajo incurrió en incongruencia objetiva, debido a que su conocimiento del negocio, como juzgador ad-quem, estaba limitado a los puntos a que se refería la apelación interpuesta.

3. El principio procesal de Congruencia, como elemento del debido proceso legal.

Resta considerar, si el principio de congruencia se ubica sólo en el plano de la legalidad, o si por el contrario, su violación implica el desconocimiento del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En este sentido, la Corte ha reconocido con anterioridad, que el principio de congruencia (en las sentencias y en los recursos) es componente esencial del debido proceso legal. Así, la sentencia de 2 de octubre de 1992, expedida por el Pleno de esta Corporación Judicial, declaró inconstitucional dos artículos de una resolución dictada por el Tribunal Electoral, "porque violaban la garantía del debido proceso legal, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, al infringir, por extra petita, el principio de la congruencia".

En dicho pronunciamiento, la Corte resaltaba que el principio de congruencia en los recursos, "sólo otorga competencia al juez para resolver acerca de la materia objeto de los mismos."

El procesalista JORGE FABREGA, subsume el tema de la congruencia, en lo siguiente: "El principio de congruencia exige que el juzgador se pronuncie sobre todo lo que se pide y sólo sobre lo que se pide, o sea, sobre todas las pretensiones sometidas a su examen, y sólo sobre ellas." (FABREGA, Jorge. "Estudios Procesales" Panamá, 1989, pág. 142)

4. Decisión de la Corte

En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte se ve precisada a reconocer la pretensión de la parte actora, concluyendo que la resolución de 7 de enero 1999, dictada por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, efectivamente es violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la Resolución No. DM- 2/99 de 7 de enero de 1999 emitida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Notifiquese y Publiquese en la Gaceta Oficial

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ELIGIO A. SALAS Y JOSE A. TROYANO

Por disentir con la mayoría del Pleno en este caso procedemos a salvar el voto. La materia planteada en la demanda de inconstitucionalidad presentada cae dentro del ámbito de la legalidad y no dentro de la esfera constitucional. El asunto se refiere al reconocimiento, por parte de la autoridad de trabajo, del salario mínimo que se reclama, cuestión atribuida por la Ley, en primera instancia, a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y, en segunda instancia, al Ministro del ramo (art. 1, numeral 2 de la Ley 53 de 28 de agosto de 1975).

Tal como se sostiene en la sentencia, en este proceso el problema debatido se centra en la supuesta violación del principio procesal de congruencia "por no existir conformidad entre lo pedido por la empresa apelante, y lo decidido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social". Si ello es así, resulta claro que estaríamos ante un problema de orden legal y no de orden constitucional.

Admitir que decisiones de esa naturaleza (bajo el pretexto de que una decisión ha incurrido en extrapetita) pueden ser revisadas en sede de inconstitucionalidad, a través de demandas de ese carácter, podría convertirse en una práctica nada recomendable, pues convertiría al Pleno de la Corte en una tercera instancia, obligándosele a resolver asuntos relacionados, como en este caso, con la mera aplicación del salario mínimo.

En todo caso el demandante debió utilizar la vía del amparo de garantías constitucionales, alegando violación al debido proceso, en lugar de interponer la presente demanda de inconstitucionalidad.

En atención a esas consideraciones salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA DILIGENCIA DE TRANSITO ENTRE ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO (VICE-PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA) Y NICOLE STUMP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA, ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema que se le declare impedida y, en consecuencia, se le separe del conocimiento de la diligencia de tránsito entre ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO (vice-presidente de la República) y NICOLE STUMP.

La Magistrada DE AGUILERA, fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Solicito a ustedes que declaren que me encuentro impedida para conocer de la diligencia de tránsito entre Arturo Ulises Vallarino Bartuano (Vice-Presidente de la República) y Nicole Stump, ya que en la actualidad tengo pendiente una acusación particular interpuesta por el doctor Arturo Vallarino en mi contra ante la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales de la Asamblea Legislativa.
>
> En virtud de lo expuesto anteriormente, y, con fundamento en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial, que a la letra dice:
>
> "Artículo 749:
> ...
> 11. Tener alguna de las partes proceso, denuncia o acusación o haberlo tenido dentro de los dos años anteriores, contra el Juez, o Magistrado, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos.
>
> Por lo anterior expuesto, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados del Pleno de la Corte Suprema que declaren legal el impedimento manifestado y me separen del conocimiento del negocio.
>
> Panamá, 24 de octubre de 2000."

La circunstancia alegada tiene amparo jurídico como causal de impedimento, por lo tanto, se procede acceder a lo pedido.

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento de la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, para actuar en la diligencia de tránsito entre ARTURO ULISES VALLARINO BARTUANO (vice-presidente de la República) y NICOLE STUMP., la separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar su suplente personal, para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNADEZ (fdo.) JORGE FABREGA P.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA PRESENTADA POR ELIAS SAMUEL SOLIS DOMINGUEZ CONTRA EL LCDO. DULIO ARROCHA, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Por vía de declinatoria, procedente de la Sala Segunda de lo Penal ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo que contiene la queja interpuesta contra el Licenciado DULIO ARROCHA, Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá.

Los antecedentes revelan que el caso se inicia cuando el Licenciado HERNANDO VELASCO, quien funge como Juez Segundo del Circuito Penal de Herrera, pone en conocimiento del Licenciado MANUEL BATISTA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, las afirmaciones efectuadas en la declaración jurada visible a folio 3-5 del cuadernillo, por el señor ELÍAS SAMUEL SOLÍS DOMÍNGUEZ contra el Licenciado DULIO ARROCHA, por su supuesta conducta irregular.

Ahora bien, corresponde al Pleno de la Corte, en la fase procedimental en la que se encuentra, determinar si la presente queja ha de ser admitida, para lo cual resulta necesario que se confronte el escrito que la contiene, con los requisitos que exigen los artículos 286 y 287 del Código Judicial, y, con carácter supletorio, los artículos 242 y 243 de la misma excerta legal, así como con la doctrina que ha sentado esta Corporación de Justicia sobre la materia.

Por los hechos que se exponen, podríamos decir que nos encontramos ante una queja de tipo disciplinaria que pudiéramos ubicar dentro del numeral 4 del artículo 285 del Código Judicial; no obstante aprecia el Pleno que en el caso sub-júdice no se ha cumplido con los requisitos formales exigidos para tal fin, toda vez que si bien se ha presentado la prueba de la existencia del ilícito que se denuncia, es decir los datos que, con el carácter de ciertos llegaron al conocimiento del funcionario judicial, no se ha aportado una exposición planteada en la forma de una declaración jurada, por queja bajo juramento, tal como lo demanda el artículo 287 del Código Judicial, ni tampoco se ha promovido individualmente la queja, de conformidad con lo establecido en el artículo 286 ibídem.(Ver Fallo de 11 de marzo de 1997/Registro Judicial/Págs.225-226).

En este sentido, por las razones que se dejan expuestas, esta Corporación de Justicia concluye que no concurren los presupuestos básicos que la ley establece para proceder a enjuiciar la supuesta conducta irregular del servidor judicial denunciado, razón por la cual no resulta viable seguir con su tramitación.

Además de lo ya señalado, consideramos que los hechos denunciados pudieran justificar el inicio de una investigación penal cuyo impulso correspondería al Ministerio Público, razón por la cual se debe compulsar las copias pertinentes a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que proceda con lo que corresponda.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la presente queja

interpuesta en contra del Licenciado DULIO ARROCHA, Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, y en consecuencia, ORDENA compulsar las copias del presente caso a la Procuraduría General de la Nación, para lo de lugar.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) GABRIEL E. FERNANDEZ
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL ANTONIO CASTRO PINZON CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. (MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Durante el trámite de lectura del proyecto de sentencia que resuelve la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado RAMIRO FONSECA PALACIOS a favor de MANUEL ANTONIO CASTRO PINZON, y contra el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro del proceso penal seguido en su contra por los delitos de Homicidio, Robo y Secuestro, en perjuicio de JUAN ANTONIO BARLETTA Y LORENA ANGUIZOLA DE BARLETTA, el Magistrado GABRIEL ELIAS FERNANDEZ se ha declarado impedido para conocer del presente negocio, argumentando "...que tal como se observa en el expediente, fui designado como miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, para que en el evento de que alguno de los defensores que intervienen en esta causa presente excusas para no asistir al acto de audiencia oral fijado para el 20 de septiembre de 2000, asuma la defensa de el o los apoderados que se encuentren sin defensor (foja 2094). Además, a fojas 2210 y 2211 consta que estuve presente en la audiencia oral, por si ocurre el evento previsto en el artículo 2270-A del Código Judicial."

El Magistrado FERNANDEZ fundó su manifestación de impedimento, en lo preceptuado por el artículo 749, numerales 5 y 12 del Código Judicial, los cuales señalan respectivamente lo siguiente:

> "ARTICULO 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
> ...
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;
> ...
>
> 12. Haber intervenido el Juez o Magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso."

Observa el Pleno, que la manifestación de impedimento efectuada por el Magistrado FERNANDEZ no se encuentra justificada en las causales invocadas ni en ninguna otra de las contenidas en la norma en estudio, toda vez que su designación no fue realizada propiamente por los sindicados, sino que fue hecha

por el Instituto de Defensoría de Oficio en el evento de que alguno de los defensores principales no pudiera asistir al acto de audiencia oral. Por otro lado, tampoco participó en el momento de la audiencia como apoderado judicial, ya que su función era sustituir la defensa de cualquiera de los sindicados en caso de que alguno de sus defensores se ausentara, pero para la fecha del 20 de septiembre, todos los defensores se encontraban presentes.

Por lo antes señalado, es el criterio de esta Corporación de Justicia, que no debe concederse lo pedido, razón por la cual el Magistrado FERNANDEZ debe seguir conociendo del caso.

En mérito de lo anterior, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado GABRIEL ELIAS FERNANDEZ; por tanto, SE DISPONE que siga conociendo del presente caso.

Copiese, Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

NOVIEMBRE 2000

APELACIÓN

APELACION AL RESTO DE LA SALA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENRIQUE CAJIGAS CONTRA EL AUTO DE 16 DE OCTUBRE DE 2,000 DICTADA POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR (SALA UNITARIA) EN EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR NEDELCA GISELA ARAUZ ORTIZ, HORACIO FRANCISCO ARAUZ ORTIZ, ELSSIE EMY ORTIZ GUEVARA VDA. DE ARAUZ Y FRANCICO ARAUZ ORTIZ CONTRA LA SENTENCIA DEL 2 DE MARAZO DE 2,000 DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA EN EL PROCESO DE IMPUGNACION DE PATERNIDAD DEL MENOR JOHAN ALBERTO VALDERRAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Cajigas & Consocios, en su condición de apoderada especial de los señores NEDELCA GISELA ARAUZ ORTIZ, ELSSIE EMY ORTIZ GUEVARA VDA. DE ARAUZ, JUAN FRANCISCO ARAUZ ORTIZ y HORACIO ARAUZ ORTIZ, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Familia el 2 de marzo de 2000, dentro del proceso de impugnación de paternidad instaurado por el señor HORACIO FRANCISCO ARAUZ QUEVEDO (Q.E.P.D.) contra el señor OLEGARIO VALDELARRAMA GONZALEZ, en relación con el menor JOHAN ALBERTO VALDERRAMA VALDERRAMA.

El citado recurso ingresó a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y una vez realizado el reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador lo rechazó de plano, mediante resolución fechada 16 de octubre de 2000, la cual es consultable a fojas 36-38.

Los recurrentes apelaron de esa decisión ante el resto de los Magistrados de la Sala Civil, en atención a lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Judicial, impugnación que se procede a decidir.

La resolución atacada consideró que el presente recurso de revisión es manifiestamente improcedente, en vista de que la sentencia que se pretende revisar fue dictada dentro de un proceso en el cual se surtieron dos instancias, situación que contradice lo dispuesto en el artículo 1189 del Código Judicial el cual dispone que este recurso extraordinario sólo es viable contra sentencias dictadas en procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por alguna de las causas que enumera esa misma disposición legal.

Por su parte, la representación judicial de los recurrentes sostiene que la resolución apelada no tomó en consideración "que el art. 756 del Código de Familia expresamente contempla la posibilidad que se admitan Recursos de Revisión contra sentencias dictadas en Segunda Instancia en los asuntos de Familia que la misma norma especifica", la cual es del tenor siguiente:

> **"Artículo 756. Son susceptibles de los recursos de casación y revisión, las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Familia y los Tribunales Superiores de Menores cuando versen sobre matrimonio de hecho, separación de cuerpos, divorcio, nulidad de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio, filiación y medidas de internamiento de menores por más de dos (2) años. Estos recursos serán decididos por la Sala de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las formalidades y procedimientos aplicables". (Subraya la Sala)**

La parte recurrente alega que a pesar de que el artículo 1189 del Código Judicial establece que no son recurribles en revisión las sentencias dictadas en segunda instancia, la disposición legal anteriormente transcrita es especial y posterior a dicho artículo, razón por la cual, tratándose de resoluciones de segunda instancia que versen sobre los asuntos de familia que esa misma norma

detalla, sí son viables los recursos de revisión que se presenten contra ellas.

No obstante, la Sala considera que cuando el citado artículo 756 del Código de la Familia se refiere a las sentencias dictadas en segunda instancia, lo hace únicamente en relación con el recurso de casación y no con el de revisión. Ello es así, puesto que el último párrafo de esa misma norma, a pesar de ser posterior y especial, aclara que dichos recursos de casación y revisión "...serán decididos por la Sala de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las formalidades y procedimientos aplicables", es decir, de acuerdo con los artículos del Código Judicial que regulan cada uno de dichos recursos.

Al respecto y en relación con el recurso de casación, se observa que el artículo 1149 señala que este recurso "...tendrá lugar contra las resoluciones de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Justicia", mientras que el artículo 1189, referente al recurso de revisión, prescribe que habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por la Corte Suprema, por un Tribunal Superior, o por un Juez de Circuito, "...cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por cualquier motivo".

En estas circunstancias, si se aceptara que el artículo 756 del Código de la Familia prescribe que puede interponerse el recurso de revisión contra sentencias de segunda instancia en materia de Familia, dicha interpretación sería incongruente con las disposiciones que regulan dicho recurso en el Código Judicial.

Igualmente, dicha interpretación resultaría contraria a la jurisprudencia de esta corporación judicial, que ha sostenido reiteradamente el carácter restrictivo y extraordinario que tiene el recurso de revisión. En relación con este punto, son pertinentes los siguientes fallos:

> "El Recurso de Revisión es una de las pocas vías que el legislador ha otorgado a quienes por un motivo especialísimo no han logrado que el proceso haya obtenido la Censura de otro Tribunal. Es, en consecuencia, un recurso extraordinario que está sujeto a determinadas formalidades y cuyas exigencias están establecidas en forma precisa en el ordenamiento procesal que rige esa materia.
>
> Para que sea factible recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante este recurso extraordinario es indispensable, en primer lugar, que se den estas tres condiciones:
>
> a) Que se trate de una sentencia. Esta sentencia pudo haber sido dictada por la Corte Suprema de Justicia, por un Tribunal Superior o por un Juez de Circuito;
>
> b) Cuando se (sic) sentencia debe haber sido dictada en un proceso de única instancia; o,
>
> c) Cuando existiendo el recurso de apelación, ésta no haya surtido por cualquier motivo." (LESCURE, Janio, "Jurisprudencia, Sala Primera (1989-1991), Rhino International, Inc., pág. 175)
>
> ---
>
> Ahora bien, el artículo 1189 del Código Judicial prescribe que habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por: 1) la Corte Suprema; 2) un Tribunal Superior; o, 3) un Juzgado de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aun existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por alguno de los supuestos que enumera a continuación y que constituyen las causales de revisión.

> De la lectura de esta disposición legal se colige su carácter restrictivo; es decir, que únicamente permite la utilización limitada de este recurso, para revisar procesos en los cuales no se haya presentado alguna de las situaciones que, taxativamente, constituyen las causales de revisión. En otras palabras, el recurso de revisión, por su naturaleza restrictiva, es un recurso extraordinario que no es viable en aquellos procesos en los que se han cumplido todas las etapas procesales correspondientes, dentro de las cuales se han sometido al análisis y dictamen de los distintos tribunales de instancia." (Resolución de 30 de abril de 1999, Registro Judicial, abril 1999, pág. 184) (Enfasis de la Sala)

En vista de lo anteriormente expuesto, se debe confirmar la resolución impugnada, toda vez que como acertadamente concluyó el Magistrado Sustanciador, la sentencia que se pretende revisar fue dictada dentro de un proceso de dos instancias, en el que se interpuso el recurso de apelación, razón por la cual no es viable su impugnación mediante el recurso de revisión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1189 del Código Judicial.

Por tanto, el resto de los Magistrados que integran la SALA DE LO CIVIL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución proferida por el Magistrado Sustanciador el 16 de octubre de 2000, que rechaza de plano el recurso de revisión interpuesto por NEDELCA ARAUZ ORTIZ, HORACIO FRANCISCO ARAUZ ORTIZ, ELSSIE EMY ORTIZ GUEVARA VDA. DE ARAUZ y FRANCISCO ARAUZ ORTIZ, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Familia el 2 de marzo de 2000, dentro del proceso de impugnación de paternidad instaurado por el señor HORACIO FRANCISCO ARAUZ QUEVEDO (Q.E.P.D.) contra OLEGARIO VALDERRAMA GONZALEZ, en relación con el menor JOHAN ALBERTO VALDERRAMA VALDERRAMA.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN EN PROCESO MARÍTIMO

TRANSDIESEL TANKER CORP. APELA CONTRA LA SENTENCIA No.5 DE 17 DE MARZO DE 2000 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A OCEAN P&I SERVICES LTD., y OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la Sentencia N°5 de 17 de marzo de 2000, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario que TRANSDIESEL TANKER CORP. le sigue a OCEAN P&I SERVICES LTD., OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. y OCEAN MANAGEMENT, la parte demandante ha promovido recurso de apelación, en tiempo oportuno.

La sociedad TRANSDIESEL TANKER CORP. promovió demanda ordinaria y solicitud de secuestro contra las tres empresas antes mencionadas, a objeto de que sean condenadas al pago de la suma de B/.61,135.26. Se indica que las sociedades demandadas, OCEAN, P&I, SERVICES LTD. OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD., OCEAN MANAGEMENT, están organizadas en base a las Leyes de "TURKS & CAICOS ISLAND", aplicándose normas del derecho inglés, debiendo regir dicha legislación en el presente negocio.

SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO

La resolución apelada fue dictada el 17 de marzo de 2000, por el Juez Marítimo de Panamá. En primer lugar, el juzgador estimó pronunciarse con relación a la Excepción de Nulidad parcial por Inexistencia de vínculo contractual y de la obligación de los demandados, formulada dentro del proceso ordinario que TRANSDIESEL TANKER CORP. le sigue a OCEAN P&I SERVICES LTD., OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. y OCEAN MANAGEMENT.

Al respecto indica el juzgador que la excepcionante ha expresado en el proceso que OCEAN P&I, SERVICES LTD., era el "broker" de la empresa aseguradora que es OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. y OCEAN MANAGEMENT, a su vez, eran los managers, por conducto de los cuales se aseguraba al buque respectivo, por lo que las dos empresas últimas nombradas no podían ser objeto de demanda, dada la condición que ambas tenían de "brokers" o agentes que servían de intermediarios frente a los P&I CLUBS.. Que tal titularidad no cabe la responsabilidad dentro de un contrato de seguro propiamente tal.

En tanto que contra la otra demandada, OCEAN MARINE INSURANCE ASSOCIATION, que es la verdadera aseguradora, el juzgador considera que deberán tenerse en cuenta varios aspectos importantes.

Expresa el juzgador que en cuanto a la primera, corresponde al demandante probar que existía un seguro válido, conforme a la Ley aplicable, en que ambas partes acordaron, es la Ley de Turks & Caicos, que a su vez se nutre del derecho inglés, el cual lo asimila en la interpretación de las normas en materia de P&I Clubs.

Al referirse a las pruebas se menciona el testimonio del Capitán De La Rua y también la declaración ante Notario por parte del abogado JOSÉ CORDERO CABRERA, quien participó en la transacción, en que las partes llegaron a un arreglo aparentemente, de TREINTA MIL BALBOAS (B/.30.000.00). Con respecto a este último, el tribunal advierte que dicha información se basa que representaba los intereses de TRANSDIESEL TANKER CORP. recibiendo de ésta instrucciones escritas para proceder a emitir carta de intención. a objeto de arribar a un acuerdo amigable.

El juzgador advierte que en dicha declaración, no se dice que, efectivamente se materializó la transacción y se hubiere pagado ese dinero. Además que, de darse tal circunstancia, la empresa demandante hubiera presentado ante el Tribunal la evidencia del pago.

Por otra parte, el juzgador no descarta la idea de que la compañía aseguradora hubiere pagado efectivamente el reclamo, pero de darse el mismo, tendría, a su vez, que acreditarle al tribunal la constancia de la misma.

Hace alusión el juzgador al documento visible a foja 13 del expediente, que guarda relación con la comunicación por vía fax, de fecha 26 de diciembre de 1996, que alude el demandante, efectuada por la demandada a través de PANDICENTRAL, indicando que en el mismo no consta que se haya procedido al pago o se haya expedido un cheque.

En la sentencia recurrida se indica el documento de los brokers, obrante a foja 12, el cual más bien se refiere a que no pueden hacer presión contra la aseguradora mientras haya una serie de pagos llamados "calls" que se encuentran pendientes con la misma. Adicionando que la nota fue suscrita por el señor RAYMOND MILES, que es el broker, en representación de P & I INSURANCE COMPANY, LTD. y dirigida a la empresa operadora del buque, CARIBMONT SHIPPING (FLORIDA), en donde se indica que, de acuerdo a la conversación telefónica sostenida, aparentemente el Club solamente estaba dispuesto a reembolsar el neto deducible, debidamente documentado. También recomienda el broker en dicha nota que, una vez arreglado el daño reclamado, de TREINTA MIL BALBOAS (B/.30.000.00), debía la demandante suministrar toda la documentación pagada por éstos, a objeto de poder presionar a la compañía el reembolso de la misma. Adicionando que "Si las cuotas

están pendientes esto solamente podría ser por vía de compensación". (f.558).

El juzgador se refiere también a las fojas 27 y 28, sobre la nota suscrita por el Capitán Constantino Malevitis, relativas a la enfermedad del capitán de la M/N TRANSDIESEL, haciendo la salvedad que se enumeran una serie de documentos, pero los mismos no fueron adjuntados al proceso. El tribunal también aclara que los gastos médicos vistos en el proceso, suman la cantidad de B/.23.000.00, y sobre éstos, el señor ANDREW FARFIELD, en representación de OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, en su nota que aparece a foja 25 y 26, señala "que aprueba una serie de reclamos que resultan procedentes y señala cuáles no se pueden reconocer porque habría una doble cobertura" (f.559).

Reitera que la misiva también hace referencia a que la aseguradora todavía adeuda cuotas sustanciales a la asociación; y que, "De acuerdo con las reglas de la asociación un antiguo miembro no tiene derecho de compensar o presentar cualquier reclamo contra las deudas pendientes. Entonces, mientras lo referente a estas cuotas no sea aclarado nos encontramos imposibilitados de proceder adelante con este reclamo más allá que hacer estas recomendaciones." (f.561).

Con relación a lo anterior, el juzgador hace mención a la posición de la demandada al sustentar la inexistencia del derecho a reclamar del asegurado, fundamentada en la Ley y las reglas que rigen la materia, por las razones anteriormente evaluadas.

Por otra parte, indica que no hay evidencias suficientes de que la demandada OCEAN MARINE MUTUAL, INSURANCE ASSOCIATION LTD., de conformidad con las reglas que rigen esta materia de seguro mutuo, llamado P&I Club Association, se encontrara obligada con la parte asegurada, cuando los hechos ocurrieron, ya que esta última estaba morosa con relación a una serie de pagos, y aún habiéndose efectuado los mismos, éstos no se han evidenciado en el proceso.

Amén, de que la carga de la prueba le corresponde al actor sobre las causas de pedir. Por ello, estimó el juzgador que los demandados deberán ser absueltos de responsabilidad.

De igual forma se pronunció el señor juez con respecto a las demandadas OCEAN P&I SERVICES LIMITED y OCEAN MANAGEMENT, en el sentido de que las mismas les falta legitimación para ser demandadas en el presente juicio, debido a que actuaban como representantes de la aseguradora y del buque.

La parte resolutiva de la resolución comentada consiste en:

> "1. ABSUELVE a las demandadas OCEAN P&I SERVICES LTD., OCEAN MANAGEMENT; y OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD.
>
> 2. CONDENA al actor fallido al pago de las costas por el trabajo en derecho en la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 52/100 (US$7,278.52), más los intereses legales y los gastos que se acrediten ocasionados a la demandada OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD." (f.562)

RESUMEN DEL ESCRITO DE APELACIÓN

Contra la referida resolución, el actor formuló, en tiempo oportuno, recurso de apelación, cuyo escrito corre de fojas 569 a 572. Estima el apelante que la resolución recurrida infringió el artículo 823 del Código Judicial, cuyo texto nos permitimos transcribir de la forma que ha sido expuesta por el apelante:

> "ARTICULO 823: Los documentos públicos hacen fe de de (sic) su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió. Las declaraciones o afirmaciones que haga el otorgante en escritura pública o en cualquier documento

público tendrá valor entre éstos y sus causahabientes, en lo dispositivo, y aún en lo enunciativo siempre que tengan relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Deben ser tomadas en cuanto en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones y el Juez las apreciará en concurrencia con las otras pruebas, y según las reglas de la sana crítica. Pero respecto a terceros, el Juez las apreciará sólo en lo que se refieran en modo directo a lo dispositivo del acto contra (sic) tomando en cuanto (sic.) asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas según las reglas de la sana crítica". (Lo subrayado es del apelante).

En cuanto a la norma citada, argumenta el apelante que el Tribunal Marítimo no valoró las pruebas aportadas por el actor, mencionando la declaración del Capitán De La Rua, como testigo presencial y directo de las negociaciones y del pago de la indemnización reclamada. De igual forma estima la no valoración de la declaración del abogado CORDERO (f.7); y de la carta enviada por el P&I a los representantes de TRANSDIESEL TANKER CORP. (f.25-26), considerando que éstos hacen prueba suficiente para establecer el pago de la indemnización a favor de su representada.

Otra violación de la norma, estima el apelante que se ha dado, una mala valoración de parte del juzgador, en relación a la demanda incoada por el Club asegurador contra la sociedad TRANSDIESEL TANKER CORP., en la cual se resolvió condenar a esta empresa al pago de los llamados "CALLS", aclarando que las deudas aceptadas por la empresa condenada en ningún momento se refería a primas dejadas de pagar a la aseguradora, sino que eran las retribuciones que hacen los socios a fin de año, en este tipo de seguro, y que cada uno paga según las toneladas que tenga registradas en el Club por sus naves. Discrepa, entonces con el fallo, ya que al darse el accidente el 24 de octubre de 1996, y los CALLS se produjeron en febrero del año 1997, cómo podría darse que estos pagos hubiesen producido una morosidad, considerando que en estos momentos son la base de la parte demandada para no reconocer los reclamos del apelante.

Por último indica que a pesar de que el juzgador ha aceptado que el club demandado se encuentra en quiebra y que la participación de los intermediarios hace difícil el aporte de pruebas contundentes, a las cuales no tiene acceso el socio, le haya restado importancia a la valoración de las pruebas a las que ya nos refiriéramos con anterioridad.

ESCRITO DE OPOSICIÓN DE LA FIRMA MONCADA & MONCADA

Estima la opositora, entre otras cosas, estar en desacuerdo con el apelante, debido a que las sumas perseguidas por su representada contra TRANSDIESEL TANKER CORP. LTD., y que culminara con la sentencia No.13 de 25 de mayo de 1998, lo eran por el no pago de primas de seguros, por parte de los propietarios de M/N TRANSDIESEL, las que ascendían a la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIUN MIL BALBOAS CON SESENTA Y SEIS CENTÉSIMOS (B/.56.121.66). Además, que las respectivas primas correspondían al mes de julio de 1996, fecha ésta anterior al abordaje sufrido por la M/N TRANSDIESEL y la M/N MISS STEFF.

Que por otro lado, existe la cancelación de la membresía de TRANSDIESEL TANKER CORP. LTD. con el P&I CLUB, en el mes de febrero de 1997, además de que las pruebas más relevantes en que se basó el juzgador para dictar la sentencia apelada, fueron las Reglas de la Asociación y el Contrato de Seguro.

En cuanto a la violación del artículo 823 del Código Judicial invocada por el apelante dentro del fallo apelado, estima el opositor que no precisa cuáles son a su juicio, los documentos públicos que fueron supuestamente mal valorados por el juzgador, por tanto, no existe un señalamiento directo de tales documentos. Considera, además, que los documentos aportados en el proceso fueron valorados y tomados en cuenta por el juzgador en su integridad, de acuerdo a las normas de la sana crítica.

En el hecho sexto, indica el opositor que el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo señala estrictamente que la apelación debe versar sobre asuntos de derecho. por consiguiente, no podrán discutirse los hechos ni mucho menos entrar a valorar pruebas, en el acto de la audiencia ordinaria se presentaron un cúmulo de pruebas, destacando la declaración legal de RUSSEL GARDNER, abogado experto en derecho inglés, así como la declaración jurada de THOMAS STUART RALLARD, experto en la Ley de TURK & CAICOS; la sentencia proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá contra TRANSDIESEL TANKER CORP. LTD.; doctrina sobre los P&I CLUBS, por ROBERT FORCE; certificado de admisión de TRANSDIESEL TANKER CORP. LTD. en el que se señala la cancelación automática por morosidad en el pago de las primas de seguro del P&I; así como también copia de las Reglas de OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED, y los documentos aportados por el actor.

POSICIÓN DE LA SALA

Como ha quedado evidenciado, la parte demandante ha promovido recurso de apelación, remedio procesal que fue admitido por el Tribunal Marítimo.

Corresponde destacar las limitaciones que tiene la Sala, como tribunal de segunda instancia, conforme lo prevé el artículo 483 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982.

Este tema ha sido objeto de innumerables fallos dictados por esta Corporación de Justicia, en el sentido de que la SALA únicamente puede pronunciarse sobre aspectos netamente jurídicos de la apelación, y no puede enjuiciar los elementos fácticos que tuvo en cuenta el juzgador.

Con respecto a ello, valga la pena citar parte medular de la sentencia de 30 de julio de 1996, dictada por esta Superioridad, en los términos que se transcriben a continuación:

> "Debe la Sala, como cuestión previa, determinar la competencia y sus límites, para conocer y decidir el recurso interpuesto. Por ello, debe analizar la naturaleza de la competencia que, para conocer del recurso de apelación contra las sentencias del Tribunal Marítimo, le confiere el ordenamiento jurídico procesal en la materia.
>
> Lo primero que debe reiterar la Sala, es que la competencia para conocer el recurso de apelación, viene limitada o restringida al tipo de ejercicio de la función jurisdiccional, le adscribe el ordenamiento".

Significa, pues, que la jurisdicción marítima, en caso de apelaciones contra la sentencias, está limitada o restringida, en cuanto a la decisión, a los aspectos meramente jurídicos de dicha decisión y, carece, por lo tanto, de competencia, salvo casos excepcionales para pronunciarse y analizar los aspectos probatorios que han sido tomados por el juzgador al momento de dictar sentencia.

Estima la Sala prudente, citar las sentencias de 24 de febrero de 1994 y la de 28 de septiembre de 1995, que sobre este aspecto, se pronunció de la siguiente manera. En la primera de ellas, tenemos que:

> "...
> Cuando la ley procedimental marítima señala que en esta instancia solamente pueden discutirse asuntos de derecho, significa que le está vedado al sentenciador de segunda instancia entrar a realizar cualquier análisis del elemento probatorio obrante en autos, ya se trate de apreciación o de valoración. Es evidente que la apelación en materia marítima es mucho más restrictiva que la casación porque no contempla los errores probatorios, lo cual a todas luces resulta lógico debido a esa percepción directa que tiene el juez marítimo con la prueba que le permite formarse un mejor concepto sobre el poder demostrativo de la misma ..."

En cuanto a la segunda sentencia citada, se expresó en lo medular, lo siguiente:

> "...
> 1. La apelación, en materia marítima, es controladora no renovadora, todo ello, como consecuencia del mandato claro y expreso contenido en la ley procedimental marítima en el sentido de que el proceso marítimo ha de ser sustanciado y resuelto fundamentalmente en la primera instancia, lo cual guarda una estrecha relación con el principio de la oralidad. Dicho principio descansa en la concentración y en la inmediación.
>
> 2. Dentro de los principios que informan el proceso marítimo se encuentra el de que "Los juicios marítimos serán de única instancia, pero, admitirán el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente".
>
> Al estudiar las normas que contemplan la apelación (Arts. 481 hasta el art. 492) nos encontramos ante una excerta legal que es la piedra angular en el ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil. Se trata del artículo 483, cuya letra es así:
>
> "ARTICULO 483: En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia".
>
> La norma legal en comento es diáfana y no deja dudas al respecto en la apelación marítima, como regla general, no se contemplan los errores probatorios o de contratación o de valoración), dada la percepción directa que tiene el juzgador marítimo con la prueba.
>
> 3. El principio genérico al que hemos hecho alusión no es óbice para esta Sala, puesto que, si al momento de revisar las causas marítimas observa que se presentan errores en la labor de constatación de los hechos realizada por el tribunal a-quo, en donde los mismos (errores) tienen como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la norma de derecho establezca en beneficio de alguna de las partes, a dicho estudio se adentrará. La labor que realiza la Sala en estos casos marítimos es individual".
>
> (Registro Judicial. Septiembre de 1995. Págs. 172-173)

Se evidencia de la sustentación del recurso de apelación, que la censura imputada al fallo, lo constituye la supuesta mala valoración del material probatorio, por lo que no cabe la menor duda la imposibilidad de la Sala de pronunciarse sobre dicho aspecto. La Sala ha podido comprobar que, en efecto, el apelante pretende que esta Superioridad examine los criterios valorativos del Tribunal Marítimo, lo que dice relación inmediata de la postura del Tribunal Marítimo frente a la fijación de los hechos y su correspondiente peso en la solución de la controversia, aspectos éstos para los cuales la competencia de la Sala se encuentra restringida, por tanto, mal podría pronunciarse sobre los aspectos contenidos en la sustentación del recurso de apelación que nos ocupa.

Valga la pena anotar también el criterio que sobre la materia probatoria ha seguido manteniendo la jurisprudencia de la Corte, en decisión de 9 de octubre de 1998, en la cual decidió lo siguiente:

> "Haciendo la advertencia de que todas las pruebas a que se refiere la parte demandada como favoreciendo su versión de los hechos están rebatidas por las pruebas que en su favor adujo la parte demandante, incluyendo la inspección ocular (tal como se ha tenido oportunidad de apreciar al examinar la sentencia del a-quo), es necesario

recordarle al recurrente que el alegato por él presentado, en esencia, pretende que en segunda instancia se haga una exhaustiva y acabada discusión de los hechos del proceso.

No está la Sala facultada para entrar en esta clase de debates, en razón de las limitaciones que le impone en ese sentido el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo. La Corte actuando como tribunal de instancia, cuando conoce del recurso de apelación en los procesos marítimos, sólo tiene capacidad para discutir asuntos de derecho, a los que resultan extrañas las cuestiones fácticas ya resueltas por el juez de la causa, basado en todo el caudal probatorio aportado por las partes, tarea que el juzgador cumplió cuando valoró esas pruebas sin apartarse de su obligación de hacerlo conforme a las reglas de la sana crítica, tal como lo mandata (sic) el artículo 205 del Código de Procedimiento Marítimo."

(Registro Judicial, octubre de 1998, pág. 184).

A fin de dejar más claro si el Tribunal Marítimo, ha incurrido en la grave censura que se le endilga, se permite la SALA citar parte de la sentencia, sobre el tópico valorativo. Veamos:

"El Tribunal advierte que, por su parte, la demandada ha sustentado su defensa sobre la inexistencia del derecho a reclamar del asegurado por las sumas adeudadas, con base en la ley en las reglas que rigen la materia. La parte demandada apoya su defensa en la regla que señala que para sea (sic) recuperable una suma pagada por el asegurado éste debe acreditar las evidencias que realmente hizo el desembolso, a fin de lograr el reembolso respectivo. Entonces, en el caso que nos ocupa vemos que existen pruebas tendientes a demostrar que lo que procede es que primeramente se pague el deducible y sólo después de ello se le reconocería al demandante la suma por ellos pagada.

Lo cierto es que el Tribunal encuentra que no hay evidencias suficientes que demuestren que la parte demandada, OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD., de conformidad con las reglas que rigen esta materia de seguro mutuo llamado P&I Club Association, se encontraba al momento en que los hechos ocurrieron, obligados a indemnizar o compensar a la parte asegurada, puesto que éstas se encontraban morosas con relación a una serie de pagos y que, de haberse efectuado estos pagos, ello no se ha evidenciado en este proceso. Entonces como quiera que la carga de la prueba de estos elementos correspondía fundamentalmente al actor y éste no descargó la misma, el Tribunal, por tanto, considera que los demandados deben ser absueltos de toda responsabilidad." (f.561-562).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia No.5 de 17 de marzo de 2000, dictada por el TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA, dentro del proceso ordinario que TRANSDIESEL TANKER CORP. le sigue a OCEAN P&I SERVICES LTD., OCEAN MARINE MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LTD. y OCEAN MANAGEMENT.

Las costas de apelación se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/250.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACION INTERPUESTA POR LUIS E. ACUÑA CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE CRÉDITO MARÍTIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE AL YATE ISLAND GIRL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución dictada por el Tribunal Marítimo el 14 de septiembre de 1999 y la resolución que la corrige, proferida el 21 de marzo de 2000, el apoderado de la parte actora LUIS E. ACUÑA, en el juicio especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado que le sigue al yate ISLAND GIRL, de bandera hondureña, ha interpuesto recurso de apelación.

En la primera resolución el Tribunal Marítimo condenó a la parte demandada a pagarle al demandante la suma de B/3,000.00 en concepto de salario, en su condición de tripulante de la nave, a razón de B/100.00 diarios. Luego corrigió la resolución anterior sobre la base de que el navegante sólo prestó servicios, de manera efectiva, durante 19 días, por lo que, a razón de un salario de B/100.00 por día, la suma que realmente tiene derecho a percibir, en ese concepto, es la de B/1,900.00 y no la de B/3,000.00 fijada inicialmente en la sentencia.

Para sustentar la alzada la parte recurrente invoca la violación de los artículos 36, 278 y 389 del Código de Procedimiento Marítimo, así como los artículos 30, 323 y 363 del Código de Trabajo de Honduras, derecho sustantivo aplicable en este caso.

Argumenta el apelante que, en relación con el salario del trabajador, el juzgador debió aplicar lo dispuesto por el Código de Trabajo Hondureño, donde se postula:

> "Artículo 30. La inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita alguno de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario."

En su opinión, al no existir contrato escrito de trabajo, el salario debió estimarse en la cantidad de B/3,500.00, suma demandada por el trabajador, y no en la de B/100.00 diarios como se establece en la sentencia, ya que el artículo citado consagra una presunción de veracidad a favor del trabajador.

Frente a ese planteamiento conviene recordar que para fijar el salario del trabajador en la suma de B/100.00 diarios y no en la cantidad establecida por la parte actora en su demanda, el Juez confió en la opinión del señor HERBERT NATHANIEL ARCHIBOLD PRINGLE, Capitán con experiencia en el manejo de naves similares al ISLAND GIRL, quien manifestó que el salario que se paga en Panamá, lugar de la ejecución del contrato, por la actividad desplegada por el demandante es de B/100.00 por día de trabajo.

Como se aprecia, el tema en discusión versa acerca de un asunto de eminente naturaleza probatoria, por lo que, si el Juez estimó que la presunción juris tantum que favorecía al trabajador fue desvirtuada con lo expresado por el declarante, la Sala debe respetar esa decisión, en razón de las limitaciones impuestas por el artículo 483 del Código de Procedimiento Marítimo.

En otro orden de ideas, el recurrente cuestiona el fallo respecto al descuento que se hizo de ocho días al total del tiempo que duró la relación de trabajo, a pesar de que el trabajador estuvo a bordo de la nave durante los ocho días en que ésta permaneció en el dique seco reparándose. Según el recurrente esa deducción contradice al artículo 323 del Código de Trabajo de Honduras, cuyo texto es el siguiente:

> "Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el trabajador permanezca a las órdenes del patrono o no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de descanso y comidas".

Destaca el apelante que en este punto la sentencia dictada se contradice, pues en ella se admite que el trabajador permaneció en su puesto de trabajo durante el tiempo que luego se le descuenta sin justificación alguna, o sea, los ocho días antes señalados.

La Sala, al examinar la sentencia recurrida, se encuentra con que en ella textualmente se expresa:

> "De igual forma, es del conocimiento de este Juzgador que una nave no puede estar desprovista de una persona que lo (sic) atienda, y que constantemente esté pendiente de la misma. Por ello, yates como el del presente caso, por regla general tiene una persona encargada, la cual usualmente duerme en ellos, los cuida, los atiende, está al tanto de todas las necesidades de los mismos, etc."

Si son ciertas las consideraciones anteriores, no encuentra excusas la Sala que justifiquen el no reconocimiento del derecho a cobrar salarios que tiene el trabajador por esos ocho días en que permaneciera la nave en reparación, estando el señor ACUÑA, parte demandante, a las órdenes de su patrono, en razón de los servicios que estaba prestando.

En cuanto a las otras reclamaciones formuladas en el libelo de demanda bajo la denominación de salarios por otros cargos desempeñados por el trabajador, tales cargos no especificados por el demandante no podrán ser reconocidos, ante todo, por no haber sido identificados en el proceso, sin que se sepa, a ciencia cierta, en qué consistían las supuestas labores adicionales que el demandante asegura haber desempeñado.

En atención a las consideraciones anteriores, la Sala concluye que es atendible lo reclamado por el apelante en lo relativo al tiempo efectivamente laborado por el trabajador y, en ese sentido, la condena debe fijarse en la suma de B/2,700.00 con base a veintisiete días de trabajo, a razón de B/100.00 diarios de salarios.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia dictada por el Juez Marítimo y condena a la parte demandada, el YATE ISLAND GIRL, a pagar al señor LUIS E. ACUÑA, la cantidad de B/2,700.00 en concepto de salario, en su condición de tripulante de dicha nave.

Las costas de ambas instancias se fijan en la suma de B/500.00 a ser cubiertas por la demandada, más los gastos e intereses legales que han de ser calculados oportunamente por la Secretaría del Tribunal Marítimo.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil, Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ZURIC INSURANCE CO. (ASIA) LTD. APELA CONTRA LA RESOLCUIÓN DEL 1 DE JUNIO DE 1999 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO QUE LE SIGUE A MITSUI O.S.K. LINES. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución dictada por el Tribunal Marítimo el 1 de julio de 1999 para desatar el proceso promovido por ZURICH INSURANCE CO. (ASIA) LTD. contra MITSUI O.S.K. LINES,LTD. la representación judicial de la parte actora ha interpuesto recurso de apelación del cual debe conocer la Sala en segunda instancia.

La inconformidad del apelante respecto a la sentencia recurrida se refiere a la condena en costas decretada en su contra, por considerar que su actuación en este proceso se enmarca dentro de la evidente buena fe que permite la exoneración del pago del trabajo en derecho.

Al examinarse las razones en que basa su solicitud el apelante es preciso concluir que el hecho de que ambas partes, de manera conjunta y voluntaria, hubiesen decidido someterse a la jurisdicción y la competencia del Tribunal Marítimo en este juicio, no significa necesariamente que la parte demandante haya obrado en el proceso con evidente buena fe. Nada le indica al juzgador, por ejemplo, que la parte actora, a sabiendas de que su acción se encontraba prescrita, tal como ha sido declarado en la resolución apelada, haya insistido en demandar, aún cuando tuviese la certeza de que su derecho se había extinguido por el transcurso del tiempo, ocasionándole, con ese comportamiento judicial, perjuicios y gastos procesales a la parte demandada.

También es atendible lo externado por la parte opositora de este recurso, cuando recuerda que su decisión de someterse a la jurisdicción del Tribunal Marítimo no implicó ninguna renuncia de sus derechos como parte demandada.

Para la Sala está fuera de discusión que en autos se comprueba que hubo, por parte de la demandada, gestiones de orden procesal, las que por fuerza se traducen en el trabajo en derecho desplegado y reconocido en la sentencia contra la cual se recurre.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 1 de junio de 1999, dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso ordinario que ZURIC INSURANCE CO. (ASIA) LTD, le sigue a MITSUI O.S.K. LINES.

La condena en costas de segunda instancia se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/150.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

UNITED ARAB SHIPPING CO. APELA CONTRA LA SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL LE SIGUE A UNITED ARAB SHIPPING CO. Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario marítimo propuesto por FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a DIVISION DE FRITZ COMPANIES INC. contra UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., solidariamente, una de las partes demandadas, UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.), ha interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia N°30 de 31 de agosto de 1998, cuya parte resolutiva transcribimos a continuación:

> "1. CONDENAR a la empresa TRIDENT SHIPPING CO. LTD., a pagar a las demandantes FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL, a DIVISION OF FRITZ COMPANIES INC., la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 93/100 (US$ 165.550.93).
>
> 2. CONDENAR igualmente a la demandada TRIDENT SHIPPING CO. LTD., al pago de las costas por el Trabajo en Derecho en favor de FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a DIVISION DE FRITZ COMPANIES INC. que se calculan en (US$ 16,555.00); más los gastos ocasionados a los actores y el pago de los intereses legales, los cuales serán calculados oportunamente por Secretaría.
>
> 3. ABSOLVER de toda responsabilidad individual o solidaria, a la demandada UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.), de la reclamación interpuesta en su contra por los actores.
>
> 4. CONDENAR a la demandante FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a DIVISION OF FRITZ COMPANIES INC., al pago de las costas por el Trabajo en Derecho, en favor de UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) que se fijan en la suma de US$ 16,555.00; y también pagar los gastos en que se hayan incurrido en el presente Proceso". (fs.1356-1357)

El recurso de apelación fue admitido, por el juzgador de primera instancia, en virtud del pronunciamiento de 23 de octubre de 1999, dictado por esta Corporación de Justicia, (fs.1398-1399), por el cual se concedió el recurso de hecho formulado por UNITED ARAB SHIPPING CO. LTD. con fundamento al artículo 471 de la Ley 8a. de 1982.

ANTECEDENTES

La sociedad FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a través de sus apoderados judiciales CARREIRA PITTI, P.C. ABOGADOS, promovió proceso ordinario marítimo contra UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.) y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., SOLIDARIAMENTE, con acción de secuestro contra la M/N TRIDENT EAGLE, hasta la concurrencia de la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON NOVENTA Y TRES CENTESIMOS (US$ 178.435.93).

Los hechos que sirvieron de fundamento a la demanda, cuya corrección se aprecia de fojas 124 a 144 del Tomo I, dan cuenta que el día 2 de noviembre de 1998, la demandante contrató, a través de sus corredores de transporte INTERMARINE INC., de New Orleans, Lousiana, Estados Unidos de Norteamérica, espacio a bordo de la M/N TRIDENTE EAGLE, para el embarque de equipo desde Houston, U.S.A. al Puerto de Kaoshiung, Taiwan.

El día 8 de noviembre de 1998, se emitió el Conocimiento de Embarque, N° HOKAO1, y fue incorporado a la Ley de Carga de Mercancía por Mar (C.O.G.S.A.). La carga contratada fue recibida "LIMPIA A BORDO", de la M/N TRIDENT EAGLE, y el flete fue prepagado en la suma de US$58,650.00.

En el hecho vigésimo, se indica que la carga arribó al Canal de Panamá, Sector Atlántico, el día 29 de noviembre de 1990, donde fue secuestrada por créditos no pagados, (f.131). En los hechos siguientes, expresa el actor que su

representada asumió todos los gastos de movilización de la nave transportadora, más el costo de desembarque de la carga, cuyo costo de operación fue de US$34,000.00. Además, que la carga fue transportada desde Panamá hacia Taiwan a bordo de la M/N SUNDERLAND SPIRIT, pagándose un flete de SETENTA Y CINCO MIL BALBOAS (US$75.000.00).

Con respecto a la responsabilidad que le imputa el demandante a UNITED ARAB SHIPPING CO., señala que éste es el dueño a casco desnudo de la M/N TRIDENT EAGLE y que el mismo tenía conocimiento del estado de innavegabilidad en que se encontraba la nave desde el momento que zarpó de los Estados Unidos (hecho décimo noveno).

La parte demandada, UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G.), dió contestación a la demanda, negando la mayoría de los hechos de la misma, e interpuso:

1. Excepción de Litis Pendencia

2. Nulidad del proceso por falta de jurisdicción y competencia sobre una de las partes;

3. Aumento de la caución de daños y perjuicios.

Cumplidas las fases procesales, incluyendo la celebración de la audiencia preliminar el 7 de febrero de 1997 y la audiencia ordinaria de 13 de agosto de 1998, cuya transcripción se encuentra de fojas 1987 a 1302, el señor JUEZ MARITIMO dictó la Sentencia N°30 de 31 de agosto de 1998, con fundamento en las siguientes conclusiones:

-Que de acuerdo a las evidencias presentadas por las partes en el proceso, el juzgador consideró que no se ha demostrado que del contrato de fletamento a casco desnudo celebrado entre UNITED ARAB SHIPPING CO. y SELAVIK SHIPPING CO. LTD. le recaiga responsabilidad alguna al primero nombrado, como consecuencia de dicha relación contractual. De igual manera, consideró el juzgador que tampoco cabe responsabilidad en la relación surgida entre el fletador a casco desnudo SELAVIK SHIPPING INC. y los fletadores por tiempo, TRIDENT SHIPPING CO. LTD., ni en los contratos celebrados por esta última y los demandantes FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL.

Sobre el eximente de responsabilidad de las pretensiones seguidas por el actor contra UNITED ARAB SHIPPING CO., como propietario a casco desnudo de la nave, el juzgador se basó en el peritaje rendido por el perito MICHAEL LESLIE ALLEN de la firma de abogados HERRERTH SMITH, en cuanto a la legislación inglesa y del perito estadounidense ROBERT MILANA de la firma forense KIRLIN, CAMPBELL & KEATON (fs. 1335 y ss.).

Por otra parte, señala la sentencia que al ser secuestrada la nave en Panamá, habían transcurrido cuatro (4) años después de la celebración del contrato de fletamento, "y era solamente al momento antes y durante la entrega de la nave, que UASC se comprometía a presentar la nave al fletador a casco desnudo en condiciones de navegabilidad..." (f.1340). Concluyó el juzgador que "UASC no causó el abandono de la nave en Cristóbal, no fue responsable de que la nave descontinuara el viaje, y no fue responsable del daño que alegan los responsables de la carga en sus reclamos" (f.1343).

-En cuanto al otro demandado, TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., advierte el Juez Marítimo que la misma no ha comparecido al proceso, por tanto, no se han defendido sus derechos, así como tampoco, se ha desvirtuado las evidencias "prima facie", presentadas en su contra en este proceso, lo que coadyuvó a que se ejercitara la acción de secuestro contra el combustible de la M/N TRIDENTE EAGLE, como supuesta propietaria del mismo.

Que más bien, existen evidencias indiciarias a fojas 70 y 73, con respecto a los daños y perjuicios que hubiere ocasionado el trasbordo y la espera de ese

buque para recibir la carga en Japón. De igual forma, se refiere el señor JUEZ que consta en el conocimiento de embarque el flete fue pre-pagado y, por tanto, al no culminar el viaje pactado, motivó las otras erogaciones de parte del dueño de la carga, de las que ya se hizo mención.

En virtud de que la legislación COGSA es la que reguló la relación contractual entre las partes, indica el juzgador que la misma señala algunas limitaciones de responsabilidad que tiene el transportista para ejercer sus derechos, pero, que en este caso, no han sido ejercidas al no comparecer la demandada al proceso. Con relación a los daños y perjuicios, estima el juzgador que deberá ser aplicada el GENERAL MARITIME LAW, consistentes en otros estatutos legales y el derecho jurisprudencial norteamericano.

Concluye el juzgador que el caso en estudio deberá ser aplicado el artículo 66 del Código de Procedimiento Marítimo, que dice:

> "ARTICULO 66: Si el demandado no contesta la demanda dentro del término, el Juez tomará como indicio de aceptación de las peticiones del demandante, la falta de comparecencia del demandado; pero el juicio seguirá los trámites que le son propios, únicamente con audiencia del demandante. En caso de que el indicio que surge de no haber comparecido, constituye suficiente elemento de convicción y se comprobare la liquidez y exigibilidad de lo demandado, el Juez fallará, sin necesitad de abrir la causa a pruebas, en aquellos casos en que la Ley consagre tal trámite."

SUSTENTACION DE LA APELACION

Al analizar el escrito contentivo de la apelación, observa la Sala que la misma tiene como fundamento fáctico lo siguiente:

1. La sentencia debió reconocer la limitación de responsabilidad por bulto que consagra el Estatuto de Transporte de Mercancías por Mar de los Estados Unidos (CARRIAGE OF GOODS BY SEA ACT, 1936), que fuera incorporada expresamente en el conocimiento de embarque. Que la limitación prevista en COGSA, constituye una excepción al tenor del artículo 72 de la Ley 8 de 1982, por cuanto que reduce o modifica la obligación de TRIDENT "de indemnizar a la demandante por razón del incumplimiento del contrato de transporte"(f.1363), en caso de transporte de bultos hasta US$500.00.

2. El Juez Marítimo no tomó en cuenta que la limitación de responsabilidad bajo COGSA, es excluyente de cualquier otra reclamación de daños y perjuicios, por tanto debió limitar la condena a lo que prevé dicha legislación. Tal limitación lo constituye la cantidad de US$500.00 por bulto, conforme al peritaje aportado al proceso del perito en derecho norteamericano, ROBERT MILANA (f.1365).

3. Que la legislación COGSA contempla el concepto de "BULTO", y que en este caso, deberá considerarse la cantidad de 17 bultos o paquetes, por tanto, el juzgador debió limitar la condena en cuanto al número de bultos.

   Advierte que la legislación norteamericana prevé que si el embarcador, en este caso, FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL, hubiere deseado elevar el monto de la limitación aludida, la misma debió haberse establecido con claridad en el conocimiento de embarque.

4. UNITED ARAB SHIPPING CO. está legitimada para apelar y aducir la limitación de responsabilidad de TRIDENT, antes mencionada, en virtud de que la misma es fiadora solidaria, con base al acuerdo de

consignación de la caución liberativa de los secuestros. Con respecto a ello, hace referencia al caso YSB COMMERCIAL -VS- UASC Y TRIDENT. considerando que puede resultar responsable en alguna medida, por la condena de TRIDENT.

OPOSICION A LA APELACION

Del extenso escrito obrante de fojas 1400 a 1426 del expediente principal, la Sala se referirá únicamente a los puntos que guardan relación con la apelación, anteriormente resumida. No obstante, vale la pena hacer la salvedad que al inicio del escrito, el opositor argumenta que UNITED ARAB SHIPPING CO. (S.A.G), no es la parte transportista, porque la misma estaba desligada totalmente de la operación y del control del buque, dado que el mismo era ejercido por TRIDENT SHIPPING CO. LTD.

1. Estima el opositor que la actuación del Juez Marítimo está acorde con las normas relativas a las excepciones, citando al respecto el artículo 77 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982:

"ARTICULO 77: Cuando el Juez considere probados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en el fallo, una vez surtida la tramitación del proceso y decidir el juicio en consonancia con la excepción reconocida, sin embargo, respecto de las excepciones de prescripción y de compensación, es preciso que se aleguen".

Que en ningún momento el juzgador dejó de reconocer la limitación de responsabilidad consignada en COGSA, lo que realmente ocurrió es que el señor Juez consideró que la demandada TRIDENT SHIPPING CO. LTD., quien no cuncurrió al proceso, "NO PROBO NINGUN HECHO QUE DESACREDITARA LO PROBADO POR EL DEMANDANTE" (f.1406), señalando a continuación que, obviamente, los hechos no probados hubieren servido de base para la excepción de limitación de responsabilidad. Cita el opositor, parte medular de la sentencia (pág.50), de la siguiente manera:

"El Tribunal desea manifestar que existen limitaciones de Responsabilidad del transportista de conformidad con COGSA, pero por un lado, la parte transportista, que podría tener derecho a invocar dichas limitaciones de responsabilidad, no ha comparecido a defenderse... como quiera que aquí no ha comparecido la parte contraria a desvirtuar los antecedentes y pruebas que se han presentado al proceso, el Tribunal no tiene porque, de manera oficiosa, probar que no se ajustan a la realidad". (El subrayado es nuestro).

2. Advierte el opositor que, de acuerdo al artículo 483 de la Ley 8a, no se pueden discutir los hechos que el tribunal declaró no probados.

3. La limitación de responsabilidad de US$500.00 establecida por COGSA, no existe, sino se le da al cargador una "Justa Oportunidad", y al respecto aportó copiosa jurisprudencia de los tribunales norteamericanos.

Señala el opositor, además, que la limitación de responsabilidad consagrada en la legislación marítima americana, no es de aplicación automática, y para que el transportista pueda beneficiarse con dicha limitación, el mismo estará obligado a probar que le otorgó al cargador una oportunidad justa. (f.1425).

POSICION DE LA SALA

Si bien la recurrente está legitimada para ejercer el derecho de apelar contra esta resolución, como le fuera reconocido por esta Corporación de Justicia en el recurso de hecho, que con anterioridad fue resuelto y al cual ya nos

referimos, es evidente para la Sala, que el recurrente pretendemás bien que la condena contra la empresa transportadora de la carga, TRIDENT SHIPPING CO. LTD., sea tasada en base al limite de responsabilidad señalada por COGSA, debido a que es ésta la legislación aplicable al caso en estudio en el cual, la carga lo constituía 17 bultos contentivos de ocho (8) juegos de compresores de aire, motores y repuestos (f.130).

La Sala, tuvo oportunidad de referirse ampliamente sobre al régimen de responsabilidad que le cabe al transportista, de acuerdo a COGSA, en reciente fallo dictado el 6 de octubre de 2000, similar a éste, en la apelación propuesta por UNITED ARAB SHIPPING CO. dentro del proceso seguido a dicha sociedad y a la empresa TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD. por MORISHIGUE ENTERPRISE CO. LTD.

En aquella ocasión esta Corporación de Justicia sostuvo lo siguiente:

"Advierte la Sala que la controversia contractual se desarrolló por el transporte por vía marítima, de un paquete. Resulta conveniente y siguiendo a SHOENBAUM ("Admiralty and Maritime Law 1997"), destacar que la carga, con independencia de su tamaño, peso, o forma, esté contenido dentro de alguna preparación de empaque que facilite su movilidad y manejo, estaría considerado como embarcado como un paquete. Esta definición es aplicada con gran flexibilidad. El paquete no tiene necesariamente que contener o encerrar los bienes. Una planta eléctrica, un motor de incendio y un yate han sido encontrados como empacados, siempre que estén en alguna forma de cajón o cuna.

Al analizar la SALA el documento contentivo del conocimiento de embarque o Bill Of Lading, obrante a foja 27 del Tomo I, observa que se pactó el transporte de un yate de pesca, con una plancha de acero, remitido por Bertram Yatch, de Miami, Florida, desde el Puerto de Port Everglades, Fl., consignado a MORISHIGUE ENTERPRISES, con domicilio en Shinjuku, Tokio, Japón, de fecha 22 de octubre de 1990, figurando como transportista la M/N TRIDENT EAGLE, Adicional a lo indicado, aparece que el flete fue prepagado.

Considera la Sala, que no es menester adentrarse a los motivos por los cuales la carga no llegó a su destino final, ya que constan elementos suficientes durante las fases del proceso, que determinaron que la M/N TRIDENT EAGLE llegó únicamente hasta puerto Cristóbal de la República de Panamá, donde fue objeto de acciones judiciales, siendo liberada posteriormente, de las acciones cautelares existentes sobre la M/N TRIDENT EAGLE, por el propietario de la misma, UNITED ARAB SHIPPING CO., quien no fue parte de la relación contractual de transporte marítimo suscrito entre TRIDENT SHIPPING COMPANY. LTD., en calidad de transportista y MORISHIGUE ENTERPRISES CO., en calidad de cargadora.

La Ley Americana de Transporte de Mercaderías por Mar, Año 1936, ha sido aportada, en el idioma español, y se encuentra de fojas 30 a 37 en el Tomo I que contiene los antecedentes del presente negocio. Así tenemos que en el aparte referente a "DERECHOS E INMUNIDADES", se lee lo siguiente:

"Sec.4 (1) ...

(5) Ni el transportista ni el buque en ningún caso serán o llegarán a ser responsables por cualquier pérdida o daño a/o en conexión con el transporte de mercancías en cantidad que exceda de $500.00 por paquete, moneda legal de los Estados Unidos, o en el caso de mercancías no embarcadas en paquetes, por unidad de flete acostumbrada, o el equivalente de aquella suma en otra moneda, a no ser que la naturaleza y el valor de tales mercaderías hayan sido

declarados por el Cargador antes del embarque e insertadas en el C/E.

Esa declaración, si es incorporada en el C/E, será prueba prima facie, pero no será concluyente para el Transportista.

Puede establecerse otra cantidad máxima diferente de la mencionada en este párrafo por convenio entre el Transportista, Capitán o Agente del Transportista y el embarcador.

Provisto que tal máximo no sea inferior a la cantidad arriba mencionada. En ningún caso será el Transportista responsable por más de la cantidad del daño realmente sufrido.

Ni el Transportista ni el buque serán responsables en ningún caso por pérdida o daño a/o en conexión con el transporte de las mercancías si la naturaleza o el valor de las mismas ha sido declarado erroneamente a sabiendas y fraudulentamente, por el Cargador en el C/E". (f.34)

Aún a pesar de que la sección 4 (5) de COGSA confiere al transportista un límite de responsabilidad de US $ 500.00 por paquete, algunas Cortes norteamericanas han restringido este derecho bajo la doctrina de la oportunidad equitativa ("fair opportunity doctrine"), en cuya virtud el transportista debe darle al embarcador una oportunidad para declarar el verdadero valor del objeto transportado, no obstante que su contenido ha variado de alcance entre diferentes Cortes norteamericanas, desde que se adoptó en Tessler Brother (B.C.) v. Italpacific line, requiriéndose en la actualidad, que el requisito de la oportunidad razonable no requiere un específico espacio en el conocimiento de embarque, para consignar el valor correspondiente. Así, por ejemplo, se ha indicado que una cláusula "paramount" en el reverso del conocimiento de embarque haciendo aplicable al transporte las reglas de COGSA y un espacio en el anverso para declarar un exceso de valor son suficientes para satisfacer el requerimiento impuesto por la doctrina que se analiza. (véase Benedict, "On admiralty" marzo 1998, párrafo 16, pgs. 16-25).

El autor citado analiza el desarrollo en la jurisprudencia norteamericana, donde partió de una exigencia que el conocimiento de embarque reprodujese el lenguaje relevante de la Sección 4(5) de C.O.G.S.A.

La más reciente decisión es del Noveno Circuito: sugieren que el requisito es menos estricto que lo que algunos casos antiguos permitirían sugerir.

En Mori Seiki Usa v.M.N. Altigatoor Triumph, la Corte sostuvo que el lenguaje requerido no necesitaba que apareciese en la página frontal del conocimiento de embarque, que no requiere de un espacio para declarar un mayor valor, y que el lenguaje podía aparecer en letra minúscula. En Travellers Indeminity Co. v.Vessel San Houston, la Corte le señaló al cargador que la decisión de asegurar la carga con una empresa aseguradora independiente, era prueba que el cargador no requería declarar un valor más alto.

En efecto, ambas cortes de apelaciones y Cortes de distrito dentro del Noveno Circuito, han levantado el tema de la validez de la doctrina.

El Quinto Circuito aceptó la creación del requerimiento del "fair opportunity", pero rechaza el método para llegar a él, haciendo depender más en la existencia de una oportunidad para declarar un

> mayor valor que la conciencia del cargador de ello, habiendo desarrollado una evidencia probatoria, como por ejemplo, la tarifa de la Federal Maritime Comission, que ofrece una selección de tarifas..
>
> El Undécimo Circuito, siguiendo el Quinto, también ha sostenido que tanto con una cláusula "paramount" en el conocimiento de embarque que incorpore COGSA, o una tarifa válida de la Federal Marítime Comission, que ofrece un abanico de tarifas. Entonces es claro que COGSA no requiere un espacio en blanco en el conocimiento de embarque en el cual hacer una declaración de valor. Finalmente, las Cortes de Undécimos Circuito, han sido particularmente sensibles a la realidad comercial de los embarcadores que prefieren basarse en sus propias aseguradoras de carga.
>
> El resto de las Cortes de Circuito han adoptado la doctrina, han seguido el análisis del Undécimo Circuito, pero han sido mucho más generosos al transportista, al decidir que constituye un aviso adecuado.
>
> El Segundo Circuito ha sostenido que una cláusula "paramount" en la parte posterior del conocimiento de embarque, y un espacio en el frente para declarar valores en exceso, son suficientes para satisfacer el requerimiento. Cortes del Distrito han aplicado este razonamiento con base sólo en una cláusula "paramount".
>
> La doctrina más reciente norteamericana parece señalar que basta que en el conocimiento de embarque aparezca un espacio en que el embarcador puede señalar un límite de responsabilidad mayor y el conocimiento de embarque cuente con una cláusula que se rige por COGSA. Ambos requerimientos han sido satisfechos en el conocimiento de embarque, obrante a foja 27 del tomo I."

No obstante, una vez analizado el proceso que nos ocupa, salta a la vista que no se encuentra en discusión la fijación de dicha limitación, sino, por el contrario, la pretensión del actor se fundamenta en el incumplimiento del contrato de transporte suscrito por TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., en carácter de transportista de carga marítima y FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL, en calidad de cargadora. Incumplimiento alegado por la parte demandante en el proceso ordinario marítimo (f.139)

Es importante destacar que el contrato de transporte de carga marítima, establece claramente las condiciones por las que deberá regirse el transportista en este caso, TRIDENT SHIPPING CO., como propietaria de la nave "TRIDENT EAGLE" y la empresa cargadora FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL. En este caso, la carga salió de un puerto de los Estados Unidos con destino a Taiwan y, para tal efecto, el cargador cubrió el flete en su totalidad, como consta en dicho contrato.

A su vez, el transportista de la carga "TRIDENT EAGLE" asumió por viaje una obligación de custodia de la mercancía, desde el momento en que la toma a su cargo hasta que la entrega en destino.

Las circunstancias que impidieron la continuación del viaje al destino convenido, ha sido probado por el reclamante, de allí que se dió el incumplimiento del contrato pactado, con la agravante de que el demandado no compareció al proceso, como lo indicáramos con anterioridad.

Por ello, es imperativo para la Sala, arribar a la conclusión, que se dió el incumplimiento del contrato de transporte de carga marítima alegada por el actor y fundamentado en las pruebas que fueron aportadas al proceso, y con las cuales se han justificado las erogaciones incurridas por el demandante con motivo del incumplimiento del contrato.

Así tenemos que el TRIBUNAL MARITIMO al evaluar la cuantía perseguida por el actor, fundamentó la misma así:

"...

Por tanto del detalle de las facturas y cargos por los perjuicios reclamados, suministrados por el propio demandante, estamos hablando de: "fletes prepagados por el orden US$58,650; US$30,000 adelantados en la descarga de los bienes del Suderland Spirits; US$75,000.00 como flete desde Panamá hasta Taiwan; adicionalmente se reclaman gastos por comunicaciones, viajes y honorarios que ha tenido que desembolsar el demandante por US$2,000.00. No se pudo justificar los US$8,785.00 por supuesto combustible entregado a la m/n TRIDENT EAGLE para llevarla al puerto (fs.1296, 1297 y 1298).

Por tanto, la cuantía de la demanda que se justificó a lo largo del proceso, fue de US$165,550.93...". (f.1,354)

En tal sentido, se justifica la obligación del transportista de resarcir al embarcador, como consecuencia del incumplimiento contractual que, a su vez, generó erogaciones asumidas por el dueño de la carga, tales como: la utilización de otra nave, traslado de la carga y el pago de un nuevo flete para continuar el viaje.

No encuentra la SALA posibilidad de que la sentencia haya incurrido en los cargos señalados por el apelante, en virtud de no se está en presencia de la fijación de límite de responsabilidad de una de las partes en cuanto a la tasación a que debe ser condenada, sino por el contrario, estamos en presencia del incumplimiento contractual por parte de la empresa transportista TRIDENT SHIPPING CO. LTD., propietaria de la M/N TRIDENT, en el transporte de la carga de propiedad de FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a DIVISION DE FRITZ COMPANIES INC., incurriendo, esta última, en erogaciones adicionales, para que la carga continuara el viaje al destino originalmente pactado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Sentencia N°30 de 31 de agosto de 1998, proferida por el TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA, dentro del proceso ordinario marítimo promovido por FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL a DIVISION DE FRITZ COMPANIES INC. contra UNITED ARAB SHIPPING CO. y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD.

Las costas de segunda instancia se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

FRANKLIN CIGARRUISTA RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO DE FILIACION QUE LE SIGUE HEILEEN MAITE SOLIS PINILLA, A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS LUIS ALBERTO Y ALBERTO LUIS SOLIS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 6 de octubre de 2000, esta Sala Civil de la

Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor FRANKLIN CIGARRUISTA, contra la sentencia N 3 F.-C.-, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia el 3 de mayo de 2000, dentro del proceso de filiación instaurado por la señora HEILEEN MAITE SOLIS PINILLA contra la parte recurrente y a favor de sus hijos, los menores de edad LUIS ALBERTO SOLIS y ALBERTO LUIS SOLIS.

En vista de que se presentó el recurso corregido dentro del término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial, procede la Sala a decidir en forma definitiva la admisibilidad del mismo.

En la resolución que ordenó la corrección, la Sala le indicó al recurrente que debía incluir en el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas, la o las normas sustantivas que consagran los derechos u obligaciones que considera le fueron violados por la resolución impugnada, como consecuencia de la valoración probatoria.

No obstante, luego de revisar el nuevo escrito de formalización del recurso se observa que el recurrente no cumplió con lo ordenado, ya que si bien incluyó los artículos 770 y 773 del Código Judicial que son normas probatorias que podrían considerarse como normas sustantivas aún cuando aparezcan en dicho Código, el recurrente una vez más omitió citar la o las disposiciones legales que consagran los derechos y obligaciones que se discuten en este proceso y que, por tanto, son las que incidieron directamente en la decisión del mismo.

En relación con este punto es conveniente citar al Doctor JORGE FABREGA P. quien, en su Obra "Casación", manifiesta lo siguiente:

> "Tratándose de una causal probatoria, era necesario que se mencionaran las disposiciones civiles sustantivas que se violaron con motivo de la errada apreciación de la prueba. Y obviamente esto es imprescindible porque son las disposiciones sustantivas las que consagran los derechos y obligaciones. Las violaciones o preceptos legales referentes a la valoración de la prueba sólo constituye un medio o una causa de la valoración de las disposiciones legales sustantivas para llegar a la determinación de la ley sustantiva, y, por lo tanto, no basta para demostrar que se ha cometido error en la apreciación de la prueba.
>
> ...
>
> Sin embargo, la jurisprudencia exige, al estructurar el recurso de casación con base en causales probatorias, que se invoque también como violada una norma substantiva que incide en la decisión de la relación material controvertida. La razón consiste, al parecer, en que la Corte considera la violación a las normas probatorias constituyen violación a normas medio y que son las otras, las que inciden en la decisión del mérito, las que conducen a la parte resolutiva." (Imprenta Varitec, S. A. , Panamá, 1995, págs. 142; 239)

En estas circunstancias, el recurso no puede ser admitido, puesto que no se subsanaron los defectos formales del mismo.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial del señor FRANKLIN CIGARRUISTA, dentro del proceso de filiación que le sigue la señora HEILEEN MAITE SOLIS PINILLA, en representación de sus hijos, los menores de edad LUIS ALBERTO SOLIS y ALBERTO LUIS SOLIS.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSE MARIA LOPEZ Y JUDY ESTHER SERRANO DE LOPEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN DE LA POSESIÓN QUE LE SIGUE A TODOS LOS COPROPIETARIOS DEL EDIFICO P.H. GLAMOUR TOWER. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El abogado BENEDICTO DE LEON FUENTES, en su condición de apoderado especial de JOSE MARIA LOPEZ DIAZ y JUDY ESTHER SERRANO DE LOPEZ en el proceso sumario de interdicto posesorio de perturbación de la posesión que se sigue contra todos los propietarios del edificio P.H. GLAMOUR TOWER, interpuso recurso de casación en el fondo contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 12 de mayo de 2000, mediante la cual fue confirmada la sentencia de 6 de abril de 1999 proferida por el Juez Séptimo del Circuito de Panamá, Ramo Civil, negando lo solicitado por los demandantes.

Los autos de este proceso indican que la parte actora pidió que se declarase que, en relación con la finca N°34040 inscrita al Folio 224, Tomo 836 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, por no existir servidumbre de ningún tipo, se debe intimar a los demandados a retirar una interconexión sanitaria de aguas servidas construida subrepticiamente en el subsuelo del predio, así como ordenárseles que se abstengan de ejecutar cualquier otro acto de perturbación que afecte a la propiedad de los demandantes. Se pide, además, que se indemnicen los daños y perjuicios que la interconexión sanitaria le ha ocasionado a la finca N°34040.

En los hechos de la demanda se expresa que la interconexión subterránea de aguas servidas construida por los propietarios del edificio P.H. GLAMOUR TOWER dentro de la finca N°34040 ha provocado daños en ese predio, consistentes en un hundimiento de terreno y en el desmejoramiento consiguiente de un muro existente en ese lugar.

Como causal única fue invocada la de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La causal fue admitida por la Sala y se debe resolver su eficacia para enervar la sentencia atacada.

En los motivos del recurso el casacionista le atribuye a la sentencia haber valorado indebidamente, al margen de las reglas de la sana crítica, un informe pericial visible a fojas 28 y 29 del expediente, el cual, según se afirma, demuestra los elementos fácticos que le sirven de fundamento a la acción impetrada por los demandantes. En segundo lugar, se le endilga al fallo la valoración incorrecta de las pruebas consistentes en ocho fotografías que forman parte del informe pericial aludido, las que también, en opinión del recurrente, arrojan claridad y confirman los hechos de la demanda. Por último se le imputa al Tribunal Superior haberle otorgado valor de plena prueba, de la cual carecen, a las sentencias del Juzgado Primero del Circuito, Ramo Civil, del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 83-88) y a la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia visible de fojas 89 a fojas 93 del expediente, todo lo cual dio lugar a que se llegase a la conclusión equivocada de que el caso subjúdice había sido ya previamente sustanciado en otro proceso.

En relación con las normas jurídicas que se consideran infringidas por la sentencia, fueron citados los artículos 770, 953 y 967 del Código Judicial, y los artículos 337, 432 y 602 del Código Civil.

Cuando la Sala lleva a cabo la necesaria confrontación de los cargos que el recurrente le imputa a la sentencia, con la afirmación de que la valoración incorrecta de las pruebas mencionadas ha sido responsable de que se dictase un fallo injurídico, es dable percatarse que lo decidido por el Tribunal Superior se fundamentó en que los demandados lograron enervar la pretensión de la parte actora aportando al proceso una serie de notas dirigidas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales a los demandantes, mediante las que dicha institución certifica que sobre la parte posterior de la finca que les pertenece recae una servidumbre sanitaria creada para desalojar las aguas servidas provenientes de los inmuebles ubicados en la Ave. 1-C Norte y la Ave. Elida Diez y a la cual deben conectarse esos inmuebles. En la sentencia se indica que esas notas datan de los años 1995 y 1996, por lo cual se desprende que los demandantes tenían conocimiento, antes de promover el presente interdicto de perturbación de la posesión, presentado el día 2 de febrero de 1998, de la existencia de la servidumbre en su predio. El fallo atacado puntualiza que los demandantes, en esas condiciones, debieron promover un proceso referente a la existencia o no de la servidumbre, conforme a lo establecido en el artículo 1335, numeral 1 del Código Judicial y el artículo 1325 del Código Administrativo, y no un interdicto de perturbación de la posesión como el que ha sido empleado.

La Sala ha podido apreciar que el fallo dictado en sus aspectos medulares no se basa en la valoración de las pruebas que el casacionista señala como incorrectamente justipreciadas. Lo cierto es que sobre el particular la sentencia se limitó a indicar que de las pruebas aportadas no se desprenden hechos materiales que perturben la posesión de los demandantes, pues las excavaciones que se hicieron para colocar la instalación de interconexión de aguas servidas han cesado, manteniéndose únicamente en el predio afectado el hundimiento en el terreno y el muro divisorio deteriorado; daños ambos que tuvieron su origen en las excavaciones que realizó la empresa que construyó el edifico P.H. GLAMOUR TOWER (Constructora Nova, S. A.) y que, según se comprueba con las sentencias de fojas 83-88 y 89-93, fueron debidamente indemnizados por dicha constructora.

En opinión de la Sala, las pruebas que el recurrente ha identificado como mal apreciadas carecen de idoneidad para acreditar que la parte demandada haya incurrido en actos de perturbación de la posesión, que constituyen el fundamento de la acción y de la demanda de este proceso de interdicto posesorio de perturbación de la posesión. Por el contrario, ha sido la parte demandada la que en este juicio ha aportado las pruebas que acreditan que la servidumbre sanitaria de aguas servidas que pesa sobre el predio de los demandantes fue debidamente constituida, sin que este hecho haya podido ser desvirtuado por la parte actora, tal como era de su incumbencia hacerlo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 12 de mayo de 2000, dentro del proceso sumario de interdicto posesorio de perturbación de la posesión que JOSE MARIA LOPEZ y JUDY ESTHER SERRANO DE LOPEZ le siguen a todos los propietarios del edificio P.H. GLAMOUR TOWER.

Las costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIA LUISA BRAVO ZÚÑIGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA DE LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO Y LOS HEREDEROS DECLARADOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso de sucesión de MARIA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA contra la sucesión testada y/o intestada de LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.) y los HEREDEROS DECLARADOS, la primera ha promovida proceso ordinario y, contra la decisión que culminó el mismo en la segunda instancia, la sentencia de 9 de noviembre de 1999, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, promovió recurso extraordinario de casación en el fondo.

Habiéndose surtido las etapas intermedias que gobiernan este proceso, la Sala se encuentra en la etapa de decidir el mismo, lo que hará previas las consideraciones que se dejan expuestas.

ANTECEDENTES

La señora MARÍA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA interpuso por medio de su apoderado judicial demanda ordinaria declarativa de mayor cuantía, a fin de que se formulen las siguientes declaraciones:

"...

1. **Que mi representada MARIA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA, ejerció los CARGOS de CONTADORA, ADMINISTRADORA Y ASESORA DE BIENES; y GUARDADORA en vida ha beneficio de LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO; GASTOS antes de ser nombrada DEPOSITARIA JUDICIAL y los gastos incurridos en la SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA de la causante LUISA ISABEL SAMPEDRO (Q.E.P.D.); la cual se ventila en este TRIBUNAL.**

2. **Que se les CONDENE Y OBLIGUE a la parte DEMANDADA a pagar a mi representada MARIA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA la suma de CIENTO OCHO MIL DIECIOCHO BALBOAS CON CATORCE CENTESIMOS (B/.108,018.14), más las costas, intereses legales y gastos que se causen en el proceso, lo cual se origina por haber ejercido mi representada los CARGOS DE CONTADORA, ADMINISTRADORA Y ASESORA DE BIENES; Y GUARDADORA en vida ha beneficio de LUISA ISABEL SAMPEDRO; GASTOS antes de ser nombrada DEPOSITARIA JUDICIAL y los gastos incurridos en la SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA de la causante LUISA ISABEL SAMPEDRO (Q.E.P.D.), la cual se ventila en este Tribunal.**

3. **Que mi representada ha realizado todo lo necesario para que la parte DEMANDADA le pague lo que le corresponde y hasta la fecha se han negado." (F.116)**

La demanda quedó radicada en el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. La misma fue notificada a los demandados. Por su parte, la firma de abogados TRONCOSO, LACAYO & PORRAS, representante de la parte demandada, luego de recibir traslado de la demanda se opuso a todas y cada una de las pretensiones, negando lo pedido, los hechos afirmados y el derecho esgrimido. El proceso fue abierto a pruebas, pero ninguna de las partes presentó prueba alguna. Admitidas las pruebas aducidas por la parte actora con su demanda, se ordenó la práctica de las mismas.

El demandado invoca excepción de prescripción, excepción de cosa juzgada e incidente de nulidad de lo actuado.

Cumplidas las etapas procesales inherentes a este tipo de proceso, procedió el JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO CIVIL a proferir la decisión del caso, mediante Sentencia No.28, de 20 de mayo de 1998, (fs.192-200) en la que se resuelve lo siguiente:

> "... RESUELVE: 1) NEGAR las excepciones de prescripción y de cosa juzgada, propuesta por la parte demandada. 2) DECLARA DESIERTO el Incidente de Nulidad propuesto por la parte demandada. 3) DECLARA: a) que MARIA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA ejerció el cargo de depositaria judicial en la SUCESIÓN TESTADA Y/O INTESTADA DE LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.). b) que la parte demandada debe pagar a MARIA ISABEL BRAVO ZÚÑIGA la suma de TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS CON 14/100 (B/.13,568.14) por razón de los gastos incurridos en concepto de medicina, alimentos, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratorios y gastos funerales, hechos a beneficio de LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (q.e.p.d.), más las costas en cuanto a trabajo en derecho se fijan en DOS MIL CIENTO SEIS BALBOAS CON 81/100 (B/.2,106.81), mas los gastos judiciales que deben ser liquidados por secretaría. C) NIEGA la tercera declaración." (Fs.199-200)

Ambas partes anunciaron recurso de apelación, el cual fue surtido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial; y, mediante Resolución de 9 de noviembre de 1999, revocó la sentencia de primera instancia. (Véase foja 255).

La resolución anterior, es la que es objeto de recurso de casación que ocupa la atención de la Sala y a cuya decisión se procede.

EL RECURSO DE CASACIÓN

Como se explicó, el recurso extraordinario es en el fondo, y la causal que se ha ensayado es infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de violación directa.

En apoyo a la casual esgrimida, se han expuesto los motivos que la Sala se apresta a reproducir

> "PRIMERO. El Primer Tribunal Superior de Justicia, al proferir la sentencia de 9 de noviembre de 1999, que revoca la sentencia No.28, de 20 de mayo de 1998, dictada por el Juez Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, omite en violación de la ley, decidir y pronunciarse formalmente en la parte resolutiva de dicho fallo, en el derecho que tiene nuestra representada a reclamar que le sean pagados los alimentos, gastos funerarios y los de uso de la localidad que le brindó a la causante LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO.
>
> SEGUNDO. El juzgador de segunda instancia, al revocar la sentencia No.28, de 20 de mayo de 1998 y no acceder a las declaraciones solicitadas por mí representada en su parte resolutiva deja de reconocer claras disposiciones legales, que regula la materia, que, de ser aplicadas, hubieran influido en lo dispositivo del fallo, ya que se hubiera tenido que reconocer los gastos incurridos por mí representada en atención a alimentos, gastos, salud, gastos funerarios, etc. en beneficio de LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.), que fueron dados por las personas obligadas para ello.
>
> TERCERO. El Tribunal "AD QUEN" (sic), en la sentencia, objeto de esta censura, al señalar que los actos de guardadora, como lo denomina la actora y los gastos que con este fin incurrieron ésta a favor de la causante, son "actos de mera liberalidad que a nuestro

modo de ver no se pueden repetir en contra de la demandada SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.), o de sus herederos", incurre en violación directa cuando deja de aplicar claras disposiciones legales relativas al caso pertinente que lo hubieran llevado a reconocer en la sentencia el derecho que tiene mi representada, cosa que no hizo.

CUARTO. En la sentencia recurrida, el Primer Tribunal Superior, pretende sustentar su posición en el hecho, según ellos, que nuestra representada no tiene derecho a reclamar los alimentos, gastos funerarios, y los usos de la localidad que dio a la causante LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.), porque esta no estaba obligada a hacerlo, sin considerar claras disposiciones legales que existen sobre este punto, violando de manera directa por omisión tales normas lo que ha influido dispositivamente en el fallo, y que necesariamente debieran ser tomadas en cuenta, cosa que no se hizo.

QUINTO. Que en efecto, al proferir la sentencia impugnada, el Tribunal de Grado, desconoció el derecho que tiene cualquier persona en especial mi representado de reclamar y que le sean pagados los gastos que incurran en los cuidados, atención y demás que se le presten o den a determinada persona tal como lo señala nuestro ordenamiento jurídico.

SEXTO. El Tribunal de Segunda Instancia en la sentencia impugnada viola claras disposiciones legales, desde el momento omite reconocer los gastos incurridos por mi representada que están acreditados en el Proceso y así lo acepta AD QUEN (sic), pero señala que no pueden repetirse en contra de la demandada LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO (Q.E.P.D.), o de sus herederos por ser un acto de mera liberalidad lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo desde el momento que cualquier extraño que no estando obligado a ello los diese tendrá derecho a reclamarlo de aquél que estaba obligado a darlo y no los dio." (Fs.308-309)

La disposición vulnerada es el artículo 1636 del Código civil.

POSICIÓN DE LA SALA

Según se desprende de los antecedentes, la norma que se estima violada por la sentencia recurrida es la disposición contenida en el artículo 1636 del Código Civil. Dicha disposición forma parte de la gestión de negocios ajenos, y es una modalidad especial de ella. Hay gestión de negocios ajenos cuando una persona se encarga de un asunto de otro, el interés de éste, pero sin obligación de hacerlo y sin que el interesado se oponga o le haya dado poder para ello.

La posición discrepante del recurrente con la sentencia estriba en que ésta, luego de analizar dogmáticamente la institución del enriquecimiento sin causa, llegó a la conclusión de que, en la presente encuesta, no existía enriquecimiento sin causa, por cuanto se había realizado la gestión como un acto de mera liberalidad, en tanto que el recurrente estima que se está, en este proceso, ante una gestión de negocios especial, cual es el pago de alimentos por una persona que no estaba obligada a sufragarlos.

El artículo 1636 no se aplica cuando existe también el acto de liberalidad, bajo la fórmula de "por oficio de piedad", como reconoce que actuó la propia demandante, lo que le atribuye su actuación "como un gesto humanitario", por lo que se encuentra en la posición de excepción que el propio artículo 1636 establece como excepción para que no se produzca el pago por la gestión de negocios realizada.

La modalidad especial que regula el artículo 1636 es para el caso de que, un tercero que no tiene la obligación de brindarlos, corra con los gastos en concepto de alimentos a una tercera persona. Es obvio, en primer lugar, que los

gastos realizados por la demandante excedía el marco de los alimentos, conforme lo tiene previsto el artículo 377 del Código de la Familia, pues, además de la alimentación y hospedaje, realizaba servicios, incluso en vida de la causante, en concepto de consultora, administradora y asesora de bienes, guardadora en vida en beneficio de la señora Isabel Sanpedro, y gastos que coinciden con la lista de alimentos que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico, relacionados por alimentos y medicamentos, éstos últimos que serían los únicos que resultan cubiertos por el concepto de alimentos y no los de gestoría y administración. El artículo 377 del Código de la Familia señala como alimentos, entre otros que no tienen relevancia con la gestión que realizaba la demandante, en el suministro de sustancias nutritivas o comestibles, de atención médica y de medicamentos, así como las necesidades de vestido y habitación. En parecidos términos enumera los alimentos el artículo 233 del Código civil. Es evidente, por lo tanto, que no nos encontramos bajo el supuesto de hecho que postula el artículo 1636, sino, por el contrario, los gastos se asemejan más a la gestión de negocios general, y no al caso especial que regula la norma del Código Civil que se deja citada.

La sentencia recurrida encuentra que tiene más cabida en el enriquecimiento sin causa y hace una extensa exposición dogmática de dicha figura, que últimamente ha sido objeto de regulación legal en el Código Civil, como consecuencia de la redacción que le introdujo a los artículos 1643 a, 1643 b y 1643 c, por la ley 18, de 31 de julio de 1992.

Es sabido que para que se produzca el enriquecimiento injusto es necesario que ocurra un desplazamiento patrimonial que tenga como efecto el enriquecimiento de una persona y el correlativo empobrecimiento de otra, sin que tales desplazamientos patrimoniales tengan un fundamento, una causa. Es, además, requisito indispensable, el carácter residual del enriquecimiento sin causa, como señala con toda claridad el artículo 1643 b), siendo así que tenía a su alcance otros recursos, que utilizó, sin haber alegado en manera alguna la existencia de enriquecimiento sin causa. Es evidente, por lo expuesto, que no cabía un pronunciamiento sobre enriquecimiento injusto, dado el carácter residual de este último. Además, aún existiendo dicha institución de derecho privado, era evidente que se tenía que acreditar, por la parte demandada, que nos encontramos ante la estructura de la figura, que ya ha sido expuesta, y que, además, no existía un remedio procesal en el ordenamiento jurídico, para recabar la tutela jurisdiccional, lo cual no se ha acreditado.

En la gestión de negocios ajenos en general, no es estrictamente necesario que exista un desplazamiento patrimonial a cargo del gestor, porque la esencia de la institución consiste, en la generalidad de los casos, de una actividad jurídica o material, pero existe siempre un desplazamiento patrimonial en el caso especial que regula el artículo 1636 del Código Civil, en que se tiende a una acción de reembolso por las sumas entregadas por el tercero en concepto de alimentos, en la forma de una obligación que no tenía el gestor, y que no tenía el consentimiento del beneficiado con ella. Es evidente que ha habido violación de tal disposición del Código civil, al no haber tomado en cuenta que no existía prueba, a cargo de la demandada, que los pagos que realizó la demandante no eran por oficio de piedad, para exonerarse de la obligación a su cargo, cuya carga probatoria le correspondía.

Es evidente que la demandante realizó gastos, que comprobó, y que ascienden a la suma de TRECE MIL CIENTO OCHO BALBOAS CON CATORCE CENTÉSIMOS (B/.13.108.14), en concepto de gastos médicos y otros rubros que integran el derecho a alimentos que debían suministrar los deudos, y que, en su ausencia, fueron suministrados por la demandante, que cabría ordenar su pago, como lo hace la sentencia de primera instancia. Es evidente que dicha obligación de resarcimiento no tiene cabida cuando ha intervenido oficio de piedad o, de manera general, con un afán de liberalidad. Esta circunstancia, a juicio de la Sala, no se pudo acreditar, cuando su carga le correspondía a la parte demandada, por lo que tiene que sufrir las consecuencias de su omisión.

Es de destacar, en resumen, que ha de confirmarse la sentencia de primer

grado, previa revocatoria de la sentencia recurrida en casación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CASA la sentencia de nueve (9) de noviembre de 1999, recurrida en casación por el licenciado EDWIN MEDINA, en representación de MARIA LUISA BRAVO ZÚÑIGA, en el proceso ordinario que le sigue a sucesión testada y/o intestada de LUISA SÁNCHEZ SAMPEDRO y los herederos declarados, y, en consecuencia, CONFIRMA la sentencia N° 28, de 20 de mayo de 1998, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifiquese y Devuelvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUANINO MOJICA HERNÁNDEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE LEONIDAS CAMPOS NAVARRO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado PRIMITIVO VEGA RÍOS, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de segunda instancia de 17 de julio de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé-Veraguas), dentro del juicio de oposición que ha instaurado LEONIDAS CAMPOS NAVARRO contra JUANINO MOJICA HERNÁNDEZ.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, sin ser aprovechado por ninguno, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución, conforme a su naturaleza se enmarca dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

El recurso de casación es en el fondo. El recurrente invocó una única causal en la forma, la cual es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, causal que influyó de manera sustancial en la parte dispositiva de la sentencia contra la cual se recurre."

Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

Al entrar al análisis de los seis motivos que sirven de fundamento a la causal esgrimida, la Sala observa que dentro de los tres primeros, el recurrente se limita a señalar una serie de pruebas documentales y testimoniales, sin aclarar cuáles son dichas pruebas, en qué fojas se encuentran y cómo pudieron influir en la decisión atacada, aunado a que en conjunto, los mismos no concretan cargos de injuricidad contra la sentencia, más bien se realizan recuentos del proceso y alegaciones impropias del formal recurso de casación.

Con respecto a la citación de las normas infringidas y la explicación de cómo lo han sido, esta Superioridad considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la Ley.

Aprecia la Sala que en el presente recurso extraordinario de casación se dan los presupuestos del artículo 1167 del Código Judicial para declarar inadmisible esta causal por ininteligible.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el licenciado PRIMITIVO VEGA RÍOS, apoderado judicial de JUANINO MOJICA HERNÁNDEZ.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN DE DIOS MARTÍNEZ, JESÚS VILLAMIL, ERNESTO COLLINS CAJAR Y JUAN STEWART RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A LA PIQUERA DE TAXI CALIDONIA, S. A., BAUDILIO ZAMBRANO, ISRAEL BATISTA Y EDGARDO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ, apoderado judicial de JUAN DE DIOS MARTÍNEZ, JESÚS VILLAMIL, ERNESTO COLLINS CAJAR Y JUAN STEWART, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 3 de agosto de 2000 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario propuesto contra la PIQUERA DE TAXI CALIDONIA, S. A., BAUDILIO ZAMBRANO, ISRAEL BATISTA y EDGARDO RODRÍGUEZ.

Habiéndose repartido el negocio, se mandó a fijar en lista por el término de seis días para que, dentro de los tres primeros, la parte intimada alegase respecto de la admisibilidad; y, dentro de los tres días siguientes, el recurrente replicase. Al vencimiento del término, sólo la parte opositora al recurso de casación hizo uso del mismo.

Corresponde, entonces a esta Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Se constata que tanto la resolución recurrida como la cuantía son las que admite la ley y que el recurso se interpuso en tiempo, por lo que procede, ahora, el examen del escrito contentivo del recurso para verificar si el mismo se ajusta a los requisitos ordenados por la ley.

No encuentra ocioso la Sala advertir que este recurso extraordinario, debe estar revestido de unas formalidades técnicas para que puedan ilustrar al juzgador la naturaleza de los yerros que se le imputan a la sentencia de segundo grado, sean éstos yerros del tribunal en cuanto a la tramitación procesal del proceso instaurado, sea error de juicio al decidir las pretensiones. De allí que se requiera, en primer lugar, que la enunciación de la causal se atenga, lo más

posible, a la formulación legal que, dentro del recurso, viene consignada. En segundo lugar, los motivos deben consistir en supuestos fácticos que sustenten la causal invocada, es decir, deben consistir en cargos a la sentencia que sean congruentes con la causal invocada, y, en tercer lugar, con la debida separación, debe señalar las disposiciones legales que se estiman violadas por el recurrente y, además, dentro de lo último, el concepto de la infracción, que debe basarse en una construcción lógico-jurídica de las razones por las cuales se estima que se ha violado la disposición legal que se invoca como soporte a la causal esgrimida. Si los motivos invocados no guardan congruencia con la causal invocada o si las disposiciones que se estiman infringidas no guardan relación con la causal o si, guardándola, contienen en la formulación del concepto de la infracción consideraciones ajenas a una concreta explicación lógico jurídica de la misma, el recurso extraordinario no debe prosperar, debe ser inadmitido, salvo que los errores en la técnica de formulación del recurso no lo hagan ininteligible, en cuyo caso, procede su corrección.

Primeramente esta Superioridad señala que existe un defecto en el libelo de recurso de casación al indicar que la sentencia de segunda instancia que se recurre es la de 30 de agosto del año 2000, cuando debió señalar es la de 3 de agosto de 2000 (veáse foja 520).

Como única causal de forma se invoca: "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque dejó de resolver el punto relativo a la obligación tanto de BAUDILIO ZAMBRANO, ISRAEL BATISTA y EDGARDO RODRÍGUEZ, directivos; de rendir cuenta de los dineros depositados por mis mandantes, desde que asumieron la directiva de la Asociación en formación, PIQUERA DE TAXI CALIDONIA, así como sobre el pago de los daños y perjuicios ocasionados con sus acciones."

Frente a la causal alegada por el recurrente, la Sala considera que la misma está mal enunciada, ya que simplemente debe invocarse solo la causal, y no expresar toda la pretensión que señala el accionante, la cual debe dejarse para los motivos.

En cuanto a los motivos expuestos, la Sala observa que en el primero se hace un cargo de injuridicidad contra la sentencia de primera instancia, la cual no es susceptible de ser revisado mediante el recurso extraordinario de casación.

Asimismo, la Sala observa que los motivos segundo y tercero no se hace ningún cargo de injuricidad contra la resolución impugnada, además de hacerse apreciaciones subjetivas; todo lo cual resulta contradictorio y apartado de la técnica del recurso de casación.

Con respecto a la citación y explicación de las normas de derecho infringidas, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos exigidos por la ley.

Como causal de fondo se invoca infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de: 1. violación directa, lo que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida; y 2. Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo que ha influido en lo dispositivo del fallo de la resolución recurrida.

En cuanto a los motivos expuestos, la Sala observa que han sido expresados con claridad y son congruentes con la misma, y las normas de derecho que se consideran infringidas y la explicación de cómo lo han sido, resultan adecuadas en su aspecto formal.

La segunda causal invocada es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo que ha influido en lo dispositivo del fallo de la resolución recurrida". Dicha causal se enuncia conforme lo dispuesto en el artículo 1154 del Código Judicial. Los motivos que sustenta la causal son cuatro, los cuales han sido expuestos en forma de cargo de injuricidad contra la sentencia que se impugna y en consecuencia con la causal que se invoca,

señalándose las mismas; además se cita y explica de forma adecuada la disposición infringida, por lo que considera la Sala, debe admitirse la causal examinada.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la causal de forma, y ADMITE la primera y segunda causal de fondo del recurso de casación presentado por el Licenciado RAFAEL E. COLLINS NÚÑEZ contra la Sentencia de 3 de agosto de 2000, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROBERTO MOCK SAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE INDIRA TALVERA LE SIGUE A IRINEO ASPRILLA AVILA Y ROBERTO MOCK SAM MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada JULISSA ROBLES en nombre y representación de ROBERTO MOCK SAM, recurre en casación contra la sentencia de 16 de marzo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario que INDIRA TALAVERA le sigue a IRINEO ASPRILLA AVILA y ROBERTO MOCK SAM.

Luego se fijó el negocio en lista por el término de seis (6) días para que dentro de los tres (3) primeros la parte opositora al recurso presentara su respectivo escrito con respecto a la admisibilidad; y dentro de los tres (3) días siguientes el recurrente replicara. Dicho término sólo fue aprovechado por la parte opositora, tal como se aprecia de fojas 492 a 498.

Cumplidos los trámites correspondientes a esta clase de recurso, pasa esta Sala a pronunciarse con respecto a la admisibilidad del mismo, tomando en consideración los requisitos contemplados en los artículos 1165 y 1160 del Código de Procedimiento Civil.

El casacionista presenta una única causal, la cual es: Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual ha influído de modo sustancial en lo dispositivo del fallo.

En cuanto a los dos primeros motivos hacen referencia a errores in procedendo y no in iudicando, por los que debieron utilizarse las causales de forma idónea, señaladas en el artículo 1155 del Código Judicial. Los dos motivos, son pues, incompatibles con la causal esgrimida.

En el tercer motivo, se limita a exponer situaciones fácticas sin establecer la razón por la cual censura la sentencia recurrida; no obstante que esta Sala ha determinado que esta circunstancia no es suficiente para declarar el recurso inadmisible, si del contexto general de los motivos, o de uno de ellos individualizados, se desprende el cargo a la sentencia. El cargo es, pues, en casación, la réplica, la objeción o la censura, o en conjunto de réplicas, objeciones, censuras o ataques que el recurente hace al juicio del fallador de instancia, con miras a que la Corte Suprema le restaure el derecho presuntamente quebrantado por la sentencia que impugna.

En cuanto a los demás motivos, debe recordar el casacionista que en esta

causal debe indicar, de manera expresa e individualizada, la prueba que ha sido erradamente valorada y que efecto ha tenido dicha valoración en la sentencia recurrida. Además, sólo con respecto al séptimo motivo, el recurrente realiza transcripción, cuestión que no es propia realizar en esta fase del presente recurso extraordinario.

Con relación a las normas de derecho infringidas, observamos que, en la explicación del artículo 883 del Código Judicial se ha realizado pequeñas transcripciones no propias de este recurso debiendo concretarse a explicar la infracción de la norma que se presume violada.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN de la única causal del presente recurso de casación en el fondo, interpuesto por ROBERTO MOCK SAM, contra la sentencia de 16 de MARZO de 2000 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, para lo cual concede el término de cinco (5) días, tal como lo señala el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EMMA PORCELL DE TEJEIRA RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A JAVIER TEJEIRA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMA, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala se adentrará en el análisis del recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la señora EMMA PORCELL DE TEJEIRA contra la sentencia dictada el 28 de enero de 2000 en el proceso de divorcio que le sigue al señor JAVIER TEJEIRA MUÑOZ, luego de la admisión de las dos causales de fondo invocadas y una vez cumplidos todos los trámites previstos por la ley, incluyendo, entre ellos, la necesaria intervención del Ministerio Público. El recurso se considerará atendiendo al orden en que fueron invocadas las causales, no sin antes advertir que, conforme a lo normado por el artículo 756 del Código de la Familia y los artículos 1148-49 del Código Judicial, el tema sometido a debate (pensión alimenticia) no es susceptible del recurso de casación; pero, como quiera que el recurso fue admitido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1169 del Código de Procedimiento, se entrará a conocer de su fondo.

PRIMERA CAUSAL.

El recurrente invoca la de infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La injuricidad expresada en los tres motivos de esta causal se centra en que, a pesar de que la sentencia decreta la disolución del vínculo matrimonial basándose en el trato cruel psíquico infringido por el señor Tejeira a su cónyuge, al fijarse el monto de la pensión alimenticia que el culpable debe suministrarle a su esposa, lo hizo tomando en consideración las necesidades mínimas, desconociendo, de esa manera, que la pensión debió calcularse de modo que el cónyuge inocente conservase la posición social ostentada durante el matrimonio . Conforme lo interpreta la recurrente, esa decisión fue adoptada por

al Tribunal Superior incurriendo en violación directa del artículo 223 del Código de la Familia, disposición que consagra el derecho de la esposa, favorecida mediante la sentencia dictada, a conservar el estatus social que en la norma le garantiza. Reitera la recurrente que el yerro de injuricidad consiste en que el monto de la pensión que debe cubrir la parte demandada y vencida en este juicio de divorcio fue fijado por el tribunal en B/1,000.00 mensuales, desconociendo que su cálculo, como está previsto por la norma, debió hacerse en atención a que la beneficiaria conservase la posición social que tenía durante el matrimonio y no en base a las necesidades mínimas de la alimentada.

A fin de quedar en condiciones de establecer si, en efecto, la sentencia atacada incurrió en el desconocimiento del artículo 223 del Código de la Familia, cuya inaplicación se denuncia, se impone la necesidad de apreciar su contenido en ese aspecto.

En la sentencia el tribunal señaló en ese sentido:

> "... consideramos que debe garantizarse a la señora PORCEL la efectividad de la pensión alimenticia que debe consignar el señor JAIME TEJEIRA; por lo que debe establecerse una suma acorde a sus necesidades".

Se agregó a continuación que para fijar esa pensión se tomaría en cuenta el estatus social del actual matrimonio de la señora PORCELL, o sea, el vínculo que la une a TEJEIRA y no al estatus que pudiese derivarse de un matrimonio anterior registrado en la vida de la actora. Más adelante el tribunal concluye que la suma de B/1,000.00 es razonable para cubrir las necesidades de la señora PORCELL.

De lo que se deja expresado la Sala deduce que es imposible endilgarle al fallo la violación directa del artículo 223 del Código de la Familia. La violación directa de una disposición legal se produce cuando entendida claramente una norma, sin haber sido objeto de análisis interpretativo, deja de ser aplicada al caso pertinente, o cuando se aplique desconociendo un derecho en ella consagrado. En este caso no puede afirmarse que el Tribunal Superior hubiese dejado de aplicar la norma o que esta haya sido aplicada desconociendo el derecho que en la misma se consagra. El tribunal fijó la pensión a favor del cónyuge inocente en la suma que, en su opinión, se compadecía con el derecho reconocido en favor de la demandante. Si la cuantía de la pensión fijada por el tribunal no es suficiente para que la demandante pueda conservar el estatus social mantenido durante el matrimonio, no es esta una materia solventable a través de la causal de violación directa, pues lo que en el fondo se plantea es una cuestión de hecho: cuál era la posición o estatus social que la señora PORCELL DE TEJEIRA mantuvo durante el matrimonio, con derecho a conservar luego de extinguirse el vínculo matrimonial?.

Para la Sala es claro que ese punto sólo puede dilucidarse mediante las pruebas incorporadas al proceso, por lo cual se ve en la necesidad de rechazar la pretensión contenida en la primera causal invocada por la recurrente.

SEGUNDA CAUSAL.

Se invocó la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En el apartado correspondiente a los motivos se señalan las pruebas no tomadas en cuenta por la sentencia, cuya ignorancia ha sido responsable de que el fallo hubiese incurrido en la violación de los artículos 769 del Código Judicial (sobre los medios de prueba en general), y del artículo 7, ordinal g) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, cuyo propósito es resarcir y reconocer reparación de los daños a la mujer que haya sido objeto de violencia.

Entrará el Tribunal de Casación a examinar una por una las pruebas que la censura denuncia como ignoradas por el Tribunal Superior, a fin de determinar si de su contenido, individual o conjuntamente considerado, es deducible que la fijación de la pensión alimenticia en la suma de B/1,000.00 le ha desconocido a la señora PORCELL DE TEJEIRA los derechos que se estiman vulnerados.

La primera prueba aducida es la declaración jurada rendida por el señor JAVIER TEJEIRA, calificada por la recurrente como confesión. Como bien lo expresa en su vista el señor Procurador General de la Nación, de dicha declaración sólo se percibe que el declarante manifestó que su esposa utilizaba varios vehículos que le fueron asignados por varias de las compañías en donde laboraba, pero ni esa manifestación, ni tampoco lo declarado por TEJEIRA en relación con la decoración de un apartamento en la ciudad de Panamá y de una residencia en Penonomé, acreditan la posición social ostentada por la demandante o que la cantidad de B/1,000.00 mensuales de pensión sea inferior a lo que se considera como justo en materia de reparación en favor del cónyuge inocente.

El testimonio de la doméstica AMINTA VENERANDA BERNAL, en relación con la existencia de tres carros y de varios teléfonos en la residencia de los cónyuges, no arroja luces para acreditar de una manera categórica el extremo que era incumbencia de la demandante demostrar, o sea, el referido al estatus social de la señora PORCELL y cuál es la cantidad de dinero de la que debe disponer para conservarlo.

Del contenido de la declaración de la señora EMMA PORCELL, parte actora de este juicio, prueba que se aduce como no tomada en cuenta, no es dable deducir el hecho a demostrarse para que sirva de base a la fijación de una pensión alimenticia mayor de B/1,000.00 reclamada por la demandante. Téngase presente que los viajes que, según declara EMMA PORCELL, fueron pagados por su esposo a los hijos de ella pertenecientes a su primer matrimonio, bien pueden ser entendidos como actos de mera liberalidad, sin que esa decisión tenga porqué ser considerada como parte de una obligación contraída por el esposo para con su cónyuge, pues esas personas, mayores de edad, no pueden considerarse como integrantes de los compromisos y responsabilidades conyugales del señor TEJEIRA. Presumir que los gastos de esa naturaleza, al igual que el correspondiente al supuesto viaje que le pagara TEJEIRA a su esposa para visitar a un hermano enfermo en el extranjero, puedan servir para establecer el monto de una pensión alimenticia o de una reparación económica carece de fundamento, puesto que es imposible, con base a esos sucesos, determinar la cifra o cantidad, aún cuando sea aproximada, a que debe ascender la pensión y la compensación que se están demandando.

Según la recurrente, no haber tomado en cuenta el testimonio de EMITA SUAZO PORCELL (hija de la señora PORCELL) constituyó un yerro jurídico de la sentencia. Ninguna explicación ofrece la casacionista acerca de las razones que tiene para formular esa afirmación. Se limita a señalar que la joven manifestó que el señor TEJEIRA les había dado un auto nuevo y que luego les fue retirado. De ese testimonio no está permitido deducir que la pensión a fijarse tenga que establecerse en la suma de B/2,500.00 solicitada por la demandante, por lo que tampoco es una prueba cuya falta de valoración pudo haber influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución atacada.

Examinados los documentos que se aducen como no valorados por la sentencia, entre los que se mencionan las certificaciones del Registro Público sobre las sociedades TESKO, S. A., MOLINO SANTA ISABEL, S. A., COCLE AGRICOLA, S. A. INVERSIONES JATEN, S. A., HILJATI, S. A. e INVERSIONES SILO, S. A., cabe anotar, como se advierte en la Vista Fiscal, que esos documentos no fueron admitidos como prueba por el juez de la causa, por razones de inconducencia y por ser ineficaces, razón por la cual carecen de valor probatorio. La Sala comparte ese criterio. En efecto, tales pruebas, acerca de la existencia de sociedades anónimas y de sus propiedades, ninguna luz arrojan sobre la posición social del matrimonio o la reparación demandada, aparte de que, si el Tribunal Superior hubiese entrado a valorarlas, habría incurrido en un error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, como atinadamente lo advierte el Jefe del Ministerio

Público en su dictamen.

Por último, la documentación emanada de la Dirección Nacional de Migración, también indicada por la recurrente como no tomada en cuenta, se refiere a viajes efectuados al extranjero que realizó el señor JAVIER TEJEIRA entre los años 1994 y 1997, algo que en nada ayuda a acreditar el estatus social de la pareja, como lo apunta en su Vista Fiscal el Ministerio Público.

Considera la Sala que las pruebas no tomadas en cuenta según la censura, no poseen la virtualidad de influir en la decisión que adoptó el Tribunal Superior en la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia dictada el 28 de enero de 2000 en el proceso de divorcio que EMMA PORCELL le sigue al señor JAVIER TEJEIRA MUÑOZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario de la Sala Civil Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE ALBA ESTER CEBALLOS ROMERO, A FAVOR DEL MENOR HENRY ANTONIO CEBALLOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ABDIEL GONZÁLEZ ACOSTA, apoderado judicial de PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA, interpuso recurso de casación contra la Resolución N°5-F.-R. del 10 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia, dentro del proceso de filiación que le sigue ALBA ESTER CEBALLOS ROMERO, a favor del menor HENRY ANTONIO CEBALLOS.

En vista de que mediante resolución de 25 de agosto de 2000, esta Sala declaró admisible la causal única en el fondo del recurso de casación propuesto por PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA, mediante apoderado judicial, así como por concluirse el término de alegatos que fue aprovechado por el demandado, la opositora y el representante del Ministerio Público, se procede a decidir los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.

Se trata de un proceso de filiación interpuesto ante el Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá, en la actualidad de la Niñez y la Adolescencia, dentro del cual se dictó la Resolución N°311-99-S.F., de 12 de octubre de 1999, que dispuso acceder a la solicitud de la señora ALBA ESTER CEBALLOS ROMERO en reconocer judicialmente como padre del menor HENRY ANTONIO CEBALLOS, al señor PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA, al quedar establecido el vínculo paterno-filial. También ordenó remitir copia autenticada de la citada resolución N°311-99-S.F. a la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral, para que se realice la anotación correspondiente en la marginal de la partida de nacimiento del menor Henry Antonio Ceballos (véase fojas 50-54).

Esa decisión fue apelada por el demandado, por lo que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante Resolución N°5-F.-R. de 10 de mayo de 2000, la cual es impugnada en casación, confirmó la sentencia apelada en todas sus partes (véase fojas 109-118).

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso de casación es en el fondo, en el que fue admitida la única causal, consistente en infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, la cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Dicha causal fue sustentada en tres motivos, que a continuación se transcriben:

> "PRIMERO: El Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia dispone confirmar el fallo de primera instancia por el cual se declara que PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA es el padre biológico del menor HENRY ANTONIO CEBALLOS, confiriendo valor probatorio a las declaraciones de los testigos NURIA VICTORIA COLLINS SÁNCHEZ y DAYSI DAMARIS RYCE DIEZ que figuran de folios 14 al 17 del expediente, inclusive. La Señora COLLINS SÁNCHEZ testifica que la demandante y quien fuera su compañera de trabajo tenía una residencia en Nombre de Dios a la cual concurría y pernoctaba entre los años de 1981 a 1983 el Señor PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA; a su vez, la testigo DAYSI DAMARIS RYCE DIEZ, quien trabajaba con la señora CEBALLOS ROMERO, manifiesta tener conocimiento de este hecho por oído de la misma, aclarando que conoció al Señor JENKINS GÓNDOLA en 1985, pero el Tribunal de Segunda instancia inadvierte estos hechos, valorando indebidamente los testimonios en referencia, otorgándoles validez probatoria.
>
> SEGUNDO: Respecto a los testimonios referidos se deduce que las declarantes no tenían relación directa alguna con la demandante cuando ocurre el nacimiento del menor HENRY ANTONIO CEBALLOS; lo cual omite la resolución acusada al valorar indebidamente el supuesto conocimiento de estas personas respecto a la pretendida paternidad.
>
> TERCERO: Al valorarse indebidamente los testimonios referidos se desvirtúa toda particularidad determinante en cuanto a la verificación de la fecha en que fue concebido y se produce el nacimiento del menor, decretándose en forma equívoca que JENKINS GÓNDOLA es el padre biológico del menor."

Advierte la Sala que los cargos de injuridicidad contenidos en los motivos consisten en valorarse indebidamente las declaraciones de las testigos Nuria Victoria Collins Sánchez y Daysi Damaris Ryce Diez, ya que los testimonios vertidos por éstas desvirtúa toda particularidad determinante en cuanto a la verificación de la fecha en que fue concebido y se produce el nacimiento del menor Henry Antonio Ceballos.

En otro sentido, el impugnante expuso como disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo fueron, los artículos 904 y 906 del Código Judicial, y el artículo 272 del Código de la Familia.

El señor Procurador General de la Nación señaló en su Vista N°20, de 18 de octubre de 2000 (fs.149-156), que el recurrente no ha probado ni la infracción a la norma ni el concepto en que lo ha sido, como tampoco ha podido determinar en qué grado dichos testimonios fueron determinantes o no en la parte dispositiva de la sentencia, sino todo lo contrario, según continúa expresando el señor Procurador General de la Nación al emitir su concepto referente al presente caso, en el sentido de que el recurrente alega que el Tribunal ha inobservado el artículo 906 del Código Judicial, bajo la premisa falsa de que, por el hecho de que las testigos Collins y Ryce fueron compañeras de trabajo de la señora ALBA, pretende dar a entender, sin decirlo, que estos testimonios son parcializados, sin tratar de demostrar que estos fueron no determinantes para la parte dispositiva de la sentencia.

Finalmente, el titular del Ministerio Público expresó que el recurrente, al analizar el artículo 272 del Código de Familia, como parte del concepto de la violación, alega la supuesta "indebida aplicación de la norma sustantiva", contenida en dicho artículo, por lo cual debe desestimarse, por cuanto que, no habiéndose demostrado la infracción de las normas procesales invocadas, que son normas adjetivas, no procede invocar la violación de normas sustantivas, como en el presente caso no ha sido probado el "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", sin lo cual no procede analizar el fondo de la supuesta violación de la norma sustantiva, recomendando a esta Sala NO CASAR la sentencia N°5-F.-R. de 10 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de la Niñez y Adolescencia.

CRITERIO DE LA SALA

Expuestos los elementos primordiales del presente recurso, se avoca la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes consideraciones.

Considera el casacionista que la resolución acusada ha inobservado, previo al fallo, el análisis de las constancias probatorias en que se apoyan y fundamentan las decisiones judiciales, sujetas a las reglas de la sana crítica, por el hecho de que los testimonios referidos no son coincidentes sobre asuntos determinantes para su auténtica apreciación, es decir, los testigos no aportan suficiente elemento convincente para legitimar sus correspondientes dichos a efectos de demostrar conocimiento puro y honesto sobre la paternidad motivada por la parte actora.

Por otro lado, la casacionista señala que el tribunal de segunda instancia al imprimirle validez dentro de la sentencia acusada a las exposiciones de Nuria Victoria Collins Sánchez y de Daysi Damaris Ryce Diez, sin tomar en consideración la vinculación que estas personas tienen con la señora Alba Esther Ceballos Romero, por el hecho de ser compañeras de trabajo, incurre en evidente valoración errada de las mismas, que debieron ser calibradas en concordancia con el debido razonamiento y análisis del juzgador, como obligatoriedad procesal del tribunal, que no estimó, el notorio grado de acercamiento personal entre la demandante y las testigos, que con sus exposiciones originan duda que compromete la imparcialidad requerida al imprimirles consiguiente valor de ley.

Es importante manifestar que en esta clase de procesos (filiación) es difícil determinar con exactitud, mediante los medios probatorios comunes, la relación íntima de las partes en la que se demuestre la época de la concepción del menor. Sin embargo, los testimonios de Nuria Victoria Collins Sánchez y Daysi Damaris Ryce Diez, hacen el señalamiento de que Presbítero Jenkins Góndola es el padre del hijo de la demandante, toda vez que tenían conocimiento de la relación de la señora Alba Ceballos con el señor Presbítero Jenkins Góndola a la fecha en que la demandante quedó embarazada.

De lo anterior, la Sala advierte que aunque las testigos aportadas por la parte demandante, Nuria Collins Sánchez y Daysi Damaris Ryce, tienen un notorio grado de acercamiento personal con la demandante Alba Ceballos, se debe considerar sus testimonios como válidos, cuando expresa Nuria Victoria Collins Sánchez, bajo gravedad de juramento, (véase fojas 14 y 15), lo siguiente: "Lo llegué a conocer porque sabía que tenía relaciones con la compañera y muchas veces lo vi frecuentando fines de semana que venía a visitarla, desde ese año que trabajé en Nombre de Dios 1981"; "El Sr. lo veía llegar en su yate, se quedaba los fines de semana, se quedaba hasta el día domingo en la casa de la sra. ALBA CEBALLOS salían y todo a pescar, a pasar un día familiar en el yate"; "también me di cuenta que él pagaba un apartamento en calle 10 y Bolívar donde residía con la compañera".

A fojas 17-18 del expediente, la testigo Daysi Damaris Ryce Diez, expresó: "ella se quedaba allá cuando el señor la iba a visitar, yo no estaba allá"; "Cuando ella venía a la ciudad de Panamá, ciudad capital, venía con el niño a la ciudad capital, yo la acompañaba a visitar al sr. JENKINS, venía a recoger el

dinero que él le iba a dar, ellos entraban y no sé que hacían allá dentro, en esas ocasiones fue que conocí al señor"; "Ella venía a Materiales JENKINS, queda en Parque Lefevre, por la calle que baja la once de octubre y entraba a la oficina del señor".

Observa la Sala, que aunado a los testimonios citados, existe la propia declaración del demandado a fojas 91-94, cuando señala el señor Presbítero Jenkins que tuvo relaciones sexuales con Alba Ester Ceballos Romero a comienzos de 1981.

Por otro lado, se encuentra a foja 43, la resolución de fecha 24 de septiembre de 1998, proferida por el Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá, en la que no se admite el recuso de apelación anunciado por el licenciado Abdiel González, en representación del señor Presbítero Jenkins Góndola, contra la resolución de 31 de julio de 1998 (fs.39), en la que se ordena fijar nueva fecha para la realización de una prueba hematológica, constituyéndose así esta conducta como un indicio desfavorable del demandado.

Es del criterio esta Superioridad, que no prospera la invocada violación de los artículos 904 y 906 del Código Judicial, así como del artículo 272 del Código de la Familia, que se refieren a la apreciación de las pruebas, específicamente las testimoniales, mediante las reglas de la sana crítica, pues, por lo ya expuesto está demostrado que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia valoró las pruebas conforme la lógica y la experiencia del Juez, toda vez que las declaraciones de las testigos presentadas por la parte demandante, es decir, NURIA VICTORIA COLLINS SÁNCHEZ y DAYSI DAMARIS RYCE DIEZ, la propia declaración del demandado, señor PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA, y las pruebas obrantes en el expediente, son pruebas concluyentes para considerar al señor JENKINS como padre del menor HENRY ANTONIO CEBALLOS.

También observa la Sala, que la demandante aportó al proceso de filiación una serie de documentos que acreditan la intención de realizarse un examen inmunogenético solicitado por ésta, como son los datos generales de la madre, con fotocopia de su cédula de identidad personal, generales del menor con foto reciente del rostro y huellas dactilares de la mano derecha; declaración jurada de la madre y certificado de nacimiento del menor Henry Antonio Ceballos. (fs.341 38 y 42), así como los recibos originales en que canceló al Laboratorio Clínico Del Castillo (fs.99 y 105), parte del valor del examen genético, sin que asistiera el demandado a practicarse los mismos, y así comprobar la paternidad del señor Presbítero Jenkins.

El proceso civil tiene, como uno de sus principios medulares el de la carga de la prueba, al punto que quien afirma algo, sin probarlo, no puede verse favorecido con una sentencia favorable a los intereses reclamados en juicio. Este principio viene recogido del artículo 773 del Código Judicial, que fue inspirado en el Código de Procedimiento Civil colombiano.

Con respecto a ello, el jurista colombiano, HERNANDO DAVIS ECHANDÍA, en su obra Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, página 163, expresa:

> "...a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal..."

La sentencia del a-quo, en virtud de los elementos aportados por la actora, resolvió que se había probado los hechos de la demanda, dando cumplimiento al onus probandi que manda el artículo 773 del Código Judicial.

Observa así la Sala, que la demandante aportó como pruebas documentales para probar la paternidad de Presbítero Jenkins Góndola, el certificado de nacimiento del menor Henry Antonio Ceballos, el cual se dio el día 22 de mayo de 1984 (fs.4), certificado de matrimonio de la señora Alba Ester Ceballos Romero

con el señor Arturo Archibold Castillo, el día 18 de abril de 1985 (fs. 103), certificado de matrimonio de la señora Alba Ester Ceballos Romero con el señor Luis Felipe Moreno Herrera, el día 11 de junio de 1976 (fs.104), fotografía del menor Henry Antonio Ceballos (fs.37), recibos originales que comprueban la intención de la demandante de practicarse un estudio inmunogenético, al igual que para el demandado Presbítero Jenkins Góndola, y como pruebas testimoniales, las declaraciones de Nuria Victoria Collins Sánchez y Daysi Damaris Ryce Diez, quienes expresan que conocían las relaciones sentimentales de los protagonistas, producto de la cual nace el menor Henry Antonio Ceballos, y se acredita en el expediente específicamente la propia declaración del señor Presbítero Jenkins Góndola cuando expresa que mantuvo relaciones sexuales con la señora Alba Ester Ceballos. (fs.91-94).

Todas estas pruebas aportadas por la solicitante de la paternidad en el proceso son fehacientes, dándose los elementos probatorios que la misma requiere, por lo que obran en autos las pruebas que complementan tales hechos y que le permiten al tribunal complacer lo pretendido por la parte demandante, cumpliéndose así las reglas de la sana crítica y la convicción del Juez, por lo que la Sala observa que no se han violado las normas invocadas por la recurrente, lo que justifica no casar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución N°5 F.- R., de 10 de mayo de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, dentro del proceso de filiación propuesto por ALBA ESTER CEBALLOS ROMERO contra PRESBÍTERO JENKINS GÓNDOLA.

Notifiquese y Devuelvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HORACIO MARQUEZ NUÑEZ RECURRE EN CASACION EN LA EXCEPCION DE PAGO PARCIAL QUE PROPONE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA (PANAMA), S. A. CONTRA HORACIO MARQUEZ NUÑEZ, ERICK OMAR VILLARREAL Y MAGDALENA VILLARREAL DE MARQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado TOMAS VEGA CADENA, en nombre y representación del señor HORACIO MARQUEZ ha interpuesto recurso de casación en el fondo, contra la resolución de 29 de mayo de 2000 expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en la excepción de pago parcial presentada el recurrente, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que a la parte casacionista le sigue FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S. A. (FERTICA).

Del recurso se cumplió la fase de admisibilidad, quedando únicamente admitida la causal de fondo invocada por la parte recurrente. Vencido el término anterior, procede la Sala a decidir el recurso, previo a lo cual se dejan expuesto los antecedentes fácticos del mismo.

ANTECEDENTES

La presente causa se inicia con la interposición del proceso ejecutivo hipotecario por parte de FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S. A. (FERTICA), contra el recurrente, HORACIO MARQUEZ, por incumplimiento del contrato de compra venta

celebrado entre la demandante, en calidad de vendedora y el demandado, como comprador, por valor de TREINTA MIL BALBOAS (B/.30,000.00), según consta en la Escritura Pública N° 516, de 26 de julio de 1996.

Al ser notificado de la demanda instaurada en su contra, la cual quedó radicada en el Juzgado Primero del Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, el demandado contestó excepcionando pago parcial de la obligación. A la excepción planteada se le dió el trámite correspondiente, poniéndosele en estado de decidir. Mediante resolución de 24 de septiembre de 1999 negó el a-quo la excepción de pago presentada por la demandante, razón por lo cual dicha resolución fue recurrida en apelación por la parte demandada.

Correspondió al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial conocer del recurso vertical propuesto contra la resolución de primera instancia por el demandado. El 29 de mayo de 2000, profirió el ad-quem la decisión, en la cual se confirma la decisión recurrida.

La resolución anterior es la que es objeto del recurso de casación que, a continuación se decide.

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

Como se dijo, el recurso de casación examinado, se propone en el fondo y se invoca la causal, "infracción de normas sustantivas de derecho, por la interpretación errónea de la norma de derecho".

Los motivos que sirven de sustento a la causal enunciada son los que se dejan expuestos:

> "Primero: El Tribunal Superior de Justicia de lo civil y de lo penal del Segundo Distrito Judicial (Penonomé) interpretó en forma aislada la Claúsula 1° de la Escritura N° 516 de 26 de Julio de 1996, otorgada ante la Notaría de Penonomé, referente al Plazo para poder pagar la obligación contraida por el señor Horacio Márquez, con la fianza de Eric Márquez y la Garante Hipotecaria Magdalena Villarreal de Márquez, por ello llega a la errada conclusión de que la excepción de Pago Parcial no existe, sino tan sólo pago total.
>
> Tal como se puede observar la claúsula en comento, indica que el plazo para pagar los B/.30,000.00 que compraría mi cliente a Fertica, vencería a los seis (6) años, contados a partir del 2 de septiembre de 1996, fecha en que se inscribió la Escritura de Préstamo. No obstante, nuestro representado, al 27 de mayo de 1997 realizó un pago por B/.21, 529.50 a menos de un año de haberse iniciado el compromiso que ahora nos ocupa.
>
> Segundo: El Tribunal Superior debió interpretar el Contrato de Préstamo en forma integral y no basarse en los documentos de crédito que se confeccionaron posteriormente, o sea, las Letras de Cambio preparadas por FERTICA, ya que esos documentos no reflejan, en forma clara y díafana (sic.), el método de aplicación del abono realizado por el recurrente, ya que si se hubiera prorrateado el pago de mi cliente, se hubiera llegado a la conclusión de que se había PAGADO POR ADELANTADO. Luego entonces, al momento de la interposición de la Demanda, el crédito NO ESTABA MOROSO. Y, por ende el cobro resulta prematuro.
>
> Tercero: El ad-quem al interpretar erróneamente la norma legal que rige la materia contractual, lo induce a emitir un fallo equivocado con su actuar desconoce las reglas del Contrato Hipotecario contenido en la Escritura Pública N° 516 de 26 de Julio de 1996, otorgada ante Notario de Penonomé que, es el instrumento jurídico que reglamentó la relación crediticia entre mi cliente y Fertica.

> Si el Tribunal Superior hubiera interpretado correctamente la norma de Derecho aplicable al caso controvertido, hubiese concluido en que el pago parcial si existe, pues, la norma jurídica reconoce el prorrateo". (f. 116-117)

Acusa el apoderado legal del recurrente la interpretación errónea, por parte del Tribunal ad-quem, de la claúsula primera del Contrato de Hipoteca de Bien Inmueble e Hipoteca de Bien Mueble, celebrado entre demandante y demandado y protocolizado mediante Escritura Pública N° 516, de 26 de julio de 1996.

La claúsula primera del contrato, que fija el plazo para el cumplimiento de la obligación contraída por el recurrente, según el apoderado judicial del recurrente HORACIO MARQUEZ, fue mal interpretada por el ad-quem, por cuanto dicha claúsula establece el plazo para el pago de las compras realizadas por su mandante en seis años, contados a partir de la fecha de la inscripción de la Escritura Pública, mediante la cual se constituye el contrato referido.

Además señala que el Tribunal ad-quem se basó en las letras de cambio extendidas por la demandante para fijar el método de aplicación del abono realizado por su mandante, en vez de haberlo aplicado a prorrata, con lo que llegó a la errada conclusión que el término para el pago estaba vencido, por lo que considera el cobro prematuro.

Como consecuencia de lo que alega, considera el apoderado judicial del recurrente que infringió el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial los artículos 9, 1059, 1132, 1133 y 1061 del Código Civil.

Aprecia esta Superioridad que el Tribunal ad-quem al resolver la apelación propuesta por el casacionista concluyó que, de la claúsula 1° del contrato celebrado entre las partes, se desprendía claramente que el plazo para el pago de las facturas por razón de los productos agroquímicos comprados por el demandante, es de cinco meses y no seis años, como lo alegaba el demandado. Al respecto, el Tribunal señala:

> "También observa que en el caso in comento las partes mediante una escritura pública de fecha 26 de julio de 1996, acordaron que FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S. A. (FERTICA), se comprometía en venderle productos agroquímicos al señor HORACIO MARQUEZ.
>
> La cláusula primera de dicha escritura establece que:
>
> PRIMERO: EL VENDEDOR venderá a LOS COMPRADORES productos agroquímicos hasta la suma de TREINTA MIL BALBOAS (B/.30,000.00). LOS COMPRADORES se obligan a pagar el precio de los productos agroquímicos comprados en virtud de este contrato a más tardar cinco meses después, contados a partir de la fecha de facturación de la venta más el uno punto treinta y tres (1.33%) por ciento mensual, en concepto de intereses por las sumas debidas. Las partes convienen y aceptan que el VENDEDOR queda facultado para aumentar la tasa de interés a la tasa máxima permitida en la República de Panamá. ... La Duración del presente contrato será de seis (6) años, contados a partir de su fecha, pero podrá ser terminada unilateralmente por el VENDEDOR, sin responsabilidad por su parte, en los siguientes casos: a) Si LOS COMPRADORES no pagaren el precio de las compras que hicieren dentro del plazo pactado; b) Si LOS COMPRADORES no ofrecieren garantía suficiente a que estén obligados conforme a la cláusula tercera del presente contrato; c) Si los bienes hipotecarios en virtud del presente contrato son secuestrados, embargados o en alguna forma perseguidos". (f.2) (Subrayado de la Corte).
>
> De lo anterior, se puede colegir que en el término establecido para cancelar la obligación ha vencido con exceso, incumpliendo el señor

MARQUEZ con lo acordado". (f. 81-82)

Según el recurrente, el ad-quem al razonar de la manera que se dejó expuesta incurrió en la violación del artículo 1132 del Código Civil, norma esta que hace relación a la interpretación de contratos. Dispone la misma que, cuando los términos del contrato sean claros y no dejen duda sobre la intención de los contratantes, habrá que atenerse al sentido literal del mismo. Pero, cuando las palabras fueren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre la intención de los contratantes.

En relación con el texto de la norma comentada, debe entenderse que el recto sentido de la misma atina a consultar el tenor literal de las cláusulas del contrato, para efectos de su interpretación, en la medida que sean claros y no dejen duda sobre la intención de los contratantes, de donde se advierte que la expresión "términos claros" corresponde al sentido textual de la proposición jurídica que tiene la norma, sin recurrir a más elaborados cánones de hermenéutica.

Sólo en el evento que las palabras parecieran contrarias a la intención de los contratantes, priva la común intención contractual sobre el tenor literal de las cláusulas del contrato, por lo que en el presente caso, habiéndosele imputado al ad-quem la violación del artículo 1132 citado, por parte del juzgador ad-quem conviene, en primera instancia, indagar si la intención de los términos del contrato refleja claramente la intención de los contratantes o, por el contrario, es necesario consultar la intención de los contratantes para la interpretación del contrato, a fin de precisar el plazo para el pago de las facturas expedidas por la demandante, en virtud de las compras de productos agro-químicos que el demandado hiciera.

La cláusula primera del contrato suscrito por las partes que intervienen en el presente proceso, establece que el plazo para el pago de las facturas adeudadas al vendedor, por razón de los productos que el demandado le comprara a la demandada, era de cinco meses. En tanto que la duración del contrato es de seis años. El texto de la cláusula citada es el que se deja transcrito:

> PRIMERO: EL VENDEDOR venderá a LOS COMPRADORES productos agroquímicos hasta la suma de TREINTA MIL BALBOAS (B/.30,000.00). LOS COMPRADORES se obligan a pagar el precio de los productos agroquímicos comprados en virtud de este contrato a más tardar cinco meses después, contados a partir de la fecha de facturación de la venta más el uno punto treinta y tres (1.33%) por ciento mensual, en concepto de intereses por las sumas debidas. Las partes convienen y aceptan que el VENDEDOR queda facultado para aumentar la tasa de interés a la tasa máxima permitida en la República de Panamá. ... La Duración del presente contrato será de seis (6) años, contados a partir de su fecha, pero podrá ser terminada unilateralmente por el VENDEDOR, sin responsabilidad por su parte, en los siguientes casos: a) Si LOS COMPRADORES no pagaren el precio de las compras que hicieren dentro del plazo pactado; b) Si LOS COMPRADORES no ofrecieren garantía suficiente a que estén obligados conforme a la cláusula tercera del presente contrato; c) Si los bienes hipotecarios en virtud del presente contrato son secuestrados, embargados o en alguna forma perseguidos". (f.2) (Subrayado de la Corte).

El recurrente alega que, de acuerdo a la intención contractual el término de seis años referido en la primera cláusula era para el pago de las obligaciones contraídas al tenor del contrato celebrado entre las partes que intervienen en el proceso y no el de los cinco meses. No obstante, advierte la Sala que la intención de las partes de establecer el término de los cinco meses no sólo resulta de la lectura de la cláusula primera, sino también del examen conjunto de ésta cláusula con la octava del contrato, la cual faculta a la demandada para declarar de plazo vencido, para los efectos de su pago inmediato, la deuda

pendiente por parte del comprador, por falta de pago o la mora en cualquiera de los pagos que deba hacer el comprador (demandado). El texto de la cláusula es el siguiente:

> ... OCTAVA: EL VENDEDOR tendrá derecho a declarar de plazo vencido para los efectos de su pago inmediato, la deuda que a la sazón tengan pendientes LOS COMPRADORES en cualquiera de los siguientes casos: ---A) La falta de pago o la mora de cualquiera de los pagos que deban hacer LOS COMPRADORES a EL VENDEDOR; ---B) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por LOS COMPRADORES y/o LA GARANTE HIPOTECARIA en esta Escritura; —c) Si los bienes hipotecarios o los frutos o ambas cosas resultaren embargados, secuestrados, o de alguna otra forma perseguidos; ---d) Por omisión del pago de los supuestos que graven los bienes hipotecados o las actividades de LOS COMPRADORES o LA GARANTE HIPOTECARIA.—...". (f.5)

El análisis de esta cláusula con la primera, permite advertir que el plazo para el pago de las facturaciones por razón de las compras hechas en virtud del contrato tantas veces referido era el de los cinco meses, conforme lo manifiesta la demandante y no el término de seis (6) años, como lo entiende el recurrente. Ello no sólo se desprende de la cláusula primera que así lo expresa claramente, sino también, como se dijo, de la cláusula octava que al facultar al comprador para declarar de plazo vencido la deuda que tenga pendiente el vendedor, en ninguna parte se refiere a que la vendedora tenga que esperar el vencimiento de los seis años para rescindir el contrato, sino que se refiere a la mora en cualquiera de los pagos y los pagos, de conformidad con la cláusula primera, debía realizarlos el demandado dentro de los cinco meses posteriores a la fecha de la facturación de la compra.

En consecuencia, estima la Sala que los términos textuales, del contrato en referencia, por si, reflejan claramente el propósito contractual, por lo que no resulta viable consultar la intención de los contratantes, lo que sólo autoriza el artículo 1132 citado como infringido, cuando las palabras parecieran contrarias a la intención de los contratantes. En consecuencia no estima la Sala que se haya infringido el artículo 1132 citado, ni el artículo 1133 que se refiere a la intención de los contratantes como criterio interpretativo contractual que, como se ha dejado, sólo tiene aplicación, cuando los términos del contrato no fueren claros, condición que no se da en el presente caso.

Tampoco se consideran infringidos por el ad-quem el artículo 9 y 1061 del Código Civil. El primero de los cuales se refiere a la interpretación Legal y no a la contractual, que es el caso que ocupa la atención de la Corte, la cual se regula por las disposiciones establecida en el Libro IV, Título II, Capítulo II de la misma ley. El artículo 1061, por su lado, se refiere a la forma de imputar el pago cuando sean varias las deudas que tenga el deudor en favor de un mismo acreedor. La norma infringida no tiene aplicación en la medida que dicho precepto dispone la aplicación del pago a la deuda más onerosa, entre las que estén vencidas, y en el presente caso, todas las facturas se encontraban vencidas al momento de hacerse el pago por parte del recurrente, según se desprende de los peritajes practicados a foja 48-49 y 51-52, por lo que el abono debió hacerse a la deuda total, quedando un saldo que es el reclamado por la demandante, mediante el proceso dentro del cual se recurre, por hallarse de plazo vencido.

Tampoco le asiste razón al apoderado judicial del recurrente cuando señala en el motivo segundo del recurso que el ad-quem tomó como referencia las letras de cambio extendidas por la demandante, FERTICA, para establecer el método de aplicación del abono realizado por su mandante. Lo anterior es así, toda vez que, de acuerdo a la misma cláusula primera del contrato celebrado entre las partes que intervienen en el presente proceso, se tendrá como fecha para el inicio del cómputo del plazo de los cinco meses, estatuido para el pago de las facturas de las ventas verificadas, la de expedición de la facturación de la venta respectiva.

De manera, entonces, que a la fecha en que se hizo el abono alegado por la parte recurrente, el plazo para el pago de las facturaciones de las ventas hechas por la demandante al demandado se encontraban vencidas, razón por lo cual el abono debió ser aplicado a la deuda total. Luego entonces, si para la época en que se verifica el pago del demandado, se encontraban el total de las facturas vencidas, el remanente o saldo pendiente que debía pagar el demandado al demandante, se encontraba también vencido, razón por lo cual, no considera la Sala que la acción ejercida por la demandante sea prematura, en la medida que la acción para el cobro de la obligación se hizo exigible desde el vencimiento de los cinco meses establecidos en el contrato para el pago de las facturas de la compras realizadas por el demandado a la demandada, conforme viene expuesto.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 29 de mayo de 2000, expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en la excepción de pago parcial presentada por HORACIO MARQUEZ, en el proceso ejecutivo que FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA, S. A. le sigue al excepcionante.

Las costas obligatorias a cargo de la parte recurente se fijan en CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.175.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO Y JOSÉ ALVARADO PINEDA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO LE SIGUE A JOSÉ ALVARADO PINEDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la Sentencia de segunda instancia proferida en fecha 28 de julio de 2000 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario que HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO le sigue a JOSÉ ALVARADO PINEDA, interpuso el licenciado JUAN ANTONIO MORALES GÓMEZ, en representación del demandante, recurso de casación en el fondo y, en representación del demandado, el licenciado GUILLERMO ENRIQUE SERRANO FLORES, interpuso recurso de casación en la forma.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, sin que fuere aprovechado, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución se enmarca dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, los recurrentes formalizaron sus respectivos escritos de casación en tiempo. Se avoca, ahora la Sala a examinar por separado cada recurso, atendiendo al orden en que aparecen ubicados en el expediente.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL
LCDO. JUAN ANTONIO MORALES GÓMEZ

El recurso de casación propuesto por el licenciado JUAN ANTONIO MORALES

GÓMEZ, en representación de HENRY WALLACE NIELSEN ALVARADO, es en el fondo y aparece visible a fojas 322 a 325. En el mismo se invoca la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de las pruebas, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

Al entrar al análisis de los dos motivos que sirven de fundamento a la causal esgrimida, la Sala observa que en el primer motivo, el recurrente no señala con claridad el vicio de ilegalidad contra la sentencia impugnada, aunado a que no señala de cómo pudo influir el yerro valorativo en la decisión atacada.

En cuanto al segundo motivo, el mismo no hace ningún cargo de injuridicidad contra la resolución impugnada, está redactado en forma argumentativa y con alegaciones, todo lo cual resulta apartado de la técnica del recurso de casación.

El cargo de injuricidad no es más que la explicación de una violación legal que se imputa a la sentencia recurrida presentada de manera concreta y específica; de manera que siendo requisito fundamental que en los motivos se expongan cargos contra la resolución impugnada o que del conjunto de ellos se desprendan los mismos, creemos pertinente realizar la siguiente aclaración para el recurrente y los futuros recurrentes.

> "El cargo es, pues, en casación, la réplica, la objeción o la censura, o en conjunto de réplicas, objeciones, censuras o ataques que el recurrente hace al juicio del fallador de instancia, con miras a que la Corte Suprema le restaure el derecho presuntamente quebrantado por la sentencia que impugna.
>
> Resulta así que las causales de casación vienen a constituir el piso o la base sobre las cuales se deben edificar los cargos, los ataques, las objeciones o las censuras, términos estos que al fin y al cabo, son sinónimos, y que el recurrente le formula a la sentencia impugnada..."
>
> (Humberto Murcia Ballén, "RECURSO DE CASACIÓN CIVIL", 4ª edición actualizada, pág. 273, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1996).

También aprecia la Sala, que el recurrente se limita a señalar una serie de pruebas documentales, sin aclarar en qué fojas se encuentran,

Con respecto a la citación de las normas infringidas y la explicación de cómo lo han sido, esta Superioridad considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la Ley.

Los errores mencionados deben ser subsanados mediante escrito de corrección.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL
LCDO. GUILLERMO ENRIQUE SERRANO FLORES

El recurso de casación propuesto por el licenciado GUILLERMO ENRIQUE SERRANO FLORES, en representación de JOSÉ ALVARADO PINEDA se interpuso en la forma y aparece visible a fojas 330 a 332.

En la casación en la forma invoca como única causal: "Infracción de norma sustantiva de derecho por haberse omitido algún trámite diligencia considerando esencial por la ley o cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad o haberse anulado mediante la sentencia impugnada un proceso sin que hubiesen concurrido los supuestos legales."

Frente a la causal alegada por el recurrente, la Sala considera que la misma está mal enunciada, ya que simplemente debe invocarse uno de los tres supuestos contenidos en el numeral primero del artículo 1155 del Código Judicial, y no citar todo el texto del mencionado numeral que señala el casacionista, ya que puede dar lugar a confusión, pese a que el recurrente ha subrayado uno de los tres supuestos, por lo que cabe presumir, sin que lo diga, que ese es el supuesto contentivo de la causal esgrimida.

El profesor JORGE FÁBREGA P., en su obra CASACIÓN, sobre este tópico ha señalado:

> "...
> La Sala ha sostenido que el numeral primero del artículo 1155 del Código Judicial, contiene varios supuestos que dan lugar al recurso de casación en la forma.
>
> En el caso que ocupa la Sala, el casacionista ha citado como una sola causal los tres supuestos transcritos, cuando sólo debió haber citado uno, en vista de que no pueden invocarse dos o más causales en una sola. Como consecuencia de lo anterior, esta primera causal debe ser corregida.
>
> (JORGE FÁBREGA P., CASACIÓN, 1ª ed., Varitec, S. A., Panamá, 1995, pág.177)

Referente a los motivos que sustentan la causal, que son dos, en que el primero no se percibe con claridad en qué consiste el cargo que se le formula a la sentencia.

En el segundo motivo, observa la Sala que el mismo no es cónsono con la causal que se invoca, más bien, se indica un cargo contenido en el artículo 1155, numeral 7° del Código Judicial, que hace referencia a cuando la sentencia no es cónsona con las pretensiones de la demanda; todo lo cual resulta contradictorio y apartado de la técnica del recurso de casación, sin que ninguno contenga un cargo de injuricidad contra la resolución impugnada.

En cuanto a la citación de las normas infringidas, el libelo de recurso de casación no señala a qué cuerpo jurídico pertenece el artículo citado en forma incompleta. Las anteriores anomalías estructuradas hacen ininteligible el recurso y amerita su inadmisibilidad.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por el licenciado JUAN ANTONIO MORALES GÓMEZ, contra la sentencia de 28 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, para lo que le concede el término de cinco días, tal como lo establece el artículo 1166 del Código Judicial; y, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma, interpuesto por el licenciado GUILLERMO ENRIQUE SERRANO FLORES.

Las obligantes costas a cargo del segundo recurrente se fija en SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO MERCANTIL DEL ISTMO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE

LE SIGUE JORGE CAMELO VILLALBA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVI.

VISTOS:

La firma ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE, en su condición de apoderada del BANCO MERCANTIL DEL ISTMO, S. A., interpuso recurso de casación contra la sentencia de 27 de julio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario que le sigue a JORGE CAMELO VILLALBA.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, oportunidad aprovechada por ambas partes, tal como se observa de las fojas 135 a 137 (opositor) y de 138 a 139 (recurrente).

Luego de realizar el examen de rigor al presente recurso de casación, se considera que cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código Procesal, es decir:

1) Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2) Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3) Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,

4) Si la causal expresada es de las señaladas por la Ley.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la firma ALEMAN, CORDERO, GALINDO & LEE, en su condición de apoderada de BANCO MERCANTIL DEL ISTMO, S. A., contra la sentencia de 27 de julio de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario que le sigue a JORGE CAMELO VILLALBA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala de lo Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EDWIN GARFIELD SONHOUSE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DAVID BENNETT NATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RITO TORRES GUEVARA, actuando en nombre y representación de EDWIN GARFIELD SONHOUSE, ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 8 de agosto de 2000 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario propuesto por DAVID BENNETT NATION contra el recurrente.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las

partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso. En tal sentido, como consta de fojas 614 a 615, sólo la parte recurrente hizo uso de los términos correspondientes.

La Sala procede a determinar si el recurso cumple con los presupuestos necesarios para acceder a su admisibilidad, conforme a lo establecido por los artículos 1165 y 1160 entre otros del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso fue interpuesto dentro del término legal.

En este caso el recurrente ha invocado tres causales de forma y tres causales de fondo consagradas en los artículos 1154 y 1155 del Código Judicial. Pasemos, entonces, al examen de cada una de ellas.

CAUSALES DE FORMA:

1. PRIMERA CAUSAL: "No estar la sentencia en consonancia con las excepciones del demandado al retrotraer una sentencia en la cual se declaró Caducidad de la Instancia a su favor, en Proceso Ordinario Declarativo de Condena que la promoviera DAVID BENNETT NATION por el Juez Ad-Quo y que hizo tránsito a Cosa Juzgada a su favor (numeral 3 del artículo 1155 del Código Judicial), dado a que la misma quedó debidamente ejecutoriada, cumplida la notificación a las partes conforme su rigor".

La doctrina jurisprudencial en materia de la determinación de las causales ha establecido que las mismas deben invocarse en los términos literales en que aparecen en los artículos 1154 o 1155 del Código Judicial, sin desviación ninguna.

Tal y como se ha invocado esta causal pareciera que el recurrente establece dos causales en una, pues no se logra entender si el recurrente se está refiriendo a la causal contemplada en el numeral 7 ordinal d, o a la causal contemplada en el numeral 3, ambas contenidas como causales de forma en el artículo 1155 del Código Judiacial.

> El artículo 1155 señala lo siguiente: "El recurso de casación en la forma tiene lugar en materia civil en los siguientes casos:
>
> 1...
> 2...
> 3. Por haber sido dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada;
> 4...
> 5...
> 6...
> 7. Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las excepciones del demandado, porque:
> a...
> b...
> c...
> d. Se omite fallar sobre alguna de las excepciones alegadas, si fuere el caso hacerlo; y ...
> 8..."
>
> La confusión se evidencia más aún en los motivos. Veamos:
>
> "Primero: En la sentencia recurrida el Tribunal no le reconoce derecho sustancial adquirido a EDWIN GARFIELD quien fuera favorecido por la caducidad de la instancia y contrario a ello entra a decidir y pronunciarse formalmente en la parte resolutiva de dicho fallo, desconociendo así las excepciones planteadas en el Escrito de Oposición que presentamos en nuestra oportunidad (ver foja 557-560).

> Segundo: Que la no valoración a la cual nos referimos en el motivo anterior, llevó al juzgador a no reconocer totalmente la excepción que lo libera de la responsabilidad demandada y por el contrario se utilizó para condenarlo y exigirle obligaciones no adquiridas por él.
>
> Tercero: El Tribunal Ad-Quem a pesar de advertir tal hecho en la sentencia de la primera instancia y en la segunda instancia (ver foja 118 a 199 y de la 134 a 139 del expediente) entra a valorarla en franca violación de las leyes adjetivas y sustantivas relativas a la materia de excepciones, omite ex profeso y, procede a conocer y decidir sobre la excepción de inexistencia de la obligación, reconocidas por la caducidad, el cual es un medio de terminación excepcional del proceso a favor de una de las partes, tal como se dio con Edwin Garfiel Senhouse, máxime cuando la misma hace tránsito a cosa juzgada para una de las partes."

En el motivo primero el cargo que se le imputa al Tribunal pareciera ser congruente con la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 1155, pero en el motivo segundo el recurrente señala que el tribunal no reconoció totalmente una excepción que liberaba al demandado de responsabilidad, lo cual es congruente con el numeral 7 de dicho artículo; y en el motivo tercero señala que el tribunal "omite ex profeso y procede a reconocer y decidir sobre la excepción de la inexistencia de la obligación, reconocida por la caducidad..máxime cuando la misma hace tránsito a cosa juzgada.", por lo que no se sabe a cuál de las causales de forma específicamente se refiere el cargo endilgado.

Esta causal así presentada no puede ser admitida por la Sala.

II. SEGUNDA CAUSAL DE FORMA: "Como segunda causal de forma, invocamos la de haberse incurrido en el error de desestimar y por lo tanto acoger como bueno (sic) una acumulación que fue decidida antes, por esa misma instancia mediante resolución de fecha 4 de junio de 1993, (ver foja 371 a 374 del 1er tomo del expediente), por medio de la Cual REVOCA y por ende niega la acumulación pretendida por el juez de la primera instancia, y dicha resolución le fue notificada a las partes quedando así debidamente ejecutoriada, por lo que no procedía la acumulación tal como se hizo, dado a que tal acto no era convalidable y este mismo tribunal la acoge como buena, contraviniendo principio jurídico de la irrevocabilidad de sus propios actos, tal cual como lo dispone el artículo 986 y 201 numeral 2 del Código Judicial".

Incurre en el mismo error anterior, ya que la causal así expuesta no corresponde a ninguna de las contempladas en el artículo 1155 del Código Judicial.

Veamos los motivos:

> "Primero: La sentencia recurrida no le reconoció valor jurídico a la resolución fechada 4 de junio de 1993 (ver foja 371 a 374), por medio de la cual el Primer Tribunal Superior , REVOCO y por ende NEGO la acumulación realizada por el Juez de la Primera Instancia mediante Auto No.661 del 23 de marzo de 1992, señalando que las partes no son las mismas, ni las pretensiones son iguales, como tampoco el objeto y la causa de pedir; no obstante ello, este mismo Tribunal, mediante el mismo juzgador, consigna hecho que contradice lo dispuesto en los artículos 986 y 201 numeral 2 del Código Judicial.
>
> Segundo: La no valoración a la cual nos referimos en el motivo anterior, llevó al juzgador a valorar más, una acumulación hecha posteriori del juez A-quo, la cual se da mediante Auto 1040 de fecha 7 de marzo de 1995(ver foja 465 a 468), auto que a todas luces contrapone y desconoce lo dispuesto por el órgano superior que ya

> tenía fuerza de ley, y que esta ejecutoriada no obstante esto, este mismo tribunal lo consigna y lo acepta al punto que da como bueno para su premisa jurídica al señalar lo siguiente: (cito)".

Al revisar los motivos transcritos se observa que el recurrente manifiesta que el yerro del tribunal fue que no le reconoció valor jurídico a una resolución y que "tal hecho es por ende un error de hecho ...", siendo estos señalamientos totalmente incongruentes con una causal de forma. De lo expuesto en el citado motivo se infiere una causal probatoria (de fondo), pues indica que se deja de tomar en cuenta una prueba.

En consecuencia, además de que la causal no ha sido identificada debidamente, hay una total incongruencia entre los motivos y la causal de forma enunciada, por lo que hay razón para no admitir el recurso, ya que, como ha reiterado nuestra jurisprudencia sobre la materia, entre la causal y los motivos debe existir una perfecta compatibilidad de modo que de ellos surja la causal invocada y no una distinta.

III. TERCERA CAUSAL: "Infracción de la norma sustantiva en concepto de error de hecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

Esta causal la invoca como una causal de forma cuando es una causal de fondo "el error de hecho". Sin embargo, ni siquiera está enunciada debidamente puesto que en el artículo 1154 del Código Judicial esta establecida como "error de hecho sobre la existencia de la prueba".

Veamos los motivos que sustentan esta causal:

> "Primero: Con infracción de la norma adjetiva que establece que los documentos sirven de pruebas, o sea que sean pruebas legales el Tribunal Superior dejo de tomar en cuenta y por ende de calificar en su justa medida las pruebas de mi representado EDWIN GARFIEL SENHOUSE, pasándola por alto, dándole solo valor a lo dicho por la parte actora, tomando como base hechos que se habían dado 10 años antes, sin tomar en cuenta que el local estaba construido sobre servidumbre pública y no sobre la finca del demandante.
>
> Segundo: Que en base a la premisa antes expuesta, solo le da valor probatorio a las pruebas aportadas por el demandante, pruebas que ya se habían acreditado y que en nada inculpaban o señalaban a mi representado y que hoy no aparecen en dichos expedientes y que se encuentran refoliados.
>
> Tercero: Que la valorización y penalización que se le hace a mi representado se hace sobre base incierta y sobre supuestos, dándole connotación de confesión judicial, arguyendo para ello el artículo 882 del Código Judicial, incurriendo así, en una indebida interpretación de la norma, máxime cuando el tribunal jamás llevó a cabo la inspección ocular al lugar y negocio en todo el proceso".

En los motivos se observan serias deficiencias que se señalan a continuación:

En primer lugar, el recurrente invoca como causal de forma, una causal de fondo. Además, lo hace indebidamente ya que invoca "error de hecho en la apreciación de la prueba" con lo cual no sabe la Sala si quería invocar el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

En segundo lugar cuestiona el valor probatorio que el Tribunal le dio a ciertas pruebas, sin especificar cuáles son esas pruebas; además omite señalar cuál es el yerro probatorio que influyó en la disposición recurrida.

En tercer lugar menciona artículos del Código Judicial acusando al Tribunal de interpretarlos erróneamente, lo cual es propio del apartado correspondiente al de la infracción de la disposiciones legales infringidas y su concepto. En ese mismo orden el recurrente omite señalar las normas sustantivas violadas y la Sala observa que, al cuestionar la mala interpretación del tribunal, pareciera que dicho cargo sería congruente con otra causal de fondo (la "interpretación errónea" consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial).

Por lo tanto, por ser ininteligibles, se desestiman todas las causales de forma invocadas.

CAUSALES DE FONDO:

1. PRIMERA CAUSAL: "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa de la norma de derecho".

Veamos los motivos:

> "Primero: La sentencia recurrida solo le reconoció valor probatorio a las pruebas aportadas por DAVID BENNETT NATION, en la Demanda Declarativa de Daños y Perjuicios, proceso este que se presenta posterior a la caducidad, caducidad aludida ya, habiendo sido objetadas dentro de dicho proceso, por lo que el juez de la causa se pronuncio absolviendo a mi representado (EDWIN GARFIEL SENHOUSE) en el mismo.
>
> Segundo: La no valoración en su justa medida de las pruebas aportadas por las partes dentro del proceso, incurriéndose así en una mala valoración de la prueba, yendose a la presunción, lo que riñe con lo dispuesto en el artículo 1154 del Código Judicial, por las cuales se consagran las causales de casación y entre esta está la de "Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba" lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida,.
>
> Tercero: Este error de derecho en cuanto a la forma como se valoro la prueba, la cual se hace sobre la base de lo supuesto, lo que contradice lo dispuesto en el artículo 774 del Código Judicial, influyó para la calificación de la prueba y así emitir el fallo recurrido, el cual lesiona intereses de mi representado y también contradice lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 782 del cuerpo de normas objetivas ya citadas".

La causal no es congruente con lo expuesto en los motivos, pues del contenido de estos se desprende la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y no la invocada.

Se observa que en el primer y el segundo motivos citados el recurrente hace un cuestionamiento al tribunal, en el sentido de que no se le reconoció valor probatorio a las pruebas aportadas por DAVID BENNETT NATION en la demanda declarativa de daños y perjuicios; y en el tercer motivo señala que se incurrió en error de derecho en cuanto a la forma en que se valoró la prueba, la cual se hace sobre un supuesto contradiciendo lo establecido en el artículo 774 del Código Judicial, y más adelante menciona que se contradice también lo establecido en el artículo 782 en ese cuerpo legal. Se observa que en los motivos se hace referencia a disposiciones violadas lo que no es propio del contenido de ese apartado del recurso de casación, sino del apartado posterior, cuyo propósito exclusivo es contener todas las disposiciones que se consideran violadas por la sentencia impugnada.

La jurisprudencia de la Corte ha reiterado cuál es el contenido propio de cada apartado del recurso de casación y el modo en que deben desarrollarse, ya que en los motivos no puede hacerse alusión a las normas de derecho lo cual

corresponde al apartado de la infracción de las disposiciones legales y el concepto de la infracción. En estas circunstancias, la primera causal de fondo resulta ininteligible y no debe admitirse, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1167 del Código Judicial.

II. SEGUNDA CAUSAL DE FONDO: "la de haberse incurrido en infracción de nomas sustantivas de derecho por el Concepto de Violación Directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Veamos los motivos:

> Primero: El error de juicio en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida porque, por no haber aplicado las reglas de interpretación que debió aplicarse, interpretó erróneamente los conceptos de responsabilidad, consentimiento y obligación de las partes, yéndose a presumir presupuestos de causalidad y los efectos del daño y perjuicio en los cuasicontratos para luego imputárselo a mi representado.
>
> Segundo: Con detrimento de la norma sustantiva que se refiere a la interpretación de los contratos, el tribunal Superior al dictar la Sentencia de Segunda Instancia, condicionó la aplicación de la cláusula contractual de la obligación entre las partes firmantes y aceptante quienes eran DAVID BENNET NATION vs JOHN T. SENHOUSE y no EDWIN GARFIELL SENHOUSE, por lo que se interpretó mal los artículos 1108 y 1024 del Código Civil en cuanto a la obligación contractual."

La Sala observa que hay incongruencia entre la causal enunciada y los motivos, debido a que éstos aluden a cargos relativos a otra causal de fondo y que es la de "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de interpretación errónea".

En el primer motivo el cargo que le hace al tribunal es de que no aplicó las reglas de interpretación requeridas y, en el segundo motivo, que mal interpretó los artículos 1108 y 1024 del Código Civil, los cuales resultan incongruentes con la causal de fondo enunciada.

La jurisprudencia ha reiterado que entre los motivos y la causal debe existir una relación armónica, de modo que de ellos surja la causal invocada y no otra distinta.

Finalmente, en las disposiciones infringidas, parcialmente se citan los artículos 1024 y 1108 del Código Civil, cuando la técnica de este recurso extraordinario es la de citar de manera completa el contenido de las normas consideradas que han sido vulneradas, por lo que se concluye que esta causal de fondo ha sido estructurada en forma confusa e incongruente y debe declararse inadmisible.

III. TERCERA CAUSAL: "Infracción de la norma sustantiva de derecho por concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Veamos los motivos:

> "Primero: Aún cuando no se acreditó por el actor en su segunda demanda responsabilidad civil extracontractual y mucho menos que haya existido un nexo de causalidad, para responsabilizarlo de daños y perjuicios, el Tribunal ad-quem entra a valorar una supuesta serie de hechos y de pruebas alejadas de la solemnidad que debió imprimirsele a las pruebas de las partes, para llegar a un punto de eficacia y mérito de la misma y no se hizo así, sino que alude al elemento del supuesto y a una presunción de confesión judicial (Ver fojas 18, primero y tercer párrafo de la sentencia y foja 582 del

> expediente y foja 19 último párrafo de la sentencia y foja 583 del expediente).
>
> Segundo: Que tal presunción y supuesto nexo de causalidad, para llegar a tipificar el supuesto daño y perjuicio, no se le probó en la etapa del alegato, ni se demando vía de incidente contra mi representado, lo que quedó desnaturalizado en la primera instancia, luego entonces mal puede el juzgador de la segunda instancia contravenir lo dispuesto en el artículo 782 del Código Judicial para así aplicar el artículo 1644 del Código Civil."

La Sala observa que el recurrente en los motivos cuestiona la valoración que hizo el tribunal sobre los hechos y las pruebas, y el artículo 1154 del Código Judicial dispone que : "En la causal de violación directa y en la de interpretación errónea, no pueden invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba".Como es sabido esta causal se produce cuando entendida claramente una norma, sin haber sido objeto de análisis interpretativo, deja de ser aplicada al caso pertinente o se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado. Esta causal se produce siempre con independencia de toda cuestión de hecho, pues el tribunal de casación, en la primera fase, debe tener como hechos los reconocidos en la sentencia.

En el mismo sentido se pronuncia el Profesor JORGE FABREGA P. en su libro "Casación" (Imprenta Varitec, S.A, Panamá, 1995), en el que afirma lo siguiente:

> "Cada vez que se aspira a impugnar un fallo porque se está en desacuerdo con la actitud que asume el fallo respecto a los hechos de la controversia, sólo se puede lograr a través de una causal probatoria. No es viable- al invocar una (sic) de los tres primeros conceptos del artículo. 1154-partir de hechos, contrarios a los reconocidos en el fallo de instancia; o expresado de otra forma, si no se ataca la prueba que reconoce los hechos sólo puede promoverse fundado en una de las tres primeras modalidades. Tal situación la aclara el Código al disponer en el Art.1154, que "en concepto de violación directa o en la interpretación errónea no puede invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba". (Págs.137-138).

En virtud de que existe incongruencia entre lo que dicen los motivos y el supuesto que implica la causal invocada (violación directa), ya que los mismos se refieren a situaciones de hecho, a pruebas y su valoración por parte del tribunal, esta causal resulta ininteligible por lo cual no puede ser admitida.

Por último, es importante señalar que el recurrente ha invocado la misma causal de fondo tres veces (violación directa), lo cual es contrario a lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia que ha reiterado que la mención de la causal debe ser expresa, determinada y separada. No se pueden invocar varias causales en una sola; ni se puede repetir en un recurso la misma causal varias veces.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado RITO TORRES GUEVARA actuando en nombre y representación de EDWIN GARFIELD SONHOUSE, contra la Resolución de 8 de agosto de 2000 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Las obligantes costas de casación se fija en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Notifiquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES XENIA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO QUE LE SIGUE ORITELA FASANO SALAZAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, actuando en nombre y representación de INVERSIONES XENIA, S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la resolución de 17 de mayo de 2000, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la negativa de levantamiento de medida cautelar, en la acción de secuestro promovida por ORITELA FASANO SALAZAR (demandante en reconvención) contra INVERSIONES XENIA, S. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que aprovecharon ambos apoderados judiciales, como consta de fojas 149 a 154 (opositor) y 155 a 160 (recurrente).

La Sala procede a decidir si el recurso puede ser admitido, previas las siguientes consideraciones.

En este caso, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por razón de su cuantía y naturaleza (arts.1148 y 1149, ord.4); el recurso ha sido interpuesto en el tiempo que establece la ley; en cuanto al escrito de formalización del recurso, se procede a realizar un examen pormenorizado, pues se han invocado diversas causales de forma y de fondo.

Como causales de forma el recurrente invoca dos de los tres supuestos que contempla el ordinal primero del artículo 1155 del Código Judicial. Como primera causal señala: "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley"; y, como segunda causal determina: "Por haberse omitido otro requisito cuya omisión cause la nulidad".

La Corte en su jurisprudencia ha reiterado que respecto a la causal de forma no debe enunciarse en el grado de abstracción en que lo hace la ley; que debe especificarse el trámite esencial que ha sido omitido, expresando, por ejemplo, por haberse omitido hacer la notificación en la forma expresada por el Código Judicial, lo que causa la nulidad. (Cfr.fallo de 21 de octubre de 1994, R.J. p.201).

Como es sabido, entre las diligencias o trámites que la ley considera esenciales se mencionan los que contempla el artículo 1136 del Código Judicial, como formalidades indispensables para fallar, entre las cuales podemos mencionar: la omisión del traslado de la demanda (en los procesos que requieran ese trámite), la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de apertura del proceso o incidente a pruebas o el no haberse practicado estas pruebas sin culpa del proponente. Adicionalmente, entre los requisitos cuya omisión causa la nulidad, se encuentran las causales de nulidad comunes a todos los procesos, enumeradas por el artículo 722 del Código Judicial, como la falta de competencia, ilegitimidad de personería, distinta jurisdicción etc.

Vemos que en este caso el casacionista fundamenta la invocada en primer lugar en el hecho de que se emitió el pronunciamiento recurrido (negar el levantamiento de secuestro) sin que la reconvención corregida hubiere sido admitida en el proceso, es decir, que cuando se declaró la negativa de admitir

la consignación de la fianza para el levantamiento del secuestro, el tribunal no había decidido la admisibilidad de la reconvención corregida.(Cfr.primer y cuarto motivos, fs.92 y 93).

La segunda, básicamente, se fundamenta en el mismo razonamiento expresado en la primera causal, al sostenerse que la resolución debatida "erróneamente consideró que el secuestro decretado afectaba exclusivamente la propiedad de las fincas 37,701 y 37,702 para negar la consignación de la fianza tendiente al levantamiento de la medida cautelar, sin que se hubiera notificado la demanda de reconvención corregida al demandado" (Cfr. quinto motivo, fs.97).

En síntesis, a juicio de la Sala, ambas causales resultan inadmisibles pues, además de no basarse en la omisión de un trámite o diligencia considerada esencial por la ley, se fundamentan en un mismo cargo, relativo a que se decidió no levantar un secuestro antes de admitir la demanda de reconvención corregida, lo cual no constituye causal de nulidad de lo actuado. Así mismo, como complemento de estas causales, no han sido citados preceptos legales que establezcan, expresamente, que se produce alguna forma de nulidad como consecuencia del cargo imputado por la censura.

Se procede, entonces, al estudio de las cinco causales de fondo invocadas.

Como primera causal de fondo se establece la "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la norma" (fs.106 a 112). Esta causal se fundamenta en once motivos.

Como es sabido, esta causal se produce cuando entendida claramente una norma, sin haber sido objeto de análisis interpretativo deja de ser aplicada al caso pertinente o se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado. Esta causal se produce siempre con independencia de toda cuestión de hecho, pues el tribunal de casación, en la primera fase, debe tener como hechos los reconocidos en la sentencia.

Se observa que del primero al décimo motivos, en síntesis, se señala que el auto recurrido equivocadamente consideró como pretensión real las distintas solicitudes que hace el demandante en reconvención en su demanda corregida.

En el undécimo motivo se alude a lo que, a juicio del casacionista, era el objetivo de la demanda de reconvención, indicándose, además, que el tribunal no consideró que la reconvencionista no pretendía la reivindicación de las fincas y que reconoció que no le pertenecían.

De lo expuesto en los motivos no se desprende el obligante cargo de injuridicidad debidamente estructurado y congruente con la causal; más bien se acusa al tribunal de no haber apreciado o interpretado correctamente situaciones de hecho que surgen de la demanda y de la actuación del reconvencionista.

Tampoco se expresa, dentro del concepto de infracción de las normas que se dicen violada, cargos congruentes con la causal y con el propio texto del respectivo precepto.

Por lo expuesto, la causal resulta ininteligible y no es procedente admitirla.

La segunda causal de fondo es la "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida de la norma" (fs.112).

Esta causal se produce cuando una disposición legal, cuyo contenido no se discute y sin que medien errores de hecho o de derecho, se aplica a supuestos de hecho que no están comprendidos en la misma, es decir, que se aplica la regla jurídica a un hecho probado pero no regulado en ella.

Al revisar los cinco motivos que se expresan como fundamento de esta

causal, vemos que el cargo de injuridicidad cónsono con la causal se llega a concretar en el cuarto motivo, complementándose con lo dicho en el primero, segundo y tercero. En estos se establece:

> "...
> PRIMERO: La resolución objetada confirmó la negativa del levantamiento de la medida cautelar promovida con fundamento en reconvención corregida de ORITELA FASANO SALAZAR contra inversiones XENIA S. A.
>
> SEGUNDO: La negativa sólo procedía excepcionalmente, cuando la demanda previniera pretensión real sobre una cosa determinada y la acción de secuestro se hubiere limitado al bien reclamado.
>
> TERCERO: La demanda no reclamaba reivindicación, ni el secuestro se limitó a cosa previamente determinada en la demanda.
>
> CUARTO: El pronunciamiento impugnado aplicó sin consideración de la inexistencia de los presupuestos referidos la excepción indicada y negó el levantamiento de secuestro.
> ..." (Fs. 112)

Del contenido de estos motivos se infiere que el pronunciamiento impugnado aplicó indebidamente el precepto que permite negar el levantamiento de secuestro en forma excepcional, ya que no consideró que en el presente caso no se daban los presupuestos exigidos al efecto, que son: que en la demanda se reclamara una pretensión real sobre cosa determinada y que la acción de secuestro se limitara a dicho bien.

En virtud de lo que se tiene dicho, esta causal cumple con las formalidades legales necesarias para ser admitida.

La tercera causal de fondo es la "Infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea de la norma "(fs.117).

Esta causal se refiere al error en que incurre el Tribunal en cuanto al contenido de la norma, no a su existencia, pues supone que a pesar de haberse aplicado la norma pertinente, no se le atribuye su verdadero sentido. Este error de interpretación es independiente de toda cuestión de hecho, pues no interesa saber si el hecho existe o no, si se probó o no, si se le debe aplicar la norma o no, si se le dejó de aplicar debiendo hacerlo, etc.; sólo se mira la tesis sustentada en la sentencia respecto al sentido y alcance de la norma jurídica.(Cfr. FABREGA P., Jorge, CASACION, 1995, fs.130).

En los tres motivos que sirven de fundamento a la causal, se expresa lo siguiente:

> "...
> PRIMERO: La resolución impugnada interpretó que la inclusión de una pretensión real en las pretensiones de la demanda y que la medida cautelar recayera sobre bienes determinados determinaba la improcedencia de la consignación de fianza para la liberación del secuestro.
>
> SEGUNDO: La decisión no consideró necesario que los bienes determinados en la medida de secuestro fueren al mismo tiempo reclamados en la demanda.
>
> TERCERO: El pronunciamiento objetado no previno que la interpretación adecuada de la excepción obligaba esta previsión como medio de evitar que el proceso resultare ilusorio en sus efectos.
> ..." (Fs. 117-118)

Del contenido de los motivos se infiere que el cargo formulado consiste en que en el pronunciamiento recurrido no se interpretó adecuadamente la excepción relativa a la improcedencia de la consignación de fianza para liberar un secuestro, puesto que "no consideró necesario que los bienes determinados en la medida de secuestro fueren al mismo tiempo reclamados en la demanda" (fs.118).

La única disposición legal que se expresa como infringida es el artículo 583 del Código Civil, que establece:

> "Pueden reivindicarse los bienes muebles o inmuebles.
> Exceptúandose los bienes muebles a que se refieren los incisos 2o, 3o y 4o del artículo 450, los cuales sólo podrán reivindicarse reembolsando lo que el poseedor hubiere pagado por ellos."

La Sala ha podido apreciar que el contenido de esta norma no guarda relación con el cargo que se formula en los motivos. Adicionalmente, el concepto de infracción de la norma ha sido desarrollado en forma confusa, pues no se ajusta a lo establecido por el precepto legal. Sobre el particular, entre otras cosas, el casacionista dice que dicho artículo fue violado directamente por comisión, porque el auto interpretó "que las reclamaciones de responsabilidad extracontractual, honorarios, mandato etc. constituían pretensión real para resolver negar el levantamiento de secuestro por consignación de fianza" (fs.118).

La Corte ha dicho que si el recurrente hace mención de un tipo determinado de violación en la causal, no es procedente que en la explicación de la violación de la norma citada sostenga que se dió una forma distinta de violación, ya que esto implicaría una contradicción (Fallo de 3 de octubre de 1990, PEREZ TRADING COMPANY INC. vs CAJETAS PLEGADIZAS DILCY, S. A.). En lo que se citó previamente de la explicación de la infracción de la norma, vemos que el recurrente incurrió en el error de señalar que la misma fue violada directamente por comisión, a pesar que en la causal se formula que la violación se da por interpretación errónea.

Para efectos de este último apartado del recurso se exige una explicación lógicamente desarrollada, de tal manera que se le haga entender a la Corte de una forma clara y coherente el sentido en que se ha infringido la norma de derecho que se cita en el recurso, manteniendo siempre la debida armonía con la causal y los motivos.

A juicio de la Sala, el recurrente no ha cumplido con la aludida exigencia, por lo que esta causal no puede ser admitida.

Como cuarta causal de fondo fue invocada la "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba"(fs.119).

Al revisar los motivos que se establecen como fundamento de esta causal, podemos apreciar el cargo de injuridicidad contra el fallo, de lo expresado en el segundo y cuarto, que señalan lo siguiente:

> "PRIMERO: ...
> SEGUNDO: El pronunciamiento impugnado no consideró que a folio 26 del expediente principal existía llamamiento de terceros a la causa. El llamamiento de terceros fue admitido el 30 de julio de 1999, para dilucidar pretensiones personalísimas de ORITELA FASANO SALAZAR contra MAX FASANO SALAZAR.
>
> TERCERO: ...
> CUARTO: La decisión no previno la existencia de la prueba indicada cuando consideró la procedencia de la excepción para negar el levantamiento de la medida cautelar, a pesar de existir consignación de fianza por la totalidad de lo demandado y las costas y gastos del

proceso.
..." Fs. 119-120)

Aún cuando de los citados motivos se deduce un cargo relativo a la prueba, los mismos no se refieren a la forma en que dicho cargo influyó en la decisión del caso. Debido a esta circunstancia el cargo probatorio no se encuentra debidamente estructurado en los motivos pues, como se tiene dicho, los errores probatorios conforman una cadena de tres eslabones: 1) el error y su demostración; 2) la consiguiente infracción de la ley sustantiva; 3) la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

En el siguiente apartado del recurso, relativo a las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, el recurrente cita como infringidos los artículos 1108, 1105, 981 del Código Civil y los artículos 597, 596, 985,465, 470, 666, 523 del Código Judicial, en ese orden.

Respecto al recurso de casación civil, la doctrina y la jurisprudencia reiteradamente han señalado que, para la procedencia de la causal probatoria invocada, se deben citar, en primer lugar, las normas procesales que consagran o determinan los diferentes medios de pruebas, específicamente la que contenga la prueba que se dice que fue ignorada por el Tribunal. Posteriormente, tienen que invocarse las normas sustantivas infringidas como consecuencia del error probatorio que se atribuye al fallo de segunda instancia.

El casacionista no ha cumplido con esta exigencia, ya que invoca inicialmente disposiciones del Código Civil, sin aludir en la explicación de su infracción a cómo esa infracción es el resultado del yerro probatorio en que se supone incurrió el sentenciador. Tampoco incluyó, entre la pluralidad de normas procesales que cita, ninguna que se refiera a los medios de prueba, citando en cambio normas pertinentes a causales de forma. Por tanto, este apartado del recurso no guarda relación con la causal, ni con el cargo que se formula en los motivos de la causal.

Finalmente como quinta causal de fondo se determina la "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la aprecicación de la prueba" (fs.130).

Se establecen cinco motivos como fundamento de la causal, en los cuales el cargo se concreta a señalar que "La decisión impugnada consideró la demanda de reconvención corregida como prueba de las pretensiones del actor"(primer motivo) y, además, se dice que "La decisión objetada consideró erróneamente que la demanda interpuesta contenía pretensión real que podría servir de fundamento a la negativa de levantar el secuestro decretado" (quinto motivo) (fs.130 y 131).

Como disposiciones legales infringidas se citan los artículos 582, 993 del Código Civil y los artículos 521, 661, 464, 536, 521, 526 y 666 del Código Judicial.

Esta Corporación ha podido apreciar que lo planteado en los motivos no constituye uno de los casos por los que se produce la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, como sería: 1) cuando un medio probatorio se examina y se le da un valor que la ley no reconoce; 2) Cuando se le reconoce un valor probatorio a un elemento que no reúne los requisitos legales; 3) cuando la ley requiere un medio de prueba especial y se le reconoce valor a otro; 4) cuando se le reconoce valor a una prueba que ha sido practicada sin las formalidades legales.

En los motivos, el recurrente manifiesta su discrepancia con lo resuelto por el auto impugnado en atención a la pretensiones contenidas en la demanda de reconvención, pero ni la demanda ni la demanda de reconvención son medios de prueba sometidos a la valoración del juzgador dentro del proceso.

Aunado a lo expuesto, vemos que, entre la pluralidad de normas procesales

que cita la censura, no incluye ningún precepto que se refiera al valor de la prueba, siendo que dicho señalamiento resulta obligante para que prospere la causal, pues, si no se demuestra dicha infracción sobre las reglas de apreciación de la prueba, no se puede arribar a la consiguiente infracción de la ley sustantiva.

Por lo expuesto, los apartados que preceden esta causal no son cónsonos con la misma, de manera que debe ser desestimada.

En mérito de lo señalado, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la Segunda Causal de Fondo y NO ADMITE la Primera y Segunda causales de forma, ni la Primera, Tercera, Cuarta y Quinta causales de fondo, invocadas en el recurso de casación interpuesto por INVERSIONES XENIA, S. A. contra el Auto de 17 de mayo de 2000, dictado por el Primer Tribunal Superior en la acción de secuestro promovida por ORITELA FASANO SALAZAR.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNÁNDEZ (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HI FASHION TEXTILES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DHL PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ARMANDO ABREGO, actuando en nombre y representación de la sociedad HI-FASHION TEXTILES, S. A., ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 11 de julio de 2000 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía propuesto por la recurrente contra D.H.L. PANAMA, S. A.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso. En tal sentido, como consta de fojas 244 a 249, tanto la parte recurrente como la opositora presentaron los escritos correspondientes.

La Sala procede a determinar si el recurso cumple con los presupuestos necesarios para acceder a su admisibilidad, conforme a lo establecido por los artículos 1165, 1160, entre otros, del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso, visible de fojas 206 a 220, es de aquellas contra las cuales lo concede la ley (artículos 1148 y 1149 C.J) y el recurso fue interpuesto dentro del término legal.

En este caso se han invocado cuatro causales de fondo, consagradas en el artículo 1154 del Código Judicial. Pasemos, entonces, al examen de cada una de ellas.

I. PRIMERA CAUSAL: "Infracción de normas sustantivas en el concepto de aplicación indebida".

Veamos los seis motivos:

"1. HI FASHION TEXTILES, S. A., envió el 27 de octubre de 1995

documentos a la empresa TECIDOS TITA LTDA, en Uberlandia, República de Brasil, a través de D.H.L. PANAMA S. A., los cuales se perdieron totalmente.

2. La sentencia de segunda instancia, para negar la pretensión de indemnización de perjuicios presentada por HI FASHION TEXTILES, S. A., en contra de D.H.L. PANAMA, S. A., aplicó el artículo 1 de la Ley No.44 de 5 de julio de 1996, promulgada en la Gaceta Oficial No.23,077 de 11 de julio de 1996, por medio de la cual se aprobó el Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional y su protocolo, no obstante que la contratación entre las partes tuvo lugar con mucha anterioridad, como consta en el primer motivo, y la mencionada ley no puede tener efectos retroactivos.

3. Según el contrato, el envío que HI FASHION TEXTILES S.A, efectuó a TECIDOS TITA LTDA de Brasil, consistía en "DOCUMENTOS", o sea que se trataba del envío de un correo o paquete postal.

4. El Tribunal de segunda instancia se dedicó a aplicar un número plural de disposiciones contenidas en el citado "Convenio de Varsovia", no obstante que el ARTICULO II del Protocolo que modificó dicho convenio reformó el artículo 2° del mismo y se dijo que éste "no se aplicará al transporte de correo y paquetes postales".

5. Si bien es cierto que en el contrato se estipuló que se podía aplicar el Convenio de Varsovia (ver fojas 10) queda entendido que solamente en aquellas naciones que ya se habían adherido al mismo, ya que se trata de una empresa de carácter transnacional que utiliza el mismo formato de contrato en todos los países en que opera, tal como lo afirman los peritos Luis Chen González y Marta Lucía Cañola (ver fojas 120 y 134).

6. Se aplicaron, asimismo, en la sentencia de segunda instancia un número plural de disposiciones legales contenidas en el Decreto Ley 19 de 8 de agosto de 1963, no obstante que las mismas hacen referencia a los perjuicios causados por la pérdida o retraso de pasajeros, equipaje o carga, pero sin mencionar el correo o paquetes postales."

Los motivos expuestos son congruentes con la causal y en el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas y explicación de como lo han sido, se señala los artículos 1 de la Ley 44 de 1996, 172 ,173 y el numeral 2 del artículo 174 del Decreto Ley 19 de 1963, existiendo congruencia entre la causal, los motivos y las disposiciones legales, por lo que esta primera causal puede ser admitida.

II. SEGUNDA CAUSAL: "Infracción de norma sustantiva en el concepto de error de hecho en la existencia de la prueba".

En los cuatro motivos que se establecen como fundamento de esta causal se expresa lo siguiente:

"1. A fojas 20 y 21 del expediente constan los estados de cuenta emitidos por D.H.L. PANAMA,S. A., a cargo de HI FASHION TEXTILES, S. A., correspondientes a los meses de enero y febrero de 1996, los cuales fueron presentados junto con el libelo de demanda.

2. En la contestación de la demanda, la parte demandada objetó estas pruebas documentales supuestamente por "inconducentes e inocuas", pero nunca las tachó de falsas.

3. La sentencia de segunda instancia en ninguna de sus partes se

> refirió a estas pruebas documentales, las ignoró completamente e hizo como si no existieran, no obstante su innegable incidencia en la correcta resolución del litigio, ya que demuestran no ser cierto siquiera que se informó en enero de 1996 sobre el extravío de la valija o encomienda enviada.
>
> 4. De ser cierto que el 10 de enero de 1996 se envió a la parte actora una nota de crédito por $32.30 debido a "valija extraviada", en el estado de cuenta de enero de 1996 necesariamente debía aparecer la misma como contrapartida deducida, lo cual no ha sido así".

En los motivos primero, segundo y tercero el cargo de injuricidad consiste en que el Tribunal ignoró las pruebas consistentes en dos estados de cuenta que, según el recurrente, demostraban que la empresa demandada no notificó sobre el extravío de la encomienda enviada. Sin embargo, el recurrente no señala de qué manera la ignorancia de estas pruebas influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En el siguiente apartado del recurso, relativo a las normas infringidas y el concepto en que lo han sido, el recurrente cita únicamente como infringido el artículo 769 del Código Judicial y transcribe sólo la primera línea de la norma, omitiendo señalar las normas sustantivas infringidas como consecuencia del error probatorio que se atribuye al fallo de segunda instancia.

La doctrina y la jurisprudencia han reiterado que se debe citar íntegramente la disposición vulnerada y se debe explicar el concepto de la infracción. Así mismo, para la procedencia de una causal probatoria se deben citar, en primer lugar, las normas procesales que consagran o determinan los medios de prueba y, posteriormente, en el mismo apartado, tienen que invocarse las normas sustantivas infringidas como consecuencia del error probatorio que se atribuye al fallo de segunda instancia, lo cual ha sido ignorado totalmente por el recurrente.

Conforme a lo expuesto, esta causal resulta ininteligible por lo que no puede ser admitida.

III. TERCERA CAUSAL: "Infracción de normas sustantivas en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba".

Veamos los motivos:

> "1. Junto con el libelo de demanda, la parte actora presentó la carta fechada 3 de junio de 1996 enviada por D.H.L. Panamá, S. A., a HI FASHION TEXTILES, S. A., en la cual relata que en el mes de enero de 1996 envió una nota de crédito fechada 10 de enero de 1996 por $32.30 debido al "extravío" de la "valija" contentiva de los documentos y adjuntó copia de la misma (ver fojas 18 y 19).
>
> 2. Mediante carta fechada 6 de junio de 1996, HI FASHION TEXTILES, S. A., contestó a D.H.L. PANAMA, S. A. rechazando el alegado envío de la nota de crédito, la cual nunca fue recibida en las oficinas de la parte actora ni acreditada en los estados de cuenta de enero o febrero de 1996 (ver fojas, 17, 20 y 21), los cuales fueron totalmente ignorados por el Tribunal de segunda instancia, tal como lo dejamos explicado en la causal anterior.
>
> 3. No hay prueba en el expediente de que la nota de crédito, que supuestamente notificaba el "extravío" de la "valija" con la "guía aérea 6530514966", fuera efectivamente recibida por la parte actora, sino que hay prueba de todo lo contrario, como se evidencia en el estado de cuenta del mes de enero de 1996."

Se produce la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, cuando: 1. Un medio probatorio se examina y se le da un valor que la ley no le reconoce; 2. Se le reconoce un valor probatorio a un elemento que no reúne los requisitos legales; 3. La ley requiere un medio de prueba especial y se le reconoce valor a otro; 4. Se le reconoce valor a una prueba que ha sido practicada sin las formalidades legales.

Los motivos de esta causal no denotan cargo alguno. La jurisprudencia ha señalado que, cuando se invocan errores probatorios en casación, necesariamente el recurrente debe señalar con claridad cuál es el elemento probatorio que sirve de base para atacar la sentencia impugnada, a fin de determinar si a la prueba se le dio o no el valor que tiene o si se admitió sin los requisitos legales pertinentes; pero, si el recurrente omite señalar la prueba, el tribunal no puede determinar si se dio el yerro probatorio, pues la causal invocada carecería de fundamento.

En el primer motivo el recurrente alude al contenido de una carta de 3 de junio de 1996; en el segundo alude a carta de 6 de junio de 1996 que le da respuesta a carta anterior; en el tercero menciona que no hay prueba en el expediente de una notificación de extravío de una valija, sino que hay prueba de todo lo contrario, "como se evidencia en el estado de cuenta de enero de 1996"; prueba que acusó en la causal anterior de haber sido ignorada por el juzgador. Como se evidencia el recurrente no es claro al exponer los motivos y no especifica cuál es la prueba que se examinó y no fue valorada en forma adecuada por el tribunal, así como la manera en que ello influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Como única disposición infringida se menciona el artículo 873 del Código Judicial, norma de carácter probatoria, sin embargo, omite citar el artículo 770 del Código Judicial que consagra el principio o reglas de valoración de pruebas, siendo dicho señalamiento obligante para que prospere la causal.

En ese mismo orden, el recurrente tampoco cita las normas sustantivas, imprescindibles para estos casos de casación en el fondo, pues son las que consagran los derechos y obligaciones que, supuestamente, han sido vulnerados como consecuencia del error probatorio. Sobre esta grave deficiencia del recurso, el Profesor Jorge Fábrega P. en su obra Casación expresa lo siguiente:

> "Tratándose de una causal probatoria, era necesario que se mencionaran las disposiciones civiles sustantivas que se violaron con motivo de la errada apreciación de la prueba. Y obviamente esto es imprescindible porque son las disposiciones sustantivas las que consagran los derechos y obligaciones. Las violaciones o preceptos legales referentes a la valoración de la prueba sólo constituye un medio o una causa de valoración de las disposiciones legales sustantivas para llegar a la determinación de la ley sustantiva y, por lo tanto, no basta para demostrar que se ha cometido error en la apreciación de la prueba".

La estructuración de los apartados de la causal no permiten su admisibilidad, de manera que debe ser desestimada.

IV. CUARTA CAUSAL DE FONDO: "Infracción de normas sustantivas en el concepto de violación directa".(fs.232-235)

Como es sabido, esta causal se produce cuando entendida claramente una norma, sin haber sido objeto de análisis interpretativo deja de ser aplicada al caso pertinente o se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado. Esta causal se produce siempre con independencia de toda cuestión de hecho, pues el tribunal de casación, en la primera fase, debe tener como hechos los reconocidos en la sentencia.

En los motivos que se establecen como fundamento de la causal el recurrente

expresa lo siguiente:

> "1. La relación existente entre las partes de este litigio tiene que considerarse como un mandato mercantil subyacente, el cual se encuentra regulado por el Código de Comercio patrio y el Código Civil, como fuente supletoria.
>
> 2. El "transportista" es la persona natural o jurídica, operadora de una aeronave, que se obliga a llevar de un lugar a otro, por la vía aérea, pasajeros, equipaje, carga y también correo, por una remuneración.
>
> 3. D.H.L.PANAMA, S:A., ("Solo para envíos Worldwide Parcel Express"-(Ver anverso de guía aérea a fojas 10) actúa como una simple intermediaria de transporte de correo o paquetes postales, a quien se le aplican las reglas del mandato.
>
> 4. Todo mandatario tiene la obligación de mantener informado a su mandante y de notificarle las alteraciones perjudiciales que ocurran.
>
> 5. El contrato celebrado entre las partes o "guía aérea" no contempla las consecuencias por la falta de notificación de la "pérdida o extravío" de una remesa de correo.
>
> 6. Los perjuicios por la "perdida o extravío" del correo de documentos o conocimiento de embarque referente a este proceso, no van mas allá del valor del papel en que los mismos están descritos, ya que son fácilmente reemplazables, como lo hizo la demandante una vez que se enteró tardíamente de su pérdida.
>
> 7. Los perjuicios por la falta de notificación de dicha "pérdida o extravío" de tales documentos, son muy distintos y no están sujetos a límite alguno, puesto que no están específicamente previstos en el contrato, y corresponden a la suma por la cual se presentó la demanda".

Como se puede apreciar, estos motivos no han sido estructurados conforme a la técnica requerida para el recurso de casación, pues no señalan en ninguna parte el obligante cargo de injuricidad contra la sentencia, dedicándose a formular una serie de consideraciones y alegaciones del recurrente que impiden precisar cuál es el cargo en concreto; en el primero se hacen apreciaciones subjetivas, en el segundo se define la palabra transportista, en el tercero se mencionan las obligaciones del mandatario; el quinto, sexto y séptimo se refieren a la falta de notificación de la perdida o extravío.

El recurrente sólo ha indicado cuál era la relación existente entre las partes del litigio y que según su opinión, "tiene que considerarse como un mandato mercantil subyacente". Lo cuestionando en apariencia son los hechos reconocidos en la sentencia, y no la violación directa de los derechos sustantivos del recurrente.

Esta causal de fondo debido a que es ininteligible no puede ser admitida por la Sala.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la primera causal de fondo; NO ADMITE la segunda, tercera y cuarta causales en el recurso de casación interpuesto por el licenciado ARMANDO ABREGO actuando en nombre y representación de la sociedad HI-FASHION TEXTILES, S. A., contra la Resolución de 11 de julio de 2000 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso Ordinario propuesto contra D.H.L. PANAMA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A. CONTRA CONTAINER TERMINAL, S. A., UNION TECH ENGINEERING CONSULTANS CO. y BEN H.B. FENG. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 31 de octubre de 2000, la SALA DE LO CIVIL, ordenó la corrección del recurso de casación, en la forma y en el fondo, promovido por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A., mediante apoderado judicial, contra la resolución de 25 de julio de 2000, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el cuadernillo del Incidente de Nulidad, propuesto dentro del proceso ordinario seguido a COLON CONTAINER TERMINAL, S. A. y otros.

Aprecia la SALA a foja 2186 el informe de Secretaría de la Sala, que el escrito de corrección fue presentado dentro del término que establece la ley, por tanto, es deber de la SALA pronunciarse acerca de la admisibilidad definitiva del mismo, previo el estudio, que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en la citada resolución.

Una vez analizado el escrito contentivo del recurso de casación corregido, advierte esta Superioridad, que se ha cumplido con la corrección de los errores formales en que se había incurrido, por tal motivo, el recurso reúne los requisitos exigidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial, para la declaratoria de admisibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en la forma y en el fondo, formulado por FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. A., mediante apoderado judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANUEL ANTONIO CABALLERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE A JOSÉ ALBERTO VILLARREAL Y MIRNA QUINTERO RICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JUAN ANTONIO CANDANEDO, ha interpuesto recurso de casación

contra la Sentencia de 30 de agosto de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que han instaurado MANUEL ANTONIO CABALLERO contra JOSÉ ALBERTO VILLARREAL Y MIRNA QUINTERO RICO.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado sólo por la parte opositora, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presenta una única causal de casación en el fondo, la cual es: "infracción de norma sustantiva de derecho, por error de derecho, en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada". Observa la Sala que dicha causal aparece recogida como tal, en el artículo 1154 del Código Judicial.

Se presenta un motivo único que sirve de fundamento a la causal, en la que aparece expuesto, grosso modo, el vicio de ilegalidad que se formula contra la sentencia impugnada. Se refiere a ello, el recurrente, que la sentencia del A-quem no pondera en forma adecuada y lógica la certificación o constancia notarial que aparecen a foja 209 de los Autos, referente a la manifestación o atestación que hace fe pública, por cuanto que no le concede el valor que como documento público tiene tal certificación notarial. La apreciación y la ponderación errada que el tribunal le da a dicho elemento de convicción lo lleva a presumir que las señoras ESPERANZA GONZÁLEZ y JOBITA MONTENEGRO no eran subalternas o dependientas del Notario Tercero del Circuito de Chiriquí, para el mes de abril de 1992; circunstancia esta que claramente surge del documento público mencionado.

Considera la Sala que éste único motivo ha sido redactado en forma de cargo de injuricidad contra la sentencia de segunda instancia, en el que se deja especificado el medio probatorio supuestamente mal valorado por el A-quem y la forma cómo dicho error probatorio influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Dentro de las normas que se citan como infringidas, aparecen tanto las de naturaleza probatoria como las de carácter sustantivo. Respecto de cada una, en términos generales, se expone el concepto de infracción, cumpliéndose de esta manera con las pautas que, al respecto, tiene dispuesta la Ley y esta Sala, por vía de jurisprudencia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por el licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO, en representación de MANUEL ANTONIO CABALLERO.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES Y PROYECTO MARBELLA, S. A. CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. Y COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO

QUE LE SIGUE GUILA LALO DE COHEN Y DAYANA ANA COHEN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Firma de abogados, SOLIS, ENDARA, DELGADO y GUEVARA, apoderados legales de GUILA LALO DE COHEN, MORRIS COHEN y DAYANA COHEN LALO, recurren en casación contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 22 de febrero de 2000, dentro del proceso ordinario que los demandantes le siguen a las personas jurídicas, INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. y COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A..

El recurso quedó admitido y, cumplida la etapa de alegatos de fondo, procede la Sala a decidirlo, previo a lo cual se dejan expuestos los aspectos fácticos que sirven de marco procesal al recurso propuesto.

ANTECEDENTES DEL RECURSO

El proceso dentro del cual se recurre se inicia con la demanda por daños y perjuicios instaurada por GUILA LALO DE COHEN, MORRIS COHEN y DAYANA COHEN LALO, contra INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. y COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A.

De acuerdo a la parte demandante, la sociedad anónima, INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, propietaria de la Finca N° 54.603, inscrita en el Registro Público, Sección de la Propiedad, levantó una construcción en dicho inmueble, la cual estuvo a cargo de la empresa CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A.. A su vez, CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A., para efectos de los riesgos derivados de la construcción de la obra respectiva, contrató una póliza de seguro con la COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. (CONASE).

Como consecuencia de la construcción aludida, asegura el apoderado judicial de la parte demandante, resultó afectada la residencia tipo duplex, ubicada en la finca N° 71.646, inscrita al Tomo 1606, Folio 18, Sección de la Propiedad del Registro Público, provincia de Panamá, cuyo propietario es su mandante, el señor MORRIS COHEN. Además, de la reparación de los daños materiales, reclaman los demandante la indemnización del daño moral ocasionado, por razón del estado de inquietud e incomodidad padecida por los afectados durante la construcción del edificio Torre Marbella.

La demanda la propusieron los afectados, solidariamente, contra INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A., propietaria y constructora del edificio del cual se derivan los perjuicios causados. Además, se demanda a la COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A., en carácter de aseguradora contratada por CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A., para cubrir los riesgos que la construcción del edificio referido generara.

El proceso quedó radicado en el Juzgado Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual, cumplidas las etapas inherentes a este tipo de proceso, profirió en sentencia N° 49 de 3 de julio de 1997 la decisión de fondo, en la que declara que INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A., están solidariamente obligado a la reparación del daño material y moral ocasionado a los demandantes. A COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A., se le condena a responder conjuntamente con CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A., por los daños ocasionados a los demandantes.

La resolución anterior fue apelada tanto por la parte demandante, como por la demandada, correspondiéndole el conocimiento de la alzada al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Mediante resolución de 22 de febrero de 2000 decidió el Tribunal ad-quem adicionar y modificar la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar responsables solidarios a las sociedades

anónimas INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA y CORPORACION DE EDIFICACIONES, por los daños materiales que le causaron a la Finca de propiedad del señor MORRIS COHEN y las mejoras en ella construidas; los daños morales producidos a MORRIS COHEN, GUILA LALO DE COHEN y DAYANA ANA COHEN LALO. Subsidiariamente declara responsable a la COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S. A. (CONASE), al pago de los daños materiales antes señalados.

La resolución anterior fue recurrida en casación por ambas partes, quedando sólo admitido el recurso propuesto por la parte demandante, el cual pasa la Sala, de seguido, a decidir.

RECURSO DE CASACIÓN Y DECISION DE LA SALA

El recurso de casación que se resuelve se propone en el fondo y se invoca como causal única, "la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba". la causal se apoya en diez motivos, los cuales se transcriben para ilustración de la Sala:

> "Primero: En la sentencia impugnada se incurrió en error de apreciación al valorar el documento que consiste en el Informe de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, tal como éste aparece aportado a foja 966 y 967 del expediente, en la medida que se le dejó de atribuir el valor que tiene conforme a la ley en cuanto a su contenido al considerar que de él resulta que el edificio construido estaba amparado por las regla de uso del suelo, cuando ello no es así porque de ese informe se desprende que los usos permitidos están condicionados a que no causen perjuicios a los vecinos o afecten adversamente el carácter residencial de la zona.
>
> Segundo: El error de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, al valorar el Informe que aparece a fojas 966 y 967 del expediente, lo condujo a infringir la norma sobre valoración de la prueba cuando ésta consiste en documento público auténtico en cuanto éste tiene valor conforme a su contenido y las declaraciones que en él se hacen. Hubiera bastado que el Tribunal atendiera el contenido del documento para que no se produjera la infracción a la ley.
>
> Tercero: El Tribunal Superior, en la sentencia que dictó, le dio el valor de indicio a los documentos consistentes en los Permisos de Construcción que aparecen aportados al proceso a fojas 732 y 733 y el Permiso de Ocupación (fs.374), todos expedidos por la Dirección de Obras del Municipio de Panamá, en cuanto consideró que ellos hacen presumir que se cumplió con la reglamentación, lo que excluía el elemento culpa o negligencia, a pesar de que entre los permisos en referencia y la negligencia atribuida al constructor y dueño de la obra, por la forma en que ejercieron su derecho, no existe ninguna relación.
>
> Cuarto: El error de apreciación, en que incurrió el Tribunal Superior, lo condujo a infringir la norma sobre valoración de la prueba por indicio que exige que este, para que tenga valor, debe estar relacionado con el hecho que se trata de establecer.
>
> Quinto: En la sentencia impugnada se incurrió en error de apreciación al valorar la prueba consistente en los dictámenes periciales rendidos por los Peritos, Ingeniero Robles y Arquitecta Tabira Pereira, como éstos aparecen aportados a fojas 431-443 y 444-479, respectivamente, del expediente y el error consistió en que no le atribuyó el valor que tienen conforme a la ley, en la medida que consideró que no hacen fe sobre el perjuicio económico alegado por la parte actora referente a la pérdida del concepto habitacional de la residencia afectada y al efecto en el valor de ésta, a pesar que esos dictámenes están debidamente fundamentados sobre el significado

de ese perjuicio y coinciden en el monto del perjuicio económico que se produjo.

Sexto: Ese error condujo al Tribunal Superior a infringir la norma sobre valoración de la prueba pericial que indica como se estima la fuerza del dictamen pericial. Suficiente hubiese sido que el Tribunal, como era lo legal, le hubiera atribuido el valor que tienen esos dictámenes para determinar que el perjuicio económico se produjo y el monto del mismo.

Séptimo: En la sentencia apelada se incurrió en error de apreciación al valorar la prueba consistente en el dictamen pericial que rindió la Licenciada María Angela Garatea, Psicóloga Clínica, como éste aparece aportado a fojas 480-485 del expediente en la medida que dejó de atribuirle el valor que tiene, conforme a la ley, sólo porque lo legal era que al dictamen se le atribuya fuerza o valor, teniendo en cuenta su fundamentación científica y la concurrencia con otras pruebas, que en este caso aclara y determina el valor del daño moral.

Octavo: El error en que incurrió el Tribunal Suprior lo condujo a infringir la norma sobre valoración de la prueba pericial que dice como se estima la fuerza de éste. Lo legal hubiese sido que, a pesar de ser dictamen único, la valoración para determinar el monto del daño moral se hubiese hecho teniendo en cuenta los fundamentos del dictamen, así como su concurrencia con el material de hecho y las otras pruebas del expediente en la determinación del valor del daño moral.

Noveno: Los errores de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior en la sentencia que dictó, en cuanto dejó de apreciar que se había demostrado la concurrencia del daño y la culpa en relación a la pérdida que sufrió la residencia en el concepto residencial o habitacional, lo condujo a infringir la norma sustantiva que reconoce que ese perjuicio económico debe ser, como daño causado, indeminizado, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución atacada porque sin ese error, la decisión hubiese sido otra, la de reconocer la pretensión en ese sentido.

Décimo: De igual forma, el error de apreciación en que incurrió el juzgador de segunda instancia, en la sentencia que dictó, en cuanto no apreció como legalmente correspondía el dictamen sobre el valor económico del daño moral porque se trataba de un dictamen único, lo condujo a infringir la norma sustantiva de derecho que establece que el autor del daño moral tiene la obligación de repararlo mediante indemnización en dinero, lo que influyó en lo dispositivo de la sentencia atacada porque sin ese error la decisión debió ser otra, la de condenar al pago del monto justo y correcto.” (Fs.1115-1116).

De los motivos transcritos se advierte que las pruebas cuya valoración cuestiona la parte que recurre son:

1. Informe de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, visible a foja 966 a 967.

2. Las pruebas documentales visibles a foja 732 y 374, consistentes en permisos de construcción y de ocupación respectivamente, expedidos por el Municipio de Panamá.

3. Informes periciales del Ingeniero ROGELIO ROBLES y la Arquitecta TABIRA PEREIRA 431-443; 444-479 y 480-485.

De acuerdo al apoderado judicial de la parte casacionista, en virtud de los

errores de valoración probatoria que se le atribuye al ad-quem, dejó de apreciar la concurrencia, por un lado, del perjuicio sufrido por sus poderdantes, como consecuencia de la afectación adversa al carácter residencial del área y, por el otro lado, a la cuantificación del daño moral, con lo que incurrió en la infracción de los artículos 1644 y 1644a del Código Civil y 823, 970 y 967 del Código Judicial.

En efecto, según se desprende de los motivos transcritos se refiere la parte casacionista a la mala valoración de las pruebas que se dejan indicadas en los tres primeros numerales, en relación con la apreciación de la afectación al carácter residencial de la zona ocasionado con la construcción del edificio Torre Marbella. De acuerdo, pues, con los casacionistas el Tribunal ad-quem al valorar erróneamente las pruebas a las cuales hace referencia en los seis primeros motivos del recurso, dejó de apreciar que la construcción del edificio Torre Marbella incumplía con la condición establecida en las "Normas de Desarrollo Urbano", esto es, la no afectación adversa del carácter residencial de la zona, con la construcción del edificio. Corresponde, en consecuencia, analizar las pruebas indicadas en los tres primeros numerales, en relación con la apreciación a la afectación adversa al carácter residencial de la zona.

En primera instancia, señala el apoderado judicial de los recurrentes como mal valorada la prueba consistente en el Informe de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda visible a foja 966-967, en la medida en que, si bien, como lo estimó el ad-quem, la construcción de edificios, como el edificio Torre Marbella estaba permitido para el área, por las normas de desarrollo urbano, el ad-quem dejó de apreciar la condición establecida por las propias normas de desarrollo urbano, consistentes en que se permitía la construcción de edificios en área, siempre que no constituyan perjuicios para los vecinos o afecten el carácter residencial de la zona.

El Primer Tribunal Superior de Justicia, al apreciar el Informe de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, llegó a la consideración que, de conformidad con la misma, la construcción de edificios para el área estaba permitido, por lo cual, las demandadas CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. e INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, al realizar la edificación antes referida habían cumplido con las reglas de uso de suelo para la Urbanización Marbella, área donde se encuentra ubicada la residencia de la parte recurrente y el edificio Torre Marbella.

El Tribunal de la alzada llegó a la conclusión que las demandadas no habían desconocidos dichas reglas, por cuanto de acuerdo con el informe de foja 966-967, el área donde se encuentran los inmuebles de propiedad de la parte demandante y demandada, está clasificada por la autoridad competente como residencial Multifamiliar de Alta Densidad y Comercio Urbano de Alta Densidad RM3C2, en la que se permite la construcción de edificios multifamiliares, como el edificio Torre Marbella. Al respecto señala la aludida resolución:

> "Ahora, corresponde entrar a analizar si se considera que las demandadas CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. e INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA han cometido un acto culposo o negligente por el hecho de haber construido el Edificio Torre Marbella junto a la residencia del señor MORRIS COHEN.
>
> En primer lugar, debe tenerse presente que el sector donde se encuentra la residencia del señor COHEN y el Edificio Torre Marbella está clasificado por la autoridad competente como residencia Multifamiliar de Alta Densidad y Comercio Urbano de Alta Densidad RM3C2, en el que se permite la construcción de edificios destinados a viviendas multifamiliares, que es el caso del Edificio Torre Marbella, tal como ha quedado acreditado en el informe de la DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA (fs. 966 y 967), aducido por la parte actora en esta segunda instancia.

> En vista de que se trata de un informe rendido por la entidad estatal encargada de hacer las mencionadas sectorizaciones, este Tribunal le da pleno valor probatorio al mismo, en atención a las reglas de la sana crítica, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 880 del Código Judicial". (f.1083)

El informe de la Dirección General de Desarrollo Urbano se encuentra ubicado a foja 967-968 del expediente y, conforme lo dejó expuesto el ad-quem en la resolución que se impugna, en el mismo se establece que el código de zona vigente para el área donde se encuentran las fincas de propiedad de las partes en el proceso, es el RM3C2 que, entre los usos que permite, está la construcción de edificaciones destinadas a viviendas multifamiliares de alta densidad. El mencionado informe señala en la parte pertinente:

> "según el Suplemento Gráfico de las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá, actualizado hasta el año de 1979, el código de zona vigente para ambas fincas era RM3C2 (Residencial Multifamiliar de Alta Densidad y Comercio Urbano de Alta Intensidad). Dicho código de zona se mantuvo vigente en las revisiones realizadas para el Corregimiento de Bella Vista durante los años 1986 y 1992, y es el que rige en la actualidad.
>
> Que según el documento "normas de Desarrollo Urbano para la ciudad de Panamá" del año de 1979, aprobado mediante Resolución N° 2-78 de 28 de agosto de 1978, los usos permitidos para el código de zona RM3C2 eran los siguientes:
>
> RM3:"Se permitirá la construcción, reconstrucción o modificación de los usos permitidos en la zona residencial, Multifamiliar de Alta Densidad RM3. Edificios destinados a viviendas multifamiliares de una densidad neta hasta de 1500 personas por hectáreas y sus construcciones complementarias, tales como: edificios docentes y religiosos, institucionales, bibliotecarios e instituciones filantrópicas y asistenciales, pensiones estudiantiles y oficinas, siempre que no constituyan perjuicios a los vecinos o afecten en forma adversa el carácter residencial de la zona". (f.967-968)

En virtud de lo que viene expuesto concluye la Sala que, la construcción de ediificios multifamiliares, como el que construyeron las demandadas estaba permitido para el área, por lo que las demandadas no incurrieron en negligencia al realizar el tipo de edifición señalada. No obstante, como lo alega la parte recurrente, de las normas de desarrollo urbanas citadas se desprende también la condición de que, la construcción de edificios del tipo señalado se construyan, siempre que no constituyan perjuicios para los vecinos o no afecte adversamente el carácter residencial del área.

Sobre este extremo, se pronunció también el Primer Tribunal Superior, señalando que la determinación de la afectación al carácter residencial de la zona y la constitución de perjuicios para los vecinos, por razón de haber construido las demandadas al lado de la residencia de la parte casacionista, es materia que le compete a las autoridades correspondientes, en particular a las municipales, y en ese sentido, la concesión de los permisos de construcción y ocupación, tal como constan a foja 732-733 y 374, por la Dirección de Obras del Municipio de Panamá, hacen presumir, a falta de prueba en contrario, el cumplimiento por parte de la demandada de todos los requerimientos y exigencias legales en materia de construcción, esto es, que no se incrrió en la afectación del carácter residencial del área con la construcción antes referida.

La parte recurrente objeta la valoración de los permisos de construcción y de ocupación (f. 732 y 374 respectivamente), como medios probatorios idóneos para determinar, conforme se desprende de los motivos tercero y cuarto, el cumplimiento por parte de las demandadas de la condición contenida en las Normas de Desarrollo Urbano (f. 966-967), consistente en que la edificación que se

construya no constituya perjuicio para los vecinos o no afecte el carácter residencial de la zona.

En primera instancia, advierte la Sala que los aludidos permisos municipales de construcción y ocupación son documentos públicos, por cuanto fueron expedidos por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, dichos documentos hacen fe de las certificaciones contenidas en ellos, conforme lo establece el artículo 823 del Código Judicial, por tanto resultan idóneos para establecer el hecho en discución.

En cuanto al contenido de los mismos documentos en relación con el hecho que se trata de acreditar, esto es, la afectación del carácter residencial de la zona por razón de la construcción del edificio Torre Marbella, si bien los mismos, per se, no acreditan de manera directa que la construcción tantas veces referida hubiere afectado adversamente el carácter residencial del área, al menos permiten presumir el cumplimiento de dicha condición por parte de las demandadas.

Lo anterior es así, toda vez que la condición de no construir la edificación causó perjuicio para los vecinos o no afectar adversamente el carácter residencial de la zona, como lo manifiesta el Tribunal de la alzada, no es discreción de las partes ni del Tribunal, sino que corresponde determinarlo a las autoridades municipales encargadas de determinar, al momento de verificar los planos de la obra, si el concepto de la edificación que se construirá afecta el carácter residencial de la zona, de conformidad con las normas de desarrollo urbano. En consecuencia, a falta de prueba que acredite de manera directa la pretensión demandada, considera la Sala que resulta lógico considerar que, al haber extendido la autoridad respectiva el permiso de construcción y de ocupación, la construcción aludida cumplía con dicha condición, esto es, que la edificación autorizada no constituía no afectaba el carácter residencial de la zona.

Caso distinto es que, habiéndose expedido los permisos de construcción por estar conformes con las normas de desarrollo urbano, durante la ejecución de la edificación se causen daños materiales a la vivienda, puesto que es obvio que una construcción de la magnitud de ésta, causa en las unidades habitacionales colindantes un riesgo de daños, que de mediar culpa o negligencia, debe ser resarcido, como ocurrió en este caso con respecto a los daños materiales. En tal caso, los permisos indicados carecerían de idoneidad para acreditar el daño material Mas, este extremo de la controversia no ha sido debatido en la forma que fue reconocido por el Tribunal, sino el relativo al desmejoramiento de la unidad residencial de los demandantes, por razón de haberse construido al lado de la residencia de los demandados un edificio, el cual debe acreditarse mediante medios probatorios tendientes a demostrar que la misma se produjo por desconocimiento de la parte demandada del diseño o planos de construcción de la obra, conforme fueron aprobados por la autoridad municipal.

En relación con lo anterior, alega el apoderado judicial de la parte recurrente la mala valoración de los peritajes practicados por el Ingeniero ROGELIO ROBLES y la Arquitecta TABIRA PEREIRA (f. 431-443 y 444-479, respectivamente) que, según manifiesta resultan idóneos para acreditar la pérdida del concepto habitacional de la residencia afectada y consecuente merma en el valor de ésta.

El Tribunal ad-quem al examinar las pruebas periciales indicadas, en relación con los perjuicios al concepto residencial que alega la parte recurrente, consideró que dichas pruebas no resultaban idóneas para acreditar el supuesto devalúo del concepto residencial de la propiedad del señor MORRIS COHEN, parte recurrente, con la construcción del edificio tantas veces referido, sobre la base de lo que se transcribe:

> "Ahora bien, otro aspecto al evaluar es si el Edificio fue construido de conformidad con lo aprobado por las autoridades competentes, y en el caso de no haberse hecho así, también lo

correspondía a la parte actora demostrarlo a través de profesionales en la materia.

Sin embargo, ninguno de los dictámenes periciales hizo el enfoque en ese sentido.

Es cierto que el perito de la parte actora, en su dictamen a consecuencia de la segunda inspección judicial, hizo el señalamiento de que no observaba retiro lateral del Edificio Torre Marbella, incluso adjuntó una fotografía para ilustrar lo afirmado, e indicó que esto le parecía inaceptable (f. 433 y 442), pero lo que debió analizar y dictaminar fue si esto incumple con la normativa correspondiente o con el plano aprobado por las autoridades competentes.

A pesar de que esta Superioridad considera que le corresponde entrar a analizar este aspecto,... una revisión de la Resolución N° 56-90 del 26 de octubre de 1990, emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, por la cual se aprueba la modificación y actualización realizada a algunas Normas de Desarrollo Urbano para la ciudad de Panamá, nos hace concluir que el aspecto de la falta de retiro lateral no incumplió las normas pertinentes.

En efecto, el artículo décimo tercero de dicha Resolución describe los usos permitidos para la norma RM3, así como la densidad, área, frente y fondo mínimos de lote, altura máxima, retiro lateral, retiro posterior. En lo que a retiro lateral se refiere, se establece lo siguiente: "Retiro Lateral: Ninguno: En planta Baja y cinco altos con la pared ciega acabada hacia el vecino.

1,50 ML: Area de Servicio
2,50 ML: Area Habitable..."

Debemos recalcar que se toma en cuenta la mencionada Resolución N° 56-90, conjuntamente con lo señalado en el Informe de la DIRECCION DE DESARROLLO URBANO antes mencionado, por ser la que regía en el período en el que se realizó la construcción.

Además, en vista de que en el expediente consta una copia autenticada del permiso de ocupación otorgado por la Dirección de Obras del Municipio de Panamá (f. 734), también debe presumirse que la obra se ejecutó de conformidad con los planos aprobados.

En atención a todo lo antes expuesto, este Tribunal considera que no ha quedado probado que el acto de haber levantado un edificio junto a la propiedad del señor MORRIS COHEN sea culposo o negligente.

Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente era negar los perjuicios económicos causados por el supuesto devalúo del concepto residencial de la propiedad del señor MORRIS COHEN y consecuentemente procede confirmar la sentencia en ese sentido". (f. 1085-1086)

Esta Superioridad considera que la existencia de los perjuicios al concepto residencial de la zona, reclamados por la casacionista, debe conllevar por parte de los demandados, una actuación negligente o culposa, para que se produzca la responsabilidad demandada por la parte recurrente. Significa ello que, es necesario que la afectación al concepto residencial demandado, ocasionado por la parte recurrente con la construcción del edificio antes referido, debe derivarse de la inobservancia por parte de las demandadas de las normas de desarrollo urbano para el área, por que se haya construído edificación distinta a la autorizada por las normas de desarrollo urbano para el área o con un concepto

distinto al permitido para el área, de conformidad con las normas de desarrollo urabano que son las que preveén el desarrollo habitacional para las áreas.

Los peritajes aludidos se refieren al efecto negativo que en el valor de la residencia, propiedad del recurrente, ha ocasionado la afectación del concepto urbanístico con el que fue diseñada la urbanización en sus orígenes, lo cual constituye, señala el peritaje del Ingeniero Rogelio Robles, a foja 431-444, un parámetro en la toma de decisiones al momento de invertir en la compra de una casa. No obstante, los aludidos peritajes en nada se refieren a que la supuesta afectación en el concepto residencial de la zona, se deba a que las demandadas hubieran construido el edificio con un concepto distinto al que los planos aprobados por la autoridad municipal le permitían o las reglas de desarrollo urbano.

Tampoco acreditan los peritajes aludidos que la obra o edificación constituya perjuicio para los demandantes, en carácter de vecinos de la misma, de conformidad con lo que establecen las "Normas de Desarrollo Urbano". Se refieren los aludidos peritajes a la falta de retiro lateral, no obstante de conformidad con la Resolución 56-90, expedida por la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, la edificación cumplió con los retiros laterales, por lo que no puede decirse que la edificación citada se haya constituido perjuicio para la residencia de los demandantes.

Atendido que la culpa o negligencia en la edificación ha debido acreditarse y comprobarse como una acción negligente, su falta de probanza coloca a quien debía aporta esa carga probatoria, en los riesgos de no haber probado tal negligencia, conforme se desprende del artículo 773 del Código Judicial.

En efecto, si la obra se ajustó a las normas de desarrollo urbano y a las ordenanzas municipales, el deterioro reclamado debió imputarse a una específica acción voluntaria de incumplimiento a las referidas normas de desarrollo urbanisticas indicadas, extremo que no ha sido acreditado mediante probanzas idoneas, por lo que la devaluación de la propiedad como consecuencia de la propiedad edificada en el lateral, no puede imputarse a quien cumplió con las normas de desarrollo urbano y sus reglamentaciones.

Es evidente, por otra parte, que las normas de desarrollo urbano han de tomar en cuenta el desenvolvimiento urbanístico en forma ordenada del área metropolitana, sin que puedan pretender los residentes que el área en que se encuentra sus residencias deban mantenerse estacionaria, pues esto implicaría el estancamiento del desarrollo urbano, con afectación al interés social que conlleva.

De manera que, de conformidad con lo que viene expuesto, estima la Sala que la construcción del edificio Torre Marbella cumple con las normas de desarrollo urbano, además de no afectar, su construcción, el carácter residencial.

En lo relativo al daño moral reclamado por la parte recurrente, en los motivos séptimo y décimo hace referencia a la valoración del dictamen pericial rendido por la Licenciada María Angela Garatea, Psicóloga Clínica (f. 480-485), en relación al valor del daño moral reclamado por la parte demandante. El error en la valoración, según la parte casacionista, radica en haber considerado que, por tratarse de un dictamen único, no tenía la fuerza probatoria necesaria para tasar la cuantía del daño moral reclamado por la parte actora. Sobre este particular reza la resolución recurrida:

> "En relación al daño moral, con el objeto de establecer, entre otros puntos, un valor en dinero de dicho daño, la parte actora solicitó la realización de un peritaje que dio por resultado dos dictámenes de profesionales designadas por la parte actora, la Arquitecta Tabira Pereira y la Licenciada María Angela Garatea, Psicóloga Clínica.
> ...

> En su dictamen, la Licenciada Garatea evalúo el costo psicológico en la suma de 100,000.00 (f.485).
>
> En cuanto a este dictamen, a foja 426-429 consta la diligencia de su entrega, en la que los apoderados de las partes tuvieron la oportunidad de examinar a la perito.
>
> A pesar de que se trata de una profesional idónea para dictaminar sobre esta clase de daño, como se trata de un sólo dictamen, esta Superioridad no puede tomar únicamente esta evaluación para fijar la cuantía del daño moral". (f.1096) (resaltado de la Corte)

La objeción de la parte casacionista recae, como se ha dicho, sobre la valoración conferida por el Tribunal ad-quem al peritaje antes indicado, en tanto y en cuanto lo considera un medio probatorio idóneo para acreditar la cuantía del daño moral reclamado. No obstante, es de destacar que los tribunales al valorar el daño moral gozan de un amplio margen de discrecionalidad.

En cuanto a la valoración pericial impugnada, el casacionista considera que la misma contrasta con lo dispuesto en el artículo 967 del Código Judicial, que establece la manera como deben valorarse el dictamen pericial. Sin embargo, no debe pasarse por alto que la prueba pericial constituye un medio auxiliar que le sirve al juzgador para ilustrar su criterio, por ser una declaración de ciencia y, por consiguiente, no produce efectos jurídicos.

El peritaje no es vinculante ni constituye, de por si, plena prueba, sino que la valoración corresponde al juzgador conforme a pautas orientadoras y en relación con las demás pruebas aportadas al proceso que se refieren a la cuestión debatida, según lo dispone el propio artículo 967 citado como infringido. De manera, que contrario a lo que considera la parte casacionista, el juzgador no está en la obligación de darle pleno valor al peritaje indicado como violado, sino que, como se dijo, deberá apreciarlo en relación con las demás pruebas del proceso.

En este sentido se aprecia en la resolución recurrida que el ad-quem le confirió valor al peritaje indicado a efectos del establecimiento de los padecimientos sufridos por la parte recurrente, no así, para la fijación de la cuantía de tales padecimientos, estimados por la perito en CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000) y que el Primer Tribunal Superior de Justicia tasara en TREINTA MIL BALBOAS (B/.30,000), a razón de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000) por cada demandante.

Cabe destacar que para cuantificar el daño moral, debe recurrirse al texto del artículo 1644a del Código Civil, el cual fija como parámetros a considerar para tales efectos, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Dichos parámetros legales sirven de guía para establecer la cuantía del daño moral, labor que, en no pocas ocasiones ha sido tildada por la Corte de dificíl, lo que no obsta para que se efectúe.

Aprecia la Sala que el peritaje citado como infringido, para determinar la reparación del daño moral alegado, se basa únicamente en los padecimientos sufridos por los demandados, sin tomar en cuenta otros elementos establecidos en el artículo antes citado que, como se dijo, sirven de marco para la determinación del daño moral.

En el dictamen pericial, básicamente se refiere la perito al daño emocional y afectivo que, como consecuencia de la construcción del edificio tantas veces mencionado, se le produjo a la familia del demandante, por causa del estado de zozobra y de nerviosismo en que se puso a los miembros de la familia COHEN, durante el tiempo que duró la construcción del mismo. Sin embargo, no toma en cuenta factores tales como situación económica de la víctima y responsables, así como el grado de responsabilidad de las demandadas, dispuestos en el artículo 1644a citado, en relación con la negligencia que se le imputa a las demandadas

en la construcción realizada, cuyos daños fueron apreciados por el juzgador, si bien, no en la cuantía a que aspiraba la demandante.

Cabe destacar, que para la valoración del dictamen pericial se debe seguir, de acuerdo a doctrina de la Sala, entre otros criterios de valoración, las fuentes y datos que sirven de base al dictamen, el cual no se integra en el dictamen pericial examinado, lo que evidencia que dicho peritaje no está debidamente fundamentado, ni sus conclusiones son lo suficientemente firmes por carecer de fundamentación:

> "En la doctrina se ha considerado que para la eficacia probatoria de un dictamen pericial se hace necesario que concurran ciertos elementos, entre los cuales cabe destacar: a. Que el dictamen esté debidamente fundamentado; b. Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos; c. Que las conclusion sean covincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles; y d. Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto". (Sentencia de la Sala de 23 de febrero de 1995).

En resumidas cuentas, considera esta Superioridad que el dictamen pericial no resulta idóneo para cuantificar, por sí sólo, la indemnización del daño moral reclamado, conforme lo alega el recurrente. Además, como se ha dicho, en materia de tasación del daño moral el Tribunal tiene un amplio margen de discrecionalidad para fijarlo, lo que ha ocurrido en el presente caso, de manera que la Sala comparte la valoración de dicho dictamen pericial, por tanto, debe rechazarse el cargo de injuricidad que se formula.

La Sala es consciente de que la errada valoración hacía referencia a la cuantía del daño moral, no a su existencia, por lo que la Sala no puede entrar a discutir su inexistencia por cuanto no se ha pretendido tal declaración ni se ha señalado en el recurso éste extremo. Ello es así, toda vez que la existencia misma del daño moral, no fue objeto del recurso, mediante su oportuna motivación, sino, por el contrario, su existencia no fue controvertida, por el recurrente.

Por virtud de lo que viene señalado, considera la Sala que los errores probatorios a los que se refiere la parte que recurren, como se ha dejado expuesto, no se configuran, con lo que, tampoco, se produce la violación a las normas citadas como infringidas por el recurrente. Al no darse el vicio de ilegalidad imputado al ad-quem, debe la Sala denegar la solicitud formulada por la parte casacionista con el recurso, de casar la sentencia recurrida.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 22 de febrero de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en el proceso ordinario propuesto por GUILA LALO DE COHEN, MORRIS COHEN y DAYANA COHEN LALO contra INVERSIONES Y PROYECTOS MARBELLA, S. A., CORPORACION DE EDIFICACIONES, S. A. y COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S. A..

Las costas a cargo de la parte recurrente se fijan en CIENTO CINCUENTA BALBOAS (B/.150.00).

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAFAEL ALCEDO CAMAÑO EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES MARIANETH DEL MILAGRO Y

LIZETH DEL CARMEN ALCEDO AGUILAR RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN DE SECUESTRO) QUE LE SIGUEN A JOSÉ RICAUTER APONTE PINEDA, ASSA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A., AGROGANADERA SAN ANTONIO, S.A Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma BERRÍOS & BERRÍOS, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 24 de julio de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de los procesos ordinarios de mayor cuantía acumulados que han instaurado RAFAEL ALCEDO CAMAÑO, quien actúa en nombre y representación de sus menores hijas MARIANETH DEL MILAGRO Y LIZETH DEL CARMEN ALCEDO AGUILAR, de MODESTA IGUALA IGUALA, quien actúa en representación de la sucesión intestada de SEBASTIÁN IGUALA IGUALA (Q.E.P.D.), y de DIONISIA RODRÍGUEZ o DIONISIA DE GRACIA, en representación de la sucesión intestada de SALVADORA MOJICA RODRÍGUEZ (Q.E.P.D.), en contra de JOSÉ RICAUTE APONTE PINEDA, ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS, S. A., AGROGANADERA SAN ANTONIO, S. A., NAVIERA VERAGUAS, S. A., VIRZI GRACIADEI, S. A., ASSA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. y COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGUROS, S. A.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, siendo aprovechado por la partes, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución y la cuantía se enmarcan dentro de lo establecido por la ley para la concesión del recurso. Además, en cuanto a la exigencia establecida en el artículo 1165 del Código Judicial, en relación con el artículo 1159 de ese cuerpo de leyes, en materia de interposición oportuna del recurso, esto es, por el término improrrogable de diez (10) días, se observa que el mismo se formalizó en tiempo.

Se presenta una única causal de casación en el fondo, la cual es: "infracción de norma sustantiva de derecho, por error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo que ha influido de 3.modo sustancial en lo dispositivo del fallo". Observa la Sala que dicha causal aparece mal enunciada, toda vez que el artículo 1154 del Código Judicial señala una única causal de fondo: "infracción de normas sustantivas de derecho, en cualquiera de los siguientes conceptos, violación directa, interpretación errónea de la norma, aplicación indebida, error de derecho en la apreciación de la prueba y error de hecho sobre la existencia de la prueba.

La Sala advierte, tal como lo ha reiterado con anterioridad, que ocurre el error de hecho en la existencia de la prueba cuando el juzgador desconoce el medio o elemento probatorio, lo ignora o da por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. Y se presenta error de derecho, en cambio, cuando el juez no valora las pruebas allegadas al proceso, con arreglo a las normas de la sana crítica.

Los motivos que sustentan la causal son cuatro y en ellos aparece expuesto, grosso modo, el vicio de ilegalidad que se formula contra la sentencia impugnada. Se refiere a ellos, el recurrente, en el primer motivo, que el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la sentencia apelada, dictada por la Juez de la Causa, sin tomar en cuenta, a pesar de contar en autos, según el recurrente en casación, la prueba de inspección y reconocimiento y reconstrucción de los hechos, con intervención de peritos.

En el segundo motivo, el casacionista señala que la sentencia del Tribunal Superior, no tomó en cuenta la prueba documental consistente en el auto de llamamiento a juicio proferido en contra del demandado José Ricaute Aponte

Pineda, por el Juez Segundo de Circuito de Coclé, ya que dicha prueba contiene el nexo de causa a efecto entre el daño causado a los demandantes y la conducta culposa del demandado antes mencionado al propiciar el accidente ocurrido el 18 de octubre de 1987.

El tercer motivo, señala el casacionista, que las pruebas antes aludidas, al constar los procesos acumulados, no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal de la Alzada en la sentencia recurrida, para establecer el nexo causal entre los daños causados a los demandantes y la conducta culposa del demandado José Ricaute Aponte Pineda, al ocasionar el accidente de tránsito ocurrido el 18 de octubre de 1987, en la Carretera Panamericana, en horas de la noche, en la jurisdicción del Distrito de Aguadulce.

En el cuarto y último motivo, el recurrente señala que el error probatorio al no tomarse en cuenta las pruebas antes mencionadas por el Tribunal de la Alzada, en la sentencia cuestionada, ha influido de modo sustancial en lo dispositivo de la resolución impugnada.

Considera la Sala que estos motivos han sido redactados en forma de cargos de injuricidad contra la sentencia de segunda instancia, en los que se deja especificados los medios probatorios supuestamente no examinadas por el A-quem y la forma cómo dichos errores probatorios influyeron en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Dentro de las normas que se citan como infringidas, aparecen tanto las de naturaleza probatoria como las de carácter sustantivo. Respecto de cada una, en términos generales, se expone el concepto de infracción, cumpliéndose de esta manera con las pautas que, al respecto, tiene dispuesta la Ley y esta Sala, por vía de jurisprudencia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por la firma BERRÍOS Y BERRÍOS, para la cual se concede el término de cinco (5) días hábiles, tal como lo establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GAMALIEL PINTO MARTINEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR BOLIVAR PINTO CORREA, ROBERTO ANTONIO PINTO M. MAIRA ROSA PINTO DE CASTILLO Y DELIA MARIA PINTO DE MACIAS EN SU CONDICIÓN DE HEREDEROS DECLARADOS DENTRO DE LA SUCESIÓN INTESTADA DE AURORA MARTINEZ CORREA DE PINTO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Rafael E. Collins, en su condición de apoderado judicial de GAMALIEL PINTO MARTINEZ, ha interpuesto recurso de casación de FORMA Y FONDO contra la Resolución de 20 de junio de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial dentro del Proceso Ordinario interpuesto por BOLÍVAR PINTO CORREA, ROBERTO ANTONIO PINTO, MAYRA ROSA PINTO DE CASTILLO Y DELIA MARÍA PINTO DE MACÍAS en su condición de herederos declarados de la sucesión intestada de AURORA MARTÍNEZ CORREA DE PINTO contra GAMALIEL PINTO MARTÍNEZ.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que solo fue aprovechado por la parte recurrente, tal y como se evidencia de fojas 123 a 124 del expediente.

La Sala procede a la confrontación del escrito de casación con los presupuestos que determina el artículo 1165 del Código Judicial para su admisibilidad.

La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, pues se ajusta a lo normado por los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial y el recurso ha sido interpuesto dentro del término legal.

En cuanto al análisis del escrito de formalización, en relación a los requerimientos consagrados en el artículo 1160 del citado código, veremos en primer lugar la casación en la forma y posteriormente la de fondo.

Como causal única de forma se invoca la siguiente: "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley, porque se omite fallar reconociendo la obligación de que no se podía iniciar este proceso mientras estaba pendiente otro, presentado con anterioridad (numeral 1, del artículo 1149 del Código Judicial)". (Foja.107)

En primer lugar, al enunciarse la causal se señala que está contemplada dentro del artículo 1149 del Código Judicial, cuando se trata de una causal de forma consagrada expresamente en el artículo 1155 de ese cuerpo de leyes.

En segundo lugar, el recurrente ha enunciado la causal indebidamente puesto que invoca, por un lado, el supuesto contemplado en el numeral 1 del artículo 1155 que señala "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley", y al explicar cuál es el trámite o diligencia omitido, señala lo siguiente: "Porque se omite fallar reconociendo la obligación de que no se podía iniciar este proceso mientras estaba pendiente otro, presentado con anterioridad", lo cual es congruente, no con el numeral primero, sino con el numeral séptimo de dicho artículo que expresa "por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque:

1...
2... Se deje de resolver algunos de los puntos que lo hayan sido.
3..."

La irregularidad anotada también se manifiesta en los motivos de la causal:

"PRIMER MOTIVO: En la sentencia de Primera Instancia, el Tribunal "A-QUO" (véase fojas 89 a 93 del expediente) OMITE, en violación de la ley procesal, decidir y pronunciarse formalmente en la parte resolutiva de dicho fallo sobre la imposibilidad que existe de poder iniciar este proceso, porque la parte demandante había iniciado otro sobre las mismas partes, objeto, hechos y causa de pedir.

SEGUNDO MOTIVO: Que el Tribunal de Segunda instancia omite reconocer el escrito de sustentación de la alzada (véase fojas 81-83 del expediente), en la cual se establece la imposibilidad de continuar con este proceso, error en que incurrió el Tribunal "Ad-Quo" en la sentencia de 27 de enero de 2000 (véase fojas 37 a 41 del expediente), reclamación esta ignorada en desconocimiento de la ley por el Tribunal Superior de Justicia.

TERCER MOTIVO: El Tribunal "AD-QUEM", a pesar de constarle el enjuiciamiento de mi representado por el delito de falsedad tramitado en el Juzgado Cuarto de Circuito de Panamá, dentro del proceso penal instaurado por estas mismas personas, no sólo acepta la continuación del presente juicio instaurado por las mismas

partes, sino que confirma la dictada por el Juez Segundo del Circuito de Chiriquí que fue presentada el 22 de octubre de 1997". (Fs.108).

En el primer motivo se le atribuye al tribunal la omisión de pronunciarse, en la parte resolutiva del fallo, acerca de la imposibilidad de que se iniciara el proceso, cargo que no guarda relación con la causal contemplada en el numeral 1 del artículo 1155 del Código Judicial, si no con la incongruencia o falta de consonancia entre lo pedido y lo fallado, tema al que se refiere el numeral 7 del artículo 1155 del Código Judicial. En el segundo motivo, el recurrente vuelve a manifestar que el tribunal omitió reconocer la reclamación contenida en el recurso de apelación presentado, lo cual es congruente con la causal de forma establecida en el numeral 7 del artículo 1155 del Código Judicial.

En el apartado correspondiente a las disposiciones violadas y el concepto de la infracción, se cita únicamente el artículo 668 del Código Judicial, omitiéndose indicar las normas que hacen referencia a las causales de nulidad establecidas en ese código.

En razón de lo expuesto, es claro que la incongruencia del planteamiento hace ininteligible la causal, por lo que esta no puede ser admitida.

Como causal única de fondo se invoca la "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. (Foja 109).

En los motivos con que se estructura esta causal se dice lo siguiente:

"PRIMER MOTIVO: El Tribunal "Ad-Quem", en la sentencia que se impugna, realiza una interpretación deductiva o por inferencia cuando anula la Escritura Pública No.6625 de 20 de agosto de 19997, y ordena al Registro Público levantar la inscripción de dicho instrumento público, expedido por un notario, cumpliendo con las formalidades legales, violando de manera directa por omisión las disposiciones legales que sobre este punto tiene nuestro ordenamiento jurídico, que depositan en el notario, fe pública respecto de los documentos y contratos que ante él deben pasar y en su confianza respecto de los documentos que se ponen bajo su custodia, influyendo erróneamente en lo dispositivo del fallo.

SEGUNDO MOTIVO: En la sentencia impugnada el Primer Tribunal Superior de Justicia al anular la Escritura Pública No.6625 de 20 de agosto de 1997, viola de manera directa por omisión, claras disposiciones legales, cuando pierde de vista que para anular una Escritura es necesario determinar primero si se trata de la misma escritura, o del contrato contenido en ella, cosa que no hizo; influyendo en forma errada en lo dispositivo del fallo.

TERCER MOTIVO: El Tribunal de Grado, en la sentencia recurrida pretende sustentar su hermenéutica legal en la nulidad de la Escritura Pública, utilizando los mismos planteamientos que expuso la parte demandante sin precisar si se trataba de la Escritura Pública o el contrato contenido en ella, sin considerar claras disposiciones del Código Civil y Judicial sobre este punto, violando de manera directa por omisión tales normas jurídicas que de haber sido evaluadas hubieran influenciado en lo dispositivo del fallo de otra manera y no como lo hizo". (Foja 110)

Los motivos así enunciados no denotan un cargo concreto y preciso contra la sentencia impugnada. En el primer motivo el recurrente se limita a censurar la interpretación que hizo el tribunal al anular la Escritura Pública No.6625 y ordenar el levantamiento de la inscripción en el Registro Público; en los motivos segundo y tercero, pareciera que el recurrente alega que el tribunal no determinó

si anulaba el contrato o la escritura contentiva del contrato. Además, el recurrente no explica claramente de qué manera lo censurado influyó en la parte resolutiva del fallo impugnado. Sólo se refiere a que se violaron normas jurídicas que "de haber sido evaluadas hubieran influenciado en lo dispositivo del fallo de otra manera y no como lo hizo".

En el apartado correspondiente a las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, el recurrente manifiesta, al explicar el concepto de violación del artículo 1727 del Código Judicial, que "Dentro del proceso no consta el documento original, ni el protocolo firmado de la partes, tampoco consta un informe pericial que diga o señala que lo actuado por el notario es susceptible de anulación requisito sine qua non", observándose que lo cuestionado es que el tribunal anuló la inscripción de una escritura pública sin que en el expediente existieran los elementos probatorios necesarios para determinar esa anulación, aseveración que no es congruente con la causal invocada, ya que en su planteamiento discrepa de la valoración probatoria del ad-quem, cuando la causal invocada es violación directa, alegada independientemente de toda cuestión probatoria. (fs.111)

Cabe recordar que la causal invocada en este caso, violación directa, se produce cuando, entendida rectamente una norma y sin haber sido objeto de un análisis interpretativo, la disposición deja de ser aplicada al caso pertinente, o cuando la norma se aplique desconociendo un derecho en ella consagrado en forma clara. Esta es una causal que se produce independientemente de toda cuestión de hecho, ya que el Tribunal de casación no se apartará de considerar como hechos los reconocidos en la sentencia, salvo que se invoquen las causales probatorias.(Cfr.CASACION, J. Fábrega,1985, fs.128-129).

Aunado a lo anterior, de las normas citadas como infringidas (artículos 1715,1727 del Código Civil y el artículo 867 del Código Judicial), la última regula el trámite de "tacha de falsedad", por lo que de dicha norma no pueden desprenderse supuestos de violación de contenido material. Esa cita rompe la debida armonía entre el apartado correspondiente a las normas infringidas y al de los motivos, así como entre éstos y la causal invocada. (fs.112)

En virtud de lo anterior, la Sala considera que la causal de fondo presenta importantes defectos que la hacen ininteligible, razón por la cual no puede ser admitida.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Rafael E Collins en su condición de apoderado judicial de GAMALIEL PINTO MARTINEZ contra la Resolución de 20 de junio de 2000 dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial dentro del Proceso Ordinario interpuesto por BOLIVAR PINTO CORREA, ROBERTO ANTONIO PINTO, MAYRA ROSA PINTO DE CASTILLO Y DELIA MARÍA PINTO DE MACÍAS en su condición de herederos declarados de la sucesión intestada de AURORA MARTÍNEZ CORREA DE PINTO contra GAMALIEL PINTO MARTÍNEZ.

Las costas de casación se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO

Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ATALAYA Y EL JUZGADO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE OCU EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTIA INCOADO POR MARIANO QUINTERO ARROYO CONTRA TEOFILO MORENO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento de esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Municipal del Distrito de Atalaya y el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú, respecto al proceso ordinario de menor cuantía promovido por el señor MARIANO QUINTERO ARROYO contra el señor TEOFILO MORENO.

El presente negocio fue remitido a esta corporación de justicia, mediante Auto N 920 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera el 12 de octubre de 2000.

De acuerdo con las constancias procesales, el señor MARIANO QUINTERO ARROYO presentó demanda ordinaria de menor cuantía contra el señor TEOFILO MORENO ante el Juzgado Municipal del Distrito de Atalaya quien la admitió, mediante auto fechado 8 de junio de 2000 en el que ordenó correrla en traslado al demandado.

Igualmente, a foja 12 consta el poder otorgado personalmente ante el Juez Municipal del Distrito de Atalaya, por el demandado TEOFILO MORENO al Licenciado Julio Lu Osorio quien, en consecuencia, presentó el 24 de julio de 2000, en nombre del primero, escrito de contestación de la demanda, el cual es consultable a fojas 13 y 14.

A continuación, el Juzgado Municipal de Atalaya dictó Auto fechado 25 de julio de 2000, en el cual se inhibe de seguir conociendo el citado proceso ordinario de menor cuantía y lo remite al Juzgado Municipal del Distrito de Ocú, por considerar que este último es el juez competente en atención a lo dispuesto en el artículo 255 del Código Judicial, ya que el domicilio del demandado se encuentra en el Corregimiento de Rincón Grande de Ocú, Provincia de Herrera.

Por su parte, el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú al recibir el negocio profiere el Auto N 115 de 25 de septiembre de 2000, en el cual también se inhibe de aprehender el conocimiento y lo envía al Juzgado Primero del Circuito de Herrera para que dirima el conflicto de competencia. No obstante, el Juez Primero lo remite a esta corporación de justicia con fundamento en el numeral 3 del artículo 93 del Código Judicial, en vista de que no existe otro superior común entre el Juzgado Municipal de Ocú, que pertenece al Circuito Judicial de Herrera y el Juzgado Municipal de Atalaya, que pertenece al Circuito Judicial de Veraguas.

Para resolver la presente controversia son pertinentes los artículos 242, 248 y 255 del Código Judicial que a la letra dicen:

> **"ARTICULO 242. La competencia que se fija por razón del lugar donde ventilarse el proceso puede ser prorrogada.**
>
> **Se entiende que hay prórroga de competencia, cuando un tribunal que no es llamado a conocer del proceso, por razón de la su cuantía o del lugar donde debe ventilarse, conoce de ella por voluntad de las partes.**
> **...**
>
> **ARTICULO 248. La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste ocurre a determinado tribunal, interponiendo la demanda; y por parte del demandado por el hecho de hacer, después de contestada la**

demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad por falta de competencia.

ARTICULO 255. Por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, como regla general en los procesos civiles, el Juez competente es el del domicilio del demandado; y en los actos de procesos no contenciosos de carácter civil, el del interesado."

De las normas transcritas se colige que por regla general en los procesos civiles es competente el Juez del domicilio del demandado, pero aclarándose que dicha competencia puede ser prorrogada por voluntad de las partes. Igualmente, se señala que la prórroga tácita de la competencia por parte del demandante se produce cuando éste interpone su demanda en determinado Tribunal, como ha sucedido en el presente caso en el cual el demandante promovió su demanda en el Juzgado Municipal del Distrito de Atalaya y no en el del domicilio del demandado, Ocú, Provincia de Herrera.

Ahora bien, en cuanto a la prórroga tácita de la parte demandada el citado artículo 248 dispone que tendrá lugar cuando ésta, después de contestada la demanda, haga cualquier gestión que no sea la de promover un incidente por falta de competencia.

Sin embargo, es preciso señalar que esta disposición legal está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 706 del Código Judicial, el cual señala que, salvo que se trate de competencia improrrogable, se debe promover el incidente de incompetencia antes de la contestación de la demanda o conjuntamente con ella.

En relación con esta contradicción que existe entre los artículos 248 y 706 del Código Judicial, resulta conveniente citar el criterio expuesto en el folleto titulado "Las Incidencias Procesales y su Perspectiva Constitucional", preparado por JORGE LOMBARDO, BERARDO DIAZ y JOSE RAMON GONZALEZ CLAVIJO, en el que se señala lo siguiente:

"Esta contradicción queda salvada si damos preferencia al artículo 706 por las siguientes razones:

1. La contestación a la demanda es un acto procesal de parte, de gran trascendencia al fijar el objeto de la relación jurídico procesal de manera definitiva.

2. La parte alega y expone y quiere del Juez un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión, es decir, de carácter no meramente formal sino sustancial. Por lo tanto la contestación en sí misma ya es una convalidación si seguimos el criterio general del Código Judicial en la forma que lo hemos estudiado en el capítulo relativo a la nulidad.

3. El artículo 706 es una norma de carácter especial, procesal y posterior y por eso preferente a la del artículo 248, anterior y general." (Fondo Mixto Hispano Panameño, Proyecto de capacitación judicial continuada, Panamá, julio-agosto 2000, págs. 118-119)

La Sala considera acertada esta interpretación de los artículos 248 y 706 del Código Judicial y, en consecuencia, concluye que en el presente caso, en el que el demandado contestó la demanda sin promover el incidente por falta de competencia, se ha producido la prórroga tácita de la misma por parte del demandado, tal como lo consideró el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú.

En estas circunstancias, se le debe ordenar al Juzgado Municipal del Distrito de Atalaya que continúe con el trámite del presente proceso ordinario de menor cuantía, en vista de que las partes prorrogaron tácitamente la competencia, fijándola en ese tribunal.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el proceso ordinario de menor cuantía instaurado por el señor MARIANO QUINTERO ARROYO contra el señor TEOFILO MORENO, es competencia del Juzgado Municipal del Distrito de Atalaya.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA, RAMO CIVIL Y EL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON, RAMO CIVIL, EN EL PROCESO ORDINARIO DE MENOR CUANTIA INCOADO POR ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. CONTRA ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Colón ha remitido a esta Corporación el Conflicto de Competencia suscitado entre el mencionado y el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, para que conozca y dirima el mismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 93, numeral 3 del Código Judicial.

Esta Sala de la Corte procede a resolver lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

Mediante resolución de 17 de julio de 2000, el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá decidió abstenerse de conocer el proceso ordinario de menor cuantía promovido por ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. contra ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD y ordena que se envíe al expediente al Juzgado competente, que sería el Juzgado Municipal de Colón. Para llegar a esta determinación el juzgador señala lo siguiente:

Que dentro del proceso ordinario de menor cuantía con acción de secuestro promovido por ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. contra ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD, por solicitud de la parte actora, se comisionó al Juez Municipal de Colón para que notificara y practicara el secuestro contra el demandado. Luego de efectuadas las gestiones se advierte que el demandado tiene su domicilio en Colón y que la colisión que motiva el reclamo ocurrió en esa jurisdicción, por lo que, conforme al artículo 255 y 258 caso segundo del Código Judicial, no tiene competencia para conocer del proceso. (fs.40).

Por su parte el Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Colón, Ramo Civil, profirió el Auto el No.71 de 24 de agosto de 2000, en el que señala que no tiene competencia en el presente caso ya que la misma se ha prorrogado a favor del Juzgado Primero Municipal Civil de Panamá, en base a las siguientes consideraciones:

Alega que entre los criterios para determinar la competencia se encuentra el convencional, donde las partes determinan la competencia en ciertos procesos, regulado por el artículo 242 del Código Judicial que establece lo siguiente:

> "Artículo 242. La competencia que se fija por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso puede ser prorrogada.

> Se entiende que hay prórroga de competencia cuando el Tribunal, que no es llamado a conocer del proceso por razón de su cuantía o del lugar donde debe ventilarse, conoce de ella por voluntad de las partes. En todos los casos de prórroga de competencia, se observará la regla de que los Jueces de Circuito puedan conocer de los procesos de menor cuantía; pero los Jueces Municipales no pueden conocer de los procesos de mayor cuantía."

En la competencia territorial las partes determinan el juez al que acudirán para conocer de la causa, lo que supone la prórroga de competencia siempre que se tenga la competencia objetiva.

Según se aprecia en esta causa, el demandado ANSELMO ESQUINA se notifica vía exhorto del Auto que le corre traslado de la demanda (el 15 de junio de 2000) y no hace ningún señalamiento respecto a la competencia del negocio, por lo que se entiende que hubo prórroga tácita de competencia en relación con el Juzgado Primero Municipal Civil de Panamá. El artículo 248 del Código Judicial establece que la prórroga de competencia procede en forma tácita, por parte del demandado, por el hecho de que se haga, después de contestada la demanda, cualquier gestión diferente al incidente de nulidad. Pero este artículo hay que interpretarlo en concordancia con el artículo 706 que establece que, salvo los casos de competencia improrrogable, el incidente de incompetencia será interpuesto antes de la contestación de la demanda o conjuntamente con esta. En este caso el demandado se notificó del auto que corre traslado de la demanda, dejando precluir el término para contestarla, lo que podría interpretarse en el sentido de que también dejó precluir el término para presentar el incidente de falta de competencia prorrogándose tácitamente la competencia al Juzgado Primero Municipal de Panamá.

Para resolver lo de lugar, la Sala pasa a revisar el contenido de las normas que fundamentaron las resoluciones de los juzgados en conflicto:

> "Artículo 255. Por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, como regla general en los procesos civiles, el Juez competente es del domicilio del demandado; y en los actos de procesos no contenciosos de carácter civil, el del interesado"
>
> Artículo 258: También son Jueces competentes para conocer del proceso civil los que se mencionan en cada uno de los casos siguientes, además del Juez que ejerza sus funciones en el domicilio del demandado, todos los cuales conocerán a prevención según la elección que haga el demandante."
>
> Artículo 248. La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste ocurre (sic) a determinado tribunal, interponiendo la demanda; y por parte del demandado por el hecho de hacer, después de contestada la demanda, cualquier gestión que no sea la de promover incidente de nulidad por falta de competencia.
>
> Artículo 706. Salvo que se trate de competencia improrrogable, el incidente de incompetencia será interpuesto antes de la contestación de la demanda o conjuntamente con ésta. La interposición del incidente no suspende la tramitación del proceso, pero en ningún caso el Juez podrá dictar sentencia hasta tanto se ejecutoríe la resolución que decida el incidente.
>
> La resolución que decide el incidente admite únicamente el recurso de apelación, que se concederá en el efecto devolutivo."

Según se ha podido verificar en el expediente, la demanda se presentó en el Juzgado Municipal del Primer Distrito Judicial de Panamá; éste la admitió y libró exhorto al Juzgado Municipal de Colón para que notificara al demandado ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD y le corriera traslado de la misma por el término de

5 días (fs.1, 15 y 23). Posteriormente, el Juzgado de Colón devuelve el exhorto debidamente diligenciado con un cuadernillo de ocho fojas (fs.26), donde consta que se emitió la boleta de citación del demandado para ponerlo en conocimiento de la diligencia (fs.33), sin embargo, según informe secretarial (fs.35) no se le localizó, pues en el lugar correspondiente se indicó que no se encontraba, pero que realizaba trabajos eventuales para esa empresa. En base a ese informe, de conformidad con el artículo 1243 del Código Judicial, se requirió nuevamente al demandado a fin de que contestara la demanda en el término de tres días o de lo contrario se le declararía confeso de los hechos de la demanda. El término venció, sin que la demanda fuera contestada (cfr.fs.39).

De acuerdo a los preceptos legales aplicables, si bien es cierto que por razón del lugar donde debe ventilarse el proceso, como regla general, el juez competente es el del domicilio del demandado, dicha competencia puede ser prorrogada. La prórroga es tácita por parte del demandante cuando éste concurre a un determinado tribunal (que no es el llamado a conocer del proceso) a efectos de interponer su demanda; situación ocurrida en el presente caso, puesto que el actor presentó su demanda en el Juzgado Municipal de Panamá, que no es el del domicilio del demandado.

En cuanto a la prórroga tácita por parte del demandado, esta se produce cuando el demandado realice cualquier gestión, después de contestada la demanda, que no sea proponer un incidente de nulidad por falta de competencia. Este incidente de incompetencia deberá interponerse antes de la contestación de la demanda o conjuntamente con ésta (art. 706).

Como se ha podido apreciar, en el caso que nos ocupa el demandado no contestó la demanda en el término de ley, considerándosele confeso de los hechos de la demanda y, por tal motivo, ha de entenderse que precluyó su oportunidad de oponerse a la prórroga de competencia ejercida por el demandante, quien escogió el Juzgado Municipal de Panamá para interponer la demanda. Consecuentemente, lógico es deducir que se ha producido también la prórroga tácita de competencia por parte del demandado.

Debido a estas circunstancias, le asiste razón al Juzgado Segundo Municipal de Colón al no avocar el conocimiento del presente proceso, por la existencia de una prórroga tácita de competencia, en virtud de la cual las partes, expresamente en el caso del demandante y tácitamente en el caso del demandado, le otorgaron o prorrogaron al Juzgado Primero Municipal de Panamá la competencia para dirimir el conflicto.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA al Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil, que avoque el conocimiento del presente proceso ordinario de menor cuantía instaurado por ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. contra ANSELMO ESQUINA ARCHIBOLD.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

HISPAN, S. A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE A SANDINAVIAN MOTORS, S. A. Y GRUPO SILABA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado ELIGIO A. SALAS ha solicitado al resto de los Magistrados que integran la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que lo separen del conocimiento del recurso de casación interpuesto por HISPAN, S. A., dentro del proceso ordinario que le sigue a SCANDINAVIAN MOTORS, S. A. y GRUPO SILABA, S. A.

El Magistrado Salas fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

> "Como fundamento fáctico para solicitar la separación del caso manifestamos que para la época en que se presentó la reclamación extrajudicial (veáse fojas 77 y 78) prestaba servicios profesionales en la firma forense Infante, Garrido y Garrido. Posteriormente, a la citada sociedad civil, el representante legal de HISPAN, S. A. le confirió poder especial para presentar demanda ordinaria de mayor cuantía contra SCANDINAVIAN MOTORS, S.A y GRUPO SILABA, S. A.
>
> Tal como se señala en las líneas que preceden, trabajé en la firma forense que apodera los intereses de la demandante en los años 94 y 95, relación que terminó desde que en 1996 fui designado como Magistrado de esta Corporación de Justicia."

En vista de que la situación descrita por el Magistrado Salas corresponde a la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, se debe declarar legal el impedimento solicitado.

Por las razones anteriormente expuestas, los suscritos Magistrados de la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ELIGIO A. SALAS y, en su lugar, DISPONEN llamar al Magistrado de la Sala Penal que corresponda, para que conozca del presente negocio.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

JUAN GARCIA ALCEDO RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCION DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2,000 DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO, RELACIONADA CON LA RESOLUCION DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 1999, QUE ORDENA LA CANCELACION DE LOS ASIENTOS 6440 DEL TOMO 249 Y 7904 DEL TOMO 244. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JUAN GARCIA ALCEDO, apoderado especial de la señora GLORIA MELGAR DE MIZRCAHI, ha interpuesto recurso de hecho contra el auto dictado por la Dirección General del Registro Público el 4 de septiembre de 2000, relacionado con los Asientos N 6440 del Tomo 249 y N 7904 del Tomo 244.

En dicha resolución el Registro Público consideró que no era procedente, por extemporáneo, el recurso de apelación presentado contra la cancelación por edicto de los Asientos anteriormente mencionados.

Por su parte, el recurrente fundamenta su recurso de hecho en los siguientes puntos:

1) Mediante sendas resoluciones fechadas 12 de noviembre de 1999, la Dirección General del Registro Público ordenó la cancelación de los Asientos N 7904 del Tomo 244 y N 640 del Tomo 249, relacionados con el Auto de embargo decretado por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil contra ISAAC RAMON MIZRACHI MARTINEZ, sobre la finca N 50389 de su propiedad y a favor de la señora GLORIA M, DE MIZRACHI.

2) Dichas resoluciones "no fueron puestas en conocimiento de las partes interesadas, ni por vía de edicto ni mucho menos a través del trámite de la notificación personal; todo lo cual permite concluir que las resoluciones cuestionadas al momento de anunciarse y sustentarse el Recurso de Apelación que hoy niega la Dirección General del Registro Público no estaban en firme ni ejecutoriadas, por lo que mal podría rechazarse el recurso presentado bajo el concepto de que el mismo era extemporáneo." (F. 3)

Luego de analizar las constancias procesales, el Magistrado Sustanciador se percató de la necesidad de complementar las copias que se presentaron con el recurso de hecho, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1139 del Código Judicial, se solicitó a la Dirección del Registro Público que remitiera todos los documentos relacionados con la cancelación de los Asientos N 7904 del Tomo 244 y N 6440 del Tomo 249, incluyendo los edictos de notificación con los respectivos sellos de fijación y desfijación, de las dos resoluciones fechadas 12 de noviembre de 1999.

Habiéndose recibido los documentos solicitados, procede la Sala a decidir si debe admitir el presente recurso de hecho, tomando en consideración lo dispuesto en el Código Judicial.

Al respecto, el artículo 1141 del Código Judicial señala que para admitir un recurso de hecho se requiere lo siguiente: 1) Que la respectiva resolución sea recurrible; 2) Que el recurso se haya interpuesto oportunamente y se haya negado expresa o tácitamente; y, 3) Que la copia se pida y retire en los términos señalados y se ocurra con ella ante el superior en la debida oportunidad.

En el presente caso la Sala advierte que se ha cumplido con los requisitos primero y tercero, razón por la cual debe determinarse si el recurso de apelación fue interpuesto oportunamente.

Al revisar los documentos enviados por el Registro Público se ha podido constatar que le asiste razón al recurrente cuando sostiene que las dos resoluciones fechadas 12 de noviembre de 1999, en las que se ordena la cancelación de los Asientos N 7904 del Tomo 244 y N 6440 del Tomo 249 respectivamente, no fueron notificadas, ya que no existe constancia de que se hayan notificado personalmente ni tampoco aparecen los edictos correspondientes.

En esas circunstancias, debe entenderse que dichas resoluciones no se encuentran en firme y, por tanto, no han empezado a surtir efectos, al tenor de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 1008 del Código Judicial que a la letra dice:

> "ARTICULO 1008. Ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos antes de haberse notificado legalmente a las partes.
> ..."

Igualmente y como consecuencia de la falta de notificación de las citadas resoluciones, no puede considerarse que las mismas se encontraban ejecutoriadas al momento en que se propuso el recurso, por lo que debe concluirse que dicho medio de impugnación no fue presentado extemporáneamente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1117 del Código Judicial que señala lo siguiente:

"ARTICULO 1117. La parte que se creyere agraviada tiene derecho de apelar en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a la notificación si fuere sentencia y dos días si fuere auto.
..."

De lo anteriormente expuesto se colige que se debe admitir el presente recurso de hecho presentado contra la resolución proferida por la Dirección General del Registro Público el 4 de septiembre de 2000 y, en vista de que el expediente correspondiente ya fue remitido a esta corporación de justicia, se le debe conceder al recurrente un término de tres días para que sustente su recurso de apelación contra los autos fechados 12 de noviembre de 1999, por medio de los cuales se ordenó la cancelación de los Asientos N 6440 del Tomo 249 y N 7904 del Tomo 244 respectivamente y los tres días siguientes para que se presenten las objeciones al mismo.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho interpuesto por el Licenciado JUAN GARCIA ALCEDO, en representación de la señora GLORIA M. DE MIZRACHI, contra la resolución dictada por el Registro Público de Panamá el 4 de septiembre de 2000, que negó el recurso de apelación propuesto contra las resoluciones fechadas 12 de noviembre de 1999 que ordenan la cancelación de los Asientos N 6440 del Tomo 249 y N 7904 del Tomo 244 respectivamente, y, en consecuencia, CONCEDE al apelante un término de tres días para que sustente su recurso de apelación contra los autos dictados por el Registro Público el 12 de noviembre de 1999 y los tres días siguientes para que la parte opositora haga valer sus objeciones.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado de la Sala Civil

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

NOVIEMBRE 2000

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

AUTO DE PROCEDER APELADO A FAVOR DE MANUEL CARRILLO BRUX, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE GLADYS YINETH REYNA TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante auto fechado 11 de octubre de 1999, abrió causa criminal contra Enmanuel Guillermo Carrillo Brux, por la presunta comisión de los delitos de homicidio en perjuicio de la menor Gladys Jineth Reina Tuñón y homicidio en grado de tentativa, en detrimento de Gaspar Antonio Tuñón Marín y Fernando Abdiel Pérez. Contra la meritada resolución judicial, la defensa técnica de Carrillo Brux anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

Del extenso y confuso libelo de apelación se desprende básicamente que el apelante solicita que, previa la revocatoria del auto apelado, se tipifique la conducta de su patrociando en culposa y se decline el conocimiento del negocio a la esfera de los juzgados de circuito, toda vez que el Tribunal Superior erró en la calificación genérica del delito, así como también erró al calificar la conducta de su patrocinado como homicidio en grado de tentativa, pues la misma debe ser tipificada como lesiones personales (fs.1067-1078).

Conocidos los argumentos del recurrente, la Sala pasa a resolver la alzada, de conformidad con el caudal probatorio y según lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial.

El Tribunal Superior basó su decisión en el hecho de que la vinculación de Carrillo Brux con el homicidio de la menor Reyna Tuñón y las heridas sufridas por Tuñón Marín y Pérez se desprenden de su declaración indagatoria, al admitir que disparó en varias ocaciones contra el vehículo donde viajaban las víctimas, así como de los testimonios de los afectados. En consecuencia, concluye el tribunal que, como el perjuicio que causó Carrillo Brux se derivó de un sólo comportamiento, debe ser llamado a responder criminalmente por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa (fs.1046-1059).

Al respecto de la conducta culposa consagrada en el artículo 32 del Código Penal, la misma contempla dos modalidades en las que se puede llevar a cabo: así, "obra con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales", es decir, que el sujeto activo no prevé que con su actuación pueda resultar la violación de una norma sustantiva penal. También obra con culpa cuando el agente se representa como posible la infracción de la ley penal, pero "actúa confiado en poder evitarlo" (Cfr. Sentencia de Sala Penal de 20 de mayo de 1994).

En cuanto al comportamiento doloso, se advierte que este también se presenta en dos formas. Primero, se actúa con dolo cuando el agente desea los resultados del hecho legalmente descrito como punible, en consecuencia, la voluntad del agente se evidencia de manera inmediata (dolo directo). El segundo, alude a la posibilidad de un dolo eventual que consiste en el "conocimiento de la posibilidad del resultado y la aceptación, por el agente, de la responsabilidad eventual dimanante de la realización del hecho...no se quiere el resultado pero se acepta, ya que el individuo asume conscientemente el riesgo de infringir el tipo penal" (Registro Judicial, enero de 1994, pág.206).

En el caso que nos ocupa, observa la Corte, que no le asiste la razón al recurrente al considerar que la conducta de Carrillo Brux se llevó a cabo de

manera culposa, toda vez que el sumariado debió prever que la utilización de un arma de fuego con el ánimo de efectuar varias detonaciones contra un vehículo en marcha y ocupado por varias personas, podría ocasionar la muerte de alguna de ellas, lo cual configura por lo menos la existencia de un dolo eventual.

En efecto, tal como lo dejó expuesto el juzgador de la causa, el propio sindicado admitió haber sacado y disparado en repetidas ocasiones un arma de fuego provocando la muerte de la menor y las heridas a las víctimas (T.I. fs.100-112). De igual manera, esta Corporación de Justicia al resolver recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Carrillo Brux, contra la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior que le negaba el beneficio de fianza de excarcelación, manifestó que "en este negocio penal no es posible sostener que el hecho de sangre investigado fuera producido por el incumplimiento del deber objetivo de cuidado que le incumbía a Carrillo Brux según las circunstancias del hecho" (T.III. f.918). Luego de proferida esa resolución, no se han incorporado nuevas pruebas al proceso que permitan variar la situación procesal del imputado y consecuentemente, la postura de esta Sala.

Como quiera que en el cuaderno penal existen suficientes elementos probatorios que señalan que Carrillo Brux realizó una conducta dolosa, que causó la muerte de Reyna Tuñón y las heridas sufridas por Tuñón Marín y Pérez, esta Superioridad no tiene reparos en confirmar el auto encausatorio apelado a fin de que se decida la responsabilidad penal del sindicado.

En virtud de lo anteriomente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto calendado 11 de octubre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que abrió causa criminal contra Enmanuel Guillermo Carrillo Brux, por la comisión de los delitos de homicidio en perjuicio de Gladys Jineth Reyna Tuñón y homicidio en grado de tentativa en detrimento de Gaspar Antonio Tuñón Marín y Fernando Abdiel Pérez.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO PERIGAULT, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución judicial de 12 de julio de 2000, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ABRIO CAUSA CRIMINAL contra JOSE ANTONIO PERIGAULT (a) SAOS, como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título II, Libro II en concordancia con el Capítulo VI, Título II, Libro I del Código Penal, es decir, por el delito genérico de Homicidio en grado de tentativa en perjuicio de CARLOS ALBERTO AIZPRUA.

El referido auto fue apelado por la defensora oficiosa, licenciada MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO, quien sustentó oportunamente su inconformidad, tal cual se observa a fojas 232-235 del proceso.

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

La licenciada ALVARENGA DE APOLAYO centra su inconformidad en el hecho que

su representado, JOSE ANTONIO PERIGAULT "... ha sido llamado a juicio, sin que hasta el momento haya sido escuchado, toda vez que no ha sido indagado hasta el momento."

Expresa la recurrente que la indagatoria es el medio procesal que le permite al imputado ser escuchado y ésta diligencia no fue practicada por el Ministerio Público en los términos establecidos por la ley para la instrucción del sumario y ampliación, por lo que ante la ausencia de este acto procesal corresponde sobreseer a su representado.

Indicó la defensora oficiosa a foja 234 lo siguiente:

> "Por otro lado, continuar el proceso (sic) estaríamos prácticamente levantando la investigación a espaldas del acusado. Y sí se le llama a Juicio, ésta es una etapa tan avanzada, lo que haría más difícil para el imputado ejercer su derecho de defensa. Hasta ahora el imputado no ha podido hacer sus descargos en los momentos más propicios para su defensa.
>
> En esta etapa prácticamente no se puede realizar la contradicción de la prueba, no se ha podido intervenir en su práctica, en fin no se garantiza a éstas alturas del proceso la posibilidad de la controversia probatoria en base al principio de igualdad de las partes, ya que todo esto ocurre prácticamente en la etapa sumarial y se ha practicado ha espaldas del sumariado.
>
> Es por eso que consideramos que el principio fundamental del contradictorio no se cumple y la defensa queda menguada, aún cuando posteriormente se dé oportunidad para criticar las pruebas y hacer practicar otras, e inclusive interrogar a los mismos testigos, ya que a criterio de Hernando Davis Echandía, éstos testigos estarán comprometidos por el juramento para sostenerse en su primitiva versión."

OPINIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

Mediante escrito visible a fojas 236-237 del proceso, la Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, Coclé y Veraguas, licenciada GUILLERMINA MC DONALD DE OTTEY, si bien comparte los criterios vertidos por la apelante recomienda que se mantenga en todas sus partes el auto de llamamiento a juicio proferido en contra de JOSE ANTONIO PERIGAULT, por considerar que la declaración indagatoria puede ser receptada en el acto de audiencia.

Indicó la representante del Ministerio Público que, si bien es cierto, el procesado no ha rendido su declaración de descargos, se acreditó fehacientemente que el imputado estaba evadiendo "...la Orden de rendir Indagatoria como la orden de Detención y Captura...", por lo que la ausencia de esa prueba testimonial no ha sido por una actuación omisiva del agente instructor.

Finalmente expresó la Fiscal MC DONALD DE OTTEY, que JOSE ANTONIO PERIGAULT ha sido capturado, por lo que "...nada impide que el sindicado JOSE ANTONIO PERIGAULT, en el acto de Audiencia, sea sometido, ante el Ministerio Público, a la Diligencia de Indagatoria, Diligencia que es a la vez, PRUEBA ELEMENTAL DE DESCARGOS DEL PROPIO IMPUTADO."

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Antes de proceder a examinar el recurso de apelación presentado por la licenciada ALVARENGA DE APOLAYO, resulta pertinente efectuar un recuento de las principales piezas probatorias del expediente. Veamos:

El día 17 de noviembre de 1998, en las instalaciones del gimnasio de la Escuela Normal de Santiago el señor CARLOS ALBERTO AIZPRUA fue herido con arma

blanca por JOSE ANTONIO PERIGAULT, (a) SAOS,(foja 5). Manifiesta el ofendido (fojas 37-41) que mientras se encontraba en la práctica de foot ball se le acercó el imputado y luego de decirle "que pasó pasiero" le lanzó varias puñaladas al cuerpo, las que logró esquivar, no obstante, el atacante logró herirle en la parte izquierda de su torso, entre el abdomen y las costillas. Continuo expresando el ofendido que se encontraban presentes los señores IVAN MADRID, AUGUSTO HIDALGO, WILFREDO, GILBER, EDISON, PEDRO NUÑEZ y JOSE CABALLERO.

A folio 66 del expediente se incorporó el examen médico legal efectuado por el Instituto de Medicina Legal a CARLOS ALBERTO AIZPRUA, en el que se detallan las heridas sufridas por el ofendido, y a foja 68-69 el doctor ALVARO DUARTE ABREGO, médico forense patólogo de Veraguas que examinó a la víctima indicó, que las lesiones sufridas por el ofendido pusieron su vida en peligro.

A fojas 95-98, AUGUSTO HIDALGO,(testigo ocular) narró los hechos, coincidiendo en circunstancias de modo, tiempo y lugar con lo expresado por el ofendido, identificando que el agresor de AIZPRUA fue JOSE ANTONIO PERIGAULT.

La providencia que ordena la indagatoria a PERIGAULT se acredita a fojas 70-71, mientras que la de detención preventiva se incorpora a folios 76-79 del expediente, haciendo constar el agente instructor que las resoluciones judiciales no pudieron ejecutarse durante la instrucción del sumario por desconocerse el paradero del procesado, no obstante lo anterior, fue aprehendido el día 10 de agosto de 2000 en la provincia de Veraguas, barriada El Porvenir, y puesto a órdenes de las autoridades competentes. (Foja 220)

De conformidad con lo expresado en párrafos anteriores, se acredita que el imputado JOSE ANTONIO PERIGAULT ha sido llamado a responder criminalmente, sin que a la fecha, haya rendido su declaración indagatoria, lo que conlleva, de acuerdo a la apelante, la revocación del auto de fecha 12 de julio de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

En torno a ello debe la Sala examinar el contenido del artículo 2222 del Código Judicial, que regula lo relativo al auto de llamamiento a juicio. La norma procesal establece en su segundo párrafo lo siguiente:

> "Si encontrare que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra éste."

Resulta pertinente determinar, si en este proceso se ha acreditado la existencia del hecho punible, (homicidio doloso en grado de tentativa) así como los graves indicios de responsabilidad contra JOSE ANTONIO PERIGAULT para el seguimiento de causa.

Se observa que el hecho punible se acreditó con el examen médico legal elaborado por el doctor ALVARO DUARTE, (fojas 66) en el que se certifica que CARLOS ALBERTO AIZPRUA presenta:

> "-Cicatriz de herida cortantes de 10cm. en epigastrio izquierdo.
> -Cicatriz de herida quirúrgica de 24 cms. En la línea media, supra umbilical.
> -Con colostomía derecha.
> -Cicatriz de herida cortante de 1,4 cm. En el 1/3medio del antebrazo izquierdo."

A fojas 68-69 el galeno manifestó, que las lesiones pusieron en peligro la vida del ofendido, por cuanto que, "...hubo lesión al intestino grueso por lo que hubo necesidad de realizarle cirugía y aun así presentó complicaciones, por lo que hubo que intervenirlo nuevamente para drenarlo acceso (sic) que se produjeron (sic) internamente por la lesión al intestino grueso."

Luego de la acreditación del hecho punible el ofendido identificó a su atacante, manifestando a fojas 37-41 que era "PERIGAULT", señalamiento que fue reafirmado con el testimonio de AUGUSTO HIDALGO, cuando a folio 96 expresó bajo la gravedad del juramento, que JOSE ANTONIO PERIGAULT fue el agresor de CARLOS ALBERTO AIZPRUA.

En consecuencia, la Sala concluye que en este proceso se acreditó el binomio fáctico jurídico contenido en el artículo 2222 del Código Judicial para proferir el auto de llamamiento a juicio y aunque la declaración del procesado no ha sido formalmente recibida conforme lo dispuesto en el artículo 2112 del Código Judicial, por cuanto que, su paradero era desconocido, JOSÉ ANTONIO PERIGAULT no quedó en indefensión, ya que El Estado le proporcionó una defensa oficiosa, para que lo representara en el curso del proceso.

Este criterio se reafirma al constatar la Sala que en el expediente reposa la resolución judicial que ordena la receptación de la declaración indagatoria a PERIGAULT (ver fojas 70-71), razón por la cual la emisión del auto de proceder sin que esta se hubiese producido, no vulnera los derechos que le asisten al imputado, por cuanto que, desde el inicio de la instrucción sumarial JOSE ANTONIO PERIGUALT fue señalado como el responsable de las lesiones sufridas por CARLOS AIZPRUA.

En tal sentido resulta pertinente reiterar los criterios contenidos en sentencia de 2 de noviembre de 1999 que manifestó lo siguiente:

> "Considera la Corte que al tenor del artículo 2036 del Código Judicial la condición de imputado no se establece solamente con los cargos que se le hacen al justiciable en el acto de indagatoria, sino también con cualquier acto del proceso que se le sindique como autor o participe de un delito.
>
> El hecho de que MURILLO no fuese indagado por no haberse dado con su paradero, no le quita la condición de imputado.."(R.J. Noviembre de 1999).

En otro orden de ideas, debe la Sala acotar, que en el plenario deberá ser evacuada la diligencia de descargos al imputado JOSE ANTONIO PERIGAULT.

En conclusión, para este Tribunal Colegiado, el auto de proceder proferido por el Ad-Quo se ajusta a los parámetros contenidos en el artículo 2222 del Código Judicial por lo que procede preservarlo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes el Auto Penal de 12 de julio de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE JORGE HUMBERTO FIGUEROA MENDOZA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, UNO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para decidir sobre su admisibilidad, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de recurso extraordinario de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de Jorge Humberto Figueroa Mendoza, contra la sentencia fechada 25 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, la cual reformó la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Sexto de lo Penal, Circuito de Chiriquí, en el sentido de condenar a Figueroa por la comisión del delito de tráfico internacional de drogas en grado consumado y mantener la pena de ocho (8) años de prisión y cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, luego de cumplida la pena principal.

Corresponde en esta oportunidad examinar el escrito de casación presentado, con el objeto de resolver sobre el cumplimiento de los requisitos legales que nuestro ordenamiento jurídico exige para su admisibilidad.

El casacionista invoca dos causales de casación en el fondo que consisten en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en la apreciación de la prueba, ambas causales contenidas en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

La primera causal está sustentada con tres motivos. La Sala se percata que el primer y segundo motivo han sido formulados adecuadamente. No obstante, en el tercero, el recurrente no formula cargos concretos de injuricidad contra la resolución atacada, toda vez que se refiere a apreciaciones subjetivas del proceso y no indica cuáles son las pruebas que obrantes en el expediente, fueron omitidas por el ad-quem.

De igual manera se cuenta con las citas de las disposiciones legales y el concepto de la infracción, por lo que esta Superioridad no tiene reparos en acceder a la admisibilidad de la primera causal presentada, con la observación que se hace en el tercer motivo.

En cuanto a la segunda causal, error de derecho en la apreciación de la prueba, observa la Corte que de los dos motivos planteados, el segundo carece de cargos de injuricidad, ya que el casacionista realiza alegaciones dirigidas a demostrar la supuesta inocencia de su patrocinado. El recurrente considera que la resolución atacada violó cuatro disposiciones legales y cita como una de las normas vulneradas el artículo 2065 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión. Sin embargo, los argumentos expuestos no se compadecen con el precepto citado, es decir, no hay coherencia entre lo que el recurrente intenta sustentar y el contenido de la norma. El resto de las disposiciones se encuentran debidamente sustentadas. En consecuencia, la Sala es del criterio que también debe ser admitida la segunda causal.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, adminsitrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso extraordinario de casación presentado contra la sentencia de 25 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EN SALA UNITARIA SE ORDENA LA CORRECCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO EN EL PROCESO SEGUIDO A SERGIO A. ORTEGA ESCOBAR SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Licda. BEATRIZ HERRERA PEÑA, abogada defensora de oficio de SERGIO ANTONIO ORTEGA ESCOBAR, anunció y formalizó recurso extraordinario de casación contra la sentencia de 25 de mayo de 2000, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirma el fallo de 14 de enero de 2000, emitido por el Juzgado Quinto del Circuito Judicial de Panamá, en que se condena a su poderdante a la pena de dos (2) años de prisión y cincuenta (50) días-multa, por la comisión de Delito Contra la Salud Pública.

Vencido el término de lista para que las partes interesadas tuvieran conocimiento del ingreso de este negocio a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, corresponde en este momento procesal, determinar si el medio de impugnación propuesto se adecúa a las exigencias externas e internas que establece la ley en esta materia.

Primeramente, se observa que el escrito está dirigido a los Magistrados de la Corte Suprema, Sala de lo Penal, lo que contradice el texto del artículo 102 del Código Judicial, el cual preceptúa que los escritos deben dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala.

De otro lado, se tiene que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por la persona facultada legalmente para hacerlo y contra sentencia de segunda instancia, emitida en un proceso penal por delito cuya pena es superior a los dos años de prisión.

En cuanto a la concurrencia de las exigencias normativas que establece el artículo 2443 del Código Judicial, se puede apreciar que en la historia concisa del caso, la casacionista hace un relato en el que incluye apreciaciones subjetivas, resume las distintas diligencias, actuaciones y medios probatorios que reposan en el expediente.

Cabe señalar que la técnica casacionista exige que en este epígrafe inicial del recurso se redacte una relación sucinta y objetiva de los hechos que dieron lugar al fallo condenatorio que se pretende impugnar.

Por otra parte, la casacionista fundamenta el recurso en una causal única: "por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, ya sea en concepto de violación directa"(numeral 1, artículo 2434 del Código Judicial).

La causal invocada es sustentada en un solo motivo, cuyo contenido ha sido redactado a manera de alegato de instancia. La jurisprudencia de la Corte ha sentado el criterio que los motivos deben ser redactados en forma objetiva, breve, precisa y concisa, incluyendo en cada uno el vicio de injuridicidad que se le endilga a la resolución del Tribunal A-quem, requisito que no se cumple en el libelo en examen.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, se tiene que la recurrente enuncia y transcribe el artículo 263-F del Código Penal, indicando que el concepto de infracción es la "violación directa por indebida aplicación", el cual desarrolla a renglón seguido.

La Sala debe señalar que las normas pueden ser infringidas en los siguientes conceptos: 1. Violación directa, ya sea por omisión o comisión; 2. Interpretación errónea; y, 3. Indebida aplicación. No es adecuado al rigor de este recurso extraordinario atacar un fallo argumentando violación directa por

indebida aplicación, pues este concepto no está reconocido en la ley.

Por lo anterior, la Sala estima procedente ordenar la corrección del libelo de casación en lo atinente a la historia concisa, el motivo único que sustenta la causal y el concepto de infracción de la norma invocada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 2444 del Código Judicial, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo promovido por la Licda. BEATRIZ HERRERA PEÑA, de acuerdo con las indicaciones que se le hacen en los párrafos que motivan esta resolución; DISPONE que se mantenga el expediente en secretaría por el término de cinco (5) días a fin de que la parte interesada proceda a efectuar la corrección señalada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FAVOR DE FRANCISCO LIGUAS GONZALEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por la licenciada MIRIAM JAEN DE SALINAS, defensora de oficio del señor FRANCISCO LUGUAS GONZALEZ contra la sentencia de 28 de enero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se condena a su representado a la pena de cuarenta (40) meses de prisión.

Los requisitos externos sobre oportunidad y legitimación se han cumplido en este caso, por cuanto se anunció y formalizó el recurso en los plazos establecidos por la ley, por persona hábil y en proceso penal por delito que tiene pena privativa de libertad superior a dos años.

Por ello, el suscrito Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la licenciada MIRIAM JAEN DE SALINAS contra la sentencia dictada el 28 de enero de 2000 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Córrasele traslado al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días, vencido el cual se señalará fecha para la celebración de la audiencia de casación.

Notifíquese.

(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ
Magistrado Sustanciador
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario-Sala de lo Penal

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FAVOR DE LUIS ANTONIO VERGARA, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado JAVIER ANTONIO QUINTERO RIVERA, abogado del señor LUIS ANTONIO VERGARA contra la sentencia de 11 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se condena a su representado a la pena de treinta y ocho (38) meses y cuatro (4) días de prisión, como responsable del delito de tentativa de robo.

Los requisitos externos sobre oportunidad y legitimación se han cumplido en este caso, por cuanto se anunció y formalizó el recurso en los plazos establecidos por la ley, por persona hábil y en proceso penal por delito que tiene pena privativa de libertad superior a dos años.

Por ello, el suscrito Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado JAVIER ANTONIO QUINTERO RIVERA contra la sentencia dictada el 11 de febrero de 2000 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Córrasele traslado al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días, vencido el cual se señalará fecha para la celebración de la audiencia de casación.

Notifíquese.

(fdo.) GABRIEL ELIAS FERNANDEZ
Magistrado Sustanciador
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario-Sala de lo Penal

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ CRUZ Y OSCAR HERNÁNDEZ MONTERO, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los licenciados MIRIAM JAÉN DE SALINAS y JAVIER ANTONIO QUINTERO PÓVEDA han interpuestos sendos recursos de casación en el fondo a favor de MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CRUZ y OSCAR HERNÁNDEZ MONTERO, respectivamente, los cuales fueron sancionados a 64 y 96 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por haber sido encontrados culpables del delito de tráfico de drogas, como autores.

Los letrados recurren contra la sentencia de 4 de mayo de 2000, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó el fallo de 10 de diciembre de 1999, proferido por el Juzgado Sexto de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que absolvió de responsabilidad penal a los procesados CRUZ GONZÁLEZ y HERNÁNDEZ MONTERO.

Vencido el término de lista para que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del proceso al Tribunal de Casación, procede determinar, si la

formalización de los libelos se ajusta a los parámetros contenidos en el artículo 2443 del Código Judicial para su admisibilidad.

Observa la Sala que los recursos han sido interpuestos por personas hábiles, promovidos dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Expresado lo anterior corresponde analizar el contenido de los recursos para verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial. Veamos:

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA LICENCIADA MIRIAN JAÉN DE SALINAS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ CRUZ

Este recurso ha sido dirigido al Magistrado Presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ajustándose de esta forma a lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial.

Con respecto a la historia concisa del caso, la Sala observa que la recurrente efectúa una narración sucinta, objetiva y precisa de los hechos, de los cuales surgen los cargos de injuridicidad endilgados a la sentencia de 9 de mayo de 2000.

La recurrente sustenta su recurso en dos causales, la primera causal "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal".

Esta causal ha sido sustentada en un único motivo, el cual ha sido adecuadamente formulado, señalando la prueba valorada incorrectamente por el Ad-Quem, e indicando de qué manera esa estimación probatoria incidió en lo dispositivo del fallo por lo que se establece el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia de 9 de mayo de 2000.

La casacionista manifiesta que las disposiciones legales infringidas son los artículos 972 del Código Judicial y 255 del Código Penal los cuales transcribe íntegramente seguido del concepto de la infracción.

En cuanto a la segunda causal aducida por la recurrente, la Sala observa que ésta fue enunciada como: error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal.

Esta causal ha sido sustentada en dos motivos, los cuales fueron debidamente individualizados y desarrollados congruentemente con la causal enunciada, estableciendo, en consecuencia, los vicios de injuridicidad endilgados al fallo proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Con respecto a las disposiciones legales infringidas y al concepto de la infracción, la licenciada JAÉN DE SALINAS indicó que los artículos 769 y 972 del Código Judicial han sido vulnerados en concepto de violación directa por omisión, mientras que el artículo 255 del Código Penal lo fue por indebida aplicación. Se observa que la recurrente transcribió textualmente las normas legales y seguidamente las sustentó, lo cual ha hecho correctamente.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JAVIER ANTONIO QUINTERO RIVERA A FAVOR DE OSCAR HERNÁNDEZ MONTERO.

El licenciado QUINTERO RIVERA dirigió su recurso al Magistrado Presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial.

El numeral 3, literal "a" del artículo 2443 alude a la historia concisa del

caso, ésta debe contener una narración concreta de los hechos de los cuales surjan claros cargos de injuridicidad, al cotejar esta sección del recurso se observa que, el recurrente ha elaborado adecuadamente esta sección del recurso.

El casacionista alude a dos causales, la primera la identifica como: error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, e implica infracción de la ley sustancial penal, la cual está contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Esta causal es fundamentada en tres motivos, los cuales han sido formulados correctamente, señalando las fojas donde se encuentran las pruebas erradamente valoradas y estableciendo en cada uno de ellos los cargos de injuridicidad que guardan relación con la causal probatoria aducida.

Con relación a las disposiciones legales infringidas y al concepto de la infracción, el licenciado QUINTERO RIVERA, expresa que los artículos 905 y 2112 del Código Judicial fueron transgredidos en concepto de violación directa por omisión, mientras que el artículo 255 del Código Penal lo fue por indebida aplicación. Cabe anotar que el casacionista transcribió las disposiciones legales y a renglón seguido el concepto de su infracción, por lo que se ha elaborado correctamente.

La segunda causal aducida por el recurrente se identifica como: error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal.

Al externar los motivos, este Tribunal de Casación constata que el recurrente aduce dos, los que han sido redactados en forma concreta y objetiva, indicando las fojas en que se ubican las pruebas y estableciendo los cargos de injuridicidad endilgados al fallo impugnado.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción el casacionista cita los artículos 769 y 972 del Código Judicial, así como el artículo 255 del Código Penal, los cuales fueron desarrollados correctamente, toda vez que se transcribieron las normas que se estiman infringidas, y se explicó el concepto de la infracción.

Concluido el análisis de ambos libelos, es procedente ordenar su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL; representada por la Suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con fundamento en el artículo 2444 del Código Judicial ADMITE los recursos de casación en el fondo promovidos por los licenciados MIRIAM JAEN DE SALINAS y JAVIER QUINTERO RIVERA y DISPONE correr traslado del negocio al Señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días para que emita concepto.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELVIS RICARDO HART MC FARLANE Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado ISMAEL ENRIQUE JARAMILLO CENTENO, en su condición de defensor de ELVIS ENRIQUE HART MC FARLANE, ha interpuesto recurso de casación penal contra la sentencia de 2da N 8 de 17 de enero de 2000 expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que confirmó la de primera instancia en donde se condenó a su representado a la pena de siete (7) años de prisión como autor del delito de posesión ilícita de drogas agravada.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso.

A tal efecto, prima facie se advierte que la iniciativa procesal se dirige a los Honorables señores Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contravención de lo que establece el artículo 102 del Código Judicial, según el cual, el libelo bajo examen debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala.

Con relación a los requisitos que establece el numeral 3 del artículo 2443 ibídem, se observa que el escrito presentado contiene errores en su formalización.

En este sentido, la jurisprudencia ha señalado de manera uniforme, que en la estructura del recurso, a continuación de la historia concisa del caso deben enunciarse las causales que se invocan, cada una seguida de los motivos que la fundamentan y de las disposiciones legales que se estiman infringidas, con el correspondiente concepto de infracción. En el caso bajo examen, la Corte observa que el censor ha presentado un escrito propio de un recurso de instancia ordinaria, con alegatos, apreciaciones subjetivas y transcripciones de declaraciones, todo lo cual contradice la técnica de este tipo de recurso extraordinario.

Con relación a la historia concisa del caso, la Corte no tiene nada que objetar, pues la misma fue desarrollada cumpliendo con los requerimientos jurisprudenciales para la presentación de esta sección.

Ahora bien, el recurrente en su escrito aduce como primera causal el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y posteriormente, repite como segunda causal el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba; por lo que aclara la Corte que es evidente que sólo es una la causal bajo estudio.

En ese mismo sentido, la causal invocada es la "Infracción de la Ley Sustancial Penal por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba", denominación a todas luces incorrecta porque debió hacerlo de la siguiente manera, por ejemplo: "Infracción de la Ley Sustancial Penal por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia".

Dicha causal, en esta primera ocasión, esta apoyada en tres motivos. Los dos primeros carecen de cargos de injuridicidad y en el tercero, en vez de invocar cargos concretos de injuridicidad, el recurrente procede a presentar un alegato colmado de apreciaciones personales y transcripciones de parte de algunas declaraciones, todo lo cual contradice la técnica de la presentación de esta sección de este recurso extraordinario. La sección de los motivos esta destinada a fundamentar la causal que se invoca. Es en esta sección en donde se deben presentar de cargos de injuridicidad que demuestren que la sentencia es injurídica.

Con respecto al epígrafe de las disposiciones legales que estima infringidas y el concepto en que lo han sido es una sección autónoma en donde se debe, en forma individual, citar y transcribir las normas que se consideran violentadas y posteriormente explicar en que concepto fueron infringidas: en forma directa por omisión o comisión, por indebida aplicación o por

interpretación errónea, nada de lo cual ha hecho el recurrente (la subraya es nuestra). En ese mismo sentido, cuando se trata de causales probatorias, además de citar, transcribir y explicar el concepto de la infracción de las normas procesales o de carácter adjetivas, se debe citar, transcribir y explicar en que concepto fue violada la norma penal sustantiva la cual fue infringida de manera indirecta a consecuencia de la violación de las normas adjetivas.

El recurrente procede a transcribir las normas una después de la otra y no manifiesta en que concepto fueron infringidas y luego procede a hacer apreciaciones personales, todo lo cual es ajeno a este acápite y a este tipo recurso.

Con relación a la segunda parte, lo que el casacionista denomina segunda causal, la misma fue invocada incorrectamente otra vez y de los dos motivos que presenta, no se desprenden cargos de injuridicidad que denoten como injurídica la sentencia de segunda instancia; mas bien se trata de la presentación de opiniones personales que demuestran su discrepancia con el fallo ad quem.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, comete el mismo yerro anotado anteriormente, ya que vuelve a transcribir las dos normas aducidas como violentadas de corrido y en un sólo párrafo procede, sin manifestar el concepto de infracción, a manifestar su opinión personal. Además de que tampoco en esta segunda ocasión manifiesta la norma sustantiva penal violentada a consecuencia de la infracción de las normas adjetivas aducidas.

En este contexto, resulta notorio que el libelo presentado carece de sustento lógico-jurídico.

Los defectos anotados conducen a la Sala a declarar inadmisible el recurso sub júdice.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁDEZ
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANASTASIO ROSARIO SAMANIEGO, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado CRISTOBAL GARRIDO ROMERO, en su condición de defensor de ANASTASIO ROSARIO SAMANIEGO, ha interpuesto recurso de casación penal contra la sentencia de 23 de junio de 2000 expedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que revoca la de primera instancia en donde se absolvió a su representado, imponiéndole la pena de dos (2) años como autor del delito de lesiones personales.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso.

A tal efecto, prima facie se advierte que la iniciativa procesal se dirige

al "Honorable Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del Cuarto Distrito Judicial", en contravención de lo que establece el artículo 102 del Código Judicial, según el cual, el libelo bajo examen debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala.

Con relación a los requisitos que establece el numeral 3 del artículo 2443 ibídem, se observa que el escrito presentado contiene errores en su formalización.

El recurrente, a través de su exposición en este acápite narra cada uno de los momentos procesales en forma detallada, pero en el párrafo final, manifiesta su discrepancia con el fallo con apreciaciones subjetivas, todo lo cual es ajeno a la técnica exigida en esta sección, ya que en este apartado debe limitarse a una síntesis objetiva de los hechos y eventos procesales mas relevantes.

La causal invocada es el "Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica infracción de la ley norma sustantiva penal", la cual fue invocada correctamente.

Dicha causal esta apoyada en 8 motivos. En el primero, el recurrente asevera que el tribunal para condenar a su representado se basó en pruebas inexistentes, pero no especifica a que pruebas se refiere, además de que carece de cargo de injuridicidad atribuible al fallo de segunda instancia. Similar situación se da en el motivo sexto del que tampoco se desprende cargo de injuridicidad y en el cual señala que el tribunal ha tomado en cuenta una prueba inexistente en el proceso y posteriormente presenta una argumentación confusa y sin especificar a que prueba se refiere. Al igual que en estos motivos, en los restantes, en vez de invocar cargos concretos de injuridicidad, el recurrente procede a presentar apreciaciones personales con respecto a la valoración del caudal probatorio.

Finalmente el epígrafe de las disposiciones legales que estima infringidas y el concepto en que lo han sido, el censor al momento de la explicación del concepto de infracción de las normas aducidas lo hace de manera deficiente porque alega y plasma apreciaciones personales a través de las cuales no demuestra la infracción de las normas y en algunas ocasiones manifiesta su discrepancia con los fundamentos que llevaron al tribunal a condenar a su representado.

En este contexto, resulta notorio que el libelo presentado carece de sustento lógico-jurídico, por lo que los defectos anotados conducen a la Sala a declarar inadmisible el recurso sub júdice.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ENRIQUE GONZÁLEZ MURILLO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término establecido por el artículo 2443 del Código Judicial para que las partes interesadas tuvieran conocimiento de la llegada del proceso penal seguido a OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ MURILLO, por delito contra la salud pública, en virtud del recurso de casación interpuesto por la representante de su defensa, corresponde, decidir la admisibilidad del medio de impugnación presentado, a lo que se procede con base en las siguientes consideraciones.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra resolución emitida por un Tribunal Superior en segunda instancia, el cual admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

En cuanto a la historia concisa del caso, el casacionista hace una breve relación de los hechos, en forma clara y objetiva, en la que se advierte el vicio de injuridicidad que se le imputa a la sentencia recurrida.

El letrado invoca como causal única del recurso la contenida en el numeral 8, artículo 2434 del Código Judicial: "Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal, por error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal".

Sobre el particular, se debe indicar que la causal ha sido mal invocada, toda vez que el recurrente a unido dos causales de fondo contenidas en diferentes numerales del artículo 2434 del Código Judicial: en primer lugar, "por ser la sentencia infractora de la ley sustantiva penal" consagrada en el numeral 1, y la otra es "cuando se cometa error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal", que está regulada en el numeral 8.

Seguidamente, de conformidad con la estructura del recurso, la defensa técnica enuncia cinco motivos que sustentan la causal única, los cuales han sido debidamente individualizados.

No obstante, el contenido de los motivos versa sobre un solo aspecto: la inaplicación por parte del juzgador del beneficio de rebaja de la pena estatuido en el artículo 2112 del Código Judicial.

Es menester indicar que la jurisprudencia uniforme de esta Sala ha sostenido que los motivos deben ser desarrollados individualmente, de manera objetiva, clara y precisa, incluyendo en cada uno de ellos el vicio de injuridicidad que se endilga al fallo que se pretende impugnar, lo que no se cumple en el recurso en examen.

Por otra parte, cabe destacar que los motivos deben guardar relación con la causal seleccionada por el casacionista, pero en este caso el recurrente no ha precisado cuál es la causal que fundamenta el recurso, error que no permite que el Tribunal de Casación entre a hacer algún tipo de análisis sobre los hechos presentados.

En otro orden de cosas, se tiene que el casacionista indica que las disposiciones legales infringidas son el artículo 2112 del Código Judicial y el artículo 13 del Código Penal, transcribiendo en forma íntegra los textos de las normas, con expresión del concepto de la infracción y explicando cómo se ha producido.

Como quiera que los errores anotados no permiten que el Tribunal de Casación entre a examinar la sentencia objeto de censura a través de este medio extraordinario de impugnación, se hace improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el

recurso de casación interpuesto a favor de OSCAR ENRIQUE GONZÁLEZ MURILLO.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE GILDA CAMARGO, SANCIONADA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ALQUILER Y DISTRIBUCIÓN DE REPRODUCCIONES ILÍCITAS DE VIDEOGRAMAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante sentencia calendada 29 de febrero de 2000, reformó la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Cuarto de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de condenar a Gilda Estela Camargo a la pena de 24 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término luego de cumplir la pena principal, por la comisión del delito de alquiler y distribución de reproducciones ilícitas de videogramas, en perjuicio de la empresa Disney Enterprise, Inc. y otros. Contra esa decisión judicial la defensa oficiosa de Camargo anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso extraordinario de casación.

Procede la Sala Penal a examinar el recurso extraordinario presentado, con el objeto de resolver sobre el cumplimiento de los requisitos legales que nuestro ordenamiento jurídico exige para su admisibilidad.

La causal invocada consiste en error de derecho en la apreciación de la prueba, contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. La casacionista expone en ocho motivos el supuesto cargo de injuricidad en que incurrió la sentencia de segunda instancia.

En el primer motivo, la casacionista manifiesta que el Tribunal Superior incurrió en un error al condenar a su patrocinada simplemente en base a la denuncia del licenciado Eric López Cornejo (f.1730). Sin embargo, como se ha señalado en casos anteriores, ese no fue el único medio de prueba que utilizó el juzgador de segunda instancia para proferir una sentencia condenatoria, por lo que no es necesario admitir este planteamiento para luego decir que la sentencia atacada fue dictada con apego a la ley (Cfr. Sentencia de Sala Penal de 27 de julio de 2000).

En cuanto al segundo y tercer motivo, la defensa oficiosa de Camargo alega que el ad-quem le otorgó pleno valor probatorio al informe rendido por el Detective Charles T. Morel, de la Policía Técnica Judicial. También señala que el tribunal "consideró que los videos cassettes en formato VHS y BETA incautados en el (sic) empresa ONE NIGHT STAND CORP. contenían copias ilegales de películas" (fs.1730-1731). En ambos casos la recurrente nada dice en qué se basa para afirmar que a esos medios de prueba, el ad-quem les dio un valor probatorio distinto al que señala la ley, aunado al hecho de que los video cassettes decomisados constituyen circunstancias propias del delito.

El cuarto motivo se sustenta en el supuesto de que el Tribunal Superior acreditó la comisión del hecho punible en base a "la certificación de la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias..., asP (sic), como la certificación del Registro Público" (f.1731).

Nótese que la casacionista no explica en qué consisten esas certificaciones y qué quiere dar a entender con las mismas. Tampoco aclara de qué manera influyeron en lo dispositivo de la resolución atacada.

La recurrente aduce en el quinto motivo que la sentencia atacada erró en la valoración de las pruebas presentadas por las empresas Comercial Lacayo, S. A y Video Corp., S. A. Salta a la vista que el recurrente no identifica cuáles son las pruebas que valoradas y apreciadas, demuestran que la sentencia del Tribunal Superior incurre en la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba.

Al examinar el sexto, séptimo y octavo motivo, se advierte que se presentan de manera deficiente, por cuanto se refieren a declaraciones obrantes en el cuaderno penal sin formular cargos concretos de injuricidad que pongan de relieve los errores in iudicando en que pudiera haber incurrido el Tribunal Superior (fs.1731-1732).

En lo concerniente al requisito de las disposiciones legales infringidas, la casacionista alega la violación de las siguientes normas. Primero, considera vulnerado el artículo 845 del Código Judicial de manera directa por omisión, incurriendo en el mismo vicio que en el quinto motivo, toda vez que omite señalar cuáles fueron las pruebas que al ser valoradas por el ad-quem, lo hicieron incurrir en un error de derecho.

En segundo lugar, manifiesta que se infringió de manera directa por omisión el artículo 904 de la misma exerta legal. Expone la casacionista una serie de pruebas testimoniales que, a su juicio, no son idóneas. Sin embargo, no explica por qué, según su parecer, esos medios probatorios no podían ser tomadas en cuenta para resolver la autoría y comisión del delito realizado.

Alega la recurrente, en tercer lugar, la infracción del artículo 907 del Código Judicial, también por violación directa por omisión, ya que el ad-quem derivó la culpabilidad de su patrocinada en base al testimonio de Rafael Milán. No obstante, a lo largo del desarrollo de este libelo se ha discutido toda una serie de pruebas que llevaron al Tribunal Superior a proferir la meritada resolución judicial atacada.

En cuarto lugar, la casacionista alega que se violó el artículo 2073 del mismo Código y en el mismo concepto de infracción porque, a su juicio, no se sabe el contenido de los video cassettes encontrados. Esa sola circunstancia no basta para comprobar el pretendido error en el que supuestamente incurrió el juzgador de segunda instancia, toda vez que la propia norma comentada se refiere a toda una serie de parámetros que en conjunto y en base a la convicción del juez, sirven para acreditar la comisión del hecho punible.

Por último, la defensa oficiosa de Camargo considera que se vulneraron como normas sustantivas los artículos 3 y 122 de la Ley No. 15 de 8 de agosto de 1994, por medio de la cual se aprobó la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos y se dictan otras disposiciones; en concepto de violación directa por omisión e indebida aplicación, respectivamente, porque su defendida no es la autora del delito de alquiler y distribución de reproducciones ilícitas de videogramas. Observa la Corte, que si lo que cuestiona la casacionista con respecto a la primera norma sustantiva, consiste en que Camargo no es la autora de la reproducción de los video cassettes, y que pese a ello se le condenó, entonces el concepto de la infracción citado debió ser el de violación directa por comisión, ya que es esta la que contiene el supuesto de que aún entendida correctamente una norma, esta se aplica a una situación desconociendo un derecho en ella regulado. Realizado entonces el presente examen a fin de determinar si era procedente acceder a la admisibilidad del recurso, debe concluirse que el presente libelo de casación no contiene cargos concretos de infracción.

En virtud de lo anteriomente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO

ADMITE el recurso extraordinario de casación presentado contra la sentencia fechada 29 de febrero de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON **(fdo.) GABRIEL FERNANDEZ**
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON

Tal cual he expresado ante resoluciones similares, en el fallo que decide la admisibilidad del recurso de casación promovido por la licenciada Leonor Samudio, quien actúa en defensa de la señora Gilda Camargo, me veo en la necesidad de salvar el voto, toda vez que se incurre en el error de introducir consideraciones propias del análisis de fondo del recurso, y no de la presente etapa de admisión.

Esto es así, en tanto que se decide desestimar o inadmitir el recurso, entre otras razones válidas, con fundamento en análisis de la sentencia recurrida, como se observa en los razonamientos expuestos al examinar el primer motivo. En éste caso, la resolución expresa que "Sin embargo, como se ha señalado en casos anteriores, ese no fue el único medio de prueba que utilizó el juzgador de segunda instancia para proferir una sentencia condenatoria, por lo que no es necesario admitir este planteamiento para luego decir que la sentenica atacada fue dictada con apego a la ley"

Como se observa, mi disconformidad atiende la reiterada proposición de introducir en las resoluciones de admisibilidad de casación, consideraciones que rebasan el propósito de ésta etapa procesal y, en consecuencia, lo dispuesto en las normas procesales respecto de los requisitos que deben ser observados en la formalización de estos recursos.

En el presente negocio, llama la atención que habiéndose realizado un análisis prolijo de las ocho causales en que la recurrente sustenta su disconformidad con la sentencia de segunda instancia, al igual que de las disposiciones que alega han sido infringidas, innecesariamente se introduzcan consideraciones como la referida respecto de la primera causal, siendo que en efecto el recurso presenta un número plural de errores que impiden su admisión, sin que tenga que traspasarse los límites que nos impone la ley para la etapa de admisibilidad del recurso extraordinario de casación.

En virtud de lo expuesto, como quiera que a mi juicio este proceder afecta la legitimidad jurídica de presente fallo, respetuosamente, SALVO MI VOTO.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARCOS ANTONIO HILTON BREWSTER, CONDENADO POR DELITO DE ROBO AGRAVADO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000), ésta

Sala ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por la Dra. ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO, a favor del señor MARCOS ANTONIO HILTON BREWSTER, y contra la resolución calendada 9 de mayo de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Una vez cumplido el término establecido en el artículo 2444 del Código Judicial, que ordena la corrección del recurso anunciado, se procede a examinarlo, con la finalidad de decidir sobre su admisibilidad.

En tal sentido, observamos que la recurrente cumple con lo dispuesto en resolución de 23 de octubre de 2000, expedida por ésta Sala, en donde se ordena la corrección del recurso en lo siguiente:

> "En torno a la formalización del recurso, el Tribunal de Casación observa, que el desacierto cometido en la elaboración de la historia concisa del caso puede ser subsanado mediante la corrección, por lo que se ordena que se proceda a ello".(Fs.353-354)

Dado lo anterior, esta Sala concluye, en admitir el recurso interpuesto por la la Dra. ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO, defensora de oficio de MARCOS ANTONIO HILTON BREWSTER.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica MARCOS ANTONIO HILTON BREWSTER, y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días para que emita concepto de conformidad a lo establecido en el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE ADOLFO ELIECER VELARDE RODRIGUEZ EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Finalizada la audiencia oral y firmada el acta respectiva, corresponde a esta Colegiatura, resolver el recurso de casación incoado por la licenciada Miriam Jaén de Salinas, a favor de Adolfo Eliécer Velarde Rodríguez contra la sentencia de 2 de septiembre de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se confirma resolución de 10 de diciembre de 1997, que le impone las penas de 7 años de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena principal, por la comisión del delito de robo agravado en perjuicio de Ileana Del Carmen García de Paredes.

ANTECEDENTES DEL CASO

Genera el presente proceso denuncia de la ciudadana Iliana Del Carmen García de Paredes, el día 10 de septiembre de 1996 a través de la cual sostiene que fue víctima de un asalto en el estacionamiento del Restaurante Soup and

Salad, de la vía Porras el día 10 de septiembre de 1996, por parte de dos (2) sujetos que le despojaron de su automóvil Mazda 626 y de un collar de oro de su amiga Olga Silen Tasón (fs. 1-2).

La señora Olga Silen Tasón manifiesta que el valor del collar que le despojaron el día de autos es de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00) (fs. 3-4).

De fojas 9 a 11 constan copias autenticadas del certificado del Municipio de Panamá, Registro de propiedad vehicular y certificado de inspección vehicular, acreditando la propiedad y preexistencia del vehículo de la ofendida (fs. 9-11).

El señor Adolfo Eliécer Velarde rinde declaración indagatoria negando la comisión del ilícito excepcionando que el vehículo se encontraba en su poder porque se lo había empeñado un sujeto en calle P de San Miguelito por la suma de treinta balboas (B/.30.00) (fs. 31-34).

A fojas 56 reposa certificación de Paco Olivella joyeros en la cual se hace constar que el valor del collar amarillo de Olga Silen era de 18 kilates y tenía valor de dos mil quinientos balboas (B/.2,500.00).

Comprobaba la existencia del hecho punible y la vinculación del procesado Velarde se le llamó a responder en juicio y posteriormente se le sanciono.

La defensora del sindicado recurrió la resolución de primera instancia argumentando que las ofendidas no habían visto claramente a sus agresores y que el reconocimiento de su patrocinado no se ajusta a lo establecido por la norma (fs. 209-210).

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al pronunciarse del recurso de apelación confirmó la resolución impugnada.

EL RECURSO

Se propone el medio extraordinario de impugnación con base en la causal de fondo: cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo.

Como motivo único se expuso el siguiente:

> "EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL FALLO IMPUGNADO SOSTIENE QUE EL TIPO PENAL INFRINGIDO POR EL SEÑOR ADOLFO ELIECER VELARDE RODRIGUEZ ES EL QUE SE REFIERE AL ROBO AGRAVADO LO CUAL ES ERRÓNEO PORQUE DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS TALES COMO LOS INFORMES DE FOJAS 14 Y 15 INDICAN QUE A ADOLFO ELIECER VELARDE RODRIGUEZ NO SE LE INCAUTÓ ARMA ALGUNA.
>
> SIENDO ELLO ASÍ, EL A-QUEM INCURRE EN ERROR DE DERECHO EN LA CALIFICACIÓN DEL DELITO, PORQUE EL TIPO INFRINGIDO POR EL PROCESADO ES EL DE HURTO AGRAVADO Y NO EL DE ROBO AGRAVADO APLICADO POR EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA." (fs. 234-235)

Como disposiciones legales infringidas se anotan los artículos 186 y 184-A del Código Penal. El primero en concepto de indebida aplicación y el segundo en concepto de violación directa por omisión.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación a través de la Vista N°38 de 28 de abril de 1999, emite concepto del recurso presentado.

Del motivo que respalda a la causal expresa el máximo representante de la sociedad lo siguiente:

> "Tal sentencia es apelada, siendo sustentada por la defensora de oficio del señor Velarde Rodríguez, como se puede constatar a fojas 209-210 del expediente, disconformidad que recae sobre la supuesta "imprudencia e inocencia con la que actúa Adolfo Velarde, al alquilar el vehículo que se denunció como robado; que nunca se "tuvo una imagen clara, por parte de las ofendidas, de la persona que les robara" y que el reconocimiento que éstas -las ofendidas- hacen de su defendido, se da por el contacto previo que dio con él por lo que termina considerando que "se debe revocar la sentencia apelada y en su defecto absolver" a su representado.
>
> Sobre estos hechos o reclamos se pronuncia el Tribunal Superior, sin que en ningún momento se haya debatido con respecto a que se estaba ante delito distinto por el que se había investigado, encausado, procesado y condenado a Adolfo Eliécer Velarde Rodríguez, al momento de formular la apelación del fallo de primera instancia. Es decir, no se cuestionó en momento alguno lo referente a los hechos probados y el delito imputado-robo a mano armada o, lo que es lo mismo, robo agravado-, sino que no existía seguridad en cuanto a la participación en tales hechos por parte de Velarde Rodríguez." (fs. 251-252).

Respecto a las disposiciones legales infringidas el señor Procurador expresó:

> "...como quiera que en la sustentación de la violación de estos preceptos legales de la ley sustantiva, se esgrime argumentación igual a la que se expresa al sustentar la causal en el motivo estudiado y, tratándose el recurso de casación de un recurso extraordinario en el que cada una de sus partes ha de guardar un sentido lógico y congruencia entre sí, es por lo que al no ser procedente la causal por lo ya explicado, queda sin soporte la violación de la ley sustantiva." (fs. 253-254).

ANÁLISIS DE LA CORTE

Concluido el examen del negocio la Corte pasa a resolver el fondo del recurso incoado.

La recurrente propuso la causal "cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo." Dicha causal procede si el Tribunal Superior sanciona por un delito distinto al tipo penal por el cual se llamó a responder al imputado.

El único motivo esgrimido con esta iniciativa extraordinaria sostiene que el tipo infringido por el sindicado no es el de robo agravado sino el de hurto agravado.

Consta en el negocio sub-júdice que al procesado Velarde Rodríguez se le llamó a responder en juicio como posible infractor de las normas que tipifican el delito de robo (ver folio 179) y se le sancionó por la comisión de dicho delito (ver folio 196).

Al conocer la alzada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia se pronunció sobre dicho tipo penal y rechazó la petición de absolución que demandaba la recurrente.

Es necesario recordar a la defensora que el recurso de casación constituye un medio de impugnación extraordinario, no es una tercera instancia para lograr la disminución de la pena impuesta luego que se rechaza la tesis de absolución por el juzgador de segundo grado.

De manera reiterada la Corte ha sostenido que el límite del recurso de

casación es el agravio, agravio que va vinculado a los planteamientos esbozados por el recurrente contra la sentencia de primera instancia al sustentar su recurso de apelación. Una reciente resolución de 27 de julio de 2000 dictada por esta Colegiatura subrayó:

> "Al presentar un recurso de casación, de acuerdo a la causal que se invoque, los cargos de injuridicidad que se aduzcan, deben estar dirigidos a probar los vicios de ilegalidad en que incurrió el tribunal de segunda instancia, que son los puntos en los que en su oportunidad se pronunciará el tribunal de casación de acuerdo a lo establecido en el artículo 2434 del Código Judicial.
>
> En el recurso bajo examen, la recurrente mal puede impugnar a través de este recurso extraordinario el grado de participación y correspondiente responsabilidad de su defendida porque este aspecto no fue materia del conocimiento del juzgador de segunda instancia y en este momento procesal, sólo procede contra las decisiones de los Tribunales Superiores."

Igualmente en resolución de 28 de julio de 1998 citada por la Procuraduría General de la Nación, la Sala puntualizó lo siguiente:

> "...se aprecia que en el fallo impugnado vía casación, el ad-quem no entra a considerar la calificación del delito sino que se limita a los puntos de la resolución del a quo a que se refirió el apelante, es decir, a las cuestiones relacionadas con las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal.
>
> Dentro de este contexto, se observa que el casacionista carece de legitimidad para impugnar a través del recurso de casación sub júdice aspectos relacionados con la calificación del delito, porque se trata de cuestiones que no han sido materia del conocimiento del juzgador de segunda instancia y es sabido que este medio de impugnación extraordinario, en lo penal sólo procede contra las decisiones de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial."
> (Registro Judicial julio 1998, p. 367).

Las normas señaladas como vulneradas no se evidencia su infracción, dado que el medio de impugnación no demuestra vicio de injuridicidad alguno en que haya incurrido el tribunal de segunda instancia para que se case su resolución. Ello lleva a que se dicte una resolución en ese sentido.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso seguido a Adolfo Eliécer Velarde Rodríguez.

Notiíquese y Devúelvase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE CARMEN ALICIA CANDELO SALCEDO EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Luego de concluida la correspondiente audiencia oral y firmada el acta respectiva, se encuentra en estado de resolver el recurso de casación propuesto por la licenciada Maribel Vega, a favor de Carmen Alicia Candelo Salcedo contra la sentencia de 25 de noviembre de 1999, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que confirma la resolución de 11 de junio de 1998 emitida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, la cual impone la penas de veinte (20) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por la comisión del delito de falsedad de documento público.

EL RECURSO

El medio extraordinario propuesto, se basó en la causal de: error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial.

Se apoya la misma en un motivo, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "PRIMER MOTIVO: La Sentencia de 25 de noviembre de 1999, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, al momento de valorar la prueba documental relativa al pasaporte CC 66945759 expedido en la República de Colombia a nombre de GLADYS TORRES, visible a fojas 11 del proceso, le reconoció valor de plena prueba a dicha pieza procesal, a pesar de que el expediente está carente del experticio que demuestre que el documento aludido se encuentra falsificado, circunstancia procesal que incidió en lo dispositivo del fallo, porque sino se hubiera cometido ese yerro en la apreciación de dicha prueba documental, otro hubiera sido el resultado relativo a la situación jurídica de mi mandante." (f. 208).

Anota la recurrente, como disposiciones legales infringidas los artículos 953 y 967 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión y los artículos 265 y 266 del Código Penal en concepto de indebida aplicación.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante vista N°28 de 28 de abril de 2000, el señor Procurador General de la Nación emite concepto de la iniciativa presentada dentro del presente negocio.

Al estudiar el motivo, el máximo representante de la sociedad, considera que del mismo no se infiere cargo de injuridicidad por no haber el juzgador secundario considerado el pasaporte N° CC 66945759 expedido en la República de Colombia a nombre de Gladys Torres y visible a folio 11 para fundamentar su decisión. Considera que la causal invocada debió dirigirse a una prueba valorada por el juzgador, más no, a una prueba no considerada por el juzgador de segunda instancia (fs. 231-235).

De la infracción del artículo 953 del Código Judicial refiere que no ha sido el pasaporte visible a folio 11 considerado para imponer la sanción a la sindicada Candelo sino otros elementos, por lo que la violación indicada por la recurrente no se verifica.

En cuanto a la infracción del artículo 967 del estatuto procedimental, se remite a la posición externada relativa al motivo y a la primera norma acusada de infringida y se mantiene en que la prueba cuestionada no se consideró por el tribunal de segunda instancia (fs. 238-239).

Al no estar acreditada la violación de las normas adjetivas no procede analizar las normas sustantivas invocadas como violadas.

ANÁLISIS DE LA CORTE

El recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario cuyo objeto es el que la Corte examine los agravios inferidos a los imputados y demás sujetos procesales; es un juicio de derecho que una vez cumplidas las formalidades legales va a permitir el análisis de fondo del negocio.

Dicho recurso va a contar con el límite del agravio, el recurrente va a acusar la violación del derecho en que haya incurrido el Tribunal Superior, pero dicha violación al invocarse la causal de casación en la que se alega error de derecho en la valoración de la prueba se encuentra ligada estrechamente al caudal probatorio considerado al resolverse el recurso de apelación.

No constituye este medio de impugnación una tercera instancia, o la última oportunidad para modificar la situación jurídica de la procesada, en eso la recurrente debe estar clara al recurrir ante la Sala.

En efecto, la Corte coincide con la opinión vertida por la Procuraduría puesto que el vicio señalado en el presente recurso no fue motivo de impugnación o reclamo ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el momento de impetrar el recurso de apelación.

Tenemos que el primer motivo no posee validez puesto que el tribunal de segunda instancia en ningún momento consideró el documento visible a folio 11 del proceso, lo que conduce a que el motivo no sea congruente con la causal invocada.

Mal actuaría la Corte si lo considerará, ya que podría exceder el límite de su competencia que está ligado al libelo de casación.

Señala el recurrente la infracción del artículo 953 del estatuto procedimental, pero no se verifica la misma en virtud que no fue considerado el documento de folio 11 al momento de establecer la responsabilidad penal de la sindicada.

Igualmente, la infracción del artículo 967 del Código Judicial no se evidencia, dicho precepto alude a la forma como el juzgador estimará el dictamen pericial y en el presente proceso no consta dictamen pericial alguno que debía ser evaluado por el juzgador de segunda instancia.

Comprobado que no existen vicios de injuridicidad que lesionen el ordenamiento adjetivo no cristaliza la indebida aplicación de la normativa sustantiva y por ende procede denegar la casación de la sentencia atacada.

En base a lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 25 de noviembre de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia como tribunal de segunda instancia en contra de Carmen Alicia Candelo por la comisión del delito de Falsedad documental.

Notifíquese y Devuélvase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN INTERPUESTA A FAVOR DE DALILA VARGAS Y OTROS EN PROCESO QUE SE LE SIGUE POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Herrera M., apoderado judicial de Dalila Vargas Cubilla y de Jaime González Maraña, ha presentado recursos de casación contra la sentencia de 22 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la decisión de primera instancia que impone a Vargas Cubilla la pena de 48 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 2 años y a González Maraña la pena de 120 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 2 años.

Vencido el término de lista, le corresponde a la Sala examinar los libelos de formalización a efectos de comprobar si se ajustan a los presupuestos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico para su admisibilidad.

A. Libelo propuesto a favor de Dalila Vargas Cubilla

La historia concisa del caso relata en forma clara los aspectos fundamentales del proceso.

Como primera causal de fondo se invoca: "...error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo e implica infracción de la ley sustancial penal." (f. 3577).

Acompañan a la causal dos motivos. En el primer motivo se destaca lo siguiente: "...desconoció o ignoró la sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, fechada 3 de octubre de 1997 (obra foja 2892, y S.S.), mediante la cual se declaró ilegal la detención de la procesada DALILA VARGAS, al considerar que no existía mérito probatorio legal que justificara la privación de libertad de mi patrocinada." (f. 3578). Del mismo no se desprende cargo alguno de injuridicidad, puesto que la resolución del Pleno de la Corte no es vinculante ni para el tribunal de primera ni para el de segunda instancia, la misma no era obligación considerarla ya que determinaba durante la fase sumarial si la detención de la sindicada era legal o ilegal. Se plantea en el segundo motivo que no se consideraron los testimonios de Máximo Cubilla y de Eugenio Quiel quienes dan fe que la sindicada VARGAS no era la administradora del taller Mac Callen sino su secretaria (f. 3578). Este motivo carece de concreto cargo de injuridicidad toda vez que no señala como dicho yerro afecta la decisión del Ad-quem.

El epígrafe de las disposiciones legales infringidas, contiene la mención de los artículos 769, 770 y 905 del Código Judicial como normas adjetivas y el artículo 263-B como norma sustantiva, cada una con su respectivo concepto de infracción. Se advierte que en este apartado del recurso la única disposición citada que no tiene determinado en forma apropiada el concepto de la infracción es el artículo 263-B, el recurrente señala "...ha sido infringida en el concepto de violación por indebida aplicación" (f. 3582). Dicha infracción es extraña a la técnica casacionista. La normas pueden infringirse únicamente de la siguiente manera: violación directa por omisión, violación directa por comisión, interpretación errónea o indebida aplicación.

La segunda causal en el fondo es "Error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal..." (f. 3583).

Se fundamenta la misma en tres motivos, de los cuales el primero señala el vicio de injuridicidad.

En el segundo motivo alude a que el tribunal "...deduce erróneamente indicios en contra de DALILA VARGAS de la declaración del agente Alfredo Espinoza..." y agrega: "...cuando de dicha conducta de ubicar el dinero, la Honorable Corte Suprema en el fallo de 3 de octubre de 1997 (fs 2822 y siguientes) infirió su inocencia." (f. 3583). Dicho motivo es confuso al ligarlo a la sentencia de

hábeas corpus que declaró ilegal la detención de la sindicada, pues, si cuestiona la declaración de Alfredo Espinoza debe limitarse a mostrar la injuridicidad de la consideración de esa prueba. En el tercer motivo cuestiona el valor asignado a la declaración de Cesar Guillermo Montero pero no indica como de dicha valoración se deducen "...indicios para vincular a DALILA VARGAS CUBILLA con la organización criminal dedicada al tráfico de drogas,..." (f. 3584).

El acápite de disposiciones legales infringidas refiere los artículos 904, 972, 907 y 896 del Código Judicial y el artículo 263-B del Código Penal, cada uno con el concepto de su infracción.

B. Recurso interpuesto a favor de Jaime González Maraña

Se expone la historia concisa del caso adecuadamente.

La primera causal de fondo que se invoca es la de: "...error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado e implica infracción de la ley sustancial penal." (f. 3591).

Se basa en dos motivos, en el primero critica la valoración efectuada a la declaración de César Guillermo Montero, dado que se infirieron indicios para vincular a Jaime González, pero no concreta en qué consistieron dichos indicios. En el segundo motivo anota que se comete error al dar como probado nexo entre Jaime González y Remigio Barret en el tráfico de drogas, de la declaración de éste último, pero no específica como el Tribunal Superior incurre en dicho vicio.

Se mencionan como infringidos los artículos 907 y 904 del ordenamiento procesal y el artículo 255 del estatuto punitivo.

Como segunda causal de fondo se expone: "La sanción impuesta no corresponde con las circunstancias que modifican la responsabilidad penal,..." (f. 3594).

Un solo motivo sustenta la causal invocada en el cual se indica que no se tomó en cuenta al imponer la sanción, la circunstancia atenuante de delincuente primario que posee el sindicado GONZALEZ MARAÑA. De dicho motivo no emerge vicio de injuridicidad puesto que la delincuencia primaria en el presente caso no se ha explicado como constituye atenuante de responsabilidad penal.

Como norma sustantiva infringida señala el artículo 66 denuestro ordenamiento punitivo, en concepto de violación directa por omisión. Apunta: "...el Tribunal ad-quem ha desconocido la calidad de delincuente primario del procesado JAIME GONZALEZ MARAÑA, situación esta que encuadra en el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal que trata de las circunstancias atenuantes que modifican la responsabilidad penal." (f. 3575).

La calidad de delincuente primario que ostente un procesado no constituye circunstancia atenuante, así lo ha manifestado esta Sala en reiterados pronunciamientos, en resolución de 9 de noviembre de 1999 precisamos lo siguiente: "Se debe señalar que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma alguna que preceptúe que la condición de delincuente primario implica la aplicación de la pena mínima al procesado y en todo caso no figura entre las atenuantes comunes del artículo 66 del Código Penal, sino que esa calidad del agente debe ser tomada en cuenta por el juzgador para individualizar la pena que el legislador fijó en abstracto para la figura delictiva que se trate, en este caso el homicidio doloso agravado." (Registro Judicial Noviembre 1999, p. 264).

En consecuencia y conforme al principio de economía procesal, no procede siquiera ordenar la corrección de los recursos analizados para admitirlos, concluyendo posteriormente que los motivos no poseen cargos de injuridicidad y que las infracciones señaladas no se verificaron.

Toda vez que los motivos cumplen la función de transmitir los vicios de injuridicidad y los anotados para respaldar cada causal no lo hacen, carecen de

sustento lógico-jurídico los libelos analizados.

El medio extraordinario de impugnación, como lo es el recurso de casación, exige el cumplimiento de las formalidades, evidenciada la falta de la misma por los memoriales propuestos, la Corte encuentra que no se ajustan a lo dispuesto por el artículo 2443 numeral 3 literal c del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE los recursos de casación impetrados a favor de DALILA VARGAS CUBILLA y de JAIME GONZALEZ MARAÑA contra la sentencia de 22 de diciembre de 1999.

Notifiquese y Devuelvase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ARIS AUGUSTO AVILA SANCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO (EXTORSION). MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELIAS FERNANDEZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado MARTIN CAICEDO, en su condición de defensor técnico de ARIS AUGUSTO AVILA, ha interpuesto recurso de casación penal contra la sentencia de 6 de junio de 2000 expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, previa revocatoria de la de primera instancia en donde se absolvió a su representado, lo condenó a la pena de cuarenta y cuatro (44) meses de prisión, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso.

A tal efecto, prima facie se advierte que la iniciativa procesal se dirige a los Honorables Señores Magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en contravención de lo que establece el artículo 102 del Código Judicial, según el cual, el libelo bajo examen debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala.

Con relación a los requisitos que establece el numeral 3 del artículo 2443 ibídem, se observa que el escrito presentado contiene errores en su formalización.

En el caso bajo examen, la Corte observa que el casacionista ha presentado un escrito propio de un recurso de instancia ordinaria, con alegatos, apreciaciones subjetivas y trasncripciones, todo lo cual contradice la técnica de este tipo de recurso extraordinario. Es de advertir que el recurrente se excede en la exposición de la historia del caso, apartado que debe limitarse a una síntesis objetiva de los hechos y eventos procesales mas relevantes.

La causal invocada es "Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito, o a la responsabilidad del imputado o de las circunstancias que modifiquen su responsabilidad" (numeral 12 del artículo 2434 del Código Judicial), denominación a todas luces incorrecta porque esta causal presenta tres alternativas, las cuales debe considerarse por

separado:

1. Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito.
2. Cuando la sanción impuesta no corresponda a la responsabilidad del imputado.
3. Cuando la sanción impuesta no corresponda a las circunstancias que modifiquen su responsabilidad.

Como vemos, "... el recurrente debe seleccionar la alternativa que encuadra exactamente al caso, pues si se limita a trascribir la totalidad del texto está invocando simultáneamente tres causales". (Guerra de Villaláz, Aura E., CASACION, Primera Edición, 1995, página 326).

Dicha causal esta apoyada en tres extensos motivos de los que no se desprende a cual de las tres alternativas se refiere y además, carente de cargos concretos de injuridicidad y colmado de apreciaciones personales.

Finalmente el epígrafe de las disposiciones legales que estima infringidas y el concepto en que lo han sido es una sección también autónoma en donde se debe, en forma individual, citar y transcribir las normas que se consideran violentadas y posteriormente explicar en que concepto fueron infringidas: en forma directa por omisión o comisión, por indebida aplicación o por interpretación errónea, nada de lo cual ha hecho el recurrente (la subraya es nuestra). El censo aduce como infringido el artículo 187 del Código Penal, pero no dice en qué concepto fue vulnerado.

En este contexto, resulta notorio que el libelo presentado carece de sustento lógico-jurídico.

Los defectos anotados conducen a la Sala a declarar inadmisible el recurso sub júdice.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ARCADIO BENITEZ RODRÍGUEZ, ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ Y OTROS, POR DELITO DE VENTA DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de veintiséis (26) de octubre de dos mil (2000), esta Sala ordenó la corrección de los recursos de casación interpuestos por la Licda. TERESA IBAÑEZ GONZÁLEZ, a favor de ARCADIO BENITEZ RODRÍGUEZ y ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ, y contra la sentencia de 9 de junio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Una vez cumplido el término establecido en el artículo 2444 del Código Judicial, que ordena la corrección de los recursos anunciados, se procede a examinarlos, con la finalidad de decidir sobre su admisibilidad.

En tal sentido, observamos que la recurrente cumple con lo dispuesto en resolución de 26 de octubre de 2000, expedida por esta Sala, en donde se ordena la corrección del recurso en lo siguiente:

> "En virtud de las consideraciones expuestas, procede ordenar la corrección del recurso interpuesto por la licenciada TERESA IBAÑEZ, en el sentido de que se indique en las diferentes secciones del recurso, que el mismo es formalizado a favor de ARCADIO BENITEZ; y por otro lado, que el aparte de las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, sea denominado correctamente".(F.272)
>
> "Dado lo anterior, procede ordenar la corrección del presente escrito de casación, en el sentido de que se señale en los diferentes apartes del recurso, que es formalizado a favor de ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ; y por otro lado, que la sección de las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, sea denominado correctamente".(Fs.273-274)

Dado lo anterior, esta Sala concluye, en admitir los recursos interpuestos por la Licda. TERSA IBAÑEZ GONZÁLEZ, defensora de oficio de ARCADIO BENITEZ RODRÍGUEZ y ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de ARCADIO BENITEZ RODRÍGUEZ y ALBERTINA BENITEZ RODRÍGUEZ, y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días para que emita concepto de conformidad a lo establecido en el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A VICENTE GAUDIANO CHAMBONETT POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE ARMAS DE FUEGO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. JOSÉ NELSON BRANDAO, en su calidad de apoderado judicial de VICENTE GAUDIANO CHAMBONETT, interpuso recurso de casación en el fondo contra el auto de 23 de mayo de 2000, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el cual confirma la resolución de 6 de octubre de 1999, mediante la cual el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá niega la declaratoria de prescripción de la acción penal formulada a favor de su poderdante.

Vencido el término de lista, a fin de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del caso al Tribunal de Casación, corresponde ahora examinar el escrito mediante el cual se formaliza este medio de impugnación extraordinario, para los fines de resolver su admisibilidad, al tenor de lo previsto por el artículo 2443 del Código Judicial.

El recurso está dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial; fue presentado por persona hábil; promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal; contra una resolución que efectivamente admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Con relación a la historia concisa, se aprecia que el casacionista hace una relación breve y concreta de los hechos más relevantes que dieron lugar a la resolución que se pretende impugnar.

El casacionista fundamenta el recurso en una sola causal: "Cuando se infrinja o quebrante un texto legal expreso", consagrada en el artículo 2435 del Código Judicial, la cual se fundamenta en un solo motivo, que contiene el cargo de injuridicidad y ha sido formulado en forma precisa, clara y concreta, en congruencia con la causal aducida.

En otro orden de cosas, se tiene que el casacionista indica que las disposiciones legales infringidas son los artículos 91 y 14 del Código Penal, normas sustantivas cuyos textos transcribe en forma integra, con expresión del concepto de la infracción -violación directa por omisión-, y explicando cómo se ha producido.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el recurso en examen cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2443 del Código Judicial, el cual contiene elementos de la esencia del recurso, por lo que procede su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE del recurso de casación interpuesto contra el auto de 23 de mayo de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, y DISPONE, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto en el término de cinco días, tal cual lo establece el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO GABRIEL FERNÁNDEZ DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR EL SINDICADO RODOLFO HÉCTOR RICHARD CHAMBER. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El magistrado Gabriel Fernández ha solicitado al resto de los magistrados que integran la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que le separen del conocimiento de la petición de recurso extraordinario de revisión formulado por Rodolfo Héctor Richard Chamber, condenado por la comisión del delito de homicidio en detrimento de Danilo Alberto Bacilo Ross.

La solicitud del magistrado Fernández se fundamenta en el hecho de que fue designado defensor de oficio del reo, para que lo representara y asistiera "en cuanto a la correcta formalización del recurso de revisión solicitado por el propio sindicado" (f.11).

Con vista de que la manifestación de impedimento encuentra asidero legal solamente en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, esta Superioridad estima conveniente acceder a la solicitud formulada.

En virtud de lo anteriomente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Gabriel Fernández para conocer del presente caso y en su lugar se llama al magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético de apellidos, de conformidad con el artículo 78 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

REVISIÓN SOLICITADA POR EL LIC. VALENTIN JAÉN A FAVOR DE ALBRICK COLBERT PRINCE RODRIGUEZ, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. VALENTÍN JAÉN COCHERAN en calidad de apoderado judicial del señor ALBRICK COLLBERT PRINCE RODRÍGUEZ, interpuso formal recurso de revisión contra la sentencia N° 93 de 14 de agosto de 2000, proferida por el Juzgado Quinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se declara penalmente responsable a su poderdante y se le impone sanción de treinta(30) meses de prisión, por el Delito de Actos Libidinosos.

Con el fin de resolver la admisibilidad del recurso extraordinario presentado ante esta Superioridad, entramos a considerar el texto del escrito para evidenciar si el recurrente ha dado debido cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que el escrito va dirigido a los Magistrados de la Sala Penal, contrario a lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial que preceptúa que los escritos deben dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala.

Por otra parte, se indica la sentencia cuya revisión se demanda, el Tribunal que la expidió, así como la clase de sanción impuesta, los fundamentos de hecho y acompaña el escrito con pruebas documentales.

No obstante, el revisionista en su escrito no invoca ninguna causal para fundamentar el recurso, por lo que no cumple con lo señalado por nuestra jurisprudencia, la cual en reiteradas ocasiones ha indicado, que la revisión debe ajustarse a cualesquiera de las causales estrictamente establecidas en el artículo 2458 del Código Judicial, puesto que es un requisito indispensable para que sea admitido.

Por las razones anteriores, no procede la solicitud de revisión formulada por el Licdo. VALENTÍN JAÉN COCHERAN a favor de ALBRICK COLLBERT PRINCE RODRÍGUEZ.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA el recurso de revisión presentado por el Licdo. VALENTÍN JAÉN COCHERAN a favor de ALBRICK COLLBERT PRINCE RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL MURGAS MONTE, SINDICADO POR LA COMISIÓN DE DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE JUSTO SÁNCHEZ SANJUR. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de solicitud que presenta, mediante manuscrito, Miguel Angel Murgas Monte, para que se revise la sentencia de 7 de abril de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, que confirmó la decisión de primera de instancia y le impuso la pena de 72 meses de prisión, como responsable de la comisión del delito de robo en detrimento de Justo Sánchez Sanjur.

Como quiera que esta iniciativa procesal requiere ser formalizada mediante un profesional del derecho, el despacho sustanciador designó como defensor de oficio del condenado al licenciado Nelson Caballero, con el propósito de que asumiera su representación en este caso "y le asista en cuanto a la correcta formalización del recurso, y si se registra causal legal que lo fundamente" (f.11).

En cumplimiento de esa labor, el defensor de oficio presentó escrito en el cual manifiesta "que en el proceso reseñado no se da ninguno de los casos o supuestos identificados en el artículo 2458 del Código Judicial y que consecuente con ello de lugar a formalizar el recurso de Revisión promovido ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por MIGUEL ANGEL MURGAS MONTES" (fs.14-15).

Con vista de lo anterior, la Sala considera que lo que corresponde es desestimar la solicitud del defensor de oficio, ya que la formalización de este medio extraordinario de impugnación está condicionado al cumplimiento de los requisitos que a tales efectos establecen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESETIMA la solicitud de revisión que, en su propio nombre, formuló Miguel Angel Murgas Monte y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) GABRIEL FERNANDEZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR ALFREDO ISOROKU SUGAR, SINDICADO POR DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE DIEGO LOBON BALTAN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Fernando Basurto en calidad de apoderado judicial de la Policía Nacional de Panamá, ha interpuesto formal recurso de Revisión contra la sentencia de 23 de agosto de 1999 proferida por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal instruido a Alfredo Isoroku Sugar Cerrud por el delito de Lesiones Personales en perjuicio de Diego Lobon Baltán, en la cual se dispuso Casar la sentencia solamente en el sentido de declarar subsidiariamente responsable a la Policía Nacional por la suma de Doscientos Nueve Mil Balboas (B/.209,000.00) de los daños y perjuicios derivados del hecho punible por el cual fue condenado Alfredo Isoroko Sugar Cerrud, quien al momento de su actuar ilícito representaba a esa institución.

Corresponde determinar si se admite o no el recurso presentado, para lo cual se debe examinar si se reúnen los requisitos contemplados en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En primer lugar se advierte que el escrito no está dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal, contrario a lo estatuido en el artículo 102 del Código Judicial.

Por otra parte, el recurrente en este recurso de revisión lo es, el señor Carlos Bares Weeden en su condición de Director General de la Policía Nacional. Al respecto cabe determinar si está legitimado directamente por la ley para plantear el recurso de revisión.

Del contenido de las ocho causales que respaldan el recurso de revisión en nuestro Código Judicial (art.2458), se infiere que el principal legitimado para presentar un recurso de revisión es la persona que fue condenada penalmente por medio de una sentencia ejecutoriada; lo que significa que ha sido condenada como autor o participe en un delito.

Ello no obsta para que en el evento que la persona injustamente condenada hubiere fallecido, tengan el derecho de restaurar su honor, el cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos. También, dada su posición objetiva en el Proceso Penal, puede promover el recurso de revisión no solamente como un derecho sino como un deber, el Ministerio Público.

Ahora bien, la resolución cuya revisión se solicita es la sentencia de 23 de agosto de 1999 por medio de la cual esta Sala de la Corte Suprema de Justicia dispuso: "Casar la sentencia solamente en el sentido de declarar subsidiariamente responsable a la Policía Nacional por la suma de DOSCIENTOS NUEVE MIL BALBOAS (B/.209,000.00) de los daños y perjuicios derivados del hecho punible por el cual fue condenado ALFREDO SUGAR CERRUD, quien al momento de su actuar ilícito representaba a esa institución".

El Código Penal patrio establece que de todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo (art.119); y que en la sentencia condenatoria dictada en juicio criminal se podrá ordenar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a

un tercero (art.120).

También establece nuestro código punitivo en su artículo 126 que " El Estado, las instituciones públicas autónomas, semi-autónomas o descentralizadas así como los municipios, responderán subsidiariamente en el monto de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus servidores con motivo del desempeño de sus cargos".

Como se puede apreciar, tal responsabilidad por parte del ente gubernamental no se identifica con pena alguna, toda vez que tal obligación se origina como consecuencia de haberse emitido a través de un proceso penal un juicio de culpabilidad respecto a un hecho punible cometido por uno de sus servidores públicos al desempeñar el cargo respectivo, ya sea en calidad de autor o partícipe.

En consecuencia, el Director General de la Policía Nacional, señor Carlos Bares Weeden, no está legitimado para interponer recurso de revisión en la presente causa.

Como fundamento de derecho, el postulante invoca la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial que indica que procede el recurso de revisión "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

Como lo ha reiterado esta Sala, para aducir la causal arriba transcrita "es necesario que el recurrente señale cuáles son los nuevos hechos o elementos de prueba que por sí solos o en combinación con pruebas anteriores puedan dar lugar a modificar la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada, tal cual lo prevé el precitado ordinal. Aunado a ello, se debe aportar con el escrito los medios de pruebas que revistan esa calidad" (Noviembre 18 de 1999).

Los medios de pruebas aportados por el postulante son los siguientes:

-Copias debidamente autenticadas del expediente clínico del Hospital Santo Tomás del señor Diego Lobon Baltán.
-Cinco (5) opiniones médicas debidamente notarizadas.
-Certificación del departamento de Cuentas Individuales de la Caja del Seguro Social.
-Y aduce el expediente penal contentivo de las sumarias instituidas a Alfredo Isoroku Sugar Cerrud.

La Sala advierte que los únicos elementos de pruebas nuevos son las cinco opiniones médicas y la certificación de cuentas individuales de la Caja del Seguro Social.

Sin embargo, en cuanto a las cinco opiniones médicas las mismas tienen como basamento la hoja de evaluación clínica de ojos del Hospital Santo Tomás, prueba que consta en el expediente principal y que en su momento procesal oportuno fue valorada. Aún así, podemos indicarle al postulante que ninguna de las mencionadas opiniones médicas que aduce con el escrito de revisión tienen la virtualidad de desvirtuar el hecho que el señor Diego Lobon Baltán perdió de manera definitiva la visión del ojo izquierdo por estallido ocular.

Importante es recordarle al postulante que esta Sala "ha manifestado en reiterada jurisprudencia que la exigencia de novedad de los hechos o elementos de prueba tiene su razón de ser en la circunstancia de que una repetición de la valoración del material probatorio del juicio cerrado con autoridad de cosa juzgada destruiría toda seguridad jurídica" (Noviembre 18 de 1999).

En cuanto a la prueba de Certificación del Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social, no se adiciona elemento alguno que

desvirtúe el contenido del fallo cuya revisión se solicita, a objeto de lograr la absolución del acusado o una condena menos rigurosa por la aplicación de una disposición penal menos severa.

En consecuencia con lo expuesto, y dado que el recurso presentado no cumple con los requisitos establecidos en nuestro Código Judicial, no procede su admisión.

Como quiera que en el punto 10° el recurrente manifiesta que le cuesta comprender "bajo qué parámetros desprovistos de cientificidad, se sanciona pecuniariamente a la Policía Nacional", vamos a dedicar unas líneas en la presente resolución a objeto de ilustrar docentemente al licenciado Fernando Basurto, en un esfuerzo de contribuir a subsanar su evidente insuficiencia de conocimientos jurídicos, lo cual es lamentable en un profesional del derecho que se presume conoce la ley.

1. El artículo 119 del Código Penal establece que de todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo.

2. El artículo 120 del Código Penal indica que en la sentencia condenatoria dictada en juicio criminal se podrá ordenar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a su familia o a un tercero; o la restitución de la cosa obtenida por razón del delito o en su defecto el respectivo valor.

3. El artículo 126 del Código Penal establece la responsabilidad subsidiaria por parte del Estado y sus instituciones, al igual que los municipios en el monto de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus servidores con motivo del desempeño de sus cargos.

4. Consecuencialmente se desprende que si en la vía penal se ha determinado la comisión de una conducta delictiva causada por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, automáticamente y por virtud de la ley surge la responsabilidad subsidiaria de que trata el artículo 126 del Código Penal.

Ahora bien, el fallo cuya revisión reclama, no sancionó pecuniariamente a la Policía Nacional, sino que se le responsabilizó subsidiariamente en el monto de los daños y perjuicios derivados del hecho punible cometido por el procesado y condenado, señor Alfredo Sugar Cerrud, tal como lo establece nuestro ordenamiento penal; siendo una antinomia recurrir a otra vía judicial, situación que haría dilatoria la justicia para quien ha sido víctima de un hecho punible que le ha dejado un daño corporal irreversible consistente en la pérdida de un órgano de la visión (ojo izquierdo), como es el caso del señor Diego Lobon, y la declusión del sistema de lagrimeo del ojo derecho que limita su capacidad de visión.

Finalmente, en esta ocasión, le hacemos una llamada de atención al licenciado Fernando Basurto, quien se desempeña como Asesor Legal de la Policía Nacional, en el sentido de que cuide los términos y el tono en que ha de dirigirse a esta máxima corporación de justicia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la solicitud de revisión presentada por el licenciado Fernando Basurto en representación del Director General de la Policía Nacional, señor Carlos Bares Weeden.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A OMAR RODRIGUEZ PITTY, SANCIONADO POR DELITO DE ESTAFA Y DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN FONDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licdo. GUILLERMO AUGUSTO SALAZAR MELGAR en su condición de apoderado judicial de OMAR RODRÍGUEZ PITTY, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia calendada 9 de octubre de 1995 en la que se condena a su poderdante a la pena de 32 meses de prisión y ciento veinticinco días multa a razón de diez balboas (B/.10.00) el día multa y como pena accesoria se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por término igual.

Con el fin de resolver la admisibilidad del recurso extraordinario presentado ante esta Corporación de Justicia, entramos a considerar el texto del escrito para evidenciar si el recurrente ha dado debido cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que el recurso fue interpuesto mediante memorial dirigido a los Honorables Magistrados de la Sala Segunda Penal, de la Corte Suprema, cuando lo que correspondía era dirigirlo al Magistrado Presidente de la Sala Penal, conforme a lo estatuido en el artículo 102 del Código Judicial.

Advierte la Sala que en el libelo se indica la sentencia cuya revisión se demandada, se hace referencia a los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud.

No obstante, el letrado incurre en el error de no señalar cuál es la causal o las causales en que se fundamenta el medio de impugnación, elemento esencial de la estructura del recurso que consagran los ocho numerales del artículo 2458 del Código Judicial, además de que de la lectura de los hechos esgrimidos en el libelo de revisión, no se desprende elemento alguno que corresponda a las causales contenidas en el citado artículo.

Aunado a lo anterior, el escrito no está acompañado de las pruebas de los hechos fundamentales, requisito establecido en el artículo 2459 del Código Judicial.

La Sala concluye que el presente recurso de revisión no cumple con los requisitos que la Ley de Procedimiento Penal establece y por tanto lo rechaza por ser manifiesta su improcedencia.

PARTE RESOLUTIVA

Siendo que en el presente recurso extraordinario no se encuentran reunidos los presupuestos que contempla el artículo 2458 y 2459 del Código Judicial, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por la defensa técnica de OMAR RODRÍGUEZ PITTY.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

SENTENCIA APELADA EN PROCESO QUE SE LE SIGUE A BENJAMIN PALACIOS MOSQUERA POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE YADIRA MOSQUERA HURTADO. MAGISTRADO PONENTE: GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 12 de abril de 2000, impuso la pena de 14 años de prisión y 5 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a Benjamín Palacios Mosquera, por la comisión del delito de Homicidio en perjuicio de Yadira Mosquera Hurtado.

En el acto de notificación de la medida jurisdiccional el imputado y su defensor técnico anunciaron recurso de apelación, que fue sustentado en tiempo oportuno.

ARGUMENTO DEL RECURRENTE

El licenciado Ronald M. Hurley, Defensor Técnico de Benjamín Palacios Mosquera, en extenso libelo de 16 páginas fundamenta el recurso en las siguientes razones:

> "A. POR LA REITERADA INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS ELEMENTALES DEL DEBIDO PROCESO EN LAS FASES SUMARIAL Y PLENARIA;
>
> B. POR LA ORQUESTADA INTRODUCCION Y UTILIZACION DE PRUEBAS ILICITAS EN EL PROCESO;
>
> C. POR LA EXTRALIMITACION DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR DEL PROCESO;
>
> D. POR LA FALSIFICACION DE CONTENIDO, E INTRODUCCION ILEGAL Y EXTEMPORANEA DEL ELEMENTO PROBATORIO MAS IMPORTANTE DEL PROCESO, POR PARTE DEL PERITO PSIQUIATRA FORENSE;
>
> E. POR EL DELIBERADO Y CALCULADO FALSO TESTIMONIO PERICIAL RENDIDO POR EL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO PUBLICO, EN CALIDAD DE MEDICO PSIQUIATRA FORENSE, DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA; Y
>
> F. LA TIPIFICACION DE HOMICIDIO AGRAVADO FUNDAMENTADO EN HECHOS SUBJETIVOS." (foja 480).

Sostiene en su recurso que existieron irregularidades procesales en: la fase sumaria (fs. 482-486), en la fase intermedia (f. 487), en la ampliación del sumario (f. 487), en la segunda fase intermedia (fs. 487-488), en la fase plenaria (fs. 488-490) y en el período extraordinario de pruebas (fs. 490-491). Igualmente, puntualiza que existió: "LA ORQUESTADA INTRODUCCION Y UTILIZACION DE PRUEBAS ILICITAS EN EL PROCESO" (fs. 491-492), "EXTRALIMITACION DE FUNCIONES Y ABUSO DE AUTORIDAD POR PARTE DEL MAGISTRADO SUSTANCIADOR DEL PROCESO" (fs. 492-493), "LA FALSIFICACION DE CONTENIDO, E INTRODUCCION EXTEMPORANEA DEL ELEMENTO PROBATORIO MAS IMPORTANTE DEL PROCESO POR PARTE DEL PERITO PSIQUIATRA FORENSE Y SU DELIBERADO Y CALCULADO FALSO TESTIMONIO PERICIAL DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA (fs. 493-494) y "LA TIPIFICACION DE HOMICIDIO AGRAVADO FUNDAMENTADO EN HECHOS SUBJETIVOS" (fs. 494).

En el último punto expresa: "LA TIPIFICACION DE HOMICIDIO AGRAVADO

FUNDAMENTADO EN HECHOS SUBJETIVOS:

> PRIMERO: Consideramos que también yerra el Magistrado Sustanciador, al elevar al rango de Homicidio Doloso Agravado, el hecho juzgado.
> SEGUNDO: No está acreditado en el expediente certificación oficial alguna que establezca un vínculo conyugal.
> TERCERO: El hecho de haber concebido dos (2) hijos con la Occisa, no le automatiza la condición de cónyuge.
> CUARTO: No se estableció en el expediente, que convivieran en condición de singularidad, y que no tenían impedimentos para contraer nupcias.
> QUINTO: Consideró que los elementos si es que los hay, tomados en cuenta por el Juzgado A-Quo, para tipificar el agravamiento en éste caso son meramente subjetivas y de carácter circunstancial.
> SEXTO: Por estas razones que no se funda en derecho y pruebas contundentes la tipificación agravada.
> SEPTIMO: Solicitamos que dicha tipificación sea revocada." (f. 494)

ARGUMENTO DEL OPOSITOR

El Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, en su libelo de oposición señaló que el recurrente efectúa 7 reparos a la resolución de primera instancia, que los cuatro primeros resultan extemporáneos por competer al jurado de conciencia; respecto al quinto reparo no entiende cuál es el propósito si no se han vulnerado los derechos y garantías del imputado; en el sexto reparo en el cual se considera falso el informe médico psiquiátrico, considera que no es objeto de discusión en este momento procesal; y en cuanto al último reparo, apunta que no es atendible por ser contradictoria la posición del recurrente, al cuestionar la existencia de vínculo de su patrocinado con la ofendida por un lado, y por el otro aceptar que el mismo tenía dos hijos con la misma. Finalmente, peticiona que se confirme la resolución impugnada.

ANALISIS DE LA CORTE

Consta en autos que la muerte de Yadira Mosquera Hurtado acaecida el día 4 de noviembre de 1996, se produjo como consecuencia de herida penetrante por proyectil de arma de fuego en el tórax tal como lo precisan la diligencia de reconocimiento de cadáver y el protocolo de necropsia (fs. 2-4, 74-79).

Destaca el patologo forense del Instituto de Medicina Legal sobre la herida de la occisa lo siguiente: "En su trayectoria el proyectil lesionó una estructura vital del cuerpo (la arteria aorta) causando una hemorragia interna aguda y fatal (f. 79).

Requerido para que rindiera declaración indagatoria el sindicado PALACIOS MOSQUERA, subteniente de la Policía Nacional manifestó lo siguiente: "...yo me cegué no sabía si parar y huir; y tomé el arma e hice varias detonaciones, y luego me retiré del area, no supe más nada, al día siguiente fue que llamé al DI.I.P. y me vine a presentar." (f. 91) Indicó que utilizó el arma de reglamento, una pistola de 9 milímetros, marca Browning serie 1004.

La sección de Balística Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial estudió el proyectil extraído a la víctima y el arma de fuego y concluyó:

> "El arma de fuego en estudio, especificada en la evidencia (E1) es idonea (sic) para realizar disparos, esta pistola no presenta registro, denuncia en nuestros archivos balísticos
> Los casquillos incriminados, descritos en la evidencia (E2) fueron percutados por la pistola descrita en la evidencia (E1).
> El proyectil incriminado, detallado en la evidencia (E3) fue disparado por la pistola descrita en líneas anteriores.
> Los cartuchos mencionados en la evidencia (E4) son aptos para ser

utilizados en armas de fuego, tipo pistolas calibre 9mm." (f. 148)

Es necesario señalar que la culpabilidad del imputado BENJAMIN PALACIOS MOSQUERA por el delito de Homicidio la decidieron los miembros del Jurado de conciencia, por lo que pasamos a decidir los el recurso únicamente sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2428 del Código Judicial.

En primer lugar, el recurso critica la forma como se llevo el negocio en la fase sumarial, indicando que se lesionó el debido proceso, es necesario recordarle al recurrente que el Código Judicial en su artículo 2009 prevé la posibilidad de atacar los actos que lesionen los derechos del imputado durante la instrucción del sumario. En la fase plenaria, nuestro ordenamiento también permite la presentación de incidentes de previo y especial pronunciamiento (Ver artículo 2274 y subsiguientes del Código Judicial) y de nulidades (artículos 2297 y 2298 del Código Judicial) por lo que mal puede reclamar a estas alturas la inobservancia señalada.

Por otro lado, sostiene que se verificó una orquestada introducción y utilización de pruebas ilícitas, más sin embargo, no cuestionó las mismas en el momento procesal oportuno a través de los medios que la ley establece como las incidencias antes señaladas.

Se señala la extralimitación de funciones y el abuso de autoridad por parte del Magistrado Sustanciador del proceso, éste no es el conducto adecuado para ello, puesto que la ley permite la presentación de querella contra servidores públicos debidamente acompañadas de la prueba sumaria si se trata de delitos; y la interposición de quejas por faltas disciplinarias y contrarias a la ética judicial ante la autoridad nominadora.

El instituto del recurso de apelación no puede desnaturalizarse con la presentación de argumentos atacando la personalidad del juzgador de primera instancia, debe ceñirse a señalar los agravios.

Se alude a que existe falsificación de contenido, introducción ilegal y extemporánea de un elemento probatorio por parte del psiquiatra forense, pero en autos no existe constancia de que dicho documento contenga falsedad ideológica, lo prohiba la ley, viole derechos humanos, contrarie la moral o el orden público y que en dicha suposición halla participado el perito psiquiátrico forense con fines delictivos.

Acota que hubo un "...DELIBERADO Y CALCULADO FALSO TESTIMONIO PERICIAL RENDIDO POR EL FUNCIONARIO DEL MINISTERIO PUBLICO, EN CALIDAD DE MEDICO PSIQUIATRA FORENSE, DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA;" (f.480). Al igual que en el punto anterior este hecho no consta en autos por lo que no cabe exponerlo en un recurso como el que nos ocupa.

Advertimos al licenciado Hurley que el defensor en el proceso penal, independientemente, si su gestión es exitosa o no, también se constituye en un auxiliar de la jurisdicción que debe conducirse con respeto hacia los tribunales. El artículo 1 del Código de Etica y responsabilidad profesional del abogado puntualiza:

"Artículo 1. El abogado debe mantener para con los funcionarios judiciales, del Ministerio Público y del Orden Administrativo una conducta respetuosa y de colaboración, para el logro de una positiva administración de justicia.
Siempre que haya motivo de queja fundada contra un funcionario de la Administración de Justicia es derecho y deber del abogado presentar su reclamo ante las autoridades competentes."

La forma como se conduce el recurrente, en el ejercicio de la profesión en el presente proceso, debe ser objeto de investigación por parte del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, toda vez que podría tratarse de la

comisión de las faltas contenida en los literales i, ñ y x del artículo 34 del Código de Etica y Responsabilidad profesional del Abogado.

Cuestiona en el último punto de su recurso la tipificación y solicita que la misma sea revocada.

El Segundo Tribunal Superior al enmarcar el actuar del procesado en la figura del homicidio agravado lo hace de la siguiente manera:

> "4° Se está ante los presupuestos del homicidio doloso agravado tipificado en el artículo 132 numeral 1° en relación al artículo 68, ambas del Código Penal, cuya sanción oscila de doce (12) a veinte (20) años de prisión y, los argumentos que sustentan esta tesis son:
> 4.1. La relación marital entre sujeto activo y pasivo, aceptada por el procesado y por los vecinos declarantes en autos.
> 5° Para la individualización judicial de la pena se ha de tomar en cuenta los supuestos inmersos en el artículo 56 numerales 1,2,3,4,5 y 6 ibídem, o sea que se hace referencia a:
> 5.1 La sujeto pasivo era la cuarta mujer del procesado relación que se inició en 1990, fs. 88-97.
> 5.2. El procesado labora en la Policía Nacional desde el 26 de febrero de 1974, fs. 88-97, por ende, su mayor obligación consistía en tratar de proteger, al máximo, la vida de todos los miembros de la sociedad.
> 5.3. El procesado cursó estudios hasta el quinto (5°) año secundaria. Actuó con ventaja y no auxilió a la víctima al momento del hecho.
> 5.4. PALACIOS MOSQUERA es un sujeto imputable, no padece trastornos mentales.
> 6° En atención a lo expuesto, estima la Sala adecuado fijar la pena media base en catorce (14) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas en cinco (5) años, luego de cumplir la privación de libertad.
> 7° No existen atenuantes ni agravantes que considerar." (fs. 473-474).

Llama sobremanera la conclusión carente de una adecuada fundamentación a la que arriba el Tribunal de primera instancia, sobre la conducta agravada de homicidio, anota seis puntos, más sin embargo, solo el 4.1. respalda dicha tipificación, no expone de que elementos probatorios infiere la misma, limitándose a destacar que el imputado aceptaba mantener relación marital con la ofendida, hechos que respaldan los vecinos con sus deposiciones (f. 474).

Es un deber ineludible de todo juzgador en el Estado democrático de derecho, cumplir con la fundamentación o motivación de las resoluciones, toda vez que ello constituye garantía para los asociados de que se da mantenimiento a la seguridad jurídica.

La resolución del negocio sub-júdice debió ajustarse al artículo 119 numeral 5 del Código Judicial, el cual impone motivar las sentencias, y al artículo 770 ibídem, acreditando el análisis razonado de los elementos probatorios, específicamente los que le llevaron al convencimiento de subsumir la conducta en el tipo agravado.

Sostiene el jurista español BACIGALUPO sobre la subsunción lo siguiente:

> "Un hecho se subsume bajo un tipo penal cuando reune todos los elementos que este contiene. En la práctica, la subsunción se verifica comprobando si cada uno de los elementos de la descripción del supuesto de hecho se da en el hecho que se juzga.
> En los delitos dolosos la tipicidad depende de la comprobación de los elementos del tipo objetivo y de los elementos del tipo subjetivo (dolo y demás elementos subjetivos de la autoría)".

(BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal, Parte general, Segunda reimpresión, Edit. Temis, Bogotá, 1994, p. 87.

La Corte no comparte la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, los juzgadores no pueden bajo ninguna circunstancia y mucho menos, bajo el pretexto de seguridad y defensa social, exceder el marco de la estricta legalidad, agravando una conducta de homicidio simple a homicidio agravado con interpretaciones analógicas.

Anteriormente, hemos indicado que en supuestos como el que nos ocupa, no procede subsumir la conducta en el tipo del homicidio parental, así en resolución de 9 de agosto de 1996 sostuvimos: "Cabe aclarar que, contrario a lo dicho en la Sentencia apelada, en los casos en que resulte aplicable el numeral 1 del artículo 132, como agravante específica del homicidio, es decir, en la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco, si bien el artículo 68, establece que para los fines de la ley penal, se consideran parientes a los cónyuges, éstos no pueden ser considerados como parientes por afinidad sino únicamente como cónyuges." (Registro Judicial, Agosto 1996, p. 269).

La interpretación de la ley penal obliga a los jueces a no desatender el tenor literal de las normas penales, no podemos ampliar el radio de la ley al imponer sanciones, el principio de legalidad nos obliga a actuar restrictivamente, más al tratarse de tipos penales con agravantes específicas, como lo es el delito de homicidio agravado, en el que el supuesto de hecho tiene que coincidir plenamente con la norma aplicada. (Ver Registro Judicial Marzo 1995, p. 219).

En virtud de lo anterior, se reformará la resolución recurrida enmarcando el actuar del imputado conforme al artículo 56 del Código Penal, en el delito de homicidio simple previsto en el artículo 131 ibídem, por estar probado en autos que existía una relación de singularidad y estabilidad con la ofendida, madre de familia con la cual tenía dos (2) niños. Aunado a ello el hecho que era miembro de la policía nacional y utilizó su arma de reglamento fuera de su horario habitual de labores como represalía contra la ofendida.

La pena principal se fijará en proporción a la lesión causada en nueve (9) años de prisión y será agravada en una tercera parte atendiendo al artículo 68 por la relación marital de hecho que se daba entre el agresor Palacios Mosquera y la víctima Mosquera Hurtado, quedando una pena líquida de doce (12) años de prisión.

Se impondrá como pena accesoria la pena de cuatro (4) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de imponer a Benjamín Palacios Mosquera, de generales conocidas en autos, la pena de doce (12) años de prisión e Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cuatro (4) años una vez cumplida la pena principal por el delito de homicidio simple en perjuicio de Yadira Mosquera Hurtado.

Compulse la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia copias autenticadas del recurso de apelación presentado por el recurrente ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados a fin que se investigue la conducta del letrado.

Notifiquese y Cumplase,

(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL CONTRA LA SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 2000 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALJADIS ABDUEL HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN PERJUICIO DE MANUEL ALEXANDER PITTI. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 14 de julio de 2000, absolvió a Aljadis Abduel Hernández Pelaéz de los cargos formulados como presunto infractor del delito de homicidio doloso en grado de tentativa en perjuicio de Manuel Alexander Pittí.

La decisión jurisdiccional fue recurrida en apelación por el representante del Ministerio Público. Cabe advertir que el juicio se surtió con los trámites del proceso ordinario ya que el sindicado se acogió a juicio en derecho (fs. 158 y 162).

El representante de la Vindicta Pública se manifiesta en desacuerdo con la sentencia absolutoria, porque la ausencia de antecedentes penales y policivos no es considerada una causa de justificación ni una atenuante en el Código Penal (f. 154).

También afirma que el a-quo absolvió a Hernández Pelaéz señalando que "...una serie de pruebas necesarias para esclarecer el conflicto, no fueron practicadas durante la fase preparatoria o de instrucción sumarial...nos referimos a los informes de la corregiduría donde fueron tramitados los conflictos de la familia PITTI con otras personas de la comunidad..."(Cfr. f. 196). Advierte el agente del Ministerio Público que el Tribunal Superior de Justicia abrió causa criminal contra Hernández Pelaéz prescindiendo de las pruebas que no se practicaron en la etapa sumarial (f. 121).

Finalmente, censura la sentencia en virtud de que el Tribunal de la causa absolvió a Hernández Pelaéz, basandose en la hipótesis de la legítima defensa, ya que la misma "...está alejada de la realidad procesal que nos ocupa y por lo tanto la resolución debe revocarse..." (f. 206).

ANTECEDENTES

Las sumarias dan cuenta que el 10 de marzo de 1997, en el sector de Torrijos Carter distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, a eso de las siete de la noche, Layra Mercedes Pelaéz de Mena, madre del imputado, se acercó a la residencia de la familia Pittí, con la finalidad de resolver el problema que se estaba dando entre su hijo Daniel y la víctima Manuel Pittí. Durante la discusión la víctima se abalanzó sobre Layra Mercedes de Peláez, lo que propició que Aljadis Abduel Hernández Pelaéz le efectuara un disparo.

El examen médico legal presenta:

> **"-Cicatriz quirúrgica en tórax lateral derecho, línea auxiliar anterior de 2.5 x 1 cms (sic).**
> **-Cicatriz ovoide en el tórax anterior derecho superior que mide 1.5 x 1 cm.**
> **-Cicatriz irregular en tórax lateral derecho, línea axilar psoterior (sic) de 2 x 1 cm.**
> **Le corresponde INCAPACIDAD DEFINITIVA: TREINTA (30) DIAS, a partir del día del incidente, salvo complicaciones por las lesiones sufridas..."(Cfr. f. 54).**

El Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial absolvió a Aljadis Abduel Hernández Pelaéz, por considerar que surgen dudas razonables con relación a su culpabilidad, ya que de acuerdo a las propias declaraciones del denunciante Manuel Pittí, se deduce que la familia Pitti es conflictiva y el actuar de Hernández Pelaéz iba encaminado a defender a su madre hecho desprendido de las declaraciones de Laira Pelaéz de Mena, por lo que existen dudas razonables en relación con los hechos por lo que debe prevalecer la más favorable al reo (fs. 183-184).

Corresponde a la Corte Suprema Sala de lo Penal examinar algunos elementos probatorios obrantes en el cuaderno penal a objeto de resolver los puntos a que se refiere el apelante.

El imputado Aljadis Abduel Hernández expone que "mi mama (sic) estaba discutiendo el problema con ellos (familia Pittí)...se burlaban de mi mamá....me fui para mi casa y empece a buscar...encontré un arma....entonces fue cuando apunté para arriba y apreté el gatillo..."(Cfr. f. 30).

Layra Mercedes Pelaez de Mena madre del imputado manifiesta que el día de los de los hechos, estando fuera de la casa de la familia Pittí, para conversar con la madre los Pittí, al retirarme "...escuché que uno de los Pitti, dijo refiriendose a mi hijo DANIEL "Tienen que buscar a su mamá, para que los defiendan" en eso vi venir a mi hijo ALJADIS y uno de los PITTI de nombre o apodo "BETO" manifestó "BUSQUEN EL ARMA" lo que me indica de que ellos tenian (sic) un Arma en la casa y fue cuando el que está en el hospital MANUEL, saltó el muro de su casa y se abalasó (sic) sobre mi y el otro hermano de este de apodo BETO, recogió algunas piedras y fue cuando escuche una detonación..."(Cfr. f. 17).

De otra parte, Manuel Pittí, padre de la víctima, manifestó que su familia confrontaba problemas con varias personas de la comunidad, como el caso ocurrido .el 5 de febrero de ese año, cuando su hijo Manuel Alexander fue víctima de unos disparos que le hizo Eligio De Leon Reyes (f. 2).

Por su parte, la víctima Manuel Alexander Pitti, indica que "...yo hice com (sic) que me iba a cruzar (sic) murito, pero no lo hice, fue entonces que rápidamente al ver esto ALJADIS, sacó un arma de fuego, realizó un disparo que no servia la bala ya que solo (sic) hecho humo y leugo (sic) el segundo disparo con mi, (sic) logrando herirme..."(f. 41).

El Código Judicial establece como funciones del Ministerio Público, entre otras las de "...preparar y presentar oportunamente, las pruebas que deben ser practicadas en el plenario de los juicios respectivos..."(Cfr. Art. 380 C. J.).

Por lo que resulta interesante verificar que su tarea va más allá del auto que abre causa criminal contra un imputado, pues también tiene la tarea de aportar las pruebas que permitan que el juzgador tenga una idea clara de los elementos o circunstancias que rodearon el hecho delictivo. De allí la posición del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que ante dudas razonables que pudiesen demostrar la culpabilidad de Aljadis Abduel Hernández Pelaéz emita una sentencia absolutoria en virtud del aforismo latino Indubio Pro Reo.

Sobre el principio Indubio pro reo, José María Luzón Cuesta, ha señalado que es un principio auxiliar que se ofrece al juez a la hora de valorar la prueba, de modo que, una vez practicada, si llega a ser bastante para que pueda formar su convicción o apreciación en conciencia, en orden a la culpabilidad o no del acusado, sus razonables dudas habrá de resolverlas siempre en favor del acusado..."(República de Panamá, Proyecto Regional de Capacitación Judicial Continuada: El Debido Proceso, 1998, 150).

En virtud de lo antes expuesto la Sala desestima el recurso presentado por el agente del Ministerio Público y no tiene reparos en confirmar la sentencia venida en grado de apelación.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia del 14 de julio de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior del primer Distrito Judicial que ABSUELVE a Aljadis Abduel Hernández Pelaez, del delito de homicidio doloso en grado de tentativa en perjuicio de Manuel Alexander Pittí.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) GABRIEL FERNANDEZ M. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELMER ANTONIO JIMENEZ LEZCANO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 27 de julio de 2000, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, DECLARÓ CULPABLE a ELMER ANTONIO JIMÉNEZ LEZCANO del delito de homicidio en perjuicio de Luis Antonio Ríos Justavino y lo CONDENÓ a la pena de OCHO (8) AÑOS de PRISIÓN y a la pena accesoria de Inhabilitación Para el Ejercicio de Funciones Públicas por el mismo tiempo de la pena principal (fs. 327-335).

El fallo en comento fue apelado por el licenciado Edwin Álvarez Camaño, Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, así como por la defensa técnica del procesado, licenciada Micaela Morales Miranda, Defensora de Oficio; por lo que al presentar en tiempo oportuno los escritos respectivos, se concedió el recurso en el efecto suspensivo (f.353).

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

El licenciado Álvarez Camaño, contrario a la resolución apelada, estima que la calificación delictiva que cabe en el presente caso es la de homicidio doloso contenida en el artículo 132 numeral 2 del Código Penal, afirmando que la acción criminal desplegada por el hoy encartado se dio con premeditación.

En ese sentido explica, que se debe considerar que antes del desenlace fatal el imputado y el hoy occiso habían sostenido una riña o pelea previa de la cual dan testimonio los señores Aurelio Del Cid (a) "Yeyo" (fs.170-172), Eugenio Pittí Concepción (a) "Cebollón" (fs.173-175), José Arody Moreno Castillo (a) "Loli" (fs.176-178), Alcibiades Morales Lezcano (a) "Chali" (fs.240-242). Además que tales declaraciones dan cuenta que posterior a la riña sostenida, el imputado inició los actos preparatorios para culminar o acabar con la vida de Ríos Justavino, como en efecto lo hizo.

Sostiene la representación fiscal, que hubo premeditación en el actuar de Jiménez Lezcano cuando éste públicamente manifestó que más adelante en el camino esperaría a que Ríos Justavino pasara solo para entonces ultimarlo. Aseveración que en su concepto reviste contundencia y seriedad, dado que se acredita en el expediente que el ofendido para llegar a su residencia tenía necesariamente que transitar frente a la residencia del imputado, como consta en la Diligencia de Reconstrucción de los hechos (fs.219-235).

Destaca el licenciado Álvarez Camaño, que si bien la sentencia recurrida hace alusión a las declaraciones testimoniales ya citadas, arribando a la

conclusión de que el imputado Jiménez Lezcano estaba preparado para atacar en la noche de autos a Ríos Justavino; sin embargo, el fallo nada dice en torno a la circunstancia agravante de la premeditación, ni tampoco descarta la ausencia de dicha causal de homicidio doloso.

En consecuencia concluye, que se ha probado en el proceso que el imputado tuvo el propósito firme, reflexivo y bien meditado de causarle la muerte al ofendido, lo que caracteriza la figura jurídica de premeditación recogida en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal. Por lo que solicita sea revocada la sentencia apelada y se imponga al imputado la pena que corresponde por la comisión del delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de Ríos Justavino (fs.337-340).

Por su parte la licenciada Morales Miranda, solicita se considere la posibilidad de disminuir la pena impuesta a su representado, porque el Tribunal de Primera Instancia, en su concepto, no tomó en consideración al dosificar la pena los ordinales 4° y 5° del artículo 56 que se refiere a la calidad de los motivos determinantes y las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que hayan influido en la comisión del hecho punible.

En ese sentido se refiere a que el hoy occiso había tomado el día de los hechos, lo que explica en cierta forma su actitud agresiva hacia su representado e igualmente la superioridad física (1.96 de estatura) y robustez (180 lbs) del occiso con relación al procesado quien pesa 160 libras con una estatura de 1.71 metros (fs.342-344).

OBJECIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA AL ESCRITO DE APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sostiene la licenciada Morales Miranda contrario al señor fiscal, que no hubo premeditación o por lo menos no fue indubitablemente acreditada. Por lo que en su concepto, al Tribunal Superior dosificar la pena si tomó en consideración la forma en que se dio el hecho, incluso estableció la pena no en la mínima, sino en la mitad de la pena que establece el Código Penal para este tipo de homicidio.

Por tanto, solicita mantenga la pena establecida a su representado como autor de homicidio simple (fs.348-351).

ANÁLISIS DE LA SALA

Como bien se advierte, no se ha impugnado el juicio de culpabilidad emitido por el Tribunal en Derecho, sino el juicio de tipicidad llevado a cabo por el Tribunal A-Quo; así como el no reconocimiento de los factores consignados en los numerales 4 y 5 del artículo 56 del Código Penal.

En primer lugar, pasa esta Sala a valorar si la conducta desplegada por el procesado coincide o no con la descripción típica contenida en el artículo 131 del Código Penal, es decir, si se está en presencia de un homicidio simple, como lo determinó el Tribunal Superior en el fallo impugnado.

El Tribunal A-Quo en sus "Fundamentos Legales", luego de demostrar que las pruebas acreditan el hecho punible, así como la identificación del procesado como autor del homicidio indica lo siguiente:

> "Otro aspecto a destacar, es que la noche de autos Elmer estaba preparado para atacar a Luis Antonio, lo cual se desprende de lo atestiguado por Aurelio Del Cid (a) "Yeyo" (fs.170-172), Eugenio Pittí Concepción (fs.173-175), José Arody Moreno C. (fs.176-178) y Alcibiades Morales Lezcano (fs.240-242), quienes han coincidido en señalar que luego de haber sostenido Elmer una discusión con Luis, que motivó que este último le diera con un paraguas, Elmer manifestó, entre otras cosas, que lo esperaba después, y que ese otro día enterraban a Toño, refiriéndose a Luis; es decir, que estos testigos escucharon amenazas por parte de Elmer hacia Luis.

...
Como hemos reiterado la contundencia de las pruebas evidencian que el día de autos el hoy acusado, luego de haber sostenido un altercado, esperó en el camino a Luis Antonio, donde luego de darse con los puños, sacó un arma produciéndole una herida que le causó la muerte".

Al examinar las declaraciones de los testigos citados por el Tribunal A-Quo en el párrafo transcrito, coinciden en que en horas de la noche del 11 de septiembre de 1999 en la comunidad de Portón, primero hubo una discusión entre el procesado y el hoy occiso, donde éste le pegó con un paraguas.

Así, Aurelio Del Cid señala que Elmer y José Antonio tuvieron una discusión y aquél le insultó a su madre, por lo que José Antonio le dio un paraguazo en el hombro y Elmer se fue en la bicicleta diciéndole "por allá te aguaito y te voy a matar". Ante eso, todos los que estaban en la tienda le aconsejaron a José Antonio que se cuidara porque Elmer era muy peligroso y le podía dar un golpe, a lo que el hoy occiso respondió, "que tal vez no porque Elmer se iba" (fs.170-172).

El señor Eugenio Pittí Concepción, afirma que llegando a buscar a su esposa e hijos a la iglesia Adventista, observó a Elmer que iba en una bicicleta y le escuchó decir "acá arriba lo espero", pero en esos momentos no sabía de que se trataba lo que éste decía; y al llegar a la abarrotería del señor Guerra se enteró del problema entre José Antonio y Elmer, y le informó lo que este había dicho (fs.173-175).

Por su parte el señor José Arody Moreno Castillo declara que como a las siete y media de la noche, Elmer Jiménez lo alcanzó en una bicicleta y le dijo que andaba buscando a Toño y que cargaba un cuchillo que lo había acabado de afilar donde la señora Rosa Ríos, que le enseñó el cuchillo que lo tenía dentro de la pretina del pantalón, y que también dijo que ese otro día enterraban a Toño. Que iban juntos y cuando Elmer vio que había mucha gente en la abarrotería del señor Guerra dijo "mejor me regreso porque hay mucha gente". (F.177)

El declarante al llegar a la tienda le dijo a José Antonio que se cuidara de Elmer que lo estaba buscando y cargaba un cuchillo. Luego presenció la discusión entre José Antonio y Elmer, y que al éste irse dijo que lo iba a "agueitar para joderlo" (F.178).

En el mismo sentido, el señor Alcibiades Morales Lezcano señala que al dirigirse a la tienda del señor Guerra se encontró con Elmer quien le dijo que José Antonio le pegó con un paraguas y que eso no se quedaba así, y dijo "yo lo aguaito porque el sube para arriba solo" y si no "él va para el trabajo mañana solo". Por lo que al llegar a la tienda le dijo a José Antonio que se cuidara e incluso éste le enseño que su paraguas se le había dañado con los golpes que le dio a Elmer (fs.240-241).

Corroborando las declaraciones anteriores, el señor Yovany Guerra Arauz quien refiere que Luis Antonio Ríos Justavino llegó como siempre a la tienda de su propiedad a ver televisión, que luego llegó Arody y le dijo a Luis Antonio que Elmer estaba comentando que había problemas entre ellos, y tanto Arody, como él (declarante) y los que estaban presentes le aconsejaron que tuviera cuidado porque Elmer era una persona de poca confianza.

Momentos después Luis Antonio se retiró de la tienda con el paraguas al hombro, y al rato escuchan que Luis Antonio le había dado con el paraguas a Elmer, al mirar, ve desde la tienda como a una distancia de cien metros aproximadamente, a José Antonio y a Elmer discutiendo, luego José Antonio se regresa a la tienda y Elmer tomó el camino hacia la plaza de la comunidad de Portón.

Continúa narrando el señor Guerra Araúz, que al instante llegó Alcibiades

Morales y le dijo a José Antonio, que Elmer había dicho que le había metido unos paraguazos y que lo esperaba allá arriba; también llegó Eugenio Pittí quien aconsejo a José Antonio que tuviera cuidado porque Elmer había dicho "que lo iba a aguaitar allá arriba".

Al rato, Luis Antonio se fue hacia el centro de la comunidad de Portón, y como a las nueve de la noche fueron informados en la tienda que Elmer había cortado a Luis Antonio (fs.236-239).

En el cuadro fáctico presentado, donde las pruebas testimoniales y la ocurrencia de los hechos son demostrativas que en el animo del procesado Elmer Antonio Jiménez Lezcano había un propósito firme y meditado de causarle, como en efecto lo hizo, la muerte al joven Luis Antonio Ríos Justavino. Recordemos que luego del primer incidente, el procesado no solo vocifera que lo va a esperar en el camino, sino que predijo que al día siguiente iban a enterrar a "Toño".

Al valorar todos estos aspectos, el Tribunal Superior concluye que "Elmer estaba preparado para atacar a Luis Antonio", sin embargo, yerra al indicar que los hechos declarados como probados, constituyen el delito de homicidio simple contemplado en el artículo 132 del Código Penal.

Estima esta Sala que le cabe razón al señor Fiscal cuando en calidad de apelante plantea que se está ante un homicidio por premeditación; y en ese sentido se reformará el fallo.

En cuanto a lo objetado por la defensa técnica, en el sentido que el Tribunal A-Quo no consideró los factores contemplados en los ordinales 4° y 5° del artículo 56 del Código Penal, referentes a la calidad de los motivos determinantes y las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en la medida en que haya influido en la comisión del hecho punible; la Sala ha manifestado:

> "que por la interpretación de esta norma la pena base impuesta no es modificable cuando no se observan visos de ilegalidad manifiesta y por tanto, en aras de la independencia judicial, se debe respetar la discrecionalidad del juzgador primario" (sentencias de 18 de julio de 1996, 20 de mayo de 1998, 20 de enero y 3 de agosto de 1999).

Afirma la licenciada Morales Miranda que su defendido le tenía miedo al hoy occiso. Ante tal afirmación, debemos traer a colación lo consignado por el Tribunal de Primera Instancia quien manifestó lo siguiente:

> "Por otro lado, no existe constancia en autos que señalen que anterior a ese hecho habían problemas entre Elmer Jiménez Lezcano y Luis Antonio Ríos, por el contrario los testigos que han desfilado en la investigación han sido contestes en señalar que el hoy occiso mantenía una buena conducta en la comunidad contraria a la de Elmer Jiménez, quedando de manifiesto la falsedad de su coartada, al alegar que la acción tomada el 11 de septiembre fue por defensa propia porque el occiso siempre lo molestaba" (f. 332).

Ligado a lo anterior, cabe señalar que consta en el expediente, escrito signado por 286 moradores de las comunidades de El Portón, San Pedro y Celmira quienes afirman que el señor Elmer Jiménez es una persona arrogante, que amenaza y ofende a damas, niños y ciudadanos decentes; y que el señor Luis Antonio Ríos Justavino era un hombre de bien, trabajador y responsable con su familia (fs.138-147).

Por tanto, al imponer la pena base, el Tribunal Superior no utilizó un criterio antojadizo en los términos propuestos por la defensa.

No obstante, atendiendo las consideraciones vertidas en cuanto a la conducta desplegada por el procesado, se procede a fijar la pena. El delito de

homicidio agravado por premditación contemplado en el artículo 132 del Código Penal el cual establece como sanción, pena de prisión que fluctúa entre 12 a 20 años. Así, de conformidad con los parámetros del artículo 56 del código punitivo, establecemos la pena base en quince años de prisión, y al no observar circunstancias agravantes ni atenuantes que considerar, aquella es la pena a imponer. Por igual término se le impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena principal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de imponer a ELMER ANTONIO JIMÉNEZ LEZCANO la pena de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y a la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A VLADIMIR ALEJANDRO HAZERA LÓPEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado GABRIEL ELIAS FERNANDEZ, defensor de oficio de VLADIMIR ALEJANDRO HAZERA LOPEZ ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia No. 9-P.I. de fecha 14 de abril de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que sentenció a su representado a la pena de ocho (8) años de prisión y a cuatro (4) año de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas luego de cumplida la pena principal, por haber sido encontrado culpable como autor material del delito de homicidio simple en grado de tentativa en perjuicio de ERIC CRISTINO PINEDA GARCIA.

EL APELANTE

El licenciado FERNANDEZ, al sustentar su recurso de apelación visible a fojas 552-556, expresa que la sentencia recurrida debe ser modificada "... en el sentido de otorgarle una penalidad más benévola..." a VLADIMIR HAZERA LOPEZ, toda vez que, el mismo es un delincuente primario y actuó bajo los impulsos de la ira y el miedo.

Indicó además el defensor de oficio, que la actuación del procesado se denomina DELITO EMOCIONAL, manifestando a foja 555 lo siguiente:

> "...estamos ante la figura de un DELITO EMOCIONAL, provocado por el MIEDO Y LA IRA; toda vez, que el hecho se da en un lugar oscuro de alta incidencia delincuencial y peligrosidad y a altas horas de la noche, lo cual aunado a la acción del ofendido de pegarle a la carrocería del auto del señor HAZERA, lleva a éste a un estado de miedo por las circunstancias antes descritas del modo, tiempo y lugar y a una ilusión producto del mismo de un ataque en su contra, lo cual desencadenó en IRA, producto del temor y lo lleva a realizar el Hecho Punible y sobre el mismo retirarse del lugar."

Para sustentar la tesis del DELITO EMOCIONAL, el recurrente utiliza criterios de la doctrina y expresa que la actuación desplegada por su representado se enmarca en ella, por lo que procede rebajar la pena impuesta a HAZERA LOPEZ.

OPINIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

La opinión de la sociedad fue representada por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, en escrito visible a fojas 560-564.

Señaló la Fiscal GEOMARA GUERRA DE JONES, que la dosificación impuesta al procesado HAZERA LOPEZ por el Segundo Tribunal Superior de Justicia a ajusta a los parámetros contenidos en el artículo 56 del Código Penal ya que "... refleja un justo reproche de la sociedad hacia las consecuencias del delito, y sobre todo considerando el daño físico causado a la víctima, y el que pudo sobrevenir, tratándose como es, de homicidio en grado de tentativa."

Expresó la representación social, que las apreciaciones proferidas por el apelante relativas al delito emocional no tienen cabida en la presente causa penal, por cuanto que, en el proceso no se acreditó científicamente la supuesta anomalía o locura transitoria que influyó en el actuar de HAZERA LOPEZ, por lo que "... se entiende entonces que el imputado es normal, psiquiátricamente, lo que lo hace idóneo pára controlar los impulsos..."

En lo que atañe a la ira, expresó el Ministerio Público, que esta emoción no constituye circunstancia atenuante común ni especifica del tipo y si bien es un estado emocional del individuo, ello no justifica la reacción desmedida del procesado para disparar contra el ofendido por el simple hecho de que éste último le golpeo con su mano la parte trasera del carro para que no lo atropellara.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego de narrar brevemente los distintos argumentos utilizados por el apelante y el Ministerio Público relativos a la procedencia o no de la sentencia No.9.-P.I de 214 de abril de 2000, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, corresponde a la Sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia revisar lo actuado con fundamento a lo dispuesto en el artículo 2428 del Código Judicial, únicamente en los puntos de controversia. Veamos.

El proceso se inicia con la denuncia presentada por la señora MINGTHOY MARIA GIRO Y BERNAL el día 1 de julio de 1995, cuando informó a la Policía Técnica Judicial, que aproximadamente a las 11:45 p. m. del día 30 de junio de 1995, en el corregimiento de San Francisco, Carrasquilla, cerca del DIMA, edificio Bastidas, iban transitando los señores ERIC CRISTINO PINEDA, PABLO AGUILAR, LUIS FERNANDEZ y EDUARDO VERGARA, quienes laboraban con ella en el programa STYLOS, cuando un sujeto que conducía "... un vehículo BMW, color Rojo cuya placa terminaba en 81" (fojas 1-2 del proceso), le dispara en el pecho a ERIC CRISTINO PINEDA.

ERIC PINEDA, rindió declaración, la que se encuentra visible a fojas 20-23 del expediente. A foja 21 - 22 narró lo siguiente:

> ".... veníamos caminando ... más adelante de las oficinas del DIMA, era una curva cerrada, no venían carros por lo cual decidimos cruzar, lo cual hicimos, seguimos caminando, en ese momento un señor alto, blanco, al cual no le presté atención, ese señor se montó en su carro y dio reversa a su vehículo y nosotros supusimos que nos había visto, seguimos caminando, pero el señor aceleró y lo tuvimos que esquivar, nos tiró el carro y dobló quedando frente a nosotros; yo le toqué la tapa del motor del lado derecho, lo que hice fue darle un toque a la tapa del motor, el señor entonces se bajó del carro, me dijo unas palabras, hizo el movimiento de que buscaba él algo dentro del carro y luego vi que sacó algo y solamente sentí el

impacto..."

A raíz del hecho el ofendido fue trasladado al centro medico más cercano,(fojas 29-30) quien luego de ser intervenido quirúrgicamente se le extrajo la bala, otorgándole el Instituto de Medicina Legal una incapacidad definitiva de 45 días (foja 62).

Expresó el informe forense a foja 106 del proceso que que el ofendido presentaba:

> "... herida por proyectil de arma de fuego en tórax, hemotórax derecho (1,200cc), contusión pulmonar, hemopericardio con quemadura del pericardio y ventrículo derecho. Se le realizó ventana pericárdica, hemostasia y drenaje pericárdico, toracotomía cerrada derecha, extracción de proyectil, plastía mamaria derecha. Las lesiones sí pusieron en peligro su vida.
> ..."

Al proceso se incorporaron las declaraciones de los señores: PABLO ANTONIO AGUILAR (fojas 5-6) y LUIS FERNANDO VALDES PINZON (fojas 7-8-y 41). Igualmente rindió declaración el señor JUAN ANTONIO VEGA, (fojas 11-12),quien laboraba para el procesado y expresó que, luego de que HAZERA le girara instrucciones, observó cuando VLADIMIR HAZERA se retiraba precipitadamente con dirección al DIMA, mientra que una persona yacía en el suelo llena de sangre.

Por su parte el procesado VLADIMIR HAZERA LOPEZ en declaración indagatoria visible a fojas 232-239 del proceso, manifestó que estuvo por algunos minutos en horas de la noche el día de los hechos, en la agencia de seguridad y se retiró a departir con algunos amigos, cuando se percató al día siguiente del incidente en el que se le involucraba, considera que lo declarado por su subalterno, JUAN ANTONIO VEGA es por resentimiento, dado los términos en que se manejaba la relación laboral entre ambos.

El sentenciado fue declarado culpable por un jurado de conciencia, por lo que la labor de los Magistrados se circunscribió a determinar la pena a imponer luego de valorar las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos, así como el tipo de delito cometido por HAZERA, tomando como norte para la individualización del quantum, lo dispuesto en los artículos 44, 56 y 60 del Código Penal.

El Ad-Quo indicó a foja 542 lo siguiente:

> "De autos se infiere que el procesado actuó llevado por una emoción de ira ante el hecho de que el ofendido le pegara a la carrocería del auto sólo con la intención de que se percatara que ellos estaban allí, muy cerca, a fin que pusiera mayor cuidado en su manejo (sic) pero HAZERA LOPEZ se llenó de ira, rabia, estado emotivo colérico que conlleva la aparición de una actitud altamente agresiva que lleva al individuo a atacar lo que provocó ese estado emotivo con deseos de destrucción de éste."

Frente a estos señalamientos la defensa oficiosa del procesado esgrime la tesis del denominado delito emocional, para sustentar su petición de modificación de la pena impuesta al procesado.

Sobre el delito emocional, la doctrina ha indicado que este tipo cobra vigencia en virtud de una alteración emocional producida por una provocación injusta y grave, por lo que deben estar presentes tres requisitos: provocación grave e injusta, estado de ira o de intenso dolor y la relación de causalidad entre aquella y este. (REYES ECHANDIA, Alfonso, Obras Completas, Volumen III, editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1998, pág. 325).

Por su parte, el Doctor JOSE KALED en su obra Psiquiatría Forense, explica

el delito emocional de la siguiente manera:

> " El crimen emocional, el verdadero, debe ser analizado condicionalmente para que llene los requisitos de un genuino crimen emocional y no se rotule como tal casos donde perversos actúan bajo un estado de saña y crueldad con ventajas y alevosía.
>
> Para que llene estos requisitos el crimen emocional debe ser realizado, luego enseguida a una injusta provocación de la víctima y que haya por lo tanto:
>
> a) Injusta provocación de la víctima.
> b) Que haya ésta provocado violenta emoción.
>
> c) Que la emoción haya dominado al agente.
>
> d) Que el crimen sea cometido enseguida a esta provocación." (KALED, José, Psiquiatría Forense. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá. Panamá, 1984, pág. 35).

La ira se constituye, en consecuencia, en la emoción que desencadena el hecho criminoso, la que ha sido definida por el Dr. KALED como"...un estado agudo de excitación psíquica que se presenta con síntomas de perturbación de la afectividad, de modo intenso y pasajero, acompañado de alteraciones físicas. Es una descarga nerviosa, repentina, transitoria y pasajera. Sus características son subitaneidad y corta duración." (KALED, José, Psiquiatría Forense, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, Panamá, 1984, pág.32).

Luego de analizar los criterios doctrinales sobre el delito emocional la Sala constata, que la ira es la consecuencia inmediata de un ultraje o provocación injusta de similar magnitud, razón por la cual ante la ausencia de este hecho provocador, resulta evidente para este Tribunal Penal que la actuación del procesado constituye un grave exceso de poder y de fuerza que no tiene cobijo en la tesis del delito emocional.

En lo que respecta a la individualización judicial de la pena a que fue sentenciado VLADIMIR ALEJANDRO HAZERA LOPEZ, la Sala observa que el Segundo Tribunal Superior de Justicia la estableció conforme los parámetros contenidos en los artículo 44, 56 y 60 del Código Penal, toda vez que se acreditó en autos que: "No hay elemento en autos indicativos de que PINEDA GARCIA efectuó acto de provocación que ameritara tal reacción. ... El procesado es sujeto imputable. ... No brindó auxilio a la víctima al momento del hecho, por el contrario, abandonó el lugar. ... Actuó con ventaja. ... Hubo que declararlo en rebeldía." (Confrontar foja 543 del proceso).

En este mismo orden de ideas se constata, que el tipo penal del homicidio simple conlleva pena de 5 a 12 años de prisión por lo que la tentativa, conforme lo estipula el artículo 60 del Código Penal "... será reprimida con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de los dos tercios del máximo establecido para el correspondiente hecho punible.". En el caso que nos ocupa, VLADIMIR HAZERA fue sentenciado a dos tercios de la pena máxima establecida para este delito, resultando en ocho años de prisión, por lo que se concluye que la sanción impuesta responde a las constancias existentes en autos, de allí que lo procedente es mantenerla.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia No. 9-P.I de 14 de abril de 2000 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifiquese,

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL

NOVIEMBRE 2000

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LIC. MIGUEL QUIRÓS A., EN REPRESENTACIÓN DE SATURNINO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ Y SIXTA MARIELA CONCEPCIÓN DE ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°D.N.060-98 DEL 14 DE JULIO DE 1998, PROFERIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Quirós A., actuando en representación de SATURNINO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ Y SIXTA MARIELA CONCEPCIÓN DE ABREGO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°D.N.060-98 del 14 de julio de 1998, proferida por el Director Nacional de la Reforma Agraria, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada con la finalidad de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

En este sentido, advierte el suscrito que, el libelo de demanda adolece de un defecto que impide darle el curso legal correspondiente.

Observa esta Superioridad que el demandante no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para recurrir en demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que el actor no hizo uso del derecho de interponer el recurso de reconsideración y el de apelación respectivo, tal como lo advierte, en su parte resolutiva, el propio acto impugnado, es decir, la Resolución N°D.N.060-98 del 14 de julio de 1998. (Ver fojas 1 a 5 del expediente).

El agotamiento de la vía gubernativa se encuentra regulado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> **"Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si éstas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Lo resaltado del Ponente)**

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda instaurada, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> **"Artículo 33. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."**

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Miguel Quirós A. en representación de SATURNINO CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ Y SIXTA MARIELA CONCEPCIÓN DE ABREGO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO GRIMALDO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-10655 DE 18 DE JULIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado RAFAEL SOLANO GRIMALDO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en su propio nombre y representación, para que se declare nula, por ilegal, la Nota DP-DOPA-10655 de 18 de julio de 2000, dictada por el Director Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que previo el trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada que certifique, si ha recaído alguna decisión sobre el recurso de apelación presentado, a efecto de acreditar el silencio administrativo, como medio de agotamiento de la vía gubernativa, y comprobar si la demanda ha sido interpuesta en tiempo oportuno.

A foja 2 del expediente, se aprecia la solicitud de certificación dirigida a la Ministra de Educación.

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia consagrada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que taxativamente señala lo siguiente:

> **"Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."**

Como la solicitud del demandante se ajusta a lo contemplado en el artículo supra citado, y que los documentos detallados confirman que el actor llevó a cabo las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, es dable acceder a lo pedido.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite a la señora Ministra de Educación que certifique si ha recaído decisión alguna sobre el Recurso de Apelación interpuesto contra la Nota DP-DOPA-10655 de 18 de julio de 2000, a fin de acreditar el silencio administrativo.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDUARDO NELSON EN REPRESENTACIÓN DE ADOLFO MANUEL PITTI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°27 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Nelson, actuando en nombre y representación de ADOLFO MANUEL PITTI, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°27 de 1 de septiembre de 2000, dictada por el Juez Décimo Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

La Sala advierte que la parte actora ha presentado una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente, los efectos del acto administrativo acusado de ilegal.

En virtud de este acto administrativo se declaró insubsistente el nombramiento de ADOLFO MANUEL PITTI, portador de la cédula de identidad personal número 4-261-334, como OFICIAL MAYOR del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

FUNDAMENTO DE LA SUSPENSIÓN

El demandante considera que los efectos derivados de la Resolución recurrida deben ser suspendidos provisionalmente basándose en los siguientes argumentos:

> "1. Mi representado se ve gravemente perjudicado toda vez que la Resolución N°27 de 1 de septiembre de 2000, que para efectos fiscales empieza a regir del 15 de septiembre de 2000, recurrida como ilegal es una destitución directa en su contra ya que en la actualidad se encuentra ocupando dicha posición de Oficial Mayor, ya que fue nombrado mediante Resolución N°24 de 2 de agosto de 2000, por un período fijo hasta el 2 de febrero de 2001. El perjuicio grave es que se trata de la destitución en el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.Circuito Judicial de Panamá, además es actual ya que empieza a regir dicha resolución el 16 de septiembre de 2000, es decir, este fin de semana, por lo que recae, además, en un perjuicio evidentemente patrimonial.
>
> 2. Evidentemente se trata de una resolución ilegal, ya que viola normas constitucionales y legales por motivo de violación directa por omisión y por interpretación errónea de la misma. En es mismo orden de ideas, es latente que se ha violado la facultad exclusiva que tiene todo Magistrado o Juez, como autoridad nominadora, de disponer, a su sano juicio, que un concurso determinado se declare desierto, por lo que estamos seguros que nos asiste la razón ya que contrario estaríamos cercenando uno de los principios fundamentales

de la Carrera Judicial, el cual es la Independencia Judicial.
3. Como prueba preconstituída constan la Resolución N°24 de 2 de agosto de 2000, en la cual se hace el nombramiento interino hasta el 2 de febrero de 2001 a nombre de Adolfo M. Pittí; la Resolución N°27 de 1 de septiembre de 2000, en donde se nombra por un período de 6 meses probatorios a Justo E. Vargas; Oficio N°2389 de 18 de agosto de 2000 de la autoridad nominadora, en la que declara desierto el Concurso N°083-2000, Posición N°1607 del puesto de Oficial Mayor II del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de panamá; Nota N°659-DRH-2000 de 24 de agosto de 2000, en la que la Dirección de Recursos Humanos conceptuó no viable lo decretado por la autoridad nominadora, la cual le adjuntó procedimiento para solicitar nueva convocatoria a dicho departamento, y, las demás pruebas que constan en la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.
4. Nos encontramos frente a un acto administrativo recurrible en la vía Contencioso Administrativa y que la misma puede suspenderse por el Tribunal ya que, es una remoción de un personal, se trata de un servidor por período fijo, hasta el 2 de febrero de 2001, y no por un personal administrativo, tal como lo contempla el artículo 74 de la Ley N°135 de 1943."

MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL

Es pertinente señalar, en primer término, que la suspensión provisional del acto administrativo es una potestad discrecional conferida a la Sala Tercera de la Corte Suprema, por disposición del artículo 73 de la Ley 135 de 1943. Ello siempre y cuando el acto acusado no se encuentre enmarcado en alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 de la Ley 135 de 1943 que de manera clara y explícita niega la posibilidad de ordenar la suspensión provisional de actos administrativos en cuatro circunstancias a saber:

"Artículo 74. No habrá lugar a suspensión provisional en los siguientes casos:
1. En las acciones referentes a cambio, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos;
2. En las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas;
3. Cuando la acción principal esté prescrita;
4. Cuando la ley expresamente lo dispone."(Lo resaltado de la Sala)

Después de haber analizado las constancias procesales, la Sala concluye que en el caso bajo estudio no procede decretar la suspensión provisional de la resolución recurrida, en atención a las consideraciones que señalaremos a continuación.

En primer término, el señor ADOLFO PITTI, si bien es cierto, fue nombrado como Oficial Mayor del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dicho nombramiento fue de naturaleza interina para completar la vacante que se había producido en ese Tribunal.

Es necesario acotar que el carácter de interino define la situación de una persona que sirve, por un tiempo, supliendo la falta de otra. Es en virtud de dicha interinidad, que el período designado al señor PITTI, contado a partir del día 3 de agosto de 2000 hasta el 2 de febrero de 2001, fue señalado de manera provisional hasta tanto se efectuara el respectivo concurso. (Ver foja 19 del expediente)

Todo lo anterior nos permite concluir que el señor ADOLFO PITTI no se encuentra dentro del supuesto de excepción contemplado en el numeral 1 de la norma supra citada, pues dicho período antes de tener un carácter fijo, es transitorio, toda vez, que el recurrente estaba sujeto a cualquiera modificación

respecto de la posición que desempeñaba, por lo que la Sala conceptúa que no puede accederse a la solicitud de suspensión presentada.

Resulta pertinente hacer la salvedad que la anterior consideración, en modo alguno, constituye un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta máxima corporación de justicia, que gira en torno a la legalidad o ilegalidad de la actuación recurrida.

En mérito de lo expuesto, los Magistrado que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDEN a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N°27 de 1 de septiembre de 2000, dictada por el Juez Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ E. HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE MARCELINA MURILLO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N. 393-99 DE 11 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José E. Herrera, actuando en nombre y representación de MARCELINA MURILLO VEGA ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, recurso de apelación contra el Auto de 20 de septiembre del año en curso que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N. 393-99 de 11 de octubre de 1999, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda por considerar que la misma, además de ser extemporánea, no cumple con los requisitos señalados en el numeral 4 del artículo 28 y el artículo 16 de la Ley 33 de 1943 que se refieren a la expresión de las causas o motivos de ilegalidad.

El recurrente considera que la demanda no es extemporánea, y que "basta que se mencione dentro del contexto de los hechos cuales (sic) son las causas y motivos que dan lugar a la demanda" para que la misma deba ser admitida.

Por su parte, el Procurador de la Administración, Suplente, en su escrito de objeciones a la apelación, coincide con el criterio del Magistrado Sustanciador, y solicita al resto de los Magistrados que integran la Sala confirmen el auto recurrido.

El resto de los Magistrados que integran la Sala estiman que no le asiste razón al recurrente, puesto que, efectivamente, la demanda es extemporánea. En ese sentido, la Sala advierte que la resolución que agota la vía gubernativa le fue notificada a la señora MURILLO VEGA el día 7 de junio del presente año y, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 42B de la Ley 135 de 1943, la actora

tenía 2 meses a partir de dicha notificación para interponer la demanda contencioso administrativa. Sin embargo, tal y como consta a fs. 34 del expediente, la demanda fue presentada el 21 de agosto pasado, fecha en la cual el derecho para interponerla estaba prescrito.

Por otro lado, la Ley 135 de 1943 es clara al enumerar en el artículo 43 los requisitos que debe contener toda demanda contencioso administrativa, señalando en su numeral 4 "la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de violación". Por consiguiente, no basta, como lo afirma el recurrente, exponer los hechos que motivaron la acción para que la demanda pueda ser admitida, sino que el demandante debe explicar ampliamente las infracciones de los preceptos que, a su juicio, han sido violados por el acto impugnado.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 20 de septiembre del año en curso que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado José E. Herrera, en representación de MARCELINA MURILLO VEGA.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO PIMENTEL GONZÁLEZ PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE 278-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE DARIÉN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric G. Prado, actuando en nombre y representación de FRANCISCO PIMENTEL GONZÁLEZ, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 278-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a verificar que la presente demanda cumple con los requisitos mínimos que hacen posible su admisión.

En ese sentido, el suscrito advierte, en primer término que el silencio administrativo que alega el demandante no se encuentra debidamente probado en el expediente. En efecto, se ha sostenido reiteradamente, que es necesario que la actora acompañe a su demanda copia autenticada de la solicitud de reconsideración presentada, y que no fue atendida por la administración, además de una certificación por parte del ente gubernativo donde acredite que no se ha dado ningún pronunciamiento sobre la solicitud hecha. De no acompañarse esta certificación o de negarse su expedición, el demandante debe solicitar, previa la admisión de la demanda, al Magistrado Sustanciador que requiera al despacho a cargo de la solicitud, la información acerca de si existe o no pronunciamiento.

En el presente caso, el apoderado judicial de la demandante sólo presentó el original del recurso de reconsideración y apelación interpuesto, por lo cual esta Sala no considera debidamente comprobado el agotamiento de la vía gubernativa.

Por otra parte, el demandante no hace mención de la intervención de la Procuradora de la Administración, ni el concepto en que interviene, quien, tratándose de una acción de plena jurisdicción, actúa en defensa del acto acusado de ilegal, de conformidad con el artículo 348 numeral 2 del Código Judicial.

Por último, y como defecto menos grave, el demandante no dirigió su demanda a la Presidenta de la Sala, tal como lo dispone el artículo 102 del Código Judicial.

En base a las razones anotadas, la presente demanda es inadmisible, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y así debe declararse.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el licenciado Eric G. Prado, en representación de FRANCISCO PIMENTEL GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE ITZEL GONZÁLEZ PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE 280-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE DARIÉN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric G. Prado, actuando en nombre y representación de ITZEL GONZÁLEZ, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 280-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a verificar que la presente demanda cumple con los requisitos mínimos que hacen posible su admisión.

En ese sentido, el suscrito advierte, en primer término que el silencio administrativo que alega el demandante no se encuentra debidamente probado en el expediente. En efecto, se ha sostenido reiteradamente, que es necesario que la actora acompañe a su demanda copia autenticada de la solicitud de reconsideración presentada, y que no fue atendida por la administración, además de una certificación por parte del ente gubernativo donde acredite que no se ha dado ningún pronunciamiento sobre la solicitud hecha. De no acompañarse esta certificación o de negarse su expedición, el demandante debe solicitar, previa la admisión de la demanda, al Magistrado Sustanciador que requiera al despacho

a cargo de la solicitud, la información acerca de si existe o no pronunciamiento.

En el presente caso, el apoderado judicial de la demandante sólo presentó el original del recurso de apelación interpuesto, por lo cual esta Sala no considera debidamente comprobado el agotamiento de la vía gubernativa.

Por otra parte, el demandante no hace mención de la intervención de la Procuradora de la Administración, ni el concepto en que interviene, quien, tratándose de una acción de plena jurisdicción, actúa en defensa del acto acusado de ilegal, de conformidad con el artículo 348 numeral 2 del Código Judicial.

Por último, y como defecto menos grave, el demandante no dirigió su demanda a la Presidenta de la Sala, tal como lo dispone el artículo 102 del Código Judicial.

En base a las razones anotadas, la presente demanda es inadmisible, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y así debe declararse.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, presentada por el licenciado Eric G. Prado, en representación de ITZEL GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS R. AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LIDIA SALAS CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA DP-DOPA-1072 DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala, en nombre y representación de LIDIA SALAS CASTILLO, ha instaurado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota DP-DOPA-1072 del 7 de febrero de 2000, dictada por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, con la finalidad de determinar si, efectivamente, la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para que pueda ser admitida.

Advierte el suscrito que, el libelo incoado adolece de un defecto que impide darle el trámite legal correspondiente, y que a continuación se le indica al actor.

Observa esta Superioridad que el recurrente no agotó la vía gubernativa, lo cual constituye, en nuestro medio, requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Esto lo decimos en virtud de que, como se ha podido colegir de las constancias procesales, la parte actora solicitó en su demanda que, previo el trámite de admisión se requiriera a la entidad

demandada certificación en la cual se acreditara que no había recaído decisión alguna sobre el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto. En este sentido, a foja 21 del expediente, consta certificación fechada 18 de septiembre de 2000, por medio de la cual la entidad demandada respondió la petición suscrita por el Magistrado Sustanciador, expresando lo siguiente:

> "El Suscrito Director Nacional de Personal, a.i.
> CERTIFICA:
> ...
>
> Que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, expidió el Decreto Ejecutivo 87 de 15 de mayo de 2000, por medio del cual se dejó sin efecto a partir del 7 de febrero de 2000, el Decreto Ejecutivo 51 de 25 de marzo de 1997, en lo que respecta al nombramiento que se le hizo a la señora LIDIA SALAS CASTILLO, con lo cual se perfecciona el acto administrativo contenido en la Nota DNP-DOPA-1072 de 7 de febrero de 2000.
>
> Que el Decreto Ejecutivo 87 de 15 de mayo de 2000 fue notificado a la señora LIDIA SALAS CASTILLO, y contra el cual no interpuso recurso alguno."(Lo subrayado del Ponente)

Tal como se desprende de este escrito, la parte interesada no interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, como lo señala en el libelo de demanda, lo que se traduce a que no se agotó de manera efectiva la vía gubernativa, requisito indispensable para acudir ante esta Sala, de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación." (Lo subrayado del Ponente)

La finalidad que persigue el agotamiento de la vía gubernativa, es ofrecerle a la Administración la oportunidad de corregir o enmendar sus propios errores, es decir, su objetivo es que la propia Administración Pública pueda revocar el acto administrativo que afecte al administrado o le cause graves perjuicios.

En atención a la deficiencia señalada, quien sustancia no tiene otra alternativa que negarle curso legal a la demanda interpuesta, en atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción promovida por el licenciado Carlos R. Ayala en representación de LIDIA SALAS CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS EUGENIO CARRILLO EN REPRESENTACIÓN DE IVETH ANAYANSI SANCHEZ DE CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2000 EMITIDA POR LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo, en nombre y representación de IVETH ANAYANSI SANCHEZ DE CASTILLO ha propuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución de 23 de octubre de 2000 emitida por la Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Arraiján y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda se percata el Sustanciador que a foja 142 del expediente consta solicitud de previo y especial pronunciamiento concerniente a la petición de remisión de copias autenticadas del acto acusado, que debe ser atendida previa a la admisión de la demanda.

La documentación cuya autenticación se solicita recae precisamente en el acto principal demandado y el Magistrado Sustanciador confirmó que efectivamente, el recurrente trató de acompañar el libelo contentivo de la demanda con los documentos necesarios para la interposición de la acción contenciosa administrativa, conforme a lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 135 de 1943, gestionando ante la Secretaría General del Consejo Municipal de Arraiján autenticación de la Resolución de destitución del cargo de Tesorera Municipal el día 30 de octubre de 2000, tal cual consta a foja 2 del expediente.

De esta forma, considera quien sustancia que el recurrente cumplió con las exigencias contempladas en la Ley 135 de 1943, en el sentido de adelantar todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea para la interposición de la demanda, pero al resultar infructuosas tales gestiones, ha solicitado al Tribunal que proceda a oficiar a la entidad demandada para que remita a esta Superioridad la documentación requerida. Ello en atención a la facultad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTICULO 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DISPONE solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal de Arraiján, proporcionar copia autenticada de la Resolución de 23 de octubre de 2000, emitida por la Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Arraiján.

Notifiquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. BENEDICTO DE LEON, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN DE DIOS PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA NOTA N° 117 DSR DE 4 DE FEBRERO DE 1998, SUSCRITA POR EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS Y REASEGUROS DEL CONSEJO TÉCNICO DE SEGUROS, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Benedicto De León, actuando en representación de JUAN DE DIOS PEREZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Nota N° 117DSR de 4 de febrero de 1998, suscrita por el Superintendente de Seguros y Reaseguros del Consejo Técnico de Seguros, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Nota N° 117DSR de 4 de febrero de 1998, suscrita por el Superintendente de Seguros y Reaseguros del Consejo Técnico de Seguros, como también se solicita se declare que son nulos por ilegales, los actos confirmatorios contenidos en la Resolución 125 de 17 de abril de 1998 y la Resolución N°CTS-03 de 15 de septiembre de 1998, expedidas por la Superintendente de Seguros y Reaseguros y el Consejo Técnico de Seguros respectivamente. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita se declare que el señor Juan de Dios Pérez tiene derecho a que se le permita optar nuevamente por la licencia de Corredor de Seguros de acuerdo con lo señalado en el artículo 90 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que en Resolución N°047 de 28 de enero de 1997, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros ordenó, entre otras cosas, la cancelación de la licencia de Corredor de Seguros #2099, expedida a favor del señor JUAN DE DIOS PEREZ, alegando que había retenido primas de clientes por más del tiempo requerido por la Ley, no obstante, no establece si la cancelación es a perpetuidad o por tiempo definido. También señala que luego de haber transcurrido más de un año de ocurrido los hechos que dieron origen a que se cancelara la licencia, se presentó a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros a hacer el examen de aspirante a Corredor de Seguros de que habla el artículo 90 de la Ley 59 de julio de 1996, pues, no existe en nuestra legislación una norma que establezca condena o sanción de carácter permanente o perpetuo por la comisión de una falta o hecho ilícito alguno. Destaca finalmente que su representado ejerció por más de 15 años la profesión de Corredor de Seguros, por lo que de ella deriva su única fuente de ingresos tanto para él como para su familia, por lo que desde que se le canceló su licencia en enero de 1997, se le ha causado enormes perjuicios, lo cual se estima como un enorme perjuicio causado en relación a la falta cometida.

Como disposiciones legales infringidas, se alegan los artículos 90 y 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996 y el artículo 9 del Código Civil que expresan:

> **"ARTICULO 100: Los requisitos para optar por la licencia de corredor de seguros son los siguientes:**
>
> **1. Solicitud de licencia de corredor de seguros en hoja de papel sellado o habilitado.**

2. Dos fotografías tamaño carnet.
3. Ser ciudadano panameño domiciliado en la República de Panamá o extranjero que llene los requisitos del artículo 288 de la Constitución Política.
4. Copia debidamente autenticada de la cédula de identidad personal del solicitante expedida por el Registro Civil.
5. Dos certificaciones de buena conducta y honorabilidad expedidas por empresas aseguradoras o miembros de los gremios profesionales de corredores de seguros.
6. Dos cartas de recomendación expedidas por el gerente general de la empresa aseguradora y/o por el supervisor de agencia donde certifican que se ha concluido con el entrenamiento, por el término de un año, para ejercer la profesión de corredor de seguros y que durante este período, no ha violado el numeral 7 de este artículo y los artículos 99 y 100 de esta Ley.
7. Copia debidamente autenticada del diploma de estudios secundarios expedidos por el Ministerio de Educación, y el certificado expedido por la Superintendencia que acredita que ha aprobado los exámenes de que trata esta Ley.
8. Presentar la garantía de que trata el artículo 95 de la presente Ley.
9. No ser empleado de compañía de reaseguro, instituciones, bancarias, fiduciarias, financieras, crediticias, y no ser ni ajustador ni inspector de averías. Los empleados administrativos de compañías de seguros no podrán optar por la licencia de corredor. En caso de haber obtenido dicha licencia con anterioridad al inicio de la mencionada relación laboral, esta será suspendida por la Superintendencia.

"ARTICULO 100: Previa notificación del interesado, dentro de los términos que señala la Superintendencia, ésta cancelará de oficio o de parte interesada, la licencia de corredor de seguro a toda aquél que le compruebe haberla obtenido fraudulentamente, o que se apropie o retenga el dinero correspondiente a primas cobradas por tiempo mayor del requerido ordinariamente por la compañía aseguradora del caso, o sea culpable de falsedad o delito semejante contra la fe pública en su conducto como corredor o productor de seguros.

Salvo pacto en contrario, se entiende por tiempo mayor del requerido los primeros diez días del mes siguiente. Se excluye para estos casos la aplicación del decreto ejecutivo 28 de 1974."

"ARTICULO 9: Cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la Ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento."

Según el apoderado judicial de la parte actora, el artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996, se violó de manera directa por omisión, toda vez que la negativa de los actos administrativos censurados, de no permitirle aspirar a su representado una vez más a obtener su licencia de Corredor de Seguros, se tomó sin tener en cuenta que el numeral 6 del artículo 90 se refiere a que la violación del artículo 99 y 100 no deben haber sido violados por el aspirante en el término de un año. Según quien recurre, la Resolución N° 047 por la cual se le cancela la licencia de corredor de seguros a su representado es de fecha 28 de enero de 1997, en tanto que la negativa de la Superintendencia para no permitirle aspirar a una nueva licencia de Corredor de Seguros, se da mediante Nota N° 117 DSR de 4 de febrero de 1998, es decir, por la supuesta violación a la Ley por la que se le canceló la licencia, ocurrió en exceso un año a la fecha en que aspiró nuevamente a obtener su licencia.

En cuanto al artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996, el Lcdo. De

León estima que su violación por omisión se configura, en la medida que no dice ni establece en ninguna de sus partes, que la cancelación de la licencia a un corredor de Seguros implica que el mismo no pueda aspirar en el futuro nuevamente por su licencia, aun cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 90.

Finalmente, el artículo 9 del Código Civil, en opinión del recurrente se violó de manera directa por omisión, dado que sin que la norma lo establezca, le han prohibido a su representado optar nuevamente por una licencia de Corredor de Seguros, por lo que se abroga de ese modo, una facultad no conferida en la Ley.

II. El informe explicativo de conducta expedida por la Superintendente de Seguros y Reaseguros y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° DSR-0169 de 22 de febrero de 1999, la Superintendente de Seguros y Reaseguros, expidió el informe explicativo de conducta en el que destaca que luego de la solicitud formulada por el señor Juan de Dios Pérez, el Consejo Técnico de Seguros y la Superintendencia consideraron que una nueva solicitud de licencia de Corredor de Seguros no era procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996, que es claro al señalar como sanción por actos de retención de primas por parte de un Corredor de Seguros, la cancelación de la licencia con carácter permanente.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 219 de 21 de mayo de 1999, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, contrario a lo señalado por el apoderado legal del demandante, se encuentra debidamente acreditado en el expediente que en el caso del señor Pérez, la Superintendencia de Seguros actuó acorde con lo previsto en la Ley N°59 de 29 de julio de 1996, específicamente con el artículo 100 de la Ley en referencia, por lo que pretender que una vez aprobado el examen requerido para obtener la licencia de corredor de seguros, era a todas luces improcedente.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Nota N°117DSR de 4 de febrero de 1998, suscrita por el Superintendente de Seguros y Reaseguros del Consejo Técnico de Seguros, en la que se le comunica al señor JUAN DE DIOS PEREZ, que el Consejo Técnico de Seguros en reunión celebrada el 27 de enero de 1998, concluyó que una nueva solicitud de licencia para ejercer la profesión de Corredor de Seguros, no es procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996. En opinión del recurrente, tal decisión deviene en ilegal, toda vez que su representado reunió todos lo requisitos para solicitar nuevamente la licencia de Corredor de Seguros, máxime que la supuesta violación a la Ley por la que se le canceló la licencia, ocurrió en exceso de un año a la fecha en que aspiró nuevamente a obtenerla, aspecto que no se tomó en cuenta para la expedición del acto que se demanda. También señala el demandante que ni en la Ley de Seguros ni en norma alguna de nuestro ordenamiento jurídico se establecen penas o sanciones a perpetuidad.

En autos consta que la medida adoptada por el Consejo Técnico de Seguros, comunicada a quien recurre mediante el acto que se demanda, se tomo luego de evaluar su situación en la que se destaca el hecho de la cancelación de licencia de Corredor de Seguros por retención de primas por mayor tiempo del requerido y falsedad en su conducta como productor de Seguros (véase de fojas 21 a 22 del expediente). Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que la sustentan, la Sala concluye que la razón no le asiste a la parte actora, por lo que veremos a continuación.

En cuanto a la violación al artículo 90 de la Ley 59 de 29 de julio de

1996, la Sala advierte que no se configura, puesto que, contrario a la tesis expuesta por el demandante, el término de un año a que hace referencia el numeral 6 del artículo 90 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996, es claro que hace referencia al período de entrenamiento para ejercer la profesión de seguros, en el cual no se viole el numeral 7 de esa disposición legal, referente a documentación relacionada al diploma de estudios secundarios expedidos por el Ministerio de Educación y el certificado expedido por la Superintendencia de Seguros que acredita la aprobación de los exámenes requeridos y tampoco se viole los artículos 99 y 100 de la misma Ley. En nada tiene que ver el término de un año previsto en el numeral 6 del artículo 90 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996, con que transcurrido el mismo, se le permita un corredor luego de ser sancionado a aspirar a una nueva licencia de Corredor de Seguros. Se desestima este cargo.

Con relación a la violación que se alega al artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1999, la Sala observa que fue precisamente de conformidad a lo presupuestos que la norma contempla, que el Consejo Técnico de Seguros decidió no acceder a una nueva solicitud de licencia para Corredor de Seguros, mas no contempla ni el demandante demuestra que se permita que el Corredor de Seguros sancionado, se someta nuevamente a los requisitos exigidos para obtener una nueva licencia. Se desestima este cargo.

Finalmente, en cuanto a la violación que se alega al artículo 9 del Código Civil, contentivo de las reglas de hermenéutica legal, a juicio de la Sala tampoco se infringe, pues no debe perderse de vista que, tal como lo plantea la Procuradora de la Administración, la licencia es una previsión de carácter administrativo impuesta por la Ley para el control del ejercicio profesional, cuya extralimitación conlleva la aplicación de sanciones como la cancelación de la licencia. Es claro entonces, que ante una solicitud de una nueva licencia, habrá que examinar si no se ha violentado lo previsto en el artículo 100 de la Ley 59 de 29 de julio de 1999, que regula expresamente lo referente a la cancelación de licencia en ciertos casos, como lo es la retención y apropiación de primas por más del tiempo que la misma norma prevé, hecho grave que a juicio de la Sala es suficiente para que no se acceda a conceder una nueva licencia de Corredor de Seguros, máxime que no es un derecho que el demandante logró demostrar a lo largo del proceso, que la Ley le confiera.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que no es ilegal la Nota N°117DSR de 4 de febrero de 1998, suscrita por la Superintendente de Seguros y Reaseguros del Consejo Técnico de Seguros, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA BALIÑO QUIEL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 02-98 DE R.C. DE 14 DE MAYO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 2 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Lay, actuando en nombre y representación de FELICIA

BALIÑO QUIEL, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con la finalidad de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.02-98 R.C. de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. La pretensión y su fundamento.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No.02-98 R.C. de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda, la cual resuelve negar la solicitud de rescisión de contrato de arrendamiento, presentada por el licenciado José Damasco Guerra, apoderado especial de las señoras Felicia Baliño Quiel, Francisca Baliño Quiel y Amparo Baliño Quiel (propietarias) contra la Sra. Iracema del Carmen Montoya, arrendataria del apartamento No. 20 , inmueble 11, ubicado en calle 5ta. Corregimiento de Parque Lefevre, por prescribir la acción instaurada. De igual forma solicita el actor que se declare nula la Resolución No. 68-98 V del 28 de octubre de 1998, emitida por la Dirección General de Arrendamiento, la cual confirmó en todas sus partes la Resolución No.02-98 R.C. de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda. Finalmente, el actor le pide a la Sala que como consecuencia de nulidad del acto impugnado, se rescinde o queda rescindido el contrato de arrendamiento, firmado el 14 de febrero de 1980, entre Sebastián Sastre, S. A., en su carácter de arrendadora y la señora Iracema del Carmen Montoya como arrendataria, referente al apartamento #20, del edificio 11, ubicado en calle 5ta., Parque Lefevre; y que la Comisión de Vivienda No. 2, debe comunicarle esta decisión a la Corregiduría de Parque Lefevre para que ésta proceda a efectuar el lanzamiento de la señora Iracema del Carmen Montoya del apartamento descrito.

Cabe señalar que como parte interesada en este negocio intervino el licenciado Bolívar Perigault Sánchez, apoderado judicial de la señora Iracema del Carmen Montoya, quien le solicitó a la Sala que deniegue las pretensiones de la parte actora y que se mantenga en todas sus partes Resolución No.02-98 R.C. de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda y la Resolución No. 68-98 V del 28 de octubre de 1998, emitida por la Dirección General de Arrendamiento.

Según la actora la Resolución No.02-98 R.C. de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda , infringe el artículo 9 de la Ley 93 de 1973 y el artículo 1704 del Código Civil.

La primera norma que el recurrente estima como quebrantad es el artículo 9 de la Ley 93 de 1973, cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 9. Ningún contrato de arrendamiento o la prórroga de él, podrá celebrarse por un término menor de tres (3) años; el arrendatario tendrá derecho a que se le prorrogue por igual término, en caso de que al vencerse el contrato estuviese al día en sus pagos. Si el arrendador rehusare recibir el importe del canon de arrendamiento, el arrendatario podrá depositarlo en la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda. La constancia correspondiente que se le expida acreditará haber verificado sus pagos y para todos los efectos legales se entenderá prorrogado el contrato.."

Sostiene la parte actora que el artículo 9 de la Ley 93 de 1973, fue violado en concepto de violación directa por omisión, toda vez que se aplicó una norma que no se refiere ni al vencimiento del contrato de arrendamiento, ni a prorroga del mismo, ni a los requisitos para solicitar la resolución del mismo, sino que se refiere es a la prescripción de la acción para exigir el cumplimiento del precio de los cánones de arrendamientos, esta es, el artículo 1704 del Código Civil, que nada tiene que ver con el caso explicado.

También considera la demandante que la resolución impugnada infringe el artículo 1704 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

> **"Artículo 1704: Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:**
> **1) la de pagar pensiones alimenticias;**
> **2) la de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas."**

El recurrente señala que la norma transcrita fue violada en concepto de violación directa por comisión, ya que "lo aplicaron a un caso no regulado por él y por este motivo desconocieron el derecho de mi representada lo que acarrea la nulidad de las mismas por la ilegalidad cometida."

II. El informe de conducta del Presidente de la Comisión de Vivienda No. 2 y la Vista de la Procuradora de la Administración.

Visible de fojas 16 a 18 del expediente consta el informe de conducta del Presidente de la Comisión de Vivienda No. 2 y cuyo contenido es el siguiente:

> **"1. El 20 de febrero de 1998, se recibió ante la Comisión de Vivienda en Turno, la demanda de Rescisión de Contrato de Arrendamiento, interpuesta por el Licdo. José Damasco Guerra, actuando en nombre y representación de las señoras Felicia Baliño Quiel, Francisca Baliño Quiel y Amparo Baliño Quiel, en contra de la Sra. Iracema del Carmen Montoya, arrendataria del apartamento No. 20, del inmueble No. 11, ubicado en calle 5ta corregimientio de Parque Lefevre.**
> **2. Una vez admitida la demanda por la Comisión de Vivienda No.2, se procedió dar traslado a la parte demandada, notificada la arrendataria, ésta otorga poder especial al Licdo. Jorge Javier Serracín L. quien contesta la demanda en tiempo oportuno (fojas 17 y 18).**
> **3. Se fija audiencia para el 16 de abril de 1998, se realiza después de haber pasado la hora judicial solamente con la asistencia del apoderado legal de la parte demandante, el cual se ratifica de la demanda presentada y solicita que se decrete la Rescisión (Resolución) de contrato de arrendamiento, y presenta como prueba la certificación expedida por la Dirección General de Arrendamientos (fojas 25 y 26).**
> **4. La inspectora Viodelda Cajar confecciona el informe para remitir el expediente al pleno de la Comisión.**
> **5. El Presidente de la Comisión, solicita de oficio mediante nota No. 7B00-104-98 al depto. de Descuento Directo, información desde cuando se hizo efectivo el descuento directo a la señora Iracema Montoya, y copias de tarjeta de control (Ver fojas 28).**
> **6. Cumplidos los trámites y procedimientos que establece el Decreto Ejecutivo No. 87 de 28 de septiembre de 1993, se procedió a efectuar el análisis de las fojas que conforman el proceso administrativo presentado.**
> **7. El Pleno de la Comisión de modo unánime, decide mediante Resolución No. 02-98 R.C., del 14 de mayo de 1998, negar la Rescisión de Contrato de Arrendamiento, solicitado por el Licdo. José Damasco Guerra en nombre y representación de Felicia Baliño y otras.**
> **8. Los apoderados legales de ambas partes se notifican de la Resolución antes mencionada. El apoderado legal de la parte demandante anuncia y sustenta Recurso de Apelación ante la Dirección General de Arrendamientos.**
> **9. Una vez transcurrido el trámite correspondiente la Dirección General de Arrendamientos, emita la Resolución No. 60-98 V de 28 de octubre de 1998, confirmando la decisión emitida por la Comisión de Vivienda No. 2, ambos apoderados legales fueron notificados por**

edicto."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N 485 de 1 de octubre de 1999, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren que no es ilegal la Resolución N 02-98 R. de C., de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N 2 del Ministerio de Vivienda, así como tampoco sus actos confirmatorios.

III. Decisión de la Sala.

Cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la controversia, previa las siguientes consideraciones.

Reposa a foja 4 del expediente administrativo, la copia debidamente autenticada del contrato de arrendamiento N 124896 de 14 de febrero de 1980, celebrado entre Sebastián Sastre, S. A., en su carácter de administrador, y de Iracema del Carmen Montoya, como arrendadora, sobre el apartamento No. 20 del Edificio 11, ubicado en calle 5ta., Corregimiento de Parque Lefevre. Cabe señalar que conforme a la cláusula tercera de dicho contrato, el término de duración del mismo es de tres años contados a partir del 14 de febrero de 1980, y que una vez que este venza, el arrendatario tendrá derecho a que el mismo se le prorrogue por igual término, en caso de que al vencerse el contrato estuviera al día en sus pagos.

Se observa al dorso de la foja 26, la certificación expedida por la Directora General de Arrendamientos, mediante la cual se certifica que de acuerdo a los registros de descuentos por pagos por descuento del Departamento de Descuento Directo, la Resolución No.1,689-90 del 25 de octubre de 1990, ordenó descontar a la señora Iracema del Carmen Montoya Moreno, la suma mensual de B/70.00 en concepto de alquiler y B/.35.00 de abono a morosidad, a partir del 1 de noviembre de 1990 hasta el 31 de octubre e 1993. De igual forma se certifica que dicho descuento no se efectuó durante los meses de noviembre y diciembre de 1990, lo que refleja una morosidad de B/.140.00, en concepto de canon de arrendamiento.

Vale destacar que en el expediente administrativo no existe documento alguno que acredite que la arrendataria ejerciera algún tipo de acción para el cobro de los dos meses morosos, así como tampoco interpuso acción alguna para rescindir el contrato de arrendamiento vencida la prórroga en los años anteriores.

A juicio de la Sala, al momento de interponerse la petición de rescisión del contrato de arrendamiento, se encontraba prescrita la obligación de la señora Montoya de pagar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1990, toda vez que el artículo 1704 del Código Civil preceptúa que por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de la obligación de satisfacer el precio de los arrendamientos de fincas urbanas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala considera que no existía mora, tardanza o dilación en el pago al momento de ocurrir la última prorroga del contrato el 14 de marzo de 1998, por haber prescrito la obligación de cancelar los cánones de arrendamiento atrasados correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1990. Por lo tanto, tal como lo preceptúa el artículo 9 de la Ley 93 de 1973, como la arrendataria está al día en sus pagos al vencerse el contrato, tiene derecho a que se le prorrogue el mismo por el término de tres años, por lo que el arrendador no tenía el derecho a solicitar la rescisión del contrato de arrendamiento.

Por todo lo antes anotado, la Sala es del criterio que las violaciones alegadas al artículo 9 de la Ley 93 de 1973 y el artículo 1704 del Código Civil, no se han configurado en esta ocasión, razón por la cual lo procedente es declarar que no es ilegal el acto acusado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ES ILEGAL la Resolución No.02-98 de 14 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 2 del Ministerio de Vivienda, así como también su acto confirmatorio y, por lo tanto, niega las pretensiones del recurrente.

Notifíquese y Cúmplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA LORENA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓ DE ULTRAMAR COMERCIAL CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO N°1 DEL RESUELTO N°1516 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1997, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Alma Lorena Cortés, actuando en representación de ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, el Artículo N°1 del Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, expedido por el Ministro de Educación y el Director Nacional del Proyecto de Dinamización del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nulo por ilegal, el Artículo N°1 del Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, expedido por el Ministerio de Educación y el Director Nacional del Proyecto de Dinamización del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, que su texto dice:

> "ARTICULO PRIMERO: Declarar desierto el renglón N°1 Mochilas Escolares del Acto Público N°3-108-97/DNA para el suministro de Mochilas Escolares y Utiles Escolares para los estudiantes de Pre-Escolar y Primero a Sexto Grado del País, por cuanto la muestra de la mochila presentada por la empresa ULTRAMAR COMERCIAL CORPORATION no cumple con las especificaciones exigidas en el Pliego de Cargos y Especificaciones."

Ante la decisión del Ministro de Educación y del Director Nacional de Dinamización del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION interpuso recurso de reconsideración, mismo que se negó mediante Resuelto N°8 de 16 de diciembre de 1998.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, la Lcda. Cortés destaca que el día 30 de octubre de 1997, se celebró el Acto Público N°3-108-97/DNA, anunciado por el Ministro de Educación a través del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones del Sector Público para la adquisición de Mochilas y Utiles Escolares para los estudiantes de Pre-Escolar y Primero a Sexto Grado del País. Entre las empresas

oferentes en dicho acto, participó la Empresa ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION en el Renglón N°1 (Mochilas Escolares), cuya oferta, según expone, fue la más baja y ventajosa para el Estado y fue por el monto de B/859,520.00 frente al precio oficial de B/.1,300,000.00. Según la Lcda. Cortés, la decisión adoptada en el Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, violó el principio del Deber de Selección Objetiva y Justa, contenido en el Artículo 21 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, en cuanto a la selección del contratista cuya propuesta beneficie más a la institución contratante.

Como disposiciones legales infringidas, la Lcda. Cortés aduce los artículos 21 y el contenido del párrafo del artículo 42 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 cuyos textos señalan:

> "ARTICULO 21: Deber de Selección objetiva y Justa: los funcionarios responsables deberán seleccionar al contratista en forma objetiva y justa. Es objetiva y justa la selección en la cual se escoge la propuesta más favorable a la entidad y a los fines que ésta busca, con base a lo estipulado en el pliego de cargos."
>
> "ARTICULO 42: Análisis de la propuesta:
> ...Concluido el informe, se pondrá de manifiesto a los proponentes, para que, dentro de los siguientes cinco (5) días, le formulen sus observaciones por escrito, que serán incorporadas al expediente. En ningún caso la comisión podrá recomendar la adjudicación de la solicitud de precios o licitación de un proponente en particular."

A criterio de la Lcda. Cortés, el Artículo Primero del Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, viola de manera directa el contenido del artículo 21 de la Ley 56 de 1995, toda vez que la Comisión Técnica Evaluadora al cumplir con lo previsto en el Pliego de Cargos, punto 23, no recomendó la oferta evaluada más baja ni ventajosa para el Estado, como fue la propuesta por ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION, por lo que el interés financiero y económico del Estado se afecta al declarar desierto el acto. También señala la Lcda. Cortés, que, contrario a lo expuesto por la Administración, la calidad de la muestra presentada por la empresa ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION, cumple con la calidad óptima requerida ofrecida, y que tratándose de una muestra es suceptible de ser mejorada, en el caso de las medidas que apenas constituyen centímetros de diferencia del modelo requerido en el pliego de cargos.

También se aduce la violación al contenido del párrafo del artículo 42 de la Ley 56 de 1995, pues, la Comisión Técnica Evaluadora, propuso a la empresa Jo'Marc, S. A., y no recomendó la oferta evaluada más baja como lo fue la de ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION con sólo un margen de error de 3.6% con respecto a la primera, lo que evita un ahorro para el Estado por el monto de B/400,000.00.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Ministro de Educación y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° 104-211 de 21 de abril de 1998, el Ministro de Educación rindió el respectivo informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 193 a 195 del expediente. En el informe presentado, el Ministro de Educación sostuvo que la Comisión Técnica Evaluadora, designada para la evaluación de las propuestas presentadas por lo participantes, rindió un informe en el que se tomó en cuenta los criterios de evaluación y parámetros de ponderación establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones y de conformidad con lo que establece el numeral 4 del manual, relativo al procedimiento para la contratación de obras financiadas con recursos provenientes del Gobierno Central a través del Programa de Dinamización de la ejecución del presupuesto de inversiones en instituciones prioritarias del sector público y recomendó la adjudicación del Renglón de Mochilas Escolares a la empresa JO'MARC, S. A.

El Ministro de Educación también señala en su informe que la Comisión Técnica Evaluadora al momento de decidir sobre la adjudicación, advirtió al

Ministerio que la empresa ULTRAMAR COMMERCIAL CORPORATION, era la que, a propósito del renglón de Mochilas Escolares, ofrecía el precio más bajo y ventajoso para el Estado, no obstante, al examinarse otros elementos que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico deben acompañar a las propuestas, se puso de relieve que la muestra de la mochila presentada por la empresa ULTRAMAR COMMERCE CORPORATION, no cumplía con las especificaciones dadas en el Pliego de Cargos, por lo que no era posible adjudicarle el mencionado renglón. Según el Ministro de Educación, de hacer la adjudicación de determinado renglón a una empresa en función de una propuesta que difiere de las especificaciones establecidas en el Pliego de Cargos, implica realizar una contratación por un bien distinto al que en realidad requiere la entidad pública. La exacta congruencia entre el bien solicitado por la entidad pública y el ofrecido por los licitantes, según el Ministro de Educación, es una regla que incluso viene tutelada por el artículo 18 de la Ley 56 de 1995.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N°228 de 18 de junio de 1998, se opone a los criterios expuestos por la recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, los cargos que se formulan en la demanda deben ser desestimados, pues, la empresa ULTRAMAR COMMERCE CORPORATION, no cumplió con las condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y especificaciones, Renglón N°1, Mochilas Escolares. La facultad que tiene el Ministerio de Educación para aceptar la propuesta que más convenga a sus intereses, se fundamenta en lo previsto en el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, que no necesariamente es la propuesta con el precio más bajo, sino la que además cumple con los requisitos que establece el pliego de cargos y sus características.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Como antes se expuso, el acto demandado lo constituye el Artículo N°1 del Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, expedido por el Ministro de Educación y el Director Nacional del Proyecto de Dinamización del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público, en el cual se declara desierto el Renglón N°1, Mochilas Escolares, del Acto Público N°3-101-97/DNA para el suministro de Mochilas Escolares y Utiles Escolares para los estudiante de Pre Escolar y de Primero a Sexto Grado del país, por cuanto la muestra presentada por la empresa ULTRAMAR COMERCIAL, S. A., no cumple con las especificaciones exigidas en el Pliego de Cargos. Entre las consideraciones expuestas para la expedición del acto que se demanda, se señala que al ser conformada la Comisión Técnica Evaluadora se analizó la documentación presentada por las empresas participantes, tomando en cuenta los criterios de evaluación y parámetros de ponderación establecidos en el Pliego de Cargos y Especificaciones, luego de lo cual se recomendó realizar las adjudicaciones de los Renglones N° 1 y 2 del Acto Público 3-108-97/DNA a la empresa Jo'Marc, S. A.. Pese lo recomendado por la Comisión Técnica Evaluadora, el Ministerio de Educación estimó que Jo'Marc S. A., si bien cumple con las especificaciones requeridas, el precio ofrecido para el suministro de mochilas escolares no favorece lo mejores intereses del Estado.

A foja 45 del expediente, consta que en el Acto Público N°3-108-97/DNA, Renglón N°1 Mochilas Escolares, convocado por el Ministerio de Educación, participaron como empresas oferentes CUADERNOS ESCOLARES, S. A.; PRODUCTOS PANAMEÑOS, S.A,; ULTRAMAR COMERCIAL S. A.; PANAMCO DE PANAMA, S. A.; JO'MARC, S. A.; CENTRO COREMUSA, S. A., y, mediante Resuelto N°1516 de 17 de diciembre de 1997, el Ministro de Educación y el Director Nacional del Proyecto de Indemnización, resolvieron declarar desierto el Renglón N°1, Mochilas Escolares. Contra el mencionado acto público y el informe de la Comisión Evaluadora, según se aprecia en el expediente, se interpuso formal queja ante la Dirección General de Proveeduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, que el ser contestada, se indicó que efectivamente ninguna de las empresas cumplió con las

especificaciones técnicas solicitadas en el Renglón N° 1, por lo que el acto público N° 3-108-97 debía declararse desierto.

Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que la sustentan, la Sala concluye que la razón no le asiste a quien representa a la parte actora. Contrario a lo expuesto en la demanda, la Sala advierte que si bien es cierto que en el informe presentado por la Comisión Técnica Evaluadora se señaló a la empresa ULTRAMAR COMMERCE CORPORATION, como la empresa con la oferta de precio más baja, no es menos cierto que también se indicó que la muestra de mochila presentada no llenaba las condiciones exigidas por el Ministerio de Educación conforme al Pliego de Cargos y Especificaciones. Ello a juicio de la Sala, es criterio suficiente para no proceder a la selección de las propuestas presentadas, aun cuando alguna de ellas ostente el precio más bajo, pues, deben converger otros elementos que por lo general se especifican en el pliego de cargos, aspecto sobre el cual la Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, como en la sentencia de 9 de septiembre de 1998, expedida en ocasión de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la empresa Scandinavian Motors contra el Banco Nacional de Panamá.

No coincide, pues, la Sala con la tesis expuesta por la Lcda. Cortés para desvirtuar el criterio de selección que utilizó el Ministerio de Educación para declarar desierto el acto público, mismo que se desprende de la facultad que le confiere el artículo 48 de la Ley 56 de 1995, pues, de ningún modo la deficiencia señalada en el acto que se demanda, es un asunto "suceptible de ser mejorado de acuerdo a los requerimientos" al tratarse de una muestra. Ello, a juicio de la Sala, no requiere mayores consideraciones, pues, para eso se expide el pliego de cargos, donde claramente se enuncian las especificaciones que según la misma Ley 56 de 1995, su elaboración no debe ser "incompleta, ambigua o confusa". Quienes participan en un acto de contratación de pública, deben, pues, ajustar sus ofertas a las especificaciones requeridas, y la entidad contratante luego de la debida ponderación de las mismas según el pliego de cargos, procederá a la selección de conformidad a la Ley.

Por lo expuesto, no proceden las violaciones alegadas, razón por la que lo procedente es no acceder a las pretensiones que se formulan en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Artículo Primero del Resuelto N° 1516 de 17 de diciembre de 1997, expedido por el Ministro de Educación y el Director Nacional del Proyecto de Dinamización del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público.

Notifiquese y Cumplase

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANA CRISTINA DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CELESTINO SERRANO CASTILLO, NIVIA ROSA CASTILLO (NOMBRE USUAL) O NIVIA ROSA MIRANDA CASTILLO (NOMBRE LEGAL) Y BLAS DOMINGO CASTILLO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D.N.4-1177 DE 14 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ana Cristina De León, actuando en nombre y representación de CELESTINO SERRANO CASTILLO, NIVIA ROSA CASTILLO (usual) o NIVIA ROSA MIRANDA CASTILLO (legal) y BLAS DOMINGO CASTILLO, presentó ante la Sala Tercera demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° D.N.4-1177 de 14 de junio del presente año, emitida por el Director Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos que exige la ley para ser admitida.

En ese sentido, el suscrito estima que la demanda es inadmisible, puesto que incumple con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 conforme con el cual "a la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos". En efecto, quien suscribe advierte que la parte actora omitió adjuntar a la demanda copia autenticada del acto impugnado con la respectiva constancia de notificación.

En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reiterado en múltiples ocasiones que la notificación del acto que se impugna es un requisito de suma importancia exigido por la ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa, y que la demanda, efectivamente, fue presentada en tiempo oportuno.

De las consideraciones que se han expresado se desprende que la presente demanda es inadmisible, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Ana Cristina De León, en representación de CELESTINO SERRANO CASTILLO, NIVIA ROSA CASTILLO (usual) o NIVIA ROSA MIRANDA CASTILLO (legal) y BLAS DOMINGO CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE DISTRIBUIDORA TRELLES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ORDEN DE HACER EMITIDA POR LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, CONSISTENTE EN EL NO PAGO DEL PRECIO ACORDADO EN EL CONTRATO N°027-97-ALD DE 17 DE FEBRERO DE 1998 Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Eugenio Carrillo, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de DISTRIBUIDORA TRELLES, S. A., para que se declare nula por ilegal, la orden de hacer emitida por la Caja

de Seguro Social, consistente en el no pago del precio acordado en el Contrato N°027-97-ALD de 17 de febrero de 1998 y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que previo el trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada que certifique si ha recaído decisión sobre la solicitud presentada por el recurrente, con la finalidad de acreditar si existe silencio administrativo.

A foja 18 del expediente, se aprecia solicitud de certificación, con fecha de 15 de junio de 2000, dirigida al Director General de la Caja de Seguro Social.

Considera el suscrito que el actor cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Como la solicitud del demandante se ajusta a lo estipulado en el artículo citado y en vista de que los documentos detallados prueban que el actor realizó las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, es dable acceder a lo pedido.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite al Director General de la Caja de Seguro Social, que certifique si se ha dado respuesta a la solicitud presentada por el recurrente mediante escrito fechado 15 de junio de 2000, a fin de comprobar si existe silencio administrativo, y de ser así remitir copias autenticadas de dichos documento con la correspondiente constancia de notificación.

Notifíquese.

(fdo.) HIPÓLITO GILL SUAZO
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CELLULAR VISION PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 553 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Darío Carrillo, en representación de la sociedad CELLULAR VISION PANAMA, S. A., interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulos, por ilegales, el Resuelto N° 553 de 13 de diciembre de 1996 y el acto confirmatorio, expedidos por el Ministro de Gobierno y Justicia y para que se haga otras declaraciones.

I. EL ACTO IMPUGNADO

Por medio del acto impugnado el funcionario demandado revocó el Resuelto N° 552 de 25 de noviembre de 1996, a través del cual autorizó a la sociedad demandante a instalar y operar el servicio de televisión pagada vía microondas, por un período provisional de seis meses prorrogables. El aludido Resuelto N° 552, también otorgó a CELLULAR VISION PANAMÁ, S. A., la concesión para el uso y explotación de cien frecuencias para la prestación de dicho servicio (Cfr. fs. 61-165).

De acuerdo con la parte motiva del acto acusado, el Resuelto N° 552 fue revocado luego de advertir, a través de la Dirección de Medios de Comunicación, "que la sociedad peticionaria omitió la descripción de los sitios en los cuales se proponen instalar las repetidoras, tal como lo dispone el literal b) del artículo 7 de la Ley 36 de 1980". Los requisitos establecidos en esta norma legal "constituyen elementos esenciales para la operación del sistema, ya que hace imposible verificar la localización de las instalaciones repetidoras".

En la parte motiva del resuelto confirmatorio, N° 48-R-25 de 4 de febrero de 1997, el entonces Ministro de Gobierno y Justicia señala que en el proceso administrativo concerniente a la solicitud formulada por CELLULAR VISION PANAMA, S. A se pudieron detectar las siguientes vicios:

1. El licenciado Darío Carrillo no presentó ante ese Ministerio ninguna solicitud formal para obtener a nombre de su representada los permisos y autorizaciones necesarias para instalar y operar el servicio de televisión pagada, vía microondas, a pesar de que ésta le confirió poder especial con este propósito;

2. Ni en el poder otorgado ni en escrito alguno la demandante pidió la concesión de cien (100) canales de televisión, sino que tenía la intención de adquirirlos en el futuro (según el desarrollo del marcado), por lo que hubo omisión en el cumplimiento de lo dispuesto en ela artículo 5 de la Ley 36 de 1980;

3. El recurrente no aportó los contratos que celebraría con las compañías televisivas que autorizarían la retransmisión de su programación y con los cuales se garantizaría la prestación del servicio;

4. La sociedad demandante omitió la descripción de los sitios en los cueles se proponía instalar las estaciones repetidoras; y,

5. El Resuelto recurrido (N° 553, que revocó la concesión), concedió derechos a la empresa por un término de treinta años, contraviniendo así el artículo 12 de la Ley 36 de 1980, que establece un término de 25 de años para este tipo de concesiones.

El Resuelto N° 48-R-25 de 4 de febrero de 1997 termina indicando, por un lado, que en el presente caso existen vicios de ilegalidad graves y evidentes, "situación jurídica que invalida el conocido principio de irrevocabilidad de los actos administrativos" y, por otro, que en el negocio administrativo respectivo, prevalece el bienestar social y el interés público, de conformidad con el artículo 226 de la Constitución Política (Cfr. fs. 296-298 del Antecedente N° 1).

II. LAS NORMAS SUPUESTAMENTE VIOLADAS Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

Según el apoderado judicial de la actora, los actos impugnados violaron el artículo 6 de a Ley 36 de 17 de octubre de 1980, derogada por la Ley 24 de 30 de junio de 1999 (G. O. N° 23.832, de 5 de julio de 1999, pág. 4), que establecía lo siguiente:

> "ARTICULO 6: Las solicitudes de que tratan los dos artículos anteriores deberán estar acompañadas de los siguientes documentos:
>
> a. Copia autenticada de la escritura de constitución, de las reformas si las hubiera, con certificación de su inscripción en el Registro Público y su presentación si el solicitante fuere persona jurídica.

b. Constancia de pago de Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) a favor del Tesoro Nacional.

c. Cualesquiera otros documentos o informaciones que establezca el Ministerio de Gobierno y Justicia."

A juicio del licenciado Carrillo, el acto impugnado violó de forma directa el precepto transcrito porque el mismo revocó la concesión hecha a favor de CELLULAR VISION PANAMA, S. A, luego de que ésta cumplió los requisitos que exige esa norma. Para sustentar su afirmación, el mencionado letrado citó cada una de las fojas del expediente administrativo contentivo de la solicitud de concesión formulada por su representada ante el Ministerio de Gobierno y Justicia. En dicho expediente constan los documentos anexados a esa solicitud, entre ellos, los documentos a que se refiere el articulo 6 de la Ley 36 de 1980.

Afirma, asimismo, que los actos administrativos que reconocen derechos a favor de terceros no pueden revocarse de oficio, sin dar oportunidad al afectado de ser oído, por lo que la revocación cumplida en este caso hace ilegal el Resuelto N° 553 impugnado.

El artículo 7 de la Ley 6 de 1980 es la otra disposición que se estima violada. El contenido de esta norma era el siguiente:

"ARTICULO 7: Dentro de los dos meses siguientes al recibo de la solicitud el Ministerio deberá conceder o negar la licencia respectiva. De concederse la licencia, la misma tendrá una duración de seis meses, dentro de los cuales el interesado deberá presentar adicionalmente la siguiente información:

a. La descripción del transmisor con determinación de su potencia.

b. La ubicación del transmisor, con expresión de su posición geográfica, expresada en grados, minutos y segundos de latitud y longitud y altura sobre el nivel del mar.

c. El sistema de radiación y potencia estimada radiada.

ch. Un estudio técnico sobre la viabilidad del proyecto.

Se podrá conceder una prórroga adicional si el solicitante comprueba que existen razones fundadas que requieren un plazo mayor para aportar la documentación expresada en este artículo.

Dicha prórroga en ningún caso excederá de seis meses."

El concepto de la infracción de la norma transcrita fue expuesto por el licenciado Carrillo en los siguientes términos:

"El artículo 7 de la Ley 36 del 17 de octubre de 1980 fue violado directamente. El párrafo primero del artículo 7 disponía que la Licencia provisional concedida a CELLULAR VISION PANAMA, S. A. tendría una vigencia de seis (6) meses. Ello fue reconocido en el resuelto 552 del 25 de noviembre de 1996 y transgredido con el resuelto N° 553 impugnado. Las resoluciones que reconocen derechos a favor de particulares no pueden ser revocadas de oficio, es necesario que medie petición e instrucción que corroboren la existencia de los presupuestos que permitan la invalidación. El término legalmente señalado en el artículo 7 y reconocido en el resuelto 552 era de seis (6) meses. El Ministerio de Gobierno y Justicia, de oficio revocó sin existir causal legal el término de seis (6) meses de la Licencia Provisional.

Adicionalmente, en caso de alguna omisión, disposición (sic)

> obligaba al funcionario a establecer detalle y requerir del concesionario el o los supuestos documentos o requisitos faltantes, y otorgarle un término prudencial para cumplirlos antes de proceder a sancionarlo. Según el texto legal, el término que el Ministerio estaba obligado a conceder era de por lo menos seis (6) meses, pudiendo ser hasta de seis (6) meses más, en el caso que el interesado pudiera acreditar razones fundadas para ello.
>
> El resuelto recurrido fue proferido sin mediar petición e instrucción alguna, el Ministerio procedió de oficio y sin dar al afectado posibilidad de ser oído."

Cabe agregar, finalmente, que el licenciado Carrillo citó en apoyo de sus argumentos dos resoluciones de la Sala Tercera, fechadas 30 de junio de 1975 y 16 de abril de 1997, en las que se declaró la nulidad de sendos actos administrativos que revocaron derechos subjetivos concedidos a favor de los particulares (fs. 32-36).

III. ARGUMENTOS DEL TERCERO IMPUGNANTE DE LA DEMANDA

Al presente negocio compareció el ingeniero José Guanti, entonces Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, para oponerse a las pretensiones de la parte actora. En el libelo de oposición, presentado por intermedio del licenciado Roberto Meana, el tercero impugnante pidió a la Sala que niegue lo pedido por la demandante y, además, que "ordene la revocación del Resuelto N° 552 de 25 de noviembre de 1996 por ilegal, ya que el mismo resulta contrario al contenido de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 17 de 9 de julio de 1991, y al Artículo 11 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996".

El licenciado Meana estima que la pretensión de la actora, dirigida a que se declare nulo el Resuelto N° 553 de 13 de diciembre de 1996 debe negarse, porque a través del Resuelto revocado (N° 552) el Ministerio de Gobierno y Justicia violó el artículo 4 de la Ley 17 de 1991, que modificó el artículo 2 de la Ley 36 de 1980, toda vez que asignó frecuencias a CELLULAR VISION PANAMA, S. A., que no están dentro de las contempladas en el aludido precepto. En otras palabras, dicho Ministerio no podía otorgar concesiones para la prestación del servicio de distribución de señales no interactivas fuera de los segmentos de frecuencias que el artículo 4 ibídem consagra.

Asimismo, el licenciado Meana considera que el Resuelto N° 552, revocado por el acto demandado, violó también el artículo 11 de la citada Ley 31, que faculta al Ente Regulador para establecer el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, separando las frecuencias destinadas a otros servicios no reglamentados por dicha Ley. El Ministerio de Gobierno y Justicia debió esperar hasta que el Ente Regulador adoptara el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, para así otorgar a CELLULAR VISION PANAMA, S. A. frecuencias distintas a las determinadas en el artículo 4 de la Ley 17 de 1991, antes mencionada. Según dicho letrado, el Plan aludido, que se mantenía en consulta para septiembre de 1997, dispone que las frecuencias otorgadas mediante el Resuelto N° 552 ibídem a la demandante, han sido separadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones diferentes al de televisión, por lo que resulta claro que lo dispuesto en este Resuelto es contrario a lo estipulado en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (fs. 223-229).

IV. EL INFORME DE CONDUCTA

En el informe de conducta, remitido a la Secretaría de la Sala mediante Nota N° 2033 de 20 de junio de 1997, el entonces Vice-Ministro de Gobierno y Justicia, señor Martín Torrijos, se limitó a exponer las mismas motivaciones que se plasmaron en la Resolución confirmatoria del acto original acusado. Sin embargo, agregó, que la licencia o autorización otorgada a esa empresa era de carácter provisional. "En estas condiciones de provisionalidad, el Estado puede, si así lo estima conveniente, para la protección de los intereses nacionales,

revocar la concesión. Las concesiones provisionales no tienen necesariamente que hacer tránsito a una concesión de carácter definitivo. En consecuencia, este Ministerio, al revocar la concesión provisional otorgada a Cellular Vision de Panama, S. A., no ha violado el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos y de certeza jurídica de que gozan éstos" (fs. 188-192).

V. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Al contestar la demanda, mediante Vista N° 335 de 28 julio 1997, la Procuradora de la Administración indicó que el Ministerio de Gobierno y Justicia vulneró el "principio de irrevocabilidad" de los actos administrativos al expedir el Resuelto N° 553 impugnado, porque no es atribución de la Administración revocar sus propios actos, sino expedirlos conforme a derecho y, en caso de que sea necesaria su revocación, demandarlos ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo competente en materia de "control de la legalidad".

Para reforzar sus argumentos, la representante del Ministerio Público citó opiniones doctrinales y jurisprudencia de esta Sala, relacionadas con el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos. Para concluir, pidió a la Sala que acceda a las pretensiones de la sociedad demandante (fs. 193-203).

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Corresponde a la Sala en esta etapa pronunciarse sobre el fondo del presente negocio. La Sala ha hecho un exhaustivo análisis de las alegaciones formuladas por cada una de las partes, así como de los argumentos expuestos por la Procuradora de la Administración y por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y considera que el acto administrativo impugnado por el licenciado Carrillo no infringe los preceptos legales que se cita como violados.

Para comprender la conclusión a la que ha llegado la Sala es necesario partir del hecho de que las concesiones relativas al uso y explotación de los medios de comunicación en general deben inspirarse, de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, en el bienestar social y el "interés público". El artículo 256 de la Constitución Política claramente se refiere a estos aspectos al señalar lo siguiente:

> "ARTÍCULO 256. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y en el interés público."

De acuerdo con el precepto citado, la utilización de los medios de comunicación y transporte debe realizarse a través de "concesiones", las cuales han de tener como fundamento el "bienestar social y el interés público". En términos generales, ello significa que tales concesiones deben procurar la satisfacción y protección de los intereses colectivos, planteamiento que es cónsono con el contenido del artículo 86 constitucional que concretamente señala que "Los medios de comunicación son instrumentos de información, educación, recreación y difusión cultural y científica."

El "interés público", según Guillermo Cabanellas, se refiere al "bien público, a la conveniencia de la mayoría frente al egoísmo de cada cual, que ha de prevalecer en caso de conflictos de intereses entre el individuo y la sociedad, entre el particular y el Estado como entidad de Derecho Público" (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo IV, 21ª Ed., Buenos Aires, 1989. pág. 462).

La Sala ha examinado detenidamente las piezas procesales y, al igual que el funcionario demandado, considera que la concesión otorgada mediante el Resuelto N° 552 de 25 de noviembre de 1996 a la sociedad CELLULAR VISION PANAMA, S. A. era contraria al "interés público", dadas las anómalas y precarias

condiciones técnico-jurídicas en que fue otorgada. Así se comprueba en la documentación que consta en el expediente administrativo relativo a la solicitud de frecuencias hecha por la demandante, en el cual se aprecia que la demandante nunca solicitó de manera formal una concesión para el uso y explotación de 100 frecuencias para el servicio de televisión pagada, sino únicamente 25 y, además, que la hoja técnica que en estos casos confecciona el Departamento Técnico de Telecomunicaciones para determinar la viabilidad técnica de la solicitud, sólo se elaboró respecto de las 25 frecuencias originalmente solicitadas y no así respecto de las frecuencias restantes, que fueron requeridas de manera informal por CELLULAR VISION PANAMA, S. A e ilegalmente le fueron concedidas.

Es importante indicar que los hechos anotados, que aparecen claramente probados a fojas 89, 121 y 122 de los antecedentes, fueron oportunamente advertidos por el entonces Director de Medios de Comunicación Encargado, quien, en el Memorándum N° RR-01 de 12 de julio de 1996, que es de fecha anterior al Resuelto N° 552 ibídem (Cfr. fs. 141 y 142 de los antecedentes), señaló al entonces Viceministro del Ramo, licenciado Martín Torrijos, que la solicitud presentada por la sociedad CELULAR VISION PANAMA, S. A., que estaba pendiente de ser concedida o negada, no llenaba los requisitos técnico-legales por los motivos ya enunciados. Pese a estas indicaciones, el ente demandado expidió el Resuelto N° 552 ibídem, otorgando a la demandante una concesión para el uso y explotación de 100 frecuencias radioeléctricas para la prestación del servicio de televisión pagada vía microondas, por un término de treinta (30) años, a pesar de que el artículo 12 de la derogada Ley 36 de 1980 limitaba este término hasta un máximo de veinticinco (25) años.

El problema planteado también debe ser analizado desde la perspectiva del nuevo marco jurídico que en materia de telecomunicaciones regía en el momento en que fueron asignadas las 100 frecuencias a la sociedad CELLULAR VISION PANAMA, S. A. (noviembre de 1996). En tal sentido, debe recordarse que mediante Ley 26 de 29 de enero de 1996 se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, cuyo artículo 19 (numeral 2) lo facultó para "Otorgar, en nombre del Estado según proceda, las concesiones, licencias y autorizaciones para la prestación de los servicios públicos de su competencia, de acuerdo con las normas fiscales y demás disposiciones vigentes..." (G. O. N° 22.962, del 30 de enero de 1996). Asimismo, a través de la Ley 31 del 8 de febrero de 1996 (G. O. N° 22.971 de 9 de febrero de 1996), se dictaron las normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, "con el objeto de acelerar la modernización y el desarrollo del sector, promover la inversión privada en el mercado, extender su acceso, mejorar la calidad de los servicios, promover tarifas bajas al usuario y la competencia leal, en la provisión de los servicios de telecomunicaciones sujetos a esta Ley". El artículo 1 de este mismo cuerpo legal excluyó del ámbito de aplicación de sus disposiciones a "los servicios de telegrafía nacional, de radiodifusión y distribución de señales de televisión no interactiva y los de radiodifusión y bandas ciudadanas"; y el artículo 12 dispuso que "El Ente Regulador otorgará y supervisará las concesiones para el uso de las frecuencias asignadas a las telecomunicaciones" y "El Ministerio de Gobierno y Justicia otorgará y supervisará las concesiones para el uso de las frecuencias asignadas a otros servicios no reglamentados en esta Ley".

Para cumplir los fines trazados en la Ley 31 de 1996, su artículo 11 encomendó al Ente Regulador de los Servicios Públicos el establecimiento del "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias", con el objeto de separar las frecuencias destinadas a los servicios de telecomunicaciones, de las destinadas a otros servicios no reglamentados en dicha Ley. El precepto citado dispuso lo siguiente:

> Artículo 11. El Ente Regulador de los Servicios Públicos, sujetándose a los principios establecidos en esta Ley y sus reglamentos, al Plan Nacional Técnico de Telecomunicaciones y a los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá, establecerá el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico, separando las frecuencias

destinadas a los servicios de telecomunicaciones, de las destinadas a otros servicios no reglamentados en la presente Ley." (Subraya la Sala)

Fue así como el Ente Regulador inició un proceso de consultas con distintos concesionarios y otros interesados (como la Dirección Nacional de Medios del Ministerio de Gobierno y Justicia) a fin de que éstos presentaran sus respectivas observaciones y comentarios antes de la aprobación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, cuya adopción finalmente se materializó en la Resolución N° JD-107 de 30 de septiembre de 1997 (G. O. 23.391 de 3 de octubre de 1997, pág. 62).

Ante los hechos anotados y considerando que la Ley marco del sistema de telecomunicaciones de la República de Panamá (Ley 31 de 1996), estaba en vigencia desde el 9 de febrero de 1996, esto es, mucho antes de que la sociedad CELLULAR VISION PANAMA, S. A. presentara su solicitud de frecuencias ante el Ministerio de Gobierno y Justicia (hecho ocurrido el 25 de marzo de 1996, según el Memo N° RR-01 de 12 de julio de 1996), esta entidad debió suspender el trámite de esa solicitud y esperar hasta que el Ente Regulador, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la citada Ley, adoptara el "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias", en el cual se establecerían los segmentos de frecuencias distintos de los contemplados en el artículo 4 de la Ley 17 de 9 de julio de 1991 (G. O. N° 21.831, de 17 de julio de 1991), que podían ser otorgados por dicho Ministerio. Ello debió ser así para evitar tanto la asignación de frecuencias destinadas a la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones, como las interferencias perjudiciales a los concesionarios y clientes de éstos y lograr así una eficiente prestación de los distintos servicios de telecomunicaciones.

Sobre el punto, es pertinente anotar que el Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos manifiesta a foja 226 que para el momento en que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias estaba en consulta (septiembre de 1997), las frecuencias asignadas a la demandante estaban atribuidas a la prestación de diversos servicios de telecomunicaciones. Al comparar la documentación relativa a la solicitud de CELLULAR VISION PANAMA, S. A., cuyo representante legal pidió la asignación "de las frecuencias de 25.0 Ghz hasta 29.5 Ghz" (Cfr. fs. 89 y 122 de los antecedentes), con el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias en vigencia (G. O. N° 23.391, de 3 de octubre de 1997, pág. 106) se aprecia que, en efecto, los segmentos de frecuencias solicitados por la empresa demandante han sido asignados en ese Plan a diversos servicios de telecomunicaciones que aparecen descritos en la Resolución N° JD-025 de 12 de diciembre de 1996 (G. O. N° 23.183, del 13 de diciembre de 1996, pág. 13), cuya copia autenticada también fue aportada por el Ente Regulador (Cfr. fs. 205-213). Entre esos servicios están: los de telecomunicación básica nacional y básica internacional, el servicio de alquiler de circuitos dedicados de voz, el de comunicaciones personales, el de telefonía móvil celular, bandas A y B; el servicio de sistemas troncales convencionales para uso público y privado, el de radiocomunicación fija y móvil, el servicio empresarial digital internacional, el servicio de terminales de muy pequeña apertura (VSAT), el de comunicación marítima para uso público, el de comunicación aérea para uso público, el servicio de telecomunicación por satélites de baja órbita, el servicio de busca personas, etc.

Es en consideración a todos estos hechos que la Sala estima que la concesión de frecuencias otorgada a favor de CELLULAR VISION PANAMA, S. A. por medio del Resuelto N° 552 de 1996 era contraria al "interés público", dados los graves perjuicios que su ejecución ocasionaría a la prestación eficiente de diversos servicios de telecomunicaciones y, consecuentemente, a los concesionarios de éstos y para sus clientes.

La Sala Tercera, a través de vasta jurisprudencia se ha referido al principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, en base al cual los actos administrativos que reconocen u otorgan derechos subjetivos a favor de particulares no pueden ser revocados de oficio por la administración pública.

Este principio cardinal del Derecho Administrativo, sin embargo, no tiene un carácter absoluto, pues, tanto la doctrina como diversas legislaciones admiten la posibilidad de que la administración, ante supuestos fácticos excepcionales, revoque de oficio sus propias decisiones. El tratadista Miguel Marienhoff, por ejemplo, alude a uno de estos supuestos fácticos al indicar que los actos administrativos pueden ser revocados por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, es decir, para satisfacer requerimientos del interés público, lo cual, en principio, constituye actividad propia de la Administración Pública y así lo acepta la doctrina. El mismo autor define la revocación como "la extinción de un acto administrativo dispuesta por la propia Administración Pública, para satisfacer actuales exigencias del interés público o para restablecer el imperio de la legitimidad" (Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 4ª Ed. Edit. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1993. pág. 576).

El autor Sánchez Torres, siguiendo la legislación colombiana, alude a las diversas causas de revocación directa de los actos administrativos y entre ellas menciona la revocación por disconformidad del acto con el interés público o por atentar aquél contra éste. Afirma, que de lo que se trata aquí es del retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia frente al interés social; la revocación se vincula de esta forma a la cuestión de mérito del acto (SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. Teoría General del Acto Administrativo. Biblioteca Jurídica. Biblioteca Diké. 1995. Medellín. pág. 251).

El jurista Roberto Dromi, por su parte, distingue entre revocación por razones de oportunidad y revocación por razones de ilegitimidad, refiriéndose la primera a aquellos casos en que un acto administrativo puede ser revocado para satisfacer exigencias de interés público, procediendo siempre respecto de cualquier tipo de acto, reglado o discrecional; y la segunda, a los casos en que el acto nace viciado o se torna luego viciado por cambios en el ordenamiento jurídico o la desaparición de un presupuesto de hecho que altera la relación entre las normas y el acto (Roberto, DROMI. Derecho Administrativo. 6ª Ed. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1997. pág. 271).

En el Derecho Comparado la revocación de los actos administrativos también es objeto de regulación. En Colombia, por ejemplo, el artículo 69 del Código Contencioso-Administrativo establece como causales de revocación directa de los actos administrativos, la manifiesta oposición de éste a la Constitución Política o a la ley; su inconformidad con el interés público o social, o si el acto atenta contra él o causa agravio injustificado a una persona. No obstante ello, tratándose de actos creadores de una situación jurídica de carácter particular y concreta o que reconozcan un derecho de igual categoría, el artículo 73 ibídem establece que pueden ser revocados, pero con el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. La misma norma dispone que "habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales".

En España, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículo 105.1) faculta a las Administraciones Públicas para "revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitidas por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico". En México, el artículo 11 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en 1995, establece entre las causales de extinción de los actos administrativo de carácter individual la "revocación, cuando así lo exija el interés público, de acuerdo con la ley de la materia".

En Panamá, el tema relativo a la revocación oficiosa de los actos administrativos vino a ser legalmente regulado en el Título III del Libro II de la recién aprobada Ley 38 de 31 de julio de 2000 (G. O. N° 24.109 de 2 de agosto de 2000), denominado "De la Revocatoria de los Actos Administrativos". El

artículo 62 de esta Ley, cuyo Libro II entrará a regir en marzo de 2001, recoge cuatro supuestos en que las entidades públicas pueden revocar los actos administrativos que reconocen o declaran derechos a favor de terceros, a saber: cuando el acto se emita sin competencia para ello; cuando el beneficiario del acto haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerlas; cuando el afectado consienta la revocación y cuando así lo disponga una norma especial. La misma norma exige como formalidad previa a la expedición del acto revocatorio, el concepto previo ("antes de la adopción de la medida") del Personero Municipal, del Fiscal de Circuito o del Procurador o Procuradora de la Administración, según se trate de un acto de alcance municipal, provincial o nacional, respectivamente.

Frente al carácter no absoluto del principio de irrevocabilidad de los actos administrativos y ante la ausencia de una regulación expresa sobre este tema en la legislación panameña para la fecha en que se expidió el acto acusado, cabría, pues, preguntarse si la entidad demandada podía revocar válidamente la concesión provisional otorgada a la sociedad CELLULAR VISION PANAMA, S. A., o si, por el contrario, estaba obligada a respetar el término de vigencia de la misma, el cual, según el artículo 7 de la derogada Ley 36 de 1980, era de seis (6) meses prorrogables. En concepto de la Sala, el análisis y la solución del problema planteado, dada su naturaleza y complejidad, no puede hacerse al margen del resto del ordenamiento jurídico vigente, sino, por el contrario, a la luz de las normas y principios que lo integran.

En tal sentido, la Sala debe recordar que la interpretación de las disposiciones legales y reglamentarias debe hacerse de conformidad con los preceptos y principios que la Constitución Política consagra. Es lo que en la doctrina y la jurisprudencia se conoce como el "principio de interpretación de conformidad con la Constitución", el cual se fundamenta en la naturaleza suprema del ordenamiento constitucional respecto del resto de las normas de inferior jerarquía. La Sala Tercera se refirió a este principio en su Auto de 15 de febrero de 1991, en los siguientes términos:

> "La Sala ha señalado en los autos de 14 de enero y de 1o. de febrero de 1991 que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código Civil, la ley debe interpretarse de conformidad con la Constitución. El principio antes mencionado ha sido desarrollado en los países democráticos a través de la jurisprudencia. El catedrático de la Universidad de Madrid, Eduardo García de Enterría, explica este principio en los siguientes términos: "la supremacía de la Constitución sobre todas las normas y su carácter central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar éste en cualquier momento de su aplicación - por operadores públicos o por operadores privados, por Tribunales o por órganos legislativos o administrativos- en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto las generales como los específicos referentes a la materia de que se trate".
>
> Este principio es una consecuencia derivada del carácter normativo de la Constitución y de su rango supremo y está reconocido en los sistemas que hacen de ese carácter un postulado básico. Así, en los Estados Unidos, todas las Leyes y los actos de la Administración han de interpretarse in harmony with the Constitution; en Alemania el mismo principio impone die verfassungskonforme Auslegung von Gesetsen, la interpretación de las Leyes conforme a la Constitución. En ambos casos, como prácticamente en todos los países con justicia constitucional, el principio es de formulación jurisprudencial" (La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 95).
> (Registro Judicial, febrero de 1991, págs. 1-5)

Sobre el mismo principio, también son consultables los Autos de 14 de enero

y 1° de febrero, ambos de 1991, expedidos por la Sala Tercera (Cfr. Registro Judicial de enero de 1991, págs. 41-46 y febrero de 1991, págs. 2-5).

Como se indicó antes, la licencia provisional otorgada a CELLULAR VISION PANAMA, S. A. "para operar una estación de televisión y utilizar las respectivas frecuencias" tenía una duración de seis (6) meses prorrogables, término dentro del cual la interesada debía aportar la información descrita en el artículo 7 de la derogada Ley 36 de 1980, que se citó como violado. Según el artículo 8 ibídem, recibida dicha información, el Ministerio de Gobierno y Justicia disponía de un "de un plazo de dos meses para conceder o negar la licencia definitiva para uso de canales de televisión". Al examinar el contenido del cuerpo legal citado se advierte que ninguno de sus preceptos establecen nada en cuanto a la posibilidad de revocar la respectiva licencia temporal antes del vencimiento de ese término por razón de la manifiesta inobservancia del "interés público". Sin embargo, el interpretar el citado precepto legal de conformidad con el citado artículo 256 de la Carta Fundamental, que establece que "las concesiones sobre medios de comunicación deben inspirarse en el interés público", la Sala concluye que la observancia de ese término de seis (6) meses sólo era posible en la medida en que la concesión otorgada a CELLULAR VISION PANAMA, S. A., constitutiva de un derecho subjetivo, estuviese conforme con el interés público, es decir, que no fuese contraria a éste. Y es que, así como la Ley 36 de 1980 establecía las condiciones y requisitos necesarios para obtener una licencia para operar una estación de televisión, la Constitución Política, como norma suprema del Estado, también exigía y aun exige en su artículo 256, que este tipo de concesiones sean conformes con el interés público. No siendo ello así en el caso de la concesión otorgada a CELLULAR VISION PANAMA, S. A., por las razones que se han expuesto, la Sala estima que la entidad demandada podía válidamente revocar el Resuelto N° 552 de 1996 con el fin de preservar o garantizar de forma inmediata la efectividad del "interés público" que debe inspirar todas las concesiones sobre medios de comunicación.

Si bien la concesión otorgada a CELLULAR VISION PANAMA, S. A. significaba para ésta el otorgamiento de un derecho subjetivo, no cabe la menor duda de que el interés público al que se ha hecho referencia, debía prevalecer sobre el interés particular de esta empresa, en atención al principio constitucional de "primacía o preeminencia del interés público o social sobre el interés particular", consagrado en el artículo 46 de la Carta Fundamental. La Sala Tercera se refirió a este principio en su Sentencia de 26 de enero de 1995, en el cual declaró que no eran ilegales los artículos 16 y 17 del Decreto Ejecutivo N° 124 de 1990, por el cual se prohibió temporalmente la exportación de larvas, post-larvas, reproductores salvajes de camarones y de poliquetos. En este caso la Sala estimó, con fundamento al artículo 46 de la Carta Fundamental, "que el interés público debe prevalecer sobre el potencial perjuicio que pudiera sufrir la empresa demandante", la cual, precisamente, se dedicaba a la exportación de las aludidas especies (Cfr. Registro Judicial de enero de 1995, págs. 320-323).

La Sala estima así, con apoyo en los preceptos constitucionales citados, que el Ministerio de Gobierno y Justicia podía revocar la concesión otorgada a CELLULAR VISION PANAMA, S. A. mediante el Resuelto N° 552 de 1996, habida cuenta de la urgente necesidad de restablecer y preservar el interés público claramente desconocido desde el momento en que dicho Ministerio dio a esta empresa una concesión sobre cien (100) frecuencias sin que todas fueran formalmente solicitadas y setenta y cinco (75) de éstas carecían del estudio del Departamento Técnico de Telecomunicaciones que garantizara su viabilidad técnica. Además, se otorgó la concesión por un término superior al permitido por la Ley 36 de 1980. A ello debe agregarse, que la decisión adoptada por dicho Ministerio evitó una afectación aún mayor al interés público o colectivo, dadas las graves consecuencias que se hubiesen derivado tanto para el Estado como para los concesionarios y sus clientes, por la utilización de parte de CELLULAR VISION PANAMA, S. A. de segmentos de frecuencias destinadas a servicios de telecomunicaciones distintos del servicio de televisión, según la reglamentación que el Ente Regulador de los Servicios Públicos estaba por adoptar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 31 de 1996.

El principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, como se sabe, tiene como fundamento esencial un interés particular o subjetivo, materializado en un derecho reconocido a favor del particular. En el presente caso, en el que la concesión otorgada a la sociedad demandante era manifiestamente contraria al interés público, aquél interés no puede estimarse como argumento suficiente para sostener la irrevocabilidad del Resuelto N° 552 de 1996 porque, como se ha dicho, en las concesiones para la utilización de los medios de comunicación el interés publico debe prevalecer sobre el interés privado. La decisión contenida en el Resuelto demandado, aun cuando considera otros motivos que no es del caso examinar, se fundamenta, precisamente, en el citado artículo 256 de la Constitución Política, que establece que las concesiones para la utilización de los medios de comunicación deben inspirarse en el bienestar social y el interés público, el cual, a su vez, debe prevalecer sobre el interés privado o particular, por disposición expresa del artículo 46 constitucional.

Por las razones expuestas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 553 de 13 de septiembre de 1996 ni el acto confirmatorio, expedidos por el Ministro de Gobierno y Justicia, y NIEGA las restantes pretensiones formuladas en la demanda.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) HIPÓLITO GILL SUAZO
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE PROCESADORA MARPESCA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DM-1069-2000, DE 29 DE MAYO DE 2,000, EMITIDA POR EL MINISTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortés, actuando en nombre y representación de PROCESADORA MARPESCA, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que la Sala Tercera declare nula, por ilegal, la Nota DM-1069-2000, de 29 de mayo de 2,000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Entre las pretensiones formuladas en la demanda figura la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, en atención a los principios de fumus boni iuris y periculum in mora. Sustenta solicitud en los términos que transcribimos a continuación:

> "De no atenderse esta solicitud especial, observándose la existencia o apariencia de un buen derecho, por cuanto esta (sic) debidamente acreditada la violación directa de nuestro ordenamiento jurídico interno en perjuicio de los particulares a los cuales se está sometiendo ilegalmente a cumplir con estas disposiciones apartadas del derecho.
>
> Obviamente, la provocación de perjuicios notoriamente graves en contra de los particulares afectados por esta reglamentación contraria a la Constitución y a la Ley, cuya ilegalidad es ostensible y de difícil reparación, ya que al ser ilegal este Acto Adminis-

trativo, lo procedente es solicitar formalmente reparación del daño patrimonial ocasionado a los afectados por parte del Estado que sería lo justo y pertinente, el cual asciende de millones de dólares en pérdidas, además del perjuicio social ocasionado a las miles de familias que dependen de estas humildes plazas de trabajo.

Esto lo manifestamos, por cuanto a la fecha mi representada debe cumplir con el Contrato de Arrendamiento con Inversión No.746-99 vigente desde el 3 de agosto de 1999 y suscrito con el Estado, con la Autoridad de la Región Interoceánica, en el cual se encuentra pendiente del cumplimiento de un cronograma de inversión, LIC. No. 09-ARI99 a razón de 5 años que desarrolla la zona procesadora para la exportación, ubicada en la antigua base de Corozal, Territorio Nacional y cuyo incumplimiento es ostensible, producto de la paralización ilegal de la actividad de importación de productos a solicitud de PROCESADORA MARPESCA, S. A., en los renglones que se expresan en dicho cronograma, lo que puede propiciar la Solicitud de Ejecución de la Fianza de Cumplimiento en perjuicio de mi representada, lo cual sustenta los perjuicios notoriamente grave (sic) que se le están ocasionando a mi mandante, además del cese de operaciones comerciales, el descenso de sus utilidades, la incobrable a la fecha tasa de recuperación de inversión, entre otras innumerables."

Mediante la Nota DM-1069-2000, fechada el 29 de mayo de 2,000, el Ministro de Desarrollo Agropecuario le comunica a Panagiotis Lymberópulos de Procesadora MARPESCA, S. A., que se ve imposibilitado de otorgar permiso para la importación de camarones, procedentes de zonas con patógenos exóticos a nuestro medio, atendiendo al cumplimiento de la Ley 23 de 1997, por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, que establece los procedimientos zoosanitarios en materia de importación, según las reglamentaciones internacionales establecidas por la Oficina Internacional Epizootias (OIE) y normas zoosanitarias acuícolas, aprobadas por la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, pueden suspenderse los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a juicio de la Sala, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave (periculum in mora) de difícil o imposible reparación.

En reiterados fallos se ha manifestado que para que se decrete la suspensión de los efectos del acto impugnado es necesario que la parte actora esté amparada por el fumus boni iuris o apariencia del buen derecho.

Como hemos reseñado, la demandante enumera la serie de perjuicios económicos que sufriría si no se ordena la suspensión del acto emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, además de hacer extensivo estos irreparables perjuicios a un número no cuantificado de familias que dependen de ese negocio, sin embargo, no aporta prueba alguna que respalde sus afirmaciones.

La Sala ha sido reiterativa en cuanto a que no basta invocar las graves repercusiones económicas que podría ocasionar la ejecución del acto cuya legalidad se impugna, sino que es necesario probar los perjuicios que se alegan.

Por otro lado, del examen preliminar de los cargos formulados se desprende que la complejidad del tema a tratar, que amerita un análisis que debe hacerse al conocer el fondo de la controversia y no en esta etapa del proceso. En anteriores ocasiones la Sala ha manifestado la imposibilidad de acceder a la medida cautelar solicitada en aquellos casos en que la evaluación de las presuntas infracciones legales exige el indispensable examen de las pruebas y demás elementos fácticos y jurídicos que sólo pueden efectuarse responsablemente en la sentencia de fondo que resuelva la controversia:

> "La recurrente pretende que la Sala pase, en esta etapa preliminar, a considerar cuestiones de hecho, adentrándose con ello a la estimación preliminar de las pruebas incorporadas, y lamentablemente tal posibilidad no es factible en este momento, porque la complejidad de las cuestiones controvertidas suponen un cuidadoso y ponderado análisis que sólo puede adelantarse en la sentencia de fondo. Por tanto, la Sala en esta etapa incipiente no es posible formular consideraciones que afectan el fondo de la cuestión objeto del litigio."
> (ROCHEM BIOCARE DE PANAMA, S. A. -Resolución DNC-99-05-960 y DNC-99-05-962, de 11 de mayo de 1999 de la Caja de Seguro Social. 22 de septiembre de 2,000)

Por tanto, la Sala considera que hasta el momento no existe justificación para adoptar la medida de suspensión solicitada.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Nota DM-1069-2000, de 29 de mayo de 2,000, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Notifiquese.

(fdo.) HIPOLITO GILL
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS SÁNCHEZ Q. EN REPRESENTACIÓN DE EDWIN O. GRAELL R., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°145-00 DE 14 DE ABRIL DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Tomás Sánchez Q., en representación de EDWIN O. GRAELL R., para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N°145-00 de 14 de abril de 2000, dictado por el Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda incoada no fue admitida por el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 12 de septiembre de 2000, basándose en los siguientes argumentos:

> "... el Magistrado Sustanciador observa que la misma no cumple con los requisitos para ser admitida, ya que, a pesar que el demandante aportó el original del Resuelto N°145-00 de 14 de abril de 2000, no presentó la constancia de su notificación, tal como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.
>
> El acto originario atacado mediante la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, fue recurrido por el afectado mediante escrito de reconsideración con apelación en subsidio...Sin embargo, el recurrente no ha presentado la constancia de que dichos recursos fueron o no resueltos por la autoridad demandada para constatar a partir de qué fecha se agotó la vía gubernativa..."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a exponer las siguientes consideraciones en torno a la apelación presentada.

En atención a las circunstancias planteadas, considera esta Corporación que efectivamente la parte demandante no cumplió con lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1946, al no presentar la copia autenticada del acto impugnado con la respectiva constancia de notificación, es decir, del Resuelto N°145-00 de 14 de abril de 2000. (Ver fojas 1 del expediente)

Por otro lado, si bien es cierto que el actor al concurrir ante esta Sala alegaba agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, y utiliza como medio de prueba, nota fechada 17 de julio de 2000, mediante la cual solicita al Gerente General del Banco de Desarrollo Agropecuario que le certificara si sobre el recurso interpuesto había recaído decisión alguna (f. 15), desafortunadamente, no requirió en la demanda que previo el trámite de admisión de la misma el sustanciador solicitara al funcionario demandado dicha certificación.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943, prevé que el Magistrado Sustanciador tiene la facultad de solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo requiera el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación de su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia, previa comprobación de haber realizado todas las gestiones tendientes a obtener dicha documentación.

Ante tales circunstancias, le es imposible a esta Superioridad comprobar si el actor agotó la vía gubernativa, requisito sine qua non exigido para poder recurrir en demanda contencioso administrativa ante esta Sala, y además, determinar si la demanda incoada fue presentada oportunamente, tal como lo preceptúan los artículos 42 y 42b de la Ley 135 de 1943.

Frente a lo señalado, este tribunal de Segunda Instancia estima que le asiste la razón al Magistrado Sustanciador, por lo que no hay otra alternativa, que negarle curso legal a la demanda presentada, a tenor de lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice lo siguiente:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 12 de septiembre de 2000, que decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Tomás Sánchez Q. en representación de EDWIN O. GRAELL R.

Notifíquese.

(fdo.) HIPÓLITO GILL SUAZO

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BASILIO CHONG, EN REPRESENTACIÓN DE SAÚL QUIROZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO NO. 222, DE 1 DE ABRIL DE 2000, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20)

DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Basilio Chong, quien actúa en nombre y representación del señor Saúl Quirós, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 222, de 1 de abril de 2000, proferido por el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto administrativo acusado de ilegal, se dispuso destituir al señor Saúl Quirós, con cédula de identidad personal No. 8-456-351, seguro social No. 050-1317, del cargo de Jefe de Imprenta I, planilla No. 2, posición 197, con sueldo mensual de B/.975.00 más B/.100.00 de sobresueldo. Este acto fue confirmado por medio de la Resolución No. 34, de 25 de abril de 2000.

Este Despacho estima que la demanda descrita no debe ser admitida por cuanto la misma adolece de deficiencias que impiden proseguir su trámite normal.

En primer lugar, si bien el acto originario fue notificado, el confirmatorio cuya copia autenticada reposa a fojas 28 y 29 del expediente, no tiene constancia de notificación al interesado, señor Saúl Quirós.

Este requisito es importante tratándose de una demanda de plena jurisdicción, para poder establecer si el recurso contencioso administrativo correpondiente ha sido presentado ante la Sala dentro del término legal de dos meses previsto por el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

El acto confirmatorio, o sea, la Resolución No. 34, está fechado el 25 de abril último, mientras que la demanda de plena jurisdicción fue presentada ante la Sala el día 14 de julio de 2000 (foja 13), y reiterada una vez corregida, el 11 de agosto último (foja 21), más de dos meses después del término de prescripción que señala el artículo ut supra, contado dicho término a partir de la fecha de su expedición porque no hay constancia de su notificación.

Con anterioriad, la Magistrada que suscribe rechazó la demanda mediante resolución fechada el 27 de julio de 2000, con base en reiterada jurisprudencia sobre la obligación de probar el silencio administrativo alegado, extremo que hasta ese momento procesal no había hecho el actor (Cfr. foja 16). El apoderado sustituto del demandante presentó nuevamente demanda de plena jurisdicción corregida, el 11 de agosto de 2000, de acuerdo se aprecia a fojas 21, e invocando el artículo 46 de la La Ley 135 de 1943, hizo una petición previa, consistente en que por intermedio de la Sala se solicitara a la Administración copia autenticada del acto acusado y si fue decidido o no el recurso de reconsideración interpuesto (foja 21). Esta petición fue aceptada por la Sala unitaria, según resolución visible a fojas 23 y siguientes del dossier, y respondida de acuerdo a la Nota No. AL/SG-1202/2000, de 23 de octubre de este año, por el Secretario General de la Asamblea Legislativa (foja 31).

Sin embargo, no es viable impulsar el trámite a la presente demanda porque fue interpuesta de manera extemporánea, con fundamento en lo expuesto y en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, según el cual "No se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por el señor Saúl Quiros, mediante apoderado judicial, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 222, de 1 de abril de 2000, emitido por el entonces Presidente

de la Asamblea Legislativa.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC PRADO, EN REPRESENTACIÓN DE NELSON MARÍN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRS/DE NO. 292-00, DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric Prado, quien actúa en nombre y representación del señor Nelson Marín, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE No. 292-00, de 13 de mayo de 2000, emitida por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante la citada Nota y previa rescisión del contrato No. P-99-189-B, se le comunicó al demandante la suspensión de la relación contractual que mantenía con el Proyecto (foja 1).

La Sala procede a revisar la demanda descrita para determinar si cumple con los presupuestos procesales que determinen su admisión o, en caso contrario, su rechazo.

A juicio de la suscrita Magistrda Sustanciadora, esta demanda no debe ser admitida porque adolece de una serie de defectos que impiden darle el curso natural de acuerdo con la Ley.

En primer lugar, el actor aportó copia simple del acto acusado de ilegal, según se aprecia a foja 1. Sobre el particular, el artículo 820 del Código Judicial es expreso al disponer las formas como deben aportarse los documentos al proceso, y tratándose de copias o reproducciones "...éstas deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la Ley disponga otra cosa".

Igualmente, según el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y jurisprudencia reiterada de esta Corporación de Justicia es requisito que a la demanda se acompañe copia autenticada del acto impugnado, en la eventualidad que no se aporte el documento original (Cfr. auto de 30 de septiembre de 1998, Caso: Ricardo Grimaldo contra la Resolución No. 3, de 27 de enero de 1998, emitida por el Consejo Municipal de San Miguelito).

El segundo defecto de la demanda bajo examen consiste en que el actor, en la esfera administrativa, promovió recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el acto acusado de ilegal el día 6 de junio del 2000, y no fue sino hasta el día 8 de agosto pasado que sustentó el recurso de apelación ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario (Cfr. 2 y 4); si embargo, no aporta copia del acto administrativo que resolvió la apelación, si éste se produjo, ni pide que por intermedio de la Sala se solicite copia del acto respectivo a la autoridad administrativa en el caso que haya gestionado su obtención y le hubiese sido negada, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Este último requisito es fundamental para probar el silencio administrativo, aspecto que no ha hecho la parte que demanda.

Por último, el actor no señaló que la Procuraduría de la Administración es parte en este proceso de plena jurisdicción, por ende representante judicial de la entidad oficial demandada y defensora del acto acusado, tal como lo prevén los artículos 43, numeral 1; 58 de la Ley 135 de 1943; y 5, numeral 2, de La Ley 38 de 2000. Acerca de este requisito son numerosos los pronunciamientos de la Sala que ha inadmitido demandas por incumplir esta formalidad, sobre lo cual la Sala ha dicho que es "suficiente causal para no admitir demandas contencioso administrativas, la no designación de la señora Procuradora de la Administración como parte del proceso en defensa del acto impugnado.(Cfr. autos de 3 de agosto de 1998 y 11 de enero de 1999).

Con fundamento en los razonamientos anteriores, las disposiciones citadas y el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, no debe dársele curso a la presente demanda.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justica, NO ADMITE la demanda de plena jurisdicción interpuesta por el señor Nelson Marín, mediante apoderado judicial, para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE No. 292-00, de 13 de mayo de 2000, emitida por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural del Darién, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 274-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric G. Prado, actuando en nombre y representación de Sary Camargo, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 274-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la demanda para resolver sobre su admisibilidad, la Magistrada sustanciadora observa que la misma no cumple con los requisitos de ley.

La parte actora aporta con su demanda el original de la Nota PDRSD/DE N° 274-00 de 13 de mayo de 2000, en la que se le comunica que a partir del 31 de mayo se rescinde el contrato N° P-98-065-B, pero no presenta constancia de la fecha en que le fue notificada personalmente para acreditar que la impugnó a tiempo ante la vía gubernativa, puesto que el escrito en el cual pide reconsideración con apelación en subsidio tiene el sello de que fue recibido en la institución demandada el 7 de junio de 2000, veinticinco días después de la fecha de la Nota PDRSD/DE N° 274-00. Consta además que el escrito en el que el actor sustenta la apelación fue recibido "por insistencia" en la Dirección de Asesoría Legal del MIDA el 10 de agosto de 2000 (f. 4).

Aunque el apoderado judicial del actor alega en su demanda que se ha producido el silencio administrativo, no cumple con los presupuestos necesarios para demostrarlo fehacientemente a esta Superioridad.

Según el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, para ocurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a través de una demanda de plena jurisdicción es necesario el agotamiento de la vía gubernativa, circunstancia que debe ser demostrada mediante la copia autenticada de las resoluciones que resuelven los recursos con constancia de su notificación, o en caso de no haber sido dictados o de haber sido negada la expedición de los mismos, corresponde a la parte actora pedir a la Magistrada Sustanciadora de forma expresa y comprobando que no fue atendida su solicitud, que ordene a la autoridad demandada la expedición de éstos (artículo 46 de la Ley 135 de 1943).

Así las cosas, no le es posible a esta Sala determinar si fue debidamente agotada la vía gubernativa y si la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue o no presentada a tiempo, tal cual lo exigen los artículos 42 y 42 b de la Ley 135 de 1943.

Además, el recurrente también omitió citar a la señora Procuradora de la Administración como parte en la demanda y quien según el numeral 2 del artículo 348 del Código Judicial, debe actuar representando los intereses de la Administración. Este requisito es necesario por establecerlo así el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en el cual se establece que toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa debe contener la designación de las partes y sus representantes.

Como la parte actora no cumplió con los requisitos señalados, su demanda no debe tramitarse según lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946 (artículo 50 de la Ley 135 de 1943).

De consiguiente, la Magistrada sustanciadora de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eric G. Prado en representación de SARY CAMARGO, para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 274-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DEMETRIO ZARATE, EN REPRESENTACIÓN DE XIOMARA B. BEYTIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 27 DE 5 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado DEMETRIO ZARATE, actuando en representación de XIOMARA B. BEYTIA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 27 de 5 de junio de 2000, dictada por el Director del Sistema Regional de Salud Metropolitana, acto

confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y en este punto se percata que la demanda adolece de vicios que impiden su curso legal.

Así observa la suscrita, que en el renglón de la demanda, relativo a las disposiciones legales que se estiman infringidas, no se explica en qué concepto pudieron ser transgredidas dichas excertas. El recurrente incluye además, entre los cargos de violación, una norma de rango constitucional como aplicable a la solución de la controversia.

Hemos de recordar a la parte actora, que conforme a lo previsto en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, uno de los presupuestos para la admisión de demandas contencioso administrativas, es que el actor señale de manera expresa, a cuál de los motivos de ilegalidad (artículo 16 de la ley 33 de 1946), se ajusta el cargo de violación endilgado: infracción literal de los preceptos legales; falta de competencia o jurisdicción, el quebrantamiento de las formalidades legales, o la desviación de poder.

De igual forma hemos insistido, en que la Sala Tercera no es competente para conocer de supuestas violaciones a la Constitución Nacional, dado que ésta es una atribución privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En vista de las deficiencias anotadas, lo procedente es negarle curso legal al libelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado DEMETRIO ZARATE en representación de la señora XIOMARA B. BEYTIA.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC G. PRADO EN REPRESENTACIÓN DE CESAR SALDIVAR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 293-00 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric G. Prado, actuando en nombre y representación de César Saldivar, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 293-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la demanda para resolver sobre su admisibilidad, la Magistrada sustanciadora observa que la misma no cumple con los requisitos de ley.

La parte actora aporta con su demanda el original de la Nota PDRSD/DE N°

293-00 de 13 de mayo de 2000, en la que se le comunica que a partir del 31 de mayo se rescinde el contrato N° P-99-103-A, pero no presenta constancia de la fecha en que le fue notificada personalmente para acreditar que la impugnó a tiempo ante la vía gubernativa, puesto que el escrito en el cual pide reconsideración con apelación en subsidio tiene el sello de que fue recibido en la institución demandada el 7 de junio de 2000, veinticinco días después de la fecha de la Nota PDRSD/DE N° 293-00. Consta además que el escrito en el que el actor sustenta la apelación fue recibido "por insistencia" en la Dirección de Asesoría Legal del MIDA el 10 de agosto de 2000 (f. 4).

Aunque el apoderado judicial del actor alega en su demanda que se ha producido el silencio administrativo, no cumple con los presupuestos necesarios para demostrarlo fehacientemente a esta Superioridad.

Según el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, para ocurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo a través de una demanda de plena jurisdicción es necesario el agotamiento de la vía gubernativa, circunstancia que debe ser demostrada mediante la copia autenticada de las resoluciones que resuelven los recursos con constancia de su notificación, o en caso de no haber sido dictados o de haber sido negada la expedición de los mismos, corresponde a la parte actora pedir a la Magistrada Sustanciadora de forma expresa y comprobando que no fue atendida su solicitud, que ordene a la autoridad demandada la expedición de éstos (artículo 46 de la Ley 135 de 1943).

Así las cosas, no le es posible a esta Sala determinar si fue debidamente agotada la vía gubernativa y si la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue o no presentada a tiempo, tal cual lo exigen los artículos 42 y 42 b de la Ley 135 de 1943.

Además, el recurrente también omitió citar a la señora Procuradora de la Administración como parte en la demanda y quien según el numeral 2 del artículo 348 del Código Judicial, debe actuar representando los intereses de la Administración. Este requisito es necesario por establecerlo así el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en el cual se establece que toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa debe contener la designación de las partes y sus representantes.

Como la parte actora no cumplió con los requisitos señalados, su demanda no debe tramitarse según lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946 (artículo 50 de la Ley 135 de 1943).

De consiguiente, la Magistrada sustanciadora de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eric G. Prado en representación de CÉSAR SALDIVAR, para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 293-00 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO ERIC PRADO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE ESPINOSA, INTERPUSO DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA PDRSD/DE N° 290 DE 13 DE MAYO DE 2000, SUSCRITA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL DARIÉN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI

DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Eric Prado, en representación del señor JORGE ESPINOSA, interpuso demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 290 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora, sin embargo, estima que la aludida demanda no puede admitirse porque la acción ejercitada está prescrita. En efecto, a foja 2 del expediente consta que el día 7 de junio de 2000 el señor ESPINOSA interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, sin que tales recursos fuesen resueltos. Ello significa que la vía gubernativa quedó agotada por silencio administrativo el 7 de agosto de 2000, por lo cual el demandante tenía un término adicional de dos (2) meses para interponer su acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera, según el artículo 27 de la Ley 33 de 1946. No obstante, como se aprecia en el sello secretarial visible a foja 9, dicha acción se interpuso el 25 de octubre de 2000, es decir, cuando ya estaba prescrita.

Es pertinente aclarar, que la supuesta notificación de 2 de julio de 2000 visible a foja 1 no puede considerarse válida, pues, resulta obvio que antes de esa fecha el actor ya estaba notificado del contenido del acto acusado, hecho que se prueba con el libelo de sustentación del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, que tiene como fecha de presentación ante la entidad demandada el día 7 de junio de 2000 (Cfr. f. 2).

A lo anterior se debe agregar, que ni el poder ni la demanda se dirigen a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera, como exige el artículo 102 del Código Judicial y, además, que tampoco se identificaron a los representantes de cada una de las partes, como ordena el artículo 43, numeral 1, de la Ley 135 de 1943.

Por las razones expuestas, la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eric Prado, en representación de JORGE ESPINOSA, para que se declare nula, por ilegal, la Nota PDRSD/DE N° 290 de 13 de mayo de 2000, suscrita por el Director Ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible del Darién y para que se haga otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN PRESENTADA POR EL LICENCIADO RAFAEL SOLANO, EN NOMBRE Y REPESENTACIÓN DE MARIBEL ALVEY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DP-DOPA-10658, DE 18 DE JULIO DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rafael Solano, en nombre y representación de Maribel Alvey, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DOPA-10658, de 18 de julio de 2000, emitida por el Director Nacional de Personal, a.i., del Ministerio de Educación, y para que la Sala haga otras declaraciones.

Por medio de la Nota descrita en el párrafo anterior, el Ministerio de Educación le comunicó a la señora Maribel Alvey que por instrucciones superiores debía cesar labores de su cargo a partir de la fecha, o sea, del 18 de julio pasado.

A juicio de la suscrita Magistrada, la presente demanda no debe ser admitida porque la parte actora ha aportado una copia simple del acto administrativo impugnado, tal como consta a fojas 1 de los autos.

El artículo 820 del Código Judicial es expreso al señalar las formas como se aportan los documentos al proceso. Tratándose de copias o reproducciones, dicha norna exige que sean adjuntadas al expediente "autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa".

En segundo lugar, en dicha copia no hay constancia de la notificación del acto acusado de ilegal, que como se dijo está fechado el 18 de julio de 2000. El artículo 44 de la Ley 135 de 1943 dispone que a la demanda "deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos". El requisito de notificación es importante para establecer si una vez agotada la vía gubernativa por decisión expresa o silencio de la Administración, el actor ha interpuesto la acción contencioso administrativa para el restablecimiento de derechos subjetivos dentro del término de prescripción de dos meses que dispone el artículo 42b ibídem, contado, en este caso, a partir de la notificación.

De fojas 2 a la 5, la demandante aporta copia simple del recurso de reconsideración promovido contra la Nota No. DP-DOPA, el cual se recibió en el Despacho Superior de la Ministra de Educación, el 25 de julio de 2000, y no fue sino hasta el día 19 de octubre, más de dos meses desde la presentación de la impugnación del acto administrativo, que solicitó se le certificara si el recuro estaba en trámite o si el mismo había sido decidido (foja 6).

Sobre este aspecto, aunque al demandante pide a la Sala (foja 18) que requiera a la autoridad administrativa para que certifique si ha resuelto o no el recurso interpuesto, a fin de probar el silencio administrativo, omite impetrar del Tribunal Contencioso-administrativo que, antes de la admisión de la demanda, solicite a la autoridad respectiva copia del acto acusado, en caso de que le hubiese sido negado, con base en el artículo 46 de la Ley orgánica de lo contencioso; de allí que la Sala no deba darle curso a la demanda por las deficiencias explicadas.

En virtud de lo expuesto, y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, procede rechazar la demanda analizada.

De consiguiente, la Suscrita Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por Maribel Alvey, por medio de apoderado judicial, contra la Nota DP-DOPA-10658, de 18 de julio de 2000, emitida por el Director Nacional de Personal, a.i., del Ministerio de Educación.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE PIO CASTILLERO, EN REPRESENTACIÓN DE CARMINA GALLARDO SANCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO 199 DE 27 DE JUNIO DE 2000, EMITIDO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado JOSE PIO CASTILLERO, actuando en representación de CARMINA GALLARDO SANCHEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 199 de 27 de junio de 2000, emitido por la Presidenta de la República, por conducto de la Ministra de Educación, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora procede a revisar el libelo, en vías de determinar si cumple con los requisitos formales indispensables para su admisión, y en este punto se percata que la demanda adolece de un vicio que impide su curso legal.

Así observa la suscrita, que en el renglón de la demanda, relativo a las disposiciones legales que se estiman infringidas, no se explica en qué concepto pudieron ser transgredidas dichas excertas.

En este sentido hemos de recordar a la parte actora, que conforme a lo previsto en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, uno de los presupuestos para la admisión de demandas contencioso administrativas, es que el actor señale de manera expresa, a cuál de los motivos de ilegalidad (artículo 16 de la ley 33 de 1946), se ajusta el cargo de violación endilgado: infracción literal de los preceptos legales; falta de competencia o jurisdicción, el quebrantamiento de las formalidades legales, o la desviación de poder.

Esta exigencia ha sido reiterada de manera sistemática por esta Superioridad, en numerosos pronunciamientos, por lo que ante la deficiencia anotada, lo procedente es negarle curso legal al libelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado JOSE PIO CASTILLERO en representación de la señora CARMINA GALLARDO.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE ABDIEL MAT CALDERÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO GERENCIAL N°006 DE 3 DE MARZO DE 2000, DICTADO POR EL GERENTE DE SERVICIOS GENERALES DE LA CAJA DE AHORROS, EL ACTO

CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Tomás Vega Cadena, en representación de ABDIEL MAT CALDERÓN, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Gerencial N°006 de 3 de marzo de 2000, dictado por el Gerente de Servicios Generales de la Caja de Ahorros, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El libelo de demanda no fue admitido por el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 13 de septiembre de 2000, basándose en los siguientes argumentos:

> "... el Magistrado Sustanciador estima, sin embargo, que la acción impetrada no debe admitirse porque está prescrita.
> ... el actor no aportó copia autenticada del acto demandado, omitiendo así el requisito formal exigido por el artículo 44 de la Ley 135 de 1943."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a exponer las siguientes consideraciones en torno a la apelación presentada.

En atención a las circunstancias planteadas, considera esta Corporación de Justicia que, efectivamente, la demanda insturada está prescrita.

Tal como se colige a foja 7 del expediente, el actor se notificó del acto que pone fin de manera definitiva a la actuación administrativa el día 14 de abril de 2000, sin embargo, interpuso la demanda el 4 de septiembre de 2000, transcurridos 4 meses y 21 días después de la notificación del dicho acto. (Cfr.f.18)

Lo antes expuesto nos permite concluir que el demandante no cumplió con lo que claramente establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone lo siguiente:

> "La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda." (Lo destacado de la Sala)

Otra consideración que cabe destacar, es el hecho de que el recurrente no cumplió con el requisito exigido por el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, al no aportar copia autenticada del acto impugnado.

Ante tales circunstancias, este tribunal de Segunda Instancia conceptúa que le asiste la razón al Magistrado Sustanciador, por lo que no hay otra alternativa, que negarle curso legal a la demanda presentada, a tenor de lo consagrado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, que dice lo siguiente:

> "Artículo 31. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción."

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 13 de septiembre de 2000, que decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Lcdo. Tomás Vega Cadena en representación de ABDIEL MAT CALDERÓN.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES BERGES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°06-99-D DE 12 DE FEBRERO DE 1999, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Tapia, Linares y Alfaro, actuando en nombre y representación de INVERSIONES BERGES, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°06-99-D de 12 de febrero de 1999, proferida por la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante Resolución de 3 de agosto de 2000, la Magistrada Sustanciadora decidió admitir como prueba aducida por la parte actora y la Procuradora de la Administración el expediente que contiene la solicitud de Desahucio promovida por Inversiones Berges, S. A. contra la señora Eneida Bayo de Hurtado y no admitió como prueba aducida por la parte actora la declaración jurada rendida por Inversiones Berges, S. A. en la Solicitud de Desahucio que promovió dicha empresa contra Frank Rivera, por inconducente.

Por su parte, la parte actora interpuso recurso de apelación contra dicha resolución mediante escrito fechado 29 de septiembre de 2000. (Ver foja 44 del expediente)

A foja 50 del expediente, se colige que el demandante presentó memorial con fecha de 20 de octubre de 2000, en el cual desiste del recurso de apelación instaurado, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el demandante es procedente y debe acogerse, conforme a lo consagrado en el artículo 1073 del Código Judicial, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.
> ..."

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Tapia, Linares y Alfaro, en representación de INVERSIONES BERGES, S. A., y ORDENA que se continúe con el trámite correspondiente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA MARQUEZ & PRECIADO, EN REPRESENTACIÓN DE IMPREVISTOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. ADMR-PM-037-2000, DE 31 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Marquez & Preciado, quien actúa en nombre y representación de la empresa Imprevistos, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. ADMR-PM-037-2000, fechada el 31 de agosto de 2000, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante la resolución impugnada consultable en copia autenticada a fojas 4 y 5 del expediente, la Autoriad Nacional del Ambiente dispuso mantener en todas sus partes la Resolución No. ADMR-027-2000, fechada el 26 de julio pasado, cuya copia consta de fojas 1 a 3 ibídem.

Considera la Magistrada Sustanciadora que la presente demanda no debe dársele curso porque la parte actora en su libelo de demanda impugnó únicamente el acto confirmatorio y no el originario, como así lo ha exigido reiterada jurisprudencia de esta Sala con base en la Ley orgánica de lo contencioso administrativo. El artículo 43 a), inciso segundo de la referida Ley, dispone lo siguiente:

> "Artículo 43 a) ...
> No será indispensable dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa; pero dichos actos quedarán sin valor alguno si se anula o reforma el acto impugnado".

A contrario sensu de la norma copiada, sí es indispensable dirigir contra el acto originario la demanda de plena jurisdicción intentada, o sea, debe atacarse aquél que decide por primera vez en la esfera administrativa la petición o reclamo del particular, sin perjuicio que si el Tribunal Contencioso Administrativo declara la nulidad del acto administrativo originario el o los actos simplemente confirmatorios pierdan toda validez y eficacia jurídica.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, no se dará curso a la demanda que carezca de algunas de las formalidades legales, entre las que está la señalada.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de plena jurisdicción interpuesta por Imprevistos, S. A., a través de apoderado judicial, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. ADMR-PM-037, de 31 de agosto de 2000, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR E LICENCIADO CARLOS ESPINOZA MITRE, EN REPRESENTACIÓN DE FRANKLIN SÁNCHEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 151, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 19999, DICTADO POR EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Espinoza Mitre, en su condición de apoderado judicial del señor Franklin Sánchez, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 151, de 22 de noviembre de 1999, dictado por el Ministro de Economía y Finanzas, y para que la Sala haga otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora pasa a revisar el escrito contentivo de la acción para el restablecimiento del derecho, a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos legales.

Este Despacho considera que la demanda en cuestión no debe ser admitida, ya que adolece de deficiencias que impiden darle el impulso correspondiente.

En primer término, el actor invoca como fundamento de derecho una norma de rango constitucional que estima violada. En efecto, se trata del artículo 70 de la Carta Fundamental, relativo al requisito de justa causa y cumplimiento de formalidades para despedir a un trabajador. Sobre el particular cabe decir que a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le compete el control de la legalidad de los actos administrativos, tal cual está previsto en el artículo 203, numeral 2, de la Constitución de la República y lo desarrolla la Ley, no el control de la constitucionalidad, atribuido a la Sala Plena de esta Corporación de Justicia. El Tribunal Contencioso Administratvo no puede por razones de competencia material conocer de la infracción de normas de jerarquía constitucional.

El segundo defecto consiste en que el accionante impugna el Decreto ya descrito (foja 11), pero omite aportar una copia autenticada del acto originario. El artículo 44 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que a la "demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".

Como tercera deficiencia, íntimamente vinculada a la anterior, quien demanda dejó de solicitar a la Sala que, antes de la admisión de la acción, requiriera a la autoridad emisora la referida copia con constancia de su notificación, en caso que hubiese hecho esa gestión en la esfera administrativa y se le hubiere negado, según el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

La pretermisión de estos tres (3) requisitos hacen inepta la demanda y consecuentemente impiden que se le imprima el curso normal, con base en el artículo 50 de la citada Ley.

En mérito de lo expuesto, la Suscrita Magistrada, en representación de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el señor Franklin Sánchez, por medio de apoderado judicial, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 151, de 22 de noviembre de 1999, emitido por el Ministro de Economía y Finanzas, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEXIS ARIEL ADAMES GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE ULPIANO VERGARA DÍAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 30, DE 22 DE JUNIO DE 2000, EMITIDA POR EL DIRECTOR DEL SISTEMA REGIONAL DE SALUD METROPOLITANA DEL MINISTERIO DE SALUD, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alexis Ariel Adames, actuando en nombre y representación de señor Ulpiano Vergara, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.30, de 22 de junio de 2000, emitida por el Director del Sistema Regional de Salud Metropolitana, del Ministerio de Salud, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Adjunto a la demanda, la parte actora insta a la Sala para que requiera de la autoridad demandada que certifique si existe o no resolución sobre el recurso de apelación interpuesto en la vía gubernativa contra el acto descrito en el párrafo anterior, porque le fue negada toda información al respecto.

A fojas 23 de los autos consta copia de un memorial suscrito por el abogado sustituto del demandante, que comunica a la autoridad demandada, entre otras cosas, el silencio incurrido por la Administración, y que demandarán en la esfera jurisdiccional contenciosa, porque a su juicio se ha agotado aquella esfera de competencia. Este memorial fue recibido el día 12 de octubre en la entidad oficial, según se observa al reverso de la foja antes mencionada.

A fojas 24 y 25, los abogados del recurrente piden a la autoridad competente que les haga saber si a la fecha de presentación del petitorio respectivo ocurrida el día 12 y 24 de octubre, respectivamente, se ha emitido decisión sobre el recurso de apelación promovido contra la Resolución No. 30, de 22 de junio de 2000, confirmada por medio de la No. 35, fechada el 18 de julio pasado.

A criterio de la Magistrada Sustanciadora, es dable acceder a la solicitud previa por cuanto el actor ha demostrado satisfactoriamente que gestionó ante la Administración la obtención de un pronunciamiento de la misma sobre si el recurso de apelación presentado fue o no resuelto, para así probar el silencio adminitrativo de su cargo, previsto en el numeral 1, artículo 36 de la Ley 135 de 1943, certificación que no obtuvo.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda, dispone que por Secretaría se requiera al Director General de Salud del Ministerio de Salud que en el término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, certifique a la Sala si ha decidido el recurso de apelación interpuesto por el señor Ulpiano Vergara mediante apoderado judicial, el día 10 de agosto último (foja 22), contra la Resolución No. 30, de 22 de junio de 2000, comfirmada por la No. 35, de 18 de julio del mismo año, ambas proferidas por el Director del Sistema Regional de Salud Metropolitana.

En caso afirmativo, debe remitir copia autenticada del acto administrativo emitido con constancia de su notificación.

Notifiquese y Cúmplase

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSE FUNG, EN REPRESENTACION DE FRANCISCO CORREA MELAIS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN DE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIAS Y DROGAS DEL MINISTERIO DE SALUD, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado JOSE H. FUNG, actuando en nombre y representación del señor FRANCISCO CORREA MELAIS, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la orden impartida por la Jefa de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, que alegadamente limita el ejercicio de regente farmacéutico, al licenciado Correa.

Una vez recibida la demanda, la suscrita adviertió que el actor no había especificado, qué resolución, nota o instrumento, contenía la actuación demandada. Sin embargo, por encontrarse el libelo acompañado de una petición especial, en la que se solicitaba la autenticación de una serie de documentos relacionados con el asunto debatido, se accedió a lo pedido, requiriéndose a la Jefa del Departamento de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, que remitiese dicha documentación, a fin de determinar con certeza, la viabilidad o no, de la acción interpuesta.

Adjuntado lo solicitado, se ha podido precisar que la actuación demandada recae principalmente en:

1. la Nota 279/FD/CNSF de 22 de marzo de 2000, dirigida por la Jefa del Departamento de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud a Laboratorios Sar S. A., objetando la licencia de operación solicitada, entre otras razones, porque el licenciado Francisco Correa, designado por la empresa como su Regente, tenía compromisos de regencia farmacéutica con la Corporación Impa Doel S. A., en horario completo, razón por la cual estaba imposibilitado para ejercer la misma regencia en el Laboratorio Sar S. A., a tenor de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 24 de 1963; y
2. la Nota 478FD/CNSF de 14 de junio de 2000, expedida por la misma autoridad, como contestación al licenciado FRANCISCO CORREA, en la que se confirmaba el criterio contenido en la nota de 22 de marzo de 2000, en el sentido de que un farmaceuta no puede regentar, en un mismo horario, dos o más establecimientos farmacéuticos.

Al momento de acopiarse esta información, y encontrándose el negocio pendiente de decidir sobre su admisibilidad, se detecta que el actor ha presentado una solicitud especial, con el fin de que sean suspendidos provisionalmente, los efectos de los actos impugnados.

Sin embargo, por razones de economía procesal, la suscrita procede en primer término, a deslindar la viabilidad de la acción presentada.

Para ello, es preciso adelantar que conforme a la documentación aportada

por la autoridad demandada, este proceso tiene su origen en una solicitud de licencia de operación presentada por Laboratorios Sar S. A., ante el Departamento de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. Para obtener la licencia de operación se exige, entre otros requisitos, el señalamiento del nombre y el horario del regente farmacéutico, persona que según la Ley y los reglementos respectivos, asume la Dirección Técnica y responsabilidad profesional, moral y penal de cualquier establecimiento farmacéutico (Art. 15 de la Ley 24 de 1963).

La misma Ley, en sus artículos 19 y 20 ha establecido, que el cargo de regente de un establecimiento farmacéutico es incompatible con cualquier empleo que necesite para su desempeño, las mismas horas señaladas para la regencia.

Siendo que quien aparecía designado para la regencia de Laboratorios Sar S. A., esto es, el licenciado FRANCISCO CORREA, también aparecía registrado como Regente Farmacéutico de la empresa IMPA-DOEL S. A. en el mismo horario, la Jefa de Farmacia y Drogas no otorgó la licencia de operaciones, e informó a Laboratorios Sar, que FRANCISCO CORREA se encontraba inhabilitado par ejercer la regencia en dicho establecimiento, por lo que debía realizarse la corrección respectiva en la solicitud de licencia. (Nota de 22 de marzo de 2000).

Por solicitud del licenciado CORREA, también a se le explicó a éste, en la nota de 14 de junio de 2000, que los compromisos de regencia tienen un horario establecido que debe ser cumplido, y que la Ley 24 de 1963 era clara, en cuanto a la imposibilidad de ejercer más de una regencia, en el mismo horario.

El actor sostiene ante este Tribunal, que las notas comentadas violan los derechos del señor CORREA, al limitarlo en el ejercicio de su profesión. Sin embargo, al ponderar la documentación que acompaña esta demanda, quien suscribe arriba a la conclusión de que los actos impugnados, no constituyen actos violatorios de los derechos subjetivos del recurrente.

En efecto, las constancias de autos indican, que el primer afectado por la decisión asumida por el Ministerio de Salud, en las notas impugnadas, es la empresa LABORATORIOS SAR S. A., a quien le fueron devueltos, sin ser aprobados, los documentos relativos a la solicitud de licencia de operación.

Ciertamente, la interpretación de la Ley 24 de 1963, aplicada por la Jefa de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud a Laboratorios Sar S. A., podría tener efectos sobre la situación laboral del actor. No obstante, insistimos en que no consta en este proceso, que contra el prenombrado se haya expedido un acto administrativo individual y concreto, por parte del Ministerio de Salud, que viole sus derechos subjetivos, o que limite su ejercicio como farmaceuta, legitimándolo para interponer la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción.

Obsérvese que en la correspondencia intercambiada entre la autoridad de Farmacia y Drogas y FRANCISCO CORREA, aquella entidad se limitó en advertirle, que de realizar más de una regencia, aunque fuese en forma pasiva, podía ser denunciado ante el Comité de Etica del Colegio Nacional de Farmacéuticos para que éste, le impusiera una sanción.

Por ende, al constatarse que los actos impugnados no contienen una afectación personal a los derechos subjetivos del actor, la demanda presentada no puede ser admitida, toda vez que entre los presupuestos legales establecidos para la viabilidad de las acciones de plena jurisdicción se encuentra, el de establecer la existencia de un derecho subjetivo violado, con la solicitud expresa de que dicho derecho, sea restablecido.

En el petitum no se ha solicitado el restablecimiento de derecho alguno, y ello obedece por lógica, a que las autoridades administrativas de salud no han expedido ningún acto individual, contra el señor CORREA. En todo caso, si Laboratorios Sar S. A., asumiera alguna postura laboral en relación a la regencia de FRANCISCO CORREA para la empresa, tal decisión no es de naturaleza

administrativa, y por tanto, no es ventilable ante la Sala Tercera de la Corte.

Se concluye, con mérito a lo expuesto, que la demanda incoada no puede recibir curso legal, tal como ha dispuesto el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado JOSE FUNG, en representación de FRANCISCO CORREA.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ M. LEZCANO EN REPRESENTACIÓN DE OLMEDO CARRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 005-98 DE 8 DE JULIO DE 1998, DICTADA POR LA ADMINISTRADORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. José Lezcano, actuando en representación de OLMEDO CARRERA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare que es nulo por ilegal, el Resuelto N°005-98 de 8 de julio de 1998, dictada por la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto impugnado se resuelve ordenar la destitución del Ing. Olmedo Carrera, con cédula de identidad personal N° 4-103-2543, Seguro Social N°243-3890, con el número de empleado 10129 y salario mensual de B/.1,150.00.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nulo por ilegal, el Resuelto N° 005-98 de 8 de julio de 1998, dictada por la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente y el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° A.G. N° 0018-98 de 2 de octubre de 1998, expedido por la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita se ordene el reintegro del señor Olmedo Carrera en el cargo de Ingeniero I, que mantenía en la Autoridad Nacional del Ambiente.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se sostiene que al dictarse el Resuelto de Personal N°005-98 de 8 de julio de 1998, no se siguió el debido proceso consagrado en el Reglamento Interno de la institución, situación que se mantuvo con la expedición del acto confirmatorio.

Como disposiciones legales alegadas como infringidas, figuran los artículos 30 y 37 del Reglamento Interno de la Autoridad Nacional del Ambiente que en su texto expresan:

> "ARTICULO 30: Toda medida que sea aplicada deberá ser discutida con el subalterno y una vez decidida la misma se hará constar por escrito en el respectivo expediente personal del funcionario."

"ARTICULO 37: La medida de despido estará basada en las causas justificadas señaladas en el artículo 28 o en la reincidencia a las indicadas en los artículos 24 y 25."

Para sustentar las violaciones alegadas, el Lcdo. José M. Lezcano expone, en cuanto al artículo 30 del Reglamento Interno, que la violación es directa en la medida que nunca se aplicó al no discutirse con el señor Olmedo Carrera la medida o sanción a él aplicada. Con respecto al artículo 38 del Reglamento Interno, se afirma que la violación es por comisión, puesto que las causales de despido que se utilizaron para destituir a su mandante nunca fueron probadas ni se le dio oportunidad de defenderse.

II. El informe explicativo de conducta expedido por la Administradora Regional del Ambiente y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota Nª AG 1259-98 de 26 de noviembre de 1998, la Administradora General del Ambiente, rindió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 14 a 16 del expediente. En el informe más bien se efectúa una reseña cronológica del caso del Ingeniero Olmedo Carrera, entre lo que se destaca, que previo a la expedición del acto que se demanda, el Ing. Olmedo Carrera fue objeto de sanciones administrativas, como suspensión sin derecho a goce de salario por tres (3) días y traslado, en relación al uso de un vehículo asignado a la agencia de Volcán fuera de las horas laborables. También se señala que se pudo comprobar, que el Ingeniero Olmedo Carrera propició publicaciones en los diarios que hacían mucho daño a la imagen y labor Regional, aunado a que fueron detectados otros elementos que según la Asesora Legal, "son desestabilizadores", tales como que quemó una parcela de pino sin autorización, no presentaba los informes mensuales requeridos, no llevaba registro de asistencia, no acataba órdenes entre otras.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N°07 de 8 de enero de 1999, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. Según la Procuradora de la Administración, dentro del expediente existen suficientes elementos fácticos y jurídicos que fundamentaron la actuación de la Administración, por lo que la destitución se ajusta a las normas contenidas al ordenamiento jurídico aplicable al caso bajo examen.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales y luego de analizar las violaciones alegadas y los argumentos que la sustentan, la Sala procede a resolver la presente controversia.

Como se expuso en líneas precedentes, el acto demandado es el Resuelto N°N°005-98 de 8 de julio de 1998, dictado por la Administradora Regional del Ambiente. Entre las consideraciones señaladas para la expedición del acto que se demanda, se aprecia que se le inculca al Ingeniero Olmedo Carrera problemas disciplinarios y en forma reincidente, conducta que se considera como causal justificada para su destitución, razón por la que se le aplica lo previsto en los artículos 24 numeral 2, 25 numeral 11, 28 numeral 10, 13 y 16 y el artículo 37 del Reglamento Interno Disciplinario de 22 de enero de 1992.

Para resolver, la Sala reitera que cuando se demanda la restitución de un funcionario público, tiene que invocarse la norma que garantiza la estabilidad en dicho cargo y a la cual quién expidió el acto violentó con su actuación. Al examinar la violación alegada y los argumentos que la sustentan, la Sala concluye que no le asiste la razón a quien recurre, toda vez que no demuestra en el proceso, que al momento de su destitución estuviese amparado por estabilidad en el cargo sujeta a una Ley especial. También se ha manifestado que el acto mediante el cual se nombra a un funcionario público, es un acto condición que puede ser modificado unilataralmente por el Estado, salvo que la Constitución o la Ley disponga otra cosa. Así, nuestro ordenamiento jurídico establece dos limitaciones a ese principio de movilidad de los servidores públicos, que son

cuando el funcionario sea empleado de carrera o nombrado por período fijo con estabilidad expresamente prevista en la Ley o en la Constitución, limitaciones éstas que no se prueban en el proceso.

Se observa que la parte actora fundamenta la violación que alega en lo previsto en normas reglamentarias y, en cuanto a su alcance, la Sala ha sostenido que no puede un reglamento interno, con jerarquía inferior a una Ley, conceder estabilidad a los servidores públicos, como en este caso se pretende; lo anterior tiene claro fundamento en el artículo 297 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Resuelto N° 005-98 de 8 de julio de 1998, dictada por la Administradora General de la Autoridad Nacional del Ambiente, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MAYRA ESTHER LEZCANO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO ENRIQUE CARABALLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 2342-97 DNP DE 30 DE MAYO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Mayra Esther Lezcano, actuando en representación de MARIO ENRIQUE CARABALLO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declara nula por ilegal, la Resolución N° 2342-97 DNP de 30 de mayo de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto administrativo demandado se resuelve destituir por conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasiona perjuicio al funcionamiento y prestigio de la Institución, al Lcdo. Mario Caraballo, del cargo de Farmacéutico en la Policlínica "Manuel María Valdés" de San Miguelito.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 2342-97 DNP de 30 de mayo de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social. Se solicita se declare la nulidad de la Resolución N°2342-97 DNP de 30 de mayo de 1997, proferida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, que notifica a su mandante de la acción de personal, como también se solicita se declare la nulidad de los actos confirmatorios contenidos en la Resolución N° 3672-97DNP de 2 de septiembre de 1997, proferida por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 15,754-98-J.D expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social que confirma en todas sus partes el acto originario.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, el representante de la parte actora señala que MARIO ENRIQUE CARABALLO, fue nombrado por la Caja de Seguro Social como funcionario a tiempo completo en la Policlínica Manuel

María Valdez del Distrito de San Miguelito, a partir del primero de diciembre de 1982, como Farmacéutico. A su criterio, como funcionario de la Caja de Seguro Social gozaba de estabilidad, por lo que para ser destituido de su cargo debía ser por causa debidamente establecida en la Ley y mediante la evacuación de la investigación correspondiente por parte del departamento de personal como plena garantía de la defensa de su mandante. También señala que el informe presentado por el Agente de Seguridad José Vega, presentado ante el Sub-Administrador de la Policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito, no se ajusta a la realidad de los hechos.

Como disposiciones legales que se alegan infringidas, figuran los artículos 47 literal e) y 65) literales c), d) y e) del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social que su texto señalan:

"ARTICULO 47: Se decretará la destitución de un servidor público.
a...
...
e) Por conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasiones perjuicio al funcionamiento o prestigio de la Institución."

"ARTICULO 65: Las sanciones instituidas en el artículo anterior serán aplicadas en la siguiente forma:

a. La amonestación oral será aplicada al servidor público que incurra en una falta que a juicio de su inmediato superior, amerite dicha sanción. Esta la aplicará al jefe inmediato en privado y deberá dejar constancia de la misma en el expediente del servidor público sancionado.

b. La censura escrito será aplicada por el jefe inmediato del sancionado, cuando éste reincida en faltas que ameriten amonestación verbal.

c. Las multas serán aplicadas a través de comunicación escrita, de acuerdo con las pruebas recibidas y lo señalado en el presente Reglamento, por el Director General o el Ministro de Salud, según sea el caso.

d. La suspensión del cargo, sin derecho a sueldo, será aplicada por el Director General o el Ministerio de Salud, a solicitud del jefe inmediato, cuando el servidor público incurra en una falta de mayor gravedad que las que ameriten sanción de multa, previa comprobación de dicha falta.

e. La destitución del cargo sólo será aplicada por el Director General o Ministro de Salud en los casos de faltas graves, debidamente comprobadas que la justifiquen.

Las penas de suspensión y destitución del cargo serán adoptadas mediante resolución, en cuya parte motiva se consignarán las razones que las fundamentan.

Queda inhabilitado para volver a trabajar en la Caja el que haya sido destituido de la Institución por peculado, abandono del cargo, robo, hurto, falsedad, infidencia o negligencia comprobada.

Parágrafo: La investigación de las faltas que ameriten la aplicación de suspensión y destitución del cargo serán instruidas por el Departamento de Personal, el cual una vez agotada la investigación, la remitirá al funcionario que deba aplicarla. Dicho Departamento podrá absolver las consultas sobre la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento."

Para sustentar la violación que la parte actora alega al literal e) del artículo 47 del Reglamento Interno de la Caja de Seguro Social, se sostiene que se aplicó indebidamente, pues, la falta cometida por su representado no implica por sí misma una conducta que realmente conlleve el entorpecimiento de las funciones de la Policlínica Manuel María Valdés o el prestigio de la misma. Según la Lcda. Mayra Esther Lezcano, los motivos que llevaron a su mandante a la entrega de los medicamentos sin rotular, claramente demuestra que su mandante lo hizo por un gesto de humanidad con su hermano y bajo ninguna circunstancia debía acarrearle la destitución de su cargo.

En cuanto a la violación que se alega a los literales c), d) del artículo 65 del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, se afirma que fue por omisión, toda vez era más justo y cónsono con la gravedad de la falta administrativa por él cometida, que se le aplicara una sanción de multa o de suspensión del cargo sin goce de salario. De ello también se alega la violación por indebida aplicación del literal e) de la misma disposición legal, que prevé la máxima sanción que contempla el reglamento, para faltas gravísimas como peculado, abandono del cargo, robo, hurto, falsedad, infidencia o negligencia comprobada, conductas que no fueron cometidas por su representado.

II. El informe explicativo de conducta rendido por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante nota fechada el 21 de julio de 1998, la Directora General de la Caja de Seguro Social, rindió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 82 a 85 del expediente. En el informe la Directora expuso razones de hecho y de derecho que conllevaron a imponer la sanción de destitución al Lcdo. Mario Enrique Caraballo de su cargo como Farmacéutico en la Policlínica "Manuel María Valdés" de San Miguelito. Según la Dra. María E. Morales, previo a la sanción impuesta, se efectuó una investigación sobre la conducta del Lcdo. Morales, luego de los informes rendidos por el Lcdo. Juan Cedeño, Director Administrativo y Juan Rodríguez, Farmacéutico Jefe, al reportarse por parte del Agente de Seguridad, señor José Vega, la falta de ser responsable de entregar medicamentos sin prescripción médica y sin estar debidamente rotulados. Por ello, en uso de las facultades legales que confiere el artículo 22 literal e) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el artículo 47 literal e) del Reglamento Interno de Personal, la Caja de Seguro Social procedió, mediante la Resolución N° 2342-97-DNP de 30 de mayo de 1997, destituir al funcionario de su cargo, dada la gravedad de la falta consistente en conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasiona perjuicio al funcionamiento o prestigio de la Institución.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 361 de 14 de septiembre de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A su criterio, el actuar del Lcdo. Caraballo en el manejo de los medicamentos de la farmacia de la Policlínica María Valdés. detectada por el seguridad de la Institución, se encuadra en la "conducta incorrecta" que prevé el artículo 47 del Reglamento Interno, y, la Directora General de la Caja de Seguro Social actuó de conformidad con lo que prevé el artículo 22 del Decreto Ley N°14 de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social, sobre las atribuciones y deberes de ese funcionario.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demando es la Resolución N° 2342-97 DNP de 30 de mayo de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social mediante la cual se resuelve destituir por conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasiona perjuicio al funcionamiento y prestigio de la Institución, al Lcdo. Mario Caraballo en el cargo que ocupa de Farmacéutico en la Policlínica Manuel María Valdés en San Miguelito. Entre las consideraciones expuestas para la expedición

del acto que se demanda, figura que al Lcdo. Mario Caraballo se le reportó la falta de ser responsable de entregar medicamentos sin prescripción médica sin ser debidamente rotuladas, razón por la que se procedió a la investigación respectiva. También se señala que el Lic. Caraballo aceptó la responsabilidad de los hechos, pero que lo había hecho por un hermano enfermo, todo lo cual, según la Administración, demuestra que la falta en que incurrió el Lcdo. Mario Caraballo, se circunscribe en una "conducta desordenada e incorrecta u omisión que ocasiona perjuicio al funcionamiento y prestigio de la Institución".

La parte actora alega por su parte, que no se surtió el debido procedimiento toda vez que la sanción impuesta no se ajusta a la falta cometida, mas sí se ajustaba a multa o suspensión del cargo.

Es oportuno señalar, que cuando se demanda la restitución de un funcionario público, tiene que invocarse la norma que garantiza la estabilidad en dicho cargo y a la cual quien expidió el acto violentó con su actuación, lo cual no consta en este proceso. Esta Sala ha manifestado que el acto mediante el cual se nombra a un funcionario público, es un acto condición que puede ser modificado unilateralmente por el Estado, salvo que la Constitución o la Ley disponga otra cosa. El principio de movilidad en nuestro ordenamiento jurídico establece dos limitaciones que son cuando el funcionario sea empleado de carrera o nombrado por período fijo con estabilidad expresamente prevista en la Ley o en la Constitución, limitaciones que tampoco se prueban en el proceso.

Al analizar las violaciones alegadas, se observa que la parte actora la fundamenta en normas reglamentarias, y, en cuanto a su alcance, la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que no puede un reglamento interno, con jerarquía inferior a una Ley, conceder estabilidad a los servidores público, como en este caso se pretende. Ello tiene claro fundamento en lo previsto en el artículo 297 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 2342-97 DNP de 30 de mayo de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY EN REPRESENTACIÓN DE GRISELDA DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°26-98 R. DE C. DE 19 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N°3, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Francisco Lay, actuando en representación de GRISELDA DE HERRERA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declara nula, por ilegal, la Resolución N° 26-98 R. de C. de 19 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N°3, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve negar la rescisión de Contrato de Arrendamiento presentada por el Lcdo. Francisco Lay apoderado legal de GRISELDA PEREZ DE HERRERA, contra JOAQUIN MEIS, arrendatario del apartamento N°2, de Edificio N°12, ubicado en Vía Brasil, Corregimiento de Bella Vista.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N°26-98 R. de C., del 19 de mayo de 1998, proferida por la Comisión de vivienda N°3 del Ministerio de Vivienda. También se solicita la nulidad de la Resolución N°50-98 de 26 de agosto de 1998, proferida por la Dirección General de Arrendamientos, la cual confirmó en todas sus partes la Resolución N°26-90 R. de C., de 19 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N°3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita a la Sala declare que "se rescinde", "queda rescindido", "se resuelve" o "queda resuelto", el contrato de arrendamiento número V/N° 000676, firmado el 25 de abril de 1974, entre Sebastián Sastre C. y el señor Joaquín Meis., referente al apartamento N°2, del Edificio N°32, situado en Vía Brasil, Corregimiento de Bella Vista; y, además, se ordene a la Corregiduría de Bella Vista para que haga desalojar, mediante lanzamiento y por la fuerza, si fuere necesario, al señor JOAQUIN A. MEIS del apartamento descrito.

Entre los hechos que se plantean en la demanda, quien representa a la parte demandante sostiene que la señora Griselda de Herrera, en su condición de propietaria del Edificio N°32, PENINA S. A., solicitó la resolución (rescisión) del contrato de arrendamiento N° 000676, firmado el 25 de abril de 1974, entre SEBASTIAN SASTRE., en su condición de Administrador, y el señor JOAQUIN A. MEIS., como arrendatario, basándose en que la prórroga había vencido y que el arrendatario no estaba al día en el pago del canon de arrendamiento y que por tanto había incumplido esa obligación, al 20 de febrero de 1998, fecha en que venció la prórroga. Según el demandante, la Resolución N°26-98 R. de C., de 19 de mayo de 1998, emitida por la Comisión de Vivienda N°3, negó la solicitud de resolución del contrato, fundamentándose, según lo que prevé el artículo 9 de la Ley 93 de 1973, en el hecho de que el arrendatario había consignado los canones adeudados antes del veinte (20) de febrero de 1998, no obstante a su criterio, la disposición en referencia no se examinó íntegramente. Según el Lcdo. Lay, los actos demandados deben declararse nulos, pues, no se demuestra en el proceso de resolución del contrato de arrendamiento que el arrendador se rehusó a recibir el canon de arrendamiento y porque el proceso de pago por consignación, que fue la vía que escogió el arrendatario, no se demuestra su conclusión.

Como disposiciones legales infringidas, se aducen el artículo 9 de la Ley 93 de 1973; el artículo 1066 del Código Civil; el artículo 1476 del Código Judicial; y el artículo 18 del Decreto Ejecutivo N°87 de 28 de septiembre de 1993 que son del siguiente tenor literal:

> "ARTICULO 9: Ningún contrato de arrendamiento o la prórroga de él, podrá celebrarse por un término menor de tres (3) años; el arrendatario tendrá derecho a que se le prorrogue por igual término, en caso de que al vencerse el contrato estuviera al día en sus pagos. Si el arrendador rehusarse recibir el importe del canon de arrendamiento, el arrendatario podrá depositarlo en la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda. La constancia correspondiente que se le expida acreditará haber verificado sus pagos y para todos los efectos legales se entenderá prorogado el contrato."
>
> "ARTICULO 1066: Hecha debidamente la consignación y declarada procedente, el tribunal mandará cancelar la obligación.
> Mientras el acreedor no hubiere aceptado la consignación o no hubiere recaído la declaratoria judicial de que está bien hecha, podrá el deudor retirar la cosa o cantidad consignada, dejando subsistente la obligación."

"ARTICULO 1476: Si el acreedor rehusare aceptar el pago y no hubiere necesidad de aducir pruebas, se fallará dentro de tres días. Si hubiere hechos que acreditar, se abrirá a pruebas y de ahí en adelante se seguirá el trámite del proceso abreviado.
Si el acreedor no contestare el traslado en el término que se le conceda, se aceptará la consignación, se declarará extinguida la deuda y se dispondrá que se entregue la cosa al acreedor cuando quiera recibirla."

"ARTICULO 18: Vencido el término de contestación de la demanda el funcionario instructor citará a las partes a una audiencia oral en un plazo no mayor de cinco (5) días en el cual las partes deberán aducir y presentar las pruebas que estimen convenientes para probar sus afirmaciones."

Según el Lcdo. Lay, el artículo 9 de la Ley 93 de 1973, se interpretó en sentido contrario, pues, al expedirse la Resolución atacada, aún no se había decidido si el pago por consignación, que fue la vía escogida por el arrendatario, correspondía a los meses que éste último afirma haber depositado y si la Administración del edificio donde reside el arrendatario tenía el derecho a recibir ese importe. A su criterio, al negarse la solicitud de resolución de contrato se aplicó solamente una parte de esa disposición, es decir, lo referente a que el arrendador se rehusó a recibir el importe del canon de arrendamiento y nada se dijo en ese sentido.

En cuanto a la violación al artículo 1066 del Código Civil, se argumenta que fue por omisión, dado que claramente indica que tiene que existir una declaración procedente para que se entienda verificado el pago. A su criterio, el propio Ministerio de Vivienda entiende que la sola consignación no prorroga automáticamente el contrato, dado que notifica al acreedor de la consignación para que conste si acepta o no pago, luego realiza una audiencia y después se expide una resolución.

El artículo 1476 del Código Judicial, según el representante de la parte actora, se violó directamente por omisión, puesto que señala un trámite para los pagos por consignación que de haberse apegado a él, la Resolución indicada habría concedido su solicitud.

Finalmente, se alega la violación al artículo 18 del Decreto Ejecutivo N°87 de 28 de septiembre de 1993, ya que incluido el trámite de pago por consignación, la Resolución impugnada obvió la aplicación de la misma al no considerar que el pago por consignación amerita un trámite para definir la licitud de pago y a quién corresponde, mediante el fallo respectivo.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Presidente de la Comisión de Vivienda N°3 y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° /C00-22-99 de 22 de enero de 1999, el Presidente de la Comisión de Vivienda N°3, expidió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible a fojas 18 y 19 del expediente. El Presidente de la Comisión de Vivienda N°3 destaca en su informe, que el 26 de febrero de 1998, PENINA S. A., interpuso ante la Comisión de Vivienda en turno, demanda de rescisión de contrato de arrendamiento contra Joaquín Meis, arrendatario del Apartamento N°2, Casa N°32, ubicado en Vía Brasil, Corregimiento de Bella Vista. Según el Presidente de la Comisión de Vivienda N°3, días antes de interponer la demanda, el arrendatario consignó los canones de arrendamientos adeudados, por ende tenía derecho a la prórroga automática señalada en el artículo 9 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 162 de 15 de abril de 1999, visible de fojas 20 a 31 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. Según la Procuradora de la Administración, el

señor Joaquín Meis se encontraba paz y salvo en el pago del canon de arrendamiento cuando el apoderado judicial de Griselda de Herrera presentó el día 26 de febrero de 1998, su demanda de rescisión de contrato, puesto que el señor Meis concurrió el 20 de febrero de 1998 ante la Comisión de Vivienda N°3 del Ministerio de Vivienda para efectuar el pago de canon de arrendamiento a través de una consignación. Según su criterio, el presente proceso es un proceso distinto, que surgió paralelamente con el de pago por consignación, por lo que al presentar la parte actora, a través de apoderado judicial, una demanda de rescisión de contrato ante la Comisión de Vivienda N°4, era procedente que ésta iniciara el proceso en forma independiente, ya que si bien el pago por consignación guardaba estrecha relación con la misma, no se puede obviar que fue presentada ante otro Tribunal, es decir, la Comisión de Vivienda N°3.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales de rigor, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto demandado es la Resolución N°26-98 de C. de 19 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N°3, en la que se resuelve negar la rescisión de contrato de arrendamiento, presentada por el Lcdo. Francisco Lay, apoderado legal de BRISEIDA PEREZ DE HERRERA, contra JOAQUIN MEIS, arrendatario del apartamento N°2 del Edificio N°12, ubicado en Vía Brasil, Corregimiento de Bella Vista. La parte actora demanda la nulidad del acto en referencia y para ello argumenta que en el proceso de rescisión de contrato de arrendamiento, no se demostró que el arrendador se rehusó a recibir el canon de arrendamiento, aunado a que la constancia de depósito no constituye prórroga automática del contrato, hasta que no se concluya el proceso de pago por consignación y se demuestre que el arrendado se rehusó a recibir el importe del canon de arrendamiento.

Para resolver es oportuno manifestar a manera de antecedente, que según consta en autos el señor Joaquín Meis, suscribió el 20 de febrero de 1974, el Contrato de Arrendamiento N° 000676, por un período de tres años con el señor Sebastián Sastre, sobre el apartamento N°2 de la Casa N°32, ubicado en Vía Brasil, San Francisco, con un canon de arrendamiento de B/.125.00. Dentro de las piezas procesales acopiadas en el expediente, se aprecia que el apoderado judicial de la parte demandante interpuso demanda de Rescisión de Contrato contra el señor Joaquín Meis, misma que fue admitida y se expidió boleta de citación para el señor Meis, para que compareciera ante las oficinas del Ministerio de Vivienda. El señor Joaquín Meis, mediante apoderado judicial, contestó la demanda, formuló sus descargos y aportó pruebas entre ellas, recibos de pago correspondientes al mes de diciembre de 1997 y enero de 1998 y copia de la Nota N°7C00-79-98 de 20 de febrero de 1998, emitida por la Presidenta de la Comisión de Vivienda N°3, la cual hace constar que el Lcdo. Pedro Meilan consignó la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) en concepto de pago de canon de arrendamiento del apartamento N°2 del Edificio N° 32, a favor del señor Meis (Véase fojas 8, 9, 14 y 16 del expediente administrativo).

Es evidente que estamos ante dos procesos distintos, el de pago por consignación y el de rescisión de contrato de arrendamiento, presentados ante la Comisión de Vivienda N°3 el 20 de febrero de 1998 y la Comisión de Vivienda N°4 de turno el 26 febrero de 1998 respectivamente. Ante la situación planteada y al examinar el resto de la documentación acopiada en el expediente, la Sala concluye que la actuación de la Comisión de Vivienda N°3 se ajustó a derecho, puesto que no se demuestra en el proceso que el señor Meis incumpiló alguna de las cláusulas del contrato, y, en cuanto a la mora en el pago de los canones de arrendamiento que se alega en la solicitud de rescisión de contrato de arrendamiento, sí consta en el expediente que dichos canones fueron consignados en el Ministerio de Vivienda antes que se venciera el plazo para que operara la misma y antes que se formulara la solicitud en cuestión, razón por la que carece de fundamento. Según el expediente, el señor Joaquín Meis se encontraba, pues, para los efectos de la solicitud de rescisión de contrato bajo examen, paz y salvo en el canon de arrendamiento. No obstante, ello es sin perjuicio que luego de surtido el proceso

de pago por consignación, se demuestre lo contrario y se configure entonces la falta de cumplimiento del contrato por mora en el pago del canon de arrendamiento.

Por lo expuesto, la Sala es del criterio que no se demuestran las violaciones alegadas, razón por la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones que se formulan en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N°26-98 R. de C de 19 de mayo de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N°3, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LCDA. NIVIA A. ABREGO, EN REPRESENTACIÓN DE IDALDO A. ATENCIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL RESUELTO N°454 DE 15 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Nivia A. Abrego, actuando en representación de IDALDO A. ATENCIO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N°454 de 15 de mayo de 1998, dictado por el Ministro de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve negar la solicitud de pago de salarios dejados de percibir formulada por el educador IDALDO A. ATENCIO, con cédula N°. 6-41-1809.

I. La pretensión y su fundamento

En la demanda se formula pretensión consistente para que la Sala Tercera declare que es nulo por ilegal el acto administrativo contenido en el Resuelto N°454 de 15 de mayo de 1998, suscrito por el Ministro de Educación y el Vice Ministro de Educación. Como consecuencia de la declaración anterior, se solicita se declare al Ministerio de Educación obligado y se le condene a pagar a IDALDO A. ATENCIO BOSQUEZ, todos los salarios dejados de percibir desde el 1° de abril de 1991, fecha en que fue separado de su cargo, hasta el 30 de junio de 1998, fecha en que se reintegró a sus labores por determinación del Ministerio de Educación, así como el pago de décimo tercer mes y ajustes salariales a que haya lugar, restableciéndose así el derecho subjetivo lesionado.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se señala lo siguiente:

> "PRIMERO: El señor IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO BOSQUES obtuvo el título de maestro de enseñanza primaria en el año 1982 de manera permanente, nombrado como maestro de grado con funciones en la Escuela de El Barrigón de Las Palmas, Provincia de Veraguas. Se

desempeñó como maestro de grado en la Escuela de Las Palmas de Las Minas hasta el 1° de abril de 1991 cuando fue injustamente suspendido.

SEGUNDO: Mediante Resolución N°1 de 17 de mayo de 1995, la Dirección Regional de Educación de Herrera ordenó el traslado por sanción del maestro IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO BOSQUEZ, ante acusaciones que se le formulaban en el sentido de que mantuvo relaciones sexuales clandestinas con la menor GLADYS MARIELA MENDOZA PIMENTEL, quien era estudiante bajo su responsabilidad como maestro de primera enseñanza. Dicha resolución, al ser sometida a la aprobación de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Enseñanza, fue devuelta para que se enderezara en debida forma, al advertirse que la sanción impuesta no era congruente con los cargos formulados.

TERCERO: Reasumido el conocimiento del asunto, mediante Resolución N°2 de 18 de agosto de 1995, la Dirección Regional de Educación de Herrera solicitó la destitución del maestro ATENCIO BOSQUEZ al estimar que la falta disciplinaria que se le imputaba estaba debidamente comprobada. Esto, a pesar de que la propia Resolución hacía referencia a que el maestro fue ABSUELTO de los cargos que se le formulaban ante la jurisdicción penal por el delito de abusos sexual en perjuicio de la menor GLADYS MARIELA MENDOZA PIMENTEL, mediante Sentencia de 27 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la Provincia de Herrera, Ramo Penal, pues a juicio de la mencionada Dirección Regional, la decisión del Juez Penal no condicionaba el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria.

CUARTO: Que mediante Resolución N°2 de 15 de febrero de 1996, la Dirección Nacional de Primer Nivel de Enseñanza, confirmó la decisión de la Dirección Regional de Educación de Herrera.

QUINTO: Que al resolver recurso de revisión contra la Resolución N° 2 de 15 de febrero de 1996 de la Dirección Nacional de Primer Nivel de Enseñanza, el Ministro de Educación, mediante Resuelto N°353 de 1 de mayo de 1998, la REVOCO y ordenó el REINTEGRO del educador IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO BOSQUEZ así como el archivo del expediente disciplinario, al considerar que el artículo 138 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, imponía el deber para la Dirección Regional de Educación de Herrera de suspender la causa disciplinaria y acogerse al fallo de la jurisdicción penal ordinaria en la cual se absolvió al educador de todos los cargos formulados.

SEXTO: Que con base en la Resolución que ordenó su reintegro, el educador ATENCIO BOSQUEZ formuló ante el Ministro de Educación, solicitud de pago de los salarios dejados de percibir durante el período en que estuvo ilegalmente separado de su cargo como funcionario de dicho Ministerio.

SEPTIMO: Que mediante Resuelto N°454 de 15 de mayo de 1998, el Ministro negó dicha solicitud alegando que su Despacho "se acoge al criterio vertido, por la Procuradora de la Administración, mediante Nota N°129 de 24 de mayo de 1991, en cuya parte pertinente expuso que no es procedente mediante la llamada "Revisión" contemplada en los Artículos 136 y 139 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, el pago de los salarios caídos a educadores despedidos, ya que la vía idónea para el reclamo y el pago de los mismos, es a través de una demanda y condena ante los Tribunales Ordinarios, tal y como lo establece el Artículo 142 de la precitada ley y que el Ministerio de Educación sólo está facultado para ordenar administrativamente el pago de salarios caídos a educadores despedidos, cuando el tribunal competente dicte fallo definitivo favorable, ordenando al demandado

el pago de la indemnización por el despido injustificado", ignorando el mencionado Resuelto que el escrito presentado por el apoderado judicial de mi mandante era una Solicitud de pago de salarios dejados de percibir y no un Recurso de Revisión, al tenor de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 47 de 1946.
OCTAVO: El maestro IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO BOSQUEZ fue injustamente separado de su cargo por más de siete (7) largos años, privándosele del derecho de ejercer su profesión y cargo, lo que le causó múltiples y graves problemas de orden social, económico, familiar y moral.
NOVENO: El educador ATENCIO BOSQUEZ fue separado injusta e ilegalmente de su cargo, pues se demostró en la justicia ordinaria que no le cabía responsabilidad penal alguna por el delito de que se le acusaba.
DECIMO: A pesar de que la Dirección Regional de Educación de Herrera y la Dirección Nacional de Primer Nivel de Enseñanza tuvieron conocimiento de la absolución de mi representado por parte de los tribunales ordinarios, ordenaron su destitución en abierta violación del artículo 138 de la Ley 47 de 1946.
DECIMO PRIMERO: El Ministerio de Educación está obligado y debe pagar todos los salarios dejados de percibir por IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO BOSQUEZ, así como los décimo tercer mes y ajustes salariales a que tiene derecho durante el tiempo que duró su separación del cargo.

Como disposiciones legales infringidas, la parte actora aduce los artículos 138 y 142 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación que son del siguiente tenor literal:

"ARTICULO 138: Cuando las faltas cometidas por un miembro del personal docente o administrativo están bajo la acción judicial, las autoridades del Ramo suspenderán toda actuación y se acogerán al fallo proferido por el tribunal de la causa."

"ARTICULO 142: Cuando un empleado del Ramo de Educación considera que ha sido separado de su cargo sin causa justificada o sin que se hayan cumplido los requisitos que establece esta Ley, podrá recurrir a los Tribunales. En este caso el empleado del Ramo de Educación continuará devengando su sueldo hasta tanto el Tribunal dicte fallo definitivo, siempre que éste le favorezca.
Si el fallo es favorable al interesado éste tiene el derecho de que se le restablezca en su puesto. En el caso de que el Organo Ejecutivo no lo haga así el interesado continuará devengando su sueldo por todo el tiempo que dure su separación, siempre que reitere cada tres (3) meses su derecho de reingresar al desempeño de funciones."

A juicio de quien representa a la parte actora, el artículo 138 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, ha sido violado de manera directa, puesto que con base en la Sentencia de 27 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la Provincia de Herrera, Ramo Penal, el Ministerio de Educación debió reintegrar inmediatamente a su cargo al educador IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO y no retrasar dicho reintegro por casi 4 años y luego de que se viera en la necesidad de proponer Recurso de Revisión, pues la mencionada disposición es clara al señalar que "las autoridades del Ramo suspenderán toda actuación y se acogerán al fallo proferido por el Tribunal de la causa". Afirma la Lcda. Abrego, que el Tribunal que conoció del proceso de su representado, reconoció que no le cabía ninguna responsabilidad por el delito que se le acusaba y por ello emitió fallo absolutorio en su favor, del cual se desprende que la decisión de destituirlo, tomada por el Ministro de Educación, carecía de fundamentación fáctica y jurídica.

La Lcda. Abrego también afirma que el acto cuya ilegalidad demanda, viola

de manera directa el artículo 142 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, pues contrario a lo expuesto por la Administración, para reclamaciones relacionadas con la Administración Pública, la vía idónea lo es en primer término la propia autoridad que comete u omite la realización de un acto en perjuicio de alguna persona y en segundo término, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. A ello añade, que la mencionada disposición legal es clara al indicar, que el trabajador del Ramo de Educación que haya sido separado injustamente del cargo, "continuará devengando su sueldo hasta tanto el Tribunal dicte fallo definitivo, siempre que éste le favorezca", situación que se dio en el caso de su representado, pues el tribunal penal que conoció de su proceso lo absolvió de todos los cargos y, el Ministerio de Educación, reconoció que la separación del cargo había sido injusta y lo reintegró tardíamente a sus funciones.

II. El informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Educación y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N°104-199 de 19 de marzo de 1999, el Ministro de Educación rindió el respectivo de conducta, mismo que es visible de fojas 65 a 67 del expediente. El Ministro de Educación sostiene en el mencionado informe, que el Resuelto N° 454 de 15 de mayo de 1998, cuya ilegalidad se demanda, fue expedido en ocasión de un recurso de revisión administrativa propuesto por el educador Idaldo Atencio, quien fue destituido de su cargo en el contexto de un proceso disciplinario seguido en su contra, por acto reñidos con la moral, relativos a denuncias de abuso sexual en perjuicio de la menor Gladys Mariela Mendoza Pimentel.

El Ministro de Educación en el informe rendido acepta que la controversia respecto de la cual fue separado de su cargo el educador IDALDO ATENCIO, fue resuelta en forma definitiva en la jurisdicción penal en sentencia de 27 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Circuito de Herrera, pero en esa decisión no se ordena el pago de los salarios caídos y por ello le está vedado a la administración acceder a esa pretensión del demandante, por ello a su criterio no se violenta lo previsto en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Educación.

En cuanto a la violación que se aduce al artículo 138 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, estima que tampoco se configura, pues, dicha norma establecía la prejudicialidad judicial, a propósito de las causas disciplinarias que se instruyen en el Ministerio de Educación contra el personal docente o administrativo, lo cual implicaba una limitación a las atribuciones que corresponden a esta Institución como parte de uno de los Organos del Estado. Bajo esa óptica, según el Ministro de Educación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo 138 de la Ley 46 de 1947, razón por la que carece de sustento la argumentación que sobre la base de esta disposición plantea la apoderada judicial de IDALDO ATENCIO.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 269 de 16 de junio de 1999, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. En su escrito la Procuradora es del criterio que no le asiste la razón al demandante, por un lado, porque en la Resolución emitida por el Juzgado Segundo de Circuito de Herrera, Ramo Penal, fechada el 27 de septiembre de 1994, se destaca que el señor Atencio fue absuelto no porque se demostrara su inocencia, sino porque convergieron elementos que arrojaban dudas sobre la responsabilidad del encartado, aplicándose el principio de que en caso de duda se debe favorecer al reo. Las dudas consideradas por el señor Juez, según la Procuradora de la Administración, eran más que suficientes para que el demandante no volviera a ejercer la docencia, decisión que avalaría la ciudadanía precisamente por la imagen que debe proyectar un educador.

En cuanto a la violación que se señala a los artículos 142 y 138 de la Ley Orgánica de Educación, a criterio de la Procuradora no se aprecia, toda vez que,

por un lado, consta en autos que las autoridades del Ministerio de Educación reintegraron al señor Idaldo Atencio como educador en la Provincia de Herrera, y, por el otro lado, no consta en el expediente que el Juez Segundo del Circuito de Herrera, hubiere ordenado el pago de los salarios caídos, razón por la que es evidente el impedimento de la Administración para acceder a tal pretensión.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

El acto cuya legalidad se somete a la consideración de esta Sala Tercera, es el Resuelto N°454 de 15 de mayo de 1998, en el cual se resuelve negar la solicitud de pago de salarios dejados de percibir formulada por el educador IDALDO ARQUIMEDES ATENCIO, mediante escrito presentado el 5 de marzo de 1998. Entre las consideraciones expuestas para la expedición del acto que se demanda, se advierte que se argumenta, en relación con el pago de los salarios dejados de percibir que se reclaman, que el Despacho acoge lo expuesto por la Procuradora de la Administración en la Nota N° 129 de 24 de 1991, que en su parte pertinente expuso que no es procedente mediante la llamada "Revisión" contemplada en los artículo 136 y 139 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, el pago de salarios caídos a educadores despedidos, ya que la vía idónea para el reclamo y el pago de los mismos, es a través de una demanda y condena ante los Tribunales Ordinarios, como lo establece el artículo 43 de la mencionada Ley, pues, el Ministerio sólo está facultado para ordenar administrativamente el pago de salarios caídos a educadores despedidos, cuando el tribunal competente dicte fallo definitivo favorable ordenando al demandado el pago de la indemnización por el despido injustificado.

Antes de adentrarse la Sala a efectuar consideraciones de fondo en relación a los cargos de ilegalidad que se le endilgan al acto administrativo que se demanda, es importante señalar que la controversia que nos ocupa se inicia a raíz de la querella presentada ante la Personería Municipal del Distrito de Las Minas, Provincia de Herrra, por el señor José Isaac Mendoza contra el educador IDALDO ATENCIO por el delito de "Estupro", en perjuicio de su menor hija GLADYS MARIELA MENDOZA PIMENTEL, estudiante bajo su responsabilidad como maestro de primera enseñanza, el 29 de enero de 1991. Según el expediente, fue "suspendido" de su cargo el 1° de abril de 1991. Luego de surtido el proceso sumarial que consta en el proceso, se advierte que, ciertamente, en sentencia de 27 de septiembre de 1994, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera, Ramo Penal, se absolvió al educador IDALDO ATENCIO de los cargos imputados. Posterior a la expedición de la sentencia en la que es absuelto el educador IDALDO ATENCIO, consta de fojas 3 a 5 del expediente, que fue expedido el Resuelto N° 353 de 1 de mayo de 1998, en razón de un recurso de revisión presentado ante el Ministro de Educación, en el que se resolvió revocar la Resolución N°2 de 15 de febrero de 1996, proferida por la Directora Nacional de Primer Nivel de Enseñanza, mediante la cual se "confirma" la Resolución N°2 de 18 de agosto de 1995, en la que la Dirección Regional de Educación de Herrera solicita la destitución de IDALDO ATENCIO; en el mismo resuelto se resuelve ordenar el reintegro del educador IDALDO ATENCIO.

Al analizar las violaciones alegadas y los argumentos que las sustentan, la Sala advierte que en efecto, tal como apunta el Ministro de Educación en el informe explicativo de conducta que rindiera en ocasión de la demanda contencioso administrativa presentada, el artículo 138 de la Ley 47 de 1946, contentivo del fenómeno jurídico conocido como "prejudicialidad penal", fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 26 de junio de 1998, pues, representa "una intromisión de las actuaciones de un Organo del Estado en las del otro, vulnerando su independencia y la libertad de actividad en asuntos de su competencia, como lo es el juzgar con plena autonomía las contravenciones disciplinarias cometidas por los funcionarios del Ramo, lo que es a todas luces violatorio del debido proceso consagrado en el artículo 32 constitucional". En virtud de lo anotado, no puede, pues, ser

aplicada esta norma al carecer de ultraactividad por ser nula con efectos generales, de modo que, a juicio de la Sala, carecen de sustento los argumentos que esboza la recurrente para sustentar la violación alegada.

En cuanto al 142 de la Ley Orgánica de Educación que se alega infringido, la Sala es del criterio que, contrario a lo expuesto por la parte actora, no concurren los presupuestos que sugiere la norma para que se configure su violación. No debe perderse de vista que lo que se debate en el proceso contencioso administrativo que ocupa a esta Sala, es el pago de los salarios dejados de percibir por el educador Idaldo Atencio en el período comprendido entre la fecha de su suspensión y la fecha en que se ordenó su reintegro por parte del Ministerio de Educación. El pago de esos salarios requiere, de conformidad a la norma para su viabilidad, del pronunciamiento expreso del Tribunal; no sólo de un fallo favorable, sino de una condena al pago de esos salarios que el empleado del Ministerio de Educación dejó de percibir en razón de la separación del cargo. Esa condena debió proferirla el tribunal ordinario, que en este caso fue el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera, Ramo Penal, que al dictar el fallo de absolución de los cargos imputados, no dispuso la orden de pago de los mismos ante lo cual la Administración no podía disponer de fondos públicos para satisfacer una pretensión a la cual no fue condenada. No prospera este último cargo.

De conformidad a lo expuesto, es, pues, fundada la negativa del Ministerio de Educación de negar la solicitud de pago de salarios dejados de percibir planteada por el educador IDALDO ATENCIO, razón por la que lo procedente es no acceder a las pretensiones que se formulan en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N°N°454 de 15 de mayo de 1998, dictado por el Ministro de Educación, y tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LCDO. ARISTIDES FIGUEROA EN REPRESENTACIÓN DE RICAUTE TORRERO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N°84 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Aristides Figueroa, actuando en representación de RICAUTE TORRERO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N°84 de 29 de septiembre d 1997, emitida por el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de la República, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve destituir al señor Ricaute Torrero como Oficinista I, Empleado N°195, con cédula N°. 8-115-160, Seguro Social N° 53-2605. con sueldo de B/.530.00 Partida N° 1.14.0.10.01.02.001., con fundamento en

lo previsto en el artículo 803 del Código Administrativo.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nulo por ilegal, el Resuelto N° 84 de 29 de septiembre de 1997, emitida por el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de la República. También se solicita se declare que es nula por ilegal, la Resolución Administrativa N°002 de 11 de febrero de 1998, emitida por el Pleno de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de la República que confirma la anterior. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita se ordene la restitución del Lcdo. Ricaute Torrero en el cargo que desempeñaba en la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor como Oficinista I, Empleado N°195 y se ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde el día 30 de septiembre de 1997 hasta el día en que se haga efectiva la restitución.

En cuanta a los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que el señor Ricaute Torrero fue destituido de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de manera antojadiza y sin que mediaran razones de hecho y de derecho.

Como disposición legal infringida, la parte actora aduce el artículo 803 del Código Administrativo que es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 203:Los reglamentos pueden imponer pena correccional de apercibimiento, multa hasta de diez balboas (B/.10.00) suspensión y remoción por falta de asistencia a las oficinas o por mal desempeño de sus funciones".

Según el Lcdo. Aristides Figueroa, la citada disposición es una norma programática que establece las medidas disciplinarias de carácter administrativo que pueden ser reguladas en los reglamentos que regulen en un futuro las relaciones de trabajo entre los servidores públicos y el Estado. Al no existir un Reglamento que regule y tipifique dichas sanciones, mal pueden ser impuestas las sanciones allí contempladas.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Comisionado Secretario de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En nota de 29 de mayo de 1998, el Comisionado Secretario de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, expidió el respectivo informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 25 a 28 del expediente. En el informe, el Comisionado Secretario expone que el señor Ricaute Torrero inició labores en la Oficina de Regulación de Precios el 25 de mayo de 1981, y, posteriormente, con la creación de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor mediante Ley 29 de 1 de febrero de 1996 y por disposiciones del artículo 115 de la mencionada Ley 29, el señor Torrero ingresó a la planilla de esa Institución para el mes de junio de 1996. Según el Comisionado Secretario, desde que el señor Ricaute Torrero ingresó a la Institución, en forma reiterada se le comunicó su incumplimiento de deberes de funcionario público, obviando atender las notas de amonestación escritas de sus superiores. Ante la actitud negligente, su falta de cuidado en los deberes de funcionario público, la ausencia de una Ley de Carrera Administrativa aplicable y hacer caso omiso a las amonestaciones escritas, el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de la República, resolvió su destitución.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 238 de 29 de junio de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. A criterio de la Procuradora de la Administración, dentro del expediente se observa que el señor Torrero no cumplió a cabalidad con sus deberes de servidor

público, tal como lo exige el artículo 297 de la Constitución Nacional, razón para que fuera procedente la remoción del cargo que ocupaba en la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC). También señala la Procuradora de la Administración, que el demandante no se encontraba amparado por una Ley de Carrera Administrativa, por lo que su destitución era potestad discrecional de la autoridad nominadora, precisamente por carecer de estabilidad en el cargo que ocupaba.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a continuación a examinar la infracción que la parte demandante imputa al acto cuya declaratoria de nulidad demanda.

Mediante el acto demandado, como ya se expuso, es el Resuelto N° 84 de 29 de septiembre de 1997, mediante el cual el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), resuelve destituir al señor RICAUTE TORRERO del cargo que ocupaba en esa institución como Oficinista I, con un sueldo mensual de B/.530.00. El acto de destitución se fundamenta en lo previsto en el artículo 803 del Código Administrativo. La parte actora por su parte, alega precisamente como violado el artículo 803 del Código Administrativo, en la medida que no existe en la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor un reglamento, como prevé la norma, para que sean impuestas las sanciones que allí se contemplan.

Para resolver, la Sala reitera que cuando se demanda la restitución de un funcionario público, tiene que invocarse la norma que garantiza la estabilidad en dicho cargo y a la cual quien expidió el acto violentó con su actuación. Al examinar la violación alegada y los argumentos que la sustentan, la Sala concluye que no le asiste la razón a quien recurre, toda vez que no demuestra en el proceso, que al momento de su destitución estuviese amparado por estabilidad en el cargo sujeta a Ley especial alguna. En reiteradas ocasiones la Sala ha manifestado, que el acto mediante el cual se nombra a un empleado público es un acto condición que puede ser modificado unilateralmente por el Estado, salvo que la Constitución o la Ley disponga otra cosa. Así, nuestro ordenamiento jurídico establece dos limitaciones a ese principio de movilidad de los servidores públicos, que son cuando el funcionario sea empleado de carrera o nombrado por período fijo con estabilidad expresamente prevista en la Ley o en la Constitución, limitaciones éstas que no se prueban en el proceso.

Por lo expuesto, lo procedente es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Resuelto N° 84 de 29 de septiembre de 1997, emitida por el Director General de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DE QUIBA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 07-98 DE R.C. DE 9 DE JUNIO DE 1999, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 1 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ,

TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Lay, actuando en nombre y representación de QUIBA, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No.07-98 R.C. de 9 de junio de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 1 del Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. La pretensión y su fundamento.

El objeto de la presente demanda lo constituye la declaratoria de ilegalidad de la Resolución No.07-98 R.C. de 9 de junio de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 1 del Ministerio de Vivienda, la cual resuelve negar la solicitud de rescisión de contrato de arrendamiento, presentada por el licenciado José D. Guerra, apoderado legal de Quiba, S. A., contra la María de Jesús García de Robles, arrendataria del apartamento No.14, del edificio No. 21-08, ubicado en Vía España, corregimiento de Pueblo Nuevo. De igual forma solicita el actor que se declare nula la Resolución No.57-98 V del 9 de octubre de 1998, emitida por la Dirección General de Arrendamiento, la cual confirmó en todas sus partes la Resolución No.07-98 R.C. de 9 de junio de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No.1 del Ministerio de Vivienda. Finalmente, el actor le pide a la Sala que como consecuencia de nulidad del acto impugnado, se rescinda o queda rescindido el contrato de arrendamiento No. 13596, firmado el 8 de abril de 1995, entre Sebastián Sastre, S. A. (administradora), y la señora María de Jesús García de Robles (arrendataria), referente al apartamento #14, del edificio 21-08, ubicado en Vía España, Corregimiento de Pueblo Nuevo ; y que la Comisión de Vivienda No. 1, debe comunicarle esta decisión a la Corregiduría de Pueblo Nuevo para que ésta proceda a efectuar el lanzamiento de la señora María de Jesús García de Robles del apartamento descrito.

Cabe señalar que como parte interesada en este negocio intervino el licenciado Jaime Marchosky, apoderado judicial de la señora María de Jesús García de Robles, quien le solicitó a la Sala que deniegue las pretensiones de la parte actora.

Según la actora la Resolución No.07-98 R.C. de 9 de junio de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 1 del Ministerio de Vivienda , infringe el artículo 5 de la Ley 93 de 1973 y los artículos 1106, 1132 y 1134 del Código Civil.

La primera norma que el recurrente estima como quebrantad es el artículo 5 de la Ley 93 de 1973, cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 5. Todo contrato de arrendamiento deberá formalizarse por escrito en formatos suministrados por la Dirección General de Arrendamientos, y expresará: fecha, nombres y apellidos, números de cédula de identidad personal y domicilios de los contratantes; el bien inmueble o parte de que comprenda el arrendamiento con expresión del número, calle o plaza y corregimiento en que esté ubicado; número catastral de la finca, tomo y folio de su inscripción y cualesquiera otras indicaciones sobre la misma; valor en dinero que representa el canon de arrendamiento, aunque se convenga el pago en servicio o en especies distintas; el término de duración; y el destino que se le da al inmueble arrendado."

Sostiene la parte actora que el artículo 5 de la Ley 93 de 1973, fue violado en concepto de violación directa por omisión, toda vez que "al otorgarle a la expresión de ocupación la categoría de contrato y tomar como fecha de inicio

de la relación arrendaticia una diferente a la convenida por las partes interesadas, constituye la ilegalidad que deviene en nulidad por parte de las resoluciones impugnadas."

También considera la demandante que la resolución impugnada infringe el artículo 1106 del Código Civil, que dispone lo siguiente:

> "Artículo 1106. Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la Ley, a la moral ni al orden público."

El recurrente señala que la norma transcrita fue violada en concepto de violación directa por omisión, puesto que son las partes quienes pueden establecer las cláusulas y condiciones.

Otra norma considerada como infringida es el artículo 1132 del Código Civil que dice:

> "Artículo 1132. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
> Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas."

La actora indica que este artículo fue violado directamente por omisión porque como las partes definieron claramente los términos del contrato, lo que cabía era respetar el sentido literal de las cláusulas, lo cual no fue considerado ni respetado por los actos aludidos.

Finalmente la recurrente estima que el acto atacado quebranta el artículo 1134 del Código Civil cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 1134. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar."

A juicio de la actora la norma transcrita fue infringida directamente por omisión, toda vez que al negar la rescisión del contrato consideraron comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellas que los interesados contrataron, como es considerar una fecha distinta a la señalada por los contratantes como la fecha de vigencia del contrato.

II. El informe de conducta del Presidente de la Comisión de Vivienda No.1 y la Vista de la Procuradora de la Administración.

Visible de fojas 19 a 20 del expediente consta el informe de conducta del Presidente de la Comisión de Vivienda No.1 y cuyo contenido es el siguiente:

> "1. El 16 de abril de 1998, se recibió ante la Comisión de Vivienda en Turno, la demanda de Rescisión de Contrato de Arrendamiento, interpuesta por el Licdo. José Damasco Guerra, actuando en nombre y representación de QUIBA, S. A., en contra de MARÍA DE JESÚS GARCÍA DE ROBLES, arrendataria del apartamento No. 14, del Edificio 21-08, ubicado en Vía España, Corregimiento de Pueblo Nuevo.
> 2. Una vez admitida la Demanda dio traslado a la parte demandada, quien contestó a través de su Apoderado Especial Licdo. Jaime Marchosky, en tiempo oportuno (ver fojas 11 y 12).
> 3. Se fija la audiencia para el día 13 de mayo de 1998, con la participación de ambas partes. El demandante se mantiene en la Solicitud de Rescisión de Contrato y la parte demandada se opone a la misma (a foja 21).
> 4. Cumplidos los trámites y procedimientos que establece el Decreto

Ejecutivo No. 87 de 28 de septiembre de 1993, el Inspector encargado, remite el expediente a Reunión de Comisión.
5. El pleno de la Comisión al analizar las pruebas aportadas por las partes, las que constan en el expediente, se observa que en la cláusula Tercera del Contrato de Arrendamiento No.13596 (visible a fojas 3) se establece que el término del contrato es de tres (3) años, contados a partir del día ocho (8) de abril de 1995, sin embargo, en la cláusula Undécima se indica que la arrendataria ocupa el apartamento 14 desde el 9 de julio de 1971, lo que demuestra que la relación contractual se inicia en esa fecha y no en 1995, contraviniendo lo ordenado en el Artículo 63 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973.
6. Por unanimidad y mediante Resolución No. 07-98-R. de C. del 9 de junio de 1998, se Niega la Solicitud de Rescisión de Contrato, presentada por el Licdo. José Damasco Guerra, Apoderado Especial de QUIBA, S. A., contra MARÍA DE JESÚS GARCÍA DE ROBLES. (a fojas 34 a 36).
7. Notificadas las partes, el demandante presenta Recurso de Apelación ante la Dirección General de Arrendamientos.
8. Luego del trámite correspondiente la Dirección General de Arrendamientos emitió la Resolución No. 57-98-V. del
9 de octubre de 1998, confirmando la decisión emitida por ésta Comisión, siendo notificada a los Apoderados de las partes. (A fojas 43 y 44).”

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N 396 de 17 de agosto de 1999, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren que no es ilegal la Resolución N 07-98 R. de C. de 9 de junio 1998, dictada por la Comisión de Vivienda N 1 del Ministerio de Vivienda, así como tampoco lo es su acto confirmatorio.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

La Sala observa a foja 3 del expediente administrativo el contrato de arrendamiento No.13596 de 8 de abril de 1995, celebrado entre Sebastián Sastre, S. A., actuando en calidad de administrador y por orden del propietario, y la señora María de Jesús García de Robles, en calidad de arrendataria. En la cláusula undécima del contrato consta la declaración de que la arrendataria ocupa el apartamento No. 14 desde el 9 de julio de 1971.

A foja 25 del expediente administrativo constan las copias de varios recibos de pago en los que se hace constar que la compañía Sebastián Sastre, S. A., recibió de la señora María G. de Robles la suma de setenta y cinco balboas (B/.75.00) por el alquiler del apartamento No. 14 que ocupa en la Casa No. 21-08 en Vía España. Los pagos se efectuaron los días 5de enero, 17 de enero, 2 de marzo y 28 de marzo de 1995, los cuales correspondían a los meses de alquiler que vencían los días 8 de los meses de diciembre de 1994 y enero, febrero y marzo de 1995, antes de que se formalizara el Contrato de Arrendamiento N 13596 el 8 de abril de 1995.

Reposa a foja 28 del expediente una copia simple del contrato de arrendamiento de 9 de julio de 1971, celebrado entre Germán Gil Sánchez, como representante legal de Sánchez y Tarté Cía Ltda., administradores de la casa 21-08 en Vía España y la señora María de Jesús García de Robles. La cláusula tercera de este contrato dispone que el plazo de este contrato es de seis meses, pero que el mismo se entenderá renovado por igual término mediante el pago del arrendamiento mensual.

Una vez efectuado un análisis del expediente, la Sala considera que previo a la formalización del contrato N 13596 de 8 de abril de 1995, existía una

relación arrendaticia entre el recurrente y la señora de Robles, pues dicha relación surgió desde el 9 de julio de 1971. Esto es así, pues a pesar de que la copia simple del contrato de arrendamiento de 9 de julio de 1971, celebrado por la sociedad Sánchez y Tarté Cía. Ltda., administradores de la casa 21-08 en Vía España, y la señora María de Jesús García de Robles no tiene valor probatorio, en la cláusula undécima del contrato N 13596 de 8 de abril de 1995, consta la declaración de que "la arrendataria ocupa el apartamento No. 14 desde el 9 de julio de 1971". Esta relación arrendataria anterior a la formalización del contrato de 8 de abril de 1995 es corroborada por los recibos que constan a foja 25 del expediente administrativo que señalan una fecha de vencimiento del alquiler los días ocho de cada mes, lo que indica una continuidad de la relación contractual hasta la fecha de formalización del contrato, es decir, el 8 de abril de 1995.

En este sentido, vale destacar que el artículo 63 de la ley 93 de 1973 dispone que todos los contratos de arrendamientos existentes, verbales o por escrito, se ajustarán a las disposiciones de esta ley. Por lo tanto, conforme al artículo 5 de la citada ley dicho contrato debía constar por escrito y era la obligación del arrendador de entregar copia del mismo a la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a su firma , tal como lo preceptúa el artículo 6 de dicha norma.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que para los efectos de computar esta relación contractual, se debe tomar en cuenta la fecha de 9 de julio de 1971, toda vez que la formalización del contrato no se realiza en función de la fecha en que se inscribe en la Dirección General de Arrendamientos, sino desde la fecha en que se comprueba que se inicia la relación contractual. Por lo tanto, los cálculos sobre el vencimiento del contrato deben contarse desde el 9 de julio de 1971, siendo su última prórroga a partir del 9 de julio de 1998, tomando en cuenta que el artículo 9 de la Ley 93 de 1973 preceptúa que ningún contrato de arrendamiento o la prórroga de él podrá celebrarse por un término menor de 3 años. Como el arrendador presentó la solicitud de rescisión de contrato el día 16 de abril de 1998, la misma resulta extemporánea por prematura, pues el arrendador debió presentar la misma dentro de los quince (15) días posteriores al 9 de julio de 1998.

Por todo lo antes anotado, la Sala es del criterio que las violaciones alegadas al artículo 5 de la Ley 93 de 1973 y los artículo 1106, 1132 y 1134 del Código Civil, no se han configurado en esta ocasión, motivo por el cual lo procedente es declarar que no es ilegal el acto acusado.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO ES ILEGAL la Resolución No.07-98 de 9 de junio de 1998, dictada por la Comisión de Vivienda No. 1 del Ministerio de Vivienda, así como también su acto confirmatorio y, por lo tanto, niega las pretensiones del recurrente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FLORENCIO BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 143 DE 23 DE MARZO DE 1999, DICTADO POR EL ALCALDE ENCARGADO DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Florencio Barba, en representación del señor RAFAEL LÓPEZ, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 14 de septiembre de 2000, a través de la cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por él ante la Sala Tercera para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 143 de 23 de marzo de 1999, dictado por el Alcalde Encargado del Distrito de Panamá.

I. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

La decisión del Magistrado Sustanciador se fundamentó en tres motivos, a saber: 1) que la demanda no se dirigió a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera, como ordena el artículo 102 del Código Judicial; 2) que la acción contencioso-administrativa que se pretendió ejercitar estaba prescrita y 3) que no aportó junto con su demanda copia autenticada del escrito de en que solicitó al funcionario demandado que certificara si había resuelto o no el silencio administrativo (fs. 19-20).

II. LOS ARGUMENTOS DEL RECURENTE

En el libelo de oposición al recurso, el licenciado Barba acepta que no cumplió el requisito que establece el artículo 102 del Código Judicial, mas arguye que no debe olvidarse que el artículo 473 ibídem prohíbe al Tribunal la devolución de los escritos que carezcan de los requisitos que esta norma señala o de "cualquier otro requisito de carácter formal", una vez que han sido recibidos por el Secretario.

Con relación al segundo aspecto, el licenciado Barba manifiesta que aun cuando el término de prescripción de la acción contencioso-administrativa de plena jurisdicción es de dos meses, ello no significa que con posterioridad al vencimiento del mismo el funcionario que conoce del proceso administrativo no puede emitir una decisión, reabriendo así la vía para que el afectado acuda a la Sala Tercera. Sostiene que ello ocurrió en este caso con la expedición de la Resolución N° 269 de 3 de mayo de 2000, por parte del señor Alcalde del Distrito de Panamá, visible a foja 3.

III. DECISIÓN DEL RESTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SALA

Después de analizar los argumentos del licenciado Barba, el resto de los Magistrados que integran la Sala estiman que no le asiste la razón porque la Resolución N° 269 de 3 de mayo de 2000, que según él reabrió la vía contenciosa-administrativa, no contiene una "decisión" sobre el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 143 de 25 de marzo de 1999. En otras palabras, la Resolución en cita no revoca ni confirma lo resuelto por dicho Decreto, sino que se limita a formular una declaración totalmente ajena al objeto del recurso gubernativo impetrado, esto es, a "Declarar extemporánea la solicitud de impulso procesal presentada por el Apoderado Legal del recurrente" el día 20 de septiembre de 1999, por considerar que para esta fecha ya había operado el silencio administrativo (Cfr. f. 3 vuelta).

La reapertura de la vía para recurrir a la jurisdicción contenciosa-administrativa sólo es posible si la decisión que emite la administración resuelve el recurso o recursos gubernativos interpuestos por el afectado. De lo contrario, debe entenderse que la vía gubernativa quedó agotada al cumplirse el término de dos meses, contados desde la fecha de sustentación del recurso o recursos de que se trate, sin que el funcionario o entidad se haya pronunciado sobre los mismos. Tal razonamiento tiene claro fundamento en los artículos 36 y 42 de la Ley 135 de 1943, cuya parte pertinente dicen:

"ARTÍCULO 36. Se considerará agotada la vía gubernativa:

> 1. Cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos;
> 2. . . .”
> (Subraya la Sala)

> “ARTÍCULO 42: Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si éstas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación.”
> (Subraya la Sala)

Como la Resolución N° 269 de 3 de mayo de 2000 no resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto impugnado, por las razones explicadas, mal pudo “reabrir” la vía para que el actor recurriera a la jurisdicción contenciosa-administrativa. Por tanto, si el precitado recurso fue sustentado el 5 de abril de 1999, el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo se produjo al cumplirse un período de dos meses contados desde esta fecha y la acción contenciosa-administrativa debió promoverse dentro de los dos meses siguientes, mas, como consta a foja 17 vuelta, se interpuso el 11 de agosto de 2000, es decir, más de un año después de vencido este último plazo.

Cabe agregar, que al haberse agotado la vía gubernativa por silencio administrativo, el actor debió pedir la nulidad, por ilegal, de la negativa tácita del recurso de reconsideración y probar, mediante una certificación del funcionario demandado, que dicho recurso no fue resuelto dentro de los dos meses siguientes a su interposición, tal como ha sostenido reiterada jurisprudencia de esta Sala.

Por los motivos expuestos, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 14 de septiembre de 2000, mediante la cual no se admitió la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Florencio Barba, en representación del señor RAFAEL LÓPEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 143 de 23 de marzo de 1999, dictado por el Alcalde del Distrito de Panamá.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OCTAVIO OCHOA, EN REPRESENTACIÓN DE OFELINA DEL CARMEN OCHOA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 171 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado OCTAVIO OCHOA, actuando en representación de OFELINA DEL CARMEN OCHOA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 171 de 7 de diciembre de 1999, dictado por conducto del Ministro de Economía Y Finanzas, y para que se hagan otras declaraciones.

Adjunto a la demanda, se incorpora una solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, que declaró insubsistente el nombramiento de la señora OCHOA, en el Ministerio de Economía y Finanzas.

No obstante, por razones de economía procesal, corresponde a quien suscribe decidir en primer término, sobre la admisibilidad de la demanda incoada, y en este punto se percata que el libelo adolece de vicios, que impiden su curso legal.

En efecto, se advierte de principio, que la demanda viene dirigida de manera global a los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, y no a su Presidenta, tal como lo exige el artículo 102 del Código Judicial.

Se observa además, que en el renglón de la demanda, relativo a las partes del proceso, se omite por completo la designación de la señora Procuradora de la Administración, funcionaria que según lo dispuesto en el artículo 348 numeral 2° del Código Judicial, tiene encomendada la atribución especial de representar a la administración pública, en los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción.

Finalmente, la suscrita ha reparado en la circunstancia de que el recurrente incluye, entre las disposiciones supuestamente infringidas por el acto impugnado, una norma de rango constitucional como aplicable a la solución de la controversia, pese a que esta Superioridad ha señalado, en forma inveterada y sostenida, que la Sala Tercera no es competente para conocer de supuestas violaciones al Estatuto Fundamental, siendo esta una atribución privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En vista de las deficiencias anotadas, lo procedente es negarle curso legal al libelo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado OCTAVIO OCHOA en representación de la señora OFELINA DEL CARMEN OCHOA.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA KATHIA LEE, EN REPRESENTACIÓN DE AGRIPINO TORO LOZANO, PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DEL NACIMIENTO DE JOSE GREGORIO TORO QUINTERO, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada KATHIA LEE, actuando en representación de AGRIPINO TORO

LOZANO, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, a fin de que se declare la nulidad de la inscripción del nacimiento de JOSE GREGORIO TORO QUINTERO, que consta a Tomo 879, Asiento 2318, del Registro Civil de la Provincia de Panamá.

De acuerdo a los hechos que hacen parte del petitum, el señor AGRIPINO TORO LOZANO realizó, en el año 1994, el reconocimiento voluntario de la paternidad del menor José Gregorio Toro, nacido el 7 de abril de 1994. No obstante, manifiesta haber advertido en fecha reciente, que la madre de la criatura, señora Lisette Quintero, se encontraba casada con el ciudadano Enrique Domínguez, desde el 13 de enero de 1993 hasta el 30 de abril de 1999, cuando fue disuelto el vínculo matrimonial, por lo que al momento del nacimiento del niño, el estatus civil de la madre impedía que el menor fuese registrado por persona distinta a su cónyuge.

En estas circunstancias, señala que la inscripción fue realizada en violación a la presunción contenida en los artículos 140 del Código Civil y 266 del Código de la Familia, por lo que es un acto afectado de nulidad.

Ponderadas las especiales circunstancias del caso, la suscrita considera que existen dos razones medulares para negarle curso legal a la demanda presentada, razones éstas que dicen relación con la improcedencia de impugnar el acto en cuestión a través de la acción de nulidad, y con la falta de idoneidad del remedio escogido por el actor, para ventilar su pretensión.

Así observamos en primer término, que la acción de nulidad se encuentra reservada para la impugnación de actos administrativos con efectos generales, en vías de lograr la protección del orden jurídico abstracto, y no para situaciones como la planteada, en que más que una sentencia de tipo declarativa, la pretensión del actor responde a sus intereses subjetivos y personales, de revertir el reconocimiento voluntario que realizó en relación al menor José Gregorio.

En opinión de la suscrita, es evidente que la pretensión del recurrente no estriba en la anulación de la inscripción del nacimiento del menor, sino que persigue la impugnación de la paternidad voluntariamente reconocida por él, y así lo demuestran claramente, los fundamentos de hecho y de derecho, que sostienen la demanda. De allí, que también sea incongruente solicitar la anulación de la inscripción del nacimiento del niño José Gregorio, hecho vital que per se, no ha sido controvertido.

El remedio procesal idóneo para los fines del actor, es la acción judicial de impugnación de paternidad, regulada en los artículos 281 al 286 del Código de la Familia, que puede ser ensayada ante las instancias de familia correspondientes (art. 752 ibídem), por quien haya realizado un reconocimiento por error, según lo prevé el artículo 284 ibídem.

La jurisdicción de familia es además, la única competente para ponderar la materia de presunciones legales de paternidad, y sus excepciones, permitiendo rectificar por resolución judicial motivada, si hay lugar a ello, la inscripción realizada en este sentido por el Director del Registro Civil. (cfr. artículos 68 y 73 de la Ley 100 de 30 de diciembre de 1974)

La conclusión de estos razonamientos, es que la demanda presentada no puede ser admitida, según lo prevé el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, actuando en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada KATHIA LEE, en representación de AGRIPINO TORO LOZANO.

Notifiquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL COLLADO, EN REPRESENTACIÓN DE ARGELIA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 1073/00, DE 23 DE MAYO DE 2000, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En calidad de Tribunal de segunda instancia, conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala, del recurso de apelación promovido por el apoderado judicial de la señora Argelia Rodríguez de Rodríguez contra el auto emitido por el Magistrado Sustanciador de esta causa, fechado el 3 de octubre de los corrientes, mediante el cual no se admitió la presente demanda contenciosa de plena jurisdicción.

Mediante el acto administrativo contenido en la acción de personal No. 1073/00, de 23 de mayo de 2000, expedida por el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), se destituyó de su cargo en esa institución estatal a la señora Argelia Rodríguez de Rodríguez. El auto que denegó la admisión de la demanda se basa en las siguientes razones:

> "...el demandante no ha demostrado el agotamiento de la vía gubernativa. En relación con lo anterior, la Sala ha señalado en distintas ocasiones que es requisito sine qua non, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que la parte actora no sólo solicite ante la entidad demandada que certifique si se ha producido el silencio o negativa tácita de su pretensión, sino que además es necesario, si la administración no se pronuncia, que el demandante le solicite al Magistrado Sustanciador que requiera al funcionario demandao la información antes descrita. Cabe destacar que si el demandante no hace esta solicitud, la Corte no puede pedir dicha certificción al ente demandado, pues la misma solamente se hace a petición de parte".(fojas 17-18).

Esto último fue dicho por el fallo apelado en atención a la jurisprudencia de la Sala, por ejemplo, la expresada en auto de 18 de septiembre de 1998.

El apoderado judicial de la apelante esboza su iconformidad con la resolución recurrida mediante escrito que corre de fojas 23 a la 25 del expediente. Dicho auxiliar de la dministración de justicia considera que no es necesario que en el dossier conste indubitablemente si se produjo o no el silencio de la Administración, por la "..relación íntima que ello tiene con la suerte y fondo de la demanda en cuestión". Arguye que si el silencio administrativo tiene importancia para los fines de la procedencia del trámite aplicable, en cuyo procedimiento deberá decidirse sobre el derecho que se reclama, a su criterio resulta aconsejable para la vigencia y efectividad de los derechos ciudadanos atemperar las exigencias semánticas, porque de otro modo las exigencias del administrado a recurrir ante lo contencioso administrativo podría quedar dependiendo de reflexiones verbales, muy a pesar que la intención real y pesamiento del recurrente no se preste a duda razonable dentro del contexto general de la acción legal con la que el demandante aspira a un pronunciamiento sobre su reclamo. (Cfr. foja 24).

El apelante destaca que al final de la demanda que interpuso ante esta esfera jurisdiccional pidió al Magistrado Sustanciador, bajo el subtítulo otras pruebas, que oficiara al IDAAN para que autenticara la documentación adjunta como prueba, y como prueba documental aportó la No. 4 de 20 de julio de 2000, a través de la cual requirió a la autoridad administrativa que se pronunciara sobre los recursos interpuestos desde el 1 de junio del presente año. Con la prueba No. 5 procuró ilustrar al Ponente sobre la petición de certificación dirigida al Director Ejecutivo de la Institución demandada en torno a los recursos interpuestos y "sobre que los mismos no habían sido resueltos..." (Ibídem).

Todo lo anterior fue hecho con el propósito de evidenciar o buscar certeza sobre el silencio de la Administración, que fue confirmado a su juicio por la falta de respuesta del Director Ejecutivo del IDAAN.

Luego de este recuento, el resto de la Sala pasa a resolver el recurso de apelación bajo examen.

Considera el Tribunal ad-quem que no le asiste la razón al impugnante en los argumentos que expone, con los que sustenta su recurso contra el auto de 3 de octubre pasaso, emitido en Sala unitaria mediante el cual se rechazó la demanda de plena jurisdicción, esencialmente porque el actor no probó el silencio administrativo, decisión que el Tribunal de apelación comparte.

En efecto, los artículos 46 y 50 de la Ley 135 de 1943 sirven de fundamento jurídico a la resolución que no admitió la demanda de plena jurisdicción presentada por la señora Argelia Rodríguez de Rodríguez, por no haber probado el silencio administrativo incurrido por la entidad demandada ante el recurso de reconsideración con apelación en subsidio promovido en la esfera gubernativa. En este sentido, el recurrente omitió pedir a la Sala que requiriese a la autoridad para que certificara si emitió o no decisión para resolver la impugnación meritada en la esfera gubernativa, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Al respecto, la jurisprudencia de este Tribunal en cuanto a la prueba del silencio administrativo que compete a quien demanda en plena jurisdicción, ha dicho en auto fechado el 21 de diciembre de 1999, conteste con resoluciones anteriores sobre el tema, lo siguiente:

> "el silencio administrativo debe probarse por medio de una certificación expedida por el funcionario encargado de resolver el repectivo recurso, en la que se indique que éste no ha sido resuelto; y, en caso de que dicha certificación también le haya sido negada, deberá pedirse al Magsitrado Sustanciador que la requiera al funcionario demandado. Cabe señalar que el cumplimiento de este requisito es fundamental para la admisión de la demanda, pues, podría ocurrir que el silencio administrativo que se alega no se haya producido debido a que existe un fallo revocatorio o confirmatorio del acto impugnado, sin que ello sea de conocimiento del actor, quien no se ha cerciorado si el recurso ha sido o no resuelto pidiendo la mencionada certificación".

Como el actor no ha probado el silencio administatativo de su cargo incurrido por la Administración al omitir hacer las gestiones ante la Sala, tal cual fue explicado, lo que procede es confirmar el auto recurrido.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 3 de octubre de 2000 emitida por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual no se admite la demanda de plena jurisdicción interpuesta por la señora Argelia Rodríguez de Rodríguez, a través de apoderado judicial.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALISON GARCÍA VELIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N°64 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Alison García Veliz, actuando en representación del Subcontralor General de la República, Lic. Gustavo Pérez ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Resolución N° 64 de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia en la que se resuelve:

> "Reconocer al señor EROTEIDES VELASQUEZ GONZALEZ con cédula de identidad personal N°7-30-824 el derecho a recibir del Estado, la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) mensuales, en concepto de SUBSIDIO POR VEJEZ, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1° de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, reglamentada por el Decreto Ejecutivo N°11 de 24 de febrero de 1986."

En el acto demandado se señala que el señor EROTEIDES VELAZQUEZ GONZALEZ, en su condición de Constituyente de 1972, solicitó ante el Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, se le concediera SUBSIDIO POR VEJEZ de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 1° de Ley 82 de 5 de octubre de 1978, en concordancia con el Decreto Ejecutivo N°11 de 24 de febrero de 1986. En la resolución acusada, se deja constancia que la solicitud planteada se acompañó de documentos tales como: el Certificado de Nacimiento, expedido por el Registro Civil, y el Certificado suscrito por el Secretario General de la Asamblea Legislativa, donde consta que el peticionario se desempeñó como Representante de Corregimiento en el período comprendido de 1972 a 1978 y devengó gastos de representación hasta por la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 64 de 21 de septiembre de 1995, del Ministerio de Gobierno y Justicia, sobre la base de que la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 11 de 24 de febrero de 1986, establece que el Estado otorgará un Subsidio por Vejez a los Honorables Representantes de Corregimiento quienes se desempeñaron como Constituyente en el período comprendido entre 1972 y 1978, no obstante no prevé ese subsidio para los Suplentes de los Honorables Representantes de Corregimientos, que es el caso del señor HEROTEIDES VALESQUEZ, quien fue Suplente del Constituyente JAIME A. ALBA BARRIOS, del Corregimiento de Vallerequito, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, durante el perído comprendido entre 1972 a 1978.

Como disposición legal infringida, se aduce el artículo 1 de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978 que dice:

"ARTICULO 1: Los Honorables Representantes de Corregimientos de la

> Asamblea Nacional Constituyente de 1972, quienes firmaron la Constitución Política de la República de Panamá, el Secretario General y el Subsecretario General de la Asamblea Nacional de 1972-1978, recibirán en forma vitalicia y gratuita los siguientes derechos:
> a. ...subsidio por vejez..."

En opinión de quien recurre, la citada disposición legal se violó por indebida aplicación ya que cotempla un beneficio que será otorgado a los Honorables Representantes de Corregimiento, quienes firmaron la Constitución de 1972 por su condición de Constituyente, no siendo extensiva para los Suplentes, razón por la que la resolución que se demanda se fundamenta en un supuesto que la Ley no contempla.

II. El informe explicativo de conducta rendido por el Ministro de Gobierno y Justicia y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

En Nota N° 2039D.L. de 6 de octubre de 1999, el Viceministro de Gobierno y Justicia, rindió el informe explicativo de conducta, mismo que es visible de fojas 22 a 23 del expediente en los siguientes términos:

> 1) Es cierto que al Honorable Representante de Corregimiento de Valleriquito, Las Tablas, Provincia de los Santos, señor EROTEIDES VELASQUEZ GONZALEZ, la Secretaría General de la Asamblea Legislativa le expidió la certificación N° AL/SG133A, fechada 2 de junio de 1995, señalando que él se desempeñó como Representante de dicho corregimiento de 1972 hasta 1978.
> 2) Igualmente es cierto que con fundamento en dicha certificación, el señor VELASQUEZ formalizó a este ministerio la petición de subsidio por vejez, la cual fue concedida con la aprobación de la Contraloría General de la República de Panamá, ya que se cumplía con lo establecido por la Ley.
> 3) La petición por Subsidio por Vejez formulada por el H.R. EROTEIDES VELASQUEZ GONZALEZ, en septiembre de 1995, fue debidamente examinada y confrontada con el régimen legal correspondiente, o sea, la Ley 82 de 1978 y el Decreto Ejecutivo N°11 del 24 de febrero de 1986. En ese entonces, se acogió como prueba la certificación oficial N° Al/SG/133A, fechada dos (2) de junio de 1995, según la cual dicho señor se desempeñó como Representante principal del Corregimiento de Valleriquito, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, desde 1972 hasta 1978.
> 4) Dicha certificación reviste la calidad de instrumento público, ya que fue expedido, sellado y firmado en forma responsable por quien tenía facultad para ello, es decir, por el Secretario General de la Asamblea Legislativa, Lcdo. Erasmo Pinilla.
> 5) Posteriormente, la Contraloría General de la República advirtió que el señor EROTEIDES VELASQUEZ GONZALEZ, no era Representante principal de Corregimiento de Valleriquito, sino suplente del Constituyente JAIME A. ALBA BARRIOS. Y este hecho fue puesto en conocimiento de este ministerio.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N°507 de 21 de diciembre de 1998, estima que en el caso bajo examen se produce la indebida aplicación del artículo 1 de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, pues, existe en la resolución impugnada error en los motivos, al demostrarse que el señor EROTEIDES VELASQUEZ, fungió única y exclusivamente como Suplente del Representante de Valleriquito, por lo que no se encuentra legitimado para percibir el subsidio por vejez, ya que dicha excerta legal sólo concede tales beneficios a los Honorables Representantes de Corregimientos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1972 que firmaron la Constitución Política de la República de Panamá, y el señor Velasquez, no figura como una de las personas que firmó la Constitución Política de 1972.

La Procuradora de la Administración, al concluir la Vista Fiscal, dejó sentado que ese despacho, en ejercicio de la atribución consignada en el numeral 4, del artículo 348 del Código Judicial, estima que los derechos reconocidos en virtud de la Ley N°82 de 5 de octubre de 1978, a los Honorables Representantes de Corregimiento de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, deben igualmente reconocerse a los Honorables Representantes Suplentes, en caso de que el Representante Principal fallezca (Consulta N° C-200 de 20 de julio de 1998, que es visible de fojas 39 a 42 del expediente).

III. Tercero impugnante de la demanda contencioso administrativa de nulidad.

En providencia de 4 de marzo de 1999, el Magistrado Sustanciador admitió al señor EROTEIDES VELASQUEZ como parte interesada, representado por el Lcdo. Marcelino Jaén, para actuar dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la Lcda. Alison García en representación del Subcontralor General de la República, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 64 de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia.

En el escrito, que es visible de fojas 85 a 100 del expediente, el Lcdo. Marcelino Jaén, al contestar los hechos fundamentales de la demanda, afirma, entre otros aspectos, que al momento de expedirse el certificado por parte del Secretario General de la Asamblea Legislativa, en el que se hiciera constar su condición de suplente del Honorable Constituyente Principal, señor Jaime A. Alba Barrios, para aducirla como prueba en la demanda de solicitud del subsidio por vejez, hubo un error involuntario, pues, se hizo constar que el Honorable Constituyente Suplente de 1972, Eroteides Velásquez era miembro principal de la Asamblea Nacional de Constituyentes de 1972 en representación del Corregimiento de Valleriquito, Distrito de Las Tablas, en el periódo comprendido de 1972-1978. Luego que fuera expedida la resolución por la cual se reconoce al señor Velásquez el subsidio por vejez, según el Lcdo. Jaén, la omisión antes mencionada fue subsanada y la corrección correspondiente se tramitó en la propia Contraloría General de la República en el Departamenteo de Fiscalización, Personal y Planilla. Finalmente destaca que en el caso que nos ocupa, constituye un claro ejemplo que obliga el no ceñirse a letra de la Ley en forma "desnuda, descarrada y aislada" sino que hay que tomar en consideración los motivos, causas y condiciones sociales, políticas y económicas que inspiraron y motivaron elaborar la estructura de la Asamblea Nacional de Constituyentes Representates de Corregimientos de 1972, integrada por 505 Representantes.

En cuanto a la disposición legal que se alega como infringida, sostiene que no se produce violación alguna al artículo 1 de la Ley 82 de 5 de octubre de 1978, cuando el Constituyente Suplente reemplaza al Principal no sólo cuando éste fallece, sino en todas las funciones y tareas que tiene la obligación de atender en sus condición de miembros de la Asamblea de Representantes de Corregimientos de la República. A ello añade que las leyes que regulan todas las instancias jurisdiccionales en que el Representante-Constituyente ejerce sus funciones, no hacen distinción o separación de un Suplente con el Principal, por el contrario, establece una unificación y solidaridad a fin de facilitar el trabajo y funciones que les corresponde realizar.

IV. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Como antes se expuso, el acto demandado lo es la Resolución N°64 de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia en la que se reconoce al señor EROTEIDES VELASQUEZ el derecho a recibir del Estado, la suma de trescientos balboas (B/.300.00) mensuales, en concepto de subsidio por vejez. Quien recurre, afirma que la resolución demandada se fundamenta en un supuesto de derecho que la Ley no contempla, pues, prevé un beneficio que será otorgado a los Honorables Representantes de Corregimiento quienes firmaron la Constitución de 1972 por su condición de constituyente, no siendo extensiva para los

Suplentes.

La Sala observa que la Resolución N°64 de 21 de septiembre de 1995 expedida por el Ministro de Gobierno y Justicia, se fundamenta en la Certificación AL/SG133A de 2 de junio de 1995, expedida por el entonces Secretario General de la Asamblea Legislativa, en la que se hace constar que el Honorable Representante de Corregimiento, Eroteides Velásquez, se desempeñó como Representante del Corregimiento de Valleriquito, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, desde 1972 a 1978 (a foja 3). Posterior a ello, se expide la Certificación N° AL/SG-1051 de 31 de octubre de 1997, en la que el Secretario General de la Asamblea Legislativa , en funciones en ese momento, certifica que el señor Eroteides Velásquez, fue Suplente del Constituyente Honorable Representante de Corregimiento de Valleriquito, Distrito de Las Tablas. La anterior situación, motivó al Director General de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República, a solicitar una aclaración al Secretario de la Asamblea Legislativa, quien en Nota AL/SG-230 de 13 de mayo de 1998, confirma que el señor Eroteides Velásquez, fue suplente del Constituyente JAIME A. ALBA BARRIOS, del Corregimiento de Valleriquito, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, durante el período comprendido entre 1972 a 1978.

Por lo expuesto es evidente que el subsidio por vejez concedido al señor Eroteides Velásquez González en la Resolución N° 64 de 21 de septiembre de 1995, emitida por el Ministro de Gobierno y Justicia, se basa en un supuesto de hecho que no está previsto en la norma jurídica respectiva, pues, está demostrado en el expediente que el señor Velásquez se desempeñó como Suplente del Honorable Representante de Corregimiento, señor Jaime A. Alba Barrios, del Corregimiento de Vallerequito, Distrito de Las Tablas, Provincia de Los Santos, y no como lo hace ver la certificación que sirvió de sustento del acto que se demanda, que señala que el señor Velásquez se desempeñó como Representante titular de Corregimiento en el periódo de 1972 a 1978. Por ello, debe accederse a lo que se solicita en la demanda, pero sobre la base de que existe error en los motivos, uno de los supuestos que como señala la Procuradora de la Administración, permite que proceda la anulación de un acto administrativo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES NULA POR ILEGAL, la Resolución N° 64 de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifiquese, Cumplase y Publiquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ONELIO GONZÁLEZ TEJEIRA Y JOSÉ LUIS GALLOWAY LOGAN PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 79 DE 10 DE AGOSTO DE 1999, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ARRAIJÁN Y LA COMPAÑÍA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Arosemena, actuando en nombre y representación de LUIS ONELIO GONZÁLEZ TEJEIRA y JOSÉ LUIS GALLOWAY LOGAN, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo Municipal N° 79 de 10 de agosto de

1999, suscrito entre el Municipio de Arraiján y la Compañía Recolectora de Desechos Sólidos, S. A.

El licenciado Arosemena solicita en su demanda la suspesión provisional de los efectos del acuerdo impugnado fundamentándose en que dicho acuerdo causa graves perjuicios a la comunidad, pues, a partir de la entrada en vigencia del contrato, la tasa de recolección de basura se incrementará y "el Municipio de Arraiján dejará de percibir automáticamente todos los dineros que actualmente ingresan a sus arcas y los que pudieran ingresar en concepto de taza (sic) por recolección de basura".

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 faculta a la Sala Contencioso Administrativa para suspender los efectos del acto impugnado "si a su juicio ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Además, en los procesos de nulidad, procede la suspensión del acto administrativo impugnado como medida cautelar para evitar no sólo perjuicios económicos sino, sobre todo, cuando puede producirse una lesión al principio de separación de poderes o a la integridad del ordenamiento jurídico.

Luego de un examen preliminar de los cargos de ilegalidad formulados por el demandante, la Sala estima, prima facie, que no le es posible acceder a lo pedido por la actora, toda vez que no existen violaciones ostensibles, manifiestas e incontrovertibles de las normas que se citan como violadas.

Por otra parte, la jurisprudencia ha sostenido en precedentes anteriores, que el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 debe interpretarse de conformidad con el principio según el cual cuando en la aplicación de las leyes resulten en conflicto los derechos de particulares con el interés social, debe prevalecer este último, tal como lo dispone el artículo 46 de la Constitución Nacional. En el presente caso, a juicio de la Sala, de accederse a la suspensión del acto impugnado, se estaría tutelando el interés particular por sobre el general, pues se estaría afectando la prestación de un importante servicio público.

Por último, es importante destacar que las consideraciones esbozadas no deben entenderse como un pronunciamiento anticipado en relación con la pretensión del demandante, pues sólo al resolverse el fondo del negocio se determinará la legalidad o ilegalidad del acto acusado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional formulada por el licenciado Manuel Arosemena, en representación de LUIS ONELIO GONZÁLEZ TEJEIRA y JOSÉ LUIS GALLOWAY LOGAN.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA J.A. HERRERA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ROBERTO LEE PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 02-2000 R.C DE 16 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 2. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense J.A. Herrera y Asociados, actuando en nombre y representación de ROBERTO LEE, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 02-2000 R.C. de 16 de mayo del año en curso, dictada por la Comisión de Vivienda N° 2.

El Magistrado Sustanciador procede, seguidamente, a examinar la demanda con el fin de determinar si la misma cumple con los requisitos que exige la ley para ser admitida.

En la demanda bajo estudio, el demandante pretende que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 02-2000 R.C por medio de la cual la Comisión de Vivienda N° 2 aprueba la solicitud de rescisión del contrato de arrendamiento y lanzamiento presentada por la firma forense Sánchez y Sánchez en contra de ROBERTO LEE, arrendatario del departamento A-5, edificio 9-10, ubicado en Avenida B, corregimiento de San Felipe.

El suscrito observa que el demandante incurre en un error al confundir la demanda de nulidad con la de plena jurisdicción. Ello es así, puesto que el acto impugnado y las prestaciones que se solicitan tienen como objeto la protección de intereses de carácter particular o subjetivo solamente susceptible de impugnación por medio de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y no a través de una demanda contencioso administrativa de nulidad, por lo cual la vía utilizada por el apoderado judicial de la parte actora no es la correcta.

En relación con lo anterior, es necesario recalcar que las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción y de nulidad tienen diferencias tanto en los requisitos exigidos para su presentación, como en las consecuencias o efectos que las mismas producen. "La primera de ellas persigue, no sólo la declaratoria de nulidad del acto impugnado, sino el restablecimiento de los derechos subjetivos vulnerados, no importa si son de particulares o del Estado en su sentido más amplio; mientras que la demanda de nulidad tiene como obejto únicamente que la Sala Tercera declare la nulidad del acto acusado, sin que se pueda hacer ninguna declaración o reconocimiento de derechos que se consideren vulnerados por el acto, excepto la facultad que le confiere el numeral 2 del artículo 203 de la Constitución Nacional, para estatuir disposiciones en reemplazo de las anuladas". (Auto de 11 de enero de 1999).

Por las razones que se han expresado, no es posible darle curso a la demanda, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por la firma forense J.A. Herrera y Asociados, en representación de ROBERTO LEE.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LEOPOLDO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE BENJAMÍN A. JURADO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 26 DE 7 DE AGOSTO DE 2000, DICTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN CARLOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Leopoldo Castillo, actuando en nombre y representación de BENJAMÍN A. JURADO, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 26 de 7 de agosto del año en curso, dictada por el Alcalde del Distrito de San Carlos y se hagan otras declaraciones.

El licenciado Castillo solicita, en su escrito de demanda, se ordene la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por razones de economía procesal, el Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

Quien suscribe, se percata que el acto impugnado en la presente demanda, es una resolución mediante la cual el Alcalde del Distrito de San Carlos decide no conceder al señor BENJAMÍN A. JURADO la autorización para la operación de un establecimiento comercial de expendio de bebidas alcohólicas.

El suscrito estima que el apoderado judicial de la actora incurre en el error de confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la de plena jurisdicción. En efecto, el acto impugnado afecta una situación jurídica particular y, por ende, mediante la interposición de la demanda se persigue la reparación de derechos subjetivos susceptibles de impugnación solamente a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En ese orden de ideas, se observa que la parte actora no cumple con el requisito contemplado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que se refiere al agotamiento de la vía gubernativa. En relación con este tema, a f. 3 del expediente se señala que "el interesado podrá interponer recurso de apelación contra la presente Resolución dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, ante la Gobernación de la Provincia de Panamá", recurso que no consta en el expediente haya sido utilizado por el actor.

Por último, omitió adjuntar a la demanda copia autenticada del acto administrativo acusado con constancia de la notificación, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

Por las razones que se han expresado, no es posible darle curso a la presente demanda.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por el licenciado Leopoldo Castillo, en representación de BENAJAMÍN A. JURADO.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA CHEN, ESTRADA Y WONG, EN REPRESENTACIÓN DE LIZETH ALFARO ESQUINA PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 93 DE 7 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, HOY AUTORIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Chen, Estrada y Wong, actuando en nombre y representación de LIZETH ALFARO ESQUINA, interpuso ante la Sala Contencioso Administrativa, demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 2 de la Resolución N° 93 de 7 de agosto de 1997, emitida por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, hoy Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Mediante escrito fechado 6 de noviembre del año en curso, visible a fs. 105 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la demanda contencioso administrativa propuesta contra el acto administrativo enunciado anteriormente, por lo que la Sala procede a determinar la admisibilidad del mismo.

El artículo 66 de la Ley 135 de 1943 establece que "en cualquier estado del juicio es admisible, por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo". De la norma trascrita se desprende que es posible desistir de la presente acción, motivo por el cual la Sala procede a admitirlo y dar por terminado el proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la firma forense Chen, Estrada y Wong, en representación de LIZETH ALFARO ESQUINA, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DELFIN CASTRELLON, EN REPRESENTACIÓN DE EULOGIA CEDEÑO BRAVO, PARA QUE SE DECLARE NUL, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. D.N. 7-1908 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera, de la demanda contencioso administrativa de Nulidad, interpuesta por el licenciado Delfín Castrellón, en representación de EULOGIA CEDEÑO BRAVO, a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. D.N. 7-1908 de 20 de noviembre de 1996, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

I. EL AUTO APELADO

El Magistrado Sustanciador, a través de auto de 19 de septiembre de 2000, decidió no admitir la demanda presentada, expresando sus razones de la manera siguiente:

> "El suscrito observa que la pretensión de la actora es el reclamo de derechos subjetivos, los cuales son propios de ser demandados a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, por lo que la demandante incurre en el error de

confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.
En efecto, según se desprende de las constancias procesales, la actora reclama derechos subjetivos, pues dicha parcela de terreno forma parte de la masa hereditaria de quien en vida se llamara Ramón Cedeño Cárdenas, padre de la actora, y quien, durante muchos años, ocupara el mencionado terreno.
En este orden de ideas, resulta evidente, que en el presente caso no sólo se persigue una sentencia declarativa, que es lo propio de una demanda de nulidad, sino que se pretende el restablecimiento de un derecho que, supuestamente, ha sido desconocido mediante el acto impugnado."

II. ARGUMENTOS DE LA ALZADA

En su escrito de apelación, la demandante se opone a los argumentos del A-quo, manifestando que el acto administrativo impugnado contiene vicios de ilegalidad objetivos, toda vez que Reforma Agraria ha adjudicado a título oneroso, un globo de terreno ubicado en la provincia de Los Santos, a la señora Felicia de León, pese a que existía un tercero (señor Ramón Cedeño Cárdenas), con un derecho posesorio sobre dicha parcela, por haber ocupado el terreno en cuestión, por más de 40 años. En concepto de la recurrente, dicha actuación infringe varias disposiciones del Código Agrario, en materia de adjudicación.

Señala además, que en la actualidad se encuentra pendiente el juicio de sucesión intestada del señor Cedeño Cárdenas, instaurado por sus herederos desde el 11 de mayo de 1992, y entre los bienes considerados en dicha sucesión se encuentra precisamente, el derecho posesorio sobre la parcela de terreno, ilegalmente adjudicada a la señora De León.

Finalmente destaca, que aún en el caso de que la adjudicación del terreno implique la afectación de derechos subjetivos de los herederos del señor Cedeño, la acción presentada tiene por finalidad que el acto administrativo expedido por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, sea declarado ilegal, por resultar abiertamente violatorio de la Ley, propósito que resulta congruente con la finalidad de la acción de Nulidad interpuesta, por lo que solicita la revocatoria del auto de 19 de septiembre de 2000, y en su lugar, se ordene la admisión de la demanda.

II. DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Una vez analizadas las constancias que hacen parte del proceso, el resto de la Sala pasa a externar lo siguiente:

El A-quo determinó que la demanda presentada no era admisible, en vista de que a través de una acción de nulidad, se planteaba una pretensión que contenía el reclamo de derechos subjetivos.

No obstante, y luego de ponderado el fundamento de la demanda, consideramos que la acción presentada se enfoca de manera exclusiva, a obtener la anulación del acto de adjudicación de tierras, sin reclamarse de manera coetánea, el restablecimiento de derecho subjetivo alguno.

Ciertamente, existe en este caso un interés de los herederos del señor Cedeño Cárdenas, de invalidar el acto administrativo que adjudicó la parcela de terreno en disputa, a la señora De León. Sin embargo, la intención plasmada en la demanda se circunscribe a obtener la ilegalidad de la adjudicación, por considerarse violatoria de un número plural de disposiciones en materia de reforma agraria, y de derecho sucesorios.

En beneficio de Eulogia Cedeño Bravo, no se ha solicitado el restablecimiento de derechos particulares o subjetivos, pues en ningún momento se ha peticionado que a la prenombrada, o a los herederos del fallecido señor

Ramón Cedeño Cárdenas, se le adjudique el globo de terreno en cuestión.

Por el contrario, de los argumentos de la parte actora se desprende, que la decisión final en cuanto a los derechos sobre dichas tierras, se encuentra en manos del juez que decidirá lo propio, en el juicio de sucesión que se adelanta.

En estas circunstancias, la acción de nulidad podía ser utilizada por la señora Cedeño para impugnar la actuación administrativa de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, en virtud de que los cargos de ilegalidad planteados por el recurrente, dicen relación con la presunta infracción al orden legal objetivo, en materia de adjudicación, y no con la afectación de un derecho particular de la impugnante, razón por la cual la titularidad de la acción, podía recaer en cualquier persona.

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA del auto de 19 de septiembre de 2000, ADMITE la demanda contencioso administrativa de Nulidad, presentada por el licenciado Delfín Castrellón en representación de EULOGIA CEDEÑO BRAVO.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INTERPUESTA POR EL LCDO. BENITO A. MOJICA EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VALDÉS, JAIME TREJOS, MAURICIO JOSEPH, MARIO FINDLAY, JUAN MARTÍNEZ Y LUIS COBA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ORDEN GENERAL DEL DÍA N°164 DE 29 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A MARIO FINDLAY, MAURICIO JOSEPH, EL DECRETO PERSONAL N°2 DEL 23 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A JUAN MARTÍNEZ, EL DECRETO DE PERSONAL N°249 DE 3 DE AGOSTO DE 2000, DONDE SE DESTITUYE A JAIME TREJOS. MAGISTRADO PONENTE: HIPÓLITO GILL SUAZO. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Benito A. Mojica, ha instaurado Demanda Contencioso Administrativa de Protección de los Derechos Humanos, en representación de CARLOS VALDÉZ, JAIME TREJOS, MAURICIO JOSEPH, MARIO FINDLAY, JUAN MARTÍNEZ Y LUIS COBA, para que se declaren nulas, por ilegales, los siguientes actos administrativos: la Orden General del Día N°164 de 29 de agosto de 2000, mediante la cual se destituye a Mario Findlay y Mauricio Joseph; el Decreto Personal N°2 de 23 de agosto de 2000, en la que consta la destitución de Juan Martínez; y el Decreto Personal N°249 de 3 de agosto de 2000, donde consta la destitución de Jaime Trejos.

Se observa que conjuntamente con las pretensiones de la demanda el actor ha incluido una solicitud previa a la admisión de la demanda, la cual consiste en la petición de "Las certificaciones de los originales de las pruebas aportadas". (Ver foja 36 del expediente) Sin embargo, antes de resolver dicha solicitud, por razones de economía procesal, es procedente determinar si el libelo incoado cumple con los requisitos formales que hagan posible su admisibilidad.

La demanda adolece de ciertos defectos que impiden imprimirle el trámite legal correspondiente.

En primer término, cabe destacar que el proceso contencioso administrativo de protección de los derechos humanos, que ha sido concebido para proteger los derechos humanos justiciable, se tramita según las normas establecidas en las Leyes 135 de 1943 y Ley 33 de 1946, tal como se desprende de la lectura del numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial.

Se advierte que con la presente acción contencioso administrativa de protección de derechos humanos el demandante pretende que la Orden General del Día N°164 de 29 de agosto de 2000, el Decreto Personal N°2 de 23 de agosto de 2000 y el Decreto Personal N°249 de 3 de agosto de 2000, mediante los cuales se declaran insubsistentes los nombramientos de los señores MARIO FINDLAY, MAURICIO JOSEPH, JUAN MARTÍNEZ Y JAIME TREJOS, sean declarados nulos por constituir una violación a un derecho humano justiciable.

El Magistrado Arturo Hoyos, en su obra titulada, Justicia Contencioso-Administrativa y Derechos Humanos, señala que los derechos humanos justiciables son los denominados de primera generación, o bien, los derechos civiles y políticos, aquellos cuyo cumplimiento es exigible judicialmente ante la administración pública. En tanto, los derechos de la segunda generación o derechos humanos económicos, sociales y culturales, cuyo cumplimiento corresponde al Estado mediante la elaboración de programas y políticas cuya aplicación dependerá de los recursos materiales y económicos con que éste cuente, como regla general no son justiciables porque su cumplimiento no puede exigirse de manera inmediata.

Sobre el particular, la Sala ha mantenido el criterio expresado como se colige de los antecedentes que se transcriben a continuación:

> "En el caso que nos ocupa, mediante el acto impugnado, se declara insubsistente el nombramiento del señor **AROSEMENA**, lo cual nos ubica frente a un derecho económico como lo es el derecho al empleo.
> Esta Superioridad ya se ha pronunciado al respecto en reiteradas ocasiones, señalando que el derecho económico o social depende de las políticas o lineamientos gubernamentales a seguir para satisfacer tales necesidades, por lo que el presente acto administrativo debe encauzarse por los procesos ordinarios que la vía contencioso administrativa ofrece." (El destacado es de la Sala)
> Auto de 12 de marzo de 1999

Con base a lo expuesto, y siendo que en el caso que nos ocupa estamos frente a un derecho social como lo es el derecho del trabajo el cual depende de políticas económicas gubernamentales, hay que reconocer que no es ésta la vía idónea para impugnar los presentes actos administrativos.

Por otro lado, es necesario aclarar en relación con la presunta destitución de los señores CARLOS VALDÉS Y LUIS COBA, que las mismas no están acreditadas en ninguno de los actos acusados de ilegales.

Se observa además que en la presente acción se solicita la nulidad de tres actos administrativos distintos, es decir, la Orden General del Día N°164 de 29 de agosto de 2000, el Decreto Personal N°2 de 23 de agosto de 2000 y el Decreto Personal N°249 de 3 de agosto de 2000, las cuales no guardan relación alguna en su contenido. En este sentido, la jurisprudencia constante de esta Sala ha manifestado que no pueden ser demandados distintos actos administrativos mediante una sola demanda contencioso administrativa. Solamente esta Corporación tiene la potestad de decidir, de existir un elemento en común, si procede la acumulación de dos o más demandas, por lo que la parte actora debió presentar demandas distintas impugnando cada uno de los actos administrativos por separado.

A propósito de ello, este tribunal ha sostenido lo siguiente:

"No obstante, el Magistrado Sustanciador considera que la misma no debe admitirse, conforme a lo establecido por la Sala anteriormente en el sentido de que no pueden ser demandados distintos actos administrativos mediante una sola demanda contencioso administrativa..."(Lo subrayado de la Sala)
Autos de 5 de febrero de 1997

"En reiterados fallos la Sala ha expresado que no pueden ser demandados distintos actos administrativos mediante una sola demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.
En el presente caso los actos administrativos acusados dan lugar a la interposición de dos demandas contenciosoadministrativas, y en cada caso la Sala determinará si procede la acumulación." (Lo subrayado de la Sala)
Auto de 26 de enero de 1998

En atención a las deficiencias indicadas, el Magistrado Sustanciador conceptúa que lo procedente es negarle el curso legal a la demanda instaurada.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos promovida por el Lcdo. Benito A. Mojica en representación de CARLOS VALDÉS, JAIME TREJOS, MAURICIO JOSEPH, MARIO FINDLAY, JUAN MARTÍNEZ Y LUIS COBA.

Notifíquese.

(fdo.) HIPÓLITO GILL SUAZO
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENITO A. MOJICA A. EN REPRESENTACIÓN DE RUBÉN CISNEROS PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 195 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Benito A. Mojica A., actuando en nombre y representación de Rubén Cisneros, interpuso recurso de apelación contra el auto dictado el 4 de octubre de 2000 por el Magistrado sustanciador, mediante el cual no admitió la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos interpuesta por el apelante, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 195 de 4 de septiembre de 1998, dictado por el señor Presidente de la República por conducto del Ministro de Gobierno y Justicia, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Mediante el auto impugnado el Magistrado sustanciador resolvió no admitir la demanda presentada, porque el derecho invocado como violado es el del empleo y consideró que éste no es un derecho humano exigible judicialmente frente a la administración pública, pues se trata de un derecho económico. Además, señaló que la demanda incumple con lo preceptuado en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, ya que desde el 4 de septiembre de 1998, en que se dictó el acto atacado hasta el 25 de septiembre de 2000, en que fue presentada la demanda ante la Secretaría de la Sala Tercera, ha transcurrido en exceso el término contemplado por dicha norma (fs. 47 a 49).

El licenciado Mojica sustentó su apelación en un extenso escrito, expresando una serie de alegaciones y reiterando los cargos de violación invocados en la demanda que no fue admitida (fs. 55 a 64).

Entre las consideraciones para pedir la revocatoria del auto apelado, el apoderado judicial del recurrente señaló que en la demanda no se ha invocado el derecho al empleo, aunque éste es un derecho humano justiciable como lo ha determinado el apéndice III del informe anual de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a la Asamblea General de la O.E.A., sino que ha impugnado la actuación del funcionario que permitió que se impusiera la sanción máxima de destitución a su representado, sin tomar en cuenta el debido proceso, el nivel de oficiales, estabilidad policial, circunstancias atenuantes, presunción de inocencia y principio de congruencia ligado a la falta.

A juicio del abogado del demandante, aunque a tenor de lo señalado en el numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial, no era necesario el agotamiento de la vía gubernativa, su representado sí recurrió en reconsideración agotándola. Agregó que en los casos en que no se admita el recurso contra el acto originario impugnado, se considera agotada la vía gubernativa, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 36 de la Ley 135 de 1943.

La señora Procuradora de la Administración no presentó objeciones a la apelación interpuesta por lo cual, vencido el término correspondiente, el resto de los Magistrados pasan a resolverla.

Un examen del acto administrativo impugnado, de la demanda presentada y del escrito de apelación interpuesto ante el resto de la Sala, demuestra que en efecto, la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos no debe ser admitida por las mismas razones que fueron expuestas por el Magistrado Sustanciador en el auto de 4 de octubre de 2000.

El resto de los Magistrado comparte el criterio expresado en dicho auto y además considera conveniente indicarle al apelante que si bien señala que no pretende la tutela del derecho al empleo, su fin último es la restitución de su representado a su puesto de trabajo como consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto administrativo de destitución acusado, con lo cual se evidencia que sí se pretende la protección del derecho al empleo, que según la resolución de esta Corporación de Justicia de 12 de marzo de 1999, citada en el auto apelado, es considerado por la jurisprudencia de esta Corte como un derecho de carácter económico.

Además, a juicio del resto de los Magistrados, aún cuando la parte actora aportó copia del Resuelto N° 102-R-98 de 18 de mayo de 1999, con la cual se agotó la vía administrativa, la no obligatoriedad del agotamiento que permite el numeral 15 del artículo 98 del Código Judicial, no lo exime en caso de optar por la interposición de los recursos procedentes, de la obligación de presentar la demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos ante la Sala Tercera dentro de los dos meses posteriores a la configuración de alguna de las circunstancias que enumera el artículo 35 de la Ley 135 de 1943, para que se considere agotada la vía gubernativa. Esto sería así si la pretensión del actor fuera de aquellas que pueden ser impugnadas a través de este tipo de demanda y que no es el caso del recurrente por las razones explicadas.

En el presente caso en acto admnistrativo en que se resuelve el recurso de reconsideración, se decidió negar el mismo y mantener en todas sus partes el decreto de destitución N° 195 de 4 de septiembre de 1998, pero el mismo no está autenticado y tampoco consta la fecha en que esta decisión fue notificada personalmente al señor Rubén Darío Cisneros y desde la fecha de su emisión el 18 de mayo de 1999 hasta el 2 de octubre de 2000, en que el apoderado del demandante presentó la demanda corregida, ha transcurrido más de un año.

Por último, debe concluirse que en virtud de la falta de presupuestos jurídicos para tramitar la presente demanda contencioso administrativa como una

de protección a los derechos humanos, por ser evidentemente una solicitud de restitución de derechos individuales supuestamente vulnerados a un particular, tampoco podía esta Superioridad imprimirle el trámite de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, ya que como se explicó en líneas anteriores, ser requería la prueba de que la misma fue presentada ante la Secretaría a tiempo de conformidad con lo establecido en el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

Como la demanda presentada no cumple con los requisitos exigidos por la ley, debe confirmarse la decisión adoptada por el Magistrado Sustanciador en el auto de 4 de octubre de 2000, por ser conforme a derecho.

En mérito a lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto de 4 de octubre de 2000, mediante el cual el Magistrado sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos interpuesta por el licenciado Benito A. Mojica A., en representación de RUBÉN CISNEROS, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Personal N° 195 de 4 de septiembre de 1998, dictado por el señor Presidente de la República por conducto del Ministro de Gobierno y Justicia y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR LA FIRMA LACAYO & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIO ELOY FISCHER VALERO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, manifestación de impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Lacayo & Asociados, en representación de CECILIO ELOY FISCHER VALERO.

En cuanto a la razón por la cual solicita se le declare impedida, la licenciada Montenegro de Fletcher expresa que "el día 22 de febrero de 2000 (sic) absolví la Consulta N° 40 a su Excelencia, Dr. Olmedo D. Miranda Jr., Ministro de la Presidencia, relativa al pago de pensiones complementarias y jubilaciones especiales", y aduce como fundamento de su solicitud la causal contenida en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial en relación con el primer párrafo del artículo 754 ibídem.

La Sala estima que la situación planteada por la Procuradora de la Administración se encuentra dentro de la norma jurídica invocada, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 388 y 390 del Código Judicial, debe accederse a lo pedido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Contencioso

Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la SEPARA del conocimiento del negocio y DISPONE llamar a su suplente para que conozca de la demanda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA CONOCER DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE PORTS ENGINEERING AND CONSULTANTS CORP. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, manifestación de impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo, en representación de PORTS ENGINEERING AND CONSULTANTS CORP., en razón de que intervino como asesora de la entidad demandada emitiendo opinión jurídica en torno al objeto del proceso, en la Consulta Número C-8 de 17 de enero de 2000.

La licenciada Montenegro de Fletcher fundamenta su solicitud en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 754 ibídem. La causal invocada establece lo siguiente:

> "Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

En atención a que la situación descrita por la Procuradora de la Administración se encuentra dentro de la norma jurídica invocada, y de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 388 y 390 del Código Judicial, debe accederse a lo pedido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la SEPARA del conocimiento del negocio y DISPONE llamar a su suplente para que conozca de la presente demanda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUSTINIANO CÁRDENAS B., EN REPRESENTACIÓN DE SERGIO AUGUSTO GONZÁLEZ HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N 1501 DE 30 DE MAYO DE 2000, DICTADO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista N° 600 fechada 2 de noviembre de 2000, la señora Procuradora de la Administración, licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se le declare impedida para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Justiniano Cárdenas B., en representación de SERGIO AUGUSTO GONZÁLEZ HERRERA, para que se declare nulo por ilegal el Decreto N 1501 de 30 de mayo de 2000, dictado por el Alcalde del Distrito de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración manifiesta que absolvió consulta a la ex-Alcaldesa Mayín Correa sobre la aplicación en el Municipio de Panamá del escalafón de los médicos, salario, sobresueldos, etc. regulado por el Decreto de Gabinete N 16 de 22 de enero de 1969, que reglamenta la estabilidad de los funcionarios de salud. (Véase foja 3), por lo que está impedida para conocer de este negocio, según lo prevé la parte final del numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial que a la letra dice:

> **"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el que esté impedido.**
> **Son causales de impedimento:**
> **1...**
> **5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentrode los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo".**

Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado pro la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Justiniano Cárdenas B., en representación de SERGIO AUGUSTO GONZÁLEZ HERRERA, para que se declare nulo por ilegal el Decreto N 1501 de 30 de mayo del 2000, dictado por el Alcalde del Distrito de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones y DISPONE llamar a su suplente para que conozca del presente negocio.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE MURGAS Y MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A., DE PUY FAGIA, S. A. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 7 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE: JORGE LUI DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A. AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A.

MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, ha manifestado impedimento para conocer del recurso de casación laboral interpuesto por la firma Murgas & Murgas, contra la resolución de 7 de junio de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A. , AN DE PUY,S. A. y DE PUY FAGIA,S. A.

La Magistrada de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer del recurso de casación laboral promovido por la firma Murgas & Murgas en representación de ANDYELENA,S. A., AN DE PUY,S. A. y DE PUY FAGIA,S. A., contra la resolución del 7 de junio de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral de JORGE LUIS DE PUY GARCIA vs ANDYELENA,S. A., AN DE PUY,S. A. y DE PUY FAGIA,S. A., porque mi hijo Rodolfo Aguilera Franceschi actuó como apoderado judicial del señor JORGE LUIS DE PUY GARCIA en la demanda que éste presentó ante las Juntas de Conciliación y Decisión contra las sociedades ANDYELENA,S. A., AN DE PUY,S. A. y DE PUY FAGIA,S. A. cuyas pretensiones se relacionan íntimamente con el proceso laboral en el cual se dictó la resolución recurrida con el presente recurso de casación.
> Esta solicitud la fundamento en el numeral diez (10) del artículo 647 del Código de Trabajo que es del siguiente tenor literal:
> "Artículo 647: Son causales de impedimento:
> ...
> 10. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, perito, depositario, auxiliar de la jurisdicción, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto a los hechos que dieron margen al mismo.
> ..."

La Magistrada hace alusión al numeral 10 del artículo 647 del Código de Trabajo para sustentar su impedimento, el cual contempla, de forma palmaria, como causal de impedimento, la situación descrita por la Magistrada, pues, en efecto, su hijo el licenciado Rodolfo Aguilera Franceschi intervino como apoderado judicial del demandante cuando tuvo lugar la génesis de este proceso.

En ese sentido, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera observa que es procedente aceptar el impedimento formulado por la Magistrada Franceschi de Aguilera, toda vez que los argumentos aludidos se encuentran contemplados en la citada disposición.

Por lo antes expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es legal el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA, y en consecuencia, procede a llamar al Magistrado Rogelio Fábrega, de la Sala Primera de lo Civil, para reemplazar a la Magistrada impedida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOZA, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO MCCOY, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Espinosa, actuando en nombre y representación de GILBERTO McCOY, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia incidente de levantamiento de secuestro, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Comercio e Industrias.

Mediante el auto de 21 de septiembre de 1999 se admitió el incidente de levantamiento de secuestro y se le corrió traslado al Juez Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias y a la Procuradora de la Administración.

El licenciado Espinosa sustenta el incidente de levantamiento de secuestro en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Mi mandante, se ha visto afectada por una medida cautelar de secuestro decretada, en su contra por el Juzgado Ejecutor del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS mediante Resolución de 12 de diciembre de 1983 sobre el 15% del excedente del salario mínimo que devengue (foja 7), dicha Resolución nunca fue firmada.
>
> SEGUNDO: Que desde el 12 de diciembre de 1983, a mi mandante se le afectado (sic) con la referida medida cautelar, al igual que con ampliaciones o correcciones, mediante Autos 75 de fecha 9 de septiembre de 1997 (Fojas 51 y 52) y 106 de 11 de noviembre de 1997 (foja 60), y por último con la elevación a grado de Embargo del secuestro decretado mediante Auto 135-99 de 3 de agosto de 1999 (fojas 83 y 84). Con el Auto No. 75, por primera vez se demanda y se libra mandamiento de pago en otros y se decretó embargo y secuestro en contra de mi representado sobre varios bienes.
>
> TERCERO: Que mi representada, no se le ha notificado en ninguna forma del Proceso que en esta jurisdicción se ventila, causándole graves perjuicios.
>
> CUARTO: Que mi mandante si bien ha sido demandado y no se le ha hecho ningún tipo de requerimiento, sino más bien lo que se ha efectuado, es un secuestro arbitrario sin llenarse los requisitos.
>
> QUINTO: Que desde que la medida cautelar fue comunicada a la Contraloría General de la República (Foja 16) afectó los bienes de propiedad de mi mandante, han transcurrido más de seis días, sin que se haya presentado proceso en su contra. Por otro lado, han transcurrido más de tres meses, sin que se le haya notificado de la demanda ejecutiva, al igual que no se le ha emplazado y/o notificado.
> El Artículo 537 del Código Judicial establece lo siguiente:
> También se levantará el secuestro si, a partir del día en que se llevó a cabo el depósito de la cosa secuestrada, o del momento en que entró al Diario del Registro Público, si fuere inmueble o mueble

> susceptible de inscripción o desde que se comunicó la orden de retención al depositario si fuere suma de dinero en los siguientes casos:
> 1. Cuando el demandante no presentare su demanda, dentro de los seis días siguientes a la fecha arriba expresada.
> 2. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o si puestos a sus disposiciones los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los treinta días siguientes. (EL SUBRAYADO ES NUESTRO)
> SEXTO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 537 numeral (1) y (2) del Código Judicial, el secuestro debe ser levantado.
> SOLICITUD ESPECIAL: En atención a las consideraciones arriba expuestas solicitamos en forma muy respetuosa a los Honorables Señores Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, se sirvan declarar probado el presente Incidente de Levantamiento de Secuestro, y ordenen al Señor Juez Ejecutor del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, se sirva levantar el secuestro decretado mediante Auto de 12 de diciembre de 1983, 9 de septiembre de 1997, al igual que las ampliaciones realizadas mediante los referidos últimos autos."

La Sala debe examinar si procede la interposición del incidente de levantamiento de secuestro.

Advierte la Sala que de fojas 32 a 39 del expediente que el Ministerio de Comercio e Industrias le sigue a Gilberto McCoy, aparece la Escritura Pública N° 89 de 22 de enero de 1982, por la cual Gilberto McCoy y el Ministerio de Comercio e Industrias celebran un Contrato de Préstamo con garantía hipotecaria, y en cuya cláusula décimo tercera la parte deudora renuncia al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo.

Cabe señalar que el artículo 1768 del Código Judicial prevé claramente esta situación y señala lo siguiente:

> "Artículo 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.
> Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681." (El subrayado es de la Sala)

De la norma transcrita, se colige claramente que en caso de renuncia al domicilio y los trámites del proceso ejecutivo, tal como ocurre en este caso, no se podrán proponer incidentes ni otras excepciones que no sean las de pago y prescripción.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala estima que el incidente de nulidad que se ventila en esta oportunidad, es manifiestamente improcedente y como tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, debe ser rechazado de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte

Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de levantamiento de secuestro interpuesto por el licenciado Francisco Espinosa, actuando en nombre y representación de GILBERTO McCOY, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Comercio e Industrias.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO OLDEMAR O. GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILA BEITÍA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO, QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REGIÓN DE CHIRIQUÍ LE SIGUE A HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Oldemar O. González en representación de TEÓFILA CURES BEITIA, ha interpuesto incidente de rescisión de depósito dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo, que el Banco de Desarrollo Agropecuario, Región de Chiriquí le sigue a HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ.

El incidentista ha fundamentado su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mediante auto N° 44 de 14 de mayo de 1998, el Juzgado Municipal de Alanje en su calidad de despacho comisionado decretó embargo sobre: Un globo de terreno de aproximadamente 8,663 mts2 con 63 centímetros, ubicado en Mostrenco, Distrito de Alanje, comprendido dentro de los linderos siguientes: Norte: Camino Real; Sur: Camino Real; Este: Camino Real de Las Moras y Oeste: Carretera, un vehículo Toyota Land Cruiser, Color Rojo, Año 78, Tamaño Z400, Chasis BJ40023007, Motor BJ 50-0215308, que pertenece al demandado HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S., dentro del Proceso Ejecutivo propuesto por TEÓFILA EMILIA CURES BEITIA en contra de HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S. ante el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí.
SEGUNDO: Mediante diligencia realizada el día 19 de mayo de 1998 el Juzgado Municipal de Alanje, efectuó avalúo y depósito de los bienes previamente embargados y descritos en el hecho primero de este incidente.
TERCERO: Mediante Auto N° 84-98 de 10 de diciembre de 1998 el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario en Chiriquí, Libro Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra de HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S. y decretó embargo sobre los bienes descritos en el hecho primero de este incidente y ordenó la práctica de la diligencia de inventario, avalúo y depósito de los bienes embargados.
...
CUARTO: El día 20 de abril del presente año, funcionarios del Banco de Desarrollo Agropecuario en Chiriquí, se apersonaron a la comunidad de Mostrenco en el Distrito de Alanje y practicaron diligencia de avalúo y depósito del globo de terreno cuyos derechos posesorios mantiene HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S., el cual había sido previamente embargado y depositado en el Proceso Ejecutivo seguido por TEÓFILA EMILIA CURES BEITIA a HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S. en el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí.

QUINTO: El día 28 de abril del presente año el vehículo TOYOTA LAND CRUISER, COLOR ROJO, AÑO 78, TAMAÑO Z400, CHASIS BJ40023007, MOTOR BJ 50-0215308, propiedad de HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ S. fue retenido por la Policía de Alanje atendiendo solicitud de la Juez Ejecutora del Banco de Desarrollo Agropecuario en Chiriquí, procediéndose a su retiro y posterior avalúo de depósito de dicho bien.
SEXTO: Los funcionarios del Banco de Desarrollo Agropecuario que procedieron a realizar las diligencias pertinentes para el depósito de los bienes descritos en el hecho primero de este incidente, tuvieron conocimiento de que los mismos habían sido embargados y depositados previamente en el Proceso que le sigue TEÓFILA EMILIA CURES BEITIA a HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ en el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, toda vez y tal como consta en el expediente contentivo del Proceso por Jurisdicción Coactiva, que en la diligencia respectiva, se les exhibió copia autenticada de la diligencia preexistente, procediéndose pese a lo anterior, ya que según aquéllos la copia presentada carecía de la constancia de vigencia, la cual no había sido insertada pues el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí mantenía el criterio que esta solo se consignaba para efecto de secuestro, mas no de embargo.
SÉPTIMO: Al tenor del artículo 1786 del Código Judicial, cuando en un Proceso Ejecutivo por cobro coactivo, se decrete embargo de bienes ya embargados en uno Civil, la medida deberá comunicarse al Juzgado que conoce de éste, quien deberá adelantar el trámite hasta el remate de dichos bienes, obligación que desconoció el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario en el caso que nos ocupa.
..."

Admitido el presente incidente de rescisión de depósito, se ordenó correrle traslado al Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Región de Chiriquí y a la Procuradora de la Administración por el término de ley.

I. CONTESTACIÓN DEL JUEZ EJECUTOR

El Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Región de Chiriquí, se refirió al incidente presentado afirmando que su despacho embargó los bienes que garantizan el contrato de prenda agraria suscrito entre dicha entidad crediticia y el señor Hernán Darío Hernández. Por lo tanto, los bienes dados en garantía, sólo pueden ser secuestrados o embargados por el acreedor pignoraticio a tenor de lo preceptuado en el artículo 527 del Código Judicial.

II. OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración se refirió al caso en estudio de la siguiente manera: "el incidente de depósito viene respaldado por el Auto Número 44 de 14 de mayo de 1998, visible en las fojas 1 y 2 del cuadernillo judicial; documento éste que fue desglosado del expediente que contiene la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesto por el Licdo. Oldemar González a favor de Teófila Emilia Cures Beitia vs. Directora Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Chiriquí".

Ahora bien, a propósito de este documento señala la señora Procuradora que el mismo no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 549 del Código Judicial, concerniente a la rescisión del depósito de una cosa porque esto implica "la presentación de una Copia Auténtica de la Diligencia (expedida por el Tribunal que decretó la medida cautelar) de un Depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito". Agrega que como al pie de la copia de la diligencia de avalúo y depósito presentada por el incidentista, no aparece una Certificación autorizada del respectivo Juez y su Secretario, expresando "la fecha en que conste que el Depósito a que la diligencia se refiere existe aún", tampoco se ha cumplido con lo establecido en el artículo 549 del Código Judicial.

III. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE

A. Juicio Ejecutivo promovido por TEOFILA CURES contra Hernán Hernández.

El Juzgado Municipal del Distrito de Alanje, luego de ser comisionado por el Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, dentro del Juicio Ejecutivo promovido por TEOFILA CURES contra Hernán Hernández, decretó embargo sobre los derechos posesorios de un globo de terreno de aproximadamente 3/4 de hectáreas, ubicado en Mostrenco, Distrito de Alanje y un vehículo Toyota, Land Cruser, de doble tracción, color rojo, matrícula 829664, Motor BJ 50-0215308 (Ver Auto N° 44 de 14 de mayo de 1998, legible a foja 3 del cuadernillo de incidente).

El 19 de mayo de 1998 el Juez Comisionado del Juzgado Municipal de Alanje llevó a cabo la diligencia de Avalúo y depósito de los bienes arriba mencionados, describiéndolos como a continuación se detallan: "un globo de terreno de 8,663 mts2 con 63 centímetros, ubicado en Mostrenco, Distrito de Alanje, comprendido dentro de los linderos siguientes: Norte, Camino Real; Sur, Camino Real; Este, Camino Real de Las Moras y Oeste, Carretera, dentro del globo de terreno, existe una galera con techo de zinc, parte con carriola y mangle, con dos depósitos para herramientas, uno con techo de zinc y el otro un vagón de metal cerrado, la galera tiene sistema eléctrico a este globo de terreno con sus mejoras le damos un valor de tres mil balboas -B/.3,000.00-; un vehículo Toyota Land Cruiser, color rojo, año 78, tamaño 3400, Chasis BJ 40023007, Motor BJ 50-0215308, con sus cuatro -4- llantas lisas, no tiene llanta de repuesto, con una batería de 12 voltios, marca superior, no porta matrícula de circulación, capota deteriorada, a este vehículo le asignamos un valor de cuatro mil balboas -B/.4,000.00-." (fs. 1-2 del cuadernillo de incidente)

B. Proceso seguido a Hernán Hernández por el Banco de Desarrollo Agropecuario de Chiriquí.

A foja 10 del expediente que contiene este proceso ejecutivo, reposa el contrato privado de préstamo celebrado el 28 de mayo de 1990, entre el Banco de Desarrollo Agropecuario y el señor Hernán Darío Hernández, por la suma de B/.25,753.00. Este contrato se garantizó con prenda sobre determinados bienes semovientes (20 vacas), "prenda" sobre los derechos posesorios sobre 1.5 hectáreas de terreno ubicadas en Mostrenco con mejoras dentro de la finca como galera, material de hierro y bodegas y, además, sobre un automóvil Jeep Toyota, color rojo, motor # B00225308, año 1978 con capacidad para 5 pasajeros. Este préstamo, también se garantizó con 60 hectáreas de futura cosecha de arroz y una fianza personal por parte del señor Felipe Rojas Mendoza.

Ante el incumplimiento de esta obligación por parte del señor Hernández, el Juez Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, mediante Auto N° 84-98 fechado 10 de diciembre de 1998 libró mandamiento de pago contra Hernán Darío Hernández y a favor de esta entidad crediticia por la suma de B/.10,540.32 en concepto de capital (B/.8,839.17) e intereses (B/.1,701.15) más los gastos judiciales y de cobranza fijados provisionalmente por la suma de B/.883.00. En el Auto mencionado también se decretó formal embargo sobre los siguientes bienes: derechos posesorios de aproximadamente 1.5 has., ubicados en Mostrenco, Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí; un Jeep Toyota Land Cruiser, año 1978, Motor 00225308, Chasis BJ 40-023007; 20 vacas de 2 1/2 años de edad y, la futura cosecha de 60 hectáreas de arroz, 5,400 quintales de arroz en cáscara (fs. 12-13 del juicio por cobro coactivo).

El 20 de abril de 1999, la alguacil ejecutora del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Chiriquí, en compañía de los peritos avaluadores y depositarios procedió a practicar la diligencia de inventario, avalúo y depósito judicial sobre los bienes, así detallados: "derechos posesorios de aproximadamente 1.5 hectáreas, ubicadas en Mostrenco, Distrito de Alanje, el área a evaluar, terreno plano, tiene árboles frutales, está cercada a tres cuerdas, estacas vivas, en regular estado, posee tendido eléctrico y se encuentra ubicada dentro de los siguientes: NORTE: Camino Real, Sur: Camino Real, Este: Camino

hacia Las Moras, Oeste: Carretera hacia Alanje. Se le da un valor real de B/.2,000.00 la hectárea. La misma tiene una galera en regular estado, utilizando como taller de soldadura, con techo de zinc".

Durante la práctica de esta diligencia, la Secretaria Ad-Hoc del Juzgado dejó constancia de que el señor Hernán Darío Hernández, se presentó al lugar de los hechos mostrando una fotocopia de la diligencia de avalúo y depósito practicada por el Juzgado Municipal de Alanje el 19 de mayo de 1998. Sobre el particular dicha funcionaria aseveró: "dicha fotocopia adolece de defecto de no contener las prescripciones establecidas por el Código Judicial acerca de la vigencia de la medida cautelar; no se le aprecia ninguna certificación, sellada por los funcionarios que la decretaron razón por la cual se dispone continuar con la diligencia..."

No obstante lo anterior, la diligencia fue suspendida porque el señor Hernán Hernández, no puso a disposición de los miembros del Banco de Desarrollo Agropecuario, el automóvil Toyota, Land Cruiser, así como tampoco dio una respuesta explícita sobre la existencia del ganado que garantizaba parte del crédito que se le estaba cobrando.

La actitud asumida por el ejecutado, trajo como consecuencia que la Jueza Ejecutora del Banco de Desarrollo Agropecuario le solicitara a la Policía del Distrito de Alanje que pusiera fuera de circulación y a su disposición al mencionado automóvil, para así avaluarlo, inventariarlo y depositarlo.

El 28 de abril de 1999, los miembros del Banco de Desarrollo Agropecuario, Región de Chiriquí, continuaron con la diligencia de inventario, avalúo y depósito sobre el Toyota Land, Cruiser en los siguientes términos: "se trata de un vehículo, marca Toyota, modelo Land Cruiser, color Rojo, Año 1978, motor 00225308, chasis BJ 40-023007, Diesel, con llantas delanteras y traseras radiales, las primeras en buen estado, las segundas en estado regular, una llanta de repuesto en estado regular, 5 rines niquelados buenos, carrocería reconstruida en estado regular, luces delanteras principales en buen estado, las luces direccionales, luces de estacionamiento y luces de alto no funcionan, no tiene retrovisor derecho, retrovisor izquierdo ni retrovisor interno, a la puerta lateral izquierda le falta la manigueta, los asientos están en buen estado, no tiene cinturones de seguridad, batería 24-12, toma corriente de arranque incorporado, arranque normal, escobillas en mal estado, no tiene cauchos de las puertas, la capota delantera está rajada, no tiene placa, barra de seguridad interna (volteo); valor del vehículo B/.2,000.00". (fs.34-35)

C. Acción de Amparo interpuesta por la señora TEÓFILA CURES BEITIA.

Como consecuencia de la actuación procesal ejercida por el Banco de Desarrollo Agropecuario, la señora TEÓFILA CURES BEITIA interpuso una acción de amparo de garantías constitucionales a su favor y contra la Directora Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario en función de Jueza Ejecutora, ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

No obstante lo anterior, el ejercicio de esta acción constitucional fue declarada no viable por dicho Tribunal, mediante Resolución fechada 21 de mayo de 1999, considerando que la accionante podía recurrir ante la jurisdicción coactiva por medio de un incidente a tenor de lo dispuesto en el artículo 1004 del Código Judicial (fs. 39-46 del juicio por jurisdicción coactiva iniciado por el Banco de Desarrollo Agropecuario).

IV. DECISIÓN DE LA SALA

En el caso en estudio se observa que el señor Hernán Darío Hernández está siendo ejecutado, simultáneamente, por la señora TEÓFILA CURES BEITIA y por el Banco de Desarrollo Agropecuario.

Ante lo expuesto, ambos ejecutantes han embargado y depositado bienes del

señor Hernández, con el fin de cobrar los créditos adeudados por éste, además, de los intereses y costas judiciales.

Ahora bien, la señora Teófila Cures Beitia recurre a esta Sala a través del presente incidente de rescisión de depósito, considerando que los bienes embargados y depositados dentro del juicio ejecutivo instaurado por ella en el Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí son los mismos que el Banco de Desarrollo Agropecuario embargó y depositó mediante diligencias fechadas 10 de diciembre de 1998, 20 y 28 de abril de 1999.

Al respecto, esta Sala debe señalar que no comparte el criterio expuesto por la incidentista. Veamos por qué.

1. Diferencias entre las diligencias de inventario, avalúo y depósito practicadas por el Juzgado Municipal de Alanje y el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario:

El 19 de mayo de 1998, durante la práctica de la diligencia de avalúo y depósito, los peritos designados por el Juzgado Municipal de Alanje describieron los bienes declarados como embargables por el señor Hernán Hernández dentro del proceso ejecutivo promovido por la incidentista, como a continuación se expresa:

a) Dentro del globo de terrero ubicado en Mostrenco hay una galera con techo de zinc -una parte con carriola y otra mangle- y tendido eléctrico, dos depósitos para herramientas, uno de los cuales tiene techo de zinc y el otro es un vagón de metal cerrado.
b) El automóvil Toyota Land Cruiser tiene número de motor BJ 50-0215308, no tiene llanta de repuesto y batería es de 12 voltios.

Posteriormente, el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario de Chiriquí, en las diligencias de avalúo y depósito practicadas el 20 y 28 de abril de 1999, se refirió al globo de terreno situado en Mostrenco y al automóvil Toyota Land Cruiser, considerados por la incidentista como los mismos embargados y depositados dentro del proceso ejecutivo promovido por ella, de la siguiente manera:

a) El terreno es plano con árboles frutales, cercado a tres cuerdas, estacas vivas, en regular estado y con tendido eléctrico, además, de tener una galera en regular estado con techo de zinc, la cual es utilizada como taller de soldadura.
b) La numeración del motor del automóvil Toyota Land es 00225308, tiene llanta de repuesto en estado regular y la batería es de 24-12 voltios.

Como se observa, existen diferencias sustanciales en la descripción de los bienes depositados por ambos juzgados. La descripción del terreno y sus mejoras no son coincidentes y, en el caso específico del automóvil Toyota Land Cruiser, la Sala estima importante señalar que la numeración del motor de un auto es lo que lo identifica y en el presente caso ésta no es igual en las dos diligencias de depósito.

En consecuencia, la Sala concluye que como el incidentista no ha probado que los mismos bienes han sido depositados por el Juzgado Municipal de Alanje y el Banco de Desarrollo Agropecuario, no procede la rescisión de depósito.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el Incidente de Rescisión de Depósito interpuesto por el licenciado Oldemar O. González en representación de TEÓFILA CURES BEITIA dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo, que el Banco de

Desarrollo Agropecuario, Región de Chiriquí le sigue a HERNÁN DARÍO HERNÁNDEZ.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR ELÍAS SOLANO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS LE SIGUE AL BANK OF CREDIT AND COMMERCE INTERNATIONAL (BCCI). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, actuando en nombre y representación del señor Omar Elías Solano ha presentado incidente de rescisión de depósito dentro del juicio que por jurisdicción coactiva le sigue la Administración Regional de Ingresos al Bank of Credit and Commerce International (Overseas) LTD. Panamá, en adelante BCCI.

El incidentista fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

Que la Administración Regional de Ingresos actuando como Juez Ejecutor, a través de la licenciada Luz Gómez, dictó la Resolución No. 213-983, de 3 de marzo de 1999, dentro del proceso que por vía del cobro coactivo le sigue dicha institución al BCCI, en liquidación. En esa Resolución se ordenó al Banco Nacional de Panamá que le entregara a la Administración Regional de ingresos mediante cheque certificado, la suma de B/.4,992,784.32, más intereses a la fecha, de los depósitos del BCCI depositados en el Banco Nacional (cuenta No. 231-04 depósito a plazo de bancos locales).

Añade el actor que los referidos fondos forman parte de la cuantía dineraria que por monto de B/.7,603,606.34 cauteló al BCCI la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, y que esta entidad oficial puso posteriormente a disposición de la Administración Regional de Ingresos.

De acuerdo a quien incidenta, la Resolución No. 213-983, de 3 de marzo de 1999, del Juzgado Ejecutor, ordenó que la suma de B/.2,510,748.72, excedente de la cuenta del BCCI, quedaría cautelada "... a favor de la Dirección General de Ingresos", circunstancia que fue comunicada al Banco Nacional de Panamá depositario de los fondos del liquidado, por medio de Nota No. 213-985, de 3 de marzo de 1999, de la Jueza Ejecutora. Esto fue avisado por escrito, además, al Juez Cuarto de Circuito Civil, como liquidador judicial, y al licenciado Edgardo Lasso Valdés, liquidador del BCCI, nombrado por el Juzgado antes indicado.

El apoderado judicial de la parte actora esgrime que su representado promovió un proceso ordinario de mayor cuantía contra el BCCI. En dicho proceso se decretó a su favor una medida de conservación y protección en general decretada por el Juez Tercero de Circuito Civil por un monto de B/.1,537,576.44, para garantizar las resultas del juicio, sobre fondos del BCCI en el Banco Nacional de Panamá, mediante auto No 3547, de 21 de noviembre de 1997, ampliada a través de auto No. 3636, de 2 de diciembre del mismo año.

Asegura que la medida cautelar fue comunicada por el Juez que la decretó

a la Comisión Bancaria Nacional, al Banco Nacional de Panamá, al Juez Cuarto de Circuito Civil y al señor Edgardo Lasso Valdés, en su condición de rectora del sistema, tenedor de los fondos del BCCI, Tribunal de la liquidación, y liquidador del banco, respectivamente.

El liquidador del BCCI dio contestación al Juzgado Tercero de Circuito Civil mediante Nota de 12 de diciembre de 1997 recibida en el Juzgado el día 15 de diciembre, en el sentido que se procedió a aplicar lo ordenado mediante Oficio 2866, de 2 de diciembre de 1997, para retener o conservar dentro de la liquidación la suma de B/.1,537,576.44, y en consecuencia dichos fondos están retenidos a disposición del Tribunal, "desde el día de recibido dicho Oficio de ampliación". El incidentista agrega que esto significa que la medida precautoria produjo sus efectos.

Asevera que el Banco Nacional de Panamá atendió la noticia comunicada por el Juzgado Tercero al acusar recibo mediante Nota 97 (2200-01) 2101, fechada el 11 de diciembre de 1997, de los Oficios No. 2802 y 2867, de 21 de noviembre y 2 de diciembre de 1997, lo que constituyó el depósito y el perfeccionamiento de la medida cautelar, según el artículo 526, numeral 4, del Código Judicial.

Añade que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, cuatro meses después de concedida la citada medida cautelar, por medio de Resolución No. 93-98, de 4 de marzo de 1998, ordenó la cautelación de los fondos del BCCI en el Banco Nacional de Panamá por monto de B/.7,603,606.34 y por medio de Oficio No 251-DRP-C-50, de 5 de marzo de 1998, giró instrucciones al depositario de dichos fondos para que pusiera los mismos a sus órdenes.

Por su parte, el Banco Nacional de Panamá enteró de esto al Juzgado Cuarto de Circuito Civil que conocía de la liquidación, mediante Nota No. 08 (03-000-01) de 15 de marzo de 1998, a lo cual este Juzgado respondió con Oficio No. 918 de 10 de marzo de ese año, entre otras cosas reseñando que se trataba de una tercera medida cautelar de la que no está exenta un banco en liquidación; que no existía conflicto de jurisdicción entre la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y ese Juzgado; además que había tomado nota y registrado la medida cautelar adoptada por aquella entidad oficial en la misma forma que esperaba lo había hecho el Liquidador del BCCI, y que correspondía al Banco Nacional exponer a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial sus apreciaciones sobre la cautela.

Quien propone este incidente concluye la exposición de los hechos afirmando que la Resolución No. 213-983, de 3 de marzo de 1999, expedida por la Administración Regional de Ingresos desconoce la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Tercero de Circuito Civil, pese a ser ésta una cautela anterior y debidamente constituida, por lo tanto solicita que se rescinda aquella decisión que pesa sobre la suma de B/.1,537,576.44, por estar cautelada con anterioridad a favor de Omar Elías Solano, de los B/.2,510,748.72, a que se refiere la Resolución No. 313-983, de 3 de marzo de 1998, que la misma Juez Ejecutora mantuvo cautelada en haber de la Dirección General de Ingresos.

El incidentista aporta, en concepto de prueba, un número plural de copias autenticadas entre éstas las resoluciones, notas y oficios que cita en los hechos de la demanda, las que fueron admitidas a través de resolución de esta Sala fechada el 12 de julio de 2000, al igual que fue admitido como prueba el expediente por cobro coactivo aducido por la Procuraduría de la Administración.

Mediante providencia de 12 de julio de 1999, la demanda incidental fue corrida en traslado a la Procuraduría de la Administración y al Juzgado que adelanta el juicio por cobro coactivo. Este Juzgado no contestó el incidente mientras que la Agencia del Ministerio Público sí lo hizo a través de la Vista Fiscal No. 567, de 2 de diciembre de 1999 (Cfr. fojas 77 a 85).

Según la Procuraduría de la Administración, no le asiste razón al incidentista y para ello se basa esencialmente en la Nota No.97 (2200-01) 2101, de 11 de diciembre de 1997 (de fojas 8), dirigida por el Banco Nacional de Panamá

al Juez Tercero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, mediante la cual el Gerente de Operaciones de dicho banco le informa al Juzgador que no puede acatar "sus instrucciones en los oficios 2802 y 2867 que nos atañen", situación que a criterio de la Procuraduría significa que la medida de protección y de conservación en general a favor de Omar Elías Solano no quedó debidamente constuida. Afirma que "el aducido depósito de fecha anterior no quedó apropiadamente establecido, por lo que no puede oponerse a las medidas de persecusión incoadas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, a través de una acción de reintegro, posteriormente ejecutadas por la Administración Regional de Ingresos coactivamente" (foja 84).

La Procuraduría de la Administración fundamenta su opinión en el artículo 526, numeral 4, del Código Judicial, y al término de su Vista, pide a la Sala que declare no probado el incidente de rescisión de depósito bajo análisis.

Luego del recuento de las principales constancias procesales, la Sala pasa a decidir el fondo de la cuestión accesoria propuesta dentro del proceso que por vía del cobro coactivo le sigue la Administración Regional de Ingresos al BCCI y otros.

Considera la Sala que le asiste razón al incidentista toda vez que el mismo ha probado a través de los documentos aportados al expediente que la medida cautelar decretada por el Juzgado Tercero de Circuito Civil mediante auto No. 3547, fechado el 21 de noviembre de 1997 (foja 1), y ampliada por medio del auto No. 3636, de 2 de diciembre de ese año (foja 8), consistente en una medida de conservación y protección en general sobre fondos del BCCI depositados en el Banco Nacional de Panamá, que en conjunto asciende 1,537,576.44, es anterior a la medida cautelar dispuesta por la Administración Regional de Ingresos mediante Resolución No.213-983, de 3 de marzo de 1999, expedida dentro del proceso coativo que le sigue esa institución al referido banco en liquidación.

Debe señalarse que sobre parte de los fondos del BCCI por monto de B/.7,603.606.34 que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial mediante el proceso surtido reintegró, a través de Resolución No. 348-98, de 18 de agosto de 1998 (Cfr. fojas 26 y ss) al patrimonio estatal, según Resolución DRP No. 93-98, de 4 de marzo de 1998, la Administración Regional de Ingresos giró instrucciones al Banco Nacional de Panamá para que pusiera a sus órdenes, de esa suma, en cheque certificado, la cantidad de B/.4, 992,784.32, tal como consta en la Nota No. 213-985, de 4 de marzo de 1999, que la Administradora Regional de Ingresos, en funciones del Juez Ejecutora, envió al entonces Gerente General del Banco Nacional de Panamá (Cfr. fojas 50-51).

En tal sentido, la liberación del excedente por monto de B/.2,510, 748.72, de la cuenta del BCCI en el Banco Nacional de Panamá, que la Administración Regional de Ingresos mantuvo cautelada a órdenes del Estado por medio de la Resolución acusada, de los cuales el incidentista reclama la suma de B/.1,537,576.44, según las medidas cautelares dispuestas a través de la jurisdicción ordinaria a su favor, es procedente, porque la cautela ordenada por la Administración sobre ese excedente de dinero es posterior a la dispuesta por el Tribunal de la jurisdicción común.

El artículo 526 del Código Judicial establece diversas maneras como se contituye el depósito judicial tomando en consideración la naturaleza del objeto o bien sobre el cual recae la medida, y entre las mismas, el numeral 4 cuando lo secuestrado es dinero, valores al portador o bonos del Estado, preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 526. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el depósito judicial también se constituye de la siguiente manera:
> ...
> ...
> ...
> 4. Cuando un tercero tenga dinero, valores, créditos, derechos u

> otros bienes muebles pertenecientes al demandado o presunto demandado, el depósito se entiende constituido cuando la orden judicial es entregada a dicho tercero, el cual queda de inmediato constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las responsabilidades de la ley. En caso de secuestro de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el Juez ordenará que se remita al Banco Nacional de Panamá, salvo que se encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida en depositaria. En estos casos el que reciba la orden de secuestro deberá extender también cause de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y la hora de su recepción y la firma y nombre y cargo de la persona que la recibe. Dentro de los dos días siguientes al recibo de la orden de secuestro, la persona o entidad que queda constituida en depositaria deberá dar respuesta al Tribunal poniendo a órdenes de éste la cosa secuestrada o indicándole cualquier circunstancia que de alguna manera afecte afecte el debido cumplimiento de dicha orden. Las sumas de dinero secuestradas y que están depositadas en el Banco Nacional o en alguna otra entidad bancaria, continuarán devengando por el término acordado los intereses pactados y en defecto de éste, el interés que prevalezca en la plaza para los depósitos a término, pagaderos a la entrega del dinero secuestrado".

En el presente caso estamos ante una medida de secuestro de dinero perteneciente al BCCI depositados en el Banco Nacional de Panamá. En consecuencia, cuando dicho Banco recibió la orden antes referida por parte del Juez que ordenó la medida cautelar quedó, por imperio del artículo del Código Judicial citado, constiuido el depósito judicial y en depositaria la entidad pública bancaria.

A foja 17 del cuaderno incidental reposa copia debidamente autenticada de la Nota de 12 de diciembre de 1997 suscrita por el Liquidador del BCCI, señor Edgardo Lasso Valdés, dirigida al Juzgador que decretó la medida cautelar citada, documento cuyo tenor literal expresa:

> "La presente es para comunicarle al tribunal por usted encabezado que el Bank of Credit and Commerce International (Overseas), Limited, del cual soy Liquidador, ha procedido a aplicar lo ordenado a través del Oficio No. 2866, de 2 de diciembre de 1997, a efectos de retener o conservar, dentro de esta Liquidación, la suma de B/.1,537,576.44 (Un millón quinientos treinta y siete mil quinientos setenta y seis Balboas con cuarenta y cuatro centésimos).
> Como consecuencia de ello, dichos fondos, desde el día de recibido dicho Oficio de ampliación, se encuentran retenidos, a disposición de este tribunal".

Este documento presentado al Tribunal el 15 de diciembre de 1997, comprueba que el Liquidador dio cumplimiento a la orden del Tribunal producto de la medida precautoria decretada por éste en favor del hoy incidentista, desde que aquél recibió mediante Oficio la comunicación u orden del Juzgador.

En consecuencia, procede declarar probado el incidente de rescisión de depósito examinado.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre ede la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADO el incidente de rescisión de depósito presentado por Omar Elías Solano por intermedio de apoderado judicial, y RESCINDE EL DEPOSITO JUDICIAL sobre la suma B/.1,537,576.44, remanente de la cantidad global de B/.7,603,606.34, que en un inicio cauteló la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República al BCCI, mediante Resolución DRP No. 93-98, de 4 de marzo de 1998, y posteriormente mantuvo la Administración Regional de Ingresos sobre el citado remanente, por

medio de la Resolución No. 213, de 3 de marzo de 1999, dentro del proceso ejecutivo que por cobro coativo le sigue esta última al Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. (BCCI) y otros.

Notifíquese y Comuníquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ERNESTO GOTTI, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ernesto Gotti, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia excepción de inexistencia de la obligación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Hipotecario Nacional.

El licenciado Gotti sustenta excepción de inexistencia de la obligación señalando que el contrato de préstamo con garantía hipotecaria fue celebrado con la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (ANAP), mediante escritura pública N 4162 de 2 de abril de 1985, instrumento que fue adicionado y corregido, mediante escritura pública N 776 de 19 de febrero de 1992. Además, indica que no aparece acreditado o no consta en el expediente principal una escritura pública u otro acto legal para que pueda presumirse la existencia de una obligación jurídica entre el tercero, Banco Hipotecario Nacional y Ernesto Gotti.

La Sala debe examinar si procede la interposición de la excepción de inexistencia de la obligación.

Advierte la Sala que de fojas 1 a 11 del expediente que el Banco Hipotecario Nacional le sigue a Ernesto Gotti, aparece la Escritura Pública N°4162 de 2 de abril de 1985, por la cual "la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos para la Vivienda (ANAP) de su finca No.22,917 ubicada en la provincia de Panamá segrega un lote de terreno, declara mejoras sobre el mismo y lo vende a Ernesto Antonio Gotti Castillo, quien celebra con la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos para la Vivienda un Contrato de Préstamo con garantía hipotecaria y anticrética sobre la finca que adquiere". En la cláusula décimo segunda de dicha escritura, la parte deudora renuncia al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo y conviene que en caso de que sea rematado el bien dado en garantía, la base del remate sea por la suma por la cual se instaure la demanda.

Cabe señalar que mediante la Escritura Pública No. 776 de 19 de febrero de 1992, se corrigió un error incurrido en la Escritura Pública N°4162 de 2 de abril de 1985. La cláusula segunda de la Escritura No. 776 indica que por un error involuntario no se anotó correctamente la descripción del lote 89 de la finca 22917 y otros datos.

Por otro lado, por medio de la Escritura Pública No. 262-36-1293 de 25 de septiembre de 1992, "la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamos para la Vivienda, cede y traspasa sus créditos hipotecarios, cartera de préstamos hipotecarios a favor del Banco Hipotecario Nacional, en pago parcial de las

obligaciones". En la cláusula cuarta de dicha escritura consta que uno de los créditos hipotecarios que se le traspasa al Banco Hipotecario es la deuda contraída por Ernesto Antonio Gotti Castillo. Además, en la cláusula sexta se señala que el Banco Hipotecario se subroga en todos los derechos y obligaciones que poseía la asociación con los deudores y, por lo tanto, el banco tendrá todas las acciones principales y accesorias que le correspondían a la asociación en los términos pactados en los respectivos documentos notariales.

Es necesario destacar que el artículo 1768 del Código Judicial prevé claramente que en caso de renuncia al domicilio y los trámites del proceso ejecutivo, tal como ocurre en este caso, no se podrán proponer incidentes ni otras excepciones que no sean las de pago y prescripción. Dicha norma dispone lo siguiente:

> "Artículo 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidentes ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.
> Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681." (El subrayado es de la Sala)

En razón de lo anteriormente expuesto, la Sala estima que la excepción de inexistencia de la obligación que se ventila en esta oportunidad, es manifiestamente improcedente y como tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 697 del Código Judicial, debe ser rechazada de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la excepción de inexistencia de la obligación interpuesta por el licenciado Ernesto Gotti, actuando en su propio nombre y representación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Hipotecario Nacional.

Notifiquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA JOVANÉ BIEBERACH & VALDÉS ROCA, EN REPRESENTACIÓN DE MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR Y JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Jované Bieberach & Valdés Roca, actuando en nombre y representación de MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR Y

JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema excepción de prescripción dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Ministerio de Comercio e Industrias.

La presente excepción de prescripción fue admitida, mediante la resolución de 22 de mayo de 2000, y se le corrió traslado de la misma al Juez Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias y a la Procuradora de la Administración.

La firma Jované Bieberach & Valdés Roca fundamenta la excepción de prescripción en los siguientes términos:

"PRIMERO: En el año 1984 en virtud de un programa de préstamos que desarrollaba la Dirección de la Pequeña Empresa del Ministerio de Comercio e Industrias, la empresa SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A., recibió un préstamo comercial por un monto de B/.7,596.72.
SEGUNDO: A fin de desembolsar el mencionado préstamo, la Dirección de la Pequeña Empresa del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, exigió que los señores DOMICIANO DEL C. JAÉN (Q.E.P.D.), MARÍA DE LA CRUZ AGUILAR DE JAÉN (Q.E.P.D.), MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR y JACQELINE JAÉN AGUILAR, se constituyeron en co-deudores solidarios de SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A..
TERCERO: En 1984, SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A., representada por su Representante Legal DOMICIANO DEL C. JAÉN, el propio DOMICIANO DEL C. JAÉN, MARÍA DE LA CRUZ AGUILAR DE JAÉN, MIRIAM LADY JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR y JACQELINE JAÉN AGUILAR de FARRUGIA, firmaron un pagaré a favor del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)-DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA.
CUARTO: De acuerdo con el pagaré suscrito mencionado en el HECHO TERCERO anterior, el plazo para el pago de la obligación adquirida por SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A., era de tres (3) años, que empezarían a contarse en junio de 1985.
QUINTO: En 1999 el MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)-DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA, inició, en el Juzgado Ejecutor que funciona dentro de dicho Ministerio, un Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva en contra de SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A., DOMICIANO DEL C. JAÉN, MARÍA DE LA CRUZ AGUILAR DE JAÉN, MIRIAM LADY JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN y JACQELINE JAÉN de FARRUGIA.
SEXTO: Mediante Resolución (Auto) dictado el día 12 de marzo de 1998-----el Juzgado Ejecutor del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, libró mandamiento de pago en contra de SERVICIOS PROFESIONALES JAÉN, S. A., de DOMICIANO DEL C. JAÉN, de MARÍA DE LA CRUZ AGUILAR DE JAÉN, de MIRIAM LADY JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN y JACQELINE JAÉN AGUILAR , hasta por la suma de B/8,629.63 que representa capital, , intereses, y gastos de ejecución a favor del Ministerio de Comercio e Industrias.
SÉPTIMO: De manera inexplicable, el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias, en el mismo auto que libra mandamiento de pago en contra de las demandadas, decreta EMBARGO sobre el 15% del excedente del salario mínimo que devengan Jacqueline Aguilar en el Banco General, S. A. y Kelsey Marilín Jaén en la empresa Cambefor & Boza.
OCTAVO: El día 12 de marzo de 1998 el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias emitió los oficios N JE-101-98, dirigido a la gerencia del Banco General, S. A. y N JE-100-98 dirigido a la Gerencia de Cambefor & Boza ordenando el descuento del 15% del excedente del salario que devengan en dichas empresas Jacqueline Jaén y Kelsey Marilín Jaén, respectivamente, y ordenando también a dichas empresas que remitan los descuentos que el efectúen al MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS.
NOVENO: Lo que debió hacer el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias, fue decretar una medida cautelar de secuestro

y no de EMBARGO como lo hizo, y ordenarle a las empresas donde trabajaban las demandadas que hicieran el descuento judicial que contempla la ley y mantener dichos descuesntos a disposición del Juzgado hasta segunda orden.
DÉCIMO: A tres (3) de las demandadas, es decir a MIRIAM LADY JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN y JACQELINE JAÉN AGUILAR de FARRUGIA se les notificó el día 17 de febrero del 2000 el auto que libró mandamiento de pago dictado el día 12 de marzo de 1998.
DÉCIMO PRIMERO: El último abono que había recibido el MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS (MICI)-DIRECCIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA, al préstamo otorgado a SERVICIOS PROFESIONALES JAEN, S. A. fue en 1984.
DÉCIMO SEGUNDO: Los artículos 1649, 1649A y 1650 del Código de Comercio preceptúan lo siguiente:
"De los términos ARTÍCULO 1649. Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles serán fatales e improrrogables y correrán indistintamente contra cualquiera clase de personas, presentes o ausentes, no cabiendo beneficio de restitución por causa alguna, título ni privilegio."
"ARTÍCULO 1649-A. La prescripción se interrumpirá por la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, por el reconocimiento de las obligaciones o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
Se considera la prescripción como no interrumpida por la demanda si el actor desistiere de ella, o fuere desestimada, o caducara la instancia.
Empezará a contarse nuevamente el términos de la prescripción, en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de renovación, desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo de cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido."
"Término para la prescripción ordinaria. Artículo 1650. El término para prescripción de acciones comenzará a correr desde el momento en que la obligación sea exigible.
La prescripción ordinaria en materia comercial tendrá lugar a los cinco años. Esta regla admite las excepciones que prescriben los artículos siguientes y las demás establecidas expresamente por la ley, cuando en determinados casos exige para la prescripción más o menos tiempo."
DÉCIMO TERCERO: Los artículos 1668, 1670, 1698, 1707 y 1708 del Código Civil preceptúan lo siguiente:
"Artículo 1668. Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean."
"Artículo 1670. Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, incluso las jurídicas, en los términos prevenidos por la Ley, salvo lo dispuesto en el artículo siguientes.
Queda siempre a salvo a las personas impedidas de administrar sus bienes el derecho para reclamar contra sus representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido la causa de prescripción.
No obstante los dispuesto en los incisos anteriores, las tierras de propiedad de la Nación, de los Municipios y de las demás entidades autónomas y semiautónomas oficiales, son imprescripctibles."
"Artículo 1698. Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley.
"Artículo 1707. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse."
"Artículo 1708. El tiempo para la prescripción de las acciones tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta, corre desde el último pago de la renta

o del interés."
DÉCIMO CUARTO: Los señores Domiciano del C. Jaén (Q.E.P.D.) y María de la Cruz Aguilar de Jaén (Q.E.P.D.) fallecieron en un accidente automovilístico el día 5 de mayo de 1995."

Por su parte, la Juez Ejecutora del Ministerio de Comercio e Industrias se opuso a las pretensiones de los recurrentes, pues señala que la obligación contraída por los mismos no ha prescrito, ya que no han transcurrido los 15 años que señala el artículo 1073 del Código Fiscal para que se produzca la prescripción.

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista N 366 de 12 de julio de 2000, le solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera que declaren no probada la presente excepción de prescripción, pues desde el último abono a la deuda en 1984 hasta la fecha en que se hizo el primer descuento del excedente del salario mínimo a la señora Jaqueline Jaén de Jované el 1 de abril de 1998, no transcurrido el término de 15 años para que se produzca la prescripción.

Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

La Sala observa a foja 1 del expediente ejecutivo, el contrato de préstamo No. 494 de 6 de noviembre de 1984, celebrado entre Sociedad de Servicios Profesionales Jaén, S. A./Domiciano del Carmen Jaén (Q.E.P.D.) y el Ministerio de Comercio e Industrias por la suma de B/7,596.72, pagaderos en un plazo de dos años y seis meses, firmando como co-deudoras las señoras María de la Cruz Aguilar de Jaén (Q.e.p.d.), Miriam Jaén de Jované, Kelsey Jaén y Jacqueline Jaén. En la cláusula N 20 de dicho contrato la parte deudora renuncia a los trámites del juicio ejecutivo, domicilio, reconocimiento de firma.

A fojas 13 y 14 del expediente ejecutivo la certificación de saldo de 9 de septiembre de 1997 en la que se certifica que Servicios Profesionales Jaén, S. A. pagó la suma de B/.63.94 en 1984 y que tiene un saldo de B/7,990.40.

Reposa de fojas 27 a 28 del expediente ejecutivo el Auto No. 47 de 12 de marzo de 1998, mediante el cual el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias libró mandamiento de pago en contra de la sociedad Servicios Profesionales, S. A./DOMICIANO DEL C. JAÉN, decretó embargo sobre el 15% del excedente del salario mínimo de Domiciano del C. Jaén, Kelsey M. Jaén, María de la Cruz Aguilar de Jaén, Mirian M. Jaén de Jované.; y el secuestro sobre cualquier vehículo, cuenta de ahorro corriente, plazo fijo y otros que puedan tener en los Bancos de la República de Panamá; sobre cualquier negocio y bien inmueble, propiedad de Servicios Profesionales Jaén, S. A./Domiciano del Carmen Jaén (q.e.p.d.), la señora María de la Cruz Aguilar de Jaén (q.e.p.d), Kelsey Jaén, Jaqueline Jaén y Miriam Jaén de Jované, deudores. Dicho auto les fue notificado a las señoras Kelsey Jaén, Jaqueline Jaén y Miriam Jaén de Jované el día 17 de febrero de 2000, tal como consta en los sellos de notificación visibles al dorso de la foja 28.

A foja 34 del expediente consta la nota de 18 de mayo de 1998 dirigida a la Juez Ejecutora del Ministerio de Comercio e Industrias y suscrita por el Oficial Jefe de Recursos Humanos del Banco General en la que se indica que se procedió a efectuar descuentos desde el 1 de abril de 1998 por la suma de veinticinco balboas (B/.25.00) mensuales.

Cabe señalar que, tal y como lo advierte la Procuradora de la Administración, el préstamo No. 494 fue otorgado por el Ministerio de Comercio e Industria como mejora a la pequeña industria, constituyéndose en un contrato de servicio público y no mercantil. Esta Sala se ha pronunciado al respecto, mediante sentencia de 20 de marzo de 1995, de la siguiente forma:

"Del estudio del expediente, concluye esta Sala que no le asiste razón al excepcionante, dado que si bien es cierto que ha sido jurisprudencia reiterada que los actos de comercio ejecutados por dependencias del Estado están sujetos a las disposiciones de la legislación mercantil, como lo dispone el artículo 32 y a ellos se les aplica el término de prescripción de 5 años contenido en el artículo 1650 de la misma excerta legal, no es menos cierto que la Sala Tercera ha establecido el criterio que los contratos celebrados por la Administración con fines de servicio público, son contratos administrativos. De lo anterior se colige que si el contrato que celebra la Administración Pública es administrativo, la compra o venta que se efectúe a través del mismo de ningún modo puede ser catalogado como acto de comercio, y por ende, no está regulado por la legislación mercantil."

Una vez efectuado el estudio del expediente concluye la Sala que la excepción de prescripción interpuesta por el recurrente no ha sido probada, ya que desde el último abono a la deuda en 1984 hasta el 12de marzo de 1998, fecha en la que se libra mandamiento de pago en contra de la sociedad Servicios Profesionales Jaén, S. A./DOMICIANO DEL CARMEN JAÉN (q.e.p.d), no ha transcurrido el término de quince (15) años para que se produzca la prescripción de la obligación.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por la firma Jované Bieberach & Valdés Roca, actuando en nombre y representación de MIRIAM JAÉN AGUILAR DE JOVANÉ, KELSEY MARILYN JAÉN AGUILAR Y JACQUELINE JAÉN AGUILAR DE FARRUGIA, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue Ministerio de Comercio e Industrias.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA AIDIL CASTILLO GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE TOMAS EMILIO DE SEDAS, CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE ABRIL DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: TOMAS EMILIO DE SEDAS -VS- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y ELECTRIFICACION. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

La licenciada Aidil Castillo García, apoderada especial de TOMAS EMILIO DE SEDAS RAMOS, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 5 de abril de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por Tomás Emilio De Sedas contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Se trata de un proceso laboral ejecutivo promovido por el señor Tomás Emilio De Sedas Ramos contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.), a fin de que se le reintegre a sus labores habituales, con pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la

fecha de reintegro efectivo, más las costas, gastos e intereses.

El juzgador de primera instancia declaró que había operado la excepción de cosa juzgada, absolviendo por lo tanto al I.R.H.E. de la demanda ejecutiva presentada en su contra; y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial confirmó dicha sentencia en todas sus partes.

Antes de resolver el presente recurso de casación laboral, la Sala observa que el mismo tiene errores que lo hacen inadmisible a la luz de nuestro ordenamiento jurídico laboral, por las razones que a continuación se explican.

La parte actora se ha limitado a citar como violadas disposiciones procedimentales como lo constituyen los artículos 991, 993, 994, 995, 996, 1008, 1010 y 1012 del Código de Trabajo, las cuales no son revisables en un recurso de casación, y no cita ni explica qué norma laboral que consagre derechos subjetivos fue violada por la resolución recurrida, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 926 del Código de Trabajo.

El recurrente omite acompañar las normas adjetivas con las sustantivas, a pesar de que a foja 2 del libelo de casación expresó lo siguiente: "Es importante acotar, que la Corte Suprema de Justicia en innumerables ocasiones ha sostenido: ... que las normas adjetivas sobre pruebas, pueden servir de medios para demostrar la violación de las disposiciones sustantivas que establecen los derechos que pueden ser reclamados, siempre que se acompañen, unidas con las adjetivas" (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 8 de enero de 1992, Registro Judicial, Enero, 1992, página 2).

Estos conceptos de la máxima Corporación de Justicia, se aplican directamente sobre las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales de trabajo en este Proceso Ejecutivo, en que a través de la inobservancia de las normas adjetivas o de procedimiento, se ha visto conculcado el derecho sustancial que judicialmente le asiste al demandante, para hacer ejecutivamente efectivo los derechos de reintegro y pago de salarios caídos que judicialmente le fueron reconocidos por la Junta de Conciliación y Decisión No.4, mediante Sentencia No. PJ-4 de 30 de septiembre de 1987".

No obstante lo anterior, el casacionista no cita como infringidas disposiciones sustantivas.

La Corte ha manifestado en abundante jurisprudencia, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad. en caso de que se considere que aquéllas han sido transgredidas.

El Tribunal de casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Cfr. sententencias de 31 de julio de 1998, 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

En esa misma línea de pensamiento, tenemos que cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, según se infiere del párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo. Esta disposición es del tenor siguiente:

> "Artículo 928: Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales" (Subraya la Sala).

La Sala advierte el hecho de que el recurrente pretende en esta instancia

efectuar una revisión del proceso, lo que a todas luces resulta improcedente, puesto que no constituimos una tercera instancia. La finalidad del recurso extraordinario de casación "tiene por objeto principal enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito a cosa juzgada y en las que, aún sin esa circunstancia, pueden causar perjuicios irreparables o graves por razón de la naturaleza de las respectivas resoluciones" (Artículo 924 C.de T.).

Como antecedentes del caso, tenemos que la Sala se pronunció en el fondo sobre este proceso en sentencia de 25 de mayo de 1992, en un recurso de casación interpuesto por el señor Tomás E. De Sedas contra el I.R.H.E, a través del cual la Sala condenó al I.R.H.E. a pagarle al señor De Sedas décimo tercer mes y la indemnización correspondiente por renuncia justificada; de lo que se colige palmariamente dentro de todo razonamiento jurídico que es cosa juzgada. Posteriormente, en sentencia de 18 de octubre de 1995 la Sala rechazó de plano un recurso de casación presentado por el señor De Sedas contra el I.R.H.E.

Frente a este escenario jurídico, la Sala arriba a la conclusión que es improcedente el presente recurso.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto la licenciada Aidil Castillo García contra la sentencia de 5 de abril de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por Tomás Emilio De Sedas contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JORGE FABIÁN GUTIÉRREZ, EN REPRESENTACIÓN DE FACUNDO APARICIO Y OTROS, CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FACUNDO APARICIO Y OTROS, -VS- CERVECERIA NACIONAL, S. A.; DISTRITBUIDORA COMERCIAL, S. A.; REFRESCOS NACIONALES, S. A.; TRANSPORTE PASADENA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Jorge Fabián Gutiérrez, apoderado especial sustituto de FACUNDO APARICIO y OTROS, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 18 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por FACUNDO APARICIO Y OTROS -VS- CERVECERIA NACIONAL, S. A., DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A., REFRESCOS NACIONALES, S. A. Y TRANSPORTE PASADENA, S. A.

El casacionista persigue con este recurso que la Sala case la sentencia de segundo grado y en consecuencia condene a las demandadas al pago de B/.266,238.96 en concepto de horas extraordinarias laboradas más no pagadas y diferencias dejadas de pagar en concepto de vacaciones y décimo tercer mes, más los intereses establecidos en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo, costas y gastos del proceso.

La parte demandada presentó oposición, por considerar, entre otras cosas,

que "el informe pericial fundamento único del recurrente carece de precisión fáctica y veracidad, por lo que mal puede servir de base o sustento jurídico en un proceso de esta naturaleza, ya que no se puede interpretar ni arribar a conclusiones, suposiciones, inferencias ni deducciones sobre documentos que no permiten establecer el número cierto de horas extraordinarias en forma clara, específica y sin lugar a dudas" (Cfr. foja 19).

Se trata de un proceso laboral promovido por el señor FACUNDO APARICIO y OTROS, contra las mencionadas empresas, a fin de que sean condenadas a pagarles la suma de B/.266,238.96, en concepto de horas extraordinarias laboradas más no pagadas y las subsecuentes diferencias dejadas de pagar en concepto de vacaciones y décimo tercer mes, más los intereses de los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo, costas, gastos del proceso, originadas en el período comprendido entre el 1 de mayo de 1990 y el 28 de febrero de 1995.

El juzgador de primera instancia condenó a las empresas demandadas al pago de B/.3,646.93 en concepto de jornada extraordinaria dejadas de pagar a 52 trabajadores, y las absuelven de las reclamaciones efectuadas por el resto de los trabajadores, y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó dicha decisión.

Procede la Sala a analizar los cargos que se le imputan a la sentencia de segundo grado.

La parte actora sostiene que la sentencia recurrida ha infringido las disposiciones 33, 148, 723, 853 y 864 del Código de Trabajo.

Las infracciones a las disposiciones 33 y 148 serán analizadas en conjunto, toda vez que mantienen un fundamento común, el cual consiste en que se le restó valor al informe pericial rendido mediante Acción Exhibitoria, toda vez que los demandantes trabajaron horas extraordinarias, las cuales no le fueron saldadas con el pago del salario normal ni con el pago de los recargos establecidos en los artículos 33 y 36 del Código de Trabajo.

Manifiesta el casacionista que "en ausencia de un registro tal cual lo señala la Ley, los trabajadores demandantes, laboraban en tiempo extraordinario pero sólo se les remuneraban ocho horas regulares y el incentivo por caja distribuida. Nunca se les remuneró ninguna hora laborada por encima de las ocho (8) horas regulares, ni con el salario regular, ni con los correspondientes recargos. Nada tiene que ver entonces que exista o no autorización expresa para laborar horas extraordinarias, cuando los camiones de la Cervecería Nacional,S. A. y demás demandadas, todos camiones de reparto especialmente construidos para el acarreo de cajas de cervezas o refrescos, salen de la empresa cargados de productos e ingresan a la empresa con cajas de productos vacíos, cuando dichos camiones son cargados en la bodega, llenando de todos los requisitos y controles de bodega y cuando salen a distribuir productos de la empresa con trabajadores de la empresa. Debe pensarse entonces que los trabajadores demandantes cargaron sus camiones sin autorización, y salieron de la empresa sin autorización, para entonces trabajar tiempo extraordinario, que no se le iba a remunerar, generando pingües ganancias para la empresa sin estar autorizados para ello" (Cfr. foja 5 y 6).

Dentro de ese contexto, el Tribunal Superior de Trabajo estimó que "si bien es cierto que el señor ANTOLINO CORELLA, en su informe pericial señala como conclusión a fojas 126 y 127 "que toda la información recopilada, elaborada y presentada está basada en datos y registros y demás documentos contables suministrados por la empresa" y "en base en lo pactado en la cláusula No.27 de la Convención Colectiva de Trabajo y los artículos 33 y 36 del Código de Trabajo", resulta que en los documentos aportados no se indica con exactitud y claridad las horas extraordinarias que se dice laboradas por cada uno de los trabajadores demandantes individualmente considerados, la fecha cierta en que supuestamente prestaron servicios extraordinarios, ni se precisa en forma numérica en tiempo, lugar y modo, las horas, y los días de la semana en que supuestamente se dieron las dichas (sic) horas extraordinarias, todo lo cual hace

imposible su admisión" (Cfr. foja 645).

La Sala comparte el criterio expuesto por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial toda vez que descansa en la posición de esta Corporación frente a la probanza de horas extraordinarias, la cual ha sido de que "las horas extras, supuestamente laboradas, no constituyen un derecho adquirido, razón por la cual, no le corresponde al empleador comprobar que fueron o no trabajadas y pagadas, todo lo contrario, la carga de la prueba del trabajo en jornada extraordinaria corresponde al trabajador, no tienen cabida las presunciones establecidas en los artículos 69 y 737 del Código de Trabajo, a ello, porque no se trata de salario ordinario. No se puede argumentar hechos notorios, se debe demostrar haberlas trabajado y que no hayan sido pagadas, a través de pruebas precisas, ciertas, contundentes y concordantes en tiempo, modo y lugar" (Cfr. Sentencias de 27 de septiembre de 2000, 28 de abril de 2000, 30 de diciembre de 1994, 8 de febrero de 1994).

Observa la Sala, que el recurrente centra sus argumentos, fundamentalmente, en que la sentencia recurrida le restó valor al informe pericial rendido mediante la Acción Exhibitoria celebrada en la empresa demandada, no obstante, la Sala estima que este informe no contiene prueba documental que sustente de forma cierta las sumas dadas por el perito en su informe; es decir los elementos de convicción contentivos del mismo no son contundentes.

En esa línea de pensamiento, la Sala comparte lo esgrimido por el juzgador de segundo grado, pues, el informe del perito no indica de forma palmaria y exacta las horas extraordinarias supuestamente trabajadas de forma individual por cada uno de los demandantes, ni la fecha cierta en que éstas se realizaron, es decir, no se precisa en forma numérica en tiempo, lugar y modo, las horas extraordinarias supuestamente trabajadas.

En las declaraciones del perito señor Vicente A. Corella a fojas 336 consta que al preguntársele "si recabó copias de los documentos que sirvieron de base para las conclusiones de su informe y en caso afirmativo cuáles son estos documentos y qué demuestran" éste respondió lo siguiente: "La realización de nuestro peritaje escogimos al azar fotocopia de los siguientes documentos. 1. ocho fotocopias del control diario de entrada y salida de los camiones. 2. diecisiete registros de entrada y salida (hoja control de garita) para los distribuidores de refrescos y cervezas. 3. veintiocho formularios pago de viáticos, personal de refrescos nacionales. 4. dieciocho formularios control de viáticos los distribuidores de cervezas y sus ayudantes. 5. diez fotocopias de 32 tarjetas donde le ponen la cantidad de cajas entregadas diariamente. 6. control de cajas entregadas donde se especifica el período la fecha (sic) de las cajas y los viajes realizados (5 fotocopias). Todos estos documentos sirven como soporte a la gran cantidad de documentos analizados y nos sirvieron también para llegar a la conclusión de que los trabajadores demandantes laboraron horas extraordinarias y que la empresa tenía conocimiento al efectuar los pagos del viático que dichas horas extraordinarias fueron laboradas".

Tenemos entonces, que las conclusiones vertidas por el señor perito no se sostienen o respaldan en pruebas contundentes, precisas ni ciertas, no es posible entonces establecer de manera indubitable el trabajo extraordinario, toda vez que no hay forma de corroborar de forma fehaciente lo afirmado en el informe.

En ese sentido, la Sala estima que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial no ha infringido las citadas disposiciones, razón por la cual no proceden los cargos endilgados.

En lo atinente al resto de las infracciones alegadas, las cuales constituyen normas de índole procesal, las disposiciones 723 (se refiere a las sanciones para la persona que se niegue o evada la exhibición), 853 (establece la intervención de un solo perito en la diligencia pericial) y 864 (establece cómo el Juez debe valorar el dictamen pericial), la Sala ha sido clara en señalar en diversas ocasiones, con fundamento en el artículo 928 del Código de Trabajo,

que el recurso de casación laboral no procede por errores in procedendo supuestamente cometidos por el Tribunal de instancia; empero, en la presente causa tales normas el recurrente las vincula a otras de carácter sustancial que consagran derechos a favor del trabajador, cargos que fueron desestimados en párrafos precedentes, razón por la cual no entraremos al estudio de las mismas.

Frente a este escenario jurídico, la Sala concluye que la sentencia impugnada se ajusta a derecho, y que los cargos de violación al Código de Trabajo que se endilgaron a la sentencia expedida carecen de asidero legal, por lo que debe negarse la pretensión del casacionista.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral promovido por FACUNDO APARICIO Y OTROS -VS- CERVECERIA NACIONAL, S. A., DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S. A., REFRESCOS NACIONALES, S. A. Y TRANSPORTE PASADENA, S. A.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO MARTÍNEZ, CONTRA LA SENTENCIA DE 19 DE MAYO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DROGUERIA EL JAVILLO -VS- ROBERTO MARTINEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Carlos R. Ayala Montero, apoderado especial del señor ROBERTO MARTINEZ, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 19 de mayo de 2000, dentro del proceso laboral promovido por DROGUERIA EL JAVILLO,S. A. contra ROBERTO MARTINEZ.

Se trata de un proceso abreviado de autorización judicial de despido. El juzgador de primera instancia autorizó a la empresa Droguería El Javillo, S. A. a despedir al trabajador Roberto Martínez, y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la decisión.

El fin perseguido con el presente recurso consiste en que la Sala revoque la sentencia recurrida, y en su lugar, se niegue la autorización de despido al trabajador Roberto Martínez, y se condene a Droguería El Javillo, S. A. al pago de costas.

El licenciado Concepción González, apoderado especial de la empresa Droguería El Javillo, S. A., presentó oposición al recurso de casación laboral y solicita que la Sala no case la sentencia impugnada, y en su lugar, confirme en todas sus partes dicha resolución, a fin de que se autorice el despido del señor ROBERTO MARTINEZ, por haber incurrido en hechos que configuran causal de despido, de conformidad con el artículo 213, acápite A, numeral 5 del Código de Trabajo.

Dentro de este orden de ideas, procede la Sala a efectuarel análisis de los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

La parte actora sostiene que la sentencia por él impugnada ha transgredido las disposiciones 6 y 992 del Código de Trabajo.

El recurrente afirma que la sentencia de segunda instancia ha infringido el artículo 6, "porque no existe la más mínima prueba de que los certificados descritos en la demanda y aportados junto con ella fueron presentados a la empresa por parte del trabajador para justificar su ausencia,...la empresa no aportó ningún documento, testimonio o forma alguna de probar las ausencias del trabajador en las fechas descritas en los certificados médicos de incapacidad...aceptando en vías de discusión y no de concesión que mi cliente en efecto haya presentado los certificados médicos de incapacidad No. 804 y 926, es oportuno destacar que no existe ni por asomo prueba, indicio o hecho o circunstancia alguna que pueda inducir a pensar siquiera que mi cliente tenía conocimiento de la supuesta falsedad de los documentos y que los aportó maliciosamente, con el ánimo de engañar y sacar provecho en beneficio propio"(Cfr. fojas 3 y 4).

El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial sustentó su decisión en los siguientes términos: "Al fijarse los términos de sustentación, el recurrente los dejó precluir. Estos términos se extendían, por cierre de los tribunales (foja 50) hasta el 9 de marzo. El día 13 de marzo (foja 52) se presentó escrito de sustentación de la apelación, el cual fue recibido por insistencia y declarado fuera de término, por lo que se tiene por no presentado.... Dada la ausencia procesal de escrito en donde podamos confrontar la inconformidad con la sentencia, sólo nos resta comprobar que la decisión apelada está conforme con las pruebas aportadas, como en efecto se confirma con los documentos de fojas 16, 29 y 35 que demuestran que, los certificados mencionados eran falsos y que el trabajador nunca fue atendido en esa clínica, según se entiende del último documento" (Cfr. fojas 58 y 59).

El artículo 6 invocado, contiene dos de las manifestaciones o reglas del conocido Principio Tuitivo o Pro Operario de gran relevancia en el Derecho del Trabajo, y que nuestro ordenamiento interno laboral recoge. Dichas reglas son la de "norma más favorable" y "propiamente el "In Dubio Pro Operario"; la primera cobra eficacia en caso de conflicto o colisión entre dos o más disposiciones de trabajo con categoría de Ley, Convención Colectiva o Reglamento; mientras que la segunda, hace referencia a la duda razonable que puede surgir en el ánimo del juzgador o encargado en su momento de aplicar la norma también de prosapia legal, convencional o reglamentaria, supuesto ante el cual debe acogerse la interpretación que sea más beneficiosa para el trabajador. Aquélla es pues, una regla de aplicación, mientras que ésta es una regla o criterio hermenéutico.

La Sala comparte el criterio expuesto por el juzgador de segundo grado, toda vez que en el proceso in examine se concluyó que no se le podía otorgar fe como documentos auténticos a los certificados médicos de incapacidad identificados como No.926 de 19 de enero, 705 de 16 de febrero y 804 de 18 de mayo de 1998, presentados por el trabajador Roberto Martínez a la empresa, para justificar su inasistencia a sus labores, toda vez que, a foja 16 consta certificación expedida por el galeno Dr. Alberto Montes, quien afirma que los citados certificados "son falsos, porque no es mi firma, ni mi letra, ni tampoco fueron atendidos por mí".

En esa línea de pensamiento, la Sala ha manifestado en relación al certificado médico que "es legalmente inestable cuando no ha sido reconocido dentro del juicio por el respectivo facultativo. El derecho del trabajo no implica el relevo de pruebas y en los juicios que se adelantan por la jurisdicción especial deben cumplirse las reglas procesales sobre aducción de ellas, ya que la libertad de apreciación de que disfrutan los juzgadores de trabajo sólo hace relación a las pruebas legalmente producidas.

Dentro de este contexto, la Sala estima que en el caso in examine no se ha producido la violación del artículo invocado, toda vez que el juzgador de segunda instancia falló sin abrigar duda sobre la interpretación de las normas aplicables

al negocio ventilado, con fundamento en las constancias procesales, y tampoco se verificó un conflicto normativo, de allí que no hubo lugar a elegir la disposición que resultara más beneficiosa para el trabajador. Consecuente con lo señalado, se desestima el cargo endilgado.

En lo atinente a la violación del artículo 992, la cual constituye una norma de procedimiento, sostiene la parte actora que el juzgador de segunda instancia no confirmó ninguna de las aseveraciones de la parte demandante, configurándose la infracción descrita.

El Tribunal Superior de Trabajo basó su decisión, tal como mencionamos en párrafos precedentes, en las pruebas aportadas al proceso.

En este punto, resulta relevante destacar la escasa actuación jurídica del demandado en el presente proceso, toda vez que no se presentó a la audiencia, ni sustentó la apelación anunciada en primera instancia, pues el escrito fue presentado extemporáneamente. En ese sentido, tiene fundamento lo esgrimido por el Tribunal Superior de Trabajo al expresar que "dada la ausencia procesal de escrito en donde podamos confrontar la inconformidad con la sentencia, sólo nos resta comprobar que la decisión apelada está conforme con las pruebas aportadas" (Cfr. foja 59).

Frente a este escenario jurídico la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que el recurso de casación no es una tercera instancia y que este recurso en materia laboral sólo procede para corregir errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado y no en errores in procedendo, como es el caso que nos ocupa, por lo tanto, no alcanza a producir los resultados que persigue este recurso extraordinario, tal como se infiere del artículo 928 del Código de Trabajo.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 19 de mayo de 2000, dentro del proceso laboral promovido por DROGUERIA EL JAVILLO, S. A. contra ROBERTO MARTINEZ.

Notifíquese

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA M. EN REPRESENTACIÓN DE YOXANA RIVERA DE GRACIA, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: YOXANA RIVERA DE GRACIA VS PLANET KIDS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera M., actuando en nombre y representación de Yoxana Rivera De Gracia, interpuso recurso de casación laboral contra la resolución dictada el 14 de septiembre de 2000, por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral de reintegro por violación del fuero maternal incoado por Yoxana Rivera De Gracia contra Planet Kids, S. A.

Mediante la resolución de 14 de septiembre de 2000, el Tribunal Superior

de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá, confirmó en todas sus partes la Sentencia N° 16 de 13 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección dentro del proceso de reintegro presentado por la trabajadora contra Planet Kids, S. A. y en la cual dicho juzgado seccional de trabajo revocó la orden de reintegro previamente ordenada mediante el Auto N° 383 de 9 de diciembre de 1999, por considerar que se demostró que la relación de trabajo fue concluida con fundamento en el período probatorio y no por despido injustificado.

Al explicar la decisión adoptada en su sentencia, el Tribunal Superior de Trabajo dijo lo siguiente:

> "Veamos primero sobre las irregularidades que el juez observó. Estas están en el número del seguro social en la primera parte del contrato, en la cláusula primera en cuanto a los dependientes, en la quinta sobre las funciones y en una nota de exclusión sobre el embarazo y en la sexta sobre la grafía &. En cuanto al período probatorio no hay diferencia.
>
> Aunque puede ser motivo de discusión, consideramos que el Juez sí puede entrar a valorar si el cargo desempeñado era de naturaleza permanente o no, más si en uno de los contratos se dice que la causa del contrato es por vacante del puesto de vendedora.
> ...
>
> Ahora bien, sea la que fuese la interpretación que se le de al artículo 75, la cláusula de período probatorio no queda excluida de la Ley.
>
> Y lo anterior bien (sic) a colación por el argumento del recurrente sobre la no existencia de la cláusula probatoria por la no firma de la trabajadora. Lo cual no es del todo cierto porque en la copia del acta de conciliación individual, que reposa a foja 3 y que fue aportada por la parte trabajadora, se transcribe lo dicho por esta y se admite la existencia del contrato, pues reconoce que tenía una cláusula de tiempo definido y que no se le entregó copia. Si se reclama copia es que hubo contrato y si se habla del contenido es que se leyó, por tanto existió.
>
> Concluimos diciendo que el no registrar el contrato en la Dirección General de Trabajo, como se establece en el artículo 67 del Código de Trabajo no es causal de nulidad del contrato."

En su recurso de casación laboral el apoderado de la trabajadora indicó que ella fue contratada verbalmente por la empresa Planet Kids, S. A. como vendedora de mercancía el 3 de octubre de 1999 y el 2 de noviembre de 1999 fue despedida, por lo que la señora Yoxana Rivera De Gracia presentó demanda de reintegro por violación de fuero maternal y mediante Auto N° 383 de 9 de diciembre de 1999, el Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera Sección de Panamá ordenó a la empresa que la restableciera en sus labores habituales y que le pagara los salarios caídos correspondientes.

Manifiesta el casacionista que la orden de reintegro fue impugnada por la empresa demandada que en la audiencia presentó un contrato de trabajo por tiempo definido con cláusula de período probatorio como fundamento de la terminación de la relación de trabajo, pero que la trabajadora adujo que nunca firmó un contrato de trabajo con la empleadora y que de existir el mismo era ilegal, pues sería violatorio del artículo 75 del Código de Trabajo, porque la naturaleza del puesto era permanente (fs. 1 y 2).

A juicio de la parte actora, la sentencia de 14 de septiembre de 2000 violó los artículos 75, 78, 767 y 768 del Código de Trabajo que son del siguiente tenor literal:

"Artículo 75. La cláusula de duración de un contrato por tiempo definido, no podrá ser utilizada con el objeto de cubrir de una manera temporal un puesto de naturaleza permanente, salvo en los casos exceptuados en este Código.

La duración definida sólo será válida si consta expresamente en el contrato escrito, excepto en los casos señalados en el artículo 67 y en cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. Cuando lo permita la naturaleza del trabajo que constituye el objeto de la prestación;
2. Si tiene por objeto sustituir provisionalmente a un trabajador en uso de licencia, vacaciones o por cualquier otro impedimento temporal;
3. En los demás casos previstos en este Código.

La violación de este artículo determina, que, de pleno derecho, la relación de trabajo sea de carácter indefinido.
...

Artículo 78. Cuando la prestación de un servicio exija cierta habilidad o destreza especial, será válida la cláusula que fije un período probatorio hasta por el término de tres meses, siempre que conste expresamente en el contrato escrito de trabajo. Durante dicho período, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna.
...

Artículo 767. El documento privado auténtico tiene el mismo valor, respecto de su contenido, que el público para quienes lo hubiesen suscrito o sus causahabientes. Respecto de terceros, se estará a lo dispuesto en el artículo 776.

Artículo 768. Un documento privado se tendrá por reconocido cuando hubiere obrado en el proceso con conocimiento de la parte que lo firmó, de su causahabiente o de su apoderado, si la firma no hubiere sido negada dentro del término legal."

Al explicar el concepto de la violación del artículo 767 del Código de Trabajo, el apoderado judicial de la trabajadora explicó que se dio de forma directa por comisión, al reconocerle el juez valor probatorio al contrato individual de trabajo presentado por el empleador aún cuando no había sido reconocido por la trabajadora, quien negó su firma el día de la audiencia y del cual se desprende que fue registrado en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Colón tiempo después de entablado el proceso.

A juicio de la actora, el artículo 768 del Código de Trabajo fue violado directamente por omisión, porque el juez no debió reconocerle valor al documento privado o contrato de trabajo luego que la trabajadora había negado en la audiencia que lo hubiera firmado y porque el mismo tenía irregularidades notorias en cuanto al sello y las variantes de algunas cláusulas.

Indicó el apoderado de la demandante que el artículo 75 del Código de Trabajo fue violado de manera directa, por omisión, ya que el tribunal consideró legítima la cláusula de duración por tiempo definido contenida en el contrato a pesar que el puesto ocupado por la trabajadora como vendedora del Almacén Planet Kids, S. A. es de naturaleza permanente.

Por último, a juicio de la casacionista el artículo 78 del Código de Trabajo fue violado directamente, por comisión, como resultado del error de derecho cometido por el juez de segunda instancia en la apreciación del contrato de trabajo y que lo llevó a aplicar equivocadamente la norma citada reconociéndole validez a la supuesta cláusula probatoria.

Luego de confrontar las normas que la parte actora aduce infringidas por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, esta Sala de lo Laboral concluye que no se violaron y coincide plenamente con lo expresado por el tribunal de segunda instancia.

En primer término corresponde desestimar la violación del artículo 75 del Código de Trabajo, porque la sentencia de 14 de septiembre de 2000 no se fundamentada en dicho artículo para reconocer que la relación de trabajo no terminó por despido injustificado, sino que consideró que la justificación se encuentra en la cláusula que establece el período probatorio de tres meses para determinar la habilidad o destreza de la trabajadora en el desempeño del puesto para el cual fue contratada.

En el fallo impugnado con el presente recurso de casación el juzgador de segunda instancia consideró que fue probada la existencia de un contrato de trabajo escrito, aunque la trabajadora negó su existencia y firma en la audiencia celebrada luego de la anulación de todo lo actuado en el proceso por falta de traslado al abogado de la trabajadora (esta nulidad incluía la primera audiencia en la que la trabajadora aceptó que era suya la firma que figuraba en el folio segundo del contrato y que era idéntica a la que posteriormente desconoció).

Por lo anterior lo determinante es establecer si la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo aplicó correctamente el contenido del artículo 78 del Código de Trabajo luego de valorar la existencia y contenido del contrato de trabajo aducido como prueba por la empleadora y que lo llevó a concluir que la empresa podía terminar la relación de trabajo sin responsabilidad ni consideración al estado de embarazo de la trabajadora por encontrarse dentro del período probatorio.

A foja 3 del expediente del proceso laboral reposa el acta de 22 de noviembre de 1999, de la conciliación celebrada el 19 de noviembre de 1999 ante la Sección de Conciliación Individual del Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral firmada por el jefe de conciliación individual, señor Carlos Antonio Chávez Pineda. En dicha acta se dejó constancia de lo siguiente:

> "Primero: La trabajadora manifiesta que fue despedida injustificadamente en detrimento del fuero de maternidad, el contrato tenía una cláusula por tiempo definido violando el artículo 75 del Código de Trabajo, además el contrato no estaba registrado en el Ministerio de Trabajo y no se le entregó copia a la trabajadora y reclama reintegro y salarios caídos.
>
> Segundo: La representación de la empresa manifiesta que la trabajadora no ha sido despedida sino simple y llanamente que el contrato establece un período probatorio tal como lo establece el artículo 78 donde damos por terminada la relación de trabajo en base a la cláusula undécima del contrato, además deseamos manifestar que no ha querido recibir su cheque de derechos adquiridos.
> ..." (Reverso de foja 3 del expediente del proceso laboral).

El representante judicial de la trabajadora alega que el juez no debió reconocerle valor probatorio al contrato, porque su contenido y firma fueron negados por la señora Yoxana Rivera De Gracia, sin embargo esta Superioridad considera que el juzgador tenía todo el fundamento necesario para reconocerle ese valor, puesto que en la audiencia la trabajadora negó la existencia de un contrato escrito de trabajo y en el escrito de casación se señaló que su contratación fue verbal, pero estas aseveraciones pugnan abiertamente con lo que antes citamos del acta levantada por el Departamento de Conciliación Individual del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en la que claramente la trabajadora reconoció la existencia de un contrato de trabajo, señaló que no le dieron copia y además mencionó la cláusula en la que se deja constancia que la contratación era por tiempo indefinido y acto seguido, la representación de la

empresa dijo frente a la trabajadora que dicho contrato tenía una cláusula de período probatorio, aseveración que no fue contrariada por ésta. Todos estos hechos que constan en el acta coinciden con los que establece el contrato de trabajo que el juzgador de primera instancia ofició al Ministerio de Trabajo, oficina de Colón, para que fuera remitido e incorporado al proceso. Aunque dicho contrato fue registrado con posterioridad al inicio del proceso laboral, esta circunstancia no le resta validez ni eficacia como bien lo dijo el Tribunal Superior de Trabajo.

Así pues, la valoración probatoria llevó al juez de segunda instancia a reconocérle a la empleadora el derecho conferido por el artículo 78 del Código de Trabajo, en virtud que la contratación de la señora Yoxana Rivera De Gracia contenía todos los presupuestos necesarios establecidos en el citado artículo, o sea, existía un contrato escrito de trabajo en el que se contempló una cláusula señalando un período probatorio. Por todo lo anterior, en el presente caso era irrelevante que la duración del contrato fuera o no por tiempo definido, ya que la cláusula probatoria permite al empleador terminar la relación contractual laboral sin necesidad de responsabilizarse por nada más que no sean las prestaciones laborales acumuladas por el trabajador en ese tiempo, cuando considera que el trabajo desempeñado por el trabajador no es acorde con sus expectativas y necesidades.

Por lo antes expuesto, la Sala considera que la resolución de 14 de septiembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, es conforme a derecho y no viola los artículos 75, 78, 767 ni 768 del Código de Trabajo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 14 de septiembre de 2000, dentro del proceso laboral de reintegro por violación de fuero maternal incoado por YOXANA RIVERA DE GRACIA contra PLANET KIDS, S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS BONILLA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AUTOVÍAS, S. A., CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DORA ISABEL CEDEÑO VS. AUTOVÍAS, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Bonilla, en nombre y representación de la empresa Autovías, S. A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 12 de septiembre de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso de reintegro por violación al fuero maternal incoado contra la empresa Autovías, S. A. por la trabajadora Dora Isabel Cedeño.

La presente controversia tiene su origen en la petición de reintegro además del pago de salarios caídos, que promovió mediante apoderado judicial la trabajadora, quien alegó despido sin autorización judicial previa y sin justa

causa. Esta pretensión fue resuelta por el Juzgador de primera instancia que accedió a lo pedido, es decir, ordenó a la empresa que reintegrara de manera inmediata a la señora Dora Isabel Cedeño a sus labores habituales en la empresa, más el pago de los salarios caídos computados desde la presentación de la demanda hasta el efectivo cumplimiento de la condena, según Resolución de 15 de julio de 2000 (fojas 23-24).

La empresa demandada impugnó el mandamiento de reintegro, sin embargo, el Juzgado a-quo mantuvo su decisión por medio de la sentencia No. 13, de 26 de abril de 2000, consultable a fojas 59 y siguientes del expediente principal, que posteriormente fue confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo. Esta última decisión confirmatoria, es objeto de este recurso extraordinario de casación.

Observa la Sala que en el presente proceso han sido cumplidos los requisitos que establecen los artículos 925 y 926 del Código de Trabajo, al igual que se efectuó el emplazamiento que prevé el artículo 927, ibidem.

Según el casacionista, la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo es violatoria de los artículos 14, 77 y 77-A del Código de Laboral.

Afirma el recurrente que el artículo 77, en su numeral 3, ha sido violado por indebida aplicación, ya que esta norma se refiere a contrataciones sucesivas entre el trabajador y la empresa, en el caso que esta última tenga más de un año de operación, siempre que se haya dedicado a la misma actividad económica, situación que no se aplica a su representada Autovías, S. A., porque de acuerdo a certificación del Ministerio de Comercio e Industrias, la citada empresa inició operaciones el 23 de marzo de 1998, y el 10 de julio de 1998 comenzó a operar en una nueva actividad económica.

Lo anterior, según el casacionista, significa que al término de la relación de trabajo, o sea, el 23 de marzo de 1999, había transcurrido exactamente un año, de allí la aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 77, numeral 3, del Código de Trabajo.

Por otro lado, el impugnante señala que el artículo 77A ha sido infringido de manera directa por comisión (foja 5), porque "establece los supuestos en que se pueden celebrar sucesivos contratos por tiempo definido sin que la relación se convierta en indefinida", algo que fue desconocido por el Tribunal Superior de Trabajo. En este contexto, el apoderado judicial de la empresa afirma que Integravías, S. A. podía celebrar sucesivos contratos por tiempo definido durante un año, contado desde el comienzo de su actividad económica -23 de marzo de 1998-, que coincide con la expedición de su licencia comercial, hasta el 23 de marzo de 1999. Lo que el artícuo 77A prohíbe es que la empresa celebre nuevos contratos por tiempo definido vencido el año a que se refiere el numeral 2 de ese artículo, que no es la circunstancia de la trabajadora Dora Isabel Cedeño, pues el último día de labores de ella fue el 23 de marzo de 1999, en que finalizó su contrato, conforme documento visible a fojas 20 del expediente.

El recurrente resalta acerca del cargo alegado que tanto en el caso de Integravías, S. A. como de Autovías, S. A., la terminación de la relación de trabajo con la señora Dora Isabel Cedeño se produjo dentro del primer año del contrato de trabajo, y que Autovías, S. A., con independencia de si se trataba de una nueva actividad económica, tenía "hasta dos años para terminar la relación de trabajo". (Cfr. fojas 5-6).

Por último, asegura que fue vulnerado el artículo 14 del Código de Trabajo, de modo directo por comisión, ya que lo que se discute en este asunto no es una sustitución patronal, que en caso de existir, considera irrelevante, sino una sucesión de contratos con fundamento en el artículo 77A del referido Código. Este letrado afirma que su representada tenía varias opciones posibles: computar el plazo original de un año desde el 23 de marzo de 1998; o contar un plazo nuevo de un año a partir de la fecha en que empezó a operar Autovías, S. A. el 10 de julio de 1998; o bien dos años desde la misma fecha. A su juicio, la sustitución

patronal no puede ir contra los derechos de su representada contenidos en el artículo 77A, y que la alteración o sustitución no afectan las relaciones de trabajo vigentes.

Finalmente, el apoderado judicial de la empresa Autovías, S. A. pide a la Sala que case la sentencia recurrida y absuelva de responsabilidad a su patrocinada.

El apoderado judicial de la parte trabajadora, mediante escrito que reposa de fojas 12 a la 16 de los autos, se opuso a la pretensión del casacionista, afirmando que Autovías, S. A. no estaba facultada por el artículo 77A del Código de Trabajo para celebrar sucesivos contratos por tiempo definido dentro de un término mayor de un año de actividad de la empresa, según el numeral segundo del enunciado artículo.

Expresa que su representada ya estaba laborando desde el 20 de marzo de 1998, antes que el 23 de marzo del mismo año Integravías, S. A. iniciara su actividad económica, y cuando el casacionista aduce que dicha empresa funcionó hasta el 23 de marzo de 1999 está "aceptando que operó en exceso" de lo que establece el artículo 77-A, numeral 2. (Cfr. foja 15).

El opositor agrega que si al tiempo de actividad de la empresa citada se le suma el de Autovías, S. A. -desde el 10 de julio de 1998- le es aplicable al patrono el artículo 14 del Código de Trabajo en materia de responsabilidad laboral, que se traslada de la primera a la segunda empresa mencionada, por motivo de la sustitución patronal, que fue comunicada a la trabajadora por escrito, y conforme al artículo 14 no afecta las relaciones de trabajo existentes en perjuicio de los trabajadores.

El abogado de Dora Isabel Cedeño pide a la Sala que no case la sentencia de 12 de septiembre de 2000 del Tribunal Superior de Trabajo, y que mantenga la orden de reintegro con el pago de salarios caídos.

Luego del recuento de las principales constancias procesales, la Sala pasa a decidir el recurso previas las siguientes consideraciones.

El Tribunal de Casación hará un análisis conjunto de las disposiciones que se afirman violadas por estar íntimanente relacionados los conceptos aducidos.

Estima la Sala que no le asiste la razón al casacionista cuando alega que la resolución de 12 de septiembre del presente año emitida por el Tribunal Superior de Trabajo es violatoria de los artículos 14, 77 y 77A del Código Laboral.

Sobre el particular, la Sala coincide con los razonamientos que exponen tanto el Juzgador a-quo como el ad-quem y la parte que se opone al recurso.

En cuanto a la infracción del artículo 77, que establece los supuestos según los cuales debe entenderse o considerarse indefinida una relación de trabajo, el numeral 3 indica, específicamente, que esto se produce ante la celebración de "sucesivos contratos por tiempo definido o para obra determinada, o no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio, o si se desprende, por razón de la cantidad y duración total de los contratos, que existe la intención de encubrir una relación indefinida".

Considera la Sala que el fallo censurado no incurrió en una indebida aplicación de este precepto. En ambas instancias en que se ventiló el asunto que nos ocupa las sentencias emitidas expusieron razonadamente los fundamentos de hecho y de derecho que respaldan la decisión adoptada.

El juzgador a-quo en su sentencia No. 13, de 26 de abril de 2000, es claro al calificar la relación de trabajo entre el casacionista y la trabajadora de carácter permanente por el tipo de actividad que se hace en el Corredor Norte,

lugar donde prestaba sus servicios la empleada. La relación de trabajo dio inicio con la empresa Integravías, S. A. y concluyó con Autovías, S. A., ésta última como empleadora sustituta, de acuerdo a la certificación que obra a fojas 19 del expediente, que no fue objetada (Cfr. foja 61). Este documento, como bien observa el ad-quem, fue firmado por la misma persona que suscribió la nota a través de la que la empresa comunicó a Dora Isabel Cedeño la terminación del vínculo laboral (Cfr. foja 86).

Es menester destacar en este punto, como lo ha hecho este Tribunal en anteriores ocasiones, que la sustitución patronal es un hecho o situación jurídica objetiva que se produce independientemente de la causa, cuando surge la continuación de una empresa que está integrada por un conjunto de factores: patrimonio, personal, organización, objeto, actividad, 'good will' (Cfr. Sentencia de 18 de julio de 2000, Caso: Berta Goff Quintero Vs. Astilleros Braswell International, S. A., R.J., pp. 449 y ss).

Cuatro fueron los contratos sucesivos que celebró la empleadora -el primero por Integravías, S. A. y los restantes por Autovías, S. A.- con la trabajadora, cuyas fechas transcurrieron del 20 de marzo de 1998 al 20 de septiembre de dicho año; del 21 de septiembre de 1998 al 21 de noviembre de 1998; del 22 de noviembre de 1998 al 22 de enero de 1999; y del 23 de enero de 1999 al 23 de marzo de ese año (Cfr. fojas 11 a la 18 del expediente principal). Lo que abarca un período de un año y tres días. Por la naturaleza de la labor que ejercía la trabajadora se desprende que ésta actividad es de naturaleza permanente, ya que se encuentra dentro del giro normal y de funciones de la empresa; la cantidad y duración de los contratos inclinan a la Sala a estimar que se encubría una relación indefinida, conforme a la interpretación del artículo 77, numeral 3 ut supra.

El alegato de la empresa que procura ampararse en que su relación con la trajadora tenía menos de un año por lo que aplicó el artículo 77A, en su numeral 2, no tiene asidero jurídico, porque el vínculo laboral empezó el 20 de marzo de 1998, tal como lo prevé el contrato suscrito con la empresa Integravías, S. A., cláusula quinta, (foja 11), y no el 23 de marzo de ese año, como indebidamente afirma la empleadora. Esto lo confirma la certificación emanada de la empresa Autovías, S. A. suscrita por el Jefe de Recursos Humanos; este documento certifica que la trabajadora empezó a laborar para Integravías, S. A. el 20 de marzo de 1998 hasta el 15 de julio de 1998; y "con la empresa AUTOVIAS, S. A., patrón sustituto, laboró desde el día 16 de julio de 1998 hasta el 23 de marzo de 1999".

Evidentemente este lapso de tiempo es superior al término de un año previsto por el artículo 77A, numeral 2, para estimar que no hay o existe sucesión de contrato. Esta norma textualmente preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 77A. No se considerará que existe una sucesión de contratos en los siguientes casos.
> 1. Cuando se trate de ocupaciones o plazas permanentes requeridas para el desarrollo de una nueva actividad en la empresa;
> 2. Cuando se trate de contrataciones durante el primer año de actividad del empleador, de la empresa o explotación;
> 3. Cuando se trate de modalidades de trabajo aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social o pactadas con el sindicato.
> En estos casos, si la sucesión de contratos se prosigue por más de dos años, se entiende que el contrato es indefinido desde el primero de ellos".

Es importante aclarar que el numeral 3 de este artículo fue declarado inconstitucional por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 31 de enero de 1997 (Cfr.R.J., pp.153 y ss.).

Una interpretación adecuada de esta disposición, conforme a su tenor literal, y aplicable a la situación planteada en este recurso de casación, indica

que para el supuesto contenido en el numeral 2 antes copiado no se considera que existe sucesión de contratos si esta práctica se hace dentro del primer año de actividad de la empresa o explotación; requisito que no se cumplió en el caso de la señora Isabel Cedeño, quien laboró por más de un año mediante cuatro contratos sucesivos, el primero de éstos, como se señaló antes, fue celebrado con la empresa Integravías, S. A. y los tres siguientes y consecutivos con Autovías, S. A. Cabe destacar que en la concertación de estos cuatro contratos hubo continuidad del vínculo laboral, según se aprecia en las fechas de inicio y culminación pactadas en los referidos actos jurídicos, que reposan de fojas 11 hasta la 18 de los autos.

Al haber transcurrido más de un año en la prestación del servicio coincidimos en que no puede hablarse del primer año de actividad u operación de la empresa, porque ya la trabajadora había prestado los mismos servicios pero a una sociedad que posteriomente fue sucedida por otra.

Las labores asignadas a la trabajadora consistentes en cajera y posteriormente supervisora de cajera (fojas 11, 13, 15 y 17) estima la Sala que son de carácter permanente por la naturaleza de la actividad o explotación económica, consideración que es corroborada a fojas 5 del expediente por la certificación de la Dirección General de Comercio Interior (Departamento de Licencias), del Ministerio de Comercio e Industrias, según la cual la empresa Autovías, S. A. tiene como actividad comercial la "ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE TRASPORTE DE RUTA, PRIVADAS Y/O PUBLICAS", además de indicar la fecha de expedición de su licencia comercial, o sea, el 10 de julio de 1998.

Los anteriores razonamientos sirven para descartar la afirmada violación de los artículos 77, numeral 3, 77-A y 14 del Código de Trabajo explicada por el casacionista.

En mérito de lo expuesto, lo que procede es no casar la sentencia de 12 de septiembre de este año emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, por ser plenamente válida.

De consiguiente, la Sala Tercera Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 12 de septiembre de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso abreviado de reintegro por infracción del fuero de maternidad incoado por Dora Isabel Cedeño contra Autovías, S. A.

Notifiquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS JONES R. EN REPRESENTACIÓN DE GRAN HOTEL SOLOY, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 5 DE OCTUBRE DE 2000, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL DE ALEXIS BETHANCOURT -VS- GRAN HOTEL SOLOY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Carlos Jones R., apoderado judicial de la sociedad GRAN HOTEL

SOLOY, S. A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 5 de octubre de 2000, dentro del proceso laboral promovido por ALEXIA BETHANCOURT contra GRAN HOTEL SOLOY, S. A.

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia recurrida y que absuelva a la empresa del pago de las prestaciones reclamadas.

Al analizar el libelo de demanda, la Sala observa que el recurso extraordinario de casación ha sido presentado fuera del término establecido en el artículo 927 del Código de Trabajo, razón por la cual se ve impedida de entrar a resolver sobre los cargos que se formulan en el presente recurso y para mayor ilustración pasamos a transcribir el primer párrafo de dicha disposición:

> "ARTÍCULO 927: El recurso de casación debe interponerse directamente ante la Corte de Casación Laboral dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la resolución del Tribunal Superior de Trabajo
> ..." (Subraya la Sala).

En efecto, la sentencia de segunda instancia fue notificada mediante Edicto No. 1068 visible a foja 89 del expediente, fijado el 11 de octubre y desfijado el 12 de octubre de 2000.

Así las cosas, tenemos que tomando en cuenta los cinco (5) días que confiere nuestro máximo ordenamiento laboral, el recurrente tenía hasta el día 19 de octubre, para interponer el recurso extraordinaria de casación. Consta a foja 8 del expediente contentivo del recurso de casación que este fue presentado el 26 de octubre del 2000 a las 2:56 p. m., es decir, 7 días después de haberse vencido el término de 5 días hábiles previstos en la disposición antes citada.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral presentado por el licenciado Carlos Jones R., apoderado judicial de la sociedad GRAN HOTEL SOLOY, S. A., dentro del proceso laboral promovido por ALEXIA BETHANCOURT contra GRAN HOTEL SOLOY, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PEDRO A. CEDEÑO EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUI LAND COMPANY Y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 20 DE JUNIO DE 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ABELINO CERRUD CORTEZ, JULIO CESAR CHAVEZ MORALES Y ERICK RAMOS ROMERO VS- CHIRIQUI LAND COMPANY y PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Pedro Antonio Cedeño, apoderado judicial de las empresas Chiriquí Land Company y de Puerto Armuelles Fruit Company Ltd., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 20 de junio de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del

proceso laboral ABELINO CERRUD CORTEZ, JULIO CESAR CHAVEZ MORALES Y ERICK A. RAMOS ROMERO -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY - PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD.

El casacionista persigue con el presente recurso que la Sala case la sentencia recurrida y que ordene a los demandantes el pago de los honorarios a los peritos.

Se trata de un proceso común laboral promovido por los señores Cerrud Cortez, Chavez Morales y Ramos Romero contra la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY hoy PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD., a fin de que sean condenadas solidariamente a pagarles el ajuste en el pago de prestaciones laborales mal pagadas como lo son: indemnización, prima de antigüedad, asistencia perfecta, más los recargos, intereses, costas y gastos del proceso.

El juzgador de primera instancia condenó a la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY, hoy PUERTO ARMUELLES FRUIT CO. LTD., a pagar un total de B/.1,244.81, repartido así: ABELINO CERRUD C. (B/.123.14), JULIO CESAR CHAVEZ (B/.364.41), ERICK RAMOS R. (B/.757.26), en concepto de ajustes a la prima de antigüedad y del beneficio convencional denominado "Asistencia Perfecta" y se le absolvió de los demás cargos formulados; además ordenó a los demandantes pagarle al perito la suma de B/.600.00. El Tribunal Superior de Trabajo modificó la citada sentencia, en el sentido de que la condena, la cual fue fijada en su totalidad en B/.1,244.81, debe ser aplicada a la suma entregada por las empresas demandadas a los trabajadores, en concepto de entrega voluntaria; y además, los honorarios del perito fueron modificados, fijándolos en B/.400.00, y dispone que deben ser cancelados por las empresas demandadas.

La Sala pasa a examinar los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

La parte actora sostiene que la sentencia por ella impugnada ha infringido la disposición 862 del Código de Trabajo.

Observa la Sala que el único cargo aducido se centra en una norma de carácter procedimental, toda vez que ella establece que los emolumentos del perito deben ser aprobados por el juez y pagados por la parte que lo haya presentado, sin perjuicio de que resulte obligado reembolsarles la parte condenada.

Dentro de ese contexto, resulta palmario que lo procedente es rechazar de plano el presente recurso, tal como se infiere del artículo 928 del Código de Trabajo, que a la letra dice:

> "ARTICULO 928: Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales." (Subraya la Sala).

En abundante jurisprudencia la Sala ha manifestado que la infracción señalada no procede puesto que no ha sido formulada en relación con una norma de carácter sustancial o material que consagre un derecho a favor del trabajador. Además, el recurso de casación no constituye una tercera instancia y que este recurso en materia laboral sólo procede para corregir errores in judicando en que haya incurrido el juzgador de segundo grado, pero que dicho cargo se desestima al tratarse únicamente de normas procedimentales, como el que se invoca en el caso in examine, por no estar acompañado con infracciones a una norma sustancial o material.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto por el licenciado Pedro Antonio Cedeño contra la sentencia de 20 de junio de 2000,

dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del proceso laboral ABELINO CERRUD CORTEZ, JULIO CESAR CHAVEZ MORALES Y ERICK A. RAMOS ROMERO -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY - PUERTO ARMUELLES FRUIT COMPANY, LTD.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SAMUEL E. MARÍN, EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR RODRIGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2000, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDGAR RODRIGUEZ -VS- INTEL, S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMA, VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Samuel Marín, apoderado especial del señor EDGAR RODRIGUEZ, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 26 de junio de 2000, dentro del proceso laboral promovido por EDGAR RODRIGUEZ -VS- INTEL,S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

Se trata de un proceso común laboral, instaurado por el señor Edgar Rodríguez contra la empresa demandada, a fin de que la Sala revoque la sentencia recurrida y en su lugar, condene al INTEL, S. A. o CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. al pago de las prestaciones reclamadas en la demanda.

El juzgador de primera instancia absolvió a la sociedad CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A. antes denominada INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, S. A. del reclamo laboral instaurado por el señor Edgar Rodríguez, por considerar que no es esta empresa la responsable de la liquidación laboral, por Ministerio de la ley, y el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial confirmó dicha resolución.

La licenciada Lizza Marie Jaén, apoderada especial de INTEL,S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., presentó escrito de oposición al recurso de casación, el cual corre de fojas 14 a 19.

A continuación, la Sala procede a estudiar los cargos que se le endilgan a la sentencia de segundo grado.

La parte actora sostiene que la sentencia recurrida ha infringido los artículos 149 del Código de Trabajo, 26 de la Ley 5 de 1995, la cláusula 18 y el anexo B (literal A) de la Convención Colectiva del INTEL, S. A., y el artículo tercero del Decreto Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de 1997.

Afirma el recurrente que "la disposición 149 fue infringida en concepto de violación directa por omisión: En la sentencia recurrida no se aplicó el artículo 149 del Código de Trabajo para la determinación del pasivo laboral... En el presente caso la liquidación del pasivo laboral debió hacerse en base al último sueldo mensual declarado por la empleadora, que fue de B/.725.28 y que corresponde a junio/97, antes de la liquidación y pago del pasivo laboral al trabajador en julio/1999. La parte empleadora procedió hacer la liquidación ... en base al promedio de sueldo de los 60 últimos meses y no tomó en cuenta el artículo 149 de Código de Trabajo."(Cfr. fojas 2 y 3).

El Tribunal Superior de Trabajo sostiene que "el demandante al analizar la norma que sirve de fundamento a la apelación interpuesta olvida que el artículo 26 de la Ley 5 de 1995 fue desarrollada por el Decreto Ejecutivo No. 33 del 19 de mayo de 1997 que la demandada aporta al proceso como prueba, ... y dicho Decreto señala que el Estado asumirá el pago de la indemnización y de las prestaciones de los trabajadores que se acojan a la opción del numeral 2 del artículo 226, que consistía en lo siguiente:

> "2. Solicitar la liquidación de sus prestaciones laborales en efectivo, incluyendo la indemnización, con garantía de un nuevo contrato de trabajo por tiempo indefinido, en los mismos términos y condiciones del que tenían al momento de la liquidación."

El Decreto 33 señala en el artículo 3o. lo siguiente:

> TERCERO: El cálculo de las prestaciones laborales, incluyendo la indemnización a que se refiere el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 5 de 1995, se efectuará al 15 de junio de 1997. Las prestaciones laborales se calcularán aplicando la regla contenida en el artículo 149 del Código de Trabajo, y la prima de antigüedad según el artículo 224 del Código de Trabajo. (lo resaltado y subrayado es nuestro) (sic)."

En esa línea de pensamiento, el juzgador de segunda instancia concluye que las prestaciones laborales otorgadas al trabajador Rodríguez se efectuaron cumpliendo con todas las disposiciones que beneficiaron a los trabajadores del INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y de conformidad con el artículo 149 del Código de Trabajo.

La Sala se identifica con la decisión adoptada por el ad quem, la cual se fundamenta en lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.33 de 19 de mayo de 1997, "Por el cual se Reglamenta el artículo 26 de la Ley No.5 de 9 de febrero de 1995", establece en su artículo primero lo siguiente:

> "PRIMERO: El Estado se hace responsable, y en consecuencia asume el pago de todos los pasivos laborales acumulados hasta la fecha del cierre que resulten en concepto de liquidación de prestaciones laborales a los trabajadores de INTEL, S. A. incluyendo la indemnización, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley No.5 como un gasto en la privatización de INTEL, S. A. El pago de dichas prestaciones se efectuará mediante el mecanismo de fideicomiso.Cualquier diferencia que surja del cálculo de estas liquidaciones será responsabilidad del Estado."

Se colige de la norma transcrita, que las diferencias surgidas, manifiestas a través del proceso in examine, no pueden ser dilucidadas en esta esfera, toda vez que al asumir el Estado responsabilidad sobre las mismas, la parte actora debe recurrir a la vía contencioso administrativa, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico interno.

Dentro de ese contexto, observa la Sala que a foja 6 obra documento identificado como "Pago de pasivo laboral por restructuración- Acumulado al 15 de junio de 1997 -Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S. A.", a través del cual el demandante señor Edgar Rodríguez, declara que ha recibido del Gobierno Nacional un cheque por la suma de B/.8,182.52 en concepto de pago del pasivo laboral como trabajador del INTEL, al 15 de junio de 1997, referente a las vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad e indemnización con fecha 23 de julio de 1997.

Frente a este escenario jurídico, salta a la vista que la decisión del juzgador de segundo grado fue conforme a derecho, razón por la cual no existe ningún fundamento para que esta Superioridad la modifique, razón por la cual se desestima el cargo endilgado.

La Sala se abstiene de entrar a estudiar el resto de los cargos, toda vez que se encuentran comprendidos en el análisis del cargo anterior.

Como corolario e lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 26 de junio de 2000, dentro del proceso laboral promovido por EDGAR RODRIGUEZ -VS- INTEL,S. A. O CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.)ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ESTEBAN GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE UIL ALFREDO GORDON, CONTRA LA SENTENCIA SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: UIL ALFREDO GORDON -VS- NAVPAN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Esteban García M., apoderado judicial de UIL ALFREDO GORDON, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 12 de junio del 2000, dentro del proceso laboral promovido por UIL ALFREDO GORDON -VS- NAVPAN, S. A.

En el recurso se solicita a la Sala que case y revoque la sentencia recurrida con el fin de que se condene a la empresa demandada a pagar al demandante las prestaciones solicitadas.

Se trata de un proceso común laboral promovido por el señor UIL ALFREDO GORDON contra la mencionada empresa, a fin de que sea condenada a pagarle B/.6,135.70 en concepto de diferencias en indemnización, prima de antigüedad, así como diferencias de dos meses de vacaciones vencidas y no pagadas, más costas.

El juzgador de primer grado condenó a la empresa NAVPAN, S. A. al pago de la suma de B/.6,135.70 en concepto de indemnización, prima de antigüedad y vacaciones vencidas, a favor de UIL ALFREDO GORDON, y el Tribunal Superior de Trabajo, previa revocatoria de dicha sentencia, absolvió a la demandada de todas pretensiones presentadas por el demandante.

La parte actora afirma que la sentencia recurrida ha transgredido las disposiciones 1o. y 6o. de la Ley 25 de 3 de septiembre de 1979.

Antes de entrar a resolver el presente recurso de casación laboral, la Sala observa que el mismo tiene errores que lo hacen inadmisible a la luz de nuestro ordenamiento jurídico laboral, por las razones que a continuación se explican.

El recurrente se ha limitado a citar como infringidas disposiciones procedimentales como lo constituyen los artículos 1o. y 6o. de la Ley 25 de 3 de septiembre de 1979 (Por la cual se dictan medidas laborales relacionadas con la entrada en vigencia del Tratado del Canal de Panamá), las cuales no son revisables en un recurso de casación, sin invocar, ni explicar qué norma laboral que consagre derechos subjetivos fue vulnerada por la resolución recurrida, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 926 del Código de Trabajo.

Así las cosas, tenemos que el casacionista omite acompañar las normas

adjetivas con las sustantivas. Al respecto, la Sala ha sostenido en innumerables ocasiones que las normas adjetivas pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquéllas han sido transgredidas.

El Tribunal de casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Cfr. sentencias de 1 de noviembre de 2000, 31 de julio de 1998, 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, y 19 de mayo de 1995).

En esa línea de pensamiento, tenemos que cuando la acusación se centra exclusivamente en normas de carácter adjetivo, como el caso in examine, los cargos quedan incompletos, y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso extraordinario de casación, según se infiere del párrafo final del artículo 928 del Código de Trabajo, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 928: Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando en el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales" (Subraya la Sala).

Es preciso resaltar que el recurso extraordinario de casación tiene por finalidad enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito a cosa juzgada y en las que, aún sin esa circunstancia, pueden causar perjuicios irreparables o graves por razón de la naturaleza de las respectivas resoluciones" (Artículo 924 C. de T.).

La parte actora pretende en esta instancia efectuar una revisión del proceso, lo que a todas luces resulta improcedente, toda vez que no constituimos una tercera instancia.

Frente a ese escenario jurídico, la Sala arriba a la conclusión que es improcedente el presente recurso.

Como corolario de lo antes expresado, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral interpuesto por el licenciado Esteban García M., apoderado judicial de UIL ALFREDO GORDON, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 12 de junio del 2000, dentro del proceso laboral promovido por UIL ALFREDO GORDON -VS- NAVPAN, S. A.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

NOVIEMBRE 2000

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

MARITZA URRIOLA TAYLOR, MEDIANTE APODERADO LEGAL, LA FIRMA FORENSE ROSAS Y ROSAS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, DICTADA POR LA CORTE DISTRITAL DE FAMILIA DEL CONDADO DE HARRIS, TEXAS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LA CUAL SE DECLARA DISUELTO EL VÍNCYULO MATRIMONIAL QUE LA MANTIENE UNIDA AL SEÑOR ROBERT LAWRENCE THAYER. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La firma forense ROSAS Y ROSAS, en representación de la señora MARITZA URRIOLA , ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida y ejecutada en la República de Panamá, la sentencia extranjera de divorcio dictada el 12 de marzo de 1981 por la Corte Distrital de Familia del Condado de Harris, Texas, Estados Unidos de América, en virtud de la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre la peticionaria y el señor ROBERT LAWRENCE THAYER.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores Robert Lawrence Thayer, estadounidense con pasaporte No 132833719 y Maritza Urriola, panameña, con cédula de identidad No. 8-195-60 contrajeron matrimonio el día 4 de abril de 1979, en los Estados Unidos de América. Dicho matrimonio se encuentra inscrito al tomo número 5 de matrimonios en el exterior, Asiento numero 971 de la Dirección General del Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá.

La solicitud de reconocimiento de sentencia extranjera se fundamenta en la existencia de sentencia divorcio de fecha 12 de marzo de 1981, dictada por la Corte Distrital de Familia del Condado de Harris, Texas, Estados Unidos de América, que disuelve el vínculo matrimonial existente entre las partes mencionadas en el párrafo anterior.

Ante estas circunstancias, el apoderado judicial de la solicitante aporta como piezas probatorias los siguientes documentos:

1. Poder otorgado a favor de la firma forense ROSAS Y ROSAS.

2. Copia de la sentencia autenticada por la Cónsul General de Panamá en Houston y legalizada a través del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, que acredita la firma del funcionario consular.

3. Traducción de la referida sentencia realizada por intérprete público autorizado.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Por su parte, el Procurador General de la Nación en su Vista N° 37 de 7 de septiembre de 2000 (f.17), estimó que la resolución cumple con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico por lo cual es pertinente acceder a la ejecutabilidad de la sentencia bajo examen.

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño

para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pasa a decidir sobre la petición presentada con la finalidad de examinar si la resolución que se pretende reconocer y ejecutar en nuestro país es conforme o no con nuestro orden público interno.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador General de la Nación, atendiendo a que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial, para la ejecución de las sentencias extranjeras.

De hecho la pretensión es lícita en la República de Panamá y de carácter personal. De igual forma no se ha producido el fenómeno de la rebeldía.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá sentencia extranjera de divorcio dictada por la Corte Distrital de Familia del Condado de Harris, Texas, Estados Unidos de América fechada 12 marzo de 1981, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a los señores ROBERT LAWRENCE THAYER y MARITZA URRIOLA TAYLOR.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, VENEZUELA, DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD DE VENTA INCOADO POR LOS SEÑORES CRISTINA SUÁREZ ÁLVAREZ Y JUAN CARLOS SABAL SUÁREZ CONTRA LOS SEÑORES FREDDY SABAL JARA, BEATRIZ DE ROUZ Y LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Z.P.K., C.A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A.J. No. 11490 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema, exhorto librado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, dentro del proceso de nulidad de venta incoado por CRISTINA SUÁREZ ÁLVAREZ y JUAN CARLOS SABAL SUÁREZ contra los señores FREDDY SABAL JARA, BEATRIZ DE ROUZ y la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Z.P.K., C.A.

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

La autoridad venezolana solicita en su exhorto que con motivo del juicio seguido por NULIDAD DE VENTA a los ciudadanos CRISTINA SUÁREZ ÁLVAREZ y JUAN CARLOS SABAL SUÁREZ, contra los ciudadanos FREDDY SABAL JARA BEATRIZ ROUX y la sociedad mercantil INVERSIONES Z.P.K., C.A., se cite a la co-demandada BEATRIZ DE ROUX, de nacionalidad Panameña, identificada con el pasaporte No. PE-6-53.

Procede este ente colegiado a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan tanto a la nación venezolana como a la panameña, relativos a la materia, pudiendo constatar que ambas Repúblicas son parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero aprobada en Panamá mediante la Ley No. 13 de veintitrés (23) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975), así como del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Ley de la República No.10 de 18 de junio de 1991.

A foja 5-6 del expediente se observa, que las autoridades de la República de Venezuela, han tramitado el presente exhorto a través de la vía diplomática, siendo innecesario en este caso el requisito de legalización, al tenor del artículo 6 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos o cartas Rogatorias, por lo que se cumplen con los requisitos formales para su tramitación.

Ahora bien, el artículo IV de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero preceptúa:

> "ARTÍCULO IV: Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber...
> 3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba...".

La petición de las autoridades Venezolanas se circunscribe a que se notifique a la ciudadana panameña BEATRIZ DE ROUX de una demanda que se le ha entablado en el vecino país, sin embargo esta Superioridad aprecia que no se aporta en la documentación adjuntada una dirección o domicilio donde se pueda ubicar a la prenombrada, obviándose de esta forma lo establecido en la norma antes enunciada, por lo que se procederá a declara no viable la presente solicitud.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto diplomático librado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, dentro del proceso de nulidad de venta incoado por CRISTINA SUÁREZ ÁLVAREZ y JUAN CARLOS SABAL SUÁREZ contra los señores FREDDY SABAL JARA, BEATRIZ DE ROUZ y la SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES Z.P.K., C.A.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, ADSCRITOS A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A AGENOR PRIETO, SANTOS PRIETO Y RAFAEL ORTEGA. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Sub-Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscritos a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia, en el Proceso 723 UDH, dentro de las investigaciones a la posible existencia de una organización criminal al margen de la ley; que trafica con personas a fin de que ejerzan la prostitución en Panamá; siendo las víctimas colombianas.

El suplicatorio versa en lo siguiente:

> **"...se establezca la identificación plena, localización actual, antecedentes penales y contravencionales que registren AGENOR PRIETO, SANTOS PRIETO y RAFAEL ORTEGA, quienes al parecer se localizan en el establecimiento de razón social "Joyería y Mueblería Catalina", ubicado en Avenida Bolívar No. 11-117 de la ciudad de Colón (Panamá); además se deberá aportar sus cuentas corrientes o de ahorros, actividades comerciales, bienes inmuebles de su propiedad, etc, entre otros, previo ofrecimiento de reciprocidad en casos similares a las autoridades panameña... ". (fs 2)**

Corresponde a esta Sala IV de Negocios Generales al tenor del artículo 101, numeral 3 del Código Judicial el conocimiento de la presente Carta Rogatoria y determinar su cumplimiento en el territorio nacional, al igual que el funcionario que debe cumplirlo.

Apreciada la documentación aportada, observa esta superioridad que en el aspecto formal se cumplen con los requisitos exigidos para su diligenciamiento como lo es la legalización de la documentación aportada a través de las certificaciones del funcionario Diplomático correspondiente, lo cual es indispensable para el trámite de las Cartas Rogatorias. (Fs 6-10)

Al analizar la viabilidad de las diligencias solicitadas observamos que se trata de información para la localización e identificación plena de los señores AGENOR PRIETO, SANTOS PRIETO y RAFAEL ORTEGA, así como los antecedentes penales que registren los mismos, incluyendo las cuentas bancarias que manejen estos y sus bienes patrimoniales; de la solicitud in comento a la Sala le llama la atención, el hecho de que a la documentación aportada no se anexe un informe respecto de la investigación levantada a los prenombrados y del porque de la solicitud, pues es claro que en el procedimiento penal panameño, sobre todo en la etapa de instrucción sumarial es preciso fundamentar en debida forma las diligencias a practicarse, sobre todo si recaen específicamente sobre alguna persona; por lo que esta Magistratura considera que es improcedente acceder a la solicitud proveniente de la sede Diplomática Colombiana.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto diplomático EL FISCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS, ADSCRITOS A LA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, EN EL PROCESO 723 UDH.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LAUDO ARBITRAL

EL SEÑOR GUILLERMO ELIAS QUIJANO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA SUCASA S. A. SOLICITA LA ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL DICTADO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR INMOBILIARIA SUCASA S. A. CONTRA CRYOGAS DE CENTROAMERICA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Rubén Elías Rodríguez Avila, actuando como apoderado judicial de INMOBILIARIA SUCASA S. A. ha presentado ante la Sala de Negocios Generales, Recurso de Anulación contra el Laudo Arbitral proferido, el día 15 de mayo del año en curso, dentro del Proceso Arbitral en Derecho que la INMOBILIARIA SUCASA, S. A. por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. La parte demandante pretende que se anule la condena a la sociedad INMOBILIARIA SUCASA, S. A., parte demandante en el presente proceso arbitral, al pago de doce mil setecientos dos balboas (B/.12,702.00) más los intereses legales que se generen hasta su total cancelación y de dos mil setecientos noventa balboas con 40/100 (B/.2, 790.40) en concepto de costas por la demanda de reconvención, más los gastos que se liquiden por Secretaría, así como el pago de la declaración de INMOBILIARIA SUCASA, S. A. la suma de cinco mil ciento veintinueve balboas (B/.5,129.00) en concepto de arbitraje.

El apoderado legal de INMOBILIARIA SUCASA S. A. impugna el citado laudo arbitral porque no se ajusta al acuerdo celebrado entre las partes en cuanto a que el trámite, enjuiciamiento y decisión de la controversia sería conforme a derecho, en vista de que la demanda de reconvención presentada por CRYOGAS DE CENTROAMÉRICA, S. A. no se resolvió mediante aplicación de las normas de derecho, sino aplicando criterios arbitrarios y sin sustento probatorio válido, conforme al procedimiento legal que estaba obligado el Tribunal a aplicar.

Esta Corporación dio traslado del petitorio a los representantes legales de CRYOGAS DE CENTROAMÉRICA, S. A., la firma forense Rosas y Rosas para que contestaran el mismo.

En su escrito de oposición la firma forense Rosas y Rosas expresa, en lo medular lo siguiente:

> ...
> **"PRIMERA: Tal como consta en el escrito de interposición del recurso, el laudo arbitral objeto del mismo es el que emitió el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, fechado 15 de mayo de 2,000, mediante el cual se denegó demanda presentada por INMOBILIARIA SUCASA, S.A, (QUE FUE QUIEN SOLICITO EL ARBITRAJE) en contra de CRYOGAS, S.A. y, además, declaró resuelto contrato de arrendamiento de SUCASA, y condenó a ésta a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a CRYOGAS, mas el pago de costas y gastos, en la cuantías allí consignadas.**
>
> **SEGUNDA: El proceso arbitral en referencia se desarrolló a petición de INMOBILIARIA SUCASA, S.A. quien hizo valer lo estipulado en la Cláusula DUODÉCIMA SÉPTIMA del Contrato No. P. I. -01-98, de 14 de abril de 1998, que estipuló:**
>
> **"CLÁUSULA DUODÉCIMA SÉPTIMA: LAS PARTES por este medio convienen en**

que cualquier litigio o controversia, provenientes o relacionadas con este contrato, así como su interpretación, ejecución, aplicación y terminación deberá resolverse por medio de arbitraje, ante el CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE PANAMÁ y conforme a sus reglas y procedimientos, previo intento de conciliación ante la CÁMARA DE COMERCIO DE PANAMÁ".

II. El recurso no se fundamenta en ninguna de las causas conforme al artículo 34 del Decreto Ley 5 de 199 lo hace viable.

CUARTO: El segundo motivo invocado por el recurrente es que el Tribunal "confirió valor probatorio a fotocopias de documentos sin valor legal, todos ellos provenientes de terceros y que no fueron reconocidos por sus expedidores como lo exige el Código Judicial". Este motivo no está consagrado en ninguna de las causales instituidas por el artículo 34 del Decreto Ley 5 de 1999, por lo que el recurso resulta igualmente inadmisible.
Pero al margen de su inadmisibilidad, el apoderado judicial de INMOBILIARIA SUCASA, S.A., omite citar la audiencia en la que las partes dieron por reconocidos los documentos presentados y, por tanto, reconocieron como documentos auténticos todos los presentados por las partes, esto, es, los presentados con la demanda original, la demanda de reconvención y las contestaciones a ambas demandas. En el Acta de 21 de marzo de 2,000, el Tribunal hizo constar lo siguiente: A instancia del Tribunal, las partes aceptan en dar por reconocidos los documentos que se han presentado como pruebas documentales que consta en el expediente". Esta Acta fue notificada a los apoderados de las partes en la fecha de su emisión, sin que el licenciado RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ hubiese objetado tal acuerdo de las partes, ni la decisión del Tribunal. Fue por esta razón que no hubo necesidad de citar de manera especial a personas para reconocer firmas, además hubo un cúmulo de testigos que reconocieron como auténticos los documentos que fueron presentados al proceso...

III. El recurrente convalidó el Laudo Arbitral.

...Es evidente que el apoderado de INMOBILIARIA SUCASA S. A., después de haber solicitado el arbitraje con arreglo a las reglas que esa empresa impuso y después de solicitar aclaración y modificación del laudo respectivo, sin que tal gestión fuese viable, convalidó la actuación del Tribunal. Es por ello que, como el Tribunal de Arbitraje no admitió tal gestión, por no ser jurídicamente viable, y no accedió a tal solicitud en resolución de 25 de mayo de 2,000, ahora extemporaneamente y, para demorar la ejecución de la sentencia o laudo, ha venido a interponer un recurso que a todas luces no es procedente y debe ser rechazado de plano."

Le recuerda la Sala a los letrados que el Decreto - Ley No. 5 de 1999 en el artículo 34 del Capítulo V sobre Impugnación del Laudo Arbitral Interno manifiesta lo siguiente:

"Artículo 34: Contra el laudo arbitral interno sólo podrá interponerse el Recurso de anulación, por los siguientes motivos tasados:

1. Cuando la parte interpone el recurso pruebe:

a) Que el convenio arbitral estaba viciado por alguna de las causas de nulidad consagradas en el Código Civil y las causales contenidas en los Convenios Internacionales que la República de Panamá haya ratificado sobre la materia.

b) Que la constitución del tribunal arbitral, el desarrollo del

procedimiento arbitral o la emisión del laudo, no se ha ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o de conformidad con lo establecido en el presente Decreto Ley, o no haya sido una de las partes notificada en debida forma de la iniciación del arbitraje o de cualquier trámite del procedimiento (las negrillas son nuestras).

c) Que el laudo se refiere a una controversia no contenida en el Convenio Arbitral, o que contiene decisiones que exceden de su ámbito o alcance.

d) Si el laudo se hubiere obtenido en virtud de violencia, cohecho o prevaricato.

Paragrafo: La anulación afectará únicamente a las cuestiones a que se refieren los párrafos anteriores que se puedan separar de las demás contenidas en el laudo.

2. Que el tribunal compruebe que el objeto de la controversia no es arbitrable conforme a la ley panameña, o que el laudo es contrario al orden público panameño".

Se desprende de la norma transcrita que el presente Recurso de Anulación resulta improcedente puesto que las causas de invalidación invocadas por los proponentes no están contenidas en ninguna de las causales previstas en la Ley que reglamenta el Arbitraje Interno en Panamá.

El recurrente manifiesta que en el laudo citado el trámite, enjuiciamiento y decisión de la controvesia no se resolvió conforme a Derecho, sino aplicando criterio arbitrarios y sin sustento probatorio válido y observa esta Sala, contrario a lo señala éste en su petitum, que el mismo si se cumplieron las normas establecidas en el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación dictado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá que se fundamenta en la representación y postulación procesal basada en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. El reglamento señala con claridad las subsiguientes fases procesales hasta alcanzar el laudo mediante el cual se resuelve la controversia. Estos procedimientos son sencillos, es decir, de fácil comprensión y aplicación; las partes no pueden valerse de practicas dilatorias ni de recursos ni de apelaciones para una segunda instancia, viéndose compelidos los árbitros en un término máximo de cuatro meses, prorrogables únicamente por dos meses adicionales.

El conflicto fue resuelto conforme al derecho sustantivo tal como se desprende a fojas 93 del presente negocio donde el Tribunal Arbitral manifiesta que el litigio se solucionará con Sentencia en Derecho conforme a lo previsto en el artículo 1° del Artículo Segundo, en corcondancia con el Artículo Tercero del Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, vigente en la fecha en que se formuló la solicitud de constitución del citado Tribunal. Por lo que el laudo es una verdadera Sentencia y la responsabilidad de los árbitros es similar a las que tiene los jueces. El arbitraje al igual que el derecho sustantivo persigue un fallo respecto del conflicto y tiene como objetivo solucionar un litigio existente.

El laudo alcanza valor de cosa juzgada y de ejecutabilidad, en virtud de que los árbitros son jueces que ejercitan la actividad jurisdiccional del Estado. El arbitraje es un proceso en nuestro país autorizado en la ley y reglamentado por esta, en lo que se establecen las normas respectivas, y como el derecho procesal es de orden público, es claro el trámite legal que debe seguirse rigurosamente so pena de nulidad, porque las partes no pueden disponer libremente sobre el procedimiento. La designación del árbitro mediante el acuerdo entre las partes constituye en sí una ampliación de las funciones del Estado; los árbitros, no obstante a pesar de ser particulares, quedan revestidos de jurisdicción, porque la ley ha concedido a las partes la potestad de trasladarles una parte de la soberanía del Estado mientras dure el desempeño de sus funciones, a efecto que puedan resolver la disputa.

La Sala desea manifestar que el Recurso de Anulación es un Recurso extraordinario y como tal solo se debe invocar excepcionalmente en especiales circunstancias, taxativamente determinadas por la ley, sin generalidad, limitado a ciertos fines, y cuando no procede ningún otro recurso. Todo pronunciamiento, o laudo dado por un arbitro, que le ponga término a un conflicto, lleva aparejada tanto la posibilidad de recurrir por las partes contra la decisión, cuando ésta no se ajuste al procedimiento legal establecido, o si la decisión es arbitraria (entendida la voz aquí como sinónima de infudada), y no cual obra de un arbitro cabal, como la de sancionar el incumplimiento de la resolución arbitral. Y en el caso que nos ocupa observa esta Alta Magistratura diafanamente que la causa de impugnación no tiene relación con la decisión del Laudo emitido. La ejecución voluntaria o forzosa del laudo es consubstancial con el arbitraje. En efecto, la impunidad del incumplimiento tomaría aquella resolución tan débil como una fórmula conciliatoria extrajudicial, que sólo se concreta por la espontaneidad de la partes.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el Recurso de Anulación presentado contra el Laudo Arbitral proferido el día 15 de mayo del año en curso dentro del Proceso seguido entre INMOBILIARIA SUCASA, S. A. contra CRYOGAS de CENTROAMÉRICA, S. A. por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

EMILIA DE CASIS INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA EL LCDO. JAIME SMITH. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El día 8 de abril de 1999 se llevó a cabo en la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el debate oral, establecido por la Ley, en la presente denuncia por falta a la ética y la responsabilidad del abogado interpuesta por EMILIA DE CASIS contra el licenciado JAIME SMITH. Cumplida esta instancia procesal, le corresponde a esta Superioridad pronunciarse sobre este negocio.

Se inicia el presente proceso disciplinario con la nota de 6 de diciembre de 1993 presentada por EMILIA DE CASIS ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante la cual denuncia al Licenciado JAIME R. SMITH por falta a la ética y responsabilidad del Abogado, visible a foja 1.

En dicha nota se expresa lo siguiente:

> "Las líneas escritas son con motivo de hacerles saber que el Licdo. Jaime R. Smith S. con cédula de identidad personal 8-164-962. Recibio (sic) de mi persona Emilia de Casís la suma de B/.300.00 para la defensa de mi hijo Alfredo Casís, involucrado el (sic) caso de robo a mano armada con revolver de juguete. Y es que a la vez solicito mi dinero ya que no ejerció su labor defensiva en lo más

mínimo. Simplemente tomó el poder".

La denunciante aportó como pruebas para el presente proceso copias simples de dos recibos de pago, uno por B/.200.00 y otro por B/.100.00, a favor del Lcdo. Smith, visibles a fojas 2 y 3; copia de su cédula de identidad personal y copia del poder otorgado al Lcdo. Smith para que asumiera la defensa de su hijo, Alfredo Casis en el caso penal seguido en su contra por el delito de robo a mano armada.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante Resolución de 11 de octubre de 1994, decidió solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a juicio del Lcdo. Jaime R. Smith por violación de los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado.

Una vez ingresado el expediente a esta Superioridad, se procedió a darle traslado de la presente denuncia al Lcdo. Jaime Smith, la cual tuvo que hacerse mediante edicto, en vista de que fueron agotados todos los mecanismos para su notificación personal, tal como se aprecia en los informes de notificación visibles de fojas 32 a 34.

Posterior a ello, el Lcdo. Jaime Smith presentó el día 21 de mayo de 1996 escrito de descargo y oposición, el cual fue declarado extemporáneo y sin valor alguno mediante providencia de 22 de mayo de 1996.

Así las cosas, en resolución calendada 1 de julio de 1996 la Sala de Negocios Generales decidió ordenar el llamamiento a juicio del Lcdo. JAIME R. SMITH S., expresando en lo medular lo siguiente:

> "Al analizar la actuación del licenciado Jaime Smith frente a lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, transcritos en párrafos precedentes, evidencia que el licenciado Smith no determinó un contrato de servicios profesionales el cual definiera los derechos y las obligaciones propias dimanantes de su defensa, y de igual forma, los derechos y obligaciones pertinentes a la señora Emilia de Casís, persona que contrató los servicios profesionales del licenciado Smith...
>
> Ciertamente recibió una suma de dinero, trescientos balboas (B/.300.00) por sus servicios profesionales, a mediados de septiembre de 1993 (foja 2 y 3) y un año después, según aparece por las copias que remitió la Juez Tercera Penal del Primer Circuito Judicial con nota de 7 de septiembre de 1994, no había realizado gestión que aparentemente prima facie ser suficiente; de lo que se queja precisamente la señora Emilia de Casís.
>
> También obra como argumento de prueba para proseguir con este proceso, la dificultad que encuentra la Sala para comunicarse con el licenciado Jaime R. Smith S., como lo evidencian los informes del notificados a fojas 32, 33 y 34, al punto de que hubo que proceder a hacer la notificación mediante edicto (foja 35)...
>
> Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado Jaime R. Smith S. no parecen conformarse a lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, además, el Tribunal de Honor, manifiesta que, al investigar sobre los antecedentes disciplinarios del licenciado Smith, se constató de que en su contra se han presentado diversas quejas o denuncias (visible a fojas 23 y 24 del expediente) por lo que esta Superioridad encuentra suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio del licenciado Jaime R. Smith S.".

Dicha resolución le fue notificada personalmente al denunciado el 23 de agosto de 1996.

Posteriormente, mediante providencia de 14 de enero de 1999 se señala el día 26 de enero de 1999 a las 3:00 p. m. como fecha y hora para la celebración de la audiencia. Sin embargo, el día 25 de enero de 1999, el Lcdo. Jaime Smith presentó un escrito mediante el cual aportaba un certificado médico de incapacidad, con el cual justificaba no poder asistir a la audiencia fijada para el día 26 de enero de 1999, solicitando se señalara nueva fecha para la celebración de la audiencia.

En vista de lo anterior, el Magistrado Sustanciador ordena la suspensión de la audiencia programada y, con posterioridad, señala como nueva el día 11 de febrero de 1999, a las 3:00 de la tarde.

El 8 de febrero de 1999 el Lcdo. Jaime Smith presentó un escrito de excepción por prescripción de la acción, el cual fue rechazado de plano por la Sala, mediante Resolución de 17 de febrero de 1999, sobre la base de que el mismo fue presentado fuera del término legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley que regula el ejercicio de la abogacía.

En virtud de lo anterior, el Magistrado Sustanciador, en providencia de 9 de marzo de 1999, señaló como nueva fecha para la celebración de la audiencia oral el día 8 de abril de 1999, a las 3:00 p. m., la cual le fue notificada personalmente el Lcdo. Jaime Smith el 5 de abril del mismo año.

El día 6 de abril el Lcdo. Smith presentó un escrito otorgando Poder al Lcdo. Héctor Zavala para que asumiera su representación dentro del presente proceso disciplinario.

El día 8 de abril de 1999 se realizó la audiencia oral correspondiente al presente proceso, como se tenía previsto. En la misma actuó como apoderado especial del denunciado el Lcdo. Héctor Zavala.

En su intervención inicial el licenciado Zavala manifestó que ambas partes habían aceptado la existencia de un contrato de servicios profesionales de carácter verbal, el cual según la denunciante se estableció en B/.300.00 y, según el Lcdo. Smith, en B/.500.00. Señaló que el Lcdo. Smith aceptó haber recibido de la denunciante, primero, la suma de B/.200.00 y en fecha posterior, B/.100.00.

Indicó además el Lcdo. Zavala, que su representado desde el momento que tomó el Poder se reunió en varias ocasiones con su cliente, lo visitaba en la cárcel, realizó algunos trámites en la Fiscalía Auxiliar asistiendo a su cliente y en donde invirtió el tiempo necesario y correcto en proporción a la suma de dinero que había recibido. Expresó, asimismo, que el Lcdo. Smith en ningún momento renunció al poder sino que el mismo le fue revocado por su cliente. Considera, entonces, que la suma de B/.300.00 recibida por su representado es irrisoria en proporción al tiempo labor que dedicó en este caso.

Luego de un análisis minucioso de las pruebas que constan en el expediente, observa la Sala que el Lcdo. Smith no realizó una gestión profesional adecuada en beneficio de su cliente, toda vez que luego de habérsele otorgado el poder respectivo, sólo brindó asistencia legal a su cliente en una diligencia de ampliación de indagatoria ante la Fiscalía Cuarta de Circuito de Panamá, desatendiendo después el curso del proceso.

Así las cosas, infringió el Lcdo. Smith los artículos 7; 10, literal a y c, así como el 11 de la Ley que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá, los cuales establecen lo siguiente:

> "Artículo 7. El abogado deber ser puntual y llevar a cabo oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional".

"Artículo 10: Respecto a la prestación de servicios profesionales el abogado debe:

a. Convenir una remuneración justa por su servicio profesional.

c. Utilizar los dineros aportados por el cliente sólo en beneficio de la causa de éste."

"Artículo 11: El abogado debe evitar controversias con los clientes por el pago de honorarios, hasta donde ello sea compatible con su dignidad y con su derecho a recibir una compensación razonable por sus servicios;...".

Por todas las consideraciones anteriores, considera la Sala que el Lcdo. JAIME SMITH no cumplió con los principios de ética y responsabilidad en el ejercicio de la abogacía que propias de un profesional del derecho serio y responsable, por tanto se dispone a tomar las medidas correspondientes al caso.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SANCIONA con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente diligencia al Licenciado JAIME R. SMITH, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-164-962, con domicilio en San Joaquín, Pedregal, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes y en base a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL WILSON MATIAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R., SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. CONTRA EL LICENCIADO MANUEL GONZÁLEZ C., POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El catorce (14) de agosto de dos mil (2000) se llevó a cabo, ante la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el debate oral establecido por la Ley dentro de la Denuncia por Faltas a la Ética y Responsabilidad del Abogado interpuesta por los señores MIGUEL ÁNGEL WILSON MATÍAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R., SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. contra el Licenciado MANUEL GONZÁLEZ.

ANTECEDENTES DEL CASO

En el expediente constan cinco denuncias presentadas en contra del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ, por lo que procede esta Superioridad a analizar cada una de las mismas en los siguientes términos:

El 29 de septiembre de 1996 el señor Miguel Ángel Wilson Matías presentó denuncia contra el Licenciado Manuel González, señalando en la misma, que lo había contratado para que le representara ya que había sido condenado por la

Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, a pagar a la otra parte, los daños descritos en la resolución No. 939 de 22 de marzo de 1996 por colisionar e interceptar el paso a un vehículo. El señor Wilson indica que la otra parte se rehusaba a aceptar el pago y que por este hecho se acercó a el Licenciado González, quien aceptó representarlo y le manifestó que le cobraría doscientos veinticinco balboas (B/.225.00), en concepto de honorarios profesionales, motivo por el cual le entregó dicha suma el 15 de octubre de 1996; el denunciante continuó su relato señalando que el Licenciado González le solicitó seiscientos balboas (B/.600.00) más, que según él había que depositar en el juzgado como fianza, estos le fueron entregados el 26 de octubre de 1996, señala el denunciante que nunca recibió constancia del depósito de la fianza, el 20 de noviembre del mismo año el Licenciado González, le señala que va a ser necesario practicar un peritaje y que el costo del mismo sería de cincuenta balboas (B/.50.00) procediendo así el denunciante a entregarle dicha suma de dinero.

El señor Wilson aportó fotocopias de los tres recibos que le expidiera el Licenciado González, por las sumas señaladas visibles a foja 50 y de la Resolución No. 932 de 22 de marzo de 1996, por la cual el Juzgado Segundo de Tránsito del Distrito de Panamá le condena a pagar multa de veinticinco balboas (B/.25.00) por colisionar el automóvil del señor Gilberto Antonio Cortez Domínguez, más el pago de los daños causados al vehículo.

El 24 de junio de 1998 el señor JUAN BAUTISTA PÉREZ R. presentó denuncia en contra del Licenciado González , señalando en la misma que contrató los servicios profesionales del Licenciado González para que representara a su hermano Inés Pérez R. en un caso de supuesta violación carnal. El demandante señala que el domingo 28 de mayo de 1995 entregó al Licenciado González, la suma de dos mil balboas (B/.2000.00) en efectivo, en presencia de Seferino Ureña P., con cédula 6-41-1395, el Licenciado González aseguró que el lunes 29 de mayo iniciaría la defensa del señor Inés Pérez R.; ese mismo día el Licenciado González se comunicó telefónicamente con el señor Ureña y le manifestó que necesitaba trescientos cincuenta balboas (B/.350.00), para dos (2) "vistas fiscales"; esta suma le fue entregada al Licenciado González, por el señor Seferino Ureña, el Licenciado González luego pidió la suma de mil balboas (B/.1000.00) más, la cual fue también entregada. El señor Pérez asevera que el Licenciado González, no inició la defensa de su hermano y que se vio obligado a contratar los servicios profesionales de otro abogado. El denunciante manifestó, que dialogó con el Licenciado González y que este le devolvió la mitad del dinero que le había sido abonado.

La tercera denuncia en contra del Licenciado González fue interpuesta por el señor Sergio Agustín Rodríguez, en esta señala que requirió los servicios profesionales del Licenciado González para que impugnase su destitución del servicio marítimo y que el Licenciado González tardó un mes en enviar los documentos al Ministerio de Gobierno y Justicia.

El 1 de febrero de 1999, el señor Silvio Ciriaco Chaverra presenta otra denuncia en el Colegio Nacional de Abogados en contra del Licenciado González señalando en la misma que contrató los servicios profesionales del Licenciado González para que lo representará en un caso de Usurpación de funciones públicas e intento de secuestro a un menor de edad.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados corrió traslado de cada una de las denuncias presentadas en su contra al Licenciado González para que explicara su conducta y asumiera su defensa; sin embargo el Licenciado González no compareció al Tribunal de Honor.

El quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), esta Corporación de Justicia ordenó darle traslado del expediente al denunciado conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, con el fin de que el Licenciado MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO presentara los escritos de excepciones y de oposición

correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor ante este escenario jurídico el licenciado MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO presentó en tiempo oportuno el escrito de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.

Mediante resolución de dieciséis (16) de marzo de dos mil (2000) , esta Corporación de Justicia ordena el llamamiento a juicio del Licenciado MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ en los siguientes términos:

> "LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ, varón, panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 9-53-989 con oficinas profesionales en la Avenida Cuba, Edificio Policentro, Cuarto Piso, Local No. 3, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993."

LA AUDIENCIA

El día catorce (14) de agosto de dos mil (2000) se realizó la audiencia oral correspondiente al presente proceso como se tenía previsto . El licenciado González asumió su propia defensa y presentó las siguientes pruebas documentales: Sobreseimiento provisional No.88 del Juzgado Primero Municipal Del Distrito de Panamá, Ramo Penal a favor de SILVIO CARIACO CHAVERRA GÁLVEZ, poder otorgado a favor del Licenciado González para que representara al señor Silvio Ciriaco Chaverra Gálvez, Decreto de Personal No. 178 del 6 de agosto de 1998 por medio del cual se realiza la destitución del señor Sergio Rodríguez del Servicio Marítimo Nacional, el Resuelto No. 400-R-151 de 31 de agosto de 1998 expedido por el Ministerio de Gobierno y Justicia por medio del cual se niega el Recurso de Reconsideración promovido por el Sargento Primero Sergio Agustín Rodríguez, poder otorgado por el señor Sergio Agustín Rodriguez al Licenciado González para que interpusiera queja ante la Procuraduría de la Administración y poder otorgado también a favor del Licenciado González por el señor Rodríguez para que lo representará ante el Director del Servicio Marítimo Nacional.

Con relación a la denuncia hecha por el señor Miguel Ángel Wilson Matías el Licenciado González manifestó en la audiencia refiriendose a dicha denuncia que: "estoy anuente a darle su dinero, en cuanto lo vea, creí que estaba aquí, esta tarde, creí que iba a venir aquí esta tarde, para darle su dinero, no quiero nada que no sea mio, pero lo mio, lo quiero y lo peleo y lo defiendo, como Dios manda."

En la denuncia presentada por el señor Silvio C. Chaverra esta Corporación de Justicia observa que no hay actuación posterior al poder que le fuera conferido por el señor Chaverra Gálvez al Licenciado Manuel González el 29 de julio de 1998 para que en su nombre y representación interpusiese acusación particular contra ABRAHAM PEREZ, CESAR CHAW, RIGOBERTO MADRID, por el delito de tentativa de secuestro. En cuanto al auto No. 88 del Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, del diez (10) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998) esta Corporación de Justicia se percata que es un negocio jurídico distinto para el cual se le confirió poder al Licenciado González y además el aludido Auto No. 88 tiene fecha anterior al poder que le fuera conferido al Licenciado González por el Señor Chaverra.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente proceso se inició por razón de la denuncia que los señores: Miguel Ángel Wilson Matías, Juan Bautista Perece R., Sergio Agustín Rodríguez y Silvio C. Chaverra presentaran al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados contra el Licenciado Manuel González por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado.

El día catorce (14) de agosto de dos mil (2000) en la audiencia oral correspondiente al presente proceso oral el Licenciado González manifestó lo siguiente en torno a la denuncia presentada por el señor Miguel Ángel Wilson Matías: "estoy anuente a darle su dinero, en cuanto lo vea, creí que estaba aquí, esta tarde...".

Con relación a la denuncia presentada por el señor Silvio C. Chaverra esta Corporación de Justicia pudo comprobar con la pruebas documentales aportadas por el denunciante específicamente con el poder otorgado por el señor Chaverra Gálvez al Licenciado Manuel González el 29 de julio de 1998 para que en su nombre y representación interpusiese acusación particular contra ABRAHAM PÉREZ, CESAR CHAW, RIGOBERTO MADRID, por el delito de tentativa de secuestro que el Licenciado González no gestiono el negocio jurídico a el encomendado por su mandante toda vez que no consta actuación posterior y en cuanto al auto No. 88 del Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, del diez (10) de julio de mil novecientos noventa y ocho esta Sala observa que es un negocio jurídico distinto para el cual se le confirió poder al Licenciado González y además señala que el aludido Auto No. 88 tiene fecha anterior al poder que le fuera conferido al Licenciado González por el señor Chaverra.

Los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales, al examinar las constancias procesales contenidas en el expediente observan que en el mismo existen pruebas que sustenten lo alegado por los denunciantes Miguel ángel Wilson Matías y Silvio C. Chaverra

En consecuencia , resulta conveniente señalar que esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión que se ha probado plenamente en autos que el Licenciado Manuel González se ha apartado de los principios de Ética y Responsabilidad del Abogado y de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984 por la cual se regula el ejercicio de la Abogacía (Reformada por la Ley 8 de 16 de Abril de 1993).

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SANCIONA con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución, al licenciado MANUEL GONZÁLEZ, varón, panameño, mayor de edad, Abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 9-53-989 con oficinas profesionales en la Avenida Cuba, Edificio Policentro, Cuarto Piso, Local No. 3.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICADÉ FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=